21 JUN 1943

MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACIÓN
BIBLIOTECA

DIGESTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA

Disposiciones pertinentes de la Constitución Nacional.

Leyes y sus Decretos reglamentarios, que atañen al Departamento de Instrucción Pública y al régimen y administración de la Enseñanza Media.

21 JUN 1943

DIGESTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA

Presidente de la Nación

DR. RAMÓN S. CASTILLO

Ministro de Justicia e Instrucción Pública

DR. GUILLERMO ROTHE

Subsecretario

DR. ENRIQUE GÓMEZ PALMÉS

Secretario Privado del Ministro

D. EDUARDO ORTIZ PUJATO

MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACIÓN
BIBLIOTECA

DIVISIONES DEL DESPACHO DEL MINISTERIO

Dirección de Justicia
Director General: D. Rafael H. Ribero

Dirección de Instrucción Pública
Director General: D. Atilio L. Benna

Dirección General de Administración
Director General: Dr. Luis Ricci

Dirección General de Educación Física
Director General: D. César S. Vásquez

REPARTICIONES Y COMISIONES NACIONALES

Consejo Nacional de Educación
Presidente: Dr. Sofanor Novillo Corvalán

Comisión Nacional de Cultura
Presidente: Dr. Carlos Ibarguren

Comisión Nacional de Ayuda Escolar
Presidente: Dr. Enrique Gómez Palmés

Comisión Nacional de Bellas Artes
Presidente: Dr. Antonio Santamarina

Dirección Nacional de Artes Plásticas
Director: D. José León Pagano

Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico
Director: D. Carlos López Buchardo

Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos
Presidente: Dr. Ricardo Levene

Patronato Nacional de Menores
Presidente: Dr. Carlos de Arenaza

Consejo Nacional de Observatorios
Director: Ing. D. Félix Aguilar

Patronato Nacional de Ciegos
Presidenta: D.ª María Adela Ayarragaray de Pereda

Comisión Nacional de Cooperación Intelectual
Presidente: Dr. Carlos Ibarguren

Comisión Protectora de Bibliotecas Populares
Presidente: D. Juan Pablo Echagüe

Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias
Presidente: Dr. Bernardo A. Houssay

Comisión para la Medición de un Arco de Meridiano
Presidente: Ing. Félix Aguilar

Comisión de Protección de Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos
Presidente: Dr. Francisco de Aparicio

Museo Argentino de Ciencias Naturales «Bernardino Rivadavia»
Director: D. Martín Doello Jurado

Comisión Organizadora de la Escuela del Aire
Presidente: Dr. Horacio C. Rivarola

Fundación del Gobierno Argentino en la Ciudad Universitaria de París
Director: Dr. Juan Silva Riestra

—*—

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

Inspección General de Justicia
Inspector General: Dr. Carlos de la Torre

Dirección General de Institutos Penales
Director General: Dr. Eduardo A. Ortiz

Escribanía General del Gobierno de la Nación
Escribano General: D. JORGE E. GARRIDO

Registro de la Propiedad, Hipotecas, Embargos e Inhibiciones
Director: DR. JUAN FRANCISCO DE LARRECHEA

Registro de la Propiedad Intelectual
Director: DR. HORACIO F. RODRÍGUEZ

Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria
Director: DR. RICARDO CABALLERO (H.)

Archivo General de los Tribunales
Director: DR. HÉCTOR S. LÓPEZ

DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PUBLICA

Inspección General de Enseñanza
Inspector General: D. FLORENCIO D. JAIME

Biblioteca Nacional
Director: DR. GUSTAVO MARTÍNEZ ZUVIRÍA

Archivo General de la Nación
Director: D. HÉCTOR C. QUESADA

Archivo Gráfico de la Nación
Director: D. PASTOR LUIS OBLIGADO

Dirección de Estadística y Personal
Director: D. MANUEL VIANA

Asesoría de Arte Escénico
Asesor: DR. OSCAR R. BELTRÁN

Dirección General de Informaciones y Biblioteca
Director: D. MANUEL VILLADA ACHÁVAL

PLAN GENERAL DEL DIGESTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA

(De la Resolución Ministerial de 24 de octubre de 1940)

3.° La obra se dividirá en 17 capítulos, que comprenderán:

1) Leyes y sus decretos reglamentarios (Ley de Organización de los Ministerios, en la parte pertinente; Ley de Libertad de Enseñanza; Ley de Contabilidad; Ley de Jubilaciones y Pensiones Civiles; Decretos sobre uso de la Bandera Nacional; Ley 4202, sobre vacunación obligatoria y Decretos reglamentarios; otras leyes de carácter general que tengan aplicación dentro de la administración de la enseñanza media).

2) Reglamentos de las reparticiones, institutos, colegios y escuelas.

3) Incorporación a la enseñanza oficial (Decretos y resoluciones).

4) Escuelas extranjeras (Decretos y resoluciones).

5) Planes de estudios vigentes.

6) Condiciones de ingreso a la enseñanza media.

7) Régimen de clasificaciones, exámenes y promociones (Reglamentación general y normas didácticas para su aplicación).

8) Calendario escolar (Duración del curso escolar, feriados instituídos por leyes, decretos y resoluciones).

9) Estado del estudiante (Traje, Canción, Libreta, Premios, Asociaciones Estudiantiles, Práctica del tiro, Servicio Militar).

10) Asociaciones cooperadoras.

11) Títulos y certificados que expiden los establecimientos de enseñanza.

12) Equivalencia de estudios.

13) Personal civil de la administración nacional (Acuerdos de Ministros del 16 de enero de 1913 y 24 de noviembre de 1924. Intervención en política de empleados y funcionarios. Prohibición de realizar gestiones directas ante los Poderes públicos sobre asuntos sometidos a la consideración de la Superioridad. Recurso jerárquico. Licencias. Renuncias).

14) Personal directivo y docente de los establecimientos de enseñanza: régimen para su designación.

15) Régimen de incompatibilidades.

16) Disposiciones administrativas.

17) Disposiciones varias (Conferencias. Fiestas escolares y clases alusivas. Excursiones de estudio).

4.°) Además, en su iniciación, la obra contendrá:

I) Nómina de los Ministros de Justicia e Instrucción Pública desde la época de la organización nacional.

II) Nómina de las dependencias técnicas y administrativas del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

III) Nómina de los establecimientos de enseñanza, por categoría, con la fecha de su fundación y especificación de sus domicilios.

5.°) Comuníquese, anótese y archívese.

Rothe.

En este primer fascículo del LIBRO II *(Organización docente)* del *Digesto de Segunda Enseñanza* se transcriben artículos pertinentes de la Constitución Nacional y el texto de Leyes y sus Decretos reglamentarios, que atañen al Departamento de Instrucción Pública y al régimen y administración de la Enseñanza Media.

El LIBRO I (ya publicado) abarca los siguientes temas:

1. Autoridades de la Nación y del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública;
2. Reparticiones nacionales y Dependencias técnicas y administrativas del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública;
3. Nómina de los Ministros de Justicia e Instrucción Pública desde la época de la organización nacional;
4. Establecimientos oficiales de enseñanza dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, con sus principales características y nómina de sus respectivos incorporados;

Además, en su iniciación, la obra contiene el texto de la Resolución Ministerial de 24 de octubre de 1940, encomendando a la Dirección General de Informaciones y Biblioteca la preparación del Digesto de Segunda Enseñanza, de acuerdo con el plan presentado por la Inspección General de Enseñanza; y la nota de la Dirección General de Informaciones y Biblioteca a la Subsecretaría, de 26 de diciembre de 1941, comunicando la terminación de la tarea de preparar el material para la publicación de la obra.

En prensa:

LIBRO II: *Organización docente.*

Fascículo II: Reglamentos de las Reparticiones, Institutos, Colegios y Escuelas.

Digesto de Segunda Enseñanza

LIBRO II

ORGANIZACION DOCENTE

Fascículo 1.º

Disposiciones pertinentes de la Constitución Nacional.

Leyes y sus Decretos reglamentarios, que atañen al Departamento de Instrucción Pública y al régimen y administración de la Enseñanza Media.

Digesto de Segunda Enseñanza

LIBRO II

ORGANIZACION DOCENTE

Fascículo 1.º

Disposiciones pertinentes de la Constitución Nacional.

Leyes y sus Decretos reglamentarios, que tratan el Departamento de Instrucción Pública y el régimen y administración de la Enseñanza Media.

Disposiciones pertinentes de la Constitución Nacional

.....

.....

Artículo 14. — Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: ..... de enseñar y aprender.

.....

.....

Artículo 67. — Corresponde al Congreso:

.....

.....

16. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria .....

.....

.....

Artículo 90. — Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los Ministros del despacho presentarle una memoria detallada del estado de la Nación, en lo relativo a los negocios de sus respectivos Departamentos.

LEYES Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS, QUE ATAÑEN AL DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PUBLICA Y AL REGIMEN Y ADMINISTRACION DE LA ENSEÑANZA MEDIA (Partes pertinentes).

MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Ley N.° 3.727, de 11 de octubre de 1898, de organización de los Ministerios Nacionales

Buenos Aires, 11 de octubre de 1898.

Por cuanto;

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de

LEY:

DE LOS MINISTROS DEL PODER EJECUTIVO

I. Disposiciones comunes a todos los Ministerios:

Artículo 1.° — Los ocho ministerios en que debe dividirse el despacho de los negocios de la Nación, serán los siguientes:

1.° Del Interior.
2.° De Relaciones Exteriores y Culto.
3.° De Hacienda.
4.° De Justicia e Instrucción Pública.
5.° De Guerra.
6.° De Marina.
7.° De Agricultura.
8.° De Obras Públicas.

Art. 2.° — Corresponde a cada ministro.

1.° La representación política, administrativa y parlamentaria de su respectivo departamento;

2.° Refrendar con su firma los actos del Presidente de la República;

3.° Proyectar, suscribir y sostener ante el Congreso los proyectos de ley que inicie el Poder Ejecutivo y todo acto de la exclusiva jurisdicción de éste, redactar la memoria anual que debe presentar al Congreso dentro del primer mes de sus sesiones, y los mensajes y proyectos de presupuesto parcial de su departamento, y presentar la cuenta de inversión con arreglo a la Ley de Contabilidad;

4.° Intervenir en la promulgación, publicación y ejecución de las leyes, así como velar por el cumplimiento de los decretos y sentencias relativos a su despacho;

5.° Llevar la correspondencia ministerial con las autoridades principales de su departamento y con las extrañas sobre asuntos de su incumbencia;

6.° Resolver por sí todo asunto administrativo de su departamento que no requiera ser resuelto por el Poder Ejecutivo;

7.° La dirección, control y superintendencia de todas las divisiones, oficinas y empleados del despacho;

8.° Intervenir en la celebración de contratos en representación del Estado, y la defensa de los derechos del mismo conforme a las leyes;

9.° El estudio y protección de los intereses y progresos de la Nación en el ramo que le concierne (1);

10. Recibir, tramitar y resolver, o llevar a la resolución del Presidente de la República, según el caso, toda petición dirigida al Poder Ejecutivo.

Art. 3.° — Dentro del régimen económico y administrativo del respectivo despacho, cada ministro puede dictar por sí solo, además de las medidas de orden, disciplina o economía que le corresponden, instrucciones ministeriales públicas para procurar la mejor ejecución de las leyes, decretos o medidas del Gobierno, las que pueden dirigirse a todos los empleados de la Administración, a determinadas categorías de empleados o a un solo empleado, pudiendo también

---

(1) Este inciso hubo de ser ampliado por Ley N.° 12.705, sancionada por el Congreso el 19 de septiembre de 1941, la que fué observada en parte por el Poder Ejecutivo en Mensaje del 29 del mismo mes y año, que se transcribe en el Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación del 29 de mayo de 1942, pág. 99. El texto del art. 1.o del proyecto de Ley es el siguiente: Amplíase el inciso 9.° del artículo 2.° de la Ley N.° 3.727, organización de los Ministerios del Poder Ejecutivo de la Nación, intercalando a continuación de la palabra «Nación», lo siguiente: «Y la atención de los problemas de la defensa nacional».

darlas secretas cuando el bien general y la naturaleza del asunto lo requiera.

Art. 4.° — Además de los casos establecidos en los arts. 18, 23 y 34 de la Ley de Contabilidad, los ministros se reunirán en acuerdo siempre que lo requiera el Presidente de la República y de esos acuerdos se levantará acta toda vez que el mismo lo disponga, actuando como secretario el funcionario que él determine.

Art. 5.° — Los acuerdos que deban surtir efectos de decretos o resoluciones conjuntas, de todos los ministros, serán suscriptos en primer término por aquel a quien pertenezca el asunto, o por el que lo haya iniciado, y enseguida por los demás en el orden del art. 1.° de esta ley, y serán registrados y ejecutados por el Ministro a cuyo departamento corresponda, o por el que se designe al efecto en el acuerdo mismo.

Art. 6.° — En los casos de duda acerca del ministerio a que corresponde un asunto, éste será tramitado por el que designase el Presidente de la República.

II. — De los Ministerios en particular

Justicia e Instrucción Pública

Art. 11. — Corresponde al despacho del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, velar por la buena administración de justicia y promover la cultura general científica, literaria y artística de la Nación; y en particular:

Justicia

1.° Organización y régimen del Poder Judicial de la Nación en lo Federal y Ordinario de la Capital y Territorios Nacionales;
2.° Promoción de la reforma de la legislación en todos sus ramos;
3.° Todo lo concerniente al Registro del estado civil en lo que a la Nación corresponde;
4.° Creación, gobierno y reforma de las cárceles y establecimientos penales de la Nación;

5.° Estadística judicial, publicaciones del Registro Nacional, opiniones de los asesores legales, Boletín Oficial, memorias e informes de su departamento;
6.° Indulto y conmutación de penas;
7.° Concesión de escribanías públicas;
8.° Personería jurídica;

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

9.° Todo lo relativo al fomento de la instrucción, educación, cultura de la Nación y de las provincias en todas sus manifestaciones y jerarquías;
10. Instrucción primaria y educación común en la Capital, territorios y provincias con arreglo a las leyes;
11. Régimen, desarrollo y mejora de la instrucción general o secundaria de la República;
12. Régimen de la enseñanza normal e institutos docentes diversos;
13. Universidades;
14. Enseñanza especial y sus institutos;
15. Observatorios;
16. Museos;
17. Bibliotecas;
18. Archivo general de la Nación;
19. Fomento de las bellas artes por medio de escuelas en el país o en el extranjero; subvenciones y recompensas.

.....

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a diez de octubre de mil ochocientos noventa y ocho.

RAFAEL IGARZÁBAL
Adolfo J. Labougle
Secretario del Senado

MARCO AVELLANEDA.
Alejandro Sorondo.
Secretario de la C. de D.

Por lo tanto;

Téngase por ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA.

Acuerdo de 31 de octubre de 1898, distribuyendo las materias que corresponden a los Ministerios

. . . . . .

Art. 4.° — Dependerán y correrán por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública:

El Museo Histórico Nacional (art. 11, inc. 16, de la ley e inc. 10, ítem 1 del presupuesto).

La Inspección de Sociedades Anónimas (art. 14, inc. 23, de la ley, o sea anexo E, inc. 1, ítem 8, del presupuesto).

La Escuela Nacional de Minas de San Juan (art. 14, inc. 13 de la ley, o sea anexo E, inc. 19, ítem 1 del presupuesto).

La Escuela Nacional de Comercio (anexo E, inc. 19, ítem 2 a 5 del presupuesto vigente).

. . . . . .

ROCA. — Felipe Yofre. — A. Alcorta. — O. Magnasco. — Luis M. Campos. — M. Rivadavia. — Emilio Frers. — José M. Rosa. — Emilio Civit.

LIBERTAD DE ENSEÑANZA

Ley N.° 934 de 30 de septiembre de 1878, de Libertad de Enseñanza

Buenos Aires, 30 de septiembre de 1878.

Por cuanto: el Congreso ha sancionado la siguiente ley:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de

LEY:

Artículo 1.° — Los alumnos de los colegios particulares tendrán derecho de presentarse a examen parcial o general de las materias que comprenden la enseñanza secundaria de los Colegios Nacionales, ante cualquiera de éstos, con tal de que acrediten con certificados de sus Directores, haber seguido cursos regulares y siempre que los colegios de que procedan, llenen las siguientes condiciones:

1.ª Que pasen anualmente al Ministerio de Instrucción Pública, una nómina de los alumnos matriculados en cada uno de los cursos y el programa o programas de los mismos;

2.ª Que el plan de estudios comprenda las mismas materias que el de los Institutos nacionales;

3.ª Que sus directores suministren al Gobierno de la Nación los informes que les fueren pedidos, relativamente al estado de los estudios y a la marcha del Establecimiento;

4.ª Que consientan que el Gobierno de la Nación haga presenciar los exámenes por medio de Comisionados nombrados al efecto, cuando lo creyese conveniente;

5.ª Que publiquen el resultado de los exámenes con las clasificaciones respectivas, consignándose igualmente para constancia, en libros destinados a este objeto, llevados con la debida formalidad.

Art. 2.° — Los exámenes de que habla el artículo anterior, serán desempeñados ante una Comisión o Tribunal mixto, formado de cinco personas que tengan título profesional o diploma de maestro superior, nombrados, dos por el Colegio de que proceda el examinando y dos por aquél donde haya de recibirse, asociados al Rector de este último en calidad de Presidente. Dichos nombramientos también podrán recaer en profesores de los mismos Colegios.

Art. 3.° — Toda persona tendrá derecho de presentarse a examen ante cualquier Establecimiento Nacional de enseñanza secundaria, debiendo sujetarse en todo a las prescripciones de los programas y reglamentos de los respectivos Establecimientos.

Art. 4.° — A los mencionados alumnos, aprobados que sean, se les expedirán los certificados correspondientes en igual forma que los que se dan a los de los Colegios Nacionales; pero con expresión de aquél de que procedan, y dichos certificados serán respetados en todos ellos y en las Universidades Nacionales, para los efectos legales.

Art. 5.° — Los alumnos de los Institutos de enseñanza secundaria, establecidos por autoridad de los Gobiernos de Provincia, podrán incorporarse en los Colegios de la Nación, en el curso que les corresponda, sin más requisitos que la presentación de los certificados de exámenes, siempre que sus programas comprendan las mismas materias que las de los Colegios Nacionales.

Art. 6.° — Los alumnos de los Institutos de enseñanza superior o profesional, fundados por particulares o por Gobiernos de Provincia, que existan en las condiciones requeridas por el art. 1.°, podrán igualmente incorporarse en las Facultades Universitarias en el curso correspondiente, previo examen de las materias que hubiesen cursado, en la forma que lo dispongan los Estatutos Universitarios.

Art. 7.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 19 de septiembre de 1878.

MARIANO ACOSTA
Carlos M. Saravia
Secretario del Senado

MANUEL QUINTANA.
J. Alejo Ledesma.
Secretario de la C. de D.

Por tanto;

Cúmplase, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

AVELLANEDA.
BONIFACIO LASTRA.

Los decretos reglamentarios y demás disposiciones que se refieren a esta Ley de Libertad de Enseñanza aparecerán en el Fascículo 3.º del Libro Segundo, en el capítulo correspondiente al N.o 3 del plan de esta obra, titulado: *Incorporación a la Enseñanza Oficial.*



Art. 2.º — Los exámenes de que habla el artículo anterior serán rendidos ante una Comisión o Tribunal mixto, formado por tres profesores del Colegio de Registro y tres del establecimiento superior, nombrados, dos por el Colegio de que proceda el examinando y dos por aquél donde haya de rendirse, actuando el Rector en calidad de Presidente. Dichos nombramientos serán hechos por el Poder Ejecutivo.

Art. 3.º — Toda persona tendrá derecho de presentarse a examen ante cualquier Establecimiento Nacional de enseñanza superior, cualquiera sea el lugar de su residencia, siempre que reuna las condiciones requeridas por el artículo 1.º.

Art. 4.º — A los mencionados alumnos, aprobados que sean, se les expedirán los certificados correspondientes en igual forma que los que se dan a los de los Colegios Nacionales, pero con expresión de aquél de que proceden, y dichos certificados serán respetados en todos ellos y en las Universidades Nacionales, para los efectos legales.

Art. 5.º — Los alumnos de los Institutos de enseñanza secundaria, establecidos por autoridad de los Gobiernos de Provincia, podrán incorporarse en los Colegios Nacionales, en el curso que les corresponda, sin más requisito que la presentación de los certificados de exámenes, siempre que los programas comprendan las mismas materias que los de los Colegios Nacionales.

Art. 6.º — Los alumnos de los Institutos de enseñanza superior o profesional, fundados por autoridad de o por Gobiernos de Provincia, que existan en las condiciones requeridas por el art. 1.º podrán igualmente incorporarse en las Facultades Universitarias en el curso correspondiente, prévio examen de las materias que hubiesen cursado, en la forma que lo dispongan los Estatutos Universitarios.

Art. 7.º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 19 de septiembre de 1876.

MARIANO ACOSTA — MANUEL QUINTANA

Carlos M. Saravia — *J. Alejo Ledesma*

Secretario del Senado — Secretario de la C. de D.

CONTABILIDAD — DIVISION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA — PRESUPUESTO

Ley N.° 428 de 13 de octubre de 1870, de Contabilidad y Organización de la Contaduría Gral. de la Nación

Buenos Aires, 13 de octubre de 1870.

Por cuanto;

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de

L E Y:

Artículo 1.° — El Presupuesto General comprenderá todos los gastos ordinarios y extraordinarios de la Nación que se presumen deben hacerse en cada ejercicio de aquél, y el cálculo de todos los recursos que se destinan para cubrirlos. El ejercicio del presupuesto principia el 1.° de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.

Art. 2.° — El total de las cantidades votadas para las atenciones de cada Ministerio, formará un artículo, el cual se dividirá en incisos que expresen lo que se destina para las erogaciones de una misma clase, subdivididos en ítems numerados, que demuestren los respectivos pormenores.

Art. 3.° — El servicio de la deuda pública se presupondrá en un inciso del Ministerio de Hacienda, que manifieste en ítem cada deuda separadamente.

Art. 4.° — El cálculo de recursos será materia de otro artículo, con los incisos correspondientes, que expresen las cantidades que, por cada ramo de entrada ordinaria o extraordinaria, se destine para el pago de los gastos que se voten.

Art. 5.° — Cada Ministro formará oportunamente el presupuesto de los ramos de su cargo, y el Poder Ejecutivo presentará al Congreso el Presupuesto General en todo el mes de mayo, por conducto del Ministro de Hacienda, quien hará el cálculo de recursos.

Art. 6.° — Cada Ministro acompañará a la Memoria que debe presentar al Congreso en el mes de mayo, los documentos siguientes:

1.° Cuenta de inversión del presupuesto de su ramo, correspondiente al ejercicio del año anterior a dicha Memoria;

2.° Estado razonado y comparativo entre el presupuesto de su ramo para el ejercicio del año que corriere y el que propusiese para el siguiente.

De las entradas y de los gastos públicos

Art. 7.° — Las rentas públicas de cada ejercicio, se recaudarán por empleados competentes, autorizados por el Poder Ejecutivo, en las oficinas, tiempo y forma que determinen las leyes de la materia, o los decretos que en virtud de ellas se dictaren por aquél.

Art. 8.° — Toda entrada o salida de caudales públicos, en dinero o en documentos, así como de efectos o especies pertenecientes a la Nación, constará del correspondiente asiento o partida en los libros manuales o diarios de las respectivas oficinas, encargadas de la percepción o inversión de las rentas públicas o de las especies o efectos mencionados.

Del mismo modo constará, conforme se vayan presentando los casos, lo que debe cobrar y lo cobrado y lo que debe pagar o entregar, y lo pagado o entregado, aunque se cobre o pague al contado.

El documento que dichas oficinas den a los interesados para constancia del recibo o de la entrega, debe hacer referencia de la partida o asiento del libro, con expresión de la foja y fecha, y ser firmado por el jefe de la oficina o de quien haga sus veces.

Art. 9.° — Los libros expresados se foliarán y rubricarán del modo que lo ordene el Poder Ejecutivo, según las circunstancias de cada localidad.

Art. 10 — Dichos libros principiarán el 1.° de enero con el resultado del balance o inventario del mes anterior y se cerrarán el 31 de diciembre, también con el respectivo balance.

No se podrá arrancar de ellos foja alguna, alterar su numeración o enmendar o borrar sus partidas. Toda equivocación que en ellos se cometa se corregirá en la fecha en que se note por medio de un nuevo asiento.

Art. 11. — Los jefes de las oficinas de que hablan los artículos anteriores, al encargarse de su administración, lo harán bajo inventario que servirá de comprobante a las correspondientes partidas con que deben principiar los libros de cuenta de su gestión.

Art. 12. — Cada mes se practicará en las oficinas de que se ha hecho mención, el respectivo balance, con intervención de las personas o funcionarios que, según las localidades, designe el Poder Ejecutivo, quienes verificarán si los saldos o existencias están conformes con el balance. Esto se asentará en un libro especial y se hará en el número de ejemplares que la ley o los reglamentos ordenen, pasándose uno al Ministro de Hacienda y otro a la Contaduría General.

Art. 13. — Si el interventor encuentra diferencia entre el balance y las existencias, lo participará inmediatamente, bajo las responsabilidades legales en caso contrario, al Poder Ejecutivo y a la Contaduría General, para que tomen las medidas necesarias, según el caso lo requiera.

Art. 14. — Los encargados de la administración de las rentas públicas o de especies o efectos pertenecientes a la Nación, son responsables de las cantidades o especies cuya percepción les está encomendada, y se les hará cargo de lo que dejasen de cobrar, a no ser que justifiquen que no ha habido negligencia de su parte y que han practicado oportunamente las diligencias para el cobro. (Ver art. 1.146, C. Civil).

Art. 15. — Son igualmente responsables de las cantidades o especies que entregaren indebidamente, esto es, o en mayor suma que lo ordenado, o cuando no lo hacen en virtud de libramiento u orden de pago en su caso, si se trata de dinero, o de la orden correspondiente si es de especies, como después se expresará; y las que aleguen que les han sido sustraídas o se han perdido, no les serán de abono o descargo si no prueban que han sido por caso fortuito, y que tomaron las precauciones prescriptas por las leyes o reglamentos.

Art. 16 — Ningún pago o entrega de caudales públicos se hará sino en virtud de orden del Presidente de la República en ejercicio del Poder Ejecutivo, refrendado por el respectivo Ministro, la cual contendrá:

1.° El número de ella, a cuyo efecto cada Ministro abrirá una numeración correspondiente a cada ejercicio;

2.° El nombre de la persona o autoridad a cuyo favor se manda hacer;
3.° La cantidad;
4.° La causa u objeto;
5.° El tiempo en que ha de verificarse, si es a plazo fijo;
6.° La imputación, esto es, el artículo, inciso e ítem del Presupuesto a que debe aplicarse el gasto, cuando es de los que hablan los artículos 2.° y 3.° de esta ley, o la ley especial que le hubiese autorizado, o el acuerdo del Poder Ejecutivo que lo ordene, cuando lo expida en conformidad del artículo 23.

Art. 17. — Dicha orden con los documentos justificativos que según el caso sean necesarios, pasará por conducto del Ministerio de Hacienda a la Contaduría General para su intervención, en la forma que expresa el artículo 25, después de lo cual vuelve al mismo Ministerio, quien si la Contaduría General no ha hecho observación alguna, ordena su pago por la Caja o Tesorería Nacional que convenga.

Si el pago se manda hacer por Tesorería General, el expediente vuelve a la Contaduría para que ponga en sus libros el correspondiente asiento, y verificado, lo pasa a la Tesorería para que haga el pago; efectuado el cual, vuelve el expediente a la Contaduría General para comprobar dicho asiento, y para hacer los demás necesarios relativos al pago, dando a Tesorería el correspondiente asiento en sus libros.

De todo libramiento que se expida, la Contaduría General dará aviso oficial al funcionario que deba satisfacerlo.

Art. 18. — Cuando la Contaduría General haga observaciones a la orden de pago, vuelve ésta por conducto del Ministerio de Hacienda al Ministerio en que tuvo origen, para la resolución que corresponda.

No se podrá insistir en una orden de pago observada por la Contaduría, sino en virtud de resolución tomada en Acuerdo de Ministros; en tal caso, el pago se verificará conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 19. — Las órdenes que dispongan pagos periódicos en las cajas nacionales fuera de la Capital por gastos fijos, como sueldos, pensiones y otros de esta clase, quedan sujetas también a la inter-

vención de la Contaduría General, y después de extendido el libramiento que en virtud de aquéllas se expida, vuelven originales a la Contaduría, según lo dispuesto en el artículo 17, para que cuando se haga el pago, asiente en sus libros las correspondientes partidas, que comprobará con dichas órdenes y con el aviso del pago que deberá darle mensualmente el funcionario o Tesorería que lo efectúe.

Art. 20. — A los fines que expresa el artículo anterior y a los demás que hubiese lugar conforme a esta ley, las administraciones del Tesoro Público pasarán mensualmente a la Contaduría General, una relación por los Ministerios, de los pagos que hicieron, con la expresión de la fecha del ejercicio, persona a quien se ha hecho el pago, la causa, el objeto y el número de libramiento. Asimismo, pasarán por ramos otra relación de lo que cobrasen cada mes, una y otra sin perjuicio de los balances o estados mensuales, según lo dispuesto anteriormente.

Art. 21. — El libramiento de que habla el artículo 17, llevará las firmas de los Contadores Mayores y el Visto Bueno del Ministro de Hacienda, y contendrá:

1.° El número del libramiento, a cuyo fin se abrirá la numeración correspondiente para cada ejercicio;
2.° El funcionario que debe satisfacerlo;
3.° Los requisitos 2.°, 3.°, 4.° y 5.° de las órdenes de pago, y
4.° El número de ésta con expresión del Ministerio de que procede

Art. 22. — Toda orden de pago se hará por los gastos votados en el Presupuesto sobre que se gira, o la ley especial que los autoriza, o el acuerdo del Poder Ejecutivo en su caso, que los ordena, y es indispensable que el ítem a que se imputen, si la orden es relativa a los gastos de que hablan los artículos 2.° y 3.°, sea correspondiente al gasto de su referencia.

No podrá decretarse gasto alguno que exceda el crédito o cantidad del ítem, inciso, ley especial o acuerdo correspondiente del Poder Ejecutivo, ni girarse sobre el excedente de algunos de ellos para cubrir el déficit que hubiere en otro u otros, ni finalmente, invertirse las cantidades votadas para objetos determinados en otros distintos.

Art. 23. — El Poder Ejecutivo durante el receso del Congreso y en los casos de los artículos 6.° y 23 de la Constitución, podrá autorizar en virtud del acuerdo en Consejo de Ministros, los gastos que requieran las circunstancias, abriendo a los respectivos Ministerios los créditos necesarios para el servicio de su cargo, y dará cuenta de ellos en la misma forma que respecto de los créditos concedidos por la ley. (Derogado por Ley N.° 1.606 de julio 31 de 1885).

Art. 24. — Los fondos votados para gastos eventuales, extraordinarios o imprevistos, en el presupuesto de cada Ministerio, no podrán ser comprometidos por contrato, o de cualquier otro modo, por más tiempo que el de la vigencia del ejercicio del Presupuesto. (Ver Fallos, Suprema Corte. Tomo 84, pág. 280).

Art. 25. — La intervención de la Contaduría General en las órdenes de pago, consiste en liquidar las cuentas que ellas o los documentos de su referencia contengan, y en examinar si dichas órdenes están conformes a lo que prescriben los artículos 16, 17, 22 y 24.

Si la Contaduría General no encuentra observación que hacer, lo expresa así, y devuelve las órdenes al Ministerio de Hacienda a los efectos del artículo 17.

En caso que haya error en las cuentas o que se decrete un gasto ordenado o pagado anteriormente, o que las órdenes no sean conformes a los cuatro artículos citados en la primera parte de éste, las pasa también al mismo Ministerio, con las observaciones del caso, al objeto que expresa el artículo 18.

Art. 26. — La responsabilidad de todo decreto de pago es solidaria entre el Jefe de Estado que la firma, el Ministro que lo autoriza y los miembros de la Contaduría que tengan parte en la intervención; pero cuando la Contaduría General hubiese observado el decreto en la forma prescripta en el artículo anterior, cesará para ella la responsabilidad, pesando sobre el Jefe del Estado y el Ministro o Ministros respectivos.

Art. 27. — La entrega de especies, efectos u otras pertenencias de la Nación, se hará por las oficinas o encargados de su administración, en virtud de la orden correspondiente firmada por el Presidente o Vicepresidente de la República en su caso, y por el respectivo Ministro con intervención de la Contaduría General.

Art. 28. — Cuando por falta de fondos u otra causa, no pudiese pagarse un libramiento u orden de pago, el tenedor tiene derecho a exigir, y se le dará, una declaración o certificación del motivo, para que haga el uso que le convenga.

Art. 29. — El funcionario que rehusare o retardare indebidamente el pago, o no diere dicha certificación, es responsable de los daños y perjuicios que ocasionase al interesado, e incurre además en la suspensión o destitución de su empleo, según la gravedad del caso, sin perjuicio de la acción criminal que contra él hubiere, conforme a las leyes, por falta de cumplimiento de las órdenes de sus superiores.

Esta disposición es también aplicable a las órdenes a que se refiere el artículo 27.

Art. 30. — En caso de pérdida de un libramiento, se dará un duplicado, en virtud de solicitud escrita de aquél a cuyo favor se giró y de certificación del funcionario contra quien se libró, de no haber sido satisfecho; bien entendido, que no será pagado el primer libramiento, si fuese presentado.

Estos actuados pasarán a la Contaduría General, la que los mandará agregar a la orden de su referencia.

Art. 31. — Ningún libramiento, ni orden de entrega de efectos o especies, se cumplirá si contiene entrerrenglonaduras, testaduras, raspaduras o enmiendas que no estén salvadas al final, en la forma de costumbre.

Art. 32. — Toda compraventa por cuenta de la Nación, así como toda convención sobre trabajos y suministros, se hará por regla general, en remate público. (Ver Acuerdo 15 de marzo 1916).

Art. 33. — Puede, sin embargo, contratarse privadamente:

1.° Los suministros de especies u objetos para el servicio público, los trabajos u obras, *cuyo gasto no exceda de mil pesos.* (Ver Acuerdo 30 de noviembre 1914 y artículo 49, Ley 11.260);

2.° Cuando las circunstancias exijan que las operaciones del Gobierno se conservan secretas;

3.° En caso de urgencia en que a mérito de circunstancias imprevistas, no pueda esperarse el remate;

4.° Si sacadas dos veces a licitación no ha habido postor, o no se han hecho ofertas admisibles;

5.° Los objetos cuya fabricación es exclusiva de los que tienen privilegio para ello, o que no están poseídos sino por un solo individuo;

6.° Las obras u objetos de arte, cuya ejecución no pueda confiarse sino a artistas u operarios experimentados y las compras que para el mejor servicio público sea necesario hacer en el extranjero.

Art. 34. — Los contratos sobre objetos exceptuados del remate, con exclusión de los comprendidos en el inciso 1.° del artículo anterior, no tendrán lugar sino previa autorización del Poder Ejecutivo, concedida en Acuerdo de Ministros.

Los remates se aprobarán del mismo modo (1).

Art. 35. — Las bases del remate deben determinar la naturaleza o importancia de la garantía que los proponentes o empresarios deben dar, ya sea para ser admitidos al acto del remate, ya sea para responder a sus obligaciones.

Art. 36. — La subasta y remate para los servicios u objetos expresados, se anunciarán con treinta días de anticipación en los diarios de la Capital de la Provincia en cuyo territorio hubiese de hacerse las obras o servicios ordenados. (Ver Acuerdo 14 de julio de 1931 que se transcribe en la página 47) (2).

De la contabilidad a cargo de la Contaduría General

Art. 37. — La Contaduría General llevará por el sistema de partida doble la cuenta de cada presupuesto, la de los otros créditos que se abran en virtud de una ley especial o por acuerdo del Poder Ejecutivo en su caso, y la de los demás recursos que se destinan para los gastos públicos, como empréstitos, otras operaciones de crédito o nuevos impuestos.

Art. 38. — Con tal objeto abrirá cuenta en sus libros.

1.° A cada ítem, por los gastos de que hablan los artículos 2.° y 3.°;

---

(1) Modificado por Ley N.° 11.672 complementaria permanente de presupuesto.

(2) Modificado por Ley N.° 11.672.

2.° A cada inciso, para cada uno de los ramos de entrada a que se refiere el artículo 4.°;

3.° A todo crédito especial o extraordinario, abierto por ley, no comprendido en el presupuesto. Si el crédito fuese suplementario a éste, se considerará como parte de él y se agregará al ítem o inciso que corresponda;

4.° A todo crédito abierto por el Poder Ejecutivo, en conformidad al artículo 23, considerándose para el efecto como un ítem la cantidad designada para el servicio de cada Ministerio, en el respectivo acuerdo;

5.° A cada empréstito o a cada otra operación de crédito, o nuevo impuesto, si es que no se les tiene abierta la cuenta respectiva, conforme al inciso 2.° de este artículo.

Abrirá también todas las otras cuentas que fuese menester para que los libros demuestren claramente todas las operaciones del Tesoro Público o movimiento de su administración, como las de libramientos u órdenes de pago, Caja o Tesorería Nacional y demás de esta clase.

Art. 39. — La Contaduría Nacional no podrá hacer, bajo las penas de la ley en caso contrario, asiento alguno en los libros relativamente a los gastos que se decreten, si no en virtud de la orden correspondiente de pago, según los artículos 17 y 18, y en cuanto a la recaudación de las rentas o entradas de Tesorería Pública y a los pagos que se hacen, sino en virtud de las relaciones a que se refiere el artículo 20 ó de las órdenes de pago en su caso. Unas y otras servirán de comprobante de las respectivas partidas y llevarán la numeración correspondiente.

Art. 40. — La Contaduría General tendrá a su cargo un libro o registro en el que conste el número, situación, destino y producto de las propiedades raíces de la Nación (Ver artículo 1.536, Código Civil y Acuerdo 21 septiembre 1926).

Art. 41. — Asimismo llevará otro en que se anote el número de buques, su clase, destino y productos.

Art. 42. — Llevará igualmente otro u otros para la toma de razón de los nombramientos de los funcionarios públicos, en el cual se expresará el nombre de éstos, el empleo que se les ha conferido, el sueldo y la fecha del nombramiento.

De la clausura del ejercicio del presupuesto

Art. 43. — El 31 de marzo de cada año quedará cerrado por el ministerio de la ley, el ejercicio del presupuesto del año anterior y el de los demás créditos abiertos por leyes especiales o acuerdos, en su caso, del Poder Ejecutivo.

Esta clausura produce los efectos siguientes:

Los créditos de que hasta entonces no se hubiese hecho uso, quedan sin valor ni efecto, salvo que la ley o el acuerdo del Poder Ejecutivo ordene su continuación.

El Poder Ejecutivo no podrá girar cantidad alguna sobre el ejercicio cerrado.

Las órdenes de pago de que hasta el mismo día no se hubiesen asentado la respectiva partida en los libros de la Contaduría General, correspondiente al ejercicio cerrado, harán parte del siguiente siempre que una ley abra, para su pago, el crédito especial o extraordinario que se necesite, y los saldos a favor del Tesoro Público que se quedaran debiendo en los distintos ramos de entradas, pasarán al ejercicio del siguiente año, de que harán igual parte.

De la cuenta de inversión que debe presentarse al Congreso

Art. 44. — La Contaduría General cerrará sus libros en la fecha que expresa el artículo anterior, y según lo que de ello resulte, formará una cuenta o estado que manifieste por Ministerios lo que se haya autorizado a gastar por cada ítem, inciso o crédito a que se haya abierto cuenta, según el artículo 38 y lo que se haya mandado pagar por cuenta de cada uno de éstos, y otro que demuestre lo calculado por cada inciso o ramo de entrada y lo que se hubiese recaudado.

Art. 45. — A esta cuenta agregará:

1.° Relación circunstanciada, por Ministerios, de las órdenes de pago a que se refiere el artículo 18, otra de las fincas y otra de los buques de que hablan los artículos 40 y 41, y los siguientes estados;

2.° De la existencia por tesorería o cajas nacionales que queda a favor del Tesoro Público el 31 de diciembre;

3.° De lo que por Ministerios se queda debiendo en la misma fecha, esto es, de lo librado y no pagado;

4.° De lo que también por Ministerios cada uno de ellos ha sido autorizado para gastar y de lo librado, con excepción de lo que se hubiese excedido y de lo que se hubiese ahorrado;

5.° De las entradas y salidas del Tesoro Público en el año del presupuesto, aquéllas por ramos y éstas por Ministerios;

6.° Y del activo y pasivo del Tesoro el 31 de diciembre.

Art. 46. — La cuenta y las relaciones de que hablan los artículos anteriores, firmadas por el Presidente de la Contaduría y por uno de los Secretarios, se presentarán al Congreso impresas como anexos a la Memoria del Ministro de Hacienda, con las observaciones a que dieren lugar, poniendo a disposición de ambas Cámaras los libros que lleva la Contaduría General y los comprobantes de su referencia.

Art. 47. — El Congreso, en vista de las cuentas, estados y libros expresados, procederá a ejercer la atribución que le confiere el artículo 67, inciso 7.°, de la Constitución, de aprobar o desechar la cuenta de inversión.

De la Contaduría General

Art. 48. — La Contaduría General se compondrá de tres Contadores Mayores, uno de los cuales será Presidente, nombrados por el Poder Ejecutivo, y tendrá dos Secretarios.

Art. 49. — Habrá, además, en las dependencias de ella para el despacho de los negocios a su cargo, seis Contadores fiscales, y los demás empleados que determine la Ley del Presupuesto.

Art. 50. — El Presidente, como Jefe de la Contaduría, tiene a su cargo el gobierno interior de ella, con las demás atribuciones que las leyes o reglamentos le confieran, y por su conducto corresponde directamente a la Contaduría con las diversas administraciones públicas y con los obligados a rendir cuenta, en lo que concierne a su rendición.

Art. 51. — Los secretarios tendrán a su cargo: La redacción de las actas y acuerdos de la Contaduría; la comunicación de las providencias que ella acuerde, o el presidente, según sus atribuciones; la formación de un estado a fin de cada mes, de todas las cuentas que han debido presentarse en el mismo a la Contaduría, de las que se hayan recibido y de las que hayan dejado de presentarse; el registro de su presentación, curso y fenecimiento; la correspondencia de la Contaduría, que será firmada por el presidente y uno de los secretarios; la formación de estados y noticia anual de los trabajos de la Contaduría; la redacción de los informes que ella expida por orden del Poder Ejecutivo o de los otros poderes, y de las observaciones que haga a las órdenes de pago, que copiará en un libro especial, y un registro en que transcriba las resoluciones definitivas de la Contaduría en las cuentas que examine.

Art. 52. — La Contaduría General, además de los deberes y atribuciones anteriormente expresados, tiene a su cargo, administrativamente, el examen, liquidación y juicio de las cuentas de la administración, recaudación y distribución o inversión de los caudales, rentas, especies u otras pertenencias, de cualquier clase que sean, de la Nación.

Art. 53. — A los efectos del artículo anterior requerirá de quien corresponda la presentación de las cuentas en la forma y época que la ley o reglamentos prescriban, y podrá pedir todos los datos, informes y documentos que juzgue necesarios.

Art. 54. — Con el mismo objeto, y a los efectos de esta ley, el Poder Ejecutivo le comunicará todas las leyes, decretos, y resoluciones acerca de las rentas y gastos del Tesoro Público.

Art. 55. — Ningún funcionario de la Contaduría podrá intervenir en el examen, tramitación y juicio de una cuenta, cuando concurran en él alguna o algunas de las causas de recusación que para los jueces se señala en el artículo 43 de la ley de procedimientos de 14 de septiembre de 1863 (Ley N.° 50).

Art. 56. — Si el impedido fuese un contador mayor, será llamado para subrogarlo el contador fiscal más antiguo, según el orden de su nombramiento, y si todos los contadores fiscales estuviesen impedidos, el Poder Ejecutivo designará quiénes han de ser reemplazantes. (Modificado por Ley N.° 11.672, complementaria permanente de presupuesto).

Art. 57. — En caso de impedimento de los secretarios, la Contaduría los sustituirá con algunos de los otros subalternos, y en el del contador fiscal a quien se hubiera pasado una cuenta para su examen, nombrará otro contador fiscal que no esté impedido.

Art. 58. — Por falta de asistencia del presidente, hará sus veces en el despacho de tramitación, el contador mayor más antiguo, y cuando en el examen y juicio de una cuenta resulten impedidos todos los contadores mayores, se considerará presidente el que sea llamado en primer lugar a componer el tribunal, según el art. 56.

Art. 59. — Dos votos conformes de los miembros de la Contaduría, harán resolución y en caso de discordia de los tres contadores, serán llamados por su orden a dirimirla, conforme a lo dispuesto para el caso de impedimento.

Art. 60. — En el caso de morosidad en la rendición de una cuenta, la Contaduría exigirá y compelerá de oficio y directamente, a la presentación de ella, empleando gradualmente los siguientes medios de apremio.

1.° Requerimiento conminatorio;

2.° Suspensión de empleo y privación de sueldo, que no exceda de dos meses, con aprobación del Poder Ejecutivo en cuanto a la suspensión del empleo, y si el obligado a rendir la cuenta no disfruta sueldos, imposición de una multa que no baje de cincuenta, ni pase de quinientos pesos fuertes;

3.° Formación de oficio de la cuenta retrasada, a cargo y riesgo del apremiado, en la inteligencia de que éste por ese solo hecho, quedará destituído de la administración de que debe dar cuenta, y el P. Ejecutivo lo emplazará en virtud del aviso que le comunique la Contaduría General.

Art. 61. — Las cuentas que hayan de presentarse a la Contaduría General, se dirigirán a su Presidente, quien después de registradas en el libro correspondiente a la Secretaría, y de acusado recibo de ellas, las pasará, de acuerdo con la Contaduría, a un Contador fiscal para su examen, procurando evitar en lo posible que un mismo Contador examine en años consecutivos las cuentas de un mismo responsable.

Art. 62. — El Contador fiscal, ayudado de uno o más oficiales primeros o segundos, según lo disponga la Contaduría, examinará a la brevedad posible, todas las partidas de la cuenta y las comprobará con los documentos que la justifiquen, presentando a la Contaduría el resultado de su examen, el cual recaerá sobre los puntos siguientes:

1.° Si la cuenta está conforme con los modelos e instrucciones del ramo a que pertenece;

2.° Si los documentos que justifican las partidas de la cuenta son auténticos, legítimos y suficientes y con sujeción a las leyes, decretos y reglamentos de la materia;

3.° Si contiene la cuenta alguna omisión en la partida de cargo, y si ha cobrado o recibido todo lo debido cobrar o recibir;

4.° Si las partidas de data están conformes con los respectivos libramientos u órdenes de pago, cuando se trata de caudales extraídos del Tesoro Público, o con los documentos debidos, cuando la cuenta es de comisión;

5.° Si las liquidaciones y demás operaciones aritméticas de la cuenta están hechas con exactitud.

Art. 63. — Con referencia a estos puntos, si el Contador fiscal encuentra arreglada la cuenta, pedirá a la Contaduría que la apruebe, y si halla cargos o reparos que hacer, los formulará con distinción y claridad, y solicitará lo que conforme a la ley deba resolver la Contaduría.

Art. 64. — Cuando el Contador fiscal no haga reparo alguno y pida la aprobación de la cuenta, y revisada ésta por la Contaduría, fuese ella del mismo parecer, procederá a su aprobación, declarando libre de responsabilidad al que la presentó, mandará que se archive, y comunicará copia de su decisión al interesado, haciéndolo saber al Contador fiscal que examinó la cuenta.

Art. 65. — Si la Contaduría encontrase reparo o cargos que no hubiese hecho el Contador fiscal, los formulará ella, y procederá en seguida como se prescribe en el caso de que hayan sido hechos.

Art. 66. — Formalizados los reparos o cargos, ya sea por el Contador fiscal, o la Contaduría, según el artículo anterior, se emplazará al obligado a contestarlos y se le señalará por aquélla, término para la contestación, que nunca será menor de nueve días.

Este término podrá prorrogarse, pero en ningún caso excederá de treinta días que se fijan como improrrogables, y empezarán a contarse desde el emplazamiento.

Art. 67. — El emplazamiento se hará por uno de los Secretarios de la Contaduría, a los responsables que hayan comparecido ante ella, y consistirá en la entrega personal de una copia autorizada del pliego de reparo, exigiendo recibo que se unirá al expediente de la cuenta. A los que no hayan comparecido se dirigirán los reparos o cargos en pliego certificado con aviso aparte de la Contaduría a la respectiva Administración de Correos, para que aquél sea puesto en poder de la persona a quien va dirigido. Cuando se ignore el domicilio del interesado o no fuese hallado en él, se verificará el emplazamiento por medio de edictos por los periódicos.

Art. 68. — El que ha rendido la cuenta podrá comparecer por sí o por apoderado, a contestar los reparos, acompañar documentos y solicitar de la Contaduría que pida copia de los que contribuyan a su descargo y deban obrar en las oficinas públicas. Si no compareciere, podrá hacer por escrito las mismas gestiones desde el punto en que resida, pero en todo caso, el transcurso del término prefijado para la contestación a los reparos, le causará el perjuicio que haya lugar.

Art. 69. — Respecto a los reparos cuya documentación pueda o deba existir en las oficinas públicas, se pedirá a éstas de oficio por la Contaduría los correspondientes informes o copias de los documentos, sin esperar gestión del interesado. Si las oficinas fuesen morosas en dar los informes o copias pedidos, la Contaduría las requerirá de nuevo con señalamiento del término, transcurrido el cual, sin éxito, lo pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo para que haga éste cumplir lo mandado por aquélla, debiendo el culpable de la demora, si es dependiente del Poder Ejecutivo, sufrir una multa o ser suspenso del empleo o sueldo, según la gravedad del caso.

Las mismas oficinas estarán obligadas bajo su responsabilidad, a facilitar sin demora al interesado, certificación formal de cuantas noticias o documentos relativos a la cuenta obren en su poder y sean reclamadas por aquél.

Art. 70. — Dada la contestación o vencido el término de ella sin que se hubiese dado, la Contaduría General oirá al Procurador del Tesoro sobre todos o parte de los reparos, si lo creyese conveniente, y en tal caso, pondrá la cuenta a su disposición, en la misma oficina, para que aquél dé su dictamen a la mayor brevedad posible.

Es deber de la Contaduría General oír al Procurador del Tesoro cuando se ofrezca duda sobre algún punto de derecho.

Art. 71. — Llenados los trámites que prescriben los artículos anteriores, la Contaduría General examinará la cuenta y dará la resolución que corresponda, interlocutoria cuando aun tenga que ordenar, para proceder con más acierto, alguna diligencia indispensable o la prueba de un hecho, ante ella o ante la justicia, sujetándose en cuanto al término para la prueba, a lo que dispone la Ley citada de 14 de septiembre de 1863; o definitiva, practicadas que sean dichas diligencias o cuando ellas no sean necesarias, aprobando la cuenta y declarando libre de cargo al que la presentó, o bien determinando las partidas ilegítimas o no comprobadas y ordenando se proceda a la cobranza de los alcances que en su virtud se declaren en favor del Tesoro Público.

Art. 72. — Cuando la resolución defintiva sea absolutoria, se archivará la cuenta conforme a lo dispuesto en el artículo 64, con las actuaciones de su referencia, que deben correr unidas, y previa copia de la resolución en el libro respectivo, autorizada por la firma de uno de los Secretarios. Si fuera condenatoria, no se archivará la cuenta sino después que se haga efectivo el alcance o cargo o se consigne su importe, según se dispone en seguida.

Art. 73. — Si los reparos o cargos hechos y declarados no consisten sino en no haberse llevado la cuenta conforme a los modelos e instrucciones del caso, el que la rindió será apercibido, y pagará además una multa que no exceda de cien pesos fuertes.

Art. 74. — Las resoluciones definitivas de la Contaduría General tienen fuerza ejecutiva; se notificarán al interesado en la forma que para el emplazamiento prescribe el artículo 67, con intimación de que en el término de diez días entregue el valor o el importe del cargo en la Caja Nacional o Administración de Rentas que señale la Contaduría; al Contador fiscal que examinó la cuenta, se le harán saber también por notificación de uno de los Secretarios en el expediente.

Art. 75. — Vencido el término fijado en el artículo anterior sin que se haya hecho efectivo el pago, la Contaduría pasará al Poder Ejecutivo copia legalizada de su resolución, para que por conducto del Ministerio de Hacienda se transmita al Agente fiscal que corresponda, donde lo haya, y cuando no, al que nombre *ad hoc* el Poder Ejecutivo, a fin de que por la vía de apremio, conforme al Título 25 de la Ley de procedimientos de 14 de septiembre de 1863, cobre al interesado y en su defecto a sus fiadores, el alcance o cargo declarado por la Contaduría, con más las costas y costos de la cobranza. (Ley N.° 50, artículos 308 al 321).

Art. 76. — Las decisiones definitivas de la Contaduría se llevarán a efecto no obstante cualquier recurso que contra ellas se interpongan, y sólo se suspenderá la ejecución cuando se efectúe el pago o se consigne en la Caja Nacional señalada, el importe del cargo o alcance, sin lo cual no será admitido el ejecutado al juicio ordinario, ni podrá intentar recurso de ninguna clase contra aquellas decisiones.

Art. 77. — El Agente fiscal pedirá testimonio de la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo, y lo pasará por conducto del Ministerio de Hacienda a la Contaduría General, la que mandará se agregue a la cuenta correspondiente. (Decretos de 26 de octubre de 1915 y 2 de marzo de 1931).

Es entendido que el Agente fiscal está obligado a dar la fianza que ordena el artículo 321 de la Ley últimamente citada. (Ley N.° 50).

Art. 78. — Es deber del Ministerio Público dar aviso por el mismo conducto a la Contaduría General, cuando él o la parte contraria, inicien el juicio ordinario según el artículo 320 de la misma Ley, y transmitirle testimonio de las sentencias que se pronuncien en dicho juicio, las que la Contaduría ordenará se agreguen también al expediente de la materia.

Art. 79. — Si la sentencia ejecutoriada que se dé en el juicio ordinario manda la devolución de la cantidad que en el ejecutivo recibió el Tesoro Público en pago o en consignación, el Poder Ejecutivo la mandará entregar sin necesidad de que el Congreso vote para ello el correspondiente crédito.

Art. 80. — El Agente fiscal o el Procurador del Tesoro, en su caso, pasarán cada tres meses al Ministerio de Hacienda, una re-

lación de las causas fiscales que conforme a esta Ley tengan a su cargo, informando si sufren demora y por qué motivo, a fin de que el Poder Ejecutivo en la esfera de sus atribuciones, pueda remover los inconvenientes que haya para su pronto despacho.

Art. 81. — Habrá el recurso de revisión ante la misma Contaduría, contra las resoluciones definitivas que diere, en el término de tres años contados desde su notificación, ya sea a solicitud del responsable o del que rindió la cuenta, apoyado en documentos nuevos que hubiere obtenido y justifiquen las partidas desechadas, ya sea de oficio o por errores trascendentales, omisiones de cargo o dobles datas que se hubiesen encontrado en el examen de otras cuentas. Aun pasado ese término habrá lugar al expresado recurso, si se reconoce que la anterior decisión se pronunció en virtud de documentos falsos. El Ministerio público, los Contadores fiscales y la Contaduría General, tienen el deber de proceder al recurso cuando llegue alguno de los casos previstos en este artículo y tengan conocimiento de él.

Art. 82. — El modo de proceder en este recurso, será el mismo que se ha prescripto para el examen o juicio de las cuentas, con sólo la diferencia de que, cuando el responsable sea quien pida la revisión, el Contador fiscal que designe la Contaduría será el que conste de la solicitud del demandante. Si el resultado del recurso fuese favorable a éste, el Poder Ejecutivo, con el aviso correspondiente de la Contaduría, mandará se le entregue lo que el Tesoro Público recibió por la anterior decisión, sin necesidad de que para ello el Congreso vote un crédito especial.

Art. 83. — Si en el examen de las cuentas encontrase que se ha cometido el delito de falsedad o alguno de los que habla el artículo 75 y desde el 79 hasta el 90 inclusive de la Ley de 14 de septiembre de 1863 (Ley N.° 49; ver Código Penal en vigor) sobre los crímenes cuyo juzgamiento compete a la justicia nacional, la Contaduría, sin perjuicio de continuar la tramitación para el fenecimiento de la cuenta, lo participará al Poder Ejecutivo a efecto de que incite a quien corresponda para que los autores y cómplices sean juzgados por la autoridad competente.

Art. 84. — Los Contadores fiscales anotarán bajo su firma, en el expediente de la cuenta, la fecha en que la reciben para su examen, y la en la que la entregan despachada. Llevará además

cada uno de ellos, un registro en el cual conste una y otra operación bajo la firma de los Secretarios.

Art. 85. — Dichos Contadores fiscales y demás subalternos de la Contaduría, están bajo la dependencia de ésta, y desempeñarán todos los trabajos relativos al servicio público que ella les encomiende.

Art. 86. — La Contaduría dará al Poder Ejecutivo y a cada una de las Cámaras, los informes que se pidan y practicará las cuentas y liquidaciones que aquél le ordene.

Presentará cada año al Ministerio de Hacienda una memoria de sus trabajos, acompañada de un estado de las cuentas despachadas y pendientes, haciendo las observaciones y proponiendo las mejoras a que diesen lugar los abusos que note en la recaudación y distribución de las rentas, y los vicios que advierta en la contabilidad. Esta memoria se acompañará como anexo a la que el Ministerio de Hacienda presente al Congreso.

De la rendición de las cuentas y de las fianzas

Art. 87 — La Administración de Correos, y la Tesorería General, la Administración de Sellos, y las de Rentas o Aduanas, el encargado del Parque, la Comisaría General y las oficinas o encargados de hacer pagos de los caudales públicos, así como los demás que haya o hubiere para administrar rentas, especies o efectos pertenecientes a la Nación, rendirán a la Contaduría General cada año en todo el mes de enero, la cuenta general de su administración. Sin embargo, el Poder Ejecutivo podrá ordenar, si lo creyere conveniente, que antes del tiempo expresado se examine periódicamente parte de la cuenta, por lo que respecta a la recaudación.

Art. 88 — En caso de renuncia o destitución del responsable, antes del término del año de que habla el artículo anterior, rendirá la cuenta un mes después de una u otra; y en caso de muerte, lo harán sus herederos o fiadores en su defecto, en el término que señala la Contaduría, que no podrá pasar de dos meses.

En todos los casos, los libros y comprobantes se conservarán en la misma oficina a cargo del que reemplace al responsable, por disposición de éste o de sus representantes, y vencidos los términos

expresados, los libros y comprobantes se dirigirán con las seguridades necesarias y de costumbre a la Contaduría General, por el Jefe actual de la oficina, con conocimiento del responsable o de sus representantes.

Art. 89. — Dicha cuenta se formará por lo que resulte de los libros y comprobantes originales, y se procederá junto con todos éstos y aquéllos.

Art. 90. — Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, el Tesorero del Crédito Público no está obligado a presentar los libros y comprobantes originales.

Su cuenta será justificada en las partidas de cargo, por una relación certificada de la Tesorería General o de la oficina que corresponda, de las cantidades que para los gastos de su institución se le hubieran entregado en el período que abraza la cuenta, y las partidas de data por igual certificado de la Junta de Administración del Crédito Público. No obstante, si la Contaduría, para examen y juicio de la cuenta, necesita ver los libros y comprobantes originales, podrá hacerlo por sí o por algún comisionado de su seno, en la oficina del Crédito Público.

Art. 91. — Las cuentas de comisión, bajo cuya denominación se entienden las que deben rendir las autoridades o particulares a quien se haga algún encargo en virtud del cual tengan la administración o manejo de caudales o efectos de la Nación, se rendirán en la forma de costumbre, comprobando debidamente el cargo y la data y comprenderán el tiempo que dure la comisión; pero si éste excediere de un año, hay obligación de darlas al fin de cada uno.

Art. 92. — Los agentes del Tesoro Público, así como los encargados de la guarda, conservación o empleo de los efectos o especies pertenecientes a la Nación, antes de entrar al ejercicio de sus funciones, prestarán juramento ante quien designe el Poder Ejecutivo, de desempeñarlo fiel y lealmente, y darán fianza para responder a los cargos que contra ellos resulte de su administración.

La fianza será a satisfacción del Poder Ejecutivo, quien determinará por una medida general, la que debe prestar cada uno de aquellos empleados, tomando por base las circunstancias de su administración y de que esa obligación sea lo menos gravosa posible al responsable.

Art. 93. — La disposición del artículo anterior en cuanto a la fianza, no comprende a los Jefes del Ejército y Armada que reciben dinero, efectos o especies para el servicio de las fuerzas o buques de su mando, respecto de lo cual se estará a lo que las leyes o reglamentos prescriben sobre la materia.

Art. 94. — Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente ley.

Art. 95. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso, en Buenos Aires, a 26 de septiembre de 1870.

MANUEL QUINTANA — MARIANO ACOSTA.
Carlos M. Saravia — *Ramón Muñiz.*
Secretario del Senado — Secretario de la C. de D.

Por tanto;

Téngase por ley, comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

SARMIENTO.
N. AVELLANEDA.

Acuerdo General de Ministros, de 14 de julio de 1931, creando las Direcciones de Administración

Buenos Aires, 14 de julio de 1931.

La organización interna de la Contaduría General de la Nación, creada por Ley N.° 428, del año 1870, es anticuada; su tarea de fiscalización es tardía e ineficaz, pues recae generalmente sobre los hechos cumplidos, en vez de prevenirlos; el trámite es lento, y sus informaciones sobre la marcha financiera del Estado carecen de método y coordinación, y se elaboran con un atraso considerable que les priva en gran parte de su utilidad práctica.

El presente decreto tiende a corregir ese estado de cosas mediante la descentralización de los trámites y la centralización del contralor, según el plan sometido al Poder Ejecutivo por el Tribunal de Cuentas de la Nación.

En la actualidad la tramitación de las órdenes de pago que dictan los distintos departamentos del Poder Ejecutivo se efectúa con gran lentitud, lo que origina inconvenientes de toda clase, tanto en el pago de los sueldos a los funcionarios de la Administración como en los abonos a los distintos proveedores del Estado. Todos los documentos respectivos convergen hacia la Contaduría General de la Nación, en un número tan considerable que la obligan a desenvolverse con un enorme atraso, desvirtuando en esta forma las disposiciones claras y terminantes de la Ley de Contabilidad. Con el sistema que se adopta, las planillas de sueldos y gastos, que en 1930 alcanzaron a cerca de 16.000, no pasarán en lo futuro de 500 por año; y las rendiciones de cuentas de sueldos y gastos disminuirán de 520 a 10 mensuales.

De acuerdo con este decreto, el trámite de las órdenes de pago, en lugar de realizarse como ahora, se desenvolverá en gran parte de la Dirección de Administración respectiva, cuyas tareas estarán debidamente coordinadas con las de la Contaduría General de la Nación, la que además ejercerá sobre ellas, por medio de sus delegaciones, un control previo y de orden permanente. Las Direcciones

de Administración, salvo en los casos en que ya existiesen, se crearán sobre la base del personal que en los distintos Ministerios y reparticiones realiza las operaciones de trámite y contabilidad.

Por tales consideraciones,

El Presidente del Gobierno Provisional, en Acuerdo General de Ministros—

DECRETA:

CAPITULO I

De las Direcciones de Administración

Artículo 1.° — A partir del 1.° de septiembre próximo se crearán o reorganizarán las Direcciones de Administración que se enumeran a continuación, las que funcionarán conforme a las disposiciones de este capítulo:

1. Dirección de Administración de Interior;
2. » » » » Correos y Telégrafos;
3. » » » » la Prefectura de P. de la Capital;
4. » » » » Relaciones Exteriores y Culto;
5. » » » » Hacienda;
6. » » » » Justicia e Instrucción Pública;
7. » » » » Agricultura;

Art. 2.° — Corresponde a las Direcciones de Administración:

1.° Preparar el proyecto de presupuesto anual de gastos y recursos del Departamento o entidad de la que forman parte;

2.° Formular las órdenes de pago y disponer las acreditaciones por ingresos de fondos provenientes de recaudación u otros conceptos;

3.° Informar y requerir informes directamente de las distintas dependencias o reparticiones, y autorizar las rendiciones de cuentas y expedientes de liquidación, ante la Contaduría General de la Nación;

4.° Intervenir en las licitaciones públicas y privadas de adquisiciones, ventas y contratación de servicios, preparadas por

la repartición del ramo, sometiendo previamente a la aprobación del Ministerio los pliegos de condiciones de las licitaciones cuyo monto exceda de cinco mil pesos moneda nacional ($ 5.000 m/n.).

Art. 3.° — Los suministros que no excedan de un mil pesos oro sellado ($ 1.000 o/s.), podrán contratarse privadamente, con la autorización del Ministerio del ramo, o, en su caso, del Director General de Correos y Telégrafos o del Prefecto General de Policía.

Los directores o jefes de las demás reparticiones podrán autorizar con su sola firma los gastos a realizarse dentro de sus dependencias cuando su monto no exceda de $ 300 m/n.) trescientos pesos moneda nacional y siempre que hayan de atenderse con las partidas que aquéllas tengan asignadas.

Art. 4.° — Las publicaciones a que se refiere el artículo 36 de la Ley N.° 428, se efectuarán, como máximo, durante el número de días que se indica a continuación:

a) Compra o venta hasta $ 5.000 m/n. aproximadamente, durante (2) días;

b) Compra o venta hasta $ 50.000 m/n. aproximadamente, durante 5 (cinco) días;

c) Compra o venta que exceda de $ 50.000 m/n. aproximadamente, durante 8 (ocho) días.

Sobreentendiéndose que la primera publicación tendrá la anticipación de 30 (treinta) días que la ley establece.

Art. 5.° — Corresponde especialmente al Director de Administración:

1.° Autorizar las extracciones de fondos del Banco de la Nación que deba realizar el Tesorero, suscribiendo con éste los cheques correspondientes, con la intervención del Contador, y firmar todas las órdenes de pago que se expidan para abonarse por la Tesorería respectiva, hasta una cantidad no mayor de cinco mil pesos moneda nacional ($ 5.000 m/n.);

2.° Vigilar, bajo su responsabilidad personal, el pago oportuno y periódico de los aportes que correspondan a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles u otras, que deberá efectuarse una vez recibidos de la Tesorería General de la Nación los fondos correspondientes al pago de los sueldos mensuales y en base a las liquidaciones practicadas por la Delegación de la Contaduría General de la Nación sobre las planillas que a tales efectos confeccionará la Dirección de Administración;

3.° Proyectar, para ser elevadas a la aprobación del Poder Ejecutivo, las reglamentaciones que correspondan al suministro de especies, servicios de transportes y comunicaciones y asignación de viáticos y movilidad, preparadas con intervención de la repartición del ramo;

4.° Firmar las órdenes oficiales de pasajes y fletes con sujeción a las disposiciones que rijan para su otorgamiento; y disponer la liquidación de las facturas por este concepto;

5.° Disponer el movimiento del personal de la Dirección de Administración; las inspecciones administrativas, levantamiento de inventarios, arqueos de cajas, etc., así como las intervenciones que estime necesarias para el mejor contralor de las recaudaciones e inversiones de fondos y manejos de especies, con todas las reparticiones del Ministerio o Prefectura, etc.;

6.° La responsabilidad de las finanzas del Departamento, etc., no pudiendo comprometer ni autorizar gastos sin que exista el crédito a que deban imputarse, ni ordenar pagos internos sin tener disponibles en la Tesorería respectiva los fondos pertinentes. A este objeto, tomará las precauciones necesarias para que las distintas autorizaciones acordadas no sean excedidas en su monto, y llamará de inmediato la atención del Ministerio cada vez que los créditos se hallen comprometidos en su totalidad o estén por agotarse.

Art. 6.° — Con sujeción a las disposiciones de este Acuerdo, cada Dirección de Administración proyectará su Reglamento Interno, que, previa conformidad de la Contaduría General de la Nación, someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo.

Dicho Reglamento Interno comprenderá:

a) Las medidas necesarias para incorporar a la Dirección de Administración aquellos servicios administrativos de contabilidad de fondos y de presupuesto, liquidaciones, pagos, etc., que actualmente se verifiquen por las reparticiones dependientes del Ministerio, Prefectura, etc.;

b) Los requisitos y condiciones relativas a la habilitación y funcionamiento de «cajas chicas» en las dependencias o divisiones del Ministerio respectivo o de la Dirección General de Correos y Telégrafos o de la Prefectura de Policía;

c) La organización de las tareas de las oficinas dependientes de la Dirección de Administración y lo concerniente al personal de las mismas.

Art. 7.° — Las Direcciones de Administración se organizarán mediante la incorporación del personal administrativo actualmente distribuído en las reparticiones técnicas o administradoras, conforme al apartado *a)* del artículo anterior, y tratando de que la centralización de servicios a efectuarse, represente una economía sobre los gastos actuales.

Art. 8.° — Cada Dirección de Administración se organizará en tres secciones:

1.ª sección: Secretaría;
2.ª sección: Contabilidad;
3.ª sección: Tesorería.

Art. 9.° — El Secretario de la Dirección de Administración tendrá a su cargo:

a) El despacho general de la Dirección y el registro de las disposiciones legales;

b) El estudio y despacho de las licitaciones públicas y privadas, y de los contratos que se celebren.

Art. 10. — La Sección Contabilidad tendrá a su cargo:

a) Liquidación e intervención de pagos;

b) Intervenir los cheques que extienda el Tesorero;

c) Observar las órdenes que no se ajusten a las disposiciones legales pertinentes, o que carezcan del crédito a que deban imputarse;

d) Practicar los asientos y formular las cuentas de cargo que correspondan;

e) Llevar un archivo prolijamente catalogado de todas aquellas leyes, decretos y resoluciones que se refieran a gastos;

f) Efectuar las liquidaciones de sueldos, jornales y gastos;

g) Llevar un libro de altas y bajas del personal;

h) Llevar el registro de embargos de sueldos, etc., y conservar el archivo de los oficios judiciales que los disponen conforme a lo establecido por el Acuerdo de Ministros de 14 de febrero próximo pasado;

i) Llevar el registro de poderes y mandatos, para certificar los documentos de crédito;

j) Anotación y contralor de todo movimiento de fondos y especies del Ministerio o Prefectura, etc., para lo cual llevará las siguientes contabilidades:

1.° De previsión;

2.° De presupuesto;

3.° De movimiento de fondos;

4.° De cargos; y

5.° Patrimonial;

Art. 11. — El Tesorero de la Dirección de Administración tendrá a su cargo los fondos asignados al ministerio o repartición, por la ley de presupuesto, leyes especiales, etc., y los provenientes de todo otro ingreso permanente o eventual, así como también los demás valores en títulos, etc. (En el Departamento de Hacienda quedan excluídos los ingresos de las administraciones que tienen a su cargo la recaudación de las rentas generales de la Nación).

Todos los fondos se hallarán depositados en el Banco de la Nación, a la orden conjunta del Director de Administración, Contador y Tesorero, excepto las cantidades que para pagos urgentes este último pueda reservar en efectivo en caja, según lo reglamente el Ministerio, previa conformidad de la Contaduría General de la Nación.

Los pagos de facturas a proveedores se efectuarán preferentemente mediante cheques a la orden, y por el mismo procedimiento se optará en todos los demás casos, siempre que sea posible.

Art. 12. — Será obligación especial del Tesorero:

a) Exigir la documentación legal y fehaciente para realizar los pagos;

b) No dar curso a los documentos que carezcan de la previa intervención de la Contaduría de la Dirección, tanto para las operaciones de ingreso como de egreso;

c) Efectuar el balance diario de la Tesorería una vez cerrado el horario de pagos, y remitir en el día la documentación a la sección Contabilidad;

d) No efectuar descuento alguno en los haberes del personal, excepto los necesarios al cumplimiento de las Leyes números 4.349, 9.511 y 10.676, y depositar dentro de los diez días después del pago mensual de sueldos, los descuentos efectuados en tal virtud.

Art. 13. — El Tesorero no podrá recibir en custodia, ni en carácter privado, dinero, documentos o valores de ninguna especie que no sean de propiedad del Estado, o sometidos a su administración.

CAPITULO II

De las delegaciones de la Contaduría General de la Nación

Art. 14. — A los efectos del cumplimiento de las disposiciones que le encomienda la ley de contabilidad, la Contaduría General de la Nación mantendrá en cada Dirección de Administración una delegación, constituída por un Jefe y el personal auxiliar necesario.

Art. 15. — Cada Delegación de la Contaduría General deberá ejercer una intervención amplia y permanente en la contabilidad y movimiento de fondos o valores, desempeñando con respecto al Ministerio o Prefectura, etc., análogas funciones a las que la Ley de Contabilidad señala a la Contaduría General con respecto al Poder Ejecutivo. Serán sus funciones:

a) Practicar la liquidación que exige la Ley N.° 428, de las cuentas, facturas o planillas de sueldos que deban abonarse con fondos provenientes de la Tesorería General de la Na-

ción; que expresará el nombre de la persona o entidad a cuyo favor se extiende, la cantidad, la causa u objeto y la imputación;

b) Observar toda autorización de gastos que no se ajuste a las disposiciones que le sean pertinentes, y producida la observación, darle curso únicamente previa insistencia del Ministerio del ramo o del Jefe superior de la repartición de la cual dependa la Dirección de Administración respectiva. Insistido un pago o autorización observada, lo comunicará de inmediato a la Contaduría General de la Nación;

c) Vigilar que se realice diariamente el balance de la Tesorería de la Dirección de Administración;

d) Dar conformidad a los pedidos numéricos de fondos mensuales, cuidando especialmente que se hayan efectuado en tiempo las devoluciones que correspondan de los fondos retirados de la Tesorería General de la Nación, sea por lo percibido por cuenta de la orden anual de pago o de las órdenes de pago mensuales. En caso de disconformidad informará sucinta y claramente la causa o motivo;

e) Vigilar que mensualmente, una vez liquidadas por ella las planillas de sueldos, se efectúe puntualmente el pago a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles de los aportes que a ésta correspondan;

f) Practicar las liquidaciones de las cuentas, facturas, etc., con cargo de solicitar fondos al Honorable Congreso, debiendo comprobar previamente los siguientes puntos: 1) autorización para realizar el gasto; 2) documentos que justifiquen su realización; 3) imputación que hubiere correspondido dentro del ejercicio respectivo y existencia de saldo suficiente; y 4) causa que impidió la imputación en oportunidad;

g) Arqueos.

CAPITULO III

De las órdenes de pago

Art. 16. — Las órdenes de pago guardarán uniformidad en su presentación y se dividirán en tres clases:

a) Anuales;
b) Mensuales;
c) Especiales.

Las direcciones de administración, al confeccionarlas, deberán:

1.° Numerarlas correlativamente, cualquiera sea su naturaleza, e inscribir al lado del número el «Ejercicio» a que correspondan;
2.° Expedirlas protegidas de una carpeta o cubierta que asegure su buena conservación, en la cual inscribirán, bajo firma, un Resumen de imputaciones en la siguiente forma:

Presupuesto	$	.....
Leyes Especiales	»	.....
Acuerdos de Ministros	»	.....
Cuentas Especiales	»	.....
Devolución Valores Retenidos	»	.....
Devolución de Derechos	»	.....
Total	$	.....

.....
Contador

Ordenes de pago anuales

Art. 17. — Cada Dirección de Administración formulará anualmente una orden de pago por el importe acordado por el Presupuesto General para sueldos, asignaciones de viáticos, movilidad y gastos de representación, gastos menores y alquileres.

La orden de pago anual comprenderá todas las partidas de sueldos y gastos a que se hace referencia precedentemente, correspondientes a las diversas reparticiones, oficinas, etc., dependientes o pertenecientes a la jurisdicción de cada Dirección de Administración.

Art. 18. — Toda orden anual de pago será extendida en detalle y de acuerdo con lo asignado, por mes, en cada ítem o partida del Presupuesto General que por su concepto deba incluirse en ella. Se confeccionará de acuerdo al siguiente:

MODELO

Ministerio
de
.....

Buenos Aires, ... de ..... de 19..

Modelo de pago anual N.° .....

La Tesorería General de la Nación, previa intervención de la Contaduría General de la Nación, abonará a la Dirección de Administración de ..... la cantidad de: Ciento cincuenta mil pesos moneda nacional ..... ($ 150.000 m/n.) ..... en concepto de sueldos y gastos mensuales correspondientes al año 19.. .

El importe total de la presente Orden anual se imputará a las partidas del Presupuesto General que a continuación se indican:

Anexo.....			Crédito mensual asignado por Presupuesto General
Inciso	Item	Partida	
5	1	.....	.....
.....	.....	.....	12.000.—
14	6	2	500.—
.....	.....	.....	.....
	Total al mes.....		12.500.—
	Total al año.....		150.000.—

(Firma del Presidente): .....

(Firma del Ministro): .....

Buenos Aires, ... de 19...

Páguese MENSUALMENTE, por cuenta de la presente orden de pago, la cantidad de doce mil quinientos pesos moneda nacional ($ 12.500 m/n.), a la Dirección de Administración de .....
.....

.....

(Firma del Ministro de Hacienda)

Art. 19. — Extendida y tramitada la orden anual conforme a la práctica usual, y con la autorización de pago firmada por el Señor Ministro de Hacienda, la Contaduría General de la Nación procederá a su imputación y la reservará en la Sección Intervención.

Sobre esta orden se girará mensualumente por medio de pedidos numéricos de fondos que formulará la Dirección de Administración del ramo, con el conforme de la Delegación respectiva de la Contaduría General. La conformidad de la delegación versará: 1.°, sobre el monto numérico del pedido; y 2.°, si se han rendido las cuentas anteriores en base al plazo especificado y devuelto los sobrantes que correspondan de duodécimas precedentes.

El «formulario» del pedido de fondos por cuenta de la orden anual de pago, expresará el número de ésta y contendrá además el número, fecha e importe total del asiento de imputación efectuado por la Contaduría General de la Nación. Se presentará en la Sección Intervención de dicha repartición, y sólo se le dará curso cuando se haya efectuado la devolución del sobrante que corresponda de las duodécimas anteriores, por lo menos el día hábil precedente al pedido de fondos y rendido las cuentas anteriores pertinentes.

El formulario de extracción de fondos versará sobre el importe duodecimal exacto de la orden anual de pago, con indicación, además del importe de la planilla de devolución.

La extracción de fondos será autorizada por uno de los Contadores Mayores de la Contaduría General de la Nación.

Autorizada la extracción, la Tesorería General de la Nación extenderá el cheque a la orden de la Dirección de Administración respectiva, el que, previa intervención de la Contaduría General, se entregará al Tesorero, quien otorgará recibo por duplicado: «original», en la orden de pago anual que a este objeto se remitirá a Tesorería General, y «duplicado» (haciéndolo constar así) en el formulario de pedido de fondos que constituirá el documento de descargo para esta última.

Ordenes de pago mensuales

Art. 20. — Independientemente de la orden anual, cada Dirección de Administración formulará mensualmente una orden de pago que comprenda:

a) Las cantidades necesarias para atender liquidaciones o pedidos de fondos contra las devoluciones que previamente se hayan efectuado;

b) Las cantidades necesarias para efectuar adquisiciones o gastos no comprendidos en los «gastos mensuales», que se hayan autorizado y estén en vía de ejecución, y siempre que los pagos a efectuar por su motivo, a cada acreedor, no exceden de $ 5.000 moneda nacional y deban por consiguiente verificarse por la Tesorería respectiva.

Art. 21. — La Dirección de Administración preparará las órdenes mensuales de pagos para provisión de fondos destinados a abonar sueldos atrasados, diferencias, gastos diversos, etc., cuyo abono deba realizarse por la misma por sumas que no excedan de pesos 5.000 moneda nacional, especificando el detalle de las cantidades que se soliciten por cuenta de cada inciso, ítem o partida del Presupuesto.

Tales órdenes mensuales llevarán la conformidad de la Delegación de la Contaduría General de la Nación, la que comprobará la necesidad de efectuarse las inversiones por los montos que se soliciten, manifestando su disconformidad si la hubiere.

Ordenes de pago especiales

Art. 22. — Las órdenes especiales de pago se formularán en cualquier época del año, para atender aquellos pagos que deban verificarse por intermedio de la Tesorería General de la Nación, Embajadas en Londres o en Wáshington, etc.

En estas órdenes, en general, se incluirán las adquisiciones, obras, gastos, etc., que excedan de pesos 5.000 moneda nacional y todas aquellas erogaciones no comprendidas en lo dispuesto para las órdenes de pago «anuales» o «mensuales».

Art. 23. — Las órdenes de pago especiales, divididas en parciales numerados, uno por cada acreedor, se confeccionarán incluyendo ordenadamente un determinado género de pagos, como ser: pasajes, devoluciones de derechos, suministros, certificados de obras, etc., lo que se anotará en su carpeta, en el renglón «Concepto».

Disposiciones generales

Art. 24 — Toda percepción de fondos que, por cualquier concepto, efectúen directamente las reparticiones u oficinas nacionales —con excepción de las administraciones de rentas— se hará otorgando recibo a los interesados, uno por cada suma recibida; cuyos recibos sólo podrán extenderse en los formularios que proveerá la Contaduría General de la Nación, en talonarios sellados por la misma.

Art. 25 — La responsabilidad de todo pago, o entrega de especies, es solidaria entre el superior que lo ordena y el Contador, Habilitado o Ecónomo que lo ejecuta, o quienes ejercieron estas funciones; pero cuando el o los inferiores hayan dejado constancia escrita de su observación, cesará para ellos toda responsabilidad, pesando sobre el funcionario superior respectivo que insista en el cumplimiento de la orden.

Art. 26. — Los tesoreros habilitados y pagadores de cualquier dependencia u oficina de la Administración Nacional no podrán desempeñar cargos análogos en asociación alguna, aun cuando éstas funcionen con autorización del Poder Ejecutivo, ni encargarse de subscripciones o cobranzas de cuotas de ningún género. Tampoco podrán efectuar descuento alguno en los haberes del personal, salvo aquellos que determinan las Leyes Nos. 4.349, 9.511 y 10.676.

Art. 27. — Los depósitos por embargos de sueldos y créditos hipotecarios se realizarán indefectiblemente dentro de los diez días subsiguiente al pago mensual de haberes.

Art. 28. — La Caja Nacional de Jubilaciones y Pesiones Civiles no realizará pagos directos ni a empleados, ni a dependencias nacionales, tanto en la Capital como en el interior, en concepto de devoluciones, etc., debiendo en todos los casos ingresar en Tesorería General de la Nación, los fondos pertinentes.

Exceptúanse de este procedimiento a las reparticiones autónomas que mantengan relaciones directas con la Caja Nacional de Jubilaciones.

Art. 29. — Sin perjuicio de las disposiciones sobre rendiciones de cuentas, contenidas en la Ley de Contabilidad, las de las Direcciones de Administración se ajustarán a las siguiente reglas:

1.° Cada rendición de cuentas se formará comprendiendo todas las partidas recibidas, pagadas o devueltas en cada mes, por cualquier concepto que fueren;

2.° Se confeccionarán agrupando las inversiones que correspondan a cada ítem (para los sueldos) y a cada partida (para los gastos), con un balance parcial por cada uno;

3.° El Balance General consignará los saldos anteriores detallados, si los hubiere; lo recibido, lo pagado o devuelto y los saldos detallados que pasan a la rendición subsiguiente. En lo restante, los modelos se ajustarán a las instrucciones de la Contaduría General de la Nación;

4.° El plazo para la presentación de la rendición de cuentas correspondiente a cada mes será de treinta (30) días a contar de la expiración del mes a que se refiera la rendición, salvo las excepciones que acuerde la Contaduría General de la Nación.

Art. 30. — Independientemente de dichas rendiciones de cuentas, cada Dirección de Administración formulará mensualmente un balance de cargos y descargos ante la Contaduría General de la Nación, que será entregado a la Delegación de ésta durante los primeros cinco días del mes subsiguiente a aquel a que corresponda el balance. El modelo de éste se ajustará a las instrucciones de la Contaduría General.

Art. 31. — Los «formularios» de pedidos de fondos, sea que correspondan a la orden anual de pago o bien a las órdenes mensuales, serán solicitados en cada caso a la Delegación de la Contaduría General, quien los extenderá y hará las anotaciones pertinentes en el respectivo talón.

Art. 32. — Los giros a reparticiones en el interior de la República se harán siempre a la orden conjunta de dos funcionarios.

Las cuentas corrientes oficiales que dichas reparticiones tengan en el Banco de la Nación deberán asimismo intituirse a «orden conjunta».

Art. 33. — Queda autorizada la Contaduría General de la Nación, para encomendar a los Subcontadores Fiscales de su depen-

dencia el examen de cuentas a que se refieren los artículos 61 y correlativos de la Ley de Contabilidad, cuando las necesidades del servicio así lo requieran. Las comisiones de esta naturaleza no darán derecho, al Subcontador fiscal que las desempeñe, a percibir otra remuneración que la que corresponda a su empleo según el Presupuesto General.

Sin perjuicio de lo autorizado precedentemente, la Contaduría General de la Nación, en los casos a que se refiere el Acuerdo de Gobierno de 25 de enero de 1894, podrá proponer a otros empleados de su dependencia o de la Administración Nacional, para actuar como Contadores Fiscales *ad-hoc,* previo nombramiento del Poder Ejecutivo en cada caso.

Art. 34. — La Contaduría General de la Nación propenderá a uniformar en todo lo posible los libros, formularios, denominaciones de cuentas, etc., en todas las Direcciones de Administración, conforme al plan de contabilidad que propondrá oportunamente.

Art. 35. — Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y al Registro Nacional, y pase a la Contaduría General de la Nación.

URIBURU. — Enrique Uriburu. — Octavio S. Pico. — Ernesto Bosch. — Guillermo Rothe. — Francisco Medina. — Carlos Daireaux. — David M. Arias. — Pablo Calatayud.

———*———

Decreto N.° 61.924 del 7 de mayo, aprobando el reglamento interno proyectado por la Dirección General de Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

Buenos Aires, 7 de mayo de 1940.

Visto el adjunto proyecto de reglamento interno de la Dirección de Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, y,

CONSIDERANDO:

Que en virtud de lo que establece el Acuerdo de Ministros de 14 de julio de 1931, se dió vista del mismo oportunamente a la Contaduría General de la Nación, quien sugirió diversas modificaciones y aclaraciones que han sido debidamente tenidas en cuenta, según constancias de fojas 1 a 11, inclusive del expediente N.° 3.380 1. 1939, sobre el que se ha pronunciado nuevamente la repartición mencionada, aceptándolas en general, en su nueva forma, con excepción de la parte que se refiere al funcionamiento que debe reemplazar al Director de Administración en los casos de ausencia temporal del mismo, punto éste acerca del cual no ha habido coincidencia de opiniones entre la Dirección de Administración y la Contaduría General.

Que el Acuerdo de 14 de julio de 1931, que creó las Direcciones de Administración, no ha establecido que deba seguirse una modalidad expresa en todos los casos.

Que en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública, por la gran cantidad de dependencias a quienes debe asesorar constantemente la Dirección de Administración, sobre asuntos de Contabilidad; cierre de ejercicios; manejo de fondos; liquidaciones; ren-

diciones de cuentas; etc., etc., es indispensable que esté permanentemente al frente de la misma un funcionario técnico en la materia.

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.° — Apruébase el reglamento interno adjunto, que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6.° del Acuerdo de Ministros de 14 de julio de 1931, proyectó la Dirección de Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, debiendo introducirse en su relación definitiva, las modificaciones a que se refiere el expediente N.° 3.380 - D - 939, de dicho Departamento, que obra agregado, manteniéndose en la forma proyectada la parte que se refiere al funcionario que debe reemplazar al Director en los casos de ausencia temporal de éste, que se establece en el artículo 5.°, título 4.°, capítulo 1.° del proyecto.

Art. 2.° — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

ORTIZ.
JORGE EDUARDO COLL.

———*———

Reglamento de la Dirección General de Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

CAPITULO I

De la Dirección General de Administración

Artículo 1.° — De conformidad con lo determinado por el Acuerdo de Gobierno de 14 de julio de 1931, la Dirección General de Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública se regirá por el siguiente reglamento:

TITULO I

De la competencia de la Dirección

Art. 2.° — Corresponde a la Dirección General de Administración:

a) La gestión, percepción, distribución, inversión y contralor de los fondos asignados al Ministerio y sus dependencias por la ley general de presupuesto, cuentas especiales, leyes y acuerdos de gobierno;

b) Preparar el anteproyecto anual del presupuesto de gastos y recursos del Departamento y establecer en cada caso, en su articulado, el régimen de las cuentas especiales;

c) Formular las órdenes de pago anuales, mensuales y especiales por sueldos y gastos;

d) Recibir los ingresos provenientes de las recaudaciones que por distintos conceptos perciban las dependencias del Departamento, disponiendo las correspondientes acreditaciones y ejercer el contralor de aquellas que se efectúan en papel sellado o estampillas fiscales;

e) Reglamentar el procedimiento que los responsables ante la Dirección General de Administración, deben seguir para la presentación de sus respectivas fianzas, de sus planillas de sueldos, pedido de liquidación de los mismos o pedidos de fondos para gastos, la inversión y contabilización de los fondos que reciban a tal efecto y su rendición de cuentas, de conformidad a las leyes y disposiciones vigentes;

f) Preparar las licitaciones públicas, privadas y concursos de precios relativos a adquisiciones, ventas y contratación de servicios que deban realizar el Ministerio y sus dependencias, de acuerdo a sus necesidades y en concordancia con lo que en cada caso corresponda por su monto, dando la intervención pertinente a la Contaduría General de la Nación;

g) Expedir las órdenes de pasajes y fletes con sujeción a las disposiciones que rigen para su otorgamiento;

h) Informar y requerir directamente de las distintas dependencias o reparticiones, los asuntos y antecedentes que fuesen necesarios para el mejor desenvolvimiento de la Dirección;

i) Proyectar las reglamentaciones que correspondan a las adquisiciones en general, ya se trate de hacerlo mediante licitaciones públicas, privadas o concursos de precios; registro de proveedores; formalidades para la intervención de la División Secretaría: apertura de las respectivas propuestas; otorgamiento de pasajes; asignaciones de viáticos y movilidad; reintegro de gastos por servicios en horas extraordinarias; remuneraciones por trabajos especiales, o accidentales que encomendase el Ministerio, etc.;

j) Proyectar los decretos o resoluciones relativos a la locación de edificios para sede de las dependencias del Departamento, aprobando los contratos respectivos o fundamentando, en cada caso, las razones de su exclusión;

k) Llevar las contabilidades de previsión, presupuesto, movimiento de fondos, cargos y patrimonial;

l) Rendir cuenta a la Contaduría General de la Nación, en los plazos y forma que lo determina el Acuerdo de creación

de las direcciones de administración o de las reglamentaciones que en lo sucesivo se dictasen;

m) Llevar el debido contralor de las recaudaciones correspondientes a derechos de exámenes, en lo que respecta a la distribución entre los profesores examinadores que autoriza la ley de presupuesto general vigente, para lo que deberá solicitar en oportunidad, las acreditaciones que correspondan a la cuenta especial respectiva y proyectar las órdenes de pago que deben imputarse a la misma;

n) Preparar y elevar la memoria anual correspondiente a la Repartición;

o) Efectuar el pago de haberes y gastos de las distintas reparticiones del Ministerio, y el de suministros o servicios que no excedan de $ 5.000 m/n. de conformidad con lo dispuesto por el S. Acuerdo de 14 de julio de 1931;

p) Exigir de los responsables ante la Dirección General de Administración, la rendición de cuentas dentro de los plazos y de conformidad a las disposiciones vigentes, pudiendo disponer la suspensión de la liquidación de los haberes de quienes no rindieran cuenta a satisfacción o retuvieran en su poder fondos que debieran ser ingresados en plazos preestablecidos, todo ello sin perjuicio de solicitar del señor Ministro la aplicación de otras penalidades en casos especiales o cuando el hecho estuviese comprendido entre los que las disposiciones legales califican de delito.

TITULO II

De la organización de la Dirección

Art. 3.° — Los distintos servicios de la Dirección General de Administración estarán a cargo de los siguientes funcionarios:

1.° Del Director;
2.° Del Contador;
3.° Del Secretario;
4.° Del Tesorero;
5.° Del Jefe de Suministros.

TITULO III

Del Director

Art. 4.° — Es su función primordial, la de velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo del Gobierno del 14 de julio de 1931, Ley N.° 428 y disposiciones complementarias y de este reglamento, en lo que respecta a la buena marcha de las finanzas del Departamento.

Le corresponde, en consecuencia:

1.° Asumir la responsabilidad de las finanzas del Departamento no pudiendo comprometer ni dar curso a gastos sin que existan créditos a los cuales deban imputarse, ni autorizar pagos sin tener disponibles en Tesorería, los fondos pertinentes. A este fin, tomará las precauciones necesarias para que las distintas autorizaciones acordadas no sean excedidas en su monto, debiendo dar cuenta inmediatamente al señor Ministro cuando éstos estén comprometidos en su totalidad o puedan agotarse antes de la terminación del año;

2.° Autorizar los pagos a efectuarse por la Tesorería de la Dirección, hasta la suma de cinco mil pesos moneda nacional;

3.° Suscribir, juntamente con el Tesorero y con la debida intervención del Contador, los pedidos de fondos a recibirse de la Tesorería General de la Nación, así como también y en las mismas condiciones, los cheques para extraer fondos de la cuenta general de la Dirección y de las cuentas especiales que, autorizadas por el Ministerio con previo conocimiento de la Contaduría General de la Nación, mantenga en el Banco Central de la República o Banco de la Nación Argentina, no pudiendo ordenarse pagos internos, si la división Tesorería no contase con los fondos a los que deba imputarse el gasto;

4.° Suscribir las órdenes oficiales de pasajes y fletes y disponer la liquidación y pago, en su caso, de las cuentas que se presentan por dichos conceptos;

5.° Vigilar bajo su responsabilidad que sean formuladas sin demora las pertinentes órdenes de pago generales y a favor de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles por el aporte patronal de sueldos del Ministerio, Consejo Nacional de Educación y Universidades, de conformidad con lo que establece la ley general de presupuesto y recabar de la Tesorería General de la Nación la oportuna provisión de fondos, procurando que los importes de las mismas, se hagan efectivos por esa repartición en el orden de sus respectivas fechas, como asimismo que la división Tesorería y los responsables, depositen dentro de los plazos reglamentarios, los descuentos al personal por inasistencias, etc., y los autorizados por el Acuerdo de Ministros de 26 de septiembre de 1932;

6.° Formular en oportunidad, el anteproyecto de presupuesto anual del Departamento, elevándolo a la consideración del señor Ministro;

7.° Disponer el movimiento del personal de la Dirección General;

8.° Disponer las inspecciones administrativas, arqueos de Caja, levantamiento de inventarios y otras medidas conducentes al mejor contralor de la recaudación, inversión de fondos y manejo de especies por las dependencias del Ministerio;

9.° Velar por el buen desempeño de las funciones y disciplina del personal, pudiendo aplicar suspensiones hasta ocho días, directamente o a pedido de los jefes de divisiones, dando cuenta inmediata a la superioridad;

10. Suscribir el despacho general de la Dirección y las comunicaciones que en cualquier forma comprometan la opinión de la misma; circulares, comunicaciones relativas al envío de fondos, transferencias, etc.;

11. Proponer al señor Ministro los ascensos del personal de la Dirección, consultando la opinión de los jefes respectivos, quienes fundamentarán su proposición en base a los antecedentes registrados en las respectivas fojas de servicios;

12. Redactar y elevar, con la colaboración de las distintas divisiones, la memoria de la repartición;

13. Autorizar con su sola firma las adquisiciones directas que no excedan de $ 300 m/n., destinadas a la Repartición; las que fuesen requeridas en las mismas condiciones, por otras dependencias del Ministerio que no tengan manejo de fondos o asignaciones expresas de partidas en el presupuesto general; los gastos de Caja Chica y las excepciones que autoriza el Acuerdo de Ministros del 21 de diciembre de 1933, para efectuar compras por mayor valor de $ 20 en casos de urgencia;

14. En salvaguardia de la responsabilidad que le impone el artículo 5.°, inciso 6.° del Acuerdo de fecha 14 de julio de 1931, estará obligado a hacer notar a la superioridad cuando se le ordenase comprometer un gasto, si a su juicio resultara contrario a disposiciones legales o reglamentarias, ya sea por no existir fondos disponibles, por no corresponder su imputación o por no haberse cumplido los requisitos que se establecen en este reglamento como régimen de adquisiciones, etc.;

15. Deberá insistir por escrito, a su vez, cuando la objeción hubiese sido hecha por el Contador si creyera que no corresponde;

16. Deberá asimismo, informarse diariamente de la situación de la Tesorería y con la mayor frecuencia, del estado de las distintas contabilidades, exigiendo a los respectivos jefes de división, la presentación de balances y cuadros demostrativos que estimase necesarios, sin perjuicio de las verificaciones directas, arqueos o contralores de otra clase que juzgase oportuno hacer o disponer en cualquier momento;

17. Exigirá a la división Contaduría el más frecuente contralor de las cuentas de responsables y su concordancia con las existencias de fondos en el Banco, denunciadas en las hojas de la contabilidad, llamadas Balance General de Cargos y Descargos, que deben venir certificadas por dicha institución y por el jefe de la dependencia; el mantenimiento

al día de sus rendiciones de cuentas a la Dirección y de las que deben elevarse a la Contaduría General; y en general la vigilancia necesaria para el normal funcionamiento de la división;

18. Informarse de la marcha de la división Secretaría respecto de la tramitación al día de los expedientes, de su vigilancia sobre la asistencia del personal de la Dirección General de Administración y en general de los asuntos que por este reglamento corresponda a dicha división atenderlos;

19. Disponer, previo informe de la división Contaduría, respecto de la imputación, las adquisiciones y gastos correspondientes a las secciones del Ministerio y sus dependencias, consultando al señor Ministro cuando se tratase de gastos de carácter extraordinario por su monto o naturaleza;

20. Disponer se deduzca de la respectiva liquidación de haberes, los de aquellos responsables que incurrieran en mora en la presentación de sus rendiciones de cuentas a la Dirección General de Administración, sin perjuicio de otras medidas que estime oportuno tomar la superioridad;

21. Expedir los certificados de sueldos del personal del Ministerio, a solicitud del mismo dentro de las condiciones que se reglamentarán independientemente con aprobación del señor Ministro;

22. Ordenar la devolución de los depósitos de garantía de licitaciones;

23. Representar al Ministerio, por designación del señor Ministro o por decreto, según corresponda:

a) En la firma de escrituras o contratos por adquisición de inmuebles, locación de edificios para sede de dependencias del Ministerio, aceptación de donaciones, legados, etc.;

b) En conferencias o reuniones, a invitación de otros departamentos de Estado o provinciales por asuntos de orden administrativo, económico y financiero, y de entidades u organismos cuya finalidad sea la de estudiar

el mejoramiento y solución de cuestiones de ese carácter coadyuvando con los poderes públicos, que hayan solicitado al Ministerio la concurrencia de un representante del mismo;

c) En las comisiones del Honorable Congreso de la Nación por asuntos relacionados con el estudio y discusión de los proyectos presentados por el Ministerio en materia de presupuesto o de leyes.

TITULO IV

Del Contador

Art. 5.° — El Contador es el Jefe de la división Contaduría y reemplazará al Director en los casos de ausencia accidental, licencia o acefalía, con todas las responsabilidades y atribuciones de éste.

A su vez, el Contador será reemplazado, sólo en sus funciones de tal, por el empleado que designe el Ministerio a propuesta de la Dirección.

Le corresponde:

1.° Velar por el buen funcionamiento de la división mediante una adecuada organización de sus servicios;

2.° Llevar las contabilidades establecidas por el Acuerdo de creación de las direcciones de administración: de previsión, de presupuesto, de movimiento de fondos, de cargos y patrimonial;

3.° Formular las órdenes de pago anuales, mensuales y especiales por los fondos correspondientes a los sueldos y gastos del Ministerio y sus dependencias que deban ser abonados por la Dirección General de Administración; las que correspondan ser abonadas directamente por la Tesorería General de la Nación; y las de transferencias o sean aquéllas por las cuales se disponen imputaciones con créditos simultáneos a presupuestos, cuentas especiales, leyes y acuerdos;

4.° Formular las liquidaciones para el pago de sueldos, jornales, gastos, adquisiciones, etc., —determinando su imputación—, que deban ser abonadas por la división Tesorería,

las que una vez firmadas por el Director, deberá remitir a la Delegación de la Contaduría General a los efectos de la intervención que le corresponda, cuidando que las entregas, depósitos y giros a favor de responsables, sean hechos a la orden conjunta de dos funcionarios, salvo aquellos casos en que se haga a la orden de magistrados judiciales;

5.° Intervenir todo el movimiento de ingresos y egresos de fondos y valores de la división Tesorería.

6.° Examinar y conformar diariamente, el balance de la división Tesorería y hacerse cargo de la documentación;

7.° Hacer notar por escrito al Director, so pena de la responsabilidad en que incurriría si así no lo hiciera, respecto de cualquier compromiso o inversión que se hubiese contraído o dispusiera, contrariando disposiciones legales o reglamentarias;

8.° Informar al Director acerca del estado de los créditos cuando calculase, antes de la terminación del ejercicio, que los saldos disponibles pudiesen resultar insuficientes para atender compromisos futuros en la misma proporción que los contraídos hasta la fecha de su verificación;

9.° Efectuar periódicamente arqueos en la división Tesorería, por sí o por disposición del Director, y aconsejar a la Dirección los que fuesen necesarios realizar en las dependencias de la Capital y del interior, informando sobre el resultado de los arqueos realizados por los inspectores administrativos;

10. Intervenir, a los efectos de su contralor y correspondiente registración en la contabilidad preventiva, las órdenes oficiales de pasajes y fletes que por disposición de la Dirección, hubiesen sido extendidas por la división Secretaría, para ser firmadas por el Director;

11. Tomar las medidas pertinentes, para que no se excedan los plazos reglamentarios dentro de los cuales deben ser efectuados los ingresos a la Tesorería General; depósitos a

favor de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, del Banco Hipotecario Nacional, réditos y judiciales;

12. Formular mensualmente y dentro de los plazos reglamentarios, las órdenes de pago a favor de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, por el importe del aporte patronal sobre los sueldos del Departamento, como igualmente, las que correspondan en virtud de lo establecido por la ley general de presupuesto y en base de las planillas que deben presentarse a ese efecto, sobre los sueldos del personal dependiente del Consejo Nacional de Educación y universidades nacionales;

13. Colaborar con la Delegación de la Contaduría General de la Nación en las tareas de iniciación y mantenimiento de las fichas individuales por altas y bajas de todo el personal del Ministerio y sus dependencias, a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el inciso *g)*, artículo 10, del Acuerdo de Ministros de fecha 14 de julio de 1931;

14. Llevar los siguientes registros:
   a) De poderes y mandatos referentes a créditos que deban abonarse por la división Tesorería;
   b) De embargos de sueldos, conservando debidamente archivados los oficios respectivos;
   c) De créditos a favor de acreedores del Ministerio;
   d) De descuentos a favor del Banco Hipotecario Nacional, para cumplimiento de la Ley N.° 10.676;
   e) De deudores en gestión (Acuerdo de Gobierno de fecha 3 de octubre de 1934);

15. Llevar un archivo de leyes, decretos y resoluciones que tuvieran atingencia con sus funciones;

16. Preparar los antecedentes numéricos para la confección del anteproyecto de presupuesto anual del Departamento;

17. Suministrar las planillas de cargos de los responsables a los efectos de la realización de arqueos que dispusiese la Dirección o la Contaduría General;

18. Informar los expedientes que siendo de su competencia, le fuesen remitidos por la Dirección proyectando al mismo tiempo la providencia del Director que corresponda;

19. Presentar anualmente a la Dirección, la memoria de la División;
20. Someter a la firma del Director, las notas o telegramas reclamando de los responsables morosos la remisión de sus rendiciones de cuentas y aconsejar, en los casos que así proceda, se solicite de la Contaduría General de la Nación, la adopción de las medidas de apremio establecidas en el artículo 60 de la Ley N.° 428;
21. Procurar, en lo posible, la centralización de los pagos por la división Tesorería, aconsejando a tal efecto, la asignación de Cajas chicas en las dependencias del Departamento;
22. Llevar las fichas individuales del personal de la división y el registro de sus domicilios;
23. Vigilar el buen desempeño de las funciones y disciplina del personal; informar acerca de la oportunidad de sus licencias; aconsejar reservadamente las promociones que a su juicio correspondan; proponer las medidas disciplinarias que estimase oportunas según los casos, como así también, las anotaciones especiales, en sus fichas individuales, del concepto a que se hubiese hecho acreedor;
24. Presentar mensualmente al Director, los balances de las distintas contabilidades a su cargo;
25. Formular la rendición de cuenta mensual a elevarse a la Contaduría General de la Nación, en las condiciones establecidas en el artículo 29 del Acuerdo de Gobierno de fecha 14 de julio de 1931 y disposiciones del Acuerdo de Ministros de 10 de febrero de 1932, remitiendo una copia del balance a la Delegación de la Contaduría General, cumplimentando así lo dispuesto por el artículo 30 de dicho Acuerdo;
26. Formular cargo a la división Tesorería, por los depósitos de garantía de licitaciones, efectuados a favor de la Dirección General de Administración, interviniendo en sus devoluciones;
27. Intervenir, a los efectos de la contabilidad patrimonial, la entrada y salida de especies en base a los inventarios determinados por el Superior Acuerdo de 10 de febrero de 1932 y demás disposiciones vigentes;

28. Hacer rubricar, sellar y numerar por el Delegado de la Contaduría General los libros y hojas movibles de la contabilidad, antes de registrar en ellas las operaciones respectivas. Sin perjuicio de la intervención que le corresponde a la división Secretaría en virtud de lo que establece el artículo 9.°, apartado *b)* del Acuerdo del 14 de julio de 1931, el Contador podrá efectuar las verificaciones que estime pertinentes en los expedientes de licitaciones públicas, privadas y concursos de precios que realice la Dirección General de Administración;

29. Intervenir todo cheque que se libre por la división Tesorería.

TITULO V

Del Secretario

Art. 6.° — El Secretario es el Jefe de la división Secretaría, debiendo ser reemplazado en caso de ausencia, sólo en sus funciones de tal, por el empleado que designe el Ministerio a propuesta de la Dirección.

Le corresponde:

1.° Redactar los informes, notas, providencias y resoluciones generales de la Dirección, con excepción de aquéllas, que por su naturaleza, están expresamente confiadas a otra División;

2.° Tomar la intervención que le señala el artículo 9.°, inciso *b)* del Acuerdo del 14 de julio de 1931 y demás disposiciones reglamentarias, en las licitaciones públicas, privadas y concursos de precios realizados por la Dirección, dejando expresa constancia en cada caso, de su conformidad o disconformidad;

3.° Extender las órdenes de pasajes y fletes en base de las autorizaciones del señor Ministro, dando intervención, antes de someterlas a la firma del Director, a la división Contaduría, pudiendo en casos excepcionales de urgencia, dar

curso a las órdenes con autorización escrita del señor Subsecretario o del Director de Administración, si éstos a su vez, la tuvieran verbal del señor Ministro, sin perjuicio de su regularización posterior;

4.° Vigilar el cumplimiento y disciplina del personal a sus órdenes; informar acerca de la oportunidad de sus licencias; aconsejar reservadamente las promociones que a su juicio correspondan; proponer las medidas disciplinarias que estimase oportunas según los casos, como así también, las anotaciones especiales en sus fichas individuales del concepto a que se hubiese hecho acreedor;

5.° Recopilar y archivar ordenadamente las leyes, decretos, resoluciones y antecedentes relacionados con las funciones generales de la Dirección General de Administración, remitiendo copias legalizadas a las restantes divisiones, oficinas y responsables a quienes por la índole de sus tareas les corresponda su conocimiento y aplicación;

6.° Llevar las fichas individuales del personal de la División y el registro de sus domicilios;

7.° Llevar el movimiento y registro general de expedientes por medio de la Mesa General de Entradas y Salidas que dependerá de la división Secretaría;

8.° Someter a la consideración del Director, la memoria general de la Dirección General de Administración en base de los antecedentes suministrados por cada una de las restantes divisiones y de la sección Suministros, incluyendo a la vez, la parte que corresponda a la División a su cargo;

9.° Proyectar las notas, solicitando de las dependencias del Departamento a los efectos de la preparación del anteproyecto anual del presupuesto, el envío de los anteproyectos parciales en base de sus necesidades y ajustándose a las instrucciones que hubiera impartido el Ministerio por intermedio de la Dirección de Administración;

10. Redactar y distribuir las circulares que correspondan ser llevadas a conocimiento de las dependencias debiendo remitirse copias de las mismas a la división Contaduría;

11. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a fianzas del personal del Departamento.

TITULO VI

Del Tesorero

Art. 7.° — El Tesorero es el Jefe de la división Tesorería, siendo reemplazado en los casos de su ausencia accidental, licencia o acefalía por el Subtesorero designado por el Ministerio.

Le corresponde:

1.° La custodia y manejo de los fondos asignados al Ministerio por la ley de presupuesto, leyes especiales, acuerdos de Gobierno y los provenientes de las recaudaciones o de cualquier otro ingreso permanente o eventual a cargo de la Dirección, como así también, de los valores y de los documentos que representen valores;

2.° Depositar, diariamente, todos los fondos que ingresaran a la División, salvo aquéllos que por la hora de su recepción deban serlo necesariamente en el día siguiente, hábil, en la cuenta general de la Dirección General de Administración, o cuentas especiales, abiertas en el Banco Central o Banco de la Nación, a la orden conjunta del Director, Contador y Tesorero;

3.° Efectuar todos los pagos mediante cheques a la orden, firmados por el Director y Tesorero e intervenidos por el Contador;

4.° Efectuar el balance diario de la Tesorería y remitir en el día la documentación completa, justificativa de su movimiento, a la división Contaduría;

5.° No dar curso a los documentos que carezcan de la previa intervención de la división Contaduría de la Dirección, tanto para las operaciones de ingresos como de egresos; (para estas últimas operaciones es condición indispensable la previa liquidación de la Delegación de la Contaduría General de la Nación, siendo personalmente responsable si violase esta disposición);

6.° Examinar, antes de realizar los pagos, los expedientes originales en base de los cuales han sido dispuestos, llamando la atención, verbalmente, de la división Contaduría o de la Dirección, si entendiera que no se han llenado debidamente

los recaudos legales y quedando autorizado para dejar constancia escrita de su discrepancia, si creyera que la omisión de formalidades determinadas puedan implicar para él una responsabilidad;

7.° No efectuar pagos respecto de los cuales no contase con los fondos pertinentes;

8.° No efectuar en los haberes del personal, descuento alguno excepto los determinados en el artículo 12, inciso *d)* del Acuerdo de fecha 14 de julio de 1931 y aquéllos que estuviesen comprendidos dentro de lo establecido por el de fecha 26 de septiembre de 1932;

9.° Efectuar las devoluciones y depósitos correspondientes a descuentos practicados en los sueldos dentro de los diez días a contar de la fecha de recibidos los fondos por la Dirección General de Administración o el saldo de éstos, si se le hubiesen hecho pagos a cuenta;

10. Mantener en Caja, fondos en efectivo que no excedan de la suma de trescientos pesos moneda nacional, para la atención de gastos de urgencia;

11. Llevar las fichas individuales del personal de la división y el registro de sus domicilios;

12. Vigilar por el cumplimiento de las funciones y disciplina del personal; informar acerca de la oportunidad de sus licencias; aconsejar reservadamente las promociones que a su juicio correspondan; proponer las medidas disciplinarias que estimase oportunas según los casos, como así también, las anotaciones especiales en sus fichas individuales del concepto a que se hubiese hecho acreedor.

13. Informar los expedientes que siendo de su competencia le fuesen remitidos, proyectando al mismo tiempo la providencia que corresponda;

14. No recibir en custodia, ni en carácter privado, dinero, documentos o valores de ninguna especie que no sean de propiedad del Estado o sometidos a su administración;

15. Otorgar recibos a los interesados por toda percepción de fondos.

TITULO VII

Del Jefe de Suministros

Art. 8.° — Sin perjuicio de la intervención que le señala a la división Secretaría el Acuerdo del 14 de julio de 1931, por el artículo 9.°, inciso *b)*, la sección Suministros dependerá directamente del Director de Administración.

Dicha sección estará a cargo de un Jefe, quien en los casos de ausencia accidental, licencia o acefalía, será reemplazado por el empleado que designe el Ministerio a propuesta de la Dirección.

Son sus obligaciones:

1.° Preparar con la debida antelación, en base a las nóminas de artículos que remitan a su requerimiento las distintas dependencias del Departamento, las licitaciones públicas y privadas en las condiciones establecidas por la Ley N.° 428, el presente reglamento y toda disposición reglamentaria que se dictase con posterioridad;

2.° Proyectar las resoluciones aprobatorias respectivas, en los expedientes de licitaciones que se hubieran hecho directamente por las reparticiones o dependencias del Ministerio; tramitar los de la misma clase, en los que las reparticiones soliciten autorización para efectuar gastos, y señalar a la superioridad en ambos casos, los defectos de forma de que pudiesen adolecer los mismos, dando a la división Secretaría la intervención que le corresponda por el presente reglamento;

3.° Estar al corriente de los precios o cotizaciones de los artículos de interés para el Ministerio y de sus fluctuaciones o variaciones;

4.° Seguir el desarrollo de la industria del país en la fabricación o elaboración de artículos necesarios al Departamento;

5.° Formar el muestrario de los artículos reglamentarios o de tipos adoptados, a fin de que las firmas proponentes, puedan hacer sus ofertas de acuerdo a aquéllos, sin perjuicio de las especificaciones que se expresarán en el pliego de condiciones;

6.° Conocer y observar la producción de los establecimientos-colonias, del Departamento, a fin de que mediante un mayor rendimiento, puedan colocarse los productos que en ellos se elaboran, en otras dependencias del Ministerio;

7.° Tramitar los expedientes de adquisiciones, venta y contratación de servicios, formulando las pertinentes órdenes de provisión o ejecución, que deban ser firmadas por el Director;

8.° Llevar los libros necesarios para la registración de las entradas y salidas de expedientes, de llamados a licitación y un registro de proveedores en las condiciones que se determine en este reglamento.

CAPITULO II

De la División Contaduría

Art. 9.° — La división Contaduría estará constituída por las siguientes secciones, cuyos encargados dependen directamente del Jefe de la División.

TITULO I

De la Sección Teneduría de Libros

Art. 10. — Corresponde a esta sección:

1.° El registro y contralor de todas las operaciones de créditos, recaudaciones, pagos y movimiento de valores y especies del Departamento, para lo cual llevará las contabilidades mencionadas en el artículo 5.°, apartado 2, cuyas hojas serán rubricadas, selladas y numeradas por el Delegado de la Contaduría General, de conformidad a lo establecido en el apartado 28 del mismo artículo:

a) De previsión;

b) De Presupuesto; Leyes Especiales, Cuentas Especiales y Acuerdos de Gobierno;

c) De Movimiento de fondos;
d) De Cargos;
e) Patrimonial.

2.° Presentar al Contador, del 1.° al 5 de cada mes, los estados y balances de las distintas contabilidades a su cargo;

3.° Proyectar los informes, estados y antecedentes que fuesen solicitados a la división Contaduría relativos a las operaciones de las distintas contabilidades o relacionados con las mismas;

4.° Llevar el registro de las propiedades del Departamento y comprobar si se ha dado a la Contaduría General de la Nación, la intervención que le corresponde en virtud de lo establecido por el Acuerdo de Ministros de 30 de diciembre de 1937 y resolución de la misma N.° 2.430 de agosto 31 de 1939;

5.° Suministrar los antecedentes numéricos para la preparación de los anteproyectos de presupuesto, de otros proyectos financieros y de la memoria anual de la División;

6.° Llevar los registros a que se refiere el apartado 14 del artículo 5.°, título IV;

7.° Formular mensualmente las planillas de descuentos por embargos y créditos hipotecarios;

8.° Llevar el archivo de leyes, decretos y resoluciones a que se alude en el apartado 15, artículo 5.°, título IV;

9.° Verificar los balances de rendiciones de cuentas a la Contaduría General de la Nación preparados por la sección Rendición de Cuentas, estableciendo su exactitud y la coincidencia de las cifras consignadas con las anotaciones en sus libros;

10. Intervenir en forma permanente el movimiento general de la Tesorería y controlar, diariamente, los saldos del libro respectivo con el balance de la división Tesorería, haciéndose cargo de toda la documentación que aquélla debe entregarle, examinando su número y contenido;

11. Dar cuenta al Contador cada vez que los créditos de presupuesto, leyes especiales, etc., se hallen comprometidos en su totalidad o estén por agotarse.

Esta sección estará dividida en las oficinas siguientes:

a) Libros;
b) Presupuesto y Ordenes de Pago;
c) Intervención de Tesorería;
d) Despacho General.

Oficina de Libros

Art. 11. — A esta Oficina, como parte integrante de la Teneduría de Libros, le está especialmente encomendado, llevar las contabilidades enumeradas en el artículo 10, apartado 1, sin perjuicio de incorporar los libros que se considerasen convenientes para la mejor organización contable de la oficina.

1.° — *Contabilidad de Previsión:* Esta contabilidad establecida por el Acuerdo de Ministros de 14 de julio de 1931, y reglamentada por los Acuerdos de Ministros de fechas 10 de febrero de 1932 y 31 de diciembre de 1934, tiene por objeto evitar el exceso de compromisos en los gastos con respecto a los créditos autorizados por el presupuesto general, leyes y acuerdos de gobierno y facilitar la obtención de datos relativos a la forma y cantidad en que han sido afectados esos créditos.

Constará de los siguientes libros: un Diario de hojas movibles y Mayores auxiliares.

En el primero, se registrará, como asiento inicial, el destinado a abrir un crédito (en las mismas condiciones que en la contabilidad de Presupuesto), a cada asignación para gastos propiamente dichos o partidas globales de sueldos, autorizada por la respectiva ley anual, leyes o cuentas especiales y acuerdos de ministros, siguiéndole el o los asientos de débito que se refieran a los compromisos fijos y menores que se contabilizarán por su monto anual y aquéllos cuyo monto, también anual, pueda determinarse en forma aproximada, estableciéndose mensualmente su reajuste, en base al importe que en realidad se hubiese comprometido; y diariamente, y en el orden en que fuesen conocidos, los restantes compromisos autorizados.

En los segundos, se abrirá cuenta a cada inciso y partida de gastos, acreditándoseles por el monto acordado y por las diferencias resultantes entre el importe del gasto real y el de la afectación preventiva y debitándoseles por el importe del compromiso o autorización correspondiente.

El saldo disponible de las cuentas, se determinará por cada operación.

A los efectos de las operaciones de débito a que se hace referencia en el artículo anterior, anualmente y en el primer mes del ejercicio de presupuesto, se formulará una planilla especial comprendiendo todos aquellos gastos susceptibles de ser registrados por su monto anual, ya sea por su importe fijo o aproximado.

Dicha planilla, con la conformidad de la Delegación de la Contaduría General de la Nación ante el Departamento, servirá como operación inicial de débito.

Para llenar convenientemente los fines de esta Contabilidad, el trámite de los expedientes que se relacionen con adquisiciones, con exclusión de las licitaciones públicas y de los pasajes y fletes, de que se trata más adelante, será el siguiente:

a) En lo que respecta a las oficinas del propio Ministerio, establecida la necesidad o conveniencia de su realización, se recabará por escrito del señor Director de Administración, la pertinente autorización, para que éste, por sí o previa consulta verbal al señor Ministro, dé traslado del expediente a la oficina de Suministros, para que haga el correspondiente pedido de precios, previo a la aprobación. Cumplido este trámite, pasará el expediente a la división Contaduría acompañando las propuestas correspondientes al concurso o licitación, con la pertinente resolución proyectada, para que, una vez firmada la aprobación por el señor Ministro o el Director de Administración, según corresponda, se registre la afectación en los libros respectivos, dejando a la vez la constancia pertinente, mediante un sello especial, y el visto bueno del Contador;

b) Hecho ello, pasará el expediente nuevamente a la Oficina de Suministros para el trámite ulterior pertinente;

c) En lo que respecta a las restantes dependencias de la Capital o del interior, cuando los gastos excedan de la cantidad de $ 300 moneda nacional, la intervención de la división Contaduría, por la Contabilidad de Previsión, se hará en la forma siguiente:

1.° Primeramente, en base a la autorización del Ministerio y por el costo aproximado, y posteriormente, en base a la aprobación y por el importe real del compromiso;

2.° En los casos en que una orden de provisión librada por la sección de Suministros o autorización del Ministerio a sus dependencias para licitar, debiese quedar sin efecto o reducido su monto, por cualquier motivo, se hará la pertinente comunicación al Director de Administración, quien a su vez, lo pondrá en conocimiento de la división Contaduría para las anotaciones pertinentes.

Las órdenes de pasajes y cargas serán intervenidas del siguiente modo:

a) Cuando sean emitidas por la Dirección General de Administración, la intervención se hará en base a la orden preparada por la división Secretaría para la firma del señor Director y por el monto estimativo del servicio, dejándose constancia de la misma, mediante un sello especial;

b) Cuando sean emitidas por dependencias del Departamento, la intervención se hará por el cálculo aproximado de las órdenes que aquéllas estimasen hayan de emitir durante el mes y cuyo importe registrarán en la planilla que mensualmente deben remitir a la Dirección General de Administración de conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo de de fecha 31 de diciembre de 1934.

La intervención por el valor aproximado de las órdenes ya emitidas, tendrá lugar, en base a la planilla mensual de las dependencias correspondiente al mes subsiguiente, en cuyo columnado especial, se harán las pertinentes rectificaciones con relación a la anterior.

Por las cuentas presentadas por las empresas de transporte para su liquidación y pago, se practicará la rectificación definitiva que corresponda, dejándose constancia de ello mediante un sello especial;

c) Cuando los señores jueces letrados de los Territorios nacionales, soliciten autorización, de conformidad al decreto de fecha 11 de abril de 1932 para expedir órdenes de pasajes,

indicando el número correlativo de la orden a utilizarse, la intervención se practicará en base a la autorización acordada, calculando el valor aproximado del servicio, cuyo reajuste definitivo tendrá lugar en oportunidad de la presentación de las cuentas o facturas por las empresas, en la que se dejará la misma constancia mencionada precedentemente.

Se practicará mensualmente un balance de sumas y saldos de la Contabilidad.

La intervención por esta Contabilidad en los expedientes por licitaciones públicas, será la siguiente:

a) Cuando la licitación se proyecte por la sección de Suministros de la Dirección General de Administración, esta oficina remitirá al Director de Administración una planilla-resumen, por duplicado, en la que se establecerá el valor estimativo a que ascenderían los artículos a adquirirse, discriminada por incisos, ítem, y partidas.

El Director enviará las mismas, con su visto bueno a la división Contaduría a los efectos de que sea comprobada la disponibilidad de saldos y se efectúen las registraciones previas del caso, debiendo esta división devolver el original a la sección de Suministros, con la constancia del saldo disponible y de la afectación, si correspondiese, del gasto a realizarse, reservando el duplicado para su constancia.

Aprobada la licitación, la planilla-resumen original a que se ha hecho referencia precedentemente, será remitida otra vez por la sección de Suministros a la división Contaduría, por intermedio de la Dirección, junto con la copia legalizada del acuerdo o decreto aprobatorio de aquélla, consignando en columnas especiales, el monto real de las adjudicaciones y las diferencias resultantes en base al valor que se estimó; planilla-resumen esa, que quedará en poder de la división de Contaduría.

La sección de Suministros, por intermedio de la Dirección, llevará a conocimiento de la división Contaduría cualquier diferencia que surgiese entre lo adjudicado y lo proveído, que modificase la afectación o disponibilidad de las partidas;

b) Cuando por razones de lugar o distancia, se haga necesario que alguna repartición o dependencia licite directamente la provisión de determinados artículos, esta deberá solicitar del Ministerio con la pertinente anticipación, se la autorice a ello, indicando al mismo tiempo el valor estimativo a que ascendería la provisión, que una vez autorizada servirá de base para que se practique en la Contabilidad de Previsión, la correspondiente afectación.

Dictado el acuerdo aprobatorio de las adjudicaciones, se dará intervención nuevamente a la división Contaduría, para que se proceda a su afectación definitiva;

c) La intervención por esta contabilidad en toda designación de personal con imputación a partidas globales de presupuesto, se practicará en base de los nombramientos y resoluciones, a cuyo efecto, la copia legalizada de los mismos, destinada a la sección Liquidaciones, será remitida previamente a la Sección Teneduría de Libros para la registración pertinente. En cada caso, esta última sección dejará constancia de su intervención mediante un sello en las condiciones antes expresadas, consignando el importe que se ha afectado.

La sección Liquidaciones por su parte, al efectuar el reajuste respectivo, comunicará a la sección Teneduría de Libros cualquier diferencia existente entre lo afectado y lo liquidado.

Las devoluciones de sueldos de estas partidas globales, deberán ser acreditadas, para lo cual la Contabilidad de Movimiento de Fondos, remitirá diariamente a la de Previsión, la relación de los sueldos devueltos.

La sección de Liquidaciones por su parte, en aquellos casos en que estos sueldos devueltos fuesen solicitados, pasarán a esta Contabilitad las planillas de liquidaciones a objeto de su constancia por la nueva afectación.

2. — *Contabilidad de Presupuesto, leyes especiales y acuerdos:* En esta Contabilidad se acreditarán las sumas acordadas por la ley de Presupuesto, leyes especiales o acuerdos de Ministros, en base a las comunicaciones oficiales o copias legalizadas correspondientes, y las devoluciones que fuesen efectuadas por sobrantes, impagos, etc.

Se debitará, con las sumas que fuesen establecidas como rebajas o economías en virtud de leyes y acuerdos de ministros y con las que se incluyan en órdenes de pago proyectadas, sin perjuicio de la verificación posterior y las rectificaciones que procedan una vez diligenciadas aquéllas.

Se contabilizarán también, las recaudaciones establecidas en el cálculo de recursos de presupuesto, debitándose por el importe de las sumas previstas y acreditadas con el importe de las sumas recaudadas e ingresadas a Tesorería General .

Mensualmente se confeccionará el balance de comprobación, con determinación de las diferencias que, en más o en menos, el movimiento de las recaudaciones arrojase.

Constará de los siguientes libros:

a) Diario General;
b) Mayor General;
c) Mayor Auxiliar «Sueldos Presupuesto»;
d) » » «Gastos Presupuesto»;
e) » » «Cuentas Especiales»;
f) » » «Leyes Especiales»;
g) » » «Acuerdos de Ministros»;
h) » » «De Recaudaciones»;
i) Balance de comprobación.

Diariamente se establecerá el saldo de cada una de las cuentas abiertas para cada inciso, ítem y partida consignada en la Ley de Presupuesto, Leyes Especiales o Acuerdos de Ministros.

Mensualmente se confeccionará el Balance de comprobación y de saldos, controlándose el monto de las acreditaciones registradas en la Contabilidad de Presupuesto por devoluciones ingresadas en la Tesorería General, con el balance de la contabilidad de Movimiento de Fondos.

Se confeccionará un balance general al finalizar el ejercicio económico y otro al cierre del ejercicio financiero.

3. — *Contabilidad de Movimiento de Fondos y de Valores:* Esta contabilidad registrará el movimiento diario de fondos y valores habido en la Tesorería de la Dirección, complementado con el de las libranzas u órdenes de pago contra la Tesorería General de

la Nación para su abono directo por ésta a los respectivos acreedores y las órdenes de transferencia que, si bien evitan la extracción de fondos, (cuando se trata de servicios prestados entre reparticiones públicas), implican el movimiento de éstos, mediante operaciones de débito y crédito en los libros de la Contaduría General, que modifican la disponibilidad de recursos de presupuesto.

Las operaciones de esta Contabilidad serán agrupadas en los siguientes conceptos:

1.° Fondos de Presupuesto; Cuentas Especiales, Leyes y Acuerdos de Ministros;
2.° Recaudaciones;
3.° Depósitos en custodia;
4.° Mandamientos y depósitos judiciales;
5.° Valores postales.

1.° En la Contabilidad de los fondos de Presupuesto, Cuentas Especiales, Leyes y Acuerdos, se registrará lo percibido de la Tesorería General de la Nación, por los conceptos enunciados; los pagos directos efectuados por la misma, por cuenta del Ministerio; las transferencias a que antes se alude; las devoluciones a la misma Tesorería General y todos los pagos o devoluciones de los fondos que hiciera o percibiera la Tesorería de la Dirección General de Administración;

2.° Considéranse recaudaciones a los fines de este Reglamento, los fondos ingresados a la Dirección General de Administración o los percibidos por los responsables de ésta, en conceptos de suscripciones, trabajos, pensiones, ventas de productos, publicaciones, entradas eventuales destinadas a Rentas Generales o a cuentas especiales, de conformidad a las disposiciones en vigencia;

3.° Son depósitos en custodia:

a) Los de garantía de licitaciones y contratos realizados por el Ministerio y sus dependencias;
b) Los de fianzas;
c) Los provenientes de donaciones, legados, etc., hasta tanto sea determinado su régimen;

4.° Se registrará el monto de cada mandamiento judicial que trabase embargo, sea sobre haberes del personal del Departamento, como sobre créditos a abonarse por el Ministerio y los depósitos que se fuesen efectuando en cumplimiento de los mismos;

5.° Son valores postales los timbres de correos entregados por la Dirección de General de Correos y Telégrafos al Ministerio para su uso y el de sus dependencias;

Para la registración de estas operaciones serán llevados los siguientes libros:

a) Diario General;
b) Mayor General;
c) Mayores Auxiliares de «Sueldos» y «Gastos» de Presupuesto;
d) Mayor Auxiliar de Cuentas Especiales;
e) Mayores Auxiliares de Leyes, Acuerdos;
f) Mayor Auxiliar de Recaudaciones;
g) Mayor Auxiliar de Depósitos en Custodia;
h) Mayor Auxiliar de Mandamientos y Depósitos Judiciales;
i) Mayor de Valores Postales;
j) Mayor Cuotas Banco Hipotecario;
k) Balances.

En el libro Diario General, se registrarán por el sistema de la partida doble, todas las operaciones enunciadas precedentemente correspondientes a esta contabilidad.

En el Mayor General se abrirá cuenta a cada uno de los rubros principales originados por las operaciones asentadas en el Diario General.

En los mayores auxiliares de Sueldos y Gastos de Presupuesto, se abrirá cuenta a cada inciso e ítem para sueldos, y a cada inciso, ítem y partida para gastos, según lo establezcan las respectivas leyes de presupuesto.

En el mayor auxiliar de Cuentas Especiales se abrirá cuenta a cada una de las autorizaciones, ya sea comprendidas en Leyes de Presupuesto o las que fuesen instituídas como tales y no estuviesen comprendidas en aquéllas.

En los mayores auxiliares de Leyes y Acuerdos, se abrirá cuenta a cada Ley especial o Acuerdo de Gobierno.

En el mayor auxiliar de Recaudaciones, se abrirá cuenta a cada uno de los rubros integrantes de la renta correspondiente al Ministerio.

En el mayor auxiliar de Depósitos en Custodia, se registrará:

a) Por los de garantía de licitaciones y contratos, en cuentas colectivas el movimiento de ingresos y egresos de estos depósitos;

b) Por los de fianzas, en efectivo, títulos o hipotecas, se abrirá cuenta a cada uno de sus otorgantes;

c) Por las donaciones, legados, etc., se abrirá cuenta por cada uno de estos conceptos.

En el mayor auxiliar de Mandamientos y Depósitos Judiciales, se abrirá cuenta a cada uno de los demandados, registrándose el monto del embargo y los descuentos que se practiquen en cumplimiento de los mismos.

En el mayor de Valores Postales, se registrarán los valores recibidos de la Dirección General de Correos y Telégrafos y su entrega a las dependencias del Departamento.

4. — *Contabilidad de Cargos:* Como consecuencia del movimiento de fondos y valores, esta contabilidad determina la responsabilidad personal de aquellas personas que reciban o recauden fondos y valores o estén encargadas de la custodia de documentación, de talonarios de recaudación, etc.

En primer término, establece la responsabilidad de los funcionarios a cargo de la Dirección General de Administración por su rendición de cuentas ante la Contaduría General de la Nación.

En segundo término establece la responsabilidad de los funcionarios o empleados de las dependencias del Ministerio o de otras personas no dependientes del mismo, pero que hubiesen recibido o recaudado fondos, por su rendición de cuentas ante la Dirección General de Administración.

Constará de los siguientes libros:

a) Diario General;
b) Mayor General;
c) Mayores auxiliares de Responsables;
d) Mayor auxiliar Contaduría General;
e) Balances.

En el Diario General, se asentará el movimiento global de las operaciones diarias de la Tesorería de la Dirección General de Administración, como así también, en la cuenta de cada responsable, los cargos que fuesen formulados al personal del respectivo establecimiento o dependencia por descuentos no efectuados en oportunidad u otros conceptos cuya gestión o requerimiento de pago, corresponda al Ministerio en concordancia con lo que establece el Acuerdo de Ministros del 3 de octubre de 1934 y la resolución de la Contaduría General N.° 6.526 de 18 de octubre de 1935.

A los efectos de la registración, se clasificarán las operaciones en el siguiente orden:

a) De fondos recibidos por la Dirección General de Administración de la Tesorería General, con cargo de rendición de cuentas a la Contaduría General y por las devoluciones que la primera efectuase a la segunda;

b) De fondos abonados por la Dirección General de Administración a sus responsables, con cargo de rendición de cuentas de éstos a aquélla y por las devoluciones hechas por los mismos;

c) Por los cargos formulados a los responsables, de acuerdo a la resolución antes citada;

d) Por los valores postales para uso oficial recibidos de la Dirección General de Correos y Telégrafos por la Dirección General de Administración y por los entregados por ésta a las dependencias;

e) Por los talonarios de recaudación distribuídos entre las dependencias recaudadoras, con intervención de la Contaduría General y la devolución anual de los no utilizados.

En el Mayor General se abrirá cuenta a cada rubro, de acuerdo a la clasificación determinada precedentemente.

En los mayores auxiliares se abrirá cuenta a cada responsable, formulándosele cargo por los fondos que hubiesen sido abonados en base de las operaciones de la contabilidad de movimiento de fondos, como por los que se hubiesen establecido y entregado por los conceptos expresados en los apartados *c), d)* y *e)* del artículo 10.

Los descargos se efectuarán en base de las planillas de devoluciones ingresadas en la Tesorería de la Dirección General de Administración y de los partes diarios de la Oficina Rendición de Cuentas por las rendiciones recibidas como también por los talonarios de recaudaciones devueltos.

5. — CONTABILIDAD PATRIMONIAL: Registrará:

1.° El movimiento general de los bienes y valores, muebles, inmuebles y semovientes pertenecientes al Departamento y sus dependencias dando a conocer su valor y permitiendo su control permanente sobre las existencias, con los inventarios generales que deben practicarse, de conformidad a los Acuerdos de Ministros de fecha 30 de junio de 1913 y 10 de febrero de 1932;

Constará de los libros siguientes:

a) Inventario de Inmuebles;
b) Inventario de Muebles y Semovientes;
c) Diario General;
d) Mayor General;
e) Mayores Auxiliares.

2.° Los inmuebles tendrán asignado como valor, el importe de su adquisición o de construcción, agregándose el valor de las mejoras que fuesen realizadas.

Si se tratase de inmuebles donados o permutados, se les asignará el valor estimativo que tuviesen en la fecha de su donación o permuta;

3.° Los bienes muebles y semovientes, se registrarán por el valor de su adquisición o de construcción y si fuesen donados o permutados, por el valor estimativo que tuviesen en la fecha de su donación o permuta. Se agruparán por secciones

y en orden alfabético, excluyendo los artículos de consumo, como ser: artículos de escritorio, tales como gomas, lapiceras, etc., que no se inventariarán;

4.° Las registraciones por cargo en esta contabilidad, se iniciarán con el importe total que arrojase el último inventario de las dependencias y del Ministerio, siguiéndose aquéllas, mediante planillas mensuales, que las dependencias deberán remitir a la Dirección General de Administración junto con las rendiciones de cuentas por gastos, las que consignarán el detalle de las adquisiciones realizadas, que se incorporen al patrimonio del Estado. El nacimiento de animales será comunicado mediante planillas o formularios especiales. Las transferencias de una oficina o dependencia a otra, serán igualmente comunicadas por formularios;

5.° La registración por descargo, lo será mediante planillas análogas a las anteriores, que las dependencias deberán remitir a la Dirección General de Administración junto con las rendiciones de cuentas por gastos;

Se agregarán a estas planillas, copias legalizadas del o las actas que se hayan celebrado por las bajas producidas;

6.° Recibidas de las dependencias las comunicaciones relativas al inventario general de que trata el apartado 1.° y al movimiento de cargo y descargo a que se refieren los apartados 4.° y 5.°, mediante formularios expresamente destinados a ese efecto de que se les proveerá, serán revisados y agrupados en la sección que les corresponda, procediéndose a la registración de sus totales y por cuentas, en los libros de contabilidad;

La Oficina de Rendición de Cuentas después de examinar las planillas u órdenes de provisión de cargos mensuales mencionados en el apartado 4.°, estableciendo su cotejo con la rendición de cuentas y con el duplicado agregado de las órdenes de provisión que las dependencias hayan emitido, las desglosarán y remitirán a la Oficina de la Contabilidad Patrimonial;

Para este destino, desglosarán y remitirán las planillas de descargo a que se refiere el apartado 5.°;

7.° En lo que respecta al movimiento de especie de las dependencias del propio Ministerio, la Oficina de Contralor Contable de Provisiones deberán remitir a la de Libros, Contabilidad Patrimonial, una planilla quincenal, con la relación de las adquisiciones que se incorporen al patrimonio del Estado;

8.° La misma Oficina de Contralor Contable de Provisiones, deberá remitir asimismo, una planilla trimestral por las bajas producidas durante esos períodos, visada por el Jefe de la dependencia u oficina en la cual se hubiera producido;

9.° Recibido los inventarios generales de las dependencias antes del 31 de julio, su movimiento de cargo y descargo será controlado con el que haya sido registrado en la Contabilidad Patrimonial y en caso de encontrarse diferencias, se solicitará la aclaración pertinente a la dependencia que corresponda;

10. Si de las bajas por artículos inutilizados, se estimase que parte de ellos pueden ser aprovechables previa modificación o transformación, o enajenables mediante remate, al mismo tiempo que la dependencia se descarga de los mismos, se los cargará mediante formulario especial bajo el rubro «*Rezagos*», remitiendo los originales y duplicados a la Dirección General de Administración.

Oficina de Presupuesto y Ordenes de Pago

Art. 12. — Son tareas propias de esta oficina:

1.° Las relativas a la preparación de las órdenes de pago, anuales, mensuales y especiales como así también las destinadas a obtener los fondos necesarios para el pago de planillas complementarias de sueldos con imputación al Presupuesto General, Leyes o Acuerdos, que deban cobrarse por la Dirección General de Administración;

2.° Las que correspondan ser abonadas directamente por la Tesorería General de la Nación; las de transferencias, a que se refiere el apartado 3.°, artículo 5.°, título IV, de este

reglamento; las que deban dictarse a favor de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles por el aporte patronal sobre los sueldos del Ministerio y sus dependencias, como igualmente, la confección de aquellas que deban efectuarse, también por el aporte patronal correspondiente a sueldos del Consejo Nacional de Educación y Universidades Nacionales;

3.° La preparación, en colaboración con la Oficina de Despacho, del anteproyecto anual del presupuesto del Departamento;

4.° La redacción de decretos, acuerdos de ministros, mensajes al Honorable Congreso, proyectos de leyes, etc., que se relacionen con autorizaciones de fondos;

5.° Confeccionar simultáneamente con las órdenes de pago, las hojas contables correspondientes a la Contabilidad de Presupuesto, de movimiento de fondos y de cargos, que remitirá a la Oficina de Libros inicialadas y con el sello de la oficina;

6.° Expedir con destino a la Sección Liquidaciones, simultáneamente a la confección de las órdenes relativas a gastos especiales, los partes de liquidación a practicarse por aquella sección, con el visto bueno del Contador;

7.° El trámite interno e información de todos los expedientes relacionados con las funciones asignadas a la oficina.

Oficina Intervención de Tesorería

Art. 13. — Tendrá a su cargo esta Oficina la intervención previa en toda entrada y salida de fondos y valores de la división Tesorería, a cuyo efecto, además de los requisitos que se establecen más adelante para que dicha intervención sea realizada de acuerdo a las disposiciones vigentes, llevará los libros necesarios, en los cuales registrará diariamente, las operaciones efectuadas, determinando las existencias de la Tesorería en fondos y valores y la disponibilidad de éstos por partidas.

Art. 14. — Confeccionará, además, las planillas contables con destino a la oficina de Teneduría de Libros, en las que reflejará

detalladamente, el movimiento de ingresos y egresos del día, en base de la documentación recibida de la división Tesorería, concordante con las constancias de sus propios libros.

A ese efecto, se dividirá en las mesas siguientes:

1.° Mesa de Intervención y Libros;

2.° Mesa de planillas contables.

I) Mesa de Intervención y Libros

Art. 15. — Le corresponde:

Por los ingresos de fondos y valores. Verificar si cada cheque, giro, boleta de depósito o resguardo de títulos en garantía de licitaciones, etc. y el pertinente recibo extendido por la Tesorería para ser entregado al depositante, se hallan en forma y si su importe corresponde al que debía ingresarse o depositarse de acuerdo a la documentación que debe venir adjunta, la que será examinada, debidamente:

1.° *Por extracciones de la Tesorería General de la Nación:* Establecer si el importe del cheque que la división Tesorería presenta para la intervención, concuerda con lo establecido en el respectivo pedido numérico, del que habrá tomado ya debida nota, al ser firmado por el Contador y Director;

2.° *Por devoluciones de responsables:* Si se acompaña la planilla detallando el concepto por el cual se efectúa el ingreso, el número del inciso, ítem y partida a que deba acreditarse la devolución y el importe de la misma, como asimismo si el recibo extendido y firmado por el Tesorero, está en forma;

3.° *Por recaudaciones:* Si la relación de la misma, la acreditación que se indique y el recibo del Tesorero, son los procedentes;

4.° *Por depósitos en garantía:* Verificar el número, fecha e importe del mismo, el nombre del depositante, licitación a que pertenece y el recibo del Tesorero;

5.° *Por timbres postales:* La nota de la Dirección General de Correos y Telégrafos, el detalle de los valores remitidos por ésta y el acuse de recibo firmado por Tesorería.

Examinada de conformidad la documentación y los valores, dejará en cada caso, constancia de su intervención y procederá a registrarlos, a medida que le sean presentados, en una planilla de movimiento diario, detallándolos bajo número de orden correlativo y con especificación de la persona, entidad, repartición o dependencia que lo hiciera, estableciendo su importe y acreditación que corresponda, después de lo cual devolverá la documentación directamente a la división Tesorería para que lo haga efectivo.

Por los Egresos de Fondos y Valores

Comprobar, previamente, si ha tomado la intervención correspondiente la Delegación de la Contaduría General; si existen en la división Tesorería fondos suficientes de la partida, ley especial, acuerdo, etc., con que deban atenderse; que los recibos extendidos por las personas que deban percibirlos, lo hayan sido en forma y estén fechados y firmados (con excepción de los pagos directos de sueldos al personal del Ministerio en los que la Tesorería actúa como un subresponsable), encargándose después, de hacer firmar los cheques, pedidos de transferencias, boletas de depósito, etc., por el Contador y el Director, efectuando además, las siguientes verificaciones:

1.° *Siendo el egreso en concepto de sueldos y gastos y en base de la orden de pago interna respectiva:*

a) Si los cheques a favor de dependencias de la Capital o pueblos suburbanos, que deban recibir éstas, están debidamente extendidos;

b) Si el cheque por transferencias, está hecho en forma o por el importe de las mismas, revisando simultáneamente las planillas o boletas de depósito a presentarse al Banco;

c) Si los cheques por ingresos a la Tesorería General de la Nación por devoluciones o a favor de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles por aportes, han sido extendidos por el importe que corresponda, como asimismo, si el ingreso o depósito se hace dentro del plazo establecido por el Acuerdo de Ministros de fecha 14 de julio de 1931;

d) En los pagos o transferencias con cargo, verificará previamente, si los responsables han rendido cuenta de los fondos entregados anteriormente.

2.° *Siendo pagos que la Tesorería efectúa,* actuando como un subresponsable de la Dirección General de Administración por haberes del personal del Ministerio y Subsecretaría u otras oficinas:

a) Si los fondos han sido transferidos de la cuenta general de la Dirección General de Administración, a la especial denominada N.° 1, abierta en el Banco Central de la República;

b) Si los cheques están extendidos en cada caso, a la orden del empleado, y por el importe registrado en la planilla mensual de haberes;

c) Si los cheques por descuentos practicados sobre los haberes, están extendidos en la forma establecida y a favor de quienes deban percibir su importe, revisándose, además las boletas extendidas por la Tesorería y verificando, en lo que respecta a los depósitos, si se realizan dentro del plazo determinado por el mencionado Acuerdo de fecha 14 de julio de 1931, de lo que informará al Contador y al Director, al solicitar las firmas de éstos.

3.° *Siendo el egreso por pago de cuentas de proveedores, ferrocarriles, etc.,* si el cheque ha sido extendido a favor de la persona, razón social o empresa respectiva y de acuerdo a la liquidación practicada, comprobando, si se ha cumplido la Ley de sellos y si la firma puesta al pie del recibo extendido a tinta, corresponde a la registrada oportunamente en el libro de Poderes y Mandatos.

4.° *Siendo el egreso por pago de subsidios o subvenciones,* si el cheque está extendido a la orden conjunta de dos responsables por lo menos, salvo las excepciones autorizadas por la Dirección y si se tratase de viáticos, si lo ha sido a la orden del Inspector o empleado expresado en la liquidación practicada.

5.° *Si el egreso fuese por devolución de depósitos en garantía de licitaciones, fianzas, etc.:*

a) Si el depósito se halla debidamente endosado a favor de la persona o entidad depositante y si viene acompañado de la orden firmada por el Director, para su devolución;

b) Si el recibo está firmado por persona debidamente autorizada, consultándose a este efecto el respectivo libro o examinándose la autorización adjunta.

6.° *Si el egreso es por timbres postales* con destino a las dependencias, verificar el pedido formulado por las mismas y las cantidades que la Tesorería remite o entrega, con especificación de sus distintos valores, en el recibo que deberán firmar aquéllas.

Art. 16. — No teniendo reparo que oponer, sellará la documentación y cheques como constancia de su conformidad e intervención y procederá a registrar cada egreso, a medida que le sea presentado, en las planillas de movimiento diario, complementario de la de ingresos, detallándolos con especificación del concepto, persona o entidad a la cual se deba efectuar el pago o devolución con indicación del número del cheque e importe en la columna del tabulado que le corresponda, de acuerdo a su imputación, después de lo cual, devolverá la documentación con el cheque o certificado de depósito endosado, a la división Tesorería, a sus efectos.

Art. 17. — Finalizadas las operaciones diarias, cerrará las planillas de ingresos y egresos estableciendo el monto de los mismos y el de las existencias que pasan al siguiente día, previo el contralor con las anotaciones de la división Tesorería, en cuyo parte diario, que deberá acusar el mismo movimiento y existencia, dejará constancia de su conformidad, antes de que sea llevado a la firma del Contador y del Director y de remitirse el duplicado a la Delegación de la Contaduría General.

Art. 18. — Verificará esta mesa, semanalmente, los saldos de las cuentas en el Banco Central de la República, Banco de la Nación Argentina y Banco Hipotecario Nacional, por las existencias en efectivo o en títulos, correspondientes a las cuentas abiertas a la Dirección General. los que deberán concordar con los acusados por los libros de la Oficina, dando cuenta al Contador de su resultado, con la presentación de libro «Bancos» a cargo de la división Tesorería.

En base de esta verificación, llevará a la firma del Contador, el conforme mensual remitido por los Bancos Oficiales, el que después de firmado por el Tesorero, se someterá a la firma del Director.

Art. 19. — Mensualmente, practicará un arqueo de las existencias en valores postales y en recibos y resguardos de depósitos en garantía de licitaciones u otros conceptos, de cuyo resultado dará cuenta al Contador con la presentación del libro respectivo, en el que dejará constancia de ese arqueo.

Verificará las relaciones que envía el Banco, detallando las libretas de cheques entregadas a la Dirección General a los efectos de dar a aquél la conformidad.

Art. 20. — Además de las planillas de movimiento diario, llevará los libros necesarios para el mejor desempeño de sus funciones de contralor, que serán:

a) *De Movimiento de Fondos,* en donde acreditará, abriendo un folio a cada concepto o rubro, las sumas percibidas de la Tesorería General y debitará, los pagos diarios a los efectos de establecer por día, la existencia de fondos en la división Tesorería, para cada concepto o rubro de operaciones;

b) *De Tesorería General,* en donde abrirá folio a cada una de las órdenes de pago libradas sobre aquélla, por fondos a recibir de la misma, debitándole el importe de cada una de éstas y acreditándole el valor de las entregas que vaya haciendo;

c) *De Timbres Postales,* en donde registrará, el movimiento diario de expedición de los distintos valores entregados o remitidos por la división Tesorería;

d) *De órdenes de Pago Internas* por sueldos y gastos constituídos por todas aquéllas remitidas por la sección Liquidaciones, en base de las cuales practicará la intervención por pagos, transferencias, etc.;

e) *El libro Banco,* a cargo de la división Tesorería, será verificado, diariamente, por esta mesa, en base de los depósitos y libretas de cheques, dejando constancia en el mismo, de dicha verificación;

f) *Un fichero-registro de las firmas y poderes* de proveedores y otras personas que por sí, o por medio de sus apoderados, deban percibir fondos de la división Tesorería, en concepto de cuentas, facturas, subsidios, etc., con especificación, del apellido y nombre, o razón social, domicilio, término de duración del contrato o del poder, socios que tengan el uso de la firma y otros detalles de interés para mayor seguridad en los pagos que efectúe la división Tesorería.

II) Mesa de Planillas Contables

Art. 21. — Le corresponde:

a) Recibir diariamente de la división Tesorería, la documentación de ingresos y egresos, la que examinará y controlará con las registraciones de las planillas de movimiento de ingresos y egresos formulados por la mesa de Intervención;

b) Ordenar la misma a los efectos de su envío posterior a la sección Rendiciones de Cuentas, separando las planillas de devoluciones de los responsables en concepto de vacantes, depósitos y aportes, que deben remitirse a la sección Liquidaciones;

c) Confeccionar, en base de dicha documentación, planillas especiales clasificadas de acuerdo a la acreditación que corresponda si son ingresos, y a su imputación, si se tratara de egresos, debidamente controladas con la de intervención por sus importes parciales y totales y con especificación de todos los detalles necesarios para el registro, en base a ellos, del movimiento diario de la división Tesorería.

Estas planillas serán confeccionadas en varios ejemplares y tendrán el destino siguiente:

1.° *Planillas de Ingresos:*

a) *De fondos percibidos de Tesorería General:* original y duplicado para la oficina de Teneduría de Libros y triplicado para la sección Rendiciones de Cuentas;

b) *De Recaudaciones:* original y duplicado para la Oficina de Teneduría de libros, triplicado para la sección Rendiciones de Cuentas;

c) *De Devoluciones de Responsables, reintegros por cargos:* el original y duplicado para la oficina Teneduría de Libros, el triplicado para la sección Rendición de Cuentas;

d) *De depósitos, garantía, licitaciones:* original y duplicado para la oficina Teneduría de Libros, el triplicado para la división Tesorería y el cuadruplicado para la sección Suministros;

La sección Suministros, por los certificados y resguardos de depósitos desglosados de los expedientes de licitaciones públicas, confeccionará la relación de los mismos por quintuplicado, cuatro de cuyos ejemplares tendrán el destino establecido precedentemente y el quinto para ser agregado a los expedientes de las licitaciones como constancia del desglose efectuado.

2.° *Planillas de Egresos:*

a) De pago de Sueldos, Gastos, Ejercicios Vencidos, etc.: el original y duplicado para la oficina Teneduría de Libros, el triplicado y cuadruplicado para la oficina de Rendiciones de Cuentas de Responsables y el quintuplicado para la oficina Rendiciones de Cuentas a Contaduría General;

b) De devoluciones a Tesorería General: el original y duplicado para la oficina Teneduría de Libros; el triplicado para la Contaduría General de la Nación y el cuadruplicado para la sección Liquidaciones;

c) De ingresos a la cuenta de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles: el original y duplicado para la oficina Teneduría de Libros, el triplicado para la institución nombrada y el cuadruplicado para la sección Liquidaciones;

d) De devoluciones, depósitos, garantía, licitaciones: el original y duplicado para la oficina Teneduría de Libros, el Triplicado para la sección Suministros;

e) De Depósitos Bancos: el original para la Oficina de Teneduría de Libros y el duplicado para la división Tesorería;

f) De expedición de Timbres Postales: el original para la Oficina de Teneduría de Libros y el duplicado para la división Tesorería.

Art. 22. — Revisadas detenidamente las planillas confeccionadas, procederá a la distribución de las mismas de acuerdo al destino indicado precedentemente, remitiendo bajo recibo la documentación recibida de la división Tesorería a la sección Rendiciones de Cuentas.

Dichas planillas deben estar al día, a los efectos de las operaciones de libros y su toma de razón por las distintas secciones.

Oficina de Despacho General

Art. 23. — Tiene a su cargo esta Oficina:

1.° El despacho general de los expedientes que deban tramitarse en la división Contaduría, relativos a asuntos generales de contabilidad, movimiento de fondos, imputaciones, descuentos por embargos, inasistencias, réditos, reclamación de haberes, suplencias, etc.;

2.° La liquidación de todos los descuentos a efectuarse por las planillas de sueldos del Ministerio, en concepto de réditos, Banco Hipotecario, embargos, alimentos, sociedades, inasistencias no justificadas y licencias sin sueldo;

3.° La recepción y distribución de todas las planillas, liquidadas por la Delegación de la Contaduría General, enviando a la división Tesorería los ejemplares pertinentes para la transferencia o pago de fondos a las dependencias por cuyo intermedio deban abonarse a los interesados, remitiendo a las mismas los ejemplares que les están destinados y practicará en aquellas que deban ser abonadas por dicha división directamente a los interesados los descuentos que correspondan;

Las planillas de gastos, serán remitidas previamente a la mesa de Cargos de la oficina Rendiciones de Cuentas de Responsables a efecto de establecer si las dependencias se hallan al día en la presentación de sus rendiciones;

4.° La preparación del anteproyecto de la Ley General de Presupuesto, con la colaboración de la «oficina de Presupuesto y Ordenes de Pago»;

5.° El contralor, en coordinación con la oficina «Intervención de Tesorería» de las transferencias y depósitos de fondos preparados, con intervención de la mesa de Cargos, por la división Tesorería, para el pago de sueldos, gastos, racionamiento, peculio, etc., contralor que se efectuará en base de las órdenes de pago internas y sus respectivos parciales, liquidados por la Delegación de la Contaduría General;

6.° Extender, para la firma del Contador y elevación al Director, los certificados que solicite el personal del Ministerio sobre los cargos que desempeñe, antigüedad en el empleo, sueldo que devengue y gravámenes que pesen sobre el mismo, los cuales llevarán las iniciales del jefe o encargado de la oficina y sello de ésta;

7.° Comunicar a la división Secretaría y a la sección Rendiciones de Cuentas, las designaciones de nuevo personal o cambio de funciones del personal en servicio, a quien alcance la obligación de prestar o ampliar su respectiva fianza, a los efectos del cumplimiento de las disposiciones reglamentarias vigentes;

8.° Remitir a la oficina Intervención de Tesorería inmediatamente después de recibidas, las comunicaciones de la división Secretaría relativas a responsables que no hubieran cumplido la obligación de presentar sus fianzas a objeto de que no se dé curso a entregas o transferencias de fondos a la orden de los mismos, hasta tanto llenen ese requisito, salvo autorización expresa de la superioridad.

TITULO II

De la Sección Liquidaciones

Art. 24. — Esta sección, que actúa en coordinación con la Delegación de la Contaduría General de la Nación, en virtud del procedimiento adoptado de común acuerdo entre la misma y el Ministerio, está bajo la dirección técnica del señor Contador Fiscal delegado, sin perjuicio de su dependencia administrativa y disciplinaria de la Dirección General de Administración, a quien podrá consultar su personal cualquier duda sobre las tareas a su cargo.

Art. 25. — Estará constituída por las siguientes oficinas:

a) Mesa de Entradas y Salidas;
b) Liquidación de Sueldos y Becas;
c) Liquidación de Gastos;
d) Despacho;
e) Ordenes de Pago Internas (de sueldos y gastos);

f) Imprenta;

g) Fichero General (de sueldos y gastos) de la Delegación de la Contaduría General;

h) Registro de Contratos de Locación (de la Delegación de la Contaduría General);

i) Archivo.

I) Mesa de Entradas y Salidas

Art. 26. — La Mesa de Entradas y Salidas, tiene a su cargo:

1.° La recepción de la correspondencia dirigida a la Dirección General de Administración y su distribución entre las distintas oficinas o mesas a que esté destinada;

2.° La recepción de las comunicaciones o copias legalizadas de leyes, acuerdos, decretos o resoluciones que se remitan por las distintas direcciones del Ministerio, oficinas o dependencias, que deban ser consideradas por la sección Liquidaciones y su distribución entre las oficinas o mesas, como así también, la confección de sendas copias cuando ello deba hacerse entre dos o más;

3.° La recepción de las planillas complementarias o especiales de sueldos; de los formularios suministrando antecedentes para las modificaciones a introducir en la planilla anual y de los formularios especiales o notas reclamando la liquidación de haberes o gastos, dándole en cada caso, su respectivo destino;

4.° Llevar los libros registros indispensables para poder informar sobre el trámite de las planillas y demás asuntos en que debe intervenir;

5.° La recepción de las fichas individuales correspondientes a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles; Registro del Personal Civil y compatibilidad de cargos;

6.° La expedición de toda la correspondencia de la Dirección, originada en la sección, como igualmente de las circulares, instrucciones, etc., que se dirijan a otras reparticiones o dependencias;

7.° La búsqueda de antecedentes relativos al trámite seguido por las planillas de haberes de años anteriores y la información interna de la oficina de Despacho, para que ésta se expida según corresponda en el expediente o asunto que haya originado la búsqueda;

8.° La organización general de los archivos de planillas de cada mesa liquidadora; de los legajos de antecedentes, (decretos, resoluciones, planillas de devolución, etc.), de las mismas mesas; de las planillas de liquidación de gastos; fichas de la Caja, Registro de Personal Civil, etc.

II) Oficina de Liquidación de Sueldos y Becas

Art. 27. — La oficina de Liquidación de Sueldos, está formada por las siguientes mesas liquidadoras, constituídas por un empleado de la Dirección General de Administración y uno de la Delegación de la Contaduría General, pudiendo introducirse los cambios necesarios:

a) Ministerio, dependencias del Poder Judicial, Dirección General de Institutos Penales y Patronato de Menores y sus dependencias;

b) Colegios Nacionales de la Capital «J. M. Pueyrredón», «Bernardino Rivadavia», «Domingo F. Sarmiento», «Manuel Belgrano», «Teniente General Julio A. Roca», del Litoral y Territorios Nacionales y Liceos;

c) Escuelas Normales de las mismas localidades;

d) Colegios Nacionales de la Capital «Mariano Moreno». Curso Nocturno del mismo, «Bartolomé Mitre», «Nicolás Avellaneda», y provincias del Norte, del Centro y Andinas y Escuelas Normales de las mismas provincias;

e) Escuelas de Comercio y Profesionales y Escuelas de Adaptación e Institutos varios;

f) Escuelas Industriales y de Artes y Oficios, Bibliotecas, Observatorios, Conservatorios, Registro de la Propiedad Intelectual, Museos, Academias, Comisión Nacional de Cultura y Archivo General de la Nación.

Art. 28. — Las planillas de liquidación de haberes, siguiendo las normas trazadas por los Acuerdos de Ministros de 18 de agosto de 1936 y 28 de febrero de 1937, son anuales y sufren en cada mes, las rectificaciones correspondientes a las altas y bajas que se hubieran producido. Se separan por incisos y éstos a su vez, por ítem, siguiendo las prescripciones del Acuerdo de 14 de julio de 1931.

Art. 29. — La forma de operar con la planilla anual, es la siguiente:

1.° En base a las del mes de diciembre o inmediato anterior y tomando en cuenta las variantes que puedan haberse introducido en la ley de presupuesto general, en lo que respecta al número de cargos de cada categoría, las asignaciones fijadas, rebajas de sueldos, descuentos, etc., se procede a preparar la que regirá para todo el año, pasándose por intermedio de la oficina de Despacho, después de hechas las sumas de cada columna y los transportes respectivos hasta llegar al total de cada ítem, a la imprenta de la Dirección, quien la devuelve a la mesa, en la misma forma, para que los empleados que deben hacer el contralor de dicha prueba, dejen constancia de su conformidad y la remitan para su impresión con el visto bueno del encargado de la oficina de Despacho, quien cuidará además, se haya hecho el contralor completo y las verificaciones que procedan, con el fichero de sueldos, números de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, Registro del Personal Civil, etc.;

2.° En la preparación de la planilla anual se procurará evitar la consignación de situaciones especiales de revista, tales como la liquidación de haberes por días de un mes, descuentos especiales del 50 % o diferencias de sueldos por ascensos o acumulación de cargos, consignando en tales casos la situación normal o general con que deba revistar cada empleado en los meses subsiguientes del año, registrándose las situaciones especiales antes referidas, mediante la planilla de rectificación mensual, (fórmula N.° 2, I. M. J.);

3.° Mensualmente y utilizando la fórmula antes mencionada se introducirán las reformas a la planilla anual, que exija la situación de revista del personal. Esas modificaciones se harán sin alterar en ningún sentido la planilla básica, me-

diante la agregación, a continuación de la última hoja correspondiente al ítem a modificarse, de una hoja de la fórmula especial ya mencionada, en la que, siguiendo las indicaciones ya impresas, se establecerá, en primer término, los totales del ítem, a continuación, las cifras totales a deducir de cada columna, con indicación marginal, siempre de acuerdo con la fórmula, de cuáles son los números de orden que sufren alteración, estableciendo a renglón seguido las cifras correspondientes al total del ítem, menos esas deducciones, para liquidar a continuación cada haber, como proceda hacerlo en el mes y llegar así, nuevamente, al total del ítem;

La tarea antes mencionada, podrá confiarse en lo que respecta a la Capital y pueblos suburbanos, a las propias dependencias, como colaboración con la sección de Liquidaciones de la Dirección General de Administración;

4.° Antes de procederse a la rectificación en la forma que se ha detallado precedentemente, deben anularse las casillas de la planilla básica anual, correspondiente a las liquidaciones individuales que deban modificarse, mediante un sello que ocupe todas las columnas «destinadas al pagador», cuya leyenda será «rectificado, ver final del ítem», sello que se pondrá por la misma mesa liquidadora o por la imprenta;

5.° Cuando la planilla básica anual no deba sufrir ninguna modificación, la mesa liquidadora respectiva se limitará a llenar la fórmula N.° 1, I. M. J. o sea la de resumen mensual, pasando después los siete juegos que se hacen de cada planilla, por intermedio de la Oficina de Despacho, a la oficina de Ordenes de Pago Internas, para su inclusión en éstas, y su envío a la división Contaduría;

Art. 30. — Las dependencias que por motivos circunstanciales no estuvieran comprendidas en el régimen de la planilla anual impresa, presentarán hasta tanto sean comprendidas en él, las planillas mensuales y complementarias de sueldos, en los formularios anteriores a dicho régimen, en siete ejemplares que se controlarán detalladamente, cada mes, en base a la planilla del mes inmediato anterior.

Art. 31. — Las dependencias cuya planilla general se imprima por la Dirección General de Administración, no presentarán tampoco planillas complementarias, sustituyendo su confección, con el envío a la Dirección General de Administración, del formulario N.° 451 debidamente llenado.

Art. 32. — El empleado de la Dirección General de Administración de cada mesa liquidadora, cuidará de mantener al día y completos, los archivos de planillas y antecedentes relativos a altas y bajas (decretos, resoluciones, etc.), como igualmente, los relativos a modificaciones del presupuesto general del año, acuerdos de ministros o decretos que dispongan el pago de haberes, en virtud de los cuales haya procedido a su liquidación, pudiendo hacerlo, empero, en base a los antecedentes de la Delegación de la Contaduría General, sin perjuicio de solicitar las copias respectivas para completar su archivo.

Art. 33. — Las distintas mesas liquidadoras de sueldos, están obligadas a consultarse entre sí sobre la forma en que cada una deba liquidar los haberes del personal trasladado de una a otra dependencia, o nombrado en una, cuando cesa simultáneamente en otra, etc.; a consultar los antecedentes del fichero de sueldos; los archivos de fichas de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles; Personal Civil y todo otro antecedente que obre en poder de la sección, siendo responsable de los errores en que incurrieran por no haberlo hecho.

Art. 34. — Están igualmente obligadas, a consultar en cada caso de duda, a la oficina de Despacho, con respecto a las normas establecidas en otras mesas, o directamente al Delegado de la Contaduría General de la Nación.

Art. 35. — Para la liquidación de becas, cuya asignación global anual fija la ley general de presupuesto, a cargo también de la oficina de Liquidación de sueldos, deberá tenerse presente:

1.° Que la distribución de la partida global referida haya sido hecha por el Ministerio;

2.° Que la asignación individual al alumnado hecha por la dirección del establecimiento en las condiciones reglamentarias, haya sido aprobada por el Ministerio;

3.° Que se presenten mensualmente las planillas destinadas a su liquidación en cinco ejemplares, del 1.° al 5 de cada mes, siendo su destino el siguiente:

a) Archivo de la Dirección General de Administración;

b) Archivo de la Delegación de la Contaduría General;

c) Archivo del subresponsable;

d) Rendición de Cuentas;

e) Estadística.

Art. 36. — La liquidación de becas de acuerdo a la asignación de presupuesto es para diez meses, o sea de marzo a diciembre, excluídos los de vacaciones.

Art. 37. — Efectuada la liquidación completa de todas las planillas de becas correspondientes a un mes, la respectiva mesa liquidadora debe pasarla a la de órdenes de pago internas, por intermedio de la oficina de Despacho.

III) Oficina de Liquidación de Gastos

Art. 38. — Las mesas a quienes corresponda la liquidación de gastos actúan como las liquidadoras de sueldos, con personal de la Dirección General de Administración y Delegación de la Contaduría General; y son deberes de las mismas los siguientes:

1.° Liquidar, mensualmente, las planillas de gastos fijos con cargo, en base a la orden de pago anual, en el formulario N.° 12 *a* y en cinco ejemplares para cada dependencia. consignando la imputación, la naturaleza del gasto, el número de las órdenes de pago, anual e interna, correspondientes, pasando esas planillas, ya conformadas por la Delegación de la Contaduría General, a la oficina de Ordenes de Pago Internas, por intermedio de la de Despacho;

2.° Es deber de las mesas liquidadoras de gastos fijos con cargo, tener presente las modificaciones que puedan haberse introducido por razones de economía u otras a la ley general de presupuesto, haciendo en cada caso, las deducciones que procedan en la planilla básica impresa, debiendo consultar en cada oportunidad en lo que respecta al pago de alquileres, el libro de contratos a cargo de la Delegación de la Contaduría General, para deducir en las refe-

ridas planillas y para que ello se haga también, en la orden de pago interna, (fórmula 199), lo que deba retenerse por no existir alquileres devengados; como igualmente, para liquidar los que se hubieran deducido con anterioridad, por falta de conocimiento de contrato, etc., y correspondiera pagarse;

Deberá asimismo, tener presente para llevar en oportunidad a conocimiento de la respectiva dependencia por intermedio de la oficina de Despacho, los decretos o resoluciones que autorizaran a invertir partidas de alquileres en otros gastos y las autorizaciones que se dieran para pagar diferencias de alquileres o gastos con imputación a partida de eventuales del Ministerio y las fechas en que esas autorizaciones caduquen, por haberse firmado nuevo contrato;

3.° Para la liquidación de alquileres, deberá tenerse presente asimismo, si está aprobado el respectivo contrato de locación y la fecha de su vigencia; y en los casos en que en éstos existan cláusulas que autoricen prórrogas, si éstas, a su vez, han sido aprobadas;

4.° En los casos en que las partidas de gastos estén discriminadas en el presupuesto general, se exigirá a las dependencias ese detalle en la fórmula número 12, que se acumulará a la fórmula 12 a;

5.° Por las órdenes de pago mensuales que se preparen por la oficina respectiva de la Dirección General de Administración y simultáneamente con ello, se llenará un formulario *ad hoc,* dando cuenta al Contador de los parciales que deban liquidarse y con providencia de dicho funcionario pasarán a la oficina de Liquidación de Gastos, con la resolución original pertinente o copia legalizada del decreto que lo haya autorizado, para su liquidación, agregándose, cuando así corresponda, el expediente o antecedente de la dependencia o entidad que requiera el pago, o las facturas presentadas por el acreedor respectivo, ya conformadas por el Contador cuando se trate de suministros, de modo que la Delegación de la Contaduría General pueda efectuar las verificaciones que correspondan y juzgar sobre la oportunidad de hacerse el pago;

6.° En la misma forma se procederá por las órdenes de pago por pasajes y fletes, que comprendan a importes cuyo pago deba hacerse por la Dirección General de Administración por no exceder de cinco mil pesos, previa verificación:

a) De que obre agregada la correspondiente orden extendida por la Dirección General de Administración o dependencia autorizada;

b) De que su extensión haya sido autorizada por el señor Ministro o señor Subsecretario;

c) De que el servicio se haya efectuado por traslado de un funcionario o empleado en misión de servicio, o se refiera a la conducción de presos judiciales; a favor de liberados o a otros casos que autorizan las disposiciones reglamentarias vigentes;

d) Que las facturas concuerden con las respectivas órdenes;

e) Que exista constancia de que se ha tomado debida nota en la contabilidad de previsión por su anotación definitiva;

f) Que conste debidamente, la prestación del servicio cuyo pago se reclama;

g) Que haya informado sobre la estricta aplicación de las tarifas, la Dirección General de Ferrocarriles, Prefectura Marítima o Dirección General de Correos y Telégrafos, según corresponda.

7.° Para la liquidación de gastos relativos a viáticos, reintegro de servicios en horas extraordinarias o indemnizaciones por servicios prestados, cuyo pago deba atenderse con fondos de partidas de eventuales extraídos por órdenes de pago globales, se seguirán las mismas normas establecidas por el apartado precedente;

8.° En estos casos, como en los anteriores, las liquidaciones se incluirán en la orden de pago interna (fórmula 199), procurando hacerlo con todas las efectuadas en un mismo día.

IV) Oficina de Despacho

Art. 39. — Esta oficina tiene a su cargo, la coordinación de tareas entre las restantes de la sección Liquidaciones y estará formada, exclusivamente, por personal de la Dirección General de Administración.

Son sus deberes:

1.° Velar por la interpretación uniforme de las disposiciones legales y reglamentarias que se adopten por las distintas mesas liquidadoras de sueldos o de gastos;

2.° Por el despacho oportuno de las tareas que correspondan a cada una de ellas;

3.° Le corresponde, proyectar los informes, notas, telegramas, circulares, etc., relacionados con la sección;

4.° Someter diariamente a la firma del Director, previa intervención del Contador, los informes y notas de la referencia;

5.° Recibir de la Mesa de Entradas y Salidas, las fichas para la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, Personal Civil de la Administración; compatibilidad de cargos; proyectar las comunicaciones relativas a su envío a dichas dependencias; las que deban hacerse a los distintos establecimientos u oficinas del Ministerio y del Poder Judicial, señalando los defectos de forma en que se hubiera incurrido al presentar las referidas fichas o planillas de haberes o gastos; enviar a las mismas los carnetes de afiliación que se reciban de la Caja Nacional de Jubilaciones y los números del Registro del Personal Civil, etc.;

6.° Pasar a la oficina Ordenes de Pago Interna, las planillas que recibiese de las mesas liquidadoras de sueldos y de gastos, previo el contralor de las mismas.

V) Oficina de Ordenes de Pago Internas

Art. 40. — Esta oficina tiene las siguientes obligaciones:

1.° Confeccionar las siguientes órdenes de pago internas de la Dirección General de Administración:

a) Por planillas generales de sueldos con imputación a presupuesto;

b) Por planillas generales de sueldos con imputación a partidas globales;

c) Por planillas de sueldos con imputación leyes, acuerdos, decretos o cuentas especiales;

d) Por las planillas complementarias de sueldos;

e) Por las planillas mensuales de becas;

f) Por las planillas de gastos fijos incluídos en la orden anual respectiva;

g) Por las planillas de otros gastos.

Art. 41. — En la orden de pago interna de sueldos generales con imputación a los respectivos incisos o a partidas globales, se consignará:

a) El número de orden correlativo de las planillas relacionadas en la misma;

b) El número de inciso a que corresponda la imputación;

c) El nombre de la dependencia;

d) El importe básico liquidado, detallándolo en la columna parcial cuando un mismo habilitado o pagador deba percibir los fondos de varios incisos;

e) El importe líquido a abonarse en cada caso al subresponsable;

f) Los importes a depositar a favor de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles por descuentos generales;

g) Los importes que deben depositarse a favor de la misma institución, en concepto de 6 y 8 % de aporte patronal;

h) Las sumas que deben ingresarse a la Tesorería general de la Nación por vacantes o rebajas de sueldos.

Art. 42. — El importe total básico que arroje la columna respectiva, debe concordar con el duodecimal de la correspondiente orden de pago anual.

Art. 43. — En las órdenes internas a que se refieren los apartados *b)* y *c)* se consignarán los mismos antecedentes antes detallados.

Art. 44. — En las órdenes complementarias de sueldos se establecerá:

a) El número de orden;
b) El número de la planilla complementaria respectiva;
c) El inciso;
d) El nombre de la dependencia;
e) El mes a que corresponda cada planilla;
f) El importe a abonarse al subresponsable;
g) Los importes a abonarse a la Caja por descuentos generales y aporte patronal, independientemente.

Art. 45. — En las órdenes de pago internas relativas a becas, se consignará:

a) El número de orden correlativo;
b) El nombre del establecimiento;
c) El inciso, ítem y partida a que corresponda la imputación;
d) El importe básico;
e) El importe a abonarse al subresponsable;
f) Los importes que correspondan ingresarse a la Tesorería General como devolución.

Art. 46. — En las órdenes de pago internas de gastos se determinará:

a) El ejercicio del mismo;
b) El mes a que corresponda la liquidación;
c) El número correlativo de la orden interna;
d) El número de la liquidación;
e) El establecimiento o acreedor respectivo;
f) El inciso, ítem y partida a que deba imputarse el gasto;
g) El importe total liquidado;
h) El importe a abonarse al subresponsable cuando los pagos deban hacerse por éste;
i) Lo que deba abonarse directamente por la Tesorería de la Dirección General de Administración;
j) Lo deducido para ingresarse a la Tesorería General de la Nación.

VI) Imprenta

Art. 47. — La Imprenta de la Dirección General de Administración, creada por el Acuerdo de Ministros N.° 89.570 de fecha 18 de agosto de 1936, tendrá la siguiente misión:

a) Imprimir la planilla anual de sueldos de todas las dependencias del Ministerio y del Poder Judicial y las planillas complementarias que se le indicasen, y correr con su ordenación de modo de facilitar la distribución mensual entre las distintas mesas liquidadoras para las rectificaciones que procedan;

b) Efectuar la impresión, en los casos que así convenga, en ejemplares suficientes para su uso durante dos años, de modo que finalizado un ejercicio no sea necesaria la reimpresión simultánea de las planillas de todas las dependencias;

c) Imprimir todos los formularios correspondientes a la liquidación de haberes, distinguiéndolos con un número y las iniciales I. M. J. (Imprenta Ministerio — Justicia) y conservar, prolijamente el archivo de ellos;

d) No efectuar impresión alguna de otra clase ni trabajos, si no estuvieran expresamente autorizados por el Director o Contador de la Dirección General de Administración;

e) Hacer la encuadernación de los juegos mensuales de planillas y anualmente, la de legajos destinados al archivo de las mismas, en la forma que lo autorizase la sección Liquidaciones.

Art. 48. — Para la impresión de planillas generales o complementarias, deberá observar que le sean entregados firmadas por el respectivo liquidador y con el V.° B.° del encargado de la oficina de Despacho y que los mismos requisitos se llenen en la respectiva prueba de imprenta.

Art. 49. — La oficina de Despacho tomará las medidas pertinentes para que la devolución de las pruebas de imprenta antes mencionadas, se hagan de inmediato a objeto de evitar que la imprenta paralice el funcionamiento de la máquina a la espera de las correcciones que deban introducirse en las formas respectivas.

Art. 50. — Está también a cargo de la imprenta, el archivo ordenado de las líneas de linotipos con los nombres del personal, lo que se hará por incisos completos, llevándolos al que corresponda cuando el empleado que revista en uno de ellos, fuese trasladado a otro.

Art. 51. — En las planillas anuales, debe procurarse evitar la consignación de situaciones especiales de revista, tales como la liquidación de haberes por días, descuentos especiales del 50 % o diferencias de sueldo, etc., de modo que en cada caso aparezca sólo la situación normal con la que deba continuar revistando cada empleado durante el resto del año.

Art. 52. — Es también un deber de la imprenta, prever todas las situaciones eventuales que puedan dar lugar a atraso en la preparación de las planillas, que puedan serle imputables, como la falta de papel o material de cualquier clase, mal funcionamiento de las máquinas por cuya conservación debe velar, etc.

TITULO III

De la Sección Rendiciones de Cuentas

Art. 53. — Esta sección estará constituída por las siguientes oficinas:

I Rendiciones de Responsables;

II Rendiciones a Contaduría General de la Nación.

I. — Rendiciones de Responsables

Art. 54. — La oficina de Rendiciones de Responsables, tendrá a su cargo, la recepción, registro, examen y observación de las rendiciones de cuentas remitidas o presentadas por los responsables de la Dirección General de Administración, por los fondos recibidos de ésta y por las recaudaciones que pudieran haber efectuado y toda la información relativa a las tareas que le señala este reglamento.

A estos fines estará compuesta por las mesas siguientes:

a) De Revisación de Rendiciones por Sueldos;

b) De Revisación de Rendiciones por Gastos;

c) De Revisación de Rendiciones por Recaudaciones;

d) De Cuenta Corriente de Responsables o de Cargos;

e) De Contralor de la documentación de la División Tesorería;

f) De Entradas y Salidas de rendiciones, informes, certificación de servicios, correspondencia, expedientes, etc.

Art. 55. — Recibida por la mesa respectiva, de la de Entradas y Salidas, la rendición de cuentas de los responsables, efectuará las siguientes verificaciones:

a) Si ha sido presentada de acuerdo a los requisitos reglamentarios en cuanto al procedimiento y formularios establecidos por la Dirección;

b) Si los saldos con que se abre el balance, coincide con los de cierre del mes anterior;

c) Si se ha debitado al responsable cada una de las sumas recibidas;

d) Si la inversión de fondos ha sido realizada de conformidad de la liquidación practicada y cumplido todas las disposiciones legales;

e) Si los comprobantes de pago constituídos por los originales respectivos, se hallan extendidos en forma, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias;

f) Si las rendiciones por recaudación, vienen acompañadas de los duplicados de los recibos oficiales, que en cada caso deben haberse extendido a favor de los depositantes o contribuyentes;

g) Si se denuncian devoluciones, si se agrega el giro respectivo cuando se trate de responsables del interior, o el recibo de la división Tesorería, por su ingreso a la misma, si se tratase de responsables de la Capital.

Art. 56. — Practicadas estas verificaciones y no mereciendo la rendición de cuentas observación alguna, se procederá a comunicar a la dependencia, la aprobación provisoria, quedando supeditada la definitiva, a la que dicte la Contaduría General de la Nación.

Art. 57. — Por los giros desglosados de las rendiciones de cuentas presentadas por los responsables del interior, se confeccionará una relación por duplicado, que junto con dichos giros, se enviará a la oficina Intervención de Tesorería, la que devolverá firmado un ejemplar de la relación.

De la remisión de los giros a la oficina nombrada, se dejará constancia mediante un sello especial en la rendición de cuentas a que corresponde el giro desglosado.

Art. 58. — Diariamente, cada mesa formulará, también por duplicado, un parte diario de las rendiciones de cuentas recibidas, enviando un ejemplar a Teneduría de Libros para su registración en la contabilidad de cargos, pasando el otro, a la mesa de Cuentas Corrientes a que se refiere el apartado *d)* del artículo 54, para que proceda al descargo provisorio, previo el visto bueno del Contador, en la cuenta del respectivo responsable. En dichos partes se especificará:

a) El nombre del responsable;
b) El concepto de la rendición;
c) El saldo anterior si lo hubiera;
d) El cargo del mes;
e) El descargo por inversión;
f) El descargo por devolución
g) El total del descargo;
h) El saldo pendiente de rendición para el mes siguiente.

Art. 59. — No habiendo observaciones que formular sobre la rendición revisada, ésta, con la constancia en la carpeta del empleado que la revisó, se reservará para ser remitida, mensualmente, a la oficina de Rendiciones a la Contaduría General, para su agregación a la rendición de cuentas general, que debe presentarse a esa repartición, dentro de los plazos reglamentarios.

Art. 60. — En cambio, si la cuenta del responsable fuese observada, la mesa respectiva prestará la nota de observación o de devolución de la cuenta, sometiéndola a la firma del Director, previa intervención del Contador, archivándose la copia de la misma, en carpeta especial, para reclamar dentro del mes en que se haya hecho la observación, la restitución de la cuenta o la regularización de la situación objetada.

Art. 61. — Devuelta por el responsable la rendición observada, se la examinará nuevamente en todos sus aspectos, dándosele después el trámite que corresponda.

Art. 62. — Cada una de las mesas a que se refieren los apartados *a), b), c), d),* del artículo 54, ejercerán un contralor permanente sobre los responsables, para que éstos rindan cuenta dentro de los plazos reglamentarios, a cuyo fin coordinarán sus tareas para la efectividad de esa función, en la forma siguiente:

Las tres primeras mesas, en base de la planilla-registro de recepción de rendiciones de cuentas, proyectarán los pertinentes telegramas o notas con destino a los responsables morosos por rendiciones de sueldos generales, gastos generales y recaudaciones, que, con la visación del Contador, serán llevados a la firma del Director, remitiendo a la mesa de Cargos el duplicado. La última mesa proyectará los telegramas o notas reclamando las rendiciones de cuentas por sueldos complementarios, partidas especiales de gastos, etc., para la firma del Director, previa visación del Contador, y reservará el duplicado de los mismos.

Art. 63. — Las tres primeras mesas citadas en el artículo anterior, proyectarán, además, las notas o telegramas a remitirse a los responsables que correspondan por las observaciones formuladas a sus rendiciones de cuentas, sometiéndolos a la firma del Director, previa intervención del Contador, y reservando los duplicados en carpeta especial para las reiteraciones del caso.

Art. 64. — De cada rendición de sueldos, se desglosará el ejemplar del ajuste llamado «Oficina de Personal» y se remitirá al archivo a objeto de que con ellos se formen legajos especiales por dependencias para la certificación de servicios o informes sobre descuentos que se solicitan a la Dirección General de Administración.

Art. 65. — La mesa de Cuentas Corrientes de Responsables, que se denominará de Cargos, tendrá las funciones siguientes:

a) Registrar los cargos y descargos correspondientes a los responsables del Departamento, por sumas entregadas y rendidas, respectivamente; en base de las hojas contables de pago de la división Tesorería, para los cargos, y, por los partes de las mesas de rendiciones y las planillas de Intervención de Tesorería, por devoluciones, para los descargos;

b) Registrar los cargos por recaudaciones en base de los partes de la mesa respectiva y su descargo, por los partes de la misma y planillas de Intervención de Tesorería;

c) Registrar los cargos por observaciones a rendiciones de cuentas de responsables, en base de las resoluciones de la Dirección General de Administración o de la Contaduría General de la Nación;

d) Registrar todo otro cargo que correspondiese en virtud de resolución superior;

e) Vigilar, en coordinación con las mesas de rendiciones que los responsables rindan cuenta dentro de los plazos reglamentarios, formulando a este efecto, las notas o telegramas pertinentes conforme se establece en el artículo 62 de este reglamento;

f) Vigilar que los responsables remitan sus balances de cargos y descargos mensuales dentro de los plazos establecidos, formulando los telegramas pertinentes;

g) Confrontar estos balances con las cuentas corrientes respectivas, verificando también, si vienen acompañadas de la documentación pertinente y si consignan el número de fianza de los responsables, que si están de acuerdo, los archivará, con la firma del empleado revisor y el visto bueno del jefe de la mesa, en la carpeta que se llevará para cada responsable. Si de la confrontación surgiesen observaciones, formulará las pertinentes notas o telegramas que se pondrán a la firma del Director, previo visto bueno del Contador;

h) Practicar mensualmente un balance global de sumas y saldos para cada sección de responsables, cuyo total será confrontado con las cantidades acusadas por la contabilidad de cargos de la oficina de Libros y con el balance a igual fecha de la rendición de la Dirección a la Contaduría General, confeccionado por la oficina de Rendiciones a Contaduría General;

Trimestralmente, practicará el balance de los saldos de los responsables, a los efectos de su cotejo con los que acuse la rendición de cuentas a la Contaduría General, a igual fecha, de cuyo resultado se dará cuenta al Contador;

i) Llamar la atención del jefe de la oficina cuando comprobase errores, atrasos o demoras, en la remisión de los partes de las mesas de rendiciones o de las planillas de intervención de Tesorería, así como de cualquier otro hecho que evidenciase una situación de irregularidad en la marcha de la mesa y en sus relaciones con las demás;

j) Visar, de las liquidaciones de gastos con cargo, practicadas por la Delegación de la Contaduría General y recibidas de la oficina de Despacho, cuyos fondos se hayan percibido o estén por percibirse de Tesorería General, las que correspondan a responsables que hayan rendido cuenta de las sumas que le fueran remitidas anteriormente y que tengan prestada la correspondiente fianza;

Las liquidaciones visadas, serán pasadas de inmediato a la división Tesorería, para que la misma proceda a la entrega o transferencia de los fondos respectivos. Las liquidaciones no visadas, serán retenidas por la mesa, con conocimiento del Director y del Contador e irán despachándose a medida que los responsables rindan cuenta de los fondos anteriores, salvo que, por orden de la Dirección, se resuelva darles curso inmediato, en cuyo caso la mesa solicitará del superior que lo ordenó, su visación en la respectiva planilla;

k) Producir los estados relativos a la situación de responsables, que le fuesen requeridos por el Director, Contador e Inspectores de la Dirección, como así también, toda otra información atinente a sus funciones.

Art. 66. — La contabilidad a cargo de la mesa de Cuentas Corrientes de Responsables, dependiente de la sección Rendiciones de Cuentas, tiene por objeto, facilitar las tareas de las restantes de la misma sección y al propio tiempo, las de contralor de la contabilidad de cargos que se lleva en la Sección Teneduría de Libros. La de contralor de la documentación de la división Tesorería, a su vez, tiene como misión, el examen de los documentos relativos a pagos efectuados por dicha División, que recibe de la Teneduría de Libros, como contralor de las tareas ya efectuadas por esta última y la de su entrega posterior y oportuna a la sección Rendiciones a Contaduría General.

Art. 67. — La mesa de Revisación de rendiciones por Recaudaciones, verificará en cada una de ellas si lo percibido por ese concepto lo ha sido dentro de los plazos reglamentarios; si los recibos acompañados han sido extendidos en los formularios oficiales en riguroso orden cronológico y numérico; si se han devuelto los recibos inutilizados y si se ha efectuado el ingreso total del importe recaudado a la Tesorería de la Dirección General de Administración, y, por ésta, a la Tesorería General de la Nación.

Art. 68. — Esta mesa llevará asimismo, un libro en el que abrirá cuenta a cada dependencia recaudadora, por los importes que éstas declaren haber percibido, en formularios especiales que deberán elevar mensualmente en lo que respecta al mes, inmediato anterior, cuentas éstas que se descargarán por los ingresos a la Tesorería de la Dirección y que se controlarán con las rendiciones de cuentas y con las anotaciones de la oficina de Libros, mediante un balance mensual de sumas y saldos.

Art. 69. — Queda también a cargo de la misma mesa, otro libro destinado a debitar a las dependencias, los talonarios para recaudaciones que le sean remitidos sellados por la Delegación de la Contaduría General de la Nación, que se descargará, con los enviados con las respectivas rendiciones de cuentas y los que devuelvan las dependencias.

Art. 70. — La mesa de Revisación de Rendiciones por Gastos, separará de las mismas, las rendiciones de altas y bajas de especies y los duplicados de las órdenes de provisión y después de efectuado su contralor, las enviará a la oficina Libros, para su registración en la contabilidad patrimonial.

Art. 71. — La mesa a que se refiere el apartado *f)* del artículo 54, llevará un libro registro de las rendiciones de cuentas presentadas por los responsables ante la Dirección General de Administración, en el que consignará, además, de la fecha de entrada y nombre de la dependencia que lo hace, todo su movimiento interno hasta el momento en que pasen, ya aprobadas provisionalmente, a la oficina de Rendiciones a Contaduría General de la Nación.

A ese efecto, abrirá anualmente, un talonario de recibos de rendiciones, en el que registrará, correlativamente y a medida que vayan presentándose, el número asignado a la cuenta, el mes a que

corresponde y el monto rendido, tomados esos datos del balance respectivo, remitiendo o entregando el recibo al responsable, como simple constancia de su presentación.

II) Rendiciones de Cuentas a Contaduría General de la Nación

Art. 72. — Esta oficina tiene a su cargo la preparación, ordenación y envío a la Contaduría General de la Nación de la rendición de cuentas universal (de sueldos, gastos y recaudaciones), que por los fondos administrados dentro de cada mes, ya sea directamente por la Dirección General de Administración o por las dependencias del Ministerio o del Poder Judicial, debe presentarse a la mencionada repartición dentro de los 30 días subsiguientes a la expiración del período al que corresponda la administración de fondos.

De modo que se llamará rendición de cuentas del mes de enero, febrero, etc., a la que dé cuenta de los fondos administrados desde el primero al último día de cada mes y el plazo para la rendición será, respectivamente, todo el mes de febrero o marzo siguiente, etc.

Art. 73. — La ordenación de la comprobación de pagos se hará en el siguiente orden:

a) De sueldos abonados directamente por la Dirección General de Administración;

b) De sueldos abonados por los subresponsables;

c) De gastos abonados por la Dirección General de Administración;

d) De gastos abonados por los subresponsables;

e) De recaudaciones a cargo de la Dirección General de Administración;

f) De recaudaciones a cargo de los subresponsables;

Art. 74. — Las relaciones de sueldos y de gastos contendrán el columnado siguiente:

a) Número correlativo de orden;

b) Número del legajo respectivo;

c) Número del inciso;
d) Nombre de la dependencia;
e) Saldo pendiente del mes anterior;
f) Importe recibido;
g) Inversión que se descarga;
h) Devolución efectuada;
i) Saldo pendiente a nueva rendición.

Art. 75. — Las relaciones por recaudaciones que se confeccionarán de acuerdo al concepto de las mismas y con las denominaciones establecidas en la ley de presupuesto, cuentas especiales, etc., contendrán:

a) Número correlativo de orden;
b) Nombre de la dependencia recaudadora;
c) Importe de la recaudación;
d) Importes ingresados a la Tesorería de la Dirección General de Administración;
e) Importes ingresados a la Tesorería General de la Nación, con indicación de fechas.

Art. 76. — Se confeccionarán, asimismo, relaciones por los ingresos efectuados a la Tesorería General de la Nación, subdivididas en cuanto a sueldos, en devoluciones directas y devoluciones de subresponsables, registrándose en ellas el número de orden, fecha de ingreso y número del recibo de la Tesorería General de la Nación.

Art. 77. — Los ingresos a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, se registrarán en una relación independiente con expresión de la fecha e importe del depósito en el Banco de la Nación Argentina, subdividida en aporte por devoluciones directas y por devoluciones de los subresponsables:

Art. 78. — Con las relaciones a que se refieren los dos artículos anteriores, se formarán los respectivos legajos a los que se agregarán las boletas de depósito del Banco de la Nación Argentina, a favor de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles.

Art. 79. — En base a las relaciones, se confeccionará el Balance General de Cargos y Descargos, clasificado por columnas, como sigue:

En el «*Debe*»:

1.° Concepto: (sueldos, gastos, recaudaciones, etc.);
2.° Saldo anterior pendiente de rendición;
3.° Importe total de los fondos percibidos de Tesorería General durante el mes;
4.° Importe total de las recaudaciones ingresadas en la Tesorería de la Dirección General de Administración;
5.° Importe de otros fondos ingresados a la Tesorería de la Dirección General de Administración;
6.° Total del cargo de la Dirección General de Administración.

En el «*Haber*»:

1.° Importe que se descarga por inversión;
2.° Importe de las devoluciones directas a la Tesorería General de la Nación;
3.° Importe de los depósitos efectuados a la orden de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles;
4.° Importe de las recaudaciones ingresadas a la Tesorería General de la Nación;
5.° Importe de las devoluciones de subresponsables ingresadas a la Tesorería General de la Nación;
6.° Importe de las devoluciones de subresponsables depositadas a la orden de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles;
7.° Total del descargo de la Dirección General de Administración;
8.° Saldos que pasan a cuenta nueva, discriminados en:

a) En poder de la Dirección General de Administración;
b) En poder de los subresponsables.

Art. 80. — En las relaciones y balance general de cargos y descargos, las operaciones se consignarán, separadamente, por presupuesto, cuentas especiales, leyes y acuerdos.

Art. 81. — Las relaciones serán firmadas por el Jefe de la Oficina, con el visto bueno del Contador y el balance general por el Director, Contador y Tesorero.

Art. 82. — Confeccionado el balance general, al que se agregará el saldo certificado del Banco Central de la República, por la existencia de fondos en poder de la Dirección General de Administración, concordante con el que surge del Balance, se extenderá la nota de remisión a la Contaduría General de la Nación de acuerdo al tenor establecido por el Acuerdo de 10 de febrero de 1932 y antes de ser firmada por el Director, se remitirá al Contador con las relaciones para su firma, previa conformidad e intervención de la oficina Teneduría de Libros, en lo que respecta al balance general.

Art. 83. — Llenadas estas formalidades, se remitirán los legajos correspondientes a la rendición, al Archivo de la Administración y luego, las relaciones y el balance general, conjuntamente con el recibo otorgado por el citado archivo, a la sección Responsables de la Contaduría General de la Nación, a quien se requerirá el recibo, cuyo número correspondiente a la rendición de cuenta presentada, el que, previa toma de razón por la sección Teneduría de Libros, será archivado.

Art. 84. — Esta oficina llevará las cuentas a que alude el Acuerdo de Ministros de 10 de febrero de 1932, destinadas al contralor de las rendiciones de cuentas a revisar, recibidas de los subresponsables; de las reservadas que se envían a la Contaduría General de la Nación y de las aprobadas por ésta.

TITULO IV

De la Sección Inspecciones Administrativas

Sus funciones

Art. 85. — De conformidad a las disposiciones del Acuerdo General de Ministros de fecha 14 de julio de 1931, la Dirección General de Administración efectuará arqueos, intervenciones e inspecciones en las dependencias del Departamento, que tengan a su cargo el manejo de fondos.

Art. 86. — El personal destinado a esas tareas constituirá una sección especial, dependientes de la división Contaduría y sus

componentes serán designados con la denominación de Inspectores Administrativos.

Art. 87. — Los inspectores recibirán en cada caso órdenes expresas del Director, para efectuar las intervenciones a que se refiere este reglamento, correspondiendo al Contador, aconsejar a la Dirección, periódicamente, las que a su juicio deben llevarse a cabo.

Art. 88. — Esas inspecciones podrán ser periódicas y realizarse en fechas indeterminadas, sin previo aviso, por lo menos una vez en cada trimestre, o especiales, cuando existan motivos para ello, a juicio del Director o del Contador.

Art. 89. — Cuando la misión encomendada fuere con destino al interior, el inspector recibirá la correspondiente orden oficial de pasajes y los viáticos adelantados, de acuerdo a lo establecido en este reglamento.

Art. 90. — Cuando la misión a que se refiere el artículo anterior tuviese el carácter de gira, implicando la inspección de varias dependencias en distintas provincias, se le proveerá de talonarios de órdenes generales de pasajes.

Art. 91. — En los casos comprendidos en el artículo anterior, el inspector deberá remitir por correo —como pieza certificada—, inmediatamente después de realizado cada arqueo o intervención, el pertinente informe y comunicar, al mismo tiempo, telegráficamente al Director, la localidad a la cual se traslada para continuar su jira, dentro del itinerario que le haya sido trazado.

Art. 92. — En los casos de arqueos e inspecciones en dependencias de la Capital Federal y sus alrededores, el inspector deberá presentar su informe dentro de los tres días de realizados.

Art. 93. — En ambas ocasiones, los informes que produzca, serán estudiados por el Contador y elevados por éste al Director, manifestando su conformidad o aconsejando las medidas que entienda, deban adoptarse.

Art. 94. — La Dirección General de Administración, gestionará del Ministerio del Interior, el uso sin previo pago, para sus inspectores, del Telégrafo de la Nación.

Art. 95. — La Dirección General de Administración procurará evitar que un mismo inspector, efectúe intervenciones consecutivas en una misma dependencia del Departamento.

Art. 96. — Terminada la jira o misión especial que se les haya confiado, los inspectores se presentarán al Contador a fin de darle cuenta, verbalmente, sin perjuicio de su informe posterior por escrito, del resultado de la misma, reintegrándose así, a la oficina de que forma parte, en la que cumplirán el horario general establecido.

Art. 97. — En ningún caso podrá presentarse un inspector administrativo a una dependencia, sin estar munido de una credencial firmada por el Director de Administración o comunicación telegráfica, que se ratificará posteriormente, por nota, que lo autorice, expresamente, para llevar a cabo la intervención que se le haya confiado.

Art. 98. — Son también deberes de los Inspectores:

a) Actuar durante sus inspecciones con circunspección no exenta de firmeza;

b) Guardar reserva respecto a las intervenciones que se le encomienden, procurando que no se tenga conocimiento de ellas en las dependencias, directa ni indirectamente, hasta el momento de su presentación oficial;

c) Proceder, inmediatamente de llegada a su destino, a cumplir la misión encomendada, no admitiendo dilaciones que no estén perfectamente justificadas, debiendo comunicar telefónica o telegráficamente al Director, las causas que le impidan llevarla a cabo en el momento que le hubiere sido señalado;

d) Evitar compromisos de orden personal con los responsables a quienes deba fiscalizar en su gestión administrativa;

e) Proponer a la Dirección, las medidas o modificaciones en los actuales reglamentos o procedimientos administrativos que a su juicio signifiquen un mejoramiento de los mismos, a fin de asegurar mayor eficacia y contralor en el manejo de fondos o especies;

f) Estudiar en las inspecciones que realicen, en colonias, asilos, internados, etc., que produzcan o elaboren artículos de uso general, la posibilidad de que otras dependencias del Departamento, puedan proveerse de aquéllos;

g) Producir informes, evacuar consultas y atender asuntos que se relacionasen con sus funciones, siguiendo en todos los casos, las normas que le sugiera el Contador o el Director y especialmente, las de este reglamento;

h) Conservar cuidadosamente, el duplicado de su informes, archivando en un libro especial, una copia del balance del arqueo realizado, con indicación de la fecha en que lo efectuó y de aquélla en que lo elevó al Director;

i) Guardar reserva sobre las conclusiones a que hubiera llegado en sus intervenciones, de las que sólo podrá adelantar noticias al Contador y Director;

j) Atender, cuando no se encuentre en comisión juntamente con el restante personal asignado a la sección a que pertenece, todas las tareas relacionadas con sus funciones, y en general, todas las que se refieran a la marcha administrativa, contable de las dependencias, envío de instrucciones, circulares, contralor de la recaudación por derechos de exámenes, matrículas, certificados de estudios; asesoramiento a las dependencias, sobre la cantidad de valores que según las estadísticas deban distribuirse entre las oficinas de correos o sucursales del Banco de la Nación, para su expendio al alumnado, etc.

Art. 99. — En ningún caso podrán firmar los inspectores notas dirigidas a las dependencias, ni mantener correspondencia privada con éstas, por asuntos relacionados con la sección de que forman parte o derivados de las intervenciones que hubieran llevado a cabo.

I) *Determinación del cargo y modo de llevar a cabo la intervención:*

Art. 100. — Designado el inspector para efectuar un arqueo o intervención de una dependencia, comenzará por solicitar los siguientes antecedentes:

De la división Contaduría

1.° (Sección Rendición de Cuentas).

a) El saldo pendiente declarado en la última rendición presentada;

b) El detalle de los fondos entregados o transferidos y los ingresos que el responsable hubiera efectuado con posterioridad;

c) Si existen pendientes de aclaración o regularización, balances de cargos y descargos, cargos personales, etc.;

d) La indicación de deficiencias o errores que hubiese notado o fuese habitual en sus rendiciones, planillas de devoluciones, etc.;

e) La confirmación de que no existe otra cuenta presentada con posterioridad a la acusada por la mesa de cargos;

f) Si existen observaciones pendientes de aclaración o envío de documentos de rectificación correspondientes a rendiciones de cuentas anteriores, observadas por la Contaduría General;

g) La última comunicación de la dependencia acusando la recaudación habida y si existen aclaraciones solicitadas o a solicitarse, relativas a este concepto.

2.° (Sección Liquidaciones).

La indicación de cualquier situación a aclarar relativa a planillas de haberes o de gastos, fichas del personal, etc.;

3.° (Sección Teneduría de Libros);

La indicación de si existen antecedentes o datos solicitados o a solicitarse, relativos a especies del patrimonio de la dependencia;

4.° (De la Sección Suministros);

La indicación de si existen observaciones o aclaraciones pendientes o a formularse respecto de artículos solicitados por la dependencia a la Dirección o remitidos por ésta.

De la división Tesorería

El detalle de las sumas que se hubiesen entregado o transferido a la dependencia o que ésta hubiese ingresado en el día, vale decir, de lo que no estuviese comprendido en los antecedentes suministrados por la mesa de Cargos de la sección Rendiciones de Cuentas.

De la división Secretaría

La indicación de si existe pendiente de aclaración, ampliación, presentación, etc., fianzas de responsables, contratos de alquileres, e informaciones por expedientes, notas, etc.

Art. 101. — Cuando razones de urgencia requiriesen la partida inmediata del inspector para realizar el arqueo o intervención dispuesta, podrá prescindirse, como excepción, de los recaudos previos establecidos en el artículo anterior.

En estos casos, el inspector establecerá el cargo y el descargo en base de los libros y documentación de la dependencia, sin perjuicio de que, si lo considerase necesario, solicite telegráficamente a la Dirección General de Administración los datos para el mejor desempeño de su misión.

Art. 102. — Munido de los antecedentes a que se refiere el artículo 100, de la nota que deba servirle de credencial ante el jefe de la dependencia, el inspector se trasladará a la misma, procediendo a llenar su cometido dentro de las siguientes normas generales:

a) Verificación inmediata de la existencia en Caja (efectivo, cheques, giros, valores fiscales, etc.);

b) Examen de los libros de contabilidad que reglamentariamente, debe llevar la dependencia para comprobar si se lo hace en forma y están al día;

c) Verificación en base a los mismos, del saldo pendiente de la última rendición por sueldos, gastos, recaudaciones, etc., y de lo recibido con posterioridad, y su concordancia con los antecedentes en su poder, suministrados por la mesa de cargos y por la división Tesorería;

d) Determinar si la Tesorería, Habilitación, etc., de la dependencia tiene el manejo de otros fondos o entradas eventuales, que no se contabilicen, de lo que deberá dar cuenta;

e) Comprobar, si se encuentra al día, la rendición de cuentas por producido de talleres y si efectúa en los plazos reglamentarios, el envío del formulario especial respectivo;

f) Examinar los comprobantes de inversión en poder del responsable, estableciendo su monto y confeccionando relaciones detalladas de los mismos, por duplicado y separadas por concepto, ejercicio e imputación, cuyo original agregará al informe del arqueo, dejando el duplicado en poder del responsable;

g) Confeccionar el balance de arqueos que firmará el Habilitado o Tesorero y Contador, si lo hubiere, con el visto bueno del Jefe de la dependencia y el inspector interventor;

h) Solicitar de la respectiva sucursal del Banco de la Nación Argentina o Banco Central, el saldo de la cuenta corriente de la dependencia, el que debe concordar con el monto establecido en el balance;

i) Confeccionar una relación de los cheques librados y no cobrados, con indicación del número de los mismos, concepto del pago y nombre del acreedor, y pedir al Banco la ratificación de ese antecedente;

j) Confeccionar un acta relativa a la intervención verificada, en la que se hará referencia al resultado general del arqueo, fecha en que se ha efectuado, etc. y será firmado en la misma forma que el balance a que se ha hecho referencia precedentemente.

Art. 103. — Si el inspector encontrase documentación que a su juicio, no correspondiese ser aceptada como descargo para la dependencia o mereciese objeciones desde otros puntos de vista, la sellará como la restante y computará, detallándola en una relación independiente y dando cuenta de ello en su informe a la superioridad. Procederá del mismo modo con respecto a los fondos de terceros o provenientes de entradas eventuales cuyo manejo estuviese encomendado al Habilitado o Tesorero y no estuviese contabilizado.

Art. 104. — Cuando encontrase diferencias que no pueda determinar de inmediato, procederá a revisar las anotaciones de la contabilidad desde la fecha del último arqueo realizado de conformidad, y si la diferencia subsistiese, la computará como tal, dejando constancia de ello en el acta y dando cuenta de inmediato al Contador de la Dirección General de Administración.

Art. 105. — Si el inspector no pudiese dar término al arqueo en el día de su iniciación, procederá a reunir toda la documentación de pago que declare tener en su poder la dependencia y a guardarla en la Caja fuerte que precintará debidamente, sin hacerse cargo de sus llaves, labrando un acta en la que se declare tal situación, para reanudarlo al día siguiente, previa apertura de la Caja, en presencia del Habilitado o Tesorero y así sucesivamente, si la intervención durase más días.

En caso de no disponer de una Caja fuerte, puede procederse a empaquetar la documentación precintando en forma, cada paquete.

Art. 106. — Las recaudaciones posteriores a la última rendición de cuentas, se verificarán en base a los libros-talonarios destinados a ese efecto, debiendo tener en cuenta el inspector, su numeración correlativa, las fechas en que se han percibido los fondos, las de su ingreso a la Tesorería de la dependencia y la de su contabilización.

Art. 107. — Corresponde asimismo, a los inspectores administrativos, verificar lo siguiente:

a) Si la cuenta corriente del Banco está abierta a la orden conjunta de los responsables ante la Dirección General de Administración, que figuran en los libros de la mesa de Cargos de Rendiciones de Cuentas de la división Contaduría, salvo cuando se trate de dependencias del Poder Judicial, en aquellos casos en que los fondos se giran directamente a la orden de los señores jueces o presidentes de las respectivas Cámaras de Apelaciones;

b) Si los responsables, han otorgado fianza y ésta obra registrada en la división Contaduría;

c) Si los pagos en general, se efectúan mediante cheques a la orden.

II. — *Balance del arqueo*

Art. 108. — El balance del arqueo contendrá los siguientes datos:

En su *Debe:*

a) El saldo pendiente de la última rendición presentada a la Dirección General de Administración;
b) Las sumas recibidas por la dependencia a partir de la rendición última, discriminadas por conceptos y con expresión de fechas e importes;
c) Las sumas recaudadas directamente por la dependencia, por las que formará una relación independiente.

En su *Haber:*

El saldo resultante pendiente de rendición, constituído por:

I. — Existencia en efectivo en la Tesorería;
II. — Existencia en el Banco;
III. — Existencia en documentación de pago y egresos;

Art. 109. — El balance, extendido por duplicado, será firmado por el inspector, conjuntamente con los responsables, reservando el original para su elevación al Director General de Administración y dejando el duplicado para el archivo de la dependencia.

III) *Informe*

Art. 110. — Dentro de los tres días de la intervención practicada, el inspector deberá presentar al Contador para su elevación al Director General de Administración, su informe con la relación circunstanciada y objetiva de la misión cumplida, numerando correlativamente, todas sus fojas.

Acompañará al mismo:

a) El balance de Cargos y Descargos;
b) La planilla del Cargo;

c) La certificación del saldo expedida por el Banco y la relación de los cheques librados por la dependencia, no debitados por el mismo;

d) La relación de la documentación pagada y no rendida;

e) La relación de las recaudaciones cargadas en el balance;

f) Relaciones por diferencias halladas y otra documentación que considerase el inspector conveniente agregar.

TITULO V

De la Oficina de Contralor Contable de Provisiones

Art. 111. — Esta oficina tendrá a su cargo las siguientes tareas:

a) El examen y contralor de las órdenes de provisión extendidas por la sección Suministros;

b) El examen de los partes diarios del Economato, que éste le pasará acompañando toda la documentación comprobatoria del movimiento de entradas y salidas del día anterior: copias de los remitos, orden u órdenes de entrega, expedición, etc.;

c) Registrar en base de dichos partes y documentación, en forma abreviada, las anotaciones relativas a las entradas y salidas de artículos del Economato;

d) Comprobar la concordancia de sus anotaciones, con las que efectúa dicha oficina;

e) Hacer notar a la división Contaduría cuáles son los artículos recibidos que deban cargarse en la Contabilidad patrimonial;

f) Intervenir, juntamente con la división Secretaría, en los inventarios anuales del Economato.

Art. 112. — Esta oficina, aunque destacada en la Sección Suministros, dependerá directamente de la división Contaduría, a quien debe dar cuenta de todo error, deficiencia o falta de existencia que notare, para que se arbitren las medidas necesarias para regularizar la situación o se establezcan las responsabilidades pertinentes.

Art. 113. — Para el mejor cumplimiento de las obligaciones señaladas, adoptará las siguientes normas:

1.° Examinará si las órdenes de provisión extendidas concuerdan en un todo con lo adjudicado por los acuerdos de ministros, decretos o resoluciones ministeriales respectivos, a cuyo efecto recibirá de la sección Suministros, copias legalizadas de éstos, pudiendo solicitar en cualquier momento el expediente original de la licitación;

2.° Examinará diariamente, los partes del Economato con la documentación recibida del mismo, haciendo notar a éste cualquier diferencia que encontrare, puntualizando las causas que la hayan motivado y adoptando, de común acuerdo, las medidas tendientes a evitarlas, debiendo dar cuenta al Contador si sus indicaciones no fueran atendidas, o los libros no estuviesen al día;

3.° Abrirá una cuenta a cada artículo para registrar en forma global, la cantidad de entradas y salidas en cada fecha, a cuyo efecto llevará libros similares a los que impone este reglamento a la oficina del Economato, pero limitándose a consignar las entradas, por el total que acuse el parte diario para cada rubro, y las salidas, en la misma forma;

4.° Diariamente comprobará que las anotaciones de esos libros, concuerden con las efectuadas por el Economato y mensualmente, la igualdad de las existencias, con los saldos de los mismos;

5.° Quincenalmente enviará un parte a la división Contaduría, detallando los artículos recibidos, que por su naturaleza deban cargarse en la contabilidad patrimonial, estableciendo su precio unitario y total y considerando que deben registrarse en ella los muebles, artefactos, alfombras, cuadros, máquinas de escribir y calcular, etc., y excluirse los útiles de escritorio y los que se consumen fácilmente con el uso;

6.° Los partes a que se refiere el apartado anterior, se harán en planillas por triplicado cuyo original se destinará a la división Contaduría, el duplicado a la oficina de Economato y el triplicado al archivo de la oficina.

Art. 114. — Anualmente, intervendrá, con la división Contaduría, en el inventario general de las existencias de la oficina de Economato, que debe realizar el Jefe de ésta y dará cuenta al Contador de su resultado.

Art. 115. — Intervendrá asimismo, en los inventarios generales de muebles, etc., en la forma y oportunidades que se determinan en el reglamento de la oficina de Economato.

Art. 116. — Verificadas de conformidad las existencias del inventario anual, confeccionará las planillas del libro inventario, por triplicado, y con la firma del Jefe de la oficina y del Jefe de la oficina de Economato, se remitirá a la división Contaduría, la que, con su visto bueno, lo elevará al Director General de Administración.

El original, se archivará en la División Contaduría, el duplicado en la oficina de Economato y el triplicado se reservará en la oficina.

Art. 117. — Para la rapidez en el contralor del movimiento general de los artículos con respecto al inventario anual y su contabilización por la división Contaduría, la oficina llevará planillas de entradas y salidas, por sus valores totales, que se controlarán trimestralmente con los libros de la división nombrada.

CAPITULO III

De la División Secretaría

Art. 118. — Forman esta división las oficinas siguientes:

I. Mesa General de Entradas y Salidas;
II. Oficina de Despacho;
III. Oficina de Pasajes y Fletes, Contratos, etc.;
IV. Oficina de Economato;
V. Oficinas de Fianzas.

TITULO I

Mesa General de Entradas y Salidas

Art. 119. — Corresponde a esta Oficina:

1.° Recibir y registrar los expedientes, notas o asuntos que se presenten o envíen a la Dirección General de Administración;

2.° Los registrará, separándolos por letras (que correspondan a la inicial de la entidad o persona que los presente o envíe) y por orden numérico, los que sellará, fechará y foliará en el momemto de su recepción, anotándolos con indicación del número que se le haya asignado, día de la recepción, procedencia, asunto de que trate y destino;

3.° Hacer de cada asunto una carpeta especial o carátula, que llevará un color diferente para cada año;

4.° Registrar el movimiento o pase de una a otra oficina o dependencia;

5.° Dejar constancia de cada asunto, que se mande agregar o acumular a otro;

6.° Los relativos a embargos o cesiones de créditos, se comunicarán, separadamente de los restantes, en el mismo día de su recepción, con intervención de la división Secretaría, a la División Contaduría, a objeto de que ésta tome las medidas pertinentes, para evitar mediante su pronto diligenciamiento, que se eluda el cumplimiento de una retención ordenada o se perciba por otros, lo cedido;

7.° Cuidar especialmente el estricto cumplimiento de la Ley de Sellos y exigir la reposición del sellado que corresponda, antes de la notificación por los interesados, quedándole prohibido anticipar en estos casos, información verbal alguna;

8.° Preparar los memorandums llamando a los interesados a notificarse de las resoluciones respectivas, cuando transcurrieran más de ocho días sin hacerlo;

9.° Distribuir los expedientes entre las secciones de la Dirección General de Administración o remitirlos a las demás direcciones o a las dependencias a que correspondan, bajo firma del respectivo recibo, cuando se efectuase la entrega o la remisión a la mano o bajo certificada, a las dependencias, si el envío fuese por correo;

10. Entregar a los interesados que inicien directamente algún expediente, una tarjeta con indicación del número asignado al mismo, letra y objeto, lo que exigirá en cada caso para suministrar informes para su trámite;

11. No suministrar antecedentes sobre el trámite de asuntos, sino a los propios interesados o a sus apoderados legales, debiendo exigir en este último caso, la presentación del respectivo poder;

12. Conservar, debidamente ordenado, por año, el archivo de los expedientes en los que hubiera recaído resolución en ese sentido;

13. Reservar, en carpeta especial, los expedientes en que ello se hubiese ordenado, comunicando mensualmente al Secretario y éste, a su vez al Director, cuáles son los que se mantienen en esa situación y aconsejando en cada caso, lo que a su juicio proceda, para finiquitar su trámite;

14. Atender deferentemente al público, desde las 12 a las 15 horas, con excepción de los sábados en que el horario será de 9 a 11 y hacer llegar a la superioridad toda queja o reclamo que aquél interponga;

15. Llevar los libros que apruebe el Director, previo informe del Secretario;

16. Expedir en el día los telegramas y en el mismo, o a más tardar, en el siguiente hábil, las circulares y notas que enviasen las oficinas de las divisiones de la Dirección General de Administración, previo examen de si las mismas llevan fecha, firma y sello como así también de si van acompañadas las notas de los documentos adjuntos si hubiera, copiándolos en los respectivos libros copiadores, cuyos índices llevarán sin atraso y registrando la expedición de toda la documentación en los libros establecidos a este fin;

17. Dar cuenta al Secretario, con memorándum, para que éste lo lleve a conocimiento del Director:

a) De los expedientes que remitidos a las secciones del Ministerio a dependencias del Departamento para su informe, no hubiesen sido devueltos diligenciados por las mismas, luego de vencidos los términos siguientes:
De 5 días por las secciones del Ministerio;
De 8 días por las dependencias de la Capital;
De 12 días por las dependencias del interior;

b) Del atraso en el despacho de los asuntos que le están confiados o en la expedición de la correspondencia, cuando por lo elevado de su número, se viese en la imposibilidad de cumplir con la disposición establecida en el apartado 16, a fin de que el Secretario arbitre los medios para la regularización de ese atraso.

TITULO II

Oficina de Despacho

Art. 120. — Esta Oficina tendrá a su cargo:

1.° Proyectar los acuerdos de ministros, decretos, resoluciones ministeriales, notas, telegramas, circulares, providencias, etc., que correspondan como consecuencia de los asuntos que según este reglamento son de su incumbencia, como asimismo, conservar copia ordenada de todo ello;

2.° Proyectar y someter a la firma del Director, por intermedio del Secretario, dentro de las 24 horas de recibidos, los informes pertinentes en los oficios de embargos de sueldos o créditos, o cesión de éstos, con notificación a los demandados, pasando con carácter de urgentes, los relativos a embargos de sueldos, a la división Contaduría, para la pertinente anotación en los respectivos registros y contralor para la sección de Rendiciones de Cuentas;

3.° Proceder del mismo modo en lo que respecta a los pedidos de descuentos a favor del Banco Hipotecario Nacional, remitiendo en estos casos el original de la respectiva planilla, a la dependencia o a la Tesorería de la Dirección, según proceda, y el duplicado a la división Contaduría para su registro, y contralor de los descuentos;

4.° Proyectar los informes que correspondan en los expedientes de licencia de todo el personal de la Dirección General de Administración, ya sea por asuntos propios o por razones de salud, dejando establecido en cada caso, previo informe de la Dirección de Estadística, si las solicitudes están encuadradas en lo que establece la reglamentación general vigente;

5.° Proyectar para someter a la firma del Secretario, mensualmente, la comunicación al Director de las inasistencias de todo el personal de la Dirección, para que éste, en base a la información de los respectivos jefes de división, pueda disponer los descuentos que correspondan;

6.° Comunicar, separadamente, al mismo funcionario, la forma en que el personal ha hecho uso de las licencias que se le hayan concedido, haciéndole notar aquellos casos en que se hubieran excedido en su término, para que éste lo lleve a conocimiento del Director, a sus efectos;

7.° Preparar la memoria de la Dirección General de Administración en base a los antecedentes suministrados por las distintas divisiones y sección Suministros, siguiendo las instrucciones que dé el señor Director, por intermedio del Secretario;

8.° Proyectar las notas circulares, solicitando de las dependencias, el anteproyecto anual del presupuesto de las mismas, en las condiciones a que se alude en el apartado 9.°, artículo 6.°, título V, Capítulo I, de este Reglamento;

9.° Proyectar y distribuir todas las circulares dando a las dependencias las normas que dispusiera el Director y las que se proyectaran por otras divisiones enviando un ejemplar de las mismas al Contador, Tesorero u oficina que las necesite archivándolas después por año, y con numeración correlativa;

10. Someter diariamente, a consideración del Secretario, los distintos asuntos en que haya intervenido y deban ser llevados por éste a la firma del Director, o para que, por su intermedio, sean sometidos a la consideración del señor Ministro;

11. Estudiar y proyectar los informes correspondientes, en los expedientes de licitación pública y privada o compras directas que reciba de la sección de Suministros;

12. Llevar el archivo de todas las disposiciones legales y reglamentarias que se relacionen con la Dirección General de Administración y de toda otra de carácter general o especial, referente a la inversión de fondos, nombramientos, licencias, régimen de adquisiciones, contratos, pasajes, transportes, viáticos, etc.;

13. Proyectar las resoluciones aprobatorias de aquellos gastos relativos a avisos de licitación, edictos judiciales, u otros en que tenga intervención directa;
14. Llevar la lista actualizada de domicilio de todo el personal de la Dirección;
15. Proyectar y someter mensualmente, a la firma del Secretario una comunicación al Director, relacionando, por oficinas y por dependencias, los expedientes que según constancia de la Mesa de Entradas, estén en poder de las mismas vencidos los términos establecidos en el artículo 119, apartado 17 *a)*, a objeto de que en cada caso se tomen las medidas que disponga el Director;
16. Proyectar las notas correspondientes, remitiendo al Boletín Oficial, diariamente, las copias legalizadas de todos los acuerdos, decretos y llamados a licitación pública o privada, etc., que se originen en las distintas Divisiones de la Dirección General de Administración, a cuyo efecto, éstas le darán en cada caso la correspondiente intervención;
17. Gestionar de la Casa de Moneda, con la anticipación debida, la impresión de los valores fiscales destinados a la percepción de los derechos escolares para el año inmediato, por derechos de exámenes, matrículas, etc.;
18. Proyectar la nota, mediante la cual el Secretario dará cuenta al Director, referente al personal que no haya dado cumplimiento de las disposiciones de los decretos de fechas febrero 29 de 1912 y diciembre 28 de 1926, relativos a sus obligaciones en materia de elecciones nacionales o municipales, contenidas en el art. 289, apartado *b)*, Título II, Capítulo VII de este reglamento.

TITULO III

De la Oficina de Pasajes y Fletes, Contratos de Locación, etc.

Art. 121. — Esta Oficina tiene a su cargo:

1.° Estudiar los expedientes por los que se solicitan órdenes de pasajes o fletes y aquéllos en que las empresas de transportes, soliciten el pago de los servicios, estableciendo:

a) En lo que respecta a pasajes solicitados, si el pedido se hace a favor de funcionarios o empleados en misión de servicio; de traslados por disposición superior, en cuyo caso podrán contemplarse también los pedidos que se hagan para la traslación simultánea de los miembros de la familia que estén a su cargo, siempre que se trate del cónyuge, ascendientes o descendientes; de personas designadas para desempeñar cargos en lugares distantes al de su residencia; de presos judiciales y su custodia; de personal policial o judicial, en misión confiada por los señores jueces de los distintos fueros; y demás casos comprendidos en el Capítulo VI del presente reglamento;

b) Tratándose de fletes; si el servicio se requiere para el transporte de materiales, útiles, etc., de pertenencia del Estado, o de muebles de empleados trasladados, exigiéndose para esto último, un detalle de lo que se desee transportar, sujeto a lo que el Ministerio estime de equidad conceder;

2.° Proyectar las resoluciones ministeriales disponiendo la extensión de las respectivas órdenes de pasajes o fletes, o providencias denegándolas, según corresponda, comunicando a la división Contaduría, en el primer caso, el importe real o aproximado del servicio a autorizarse, para las anotaciones pertinentes en la contabilidad de previsión, a cuyo efecto, consultará las tarifas correspondientes o solicitará, directamente los informes que necesite;

3.° Extender las órdenes autorizadas;

4.° Llevar un libro registro, por dependencias, de los locales arrendados por el Estado, con indicación del expediente, fecha de firma del contrato respectivo y de su aprobación; término, importe mensual, derecho estipulado a prórrogas, en base al cual y con 90 días de anticipación a la fecha de su vencimiento, proyectará las notas de estilo a las dependencias, recordándoles esa situación, para que si debe optarse por su prórroga o hacerse nuevo contrato, modificarlo, etc., lo hagan saber o lo soliciten en oportunidad, en las condiciones que lo determina el Acuerdo de Ministros de fecha 11 de mayo de 1937;

5.° Registrar, asimismo, en dicho libro, los locales arrendados sin contrato, dejando constancia expresa de la causa por la cual no se hubiera celebrado;

6.° Informar todos los expedientes relativos a locaciones en general, velando siempre por el fiel cumplimiento del Acuerdo de Ministros antes citado y demás disposiciones reglamentarias y pasarlos por intermedio de la división Secretaría a la división Contaduría, antes de firmarse la correspondiente resolución aprobatoria, para la intervención que debe tomar ésta en la contabilidad de previsión;

7.° Llevar en las mismas condiciones determinadas en el apartado 4.°, un registro de todo otro contrato celebrado por el Ministerio, en el que hubiese tenido intervención la Dirección General de Administración, tales como los relativos a adquisiciones, transportes, etc., y dar cumplimiento a lo determinado por el Acuerdo de Ministros de 30 de marzo de 1932;

8.° Intervenir e informar los expedientes relativos a servicios sanitarios correspondientes a inmuebles de propiedad del Estado, proyectando, después del informe de la respectiva dependencia, la resolución aprobatoria para su liquidación, en la que deberá dejarse constancia, mientras no se incluya una partida especial en el presupuesto, de que ésta debe hacerse como ejercicio vencido;

9.° Pasar estos expedientes, al proyectarse la resolución aprobatoria, a la división Contaduría, para su oportuna inclusión en el mensaje al Honorable Congreso, solicitando fondos, o en orden general de pago, si existiera autorización previa del mismo;

10. Intervenir, igualmente, en los expedientes relativos a viáticos del personal, servicios extraordinarios y gastos por diligencias judiciales, autopsias, honorarios, etc., proyectando las resoluciones pertinentes y dando intervención oportuna a la división Contaduría, para las anotaciones correspondientes en la contabilidad de previsión;

11. Proyectar los decretos correspondientes, aceptando o desestimando los bienes raíces donados u ofrecidos al Estado, para la instalación o construcción de edificios destinados

a la instalación de establecimientos, institutos, etc., dependientes del Departamento de Justicia e Instrucción Pública, dando la intervención procedente a la Escribanía General del Gobierno, Ministerio de Obras Públicas y Contaduría General de la Nación.

TITULO IV

De la Oficina de Economato

Art. 122. — Esta oficina dependerá de la división Secretaría y tendrá un jefe responsable a cuyo cargo estarán los servicios relacionados con la recepción, custodia y entrega de los artículos que adquiera el Ministerio o reciba de terceros con destino a sus oficinas o para sus dependencias.

Art. 123. — De acuerdo con lo que establecen las disposiciones vigentes reglamentarias del artículo 92 de la Ley N.° 428, dicho Jefe deberá presentar la fianza correspondiente.

Art. 124. — Son elementos básicos para el contralor de la recepción de artículos los siguientes:

a) Las órdenes de provisión, cuya copia habrá recibido de la sección Suministros con el detalle y características generales de los artículos;
b) El remito de la casa proveedora extendido por duplicado, en el que exigirá conste el importe unitario y total de lo que se entrega;
c) Los pliegos especiales complementarios, si los hubiera, que deberá recibir de la sección Suministros;
d) La identidad del artículo provisto con la muestra recibida de la misma sección;
e) Copia legalizada del acuerdo, decreto o resolución de la compra;
f) Intervención de la Delegación de la Contaduría General de la Nación.

Art. 125. — Los remitos serán firmados por el Jefe de esta oficina, entregando el original al proveedor y reteniendo la copia que archivará correlativamente, agrupando los de cada proveedor.

Art. 126. — Cuando por la clase o índole del artículo suministrado necesite conocimientos especializados, solicitará el asesoramiento de los técnicos de la dependencia del Departamento que estén en condiciones de prestarlo.

Art. 127. — Cuando a su juicio fuera necesario o así lo dispusiera el Director, será autorizado para ejercer el contralor de la fabricación o elaboración de los artículos a suministrarse al Ministerio o dependencias de la Capital o del interior, en el propio local de comercio o fábrica de la firma proveedora.

Art. 128. — En los casos en que al hacerse la recepción de las mercaderías, no pudiera efectuarse su examen minucioso o faltare el dictamen de un técnico u otro requisito, lo hará con carácter condicional, dejando constancia de ello en el respectivo remito, mediante un sello con la leyenda «CONDICIONAL» o «A REVISAR», el que no podrá aceptarse a los efectos de la liquidación de la factura del proveedor.

Dicho recibo será canjeado por el definitivo, cuando se haya terminado la revisación u obtenido el informe favorable del técnico, etc., haciéndose el reclamo consiguiente, o rechazando la mercadería si hubiera diferencia en cantidad, calidad, etc.

Art. 129. — Cuando las adquisiciones que efectúe la sección Suministros para las dependencias deban entregarse directamente a éstas, les corresponde a ellas el mismo contralor bajo su responsabilidad, debiendo dejar constancia de su conformidad o disconformidad en la copia de la orden de provisión que habrán recibido del Economato y deberán devolver a la Dirección General de Administración por intermedio de la división Secretaría.

Art. 130. — En estos casos, la sección Suministros remitirá a las dependencias, las muestras que hubiesen servido de base para las adjudicaciones.

Art. 131. — Cuando el Economato deba expedir al interior o ello deba hacerse directamente por la casa proveedora, con cargo al Ministerio, solicitará de la empresa de transportes que ha de conducirlos, el precio aproximado del flete a pagarse y lo llevará a conocimiento de la división Contaduría, para la pertinente afectación en la contabilidad preventiva.

Art. 132. — Antes de someterse a la firma del Director, las órdenes oficiales de transporte, se enviarán a la división Contaduría para que deje constancia al dorso de las mismas, del asiento y fecha de la afectación preventiva hecha en base a la comunicación a que se refiere el artículo anterior.

Art. 133. — Deberá dar igualmente, intervención a la división Contaduría, cuando deban producirse gastos de traslación de efectos de una a otra dependencia de la Capital o interior.

Art. 134. — Es deber del Economato almacenar los artículos y materiales que le estén confiados, en las mejores condiciones posibles para su seguridad y conservación, como asimismo, llevar a conocimiento de la superioridad, cualquier situación perjudicial a éstas y aconsejar las medidas tendientes a mejorarlas.

Art. 135. — Las entregas de útiles de escritorio a las distintas oficinas del Ministerio, se harán mediante vales, original y duplicado, firmados por los Jefes de las mismas y las de máquinas de escribir, calcular, artefactos u otros materiales de valor, en la misma forma, pero con el visto bueno del Director de Administración.

Art. 136. — El Jefe del Economato está en el deber de consultar a la Dirección General de Administración, cuando a su juicio fuera excesivo o innecesario, el pedido de útiles que se le haga y a dejar constancia expresa al dorso en los vales antes mencionados, con lápiz tinta y carbónico, de los artículos que no se entregan por falta de existencia u otro motivo, reservando el original como comprobante de la entrega y devolviendo el duplicado a la oficina que hizo el pedido.

Art. 137. — Cuando se hicieran pedidos de útiles, etc., considerados indispensables y no hubiese existencia de ellos, el Economato lo comunicará a la superioridad con indicación de su costo aproximado, a fin de que si ella lo estima conveniente y existen fondos disponibles, pueda disponer su adquisición por intermedio de la sección Suministros.

Art. 138. — Antes del 1.° de enero y 1.° de julio de cada año, el Economato confeccionará nóminas por artículos, de los existentes, con indicación de los suministrados en el semestre anterior, las que remitirá a la sección de Suministros, para que las tenga en cuenta al hacer los correspondientes llamados a licitaciones, a efectuarse el 1.° de septiembre y 1.° de marzo de cada año.

Art. 139. — Corresponde a la oficina Economato, indicar cuáles son los depósitos de garantía que pueden devolverse por haberse cumplido satisfactoriamente por los adjudicatarios, la totalidad de las entregas que les corresponda hacer, como igualmente, cuáles son los que se encuentran en mora respecto a las que estaban obligadas a efectuar, y señalar aquellos casos en que se hubieran omitido extender órdenes de provisión.

Art. 140. — Cada vez que lo juzgue conveniente, el Jefe del Economato, ayudado por el personal a sus órdenes, efectuará inventarios parciales o generales de las existencias, y anualmente, uno general, con intervención del Jefe de la división Secretaría o empleado que éste designe y el Jefe de la oficina de Contralor Contable.

Art. 141. — Para la registración del movimiento y contralor de los artículos que recibiera y entregara y de los saldos existentes, llevará libros de hojas movibles, por ramos, con columnado independiente para las entradas y salidas, en los que se consignará:

a) Para las entradas: la fecha de su recepción, número y fecha de la orden de provisión; proveedor, artículo, cantidad, calidad, precio unitario y precio total;

b) Para las salidas: fecha de entrega, número de expediente, orden o vale respectivo, sección, artículo, cantidad, destino y saldo de existencia, que se obtendrá mensualmente.

Art. 142. — Llevará además esta oficina un libro de adjudicatarios, en el que se abrirá cuenta a cada razón social y se detallará el monto de cada adjudicación, concepto general y fecha del acuerdo de ministros, decreto, etc., un copiador de notas e informes y los biblioratos necesarios para el archivo de órdenes de provisión, pliegos de condiciones complementarias, etc.

Art. 143. — Todos los informes, notas, comunicaciones, etc., que deban hacerse al Director de Administración, demás oficinas o establecimientos del Ministerio, se dirigirán al Jefe de la división Secretaría, quien a su vez las elevará al director o proyectará la nota de estilo correspondiente.

Art. 144. — Queda a cargo del Economato, el inventario general de los muebles, cuadros, bibliotecas, artefactos, alfombras, maquinarias de imprenta, máquinas de escribir y calcular, etc. existentes en las distintas direcciones, secciones u oficinas del Ministerio,

inclusive el despacho del señor Ministro, que efectuará por primera vez, en presencia del Secretario y del Jefe de la Oficina de Contralor Contable y actualizará mediante las planillas que deben confeccionar quincenalmente ésta última.

Art. 145. — Dicho inventario que deberá tener lugar el 30 de junio se repetirá por lo menos, cada dos años o antes de ese término, si así lo ordenase el Director, sin perjuicio de hacerlo parcialmente cuando éste lo estimase necesario.

Art. 146. — Todos los muebles o artículos inventariados se señalarán con una chapa metálica numerada o de otro modo, según sus características, que permitan distinguirlos como de propiedad del Ministerio.

Art. 147. — El resultado de este inventario se registrará en fichas individuales por oficinas o locales y serán firmadas, como conformidad por los Jefes, encargados de las mismas o personas que designe la superioridad; tendrán el columnado especial necesario para detallar el artículo, su cantidad, marca, clase, etc., el valor estimativo unitario y total y la baja o motivo de ésta. La confección de estas fichas se hará por cuadruplicado y con el siguiente destino: el original para la división Contaduría, el duplicado para el Economato, el triplicado para la oficina de Contralor Contable y el cuadruplicado para la oficina o local respectivo.

Art. 148. — Las aludidas fichas serán fechadas y firmadas por los Jefes de Economato y Contralor Contable y empleado de la división Secretaría, que hubiesen realizado el inventario, llevando el visto bueno del Secretario.

TITULO V

De la Oficina de Fianzas

Art. 149. — Esta oficina tendrá a su cargo el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo de Ministros de 30 de enero de 1934 y decretos que lo complementan y resoluciones ministeriales de fecha 12 de abril de 1935, respecto a la obligación que tiene de prestar fianza todo el personal del Departamento y dependencias que tuviese

a su cuidado el manejo o custodia de fondos o especies de pertenencia del Estado, con excepción de los señores Jueces y demás magistrados judiciales.

I. — Presentación de las fianzas, sus requisitos

Art. 150. — Inmediatamente de producida la designación de un nuevo empleado o el cambio de funciones del personal en servicio a quienes alcance las disposiciones del Acuerdo de Ministros citado, la división Secretaría recibirá de la oficina de Despacho General de la división Contaduría, con destino a su oficina de Fianza, las comunicaciones pertinentes.

Art. 151. — Recibidas estas comunicaciones, la oficina de Fianzas enviará de inmediato a la dependencia en donde el empleado preste servicio, con nota a la Dirección, el formulario y las fichas complementarias adoptadas para cumplimiento del requisito expresado.

Art. 152. — La presentación de las fianzas se ajustará a las formalidades siguientes:

1.° El formulario de fianzas y los de fichas complementarias, deberán ser llenados por el fiador, en duplicado, sin raspaduras ni enmiendas, expresando de manera clara y completa los nombres del afianzado y el suyo propio, no aceptándose abreviaturas o iniciales, sino que los nombres han de coincidir exactamente con los respectivos documentos de identidad;

2.° Si el nombre del empleado afianzado, por la documentación de su identidad no concordase con el de su nombramiento, se procederá conforme con lo dispuesto en el artículo anterior, sin perjuicio de que el Jefe de la dependencia a que el empleado pertenece, o la oficina de fianzas, según el caso, den cuenta a la Dirección General de Administración de la modificación comprobada, a los efectos de la rectificación pertinente;

3.° La firma de la fianza y ficha complementaria deberán ser tramitadas por los mismos afianzados y autenticadas aquéllas por escribano público, juez de paz, institución bancaria, documentos estos que serán presentados al jefe de

la dependencia en la que desempeñe sus servicios, dentro de los términos establecidos en el apartado 10;

4.° Podrá admitirse que los garantes firmen tales documentos ante el Jefe de la dependencia a que pertenece el afianzado, debiendo aquél verificar la identidad del compareciente, mediante la documentación legal pertinente.

No regirá esta disposición cuando se tratase de la fianza correspondiente al jefe de la dependencia en cuyo caso la firma del garante deberá ser autenticada de acuerdo a la disposición del apartado anterior;

5.° Podrán admitirse distintos garantes hasta la concurrencia del monto de la fianza que corresponda prestar al empleado.

En este caso la responsabilidad de cada uno de los garantes, será proporcional al importe de su garantía;

6.° Los empleados de una dependencia no podrán constituirse en garantes de otros empleados de la misma;

7.° Los garantes que residiesen en una localidad distinta a la del afianzado, podrán presentar a una dependencia del Ministerio, de la localidad de su residencia, o a la más próxima en defecto de aquélla, la fianza y fichas complementarias, a los efectos de la verificación, de los datos declarados en estos documentos y de su posterior remisión a la Dirección General de Administración. Para ello, el empleado afianzado cuyo garante se encontrase en la situación enunciada, deberá comunicarlo a la Dirección General de Administración, por intermedio de la dependencia a que pertenezca, a fin de que la mencionada Dirección, indique la dependencia a la que el fiador deberá presentar la documentación relativa a su fianza;

8.° Para la presentación de la fianza por los que estén obligados a hacerlo, regirán los términos siguientes:

a) Antes de la toma de posesión del cargo o empleo para el que fuese designado, de conformidad al Acuerdo citado;

b) De 30 días a contar de la fecha de su notificación, si se tratase de renovación por vencimiento, sustitución o ampliación;

9.° Los jefes de dependencias, una vez recibidas las fianzas y fichas complementarias, verificarán la identidad del garante y la exactitud de los datos declarados de acuerdo a la categoría de la fianza otorgada, requiriendo de los mismos, la presentación de la documentación siguiente:

a) Si es propietario de inmuebles, el título de propiedad del o los inmuebles que posea por los que constituye su fianza. En los casos de que el propietario no tuviese el título de propiedad, por hallarse gravada por hipotecas a favor del Banco Hipotecario Nacional, la libreta otorgada por éste para el servicio hipotecario o, en su defecto, el recibo que acredite encontrarse el título en poder de dicha institución;

b) Si fuese propietario o socio de comercio o industria:
La constancia de su registro en la Dirección del Impuesto a los Réditos, como asimismo las referencias bancarias o de otras casas de comercio que puedan informar sobre él;
Si fuese socio, el contrato social que acredite su carácter de tal, sin restricciones para la prestación de fianzas o garantías; y las referencias bancarias sobre la firma;

c) Si es profesional:
El título universitario o del instituto nacional que lo expidió y referencia respecto del ejercicio de su profesión;

d) Si la fianza fuese constituída mediante depósito en el Banco Central de la República o Banco de la Nación, en efectivo o en títulos nacionales a la orden de la Dirección General de Administración;
El recibo, boleta o resguardo extendido por el Banco que acredite el depósito efectuado, que el Jefe de la dependencia retendrá al efecto de su posterior remisión a la Dirección General de Administración junto con los documentos de la fianza;

e) Si la garantía consiste en un bien raíz afectado a favor del Ministerio, sin interés:
El testimonio extendido por escribano público de dicha

afectación, que retendrá el Jefe de la dependencia para ser remitido posteriormente a la Dirección General de Administración con la fianza y fichas complementarias.

10. Cumplidas estas formalidades, los jefes de dependencias, llenarán la parte reservada a los mismos en la fianza y fichas complementarias y al dorso de estos documentos, se expedirán manifestando si a su juicio corresponde la aceptación por el Departamento, de la fianza presentada;
De inmediato elevarán esta documentación a la Dirección General de Administración, con nota de estilo y con las aclaraciones que consideren necesario agregar;

11. La oficina de Fianzas comunicará al Director, por nota, cuando algún empleado o funcionario no hubiese presentado la correspondiente fianza por intermedio de la dependencia respectiva, a fin de que sean adoptadas las medidas del caso, pudiendo aplicarse la suspensión del empleado hasta el término de dos meses y su cesantía o cambio de funciones por la superioridad;
Simultáneamente se efectuará esta comunicación a las divisiones Contaduría y Tesorería, a efecto de que ambas se abstengan de dar curso a nuevas entregas o transferencias de fondos a la dependencia cuyos responsables se encontrasen en el caso precedentemente enunciado, hasta tanto la Dirección resuelva lo que estime conveniente en la nota dirigida a la misma por la división Secretaría.

II. — De las fianzas recibidas

1.° Recibidas de las dependencias las fianzas, la oficina procederá a verificar si las mismas han sido llenadas de conformidad a los requisitos establecidos anteriormente;

2.° Cuando las fianzas recibidas correspondan al personal de la Dirección General de Administración, la oficina cumplirá las disposiciones establecidas respecto de las formalidades y certificación de los datos suministrados por los garantes;

3.° No existiendo reparo que formular y después de aprobadas, la oficina de Fianzas las registrará en un libro *ad hoc*, asig-

nándoles un número de orden, lo que será comunicado a la división Contaduría con destino a su sección de Rendiciones de Cuentas y Oficina de Despacho General y a la división Tesorería, enviando copia legalizada de la resolución aprobatoria a la dependencia para su conocimiento y el del interesado y para que consigne dicho número, si el afianzado tuviese manejo de fondos, en los balances de cargos y descargos que las dependencias deben enviar mensualmente a la Dirección General de Administración;

4.° Si las fianzas motivasen observaciones, la oficina proyectará la pertinente nota a remitirse por la Dirección a la dependencia, a los efectos de su regularización.

III. — De la verificación periódica de las fianzas

1.° En el mes de julio de cada año, la oficina procederá a la verificación de las fianzas en poder del Ministerio, en cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo de Ministros de fecha 30 de enero de 1934;

A este fin remitirá a las dependencias, con nota de la Dirección, las fichas especiales impresas para la verificación anual, según fuese la clase de las fianzas recibidas oportunamente de aquéllas y depositadas en la Dirección General de Administración;

2.° Dentro de los veinte días de su recepción, las dependencias procederán a devolver las fichas a la Dirección General de Administración, debidamente cumplidos los requisitos contenidos en las mismas;

3.° Recibidas por la oficina, ésta procederá a su examen cotejando la exactitud de sus datos, con los registrados en los documentos existentes en poder de la Dirección General de Administración y si de su examen no surgiera reparo alguno, aconsejará su aprobación;

No concordando los datos cotejados, proyectará la nota de devolución por la Dirección a la dependencia, a efecto de su regularización dentro del término de diez días;

4.° En los casos de garantes que residiesen en una localidad distinta de la que preste servicios el afianzado, se proce-

derá a la verificación establecida, por intermedio de la dependencia del Departamento existente en la localidad del garante o, si no la hubiese, por la más próxima;
Si residiesen en la Capital Federal, la verificación será realizada por la Dirección General de Administración por intermedio de la división Secretaría;

5.° La verificación de la fianza del jefe de la dependencia, será certificada por el funcionario que le siga en orden de categoría;

6.° No serán verificadas las fianzas que hayan sido presentadas durante el año.

IV. — De la renovación, modificación y terminación de las fianzas

1.° Deberá presentarse nueva fianza, en los casos siguientes:

a) Por vencimiento de la anteriormente presentada;

b) Por modificación de las funciones del empleado cuando éste fuese designado para un cargo que implique mayor responsabilidad, en el manejo o custodia de fondos o especies;

c) Por fallecimiento, inhibición o insolvencia del fiador o garante.

2.° Tres meses antes del vencimiento de las fianzas, se comunicará a los jefes de dependencias, por intermedio de la Dirección, el nombre del empleado a quien corresponde renovar su respectiva fianza, debiendo ser éste notificado inmediatamente de recibir aquéllos dicha comunicación;

3.° El empleado deberá presentar al Jefe de la dependencia, dentro del término de 30 días de la notificación, la documentación relativa a la nueva fianza por la que se habrán llenado los requisitos y formalidades establecidos, remitiéndose la misma a la Dirección General de Administración;

4.° Cuando se produjese la modificación a que se refiere el apartado *b)*, la oficina de Fianzas procederá a remitir a la dependencia, en base de la comunicación de la de Des-

pacho de la división Contaduría, la nota pertinente respecto de la fianza complementaria que deberá presentar el empleado hasta el monto que corresponda de acuerdo a sus nuevas funciones;

5.° En los casos previstos por el apartado *c)*, incumbe al afianzado, de conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo de fecha enero 30 de 1934, llevarlo a conocimiento del Jefe de la dependencia, inmediatamente de conocidas las circunstancias enunciadas, al efecto de su comunicación a la Dirección, sin perjuicio de que se efectúe dicha comunicación por la dependencia, cuando tuviese conocimiento directo del hecho ocurrido;

6.° Simultáneamente al cumplimiento de la formalidad aludida en el artículo anterior, el empleado procederá a la gestión de una nueva fianza en reemplazo de la anterior, observando los requisitos que correspondan a la misma;

7.° Son responsables de la falta de presentación oportuna de las fianzas o de su renovación, el Secretario de la Dirección en primer término, y el personal de la Oficina de Fianzas que no hubiesen cumplido con los requisitos establecidos en cada caso por este reglamento;

8.° Las fianzas subsisten, aun cuando el afianzado hubiese dejado de pertenecer al Departamento por cesantía, renuncia, jubilación o fallecimiento, o cesado en sus funciones de responsable por cambio de su situación, hasta tanto haya sido aprobada su gestión por la Contaduría General de la Nación;

9.° Las garantías después de aprobada la gestión a que se alude precedentemente, podrán ser retiradas por el fiador, mediante pedido escrito presentado ante la Dirección General de Administración;

Si se tratase de fianzas correspondientes a afianzados que hubiesen dejado de pertenecer al Departamento y no existiesen cargos pendientes en su contra, en base de lo informado por la división Contaduría, se procederá a su devolución bajo recibo firmado;

Si el fiador residiese en el interior, se le remitirá la fianza bajo certificado, dejando constancia en su solicitud del número del certificado;

Si la fianza que se retira corresponde al afianzado que continúa en sus funciones, se exigirá previamente a éste la presentación de una nueva en reemplazo de aquélla. Una vez presentada y aprobada la nueva fianza, cesa la vigencia de la anterior en cuanto a la responsabilidad futura del afianzado, pero subsistirá por la gestión del afianzado hasta la fecha de aceptación de la fianza que la reemplaza, por lo que no podrá hacerse su devolución, hasta después de aprobada la aludida gestión;

10. Las fianzas correspondientes a afianzados que hubiesen dejado de pertenecer al Departamento y cuya gestión hubiese sido aprobada por la Contaduría General de la Nación, serán reservadas hasta seis meses después, procediéndose a su devolución a pedido de los mismos o de los respectivos fiadores;
Si las mismas no fuesen reclamadas después de ese término, serán incineradas previa constancia, mediante acta, con intervención de la división Contaduría;

11. La oficina de Fianzas enviará a la división Contaduría, la relación de las fianzas que hayan sido renovadas, modificadas y terminadas.

V. — Del registro y custodia de las fianzas

1.° Para el registro de las fianzas, la oficina llevará los libros siguientes:

a) De Toma de Razón.
En el que se anotará toda fianza que se recibiese, con especificación de su número correlativo, fecha de entrada, nombre y apellido del afianzado, dependencia, remitente, categoría de la fianza, importe de ésta, fecha de aprobación o de devolución a la dependencia;

b) De Registro de Afianzados.
En el que se anotarán por orden alfabético de apellidos, a los afianzados, con especificación del número de orden bajo el cual quedará fichado cada uno de ellos, dependencia a que pertenece, categoría de la fianza, nombre y apellido del fiador, monto de la fianza y fecha de su aprobación;

c) De Registro de Fiadores.
En el que se anotarán por orden alfabético de apellidos los fiadores, su domicilio, con especificación del nombre y apellido de los afianzados, categoría de la fianza, su monto y folio del Registro de Afianzados, en el que se hallen anotados éstos;

d) De Registro por Clases.
En el que se agruparán, por clases, las fianzas aprobadas, con especificación de nombres y apellidos de los fiadores, monto de las fianzas e indicación del folio del Registro de Fiadores;
Las hojas o folios de los Registros de Afianzados y de Fiadores, serán rubricadas por el Director;

e) De Vencimientos.
En el que se registrará por años, y dentro de éstos por meses, el vencimiento de las fianzas de los responsables.

2.° Las fianzas aprobadas serán archivadas por la oficina en cajas de seguridad, numeradas y en orden correlativo;
Cuando por razones de mejor información fuese necesario extraer el documento de su correspondiente archivo, el Jefe de la sección dejará constancia escrita bajo firma de la causa o motivo de su extracción;

3.° Con respecto a las fianzas correspondientes a afianzados que han cesado en su carácter de responsables, la sección llevará dos archivos:

a) Uno destinado a las fianzas de afianzados, cuya gestión estuviese pendiente de aprobación por la Contaduría General;

b) Otro destinado a las fianzas en condiciones de ser devueltas a los respectivos garantes.

CAPITULO IV

De la División Tesorería

Art. 153. — Esta división tiene a su cargo la recepción, entrega y custodia de los fondos, valores y documentación que corresponda al Ministerio y de los que hubiesen sido instituídos a su favor en carácter de depósito, fianzas, legados, etc.

Art. 154. — No podrá efectuar pagos sin la previa intervención de la división Contaduría y Delegación de la Contaduría General de la Nación, ni recibir fondos ni valores sin que haya intervenido la primera, así como tampoco, aceptarlos privadamente de particulares o de otras dependencias o entidades.

En los pagos o transferencias con cargo, comprobará previamente por la mesa de Cargos de Rendición de Cuentas de la división Contaduría, si los responsables o dependencias tienen fianza y si han rendido cuenta de los fondos que se le hayan entregado con anterioridad.

Art. 155. — Componen esta división las oficinas siguientes:

I. — De Mesa de Entradas y Salidas;

II. — De Contralor y Preparación de Pagos y Devoluciones;

III. — De Cobros y Pagos.

TITULO I

De la Oficina de Mesa de Entradas y Salidas

Art. 156. — Corresponde a esta oficina:

a) La recepción y registración de notas, expedientes, órdenes de pago internas de sueldos y de gastos y sus respectivas liquidaciones, pedidos de timbres postales, etc., en libros clasificados con expresión de la fecha de su entrada y salida, número, concepto, importe y demás detalles, documentación que deberá remitir diariamente, a la Oficina de Contralor y Preparación de Pagos y Devoluciones;

b) La registración de la documentación de recaudación e inversión de fondos que deba enviarse a la división Contaduría, con el parte diario de las operaciones realizadas;

c) El despacho de la correspondencia, expedientes, comunicaciones y expedición de timbres postales para las dependencias.

TITULO II

De la Oficina Contralor y Preparación de Pagos y Devoluciones

Art. 157. — Corresponde a esta oficina el contralor de todos los expedientes y planillas de cobros, pagos y devoluciones a cuyo efecto, recibida la documentación que la Oficina de Entradas y Salidas le remitirá diariamente, procederá a su examen general a objeto de comprobar si la misma reúne los requisitos reglamentarios.

Estará formada por las mesas siguientes:

1.° Contralor de Ingresos;

2.° Contralor de Egresos;

3.° Cheques, Transferencias y Depósitos;

4.° Contabilización de Operaciones;

5.° Despacho.

1.° De la Mesa de Contralor de Ingresos

Art. 158. — Entenderá esta mesa:

a) En las extracciones de fondos de la Tesorería General, mediante los pedidos numéricos conformados por la Delegación de la Contaduría General de la Nación; en toda recaudación que corresponda percibirse en las devoluciones de los responsables de la Dirección General de Administración; en los depósitos en garantía de licitaciones y en los que se hicieren en concepto de fianzas, donaciones, etc.;

b) Examinará si los cheques, giros, boletas de depósitos, o resguardos de títulos, vienen extendidos en forma, y si se acompañan las planillas demostrativas del concepto por el cual se realiza el ingreso, en las que dejará constancia de su conformidad, extendiendo el recibo a entregarse al depositante que someterá a la firma del Tesorero y remitirá todo ello a la Oficina «Intervención de Tesorería» de la división Contaduría, a los efectos de la intervención pertinente.

2.° De la Mesa Contralor de Egresos

Art. 159. — Entenderá esta mesa:

a) En el examen de todas las órdenes de pago internas, planillas y expedientes liquidados por la Delegación de la Contaduría General de la Nación para su pago o transferencia, con o sin cargo, comprobando si viene agregada la documentación pertinente;

b) Comprobado ello, separará diariamente, las planillas o expedientes recibidos que estén en condiciones de pago inmediato, por existir en poder de la Tesorería los fondos respectivos, y haberse cumplido por la oficina de Responsables los requisitos exigidos por los artículos 62 y 65, apartados *e)* y *j)*, y los sellará pasándolos a la Mesa de Cheques, Transferencias y Depósitos, reservando para su oportunidad, aquéllos por los que no se hubiesen recibido fondos.

3.° De la Mesa Cheques, Transferencias y Depósitos

Art. 160. — Corresponde a la misma, la preparación de los pagos, transferencias, devoluciones y depósitos que deban efectuarse de acuerdo a la documentación recibida de la mesa Contralor de Ingresos y Contralor de Egresos.

A tal efecto, extenderá los cheques:

1.° Si los pagos fuesen de sueldos del Ministerio a la orden del empleado;

2.° Por los descuentos practicados sobre los haberes de este personal del modo siguiente:

a) Por Réditos: al portador, cruzado con el sello «Contabilidad» y a su dorso, el de «Para depositar en la Cuenta Impuestos a los Réditos del Trabajo Personal»;

b) Por cuotas Banco Hipotecario Nacional; al portador, cruzado con el sello «Contabilidad» y a su dorso el de «Para ser depositado en la Cuenta Banco Hipotecario Nacional, orden Presidente»;

c) Por depósitos judiciales: a la orden del Banco de la Nación Argentina, cruzado con sello «CONTABILIDAD» y a su dorso, el de «EXCLUSIVAMENTE PARA DEPÓSITOS JUDICIALES»;

d) A favor de asociaciones: Nominal y cruzado con el sello «No NEGOCIABLE» para depositar en la cuenta a cuyo nombre está extendido;

e) Por transferencias a la Dirección General de Administración a la orden de la misma y cruzado con el sello «No NEGOCIABLE» para ser depositado en la cuenta a cuyo nombre está extendido;

3.° Si los pagos fuesen de sueldos generales a dependencias de la Capital o pueblos suburbanos, los cheques a la orden conjunta de los responsables con excepción de las del Poder Judicial que lo serán a favor de las mismas, cruzados con el sello «No NEGOCIABLE» para ser depositado en la cuenta a cuyo nombre está extendido;

4.° Si fuesen transferencias para dependencias o responsables de la Capital e interior;

a) Con cuenta abierta en agencias del Banco de la Nación Argentina, en la Capital, el cheque por el importe total de las transferencias a la orden de este Banco, cruzado con el sello «CONTABILIDAD» y a su dorso, con el de «EXCLUSIVAMENTE PARA TRANSFERENCIAS DE CUENTAS», confeccionándose las correspondientes planillas;

b) Con cuenta abierta en el Banco Central de la República, el cheque a la orden de este Banco, cruzado con el sello «CONTABILIDAD» y a su dorso, el de «EXCLUSIVAMENTE PARA TRANSFERENCIAS DE CUENTAS», confeccionándose las respectivas boletas de depósito a favor de cada una de las dependencias para las cuales se disponga la transferencia;

5.° Si los pagos fuesen cuentas de proveedores, FF. CC., etc., a la orden de las personas, entidades, o empresas determinadas en las respectivas liquidaciones, cruzados con el

sello «No Negociable» para ser depositado en la cuenta a cuyo nombre está extendido;

6.° Los pagos de viáticos, con cheques a la orden y los reintegros de Caja Chica y servicios extraordinarios, al portador en efectivo;

7.° Si fuesen por subsidios o subvenciones, cheques o transferencias a la orden conjunta de dos de sus autoridades por lo menos;

8.° Si fuesen devoluciones:

a) De fondos a la Tesorería General de la Nación, los cheques a la orden de la misma y cruzado con el sello «No Negociable» para ser depositado en la cuenta a cuyo nombre está extendido;

b) De aportes a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, cheque al portador, cruzado con el sello «Contabilidad» y a su dorso, el de «Para ser depositado en la cuenta de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles», confeccionándose la correspondiente boleta de depósito;

c) De depósito en garantía de licitaciones, se extenderá el endoso, a favor de la persona, entidad o firma depositante.

Art. 161. — Corresponde también a esta mesa, confeccionar:

1.° Las boletas o formularios pertinentes para el depósito de los descuentos por embargos, cuotas Banco Hipotecario Nacional e Impuestos a los Réditos, deducidos de los haberes del personal del Ministerio;

2.° Las boletas respectivas para depositar en la cuenta de la Dirección General de Administración en el Banco Central de la República, el importe de los cheques y giros recibidos por la Mesa de Cobros, con excepción de los que correspondan a devoluciones de responsables, los que se endosarán a favor de la Tesorería General de la Nación;

3.° Los recibos que deberán firmar las dependencias de la Capital y pueblos suburbanos, por la recepción de fondos destinados al pago de sueldos de las mismas;

En los casos de los apartados *a), b), c), d)* y *e),* del inciso 2.° del artículo 160, verificar la exactitud de la documentación extendida, que someterá a la firma del Tesorero y remitirá a la Oficina «Intervención de Tesorería» a los efectos pertinentes.

4.° De la Mesa Contabilización de Operaciones

Art. 162. — Está a cargo de esta mesa, la confección, por duplicado, del parte diario de la Tesorería, que comprenderá todas las operaciones del día, de ingresos y egresos de fondos y valores, en base de la documentación remitida por la Oficina de «Cobros y Pagos». Dicho parte constará de los saldos existentes del día anterior, en Caja y Bancos, discriminados en incisos de Presupuesto, Leyes y Acuerdos de Gobierno; los ingresos y egresos del día y los nuevos saldos que pasan al siguiente, determinando por éstos, cuáles corresponden a fondos disponibles y cuáles se hallan afectados a devoluciones que deban efectuarse.

Firmado por el Tesorero, se remitirá el parte a la Oficina de «Intervención de Tesorería» la que dejando constancia de su conformidad, y con el visto bueno del Contador, lo someterá a la firma del Director. La documentación pertinente, se entregará a la oficina de Mesa Entradas y Salidas, para su remisión a la división Contaduría.

Llevará además esta mesa, el libro de las cuentas corrientes de la Dirección General de Administración, con el Banco Central y Banco de la Nación Argentina, en el que registrará, los depósitos y los cheques librados, estos últimos en base de las libretas de cheques que a ese efecto le entregará la mesa respectiva, verificando el movimiento diario con las planillas de los Bancos y el saldo mensual de las cuentas, con los conformes remitidos por los mismos; el libro de timbres postales, en donde registrará la entrada de los valores recibidos de la Dirección General de Correos y Telégrafos y la salida de los mismos con destino a las dependencias del Departamento, con especificación de los distintos valores entregados o remitidos; y el de Depósitos de Licitaciones, en el que registrará los que se recibiesen de la sección de Suministros y los que fuesen devueltos, debidamente ordenados por orden alfabético.

5.° De la Mesa de Despacho

Art. 163. — Corresponde a la misma:

a) Informar los expedientes y notas recibidas de la oficina Mesa de Entradas y Salidas;

b) Atender la provisión de timbres postales a las dependencias del Departamento en base de los pedidos formulados por las mismas y autorizados por el Director, a cuyo efecto, cuidará de asegurar la existencia permanente de los distintos valores que pudiesen necesitar aquéllas;

Revisado el pedido y el recibo que la dependencia deberá firmar por la provisión de los timbres, se remitirá el formulario a la mesa Contabilización de Operaciones para su toma de razón, la que lo enviará a la oficina Intervención de Tesorería a este efecto;

c) Confeccionar las notas con destino a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Banco Hipotecario Nacional, por los depósitos efectuados en sus respectivas cuentas y las que correspondan dirigirse a la Contaduría General de la Nación por las devoluciones que se ingresen en la Tesorería General, agregando las planillas respectivas;

d) Citar a los proveedores y licitantes que deban concurrir a la Tesorería para hacer efectivo sus créditos o retirar sus depósitos y preparar las notas o hacer las comunicaciones pertinentes, a las dependencias que deban retirar fondos o a cuyo favor se hayan hecho transferencias;

e) Confeccionar las rendiciones de cuentas de sueldos del personal del Ministerio y del de oficinas cuyo pago individual se halle a su cargo en base a la documentación remitida por la Mesa de Contabilización de Operaciones;

f) Comunicar en el día a las dependencias y otros responsables del Departamento, telegráficamente o por nota y con firma del Director, las transferencias y giros de fondos efectuados por la División con destino a las mismas.

TITULO III

De la Oficina de Cobros y Pagos

Art. 164. — Corresponde a esta oficina, la ejecución de las operaciones preparadas por la de «CONTRALOR Y PREPARACIÓN DE PAGOS Y DEVOLUCIONES» en las que haya intervenido la división Contaduría, por cuya oficina de «INTERVENCIÓN DE TESORERÍA» se le remitirá directamente la documentación pertinente con expresa constancia de su intervención.

Estará formada por las mesas de Cobros y de Pagos.

1.° DE LA MESA DE COBROS

Art. 165. — Le corresponde:

a) Percibir de la Tesorería General de la Nación, los cheques que correspondan a los pedidos numéricos de fondos, de los que tomará nota pasándolos de inmediato a la mesa «CONTRALOR DE INGRESOS» la que, a su vez, los remitirá a intervención de la división Contaduría;

b) Desglosar de la documentación por recaudaciones o devoluciones de responsables, recibida de la oficina «INTERVENCIÓN DE TESORERÍA», el recibo firmado por el Tesorero, que entregará al depositante, reservando los cheques o giros, o percibiendo el efectivo y remitiendo la restante documentación a la mesa «CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES»;

c) Registrar en un libro manual, las operaciones de ingreso con indicación del nombre de la persona o identidad depositante, concepto, importe y si lo ha sido mediante valor postal, bancario o en efectivo, cuyo original remitirá a la mesa «CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES» una vez terminadas las operaciones del día, junto con los valores percibidos.

2.° DE LA MESA DE PAGOS

Art. 166. — Le corresponde:

a) Verificar si la documentación recibida, consta de la previa intervención de la división Contaduría y si se halla agregado el cheque por el importe que corresponda;

b) Comprobar la identidad de la persona que concurre para percibir fondos, o la devolución de sus depósitos de garantía por licitaciones, requiriendo la presentación de documentos fehacientes, después de lo cual, le hará firmar el pertinente recibo en la liquidación o formulario respectivo, verificando si ha sido debidamente extendido y con el estampillado de ley que corresponda, remitiendo la documentación con el cheque ya firmado por el Tesorero, a la oficina «INTERVENCIÓN DE TESORERÍA».

Una vez devuelta por esta oficina, procederá a la entrega al interesado, del cheque, o recibo endosado de su depósito de garantía, según sea, remitiendo la documentación a la oficina «CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES», así que haya registrado la operación en el libro manual;

c) Entregar al personal del Ministerio, después de firmado en la planilla el recibo de su importe, sus respectivos cheques, a cuyo efecto se distribuirán éstos, por repartición, en base de la planilla de haberes;

d) Depositar, en sus destinos respectivos, los descuentos y devoluciones establecidos en las planillas de haberes, dentro de los plazos determinados por el Acuerdo de 14 de julio de 1931;

e) Hacer efectivas las transferencias de fondos enunciadas en el mismo artículo, archivando el ejemplar de la planilla sellada por el Banco, una vez que la mesa DESPACHO haya efectuado las comunicaciones pertinentes;

f) Confeccionar, diariamente, una nómina de los pagos no efectuados, que entregará al Tesorero;

g) Registrar en un libro manual, de hojas desprendibles, las operaciones diarias de pagos y devoluciones, con indicación del nombre de la persona o identidad a quien se ha hecho efectivo, el concepto e importe, excepción hecha de los pagos o transferencias correspondientes a planillas de sueldos o gastos a favor de dependencias, en cuyo caso se consignará el importe y el nombre de éstas, remitiéndose el original de la mesa de «CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES» una vez terminadas las operaciones del día, junto con los recibos y documentación correspondientes;

h) Atender la Caja Chica que estará confiada al Tesorero, en las condiciones establecidas por Decreto de 21 de diciembre de 1933, no pudiendo efectuar pago alguno sin la expresa autorización de ese funcionario.

CAPITULO V

De la Sección Suministros y Régimen de Adquisiciones

TITULO I

De sus funciones

Art. 167. — La atención de las necesidades del Ministerio y sus dependencias en materia de provisión de artículos de uso y consumo, útiles, maquinarias, muebles, víveres, etc., y la reparación de efectos, estará a cargo de la sección Suministros.

Art. 168. — Sin embargo, cuando por razones de distancia, productividad local u otras fundamentales, convenga que el llamado a licitación pública o privada se haga en el lugar en que funcionan las dependencias el Ministerio autorizará a éstas para hacerlo directamente, con la obligación de encuadrarse, dentro de lo posible, en todas las normas determinadas en este capítulo para la sección Suministros.

Art. 169. — Las adquisiciones destinadas a las dependencias del Poder Judicial, están comprendidas en las que deben hacerse por la sección Suministros siguiendo las prescripciones de este reglamento, salvo en aquellos casos en que, por resolución expresa de la autoridad superior de quien dependan, se hubiera dispuesto apartarse total o parcialmente de las mismas.

Art. 170. — No rige la presente reglamentación, para las adquisiciones no mayores de trescientos pesos que se hagan por las dependencias del Ministerio o del Poder Judicial, con los fondos que se le entregan para gastos asignados a las mismas.

Art. 171. — La Dirección General de Administración, asesorada por la Inspección General de Enseñanza, Dirección General de Institutos Penales, Patronato Nacional de Menores y otras dependencias que juzgue ella conveniente consultar, proyectará y someterá a la aprobación del señor Ministro, periódicamente, una reseña sobre los tipos de bancos escolares, material didáctico, maquinarias, útiles de trabajo, muebles, etc., su calidad, forma y demás características, que convenga adoptarse uniformemente, según su destino, categoría de la dependencia, etc., y la sección Suministros no podrá licitar, ni aceptarlos, cuando no reúnan las condiciones aprobadas salvo autorización expresa del señor Ministro.

Art. 172. — Para el mejor desempeño de las funciones de esta sección, estará constituída por las siguientes oficinas:

1.° De Licitaciones Públicas;

2.° De Licitaciones Privadas y Compras Directas.

Art. 173. — La oficina de Licitaciones Públicas entenderá en la tramitación integral de las adquisiciones; llevará libros en donde registrará en orden cronológico y en numeración correlativa por año, las licitaciones que hubiesen sido realizadas; producirá informes, atenderá y despachará la correspondencia, con firma del Director, y en general todo lo que se relacione con su cometido.

Art. 174. — La oficina de Licitaciones Privadas y Compras Directas, entenderá en la tramitación de las mismas, llevará libros en los que registrará su movimiento en la misma forma establecida para las licitaciones públicas, y el registro de proveedores a que se refiere la Resolución de la Dirección General de Administración de 24 de noviembre de 1937, atenderá y despachará la correspondencia, y en general, todo lo relativo a su desempeño.

Art. 175. — La sección Suministros, además del personal idóneo necesario, tendrá un jefe responsable que estará obligado a hacer presente por escrito al Director de Administración, las objeciones a que puedan dar lugar, en cada caso, desde el punto de vista reglamentario, las órdenes que hubiera recibido para adquirir directamente, proyectar adquisiciones, llamar a licitación, etc., lo que por sí solo implicará la suspensión momentánea del trámite de la orden, expediente, etc., respectivos en el que sólo podrá continuar interviniendo cuando el Director le haga saber, también por escrito, que ha tomado conocimiento de su comunicación, y así se le ordene.

Art. 176. — Sin perjuicio del contralor que le corresponde a la división Secretaría, la división Contaduría estará representada en la sección Suministros, a esos mismos efectos, por la oficina de Contralor Contable, cuyas funciones se reglamentan en el Capítulo II, Título V.

Del Régimen de Adquisiciones

Art. 177. — De conformidad a lo establecido en el Capítulo V, Título I, la sección Suministros procederá a las adquisiciones, reparaciones, etc., para proveer a las necesidades del Ministerio y de sus dependencias, de acuerdo a las normas siguientes:

TITULO II

De las Licitaciones Públicas

Art. 178. — Corresponde hacerse licitación pública en todos los casos de adquisiciones cuyo monto exceda de $ 5.000 moneda nacional, ya se trate de un solo artículo o de varios, que correspondan a una o varias dependencias, o a pedidos de provisiones menores, cuyo valor conjunto exceda de esa suma.

Al efectuarse los llamados, deberán llenarse los requisitos y condiciones que determinan las cláusulas de los pliegos aprobados por Acuerdo de Ministros de fecha 3 de octubre de 1938, y darse en oportunidad, a la Comisión Reguladora de Gastos, la intervención que le corresponde y a la división Contaduría para las anotaciones previas en la contabilidad de previsión, (Capítulo II, Título I, Artículo 11).

Art. 179. — La sección Suministros llamará a licitación pública el día 1.° de septiembre de cada año y 1.° de marzo del subsiguiente, para la adquisición de artículos destinados a las dependencias del Departamento ubicadas en la Capital Federal y de los establecimientos: Colonia-Hogar «Ricardo Gutiérrez» de Marcos Paz; Colegio «Carlos Pellegrini», de Pilar; Instituto Tutelar de Menores «Cayetano Zibecchi» de Juárez y Asilo Tutelar de Menores «Mariano Ortiz Basualdo» de Las Armas y útiles de escritorio, etc.,

para las diversas oficinas del Ministerio, correspondientes al primero y segundo semestre del año, respectivamente.

La licitación para artículos destinados a la Cárcel de Tierra del Fuego en Ushuaia, se hará para todo el año y su llamado se efectuará el 1.° de septiembre del anterior, simultáneamente con las enunciadas en el artículo precedente.

Art. 180. — Para el debido cumplimiento del artículo anterior, las dependencias citadas en el mismo en primer término, remitirán a la Dirección General de Administración antes del 1.° de julio de cada año, la relación de los artículos que deban comprenderse en la licitación para el primer semestre del siguiente y antes del 1.° de enero, la que corresponda a los artículos necesarios para el segundo semestre.

La Cárcel de Tierra del Fuego enviará a la misma ante del 1.° de julio de cada año, la nómina de los que fuera a necesitar para todo el año siguiente.

Art. 181. — Las nóminas antes citadas, deberán presentarse clasificadas, por ramos, de acuerdo con la distribución de las partidas respectivas del presupuesto general de gastos, mencionando los distintos artículos por orden alfabético e indicando la calidad, cantidad, clase, dimensiones, etc., que deban tener y su costo estimativo y teniendo en cuenta que este último no puede exceder del límite de los recursos asignados para cada partida.

Art. 182. — Por los artículos o útiles destinados a diversas direcciones, secciones y oficinas del Ministerio, la oficina de Economato confeccionará y remitirá a la sección Suministros, la correspondiente nómina en base a los datos que proporcionen los consumos habidos en el año inmediato anterior y saldo de artículos existentes.

Art. 183. — Recibidas dichas nóminas, la sección Suministros procederá al estudio y clasificación general de los artículos a licitarse, formulándose en base a ellas, relaciones que elevará a consideración y aprobación del Director de Administración.

Art. 184. — Obtenida ésta, la sección Suministros procederá a la impresión de las planillas de artículos, a que se refiere el artículo 1.° del pliego general de bases y condiciones, clasificándolos por ramos y orden alfabético, con indicación de cantidad y unidad de cotización, agregando las columnas necesarias para los precios

unitarios y totales por renglón, que deban consignar los proponentes, como así también, las condiciones especiales complementarias del pliego general que deban cumplirse por los mismos, después de lo cual proyectará el decreto llamando a licitación para el día indicado en el artículo 171 señalando la hora de apertura de las propuestas, de lo que tomarán conocimiento la división Secretaría, para la intervención de su competencia.

Art. 185. — Los avisos llamando a licitación se publicarán con la anticipación y durante los días señalados en el pliego general de bases y condiciones y enunciarán los ramos de los artículos a adquirirse, dependencias para las cuales se destinan, semestre a que corresponde la licitación, local, día y hora en que tendrá lugar la apertura, haciendo referencia también a la obligación de presentar muestras, condiciones generales del pliego que servirá de base, etc.

La publicación en el Boletín Oficial se hará en forma amplia, y, en los diarios, mediante un resumen con referencia a la efectuada en éste.

Art. 186. — Independientemente de esas publicaciones, el Jefe de la sección hará colocar en sitios visibles de la misma, los avisos publicados y procurará, por otros medios, que la licitación llegue a conocimiento del comercio en general.

Art. 187. — En el día y hora señalados en el llamado a licitación, se procederá a declarar abierto el acto en presencia del Escribano Mayor de Gobierno, Secretario y Jefe de la sección Suministros y proponentes que hubieran concurrido, procediéndose a efectuar la apertura de las propuestas y a labrar el acta pertinente.

Art. 188. — Efectuado ello y reunidos todos los antecedentes, la sección Suministros examinará las propuestas presentadas e informará respecto de las que deban ser aceptadas y las que deban rechazarse por no reunir los requisitos exigidos por el pliego general de bases y condiciones, procediendo después, a la confección del cuadro comparativo de precios, por duplicado, en base al cual y teniendo en cuenta los precios cotizados, muestras presentadas y calidad de las mismas, etc., el Jefe de esa sección y la junta de ecónomos integrada por los de la Penitenciaría Nacional, Cárcel de Encausados, Asilo de Corrección de Mujeres, Institutos de Sordomudas y Sordomudos y Ciegos, Colonia-Hogar «Ricardo Gutiérrez» de Marcos Paz, «Carlos Pellegrini» de Pilar, Instituto Tutelar de Menores

MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION BIBLIOTECA

Mujeres «Cayetano Zibecchi» de Juárez, Instituto Tutelar de Menores «Mariano Ortiz Basualdo» de Las Armas, y Dirección General de Institutos Penales, aconsejarán las adjudicaciones más convenientes para el Departamento, dejando debidamente señaladas las muestras, con etiquetas selladas y firmadas por los citados ecónomos y el Jefe de Suministros.

Art. 189. — Con el cuadro comparativo y el dictamen por ella producido, la sección Suministros remitirá el expediente a revisión de la Dirección Secretaría para que, si no tiene que objetar, proyecte la elevación del mismo a la Contaduría General de la Nación para la intervención que le compete.

Art. 190. — Devuelto por ésta, pasará, siempre con la intervención previa de Secretaría, a la sección Suministros, para que proyecte el decreto o acuerdo pertinente, hecho lo cual intervendrá la División Contaduría para efectuar la afectación definitiva correspondiente.

Art. 191. — Si la división Secretaría tuviera reparos que oponer a las adjudicaciones aconsejadas por la sección Suministros, elevará el expediente al Director dejando constancia de su opinión, para que éste resuelva lo que estime pertinente.

Art. 192. — Una vez aprobada la licitación por decreto o Acuerdo de Ministros, según el caso, la sección Suministros comunicará a los adjudicatarios, el resultado de la misma y expedirá las órdenes de provisión correspondientes, remitiendo copia legalizada del acuerdo o decreto a la división Contaduría y a las oficinas Economato y Contralor Contable.

Art. 193. — La sección Suministros desglosará, de los expedientes de licitación, los depósitos de garantía que remitirá a la oficina Intervención de Tesorería, mediante una planilla por triplicado, cuyo ejemplar duplicado firmado por el Tesorero e intervenido por la división Contaduría, agregará al expediente como constancia del desglose efectuado y retención en la división Tesorería, en custodia, hasta tanto proceda su devolución.

Art. 194. — Una vez aprobada la licitación, la sección Suministros comunicará a la división Contaduría cuáles son los depósitos que corresponden devolverse a los proponentes no adjudicatarios.

Art. 195. — Las órdenes de provisión serán extendidas por triplicado, sin raspaduras ni enmendaduras y antes de firmarse por el Director de Administración, deberán ser revisadas por la oficina de Contralor Contable, con el expediente a la vista, la que pondrá en ellas su conformidad.

El original es destinado al adjudicatario, el duplicado para la oficina de Economato y el triplicado para la oficina de Contralor Contable

Art. 196. — Las órdenes de provisión serán extendidas:

a) Por la Dirección General de Administración, cuando la mercadería deba ser recibida por el Economato con destino a las oficinas del propio Ministerio o deba ser remitida por intermedio de la sección de Suministros, a las dependencias;

b) Por las dependencias, en todos los casos en que no medie algún inconveniente de orden material para que la recepción se haga directamente por ellas, quedando entonces bajo su responsabilidad exclusiva, el contralor de las mercaderías con las muestras, cantidad, etc.

Art. 197. — Las muestras correspondientes a artículos adjudicados se enviarán a la oficina de Economato, bajo recibo, a los efectos del contralor de la provisión de los mismos por los adjudicatarios, con las etiquetas fijadas en las mismas, selladas y firmadas por los miembros integrantes de la junta de ecónomos y Jefe de Suministros.

De las muestras presentadas correspondientes a artículos adjudicados con destino a dependencias del Departamento, una de aquéllas y por cada artículo, será fraccionada en tantas porciones cuantas sean las dependencias a las que corresponde la provisión, a los efectos del contralor por parte de éstas en la recepción de las mercaderías.

Estas porciones serán cerradas, selladas y firmadas por el Jefe de Suministros y por los ecónomos que intervinieron en las adjudicaciones y remitidas a las dependencias a tales fines.

Art. 198. — Los llamados a nueva licitación por artículos no adjudicados, se harán, con las mismas formalidades establecidas en el presente reglamento.

Art. 199. — Las licitaciones para el racionamiento y otras necesidades de las cárceles de los territorios nacionales, se efectuarán por las respectivas direcciones, con la debida intervención de la Dirección General de Institutos Penales, debiendo aquéllas solicitar con anticipación la correspondiente autorización y elevar al mismo tiempo las nóminas de los artículos, con su costo estimativo.

Art. 200. — Cuando se trate de dependencias ubicadas fuera de la Capital y la provisión de los artículos de consumo que necesitasen, resulte más conveniente adquirirlos en la localidad o zona de su asiento, por ser de producción o fabricación local, las licitaciones públicas se harán por las respectivas direcciones, en las mismas condiciones que se establecen en el artículo anterior.

Art. 201. — En los dos casos, las referidas dependencias, deberán remitir los expedientes, con las actuaciones de la licitación pública que hubieran realizado y con el dictamen de las adjudicaciones aconsejadas, cuadros comparativos, etc., cuyo estudio hará la división Secretaría, la que no oponiendo reparo u observación, lo pasará a Suministros para que proyecte el decreto o acuerdo aprobatorio, dando intervención a la división Contaduría para la afectación del gasto y corriendo en lo demás, el trámite ya establecido.

Art. 202. — Independientemente de las licitaciones públicas semestrales a que se ha hecho referencia precedentemente, se harán llamados de la misma clase, durante el año, cada vez que sea necesario realizar adquisiciones que excedan de la suma de $ 5.000 m/n, y en general, se reunirán distintos pedidos, siempre que con ello no se afecte al buen servicio, para incluirlos en las licitaciones públicas especiales.

Art. 203. — Al efecto establecido en el artículo anterior, las dependencias, formularán sus pedidos con tiempo suficiente y con los detalles más minuciosos posibles de las características de los artículos y su costo aproximado, a fin de proporcionar a la Dirección General de Administracción los elementos de juicio necesarios para llevar a cabo las licitaciones de que se trata, sin inconvenientes de ninguna naturaleza.

Art. 204. — Las dependencias que tengan personal técnico, se harán asesorar por el mismo, a los fines indicados precedentemente, dejando constancia de su intervención.

Art. 205. — Antes de pronunciarse sobre las adjudicaciones que correspondan en los casos de licitaciones públicas, la junta de ecónomos y el Jefe de Suministros, deberán tener especialmente en cuenta la opinión de las dependencias interesadas, ya sea mediante la información del ecónomo respectivo o del Jefe de las mismas, o mediante el envío de los antecedentes de la licitación a ellas, para que produzcan su informe.

Art. 206. — Establécese el término de 45 días, como plazo dentro del cual la sección Suministros deberá elevar al Director General de Administración, por intermedio de la división Secretaría, los expedientes de licitaciones públicas con las adjudicaciones aconsejadas y de 20 días para las restantes licitaciones.

Si por cualquier circunstancia, dicho plazo fuese considerado insuficiente, deberá solicitar su ampliación, expresando las razones.

TITULO III

De las Licitaciones Privadas

Art. 207. — Corresponde efectuarse licitaciones privadas con los requisitos y en las condiciones que establecen las cláusulas de los pliegos aprobados por el Acuerdo de Ministros de fecha octubre 3 de 1938, en los casos siguientes:

a) Cuando realizados dos llamados a licitación pública, no se hubiesen presentado proponentes, no hubiese habido competencia de precios por presentarse uno solo (salvo que medien las circunstancias previstas en el Acuerdo de Ministros N.º13.757 de 3 de octubre de 1938, Art. 20 del pliego de licitaciones públicas) o éstos no hubieran resultado aceptables;

b) Para atender necesidades del Ministerio y sus dependencias, no previstas en los dos llamados reglamentarios del año, por sumas mayores de $ 300 y que no excedan de $ 5.000 m/n.

Art. 208. — En los casos a que se refiere el apartado *a)* del artículo anterior, la sección Suministros procederá a efectuar el

llamado en base a la reproducción de las planillas, nóminas, etc., de artículos que se utilizaron para las licitaciones públicas.

Art. 209. — Todo pedido de adquisición de artículos, muebles, etc., que se haga por las distintas oficinas o dependencias, antes de ser informado por la sección Suministros, deberá pasar por intermedio de la división Secretaría a la oficina de Economato, para que informe si hay existencia de ellos o de otros similares que puedan proveerse.

Art. 210. — Consentido el llamado a licitación privada, con el monto estimativo de la adquisición a efectuarse y la pertinente intervención de la división Secretaría, el expediente pasará a la división Contaduría para la afectación previa en la contabilidad de previsión e intervención de la Comisión Reguladora de Gastos si el monto excediera de quinientos pesos moneda nacional.

Art. 211. — No mediando inconveniente, se procederá al llamado, siguiendo las prescripciones de este reglamento, pliego de condiciones, etc., y después, en general, las normas ya establecidas para las licitaciones públicas con la pertinente intervención de las divisiones Secretaría y Contaduría hasta la aprobación de la licitación por resolución ministerial o decreto del P. E., según corresponda, excepción hecha de la junta de ecónomos que no tendrá lugar en estos casos.

Art. 212. — Cuando la licitación corresponda a artículos cuyo examen y adjudicación requieran conocimientos especializados, entenderá en ella una comisión constituída por los jefes de la sección Suministros y oficina de Economato y un técnico de una dependencia del Departamento en la Capital, que en cada caso, indicará el Director General de Administración.

Art. 213. — La sección Suministros licitará los artículos, señalando con toda amplitud las características y condiciones que deban llenar, de manera que constituyan éstas, la base indispensable a que deban ajustarse las ofertas y tenerse en cuenta para las adjudicaciones.

A este efecto, la sección deberá solicitar a la Dirección, cuando lo necesitase, el asesoramiento de técnicos para la confección de las condiciones que deban reunir los artículos que se liciten, lo que será resuelto por la misma en cada oportunidad. Deberá además,

tener en cuenta en todos los casos, la lista o reseña de tipos de artículos aprobados por el Ministerio, a que se alude al tratar de las licitaciones públicas.

Art. 214. — Sin perjuicio de las licitaciones privadas que efectuase la sección, podrán hacerlo las direcciones de dependencias del Departamento, por razones de urgencia o por tratarse de artículos producidos o fabricados en la zona o lugar en que actúan, previo pedido de autorización a la Dirección General de Administración, indicando los artículos, costo aproximado y razones que aconsejen esa medida.

Art. 215. — Realizada la licitación por la dependencia y devuelto por ésta el expediente con las adjudicaciones aconsejadas, la sección Suministros examinará las actuaciones y lo remitirá a la división Secretaría, junto con el decreto o resolución aprobatoria proyectados, la que, si no tiene observaciones que formular, pasará el expediente a la división Contaduría, para la afectación definitiva del gasto, siguiendo luego el trámite para su firma.

Art. 216. — Las oficinas que deban intervenir en el trámite de expedientes de licitaciones privadas, no podrán demorar más de ocho días su despacho, debiendo solicitar autorización especial cuando para hacerlo necesitaran un plazo mayor.

Art. 217. — Los llamados a licitaciones privadas se efectuarán con sujeción a los períodos siguientes:

a) Por 3 días, cuando su importe sea de $ 301 hasta $ 2.500 moneda nacional;

b) Por 4 días, cuando su importe sea de $ 2.501 hasta pesos 5.000 moneda nacional.

Art. 218. — Sin perjuicio de la publicación en el Boletín Oficial de los llamados a licitación privada para los suministros de $ 301 a 5.000 m/n., establecida por este reglamento, la sección Suministros solicitará cotización de precios directamente, del mayor número de casas inscriptas en el Registro de Proveedores del Ministerio, dejando constancia de los expendientes respectivos de esa invitación, mediante las tarjetas a que aludía la resolución de la Dirección General de Administración de 11 de diciembre de 1936.

TITULO IV

De las Compras Directas

Art. 219. — Corresponde la compra directa:

a) Cuando la adquisición no exceda de $ 300 m/n.;

b) Cuando mediaran las excepciones aludidas en los apartados segundo, tercero, quinto y sexto, del Art. 33, Ley 428;

c) Sin embargo, siempre que sea posible hacerlo sin perturbar el buen servicio, estas adquisiciones se harán por la Dirección General de Administración previo pedido de precios a tres casas, por lo menos, de las que figuran en el registro de proveedores del Departamento;

Las restantes dependencias del Ministerio efectuarán ese concurso de precios, en las mismas condiciones, pero por adquisiciones mayores de pesos 100.

Art. 220. — Con el pedido formulado por la dependencia o por la Dirección, Sección u oficina del Ministerio e informado por la oficina de Economato respecto de la no existencia del artículo en depósito y su costo estimativo, la sección Suministros consultará al Director de Administración, sobre la conveniencia de proceder a su compra.

Art. 221. — Obtenida su conformidad, solicitará precio del artículo a la casa proveedora y en base de ello, remitirá el expediente a intervención de la división Contaduría para la afectación del gasto, después de lo cual, lo elevará a la Dirección, a los efectos de su aprobación y firma.

Enviará copia legalizada de la resolución, a la división Contaduría y a las oficinas de Economato y Contralor Contable y expedirá la pertinente orden de provisión para la firma del Director, previa visación por la última oficina nombrada.

TITULO V

Del pliego de bases y condiciones para las licitaciones públicas

Art. 222. — Considérase incorporado a este reglamento, el pliego de bases y condiciones para licitaciones públicas y privadas

aprobado por el Acuerdo de Ministros N.° 13.757 de 3 de octubre de 1938, cuyos artículos se consignan como apartados y cuyo texto dice:

Sustitúyase en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública el pliego de bases y condiciones para las licitaciones públicas, que fuera aprobado por Acuerdo de Ministros de fecha febrero 25 de 1916, por el que a continuación se consigna:

LICITACIONES PUBLICAS

Presentación de las propuestas

1.° Las propuestas serán formuladas en dos ejemplares, original y duplicado, preferentemente en las planillas o nóminas impresas que la Dirección General de Administración entregará o remitirá a quienes las solicitasen, aceptándose también las extendidas en papel simple debiendo hacerse en forma clara, legible, sin raspaduras o enmendaduras, las que, si hubiesen, se salvarán al pie de la propuesta mediante la aclaración o ratificación que corresponda;

2.° Corresponde al ejemplar original de la propuesta el siguiente sellado:

a) De $ 7,50 m/n. en reposición de la primera foja de las planillas, entendiéndose hasta cincuenta renglones solamente, los que se consideren contenidos en una foja de acuerdo a la Ley de Sellos; y de $ 2.00 m/n. en reposición de las fojas subsiguientes por cada cincuenta renglones, si el total de la propuesta excede de cinco mil pesos moneda nacional;

b) De $ 2.00 m/n. cada una de las fojas, de cincuenta renglones, si el total de la propuesta no excede de la suma de cinco mil pesos moneda nacional;

c) De una estampilla de $ 0,20 m/n., cualquiera que sea el importe total de las mismas, las propuestas firmadas por poder o por autorización;

3.° Los duplicados de las propuestas estarán exentos de sellado;

4.° Las propuestas podrán formularse por todos o parte de los artículos licitados, con indicación de si es de industria nacional o extranjera, y los precios deberán ser por cantidad neta, libre de envases, gastos de acarreo y embalaje;

5.° Las propuestas no deberán contener condiciones que modifiquen las establecidas por la licitación, ni fijar precios por unidades, que no sean las del sistema métrico decimal, plazos de mantenimiento de los mismos, forma de pago, reintegro por modificación de derechos aduaneros, diferencias de cambio, etc. Los precios se efectuarán en moneda nacional, pudiendo cotizarse en moneda extranjera en las condiciones establecidas por el Acuerdo de Ministros de julio 27 de 1934 y disposiciones posteriores que lo modifican;

6.° Los proponentes se obligan a mantener sus propuestas por el término de ciento veinte (120) días a contar desde el momento de la apertura de las mismas;

7.° Cada propuesta será acompañada de un certificado de depósito en efectivo o en títulos nacionales, efectuado por el proponente en el Banco de la Nación Argentina, cuenta Licitaciones, a la orden de la Dirección General de Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, por una suma igual al 3 % del valor total de los artículos ofrecidos, calculada sobre el mayor valor cotizado en el caso de dos o más precios que se hicieren por un mismo artículo;

8.° Las propuestas se presentarán en un sobre cerrado herméticamente, en cuyo exterior se indicará el objeto de la licitación, día y hora de su apertura, dirigido al Director General de Adminstración del Ministerio, pudiendo ser entregadas personalmente hasta una hora antes de la apertura contra entrega del recibo correspondiente, en la Secretaría de la mencionada Dirección. Si fuesen remitidas por correo, deberán serlo por pieza certificada, con la anticipación necesaria;

9.° El sobre contendrá:

a) La propuesta en los dos ejemplares, original y duplicado exigidos por el artículo 1.°;

b) El sellado correspondiente exigido por el artículo 2.°;

c) El presente pliego de bases y condiciones, debidamente firmado por el proponente;

d) El certificado de depósito de garantía exigido por el Art. 7.°;

e) El recibo duplicado extendido por la Oficina Receptora del Ministerio por la presentación de las muestras a que se refiere el artículo 31;

10. No se admitirán propuestas de los que, por haber faltado a contratos anteriores con el Gobierno estuvieran excluídos de la nómina de proveedores del Estado o que, por otras causas, estén legalmente impedidos a comprometerse;

APERTURA DE LAS PROPUESTAS

11. En el local, día y hora indicados en el respectivo llamado a licitación, se procederá, en presencia del Escribano Mayor de Gobierno, del Secretario y del Jefe de Suministros de la Dirección General de Administración y de los proponentes que concurran, a la apertura de las propuestas recibidas las que serán leídas, debiendo desestimarse de inmediato las que no reúnan *prima facie*, los requisitos exigidos por el presente pliego de bases y condiciones;

Terminada la lectura, se labrará el acta en la que se consignarán las propuestas presentadas, monto de las mismas, los certificados de depósito que se acompañen, los requisitos que fuesen observados y cualquier otro antecedente de interés, y será firmada por los funcionarios nombrados y por los presentes que quieran hacerlo;

12. En el caso de tratarse de suministros a efectuarse en provincias o territorios, el Procurador Fiscal respectivo podrá reemplazar en el acto de la licitación al Escribano Mayor de Gobierno, circunstancia que deberá contener el llamado a licitación;

13. Antes de procederse a la apertura de las propuestas, los proponentes podrán formular su pedido de aclaraciones o manifestarán sus observaciones, no admitiéndose de aquéllos, después de leída la primera propuesta y de cerrado el acto, nuevas propuestas o explicaciones que modificasen las presentadas;

14. Terminado el acto de la licitación, los proponentes que tuviesen interés en conocer los precios cotizados u otros datos, podrán examinar las propuestas en las horas que a tal efecto se les dará a conocer, en presencia de los funcionarios encargados para ello.

ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIONES

15. Las propuestas serán examinadas detenidamente a los efectos de comprobar si se ajustan en un todo al pliego de bases y condiciones de la licitación, desestimándose las que no reúnan sus requisitos y determinen condiciones contrarias a las establecidas en dicho pliego y que hayan pasado inadvertidas en el acto de la apertura;

16. La adjudicación de los efectos licitados se hará por artículo, al menor precio cotizado cuando por la naturaleza o índole de los artículos no se hayan presentado o no sean necesario muestras por haberse determinado marcas-tipos en la licitación, o, existiendo éstas, fueran de igual calidad o condición; y, por calidad, cuando del examen de las muestras presentadas, hubiesen de ser rechazadas por calidad inferior las que correspondan a menor precio;

17. En los casos en que dos o más ofertas por un mismo artículo fuesen iguales en precio y calidad, los proponentes serán llamados a mejorarlas por escrito, las que deberán presentarse en papel simple y en sobre cerrado en la Secretaría de la Dirección General de Administración, abriéndose en el día y hora señalados en presencia del Secretario y del Jefe de Suministros y de los interesados que concurran, mediante acta respectiva;

18. Si no se obtuviese mejora en el desempate solicitado o los nuevos precios fuesen iguales, se dará preferencia a la propuesta por artículo nacional. Y se adjudicará por sorteo cuando se tratase de mercadería de una misma procedencia, con las mismas formalidades establecidas en el artículo anterior;

19. Para que tenga lugar la adjudicación de los artículos licitados, se requiere que existan por lo menos, dos propuestas presentadas, cuyas cotizaciones sean consideradas convenientes;

20. Si al llamado a licitación no se hubiese presentado más que una sola propuesta o resultasen artículos sin adjudicarse por falta de remate u otro motivo, se llamará a nueva licitación, salvo que se compruebe la imposibilidad de obtener de que a este último concurran otros proponentes por no haber existencias en plaza de determinado artículo u otras causas justificadas, en cuyo caso podrá efectuarse la adjudicación al único postor, mediante decreto del Poder Ejecutivo en Acuerdo de Ministros si su monto excede de la suma de cinco mil pesos moneda nacional;

21. El poder Ejecutivo se reserva el derecho de aceptar, entre las propuestas presentadas, la que más le convenga, o de rechazar todas, sin que por ello tengan los proponentes derecho a reclamación alguna;

22. El Poder Ejecutivo se reserva la facultad de adjudicar en más o en menos hasta un 10 %, las cantidades establecidas en las nóminas respectivas a título informativo, de acuerdo a las necesidades del Departamento, lo que será llevado a conocimiento de la firma afectada, sin que los proponentes tengan derecho a exigir indemnización alguna;

23. Las adjudicaciones definitivas correspondientes a la provisión del Departamento durante el primero y segundo semestre del año, serán consideradas vigentes hasta tanto sean aprobadas por el Poder Ejecutivo las que correspondan a los semestres del año subsiguiente, quedando obligados los adjudicatarios a continuar la provisión durante los nuevos períodos, si por cualquier causa no se hubiese resuelto la respectiva licitación el 31 de diciembre ó 30 de junio respectivamente;

24. Las adjudicaciones definitivas aprobadas por el Poder Ejecutivo, serán comunicadas a los adjudicatarios, con aviso de retorno, a los efectos jurídicos que correspondieren;

25. Si antes de la aprobación de las adjudicaciones por el Poder Ejecutivo, el proponente desistiese por escrito del mantenimiento de su propuesta, la adjudicación recaerá en el proponente cuya cotización le siga en orden de conveniencia para el Estado sin perjuicio de la penalidad que se aplicará a aquél por las disposiciones del apartado 47;

CONTRATOS

26. Con la sola aceptación de la propuesta por el Poder Ejecutivo se establece el convenio entre el Estado y el proponente, con los efectos jurídicos y legales que surgen del mismo, formalizándolo por escritura pública ante el Escribano Mayor de Gobierno cuando el monto de la adjudicación exceda de la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7.° de la Ley N.° 11.672;

En este caso, el adjudicatario deberá firmar el contrato respectivo dentro del término de diez días a contar de la fecha en que reciba la notificación del Escribano Mayor de Gobierno, siendo de su cuenta los gastos que se originasen a ese efecto;

27. El adjudicatario no podrá transferir ni ceder el contrato a otra firma sin previa conformidad del Poder Ejecutivo, debiendo, para ello, presentar al Ministerio la solicitud correspondiente;

28. El Poder Ejecutivo podrá rescindir el contrato en los casos siguientes, sin recurso por parte del adjudicatario:

a) Por inejecución del adjudicatario de las cláusulas contractuales o incumplimiento de las órdenes de provisión;

b) Por transferencias del contrato sin autorización del Poder Ejecutivo;

c) Si el Honorable Congreso no votase los fondos necesarios en la Ley de Presupuesto del año a que corresponda la licitación aprobada por el Poder Ejecutivo con anterioridad a la sanción de dicha Ley;

GARANTÍA

29. Aceptada la propuesta por el Poder Ejecutivo, los adjudicatarios elevarán al 10 % del importe total que se les haya adjudicado, el depósito de garantía establecido por el artículo 7.° del presente pliego, cuyo certificado deberá ser entregado en la Dirección General de Administración dentro del término de tres días hábiles siguientes al recibo de la nota que a este efecto les será enviada por la citada Dirección, quedando afectado el total de la garantía depositada al fiel cumplimiento de sus obligaciones;

30. Los depósitos de garantía serán devueltos por la Dirección General de Administración:

a) A los proponentes que no resultaren adjudicatarios, inmediatamente de ser aprobada la licitación por el Poder Ejecutivo, para lo cual la citada Dirección les llamará por nota a retirar sus respectivos depósitos, lo que deberán cumplir dentro del término de quince días siguientes al de la recepción de la nota;

b) A los adjudicatarios, a los treinta días de haberse dado el conforme a la entrega del total de los artículos que les fueron adjudicados, debiendo retirarlos dentro del término de quince días subsiguientes a dicho plazo;

MUESTRAS

31. Los proponentes presentarán con dos días de anticipación, por lo menos, al de la fecha de apertura de la licitación y en la oficina indicada en la misma, tres muestras de cada uno de los artículos que proponen o se exigiese por las nóminas, las que, con su etiqueta correspondiente, deberán ser selladas y firmadas al efecto de su identidad, seguridad e individualización por los proponentes, en el caso de que fuesen presentadas varias muestras por un mismo artículo;

La oficina receptora entregará el respectivo recibo por duplicado, debiendo el proponente reservar el original al efecto devolutivo de las muestras en oportunidad, y acom-

pañar el duplicado a su propuesta de conformidad a lo establecido por el apartado 9.°, inciso *e)*;

32. Podrán los proponentes prescindir de las muestras en las ofertas de aquellos artículos cuya naturaleza o índole exima de ese requisito, como ser los de marca registrada u otros en que las nóminas establezcan marcas-tipos. En estos casos será indispensable que los licitantes indiquen la marca del artículo propuesto, no tomándose en consideración los artículos por los cuales se hubiese omitido aquélla;

33. Las muestras de tejidos deberán tener como mínimo 0,50 x 0,50 metros; las de aceites, vinagres y otros líquidos, serán presentadas en envases lisos de vidrio de un litro neto; y las muestras de harina de trigo y otras de igual naturaleza, en envases de vidrio de un kilo neto;

34. Las muestras serán analizadas por el Ministerio o por las dependencias técnicas o laboratorios de su dependencia, o en su defecto, por la Oficina Química Nacional o por la Oficina de Análisis del Ministerio de Agricultura;

35. Las muestras serán devueltas, por intermedio de la oficina receptora de las mismas, a los licitantes que no resultaron adjudicatarios, inmediatamente de ser aprobada la licitación por el Poder Ejecutivo a cuyo efecto se les enviará nota para que dentro del término de quince días de recibida, procedan a retirarlas, sin reclamación alguna por los deterioros sufridos a raíz de los análisis o experimentaciones a que hayan sido sometidas o por las que no se entregasen por haber sido destruídas o inutilizadas;

36. Las muestras correspondientes a artículos adjudicados serán retenidas por la Dirección General de Administración a los efectos del contralor de los que fuesen provistos por los adjudicatarios, con excepción de aquéllas que por su naturaleza o índole no sean necesarias para dicho contralor, cuya devolución se hará de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior;

37. Vencido el plazo establecido en los artículos anteriores sin que los licitantes hayan retirado sus respectivas muestras, quedará prescripto para éstos el derecho de su reclamación, quedando las mismas a favor del Gobierno;

CONDICIONES DE ENTREGA

38. Libradas por la Dirección General de Administración o por las dependencias del Ministerio para las que fueren realizadas las licitaciones, las órdenes de provisión, los adjudicatarios procederán al cumplimiento de las mismas de acuerdo a la forma, fechas, plazos, lugar y otras condiciones particulares que hayan sido establecidas en las nóminas y pliego adicional complementarios del presente pliego de bases;

39. Cuando se trate de la provisión con destino al Ministerio, los artículos serán descargados y colocados con personal de la firma proveedora en el depósito de Economato de la Dirección General de Administración, sin ningún recargo por acarreo u otro concepto, siéndolo en igual forma por los artículos que fuesen devueltos por rechazo;

40. Cuando la provisión es destinada a dependencias del Departamento en la Capital y alrededores, los artículos serán igualmente descargados y colocados en el depósito de aquéllas con personal de la firma proveedora, sin recargo alguno por acarreo u otro concepto;

41. Cuando la provisión es destinada a dependencias del Departamento en el interior, la firma proveedora dará aviso a la Dirección General de Administración para que verifique en el local de su negocio o fábrica, el contralor de los artículos a remitirse a aquéllas, ya acondicionados, sin cerrar, en sus respectivos paquetes, cajones, esqueletos, etc., siendo de conformidad el contralor realizado, la firma proveedora recibirá la pertinente orden oficial de transporte cuando la expedición sea a cargo del Ministerio, debiendo la misma proceder a su inmediato envío por la empresa del ferrocarril o compañía de navegación que corresponda, cuya carta de porte entregará a la Dirección General de Administración, a sus efectos;

42. Los firmas proveedoras serán responsables por el deficiente acondicionamiento o embalaje de los artículos expedidos, debiendo repararlos o reemplazarlos sin cargo para el Es-

tado, si por dicha causa hubiesen sufrido deterioros, roturas o inutilización;

Serán igualmente responsables por el mal estado de conservación o por la calidad inferior a la estipulada, de los artículos entregados, aplicándose en estos casos las disposiciones del artículo 47 del presente pliego.

PAGOS

43. Efectuada de conformidad la provisión y, a los efectos de su pago el proveedor deberá presentar su factura en la Mesa de Entradas y Salidas del Ministerio, acompañándola de la orden de provisión respectiva y del conforme otorgado por la oficina receptora;

Si la provisión corresponde a dependencias, la presentación de la factura y demás documentos se hará en la Mesa de Entradas y Salidas de la dependencia, a los efectos de su conformidad y elevación al Ministerio;

44. Cumplidos los trámites pertinentes, la Tesorería de la Dirección General de Administración procederá al pago de las facturas, cuyo importe no exceda de $ 5.000 m/n.; excediendo de esta suma, el pago se efectuará por la Tesorería General de la Nación;

45. La Dirección General de Administración pasará el correspondiente aviso a los proveedores, para la efectividad del pago de sus respectivos créditos por su Tesorería y el trámite de sus facturas de más de $ 5.000 m/n., indicando el número de la orden de pago en que fueron incluídas para su abono por la Tesorería General de la Nación;

46. El Poder Ejecutivo no se hace responsable por indemnización de daños y perjuicios, si el Honorable Congreso no votase en la Ley de Presupuesto del año a que corresponda la licitación realizada y aprobara los fondos necesarios para atender el pago de las provisiones efectuadas, ni por circunstancias imprevistas o de fuerza mayor, debidamente justificadas, sufriese demora el trámite ordinario de la cuenta del proveedor;

PENALIDADES

47. Sufrirán las siguientes penalidades, los proponentes y los adjudicatarios que incurriesen en los casos establecidos a continuación:

a) De la pérdida de su respectivo depósito de garantía, a beneficio del Estado, el proponente que desistiese de su propuesta antes del término establecido en el apartado 6.°;

b) De una multa de $ 50.00 m/n. diarios, al adjudicatario que no presentase el certificado de su depósito en ampliación hasta el 10 %, de acuerdo al apartado 29, que se aplicará sin previo aviso, a contar desde el día inmediato siguiente, por el término de ocho días;

c) De la pérdida de su primer depósito de garantía, el adjudicatario que se hallare comprendido en el apartado anterior y vencido el término de ocho días, sin perjuicio de la efectividad de la multa incurrida que deberá depositarse en la Dirección General de Administración dentro del plazo de treinta días, a partir del cual se le iniciarán las acciones judiciales correspondientes si así no lo hiciere y excluyéndosele del registro de proveedores por el término de un año;

d) De una multa de $ 20.00 m/n. diarios, el adjudicatario que no concurriese a la Escribanía Mayor de Gobierno para formalizar el contrato respectivo dentro del término establecido por el apartado 26, que se aplicará sin previo aviso, a partir del día inmediato siguiente al de aquél en su depósito de garantía;

e) De una multa diaria del 1 % del valor del artículo que debió entregar o que habiéndolo hecho hubiese sido rechazado, al adjudicatario que no efectuase la provisión dentro de los términos y condiciones estipuladas en el contrato y especificadas en las órdenes de provisión, sin perjuicio de la adquisición que realizase la Dirección General de Administración por cuenta del

adjudicatario, a cualquier precio, estableciéndose como plazo máximo ocho días, vencido el cual se aplicará la penalidad dispuesta por el apartado que sigue;

f) De la pérdida de su depósito de garantía, rescisión del contrato y exclusión del registro de proveedores, por el término de un año, el adjudicatario que dejase transcurrir los ocho días a que se refiere el apartado *e)*, sin efectuar la provisión, desde la fecha en que ésta debió hacerse de acuerdo a los términos y condiciones del contrato y hubiese sido emplazado para ello, mediante nota con aviso de retorno. El adjudicatario será responsable, además, por los perjuicios que su falta de cumplimiento irrogase al Estado;

g) La multa establecida por la Ley de Sellos, en el caso de infracción a la misma, a cuyo efecto se formulará la denuncia ante la Dirección General del Impuesto a los Réditos; dejando copia en la propuesta de lo actuado;

h) La exclusión del Registro de Proveedores, de conformidad al Acuerdo de Ministros de fecha abril 30 de 1938, por un plazo hasta de diez años de los proponentes o adjudicatarios que hayan cometido hechos dolosos para obtener la adjudicación o que habiéndola obtenido, los cometieran para darle mal cumplimiento a cuyo efecto, las dependencias elevarán al Ministerio todos los antecedentes del caso, en forma circunstanciada y cronológica, a fin de que el Poder Ejecutivo, previo dictamen de los señores asesores legales e informe de la Contaduría General, resuelva lo que corresponda y haciéndose saber a los demás departamentos, la eliminación de los mismos;

48. Los cargos que se les formulen a los proveedores por la demora en la entrega de las mercaderías, se harán efectivos afectando las cuentas que tuvieran al cobro como correspondientes de la licitación;

49. Las penalidades establecidas por el apartado 47, no serán de aplicación cuando la no provisión de los artículos ad-

judicados obedezca a circunstancias imprevistas o de fuerza mayor debidamente justificadas;

50. La Dirección General de Administración del Ministerio llevará un registro especial en el que anotará las penalidades en cuanto a los mismos;
dentes en cuanto a los mismos;

DISPOSICIONES ESPECIALES

51. El llamado a licitación se efectuará en el Boletín Oficial de la Nación y en el de la Provincia o Gobernación en cuyo territorio hubiesen de efectuarse las adquisiciones, obras o servicios ordenados, con la anticipación siguiente:

1.° De 20 días cuando su importe comprenda de pesos 5.001.00 a 50.000.00 m/n;

2.° De 25 días cuando su importe comprenda de pesos 50.001.00 a $ 200.000.00 m/n.;

3.° De 30 días cuando exceda de $ 200.000.00 m/n.;

Las publicaciones correspondientes se efectuarán durante el número de días que se determina a continuación, teniéndose presente que la primera publicación tendrá la anticipación establecida precedentemente:

a) De 5 días cuando su importe comprenda de pesos 5.001.00 m/n. a $ 50.000.00 m/n.;

b) De 10 días cuando su importe comprenda de pesos 50.001.00 m/n. a $ 200.000.00 m/n.;

c) De 15 días cuando su importe exceda de pesos 200.000.00 m/n.;

52. Las reparticiones dependientes del Ministerio que deban informar o expedir dictamen en los expedientes de licitaciones lo harán en el término perentorio de ocho días hábiles, y si la importancia de la licitación requiriese la realización de análisis, etc., o estudios especiales, solicitarán por escrito, ampliación de ese plazo.

TITULO VI

Del pliego de Bases y Condiciones para las licitaciones privadas

Considérase incorporado a este Reglamento el pliego de Bases y Condiciones para las licitaciones privadas aprobado por Acuerdo de Ministros de fecha 3 de octubre de 1938; cuyo texto es el siguiente:

PROPUESTAS

1.° Toda adquisición cuyo importe exceda de la suma de trescientos pesos moneda nacional y no sea superior de cinco mil pesos moneda nacional, deberá efectuarse mediante licitación privada. Será aprobada por decreto del Poder Ejecutivo la que exceda su importe de doce mil quinientos pesos moneda nacional y por Resolución Ministerial la que fuese inferior de esta suma;

2.° El aviso de llamado será colocado en sitios visibles del local de la repartición o dependencia que realiza la licitación, sin perjuicio de las invitaciones que serán enviadas a los comerciantes o industriales del ramo;

3.° Las propuestas serán extendidas preferentemente en las planillas entregadas o remitidas por la Dirección General de Administración o por la repartición o dependencia, aceptándose también las extendidas en papel simple, debiendo hacerse por duplicado cuando se formulase para dependencias del Departamento, y no acompañándose sellado alguno en virtud de lo dispuesto por decreto de fecha 22 de septiembre de 1937;

4.° Las ofertas serán escritas en forma clara y legible, sin raspaduras ni enmiendas, las que de existir, serán ratificadas o aclaradas al pie de la propuesta;

5.° Las propuestas pueden formularse por todos o parte de los artículos licitados y los precios deberán ser por cantidad neta libre de envases y gastos de acarreos y embalaje y refiriéndose a unidades y medidas del sistema métrico decimal en moneda nacional, pudiendo cotizarse en moneda extranjera en las condiciones establecidas por el Acuerdo de Ministros de 27 de julio de 1934 y disposiciones posteriores que lo modifican;

6.° Las propuestas no deberán contener condiciones que modifiquen las establecidas por la licitación;

7.° Los proponentes se obligan a mantener sus propuestas por el término de sesenta días a contar desde el momento de la apertura de las mismas;

8.° Las propuestas se presentarán en sobres cerrados herméticamente, en cuyo exterior se indicará el objeto de la licitación, día y hora de su apertura, dirigido al Director de Administración del Ministerio o al de la repartición o dependencia en que tenga lugar, en la Secretaría de la misma, contra entrega del recibo correspondiente. Si fuesen admitidas por correo deberán serlo por pieza certificada, con la anticipación necesaria;

9.° El sobre contendrá:

a) La propuesta;

b) El presente pliego de bases y condiciones y el de condiciones particulares si hubiere, debidamente firmados por los proponentes;

c) El recibo duplicado extendido por la oficina receptora del Ministerio o de la dependencia, por la presentación de las muestras a que se refiere el apartado 24, si hubieran de ser presentadas;

10. No se admitirán propuestas de los que, por haber faltado a contratos anteriores con el Gobierno, estuviesen excluídos de la nómina de proveedores del Estado, o que por otras causas estén legalmente impedidos a comprometerse.

APERTURA DE LAS PROPUESTAS

11. En el local, día y hora indicados en el respectivo llamado a licitación, se procederá, en presencia del Secretario de la Dirección General de Administración y del Jefe de Suministros de ésta, o de las autoridades de la dependencia que la realiza y de los proponentes que concurran, a la apertura y lectura de las propuestas recibidas, debiendo desestimarse de inmediato las que no reúnan «*prima facie*» los requisitos exigidos por el pliego de bases y condiciones.

Terminada la lectura, se librará el acta en la que se consignarán las propuestas presentadas, monto de las mismas, requisitos que fuesen observados y cualquier otro antecedente de interés y será firmada por los funcionarios nombrados y por los presentes que quieran hacerlo;

12. Antes de procederse a la apertura de las propuestas, los licitantes podrán formular sus pedidos de aclaraciones o manifestarán sus observaciones, no admitiéndose de aquéllos, después de leída la primera propuesta y de cerrado el acto, nuevas propuestas o explicaciones que modifiquen las presentadas;

13. Terminado el acto de la licitación, los proponentes que tuviesen interés en conocer los precios cotizados u otros datos, tendrán derecho a examinar las propuestas en las horas que a tal efecto se les dará a conocer, en presencia de los funcionarios encargados para ello.

ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIONES

14. Las propuestas serán examinadas a los efectos de comprobar si se ajustan en un todo al pliego de bases y condiciones de la licitación, desestimándose las que no reúnan sus requisitos y determinen condiciones contrarias a las establecidas en dicho pliego, que hayan pasado inadvertidas en el acto de la apertura;

15. La adjudicación de los artículos licitados se hará por artículo, al menor precio cotizado, cuando por la naturaleza o índole de los artículos no se hayan presentado o no sean necesarias muestras por haberse determinado marcas-tipos en la licitación o, existiendo éstas, fueran de igual calidad o condición, y por calidad, cuando del examen de las muestras presentadas hubiesen de ser rechazadas por calidad inferior los que correspondan a menor precio;

16. En los casos en que dos o más ofertas por un mismo artículo fuesen iguales en precio y calidad, los proponentes serán llamados a mejorarlas por escrito, las que deberán presentarse en sobre cerrado herméticamente en la Secre-

taría de la Dirección General de Administración o de la dependencias, abriéndose en el día y hora señalados en presencia del Secretario y del Jefe de Suministros de aquélla, o del Secretario y del Contador de la dependencia y los interesados que concurran, mediante acta respectiva. Si no se obtuviese mejora en el desempate solicitado o los nuevos precios fuesen iguales, se dará preferencia a la propuesta por artículo nacional. Y se adjudicará por sorteo cuando se tratase de mercadería de una misma procedencia, con las mismas formalidades establecidas en el artículo anterior.

17. Para que tenga lugar la adjudicación de los artículos licitados, se requiere que existan, por lo menos, tres propuestas válidas y cuyas cotizaciones sean consideradas convenientes;

18. Si al llamado a licitación no se hubiese presentado el número de propuestas a que se refiere el artículo anterior, se llamará a una nueva, salvo que se compruebe la imposibilidad de obtener de que a este último concurran otros proponentes por no haber existencia en plaza de determinado artículo u otras causas justificadas, en cuyo caso podrá efectuarse la adjudicación al único postor mediante decreto del Poder Ejecutivo si su importe excediera de la suma de dos mil quinientos pesos moneda nacional;

19. De las propuestas presentadas, el Poder Ejecutivo o el Ministerio podrá aceptar la que más le convenga o rechazar todas, sin que por ello tengan los proponentes derecho a reclamación alguna;

20. Las cantidades licitadas son susceptibles de aumento o disminución hasta un 10 % sobre las establecidas en las nóminas respectivas de acuerdo a las necesidades del Departamento o de la dependencia, sin que los proponentes tengan derecho a exigir indemnización alguna;

21. Las adjudicaciones correspondientes a la provisión del Departamento durante el primero y segundo semestre del año, serán consideradas vigentes hasta tanto sean aprobadas las que correspondan a los semestres del año subsi-

guiente, quedando obligados los adjudicatarios a continuar la provisión durante los nuevos períodos, si por cualquier causa no se hubiese resuelto la respectiva licitación el 31 de diciembre o 30 de junio respectivamente.

CONTRATOS

22. El adjudicatario no podrá transferir ni ceder el contrato a otra firma sin previa conformidad del Poder Ejecutivo o del Ministerio, debiendo para ello presentar al Ministerio, por intermedio de la dependencia licitante, la solicitud correspondiente;

23. El Poder Ejecutivo o el Ministerio podrán rescindir el contrato en los casos siguientes, sin recurso por parte del adjudicatario:

a) Por la inejecución del adjudicatario, de las cláusulas contractuales o incumplimiento de las órdenes de provisión;

b) Por transferencia del contrato sin autorización del Poder Ejecutivo o del Ministerio;

c) Si el H. Congreso no votase los fondos necesarios en la Ley de Presupuesto del año a que corresponda la licitación aprobada por el Poder Ejecutivo o por el Ministerio con anterioridad a la sanción de dicha Ley.

MUESTRAS

24. Los proponentes presentarán con dos días de anticipación, por lo menos, al de la fecha de apertura de la licitación y en la oficina indicada en la misma, tres muestras si la licitación es realizada por la Dirección General de Administración y dos si lo fuese por una dependencia, de cada uno de los artículos que proponen o se exigiese por las nóminas, las que con su etiqueta correspondiente deberán ser selladas y firmadas al efecto de su identidad, seguridad e individualización del proponente en el caso de que fuesen presentadas varias muestras por un mismo artículo.

La oficina receptora entregará el respectivo recibo, por duplicado, debiendo el proponente reservar el original al efecto devolutivo de las muestras y acompañar el duplicado a su propuesta, de conformidad a lo establecido por el apartado 9.°, inc. *c)*. Cuando se trate de muestras de papelería a géneros de poco volumen y dimensión, se podrá acompañarlas con la propuesta; pero con las características o número de orden que los proponentes hayan considerado necesario especificar en sus respectivas propuestas, y selladas, además, a los efectos de su individualización;

25. Podrán los proponentes prescindir de las muestras en las ofertas de aquellos artículos cuya naturaleza o índole exima de ese requisito, como ser los de marca registrada u otros en que las nóminas establezcan marcas-tipos. En estos casos, será indispensable que los proponentes indiquen la marca del artículo propuesto, no tomándose en consideración los artículos por los cuales se hubiese omitido aquélla;

26. Las muestras de tejidos deberán tener como mínimo 0.50 x 0,50 mts.; las de aceites, vinagres y otros líquidos serán presentados en envases lisos de vidrio de un litro neto; y las muestras de harina de trigo y otros de igual naturaleza en envases de vidrio de un kilo neto;

27. Las muestras serán analizadas por el Ministerio o por las dependencias técnicas o laboratorios de sus dependencias o, en su defecto, por la Oficina Química Nacional o por la Oficina de Análisis del Ministerio de Agricultura;

28. Las muestras serán devueltas, por intermedio de la oficina receptora de las mismas, a los proponentes que no resultaron adjudicatarios, inmediatamente de ser aprobada la licitación por el Poder Ejecutivo o por el Ministerio, a cuyo efecto se les enviará nota para que dentro del término de ocho días de recibida, procedan a retirarlas sin reclamación alguna por los deterioros sufridos a raíz de los análisis o experimentaciones a que hayan sido sometidas o por las que no se entregasen por haber sido destruídas, inutilizadas o por su escaso valor;

29. Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados, serán retenidas por la Dirección General de Administración o por la dependencia a los efectos del contralor de los que fuesen provistos por los adjudicatarios, con excepción de aquéllas que por su naturaleza o índole no sean necesarias para dicho contralor, cuya devolución se hará de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior;

30. Vencido el plazo establecido en los artículos anteriores, sin que los proponentes hayan retirado sus respectivas muestras, quedará prescripto para éstos el derecho de su reclamación, quedando las mismas a favor del Gobierno.

CONDICIONES DE ENTREGA

31. Libradas por la Dirección General de Administración o por la dependencia, las órdenes de provisión, los adjudicatarios procederán al cumplimiento de las mismas de acuerdo a la forma, plazo, fechas, lugar y otras condiciones particulares que hayan sido establecidas en las nóminas y pliego adicional complementario del presente pliego, sin recargo por acarreo, embalaje u otros conceptos;

32. Las firmas proveedoras serán responsables por el deficiente acondicionamiento o embalaje de los artículos que expidieren por cuenta del Departamento con destino a sus dependencias, debiendo repararlos o reemplazarlos sin cargo para el Estado, si por dicha causa hubiesen sufrido deterioros, roturas o inutilización.

PAGOS

33. Efectuada de conformidad la provisión, en virtud de órdenes libradas por la Dirección General de Administración del Ministerio, el proveedor deberá presentar su factura en la Mesa de Entradas y Salidas del Ministerio, acompañando la orden de provisión y el conforme otorgado por la oficina receptora de los artículos entregado;

34. Cumplidos los trámites pertinentes, la Tesorería de la Dirección General de Administración, procederá al pago de las facturas, cuyo importe no exceda de cinco mil pesos moneda nacional;

35. Si las órdenes de provisión han sido libradas por dependencias del Departamento por haber realizado éstas el llamado a licitación, el proveedor deberá presentar la factura en la Mesa de Entradas y Salidas de aquéllas, con la correspondiente orden de provisión y conforme, otorgada por la dependencia por los artículos recibidos.

Siendo la factura menor de trescientos pesos moneda nacional, el pago de la misma se hará por la Tesorería de la dependencia; excediendo de esta suma hasta cinco mil pesos moneda nacional, por la Tesorería de la Dirección General de Administración;

36. La Dirección General de Administración pasará el correspondiente aviso a los proveedores para la efectividad del pago de sus respectivos créditos por la Tesorería;

37. Ni el Poder Ejecutivo ni el Ministerio, se hacen responsables por indemnización de daños y perjuicios si el H. Congreso no votase en la Ley de Presupuesto a que corresponda la licitación realizada y aprobada, los fondos necesarios para atender el pago de las provisiones efectuadas, ni si por circunstancias imprevistas o de fuerza mayor, debidamente justificada sufriese demora el trámite ordinario de la cuenta del proveedor;

PENALIDADES

38. El proponente que desistiese de su propuesta antes o después de ser aprobada o que dejase de proveer los artículos que le hubiesen sido adjudicados o que haya cometido hechos dolosos para obtener la adjudicación o que habiéndola obtenido lo fuese para darle mal cumplimiento, será excluído del Registro de Proveedores por un plazo hasta de 10 años, de conformidad al Acuerdo de Ministros de fecha 30 de abril de 1938, debiendo las dependencias elevar al Ministerio todos los antecedentes del caso en forma cir-

cunstanciada y cronológica, a fin de que el Poder Ejecutivo previo dictamen de los señores asesores legales e informe de la Contaduría General, resuelva lo que corresponda y haciéndose saber a los demás Departamentos la eliminación de los mismos;

39. La penalidad establecida no será de aplicación cuando la no provisión de los artículos adjudicados obedezca a circunstancias imprevistas o de fuerza mayor debidamente justificadas;

40. La Dirección General de Administración del Ministerio, llevará un registro especial en el que anotará los proponentes y los adjudicatarios que hubiesen incurrido en las sanciones dispuestas por el apartado 38.

CAPITULO VI

Reglamentación especial para el pago de servicios extraordinarios, viáticos, extensión de órdenes de pasajes y fletes

TITULO I

Servicios extraordinarios remunerados

Art. 223. — Los trabajos extraordinarios remunerados del personal, serán autorizados por el señor Ministro a propuesta de los Jefes de las direcciones e inspecciones generales del Ministerio, cuando lo exijan las necesidades del servicio, y previa consulta a la Dirección General de Administración, sobre la disponibilidad de fondos.

Art. 224. — La Dirección General de Administración no liquidará las remuneraciones que le fuesen solicitadas, correspondientes a trabajos extraordinarios ya realizados, si no han sido cumplidos los requisitos establecidos en el artículo anterior y tomada la intervención pertinente por la contabilidad preventiva, salvo casos excepcionales de urgencia, expresamente autorizados por el señor Ministro o señor Subsecretario.

Art. 225. — A ese efecto, ninguna dependencia podrá iniciar tareas extraordinarias, si previamente, no han sido autorizadas por el señor Ministro en base a un pedido por escrito aprobado por la Dirección, Inspección, etc., respectiva de quien dependen, en el que se determinará cual es la tarea a efectuarse, los empleados que deban llevarla a cabo y su categoría, el número de horas diarias y cantidad de días que se calculan indispensables, el importe que devengará cada uno y el total de la erogación.

Art. 226. — En base a ello, la Secretaría de la Dirección General de Administración proyectará la resolución que indique el Director de la misma, en la que se dejará constancia de que la liquidación y pago posterior, se efectuará de acuerdo a la real prestación de servicios según resulte del informe del encargado del contralor de las tareas, pasándose después de firmada a la Dirección de origen, previa intervención de la división Contaduría, la que dejará constancia de la afectación definitva en la contabilidad preventiva.

Art. 227. — Los empleados con sueldo hasta $ 500 mensuales, serán remunerados por los servicios que presten fuera del horario ordinario de oficina:

a) Por cada hora de servicio extraordinario, con una remuneración de $ 1,25 en días hábiles;

b) Si el trabajo se efectuase en día sábado, la remuneración que establece el apartado anterior, será mejorada a razón de $ 2.00;

c) Si el trabajo se efectuara en día domingo o feriado, la remuneración a que se refiere el apartado *a)*, será de $ 2,50;

d) Si la tarea se realizara después de las 22 horas de un día hábil o feriado respectivamente, la remuneración será mejorada en un 100 %, es decir, a razón de $ 2,50 la hora, en día hábil y de $ 5.00 en día domingo o feriado;

e) Los que tuviesen sueldo mayor de 500, su compensación será resuelta por el señor Ministro a propuesta del Director de Administración. En la misma forma se procederá en los casos a que se refiere el apartado *i)* del artículo 2.° (última parte).

Art. 228. — La liquidación de los servicios extraordinarios se efectuará semanalmente.

Art. 229. — El contralor de asistencia del personal a los horarios extraordinarios, será ejercido en ausencia del jefe por el empleado de mayor jerarquía entre los que hubiesen sido designados para desempeñar el trabajo, debiendo visar las planillas de asistencia y entregarlas diariamente al superior.

Art. 230. — El personal dará estricto cumplimiento al horario extraordinario, debiendo encontrarse en sus respectivos puestos a la hora establecida para la iniciación del trabajo y no retirarse antes de la hora señalada como su término, descontándosele proporcionalmente su no prestación de servicios si se retirase antes de la hora de terminación del horario extraordinario, sea cual fuese su motivo.

Art. 231. — El personal de servicio percibirá por sus servicios extraordinarios, fuera del horario ordinario y sus guardias establecidas, el cincuenta por ciento de la remuneración determinada por el artículo 227.

TITULO II

Viáticos

Art. 232. — El viático que se asigne al personal destacado en comisión, por razones de servicios del Ministerio, tiene por objeto atender los gastos personales que ella le origine, tales como los de alimentación, alojamiento, etc., con exclusión de los de pasaje, que el Ministerio provee a este efecto, mediante órdenes oficiales.

Art. 233. — Se liquidará el viático, de acuerdo a la escala siguiente:

1.° Personal docente y administrativo

a)	al que perciba hasta	$	450	mensuales de sueldo,	$	12	diarios
b)	de	$	451	a $ 600.....	»	»	»	$ 15	»
c)	»	$	601	» $ 800.....	»	»	»	$ 20	»
d)	»	$	801	» $ 1.300.....	»	»	»	$ 25	»
e)	»	$	1.301	» $ 1.400.....	»	»	»	$ 30	»

2.° Personal de maestranza, obrero y de servicio

a)	al que perciba hasta	$	250	mensuales de sueldo,	$	8	diarios
b)	»	»	»	más de $ 250	»	»	»	$ 10	»

Art. 234. — Cuando la comisión no tenga el carácter de permanencia definitiva, pero deba llevarse a cabo en una misma localidad por un período mayor de seis meses, se liquidará un viático mensual fijo dentro de la siguiente escala:

1.° **Personal docente administrativo o técnico**

a) al que perciba hasta $ 450 mensuales de sueldo, $ 150
b) de $ 451 a $ 700..... » » » $ 200
c) » $ 701 » $ 800..... » » » $ 250
d) » $ 801 » $ 1.200..... » » » $ 300

2.° **Personal de maestranza y de servicio**

a) al que perciba hasta $ 250 mensuales de sueldo, $ 100
b) » » » más de $ 250 » » » $ 130

Al personal designado en comisión con viático diario, se le liquidará el importe total correspondiente al tiempo que se presuma durará la misma, como anticipo, con cargo de rendición de cuentas, y se le abonará su importe al hacer la entrega de la respectiva orden oficial de pasajes.

Los viáticos mensuales fijos, se liquidarán sin cargo, para serles girados o entregados simultáneamente con los haberes respectivos.

Art. 235. — La rendición de cuentas a que se refiere el artículo anterior, consistirá en la comprobación del tiempo que ha durado la comisión, debiendo hacerse en los formularios especiales que entregue la Dirección General de Administración y devolverse a la Tesorería de la misma, el remanente a que no se tenga derecho, dentro de las 48 horas de terminado su cometido.

Art. 236. — Si la Dirección General de Administración formulase reparo a la rendición de cuentas presentada, la devolverá al jefe de la repartición de la que proceda, a sus efectos.

Art. 237. — Se liquidará viático íntegro, al funcionario o empleado en comisión:

a) Por los días de su permanencia en la localidad de destino o localidades intermedias por cambio de tren, en que deba almorzar, cenar y pernoctar;

b) Desde el día de salida a su destino siempre que el viaje deba iniciarlo antes de las 12 horas y no sea por vía

fluvial o marítima, por cuanto en estos casos están incluídos en el pasaje, el camarote y la comida;

c) En general, cuando deba sufragar en el día, gastos de almuerzo, cena y alojamiento.

Art. 238. — Se liquidará 2/3 de viático:

a) Cuando la salida a su destino sea después de las 12;

b) Los días de regreso de su destino, cuando llegue después de las 21;

c) En los casos de ida y vuelta en el día, cuando saliera antes de las 12 y regresare después de las 20;

d) En general, cuando deba sufragar en el día dos de los gastos enunciados en el apartado *c)* del artículo anterior.

Art. 239. — Se liquidará 1/3 de viático, cuando el viaje de ida y vuelta tenga lugar en el mismo día, y la salida a su destino lo sea antes de las 20, y mientras se halle viajando por vía fluvial o marítima.

Art. 240. — Cuando la comisión no le origine gastos de comida o alojamiento, sólo tendrá derecho al reintegro de los gastos de traslación efectuados y al pago de servicios extraordinarios correspondientes si los hubiera llevado a cabo fuera de las horas de oficina, previo informe del Jefe respectivo.

Art. 241. — El viático para funcionarios o empleados destacados en comisión en el extranjero, será fijado en cada caso por el Poder Ejecutivo y su importe se determinará, de acuerdo con el valor de la moneda y «standard» de vida, previa consulta a la oficina de Investigaciones Económicas del Banco Central de la República.

Art. 242. — El viático que se acuerde a los empleados designados por los señores Jueces o por la Jefatura de Policía para el traslado de presos o detenidos dentro o fuera del Territorio de la Nación, se ajustará a las escalas y disposiciones del presente Reglamento.

Art. 243. — Al solicitar la provisión de fondos y pasajes para el personal designado para la traslación de presos o detenidos los

señores Jueces o la Jefatura de Policía, harán constar la categoría del empleado y la duración de la comisión.

Art. 244. — Fíjase hasta $ 6 el gasto diario por preso o detenido en concepto de almuerzo, cena y alojamiento, debiéndose rendir cuenta documentada de lo que se invirtiere dentro de este importe.

Art. 245. — No se abonarán gastos por el concepto a que se refiere el artículo anterior cuando el traslado del preso o detenido sea realizado por vía fluvial o marítima, por hallarse comprendidos los mismos, en la orden oficial de pasaje.

Art. 246. — Cuando en el desempeño de la comisión encomendada se efectuasen gastos en concepto de telegramas, comunicaciones telefónicas y otros imprevistos que no respondan a los que comprende el viático deberán presentarse los comprobantes de su inversión por planilla por separado, a los efectos de su aprobación, liquidación y pago.

Art. 247. — Toda planilla de rendición de cuentas de viáticos deberá ser elevada a la Dirección General de Administración, previa conformidad al pie de la misma, del Jefe de la repartición o dirección a que pertenezca el empleado.

TITULO III

Movilidad

Art. 248. — Entiéndese por movilidad fija, la establecida por ley de presupuesto o leyes especiales para determinados funcionarios, en razón de la índole de sus tareas, lo que se liquidará sin cargo de rendición de cuentas, como única compensación por todos los gastos que deba efectuar, o aquellas que en casos excepcionales creyera de equidad fijar el señor Ministro, como restitución o indemnización de gastos reales de movilidad, ocasionados por el servicio a funcionarios que no tengan esa asignación por presupuesto.

Art. 249. — Otros gastos de movilidad deberán ser justificados por el empleado, mediante relaciones detalladas de los que hubiere efectuado, en las que indicará el importe abonado, recorrido del viaje, vehículo empleado, motivo de este medio de movilidad y otros detalles que se consideren convenientes.

TITULO IV

Pasajes y carga

Art. 250. — La Dirección General de Administración del Ministerio y las reparticiones autorizadas para ello, proveerán de las pertinentes órdenes oficiales de pasajes a quienes por el presente reglamento corresponda, por su traslado de un punto a otro del territorio de la Nación o al extranjero, en virtud de disposición superior.

Art. 251. — Todas las órdenes serán extendidas con los requisitos exigidos por el Acuerdo de Ministros de fecha 4 de setiembre de 1906, y en el formulario adoptado para la Administración Nacional por decreto de 9 de noviembre de 1933; cuando el itinerario lo permita, para las compañías de FF. CC. con preferencia sobre las de navegación, por gozar las primeras de una bonificación del 50 % a favor del Estado de conformidad a las disposiciones vigentes.

Art. 252. — Se otorgarán órdenes de pasaje de 1.ª clase para funcionarios de ley, personal docente, administrativo, técnico y profesional; jefes de talleres del personal de maestranza; a los que fuesen designados en misiones judiciales; a los médicos militares y en general, a todos aquéllos que por su categoría o jerarquía sea procedente.

Se extenderán con cama, cuando el itinerario y horario así lo justifique.

Art. 253. — Se otorgará pasaje de 2.ª clase, para el personal obrero y de servicio; para el de inferior jerarquía designado en misiones judiciales; para penados, presos o detenidos, liberados o excarcelados; menores del Patronato Nacional y en general, para aquéllos que por su categoría sea procedente.

Art. 254. — Podrá también extenderse pasaje de 1.ª clase, cuando correspondiendo de segunda, este último no diese derecho al uso de cama y la duración del viaje lo exija.

Art. 255. — Las órdenes de pasaje comprenderán:

a) Ordenes generales;

b) Ordenes parciales.

Art. 256. — Entiéndese por órdenes generales de pasajes, los talonarios que contienen las mismas, entregados al personal cuyas funciones requieren viajes frecuentes o permanentes.

Por órdenes parciales, las que se entreguen en cada caso al personal que deba trasladarse a un punto determinado por disposición superior.

1.° Ordenes generales de pasajes

Art. 257. — Las órdenes generales de pasajes constarán:

a) De una credencial que servirá para certificar la identidad del poseedor, en virtud de la cual quedará facultado para extender sus pasajes;

b) De un talonario numerado de órdenes, que serán por duplicado, cuyo original es destinado a la empresa o compañía que deba prestar el servicio, el duplicado para su remisión a la Dirección General de Administración y el talón para archivo del poseedor como antecedente.

Art. 258. — Las credenciales a que se refiere el apartado *a)* del artículo anterior, serán firmadas por el Director de Administración y por el Jefe de la Dirección o repartición de la que dependa el funcionario o empleado.

Art. 259. — El personal poseedor de órdenes generales de pasajes, podrá utilizar las mismas, únicamente para el desempeño de las comisiones oficiales que le hayan sido encomendadas, siéndole terminantemente prohibido su uso, para asuntos particulares, bajo pena de exoneración.

Le está igualmente prohibido utilizar las órdenes, en viajes por empresas fluviales o marítimas, cuando por su itinerario, existiesen vías férreas, salvo autorización de la superioridad.

Art. 260. — Deberán dar cuenta inmediata a la superioridad para la adopción de las medidas del caso, por pérdidas o extravío del talonario.

Art. 261. — Cuando el poseedor de órdenes generales de pasajes dejase de pertenecer a la repartición o fuese designado para otras funciones o hubiese dado término a su misión, el Jefe de la Dirección

o Repartición le requirirá su devolución, llevando a conocimiento de la Dirección General de Administración el hecho y remitiéndole el talonario devuelto.

Art. 262. — La Dirección General de Administración comunicará a las empresas o compañías, la caducidad de las órdenes, como así también, en los casos de pérdidas o extravíos, e impartirá las pertinentes instrucciones para retener los haberes del poseedor de las órdenes generales si éstas no hubiesen sido devueltas.

Art. 263. — La provisión de esos talonarios por la Dirección General de Administración, será efectuada a solicitud de la Dirección o repartición de que dependa el funcionario o empleado a quien corresponda por la naturaleza de sus funciones el uso de las órdenes generales.

Art. 264. — El último día de cada semana, el personal a que se refiere el artículo 259, deberá remitir al Jefe de la Dirección o repartición a la que pertenezca, una planilla por duplicado, firmada y sellada, con la relación completa de las órdenes expedidas durante la semana y mención del importe de cada pasaje, deducido el 50 % de rebaja, si correspondiese, y agregación del duplicado de cada orden, (no utilizada) con inclusión de las que hubiesen sido anuladas, en cuyo caso agregará también el original correspondiente.

Art. 265. — El Jefe de la Dirección o repartición, previo estudio de la relación presentada, la visará de conformidad y elevará de inmediato con los originales y duplicados aludidos, a la Dirección General de Administración reservando el duplicado de la planilla, para su archivo.

El visto bueno puesto en la planilla, implica la conformidad del Jefe que lo otorga, respecto de la correcta utilización de las órdenes expedidas y de la imputación asignada.

Art. 266. — Los señores Jueces Federales y Jueces Letrados de territorios nacionales a quienes se les provee de talonarios de órdenes generales, deberán llevar a conocimiento de la Dirección General de Administración, telegráficamente, cada vez que disponga de quién o a quiénes ha sido extendido, clase, medios de traslado y motivo del mismo.

Sin perjuicio de ello, remitirán quincenalmente, a la Dirección General de Administración, una relación firmada y sellada en la planilla especial de que se les proveerá, con enunciación de los detalles expresados precedentemente y además, del importe de cada orden, deducido el 50 % de rebaja, si correspondiese.

2.° Ordenes de pasajes en blanco

Art. 267. — Cuando fuesen entregadas por la Dirección General de Administración a reparticiones, órdenes de pasajes en blanco, éstas serán extendidas y firmadas por el Jefe de las mismas bajo su exclusiva responsabilidad, con la previa intervención del Contador o Habilitado.

Art. 268. — Los Jefes de estas reparticiones, cuando las órdenes de pasajes deban ser atendidas con los fondos asignados a las mismas, deberán tener presente los recursos de que dispogan a fin de no excederse de los créditos respectivos.

Art. 269. — La entrega o remisión de estas órdenes por la Dirección General de Administración, será efectuada mediante recibo.

3.° Ordenes parciales de pasajes

Art. 270. — Todo pedido individual de órdenes de pasajes, deberá formularse al Ministerio por las distintas direcciones o reparticiones del mismo para su provisión, indicando el nombre y apellido, a favor de quién deba extenderse, cargo, motivo de la comisión, o del traslado y localidades que comprenda.

Art. 271. — Procede la provisión por el Ministerio de órdenes de pasajes, en los casos siguientes:

a) Cuando el traslado del empleado sea en misión oficial dispuesta por la superioridad;

b) Cuando deba hacerse cargo de su puesto por designación o ascenso;

c) Cuando se trate de personal de territorios nacionales que llevase dos años de servicios continuados, de conformidad a lo dispuesto por decreto de fecha enero 28 de 1937, excluyéndose a los miembros de su familia;

d) Cuando lo soliciten los señores Jueces en cumplimiento de comisiones judicales, para personal de policía o de sus respectivos Juzgados o para inspecciones de Juzgados y cárceles; para liberados, excarcelados, presos y detenidos;

e) Cuando lo soliciten los señores Jueces o distritos militares, para reconocimientos, en los casos de pedidos de excepción al servicio militar;

f) Para traslado de internados de los institutos dependientes del Ministerio por terminación y comienzo de los cursos, o por otra circunstancia;

g) Para viajes de estudio o investigaciones científicas que se llevan a cabo por personal de dependencias del Ministerio.

Art. 272. — El personal comprendido en el artículo anterior, apartado *b)*, podrá solicitar se le extiendan órdenes de pasajes para miembros de su familia que estén a su cargo, siempre que sean ascendientes o descendientes o cónyuge indicando el nombre y apellido, edad y vínculo de parentesco, considerándose su petición como declaración jurada a este efecto.

Art. 273. — Gozará de igual derecho, el personal que fuera dejado cesante por supresión del cargo por razón de economía, cambio de designación en el orden administrativo o por no requerirse sus servicios y, en general, siempre que la cesantía no haya sido motivada por culpa o negligencia, etc. del mismo, y deba regresar a su residencia habitual.

Toda orden de pasaje no utilizada, deberá ser devuelta a la Dirección General de Administración o repartición otorgante.

Art. 274. — La Dirección General de Administración podrá extender órdenes de pasajes en conjunto, prescindiendo del formulario aprobado por decreto de fecha noviembre 9 de 1933, cuando se tratase del traslado colectivo de estudiantes, menores de internados, o penados. (Decreto de fecha 31 de octubre de 1934).

4.° Ordenes generales de cargas

Art. 275. — Todas las órdenes de cargas, serán extendidas, cuando el itinerario lo permita, para las compañías de FF. CC., con preferencia sobre las de navegación, por gozar las primeras de una bonificación del 50 % a favor del Estado, de conformidad a disposiciones vigentes.

Art. 276. — La Dirección General de Administración proveerá a las reparticiones del Departamento que justifiquen su necesidad, de talonarios de órdenes generales de cargas, siempre que tengan asignada en el Presupuesto General, partida especial para ello. La entrega de estos talonarios, será efectuada con la imputación ya determinada y la firma facsimilar del Director de Administración, pero el uso de estas órdenes no podrá hacerse, bajo la responsabilidad del Jefe de la dependencia sin su firma y la del Contador o Habilitado Contador por la intervención que le corresponde.

Las reparticiones deberán tener presente los recursos de que dispongan, a fin de no excederse de los créditos respectivos, siendo responsables del déficit que resultase.

Art. 277. — La provisión de estos talonarios por la Dirección General de Administración será efectuada mediante recibo.

5.° Ordenes parciales de cargas

Art. 278. — La Dirección General de Administración extenderá órdenes de carga en los casos siguientes:

a) Para el transporte de artículos adquiridos por la Dirección General de Administración para las dependencias del interior, siendo el gasto que ello origine, por cuenta de la dependencia o del Ministerio, según tengan o no éstas partida especial para atender esa clase de erogaciones;

b) Para el transporte de maquinarias, muebles, semovientes que deba hacerse de una dependencia a otra, en las mismas condiciones establecidas por el artículo anterior;

c) Para el transporte de muebles pertenecientes a funcionarios o empleados designados o ascendidos, que deban trasladarse de un punto a otro, o deban regresar a su residencia habitual, en las mismas condiciones establecidas por este reglamento al referirse a las órdenes oficiales de pasajes;

d) En general, por todo transporte de efectos de pertenencia del Departamento, no comprendidos en los apartados anteriores.

Art. 279. — En los casos establecidos precedentemente, las órdenes serán firmadas por el Director de Administración, de conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo de fecha 14 de julio de 1931,

artículo 5.º, apartado 4, sin perjuicio de que también lo sean, por el Jefe de la repartición cuando disponga de talonarios de órdenes generales.

CAPITULO VII

TITULO I

Disposiciones generales

Horario

Art. 280. — El horario de las oficinas será de 12 a 18 horas los días hábiles, con excepción de los días sábados que será de 9 a 12 horas, debiendo encontrarse el personal en sus respectivos puestos a la hora en que se inicien las tareas y no retirarse al terminar el horario, si existiese disposición en contrario del respectivo Jefe.

Art. 281. — Sin perjuicio de ello, los jefes de divisiones asesorados por los de sección u oficinas, podrán solicitar del Director autorización para imponer un recargo en el horario del personal de las distintas dependencias, cuando existiesen tareas atrasadas y a su juicio tal situación les fuese imputable.

Cuando por otros motivos fuese indispensable la habilitación de un horario extraordinario, el Director de Administración podrá disponerlo, remunerándose tales servicios en las condiciones establecidas por este reglamento en el capítulo de «Pago de Viáticos y Servicios Extraordinarios».

Art. 282. — El personal firmará su entrada en la planilla de asistencia a cargo de los jefes respectivos, quienes la enviarán al jefe de la división inmediatamente después de las 12 horas y de las 9 horas los sábados, debidamente llenados los claros correspondientes al personal ausente y visados por ellos, pasándose después a la división Secretaría a sus efectos.

Según los casos, se llenarán los claros con sellos que establecerán las condiciones de «Ausente con aviso»; «Ausente sin aviso»; «Con parte de enfermo»; «En comisión»; «Licencia acordada»; etc.

Art. 283. — Serán motivos de descuentos en los haberes del personal, las faltas de puntualidad al horario establecido, que no justificasen:

1.° De medio día de sueldo:

a) Cuando llegase tarde dos veces en el mes y no excediese cada falta, de media hora;

b) Cuando la falta excediese de media hora y fuese inferior a una hora;

2.° De un día de sueldo:

c) Cuando la falta excediese de una hora;

3.° Cuando las faltas fuesen reiteradas, la división Secretaría lo llevará a conocimiento de la Dirección, para la adopción de las medidas que estime convenientes sin perjuicio de la aplicación de los descuentos señalados.

El empleado ausente o que llegase tarde en razón de circunstancias fortuitas, por interrupción en los servicios de traslación u otras justificadas, podrá solicitar se considere su falta involuntaria, mediante nota a su jefe inmediato, el que la elevará al jefe de la división con referencia al concepto que le merece el solicitante, remitiéndose la misma a la división Secretaría a sus efectos, previa resolución del Director.

TITULO II

Del personal

1.° De los Jefes de Oficina o Sección

Art. 284. — Los jefes o encargados de secciones u oficinas, son responsables ante el jefe de la división y el Director de Administración de las deficiencias en el servicio, como asimismo, de la disciplina y dedicación del personal, debiendo tener en cuenta al distribuir las tareas, la concordancia entre la importancia de éstas y la jerarquía del empleado, sin perjuicio de poder reemplazar o sustituir al que no demostrase suficiente competencia o dedicación,

por otro de categoría inferior, cuando ello redunde en un mejor servicio, dando cuenta a la superioridad para el registro de esa situación en el legajo personal de ambos empleados.

Art. 285 — Están obligados a guardar para con los subalternos las consideraciones debidas, sin perjuicio de la firmeza necesaria para exigirles el cumplimiento estricto de sus deberes y a estimularlos en toda forma, acogiendo las iniciativas que puedan tener en favor del mejoramiento de los servicios, las que estudiarán y someterán a consideración de la superioridad si lo creyesen conveniente.

Art. 286. — Son, además, deberes de los jefes:

a) Mantener al día las tareas, dando cuenta al jefe de la división respectiva, cuando hubiera atraso, en cuyo caso solicitarán del mismo autorización para habilitar horas extraordinarias sin remuneración alguna, si el atraso es imputable al empleado, o remunerados de acuerdo a este reglamento, si no lo fuera;

b) Vigilar permanentemente el cumplimiento de las instrucciones o normas implantadas para la realización de las tareas en las dependencias a su cargo;

c) Estudiar las notas, providencias, etc., proyectadas para la firma de la superioridad, iniciándolas en prueba de su conformidad;

d) Informar sobre la oportunidad de las licencias solicitadas;

e) Informar al jefe de la división sobre los pedidos formulados por el personal a sus órdenes para retirarse en horas de oficina; de las inasistencias sin aviso y de las que respondiesen a indisposición o enfermedad, conforme se establece en el acápite *d)* del presente título;

f) Recopilar y conservar ordenadamente, todas las disposiciones que se relacionen con la oficina o sección a su cargo;

g) Disponer que todos los informes y notas proyectadas por las secciones o mesas de la oficina o sección a su cargo, se confeccionen con copia a carbónico a los efectos de su archivo para cualquier consulta o información que les fuera requerida por el respectivo jefe de división;

h) Dar cuenta diariamente al jefe de la división de la marcha de la oficina o sección a su cargo;

i) Elevar anualmente al jefe de la división los datos y antecedentes relativos a la oficina o sección a su cargo, con destino a la memoria de la división, antes del 15 de abril de cada año;

j) Solicitar por escrito los útiles e implementos de trabajo necesarios para la atención de la oficina o sección cuyo uso y empleo vigilarán.

2.° De los Empleados

Ficha Personal

Art. 287. — La división Secretaría llevará legajo personal de todos los empleados de la Dirección General de Administración, en el que se registrará, además de los datos relativos a su designación e identidad, las inasistencias, licencias, suspensiones, concepto general, recomendaciones, embargos y otros antecedentes que constituyen elementos de juicio sobre la actuación de los mismos.

Deberes

Art. 288. — El personal deberá demostrar su contracción a las tareas que le sean asignadas; está obligado a mantener al día su trabajo, dando cuenta al superior cuando por razones de fuerza mayor le fuese imposible hacerlo, pudiendo también someter a su consideración, los procedimientos que estimase convenientes para facilitar su tarea.

Estas iniciativas, aprobadas en base del informe del Jefe, serán registradas en sus legajos.

Art. 289. — Son sus deberes:

a) Cumplir a su ingreso, con las disposiciones vigentes relativas a la presentación de las fichas, con destino: al Registro del Personal Civil de la Administración Nacional; a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles; a la Dirección del Impuesto a los Réditos; y al Ministerio, en lo que respecta a la acumulación de cargos;

b) Presentar a la división secretaría el día siguiente al de elecciones nacionales, su libreta de enrolamiento, de confor-

midad a los decretos de fecha 29 de febrero de 1912 y 28 de diciembre de 1926;

c) Guardar reserva sobre el trámite de asuntos a su cargo;

d) Atender al público con urbanidad y brevedad;

e) Conservar sus útiles e implementos de trabajo;

f) Inicialar todo escrito en que intervenga, siendo responsable si por su negligencia diese lugar a una innecesaria o deficiente tramitación de los expedientes, o a que se dictasen resoluciones improcedentes o contrarias a los intereses del Estado;

g) Desempeñar cualquier otro cargo o trabajo que se le encomiende;

h) Ejecutar sin demora y cuidando la debida interpretación, las órdenes que recibiere del jefe inmediato, del jefe de la división o del Director de Administración;

i) Observar disciplina en la oficina, manteniendo la armonía con los demás empleados y ajustando todos sus actos a las reglas de urbanidad;

j) Guardar cuidadosamente, antes de retirarse, los expedientes, documentos y papeles a su cargo.

PROHIBICIONES

Art. 290. — Les está prohibido:

a) Permanecer estacionados o conversando de asuntos ajenos a sus obligaciones, en su oficina u otras, pasillos, corredores, etc., después de iniciado el horario de trabajo;

b) Recibir visitas durante las horas de oficina, ya sea en las mismas, ya en los corredores u otros lugares del Ministerio;

c) Hablar en las oficinas en voz alta o con gestos o ademanes que puedan molestar o distraer a otros empleados;

d) Intervenir o interesarse por la tramitación de expedientes ajenos a sus funciones, de conformidad al decreto de fecha 9 de marzo de 1932;

e) Facilitar o entregar los expedientes para consultas, sin previa autorización del jefe inmediato;

f) Hacer circular listas de suscripciones sin autorización del Director de Administración;

g) Salir de la oficina sin que medie razón que le obligue, relacionada con su trabajo;

h) Comentar o propalar en la oficina versiones infundadas o hacer apreciaciones de carácter personal;

i) Asistir a hipódromos o casas de juegos de azar si prestasen servicios en las divisiones de Tesorería y Contaduría, de conformidad al Acuerdo de fecha 25 de junio de 1931;

j) Valerse de terceras personas para obtener mejoras, ascensos o beneficios;

k) El uso de los teléfonos por asuntos particulares, salvo razones de urgencia, enfermedad, etc.;

l) Recibir regalos, dádivas u obsequios de particulares, bajo pena de exoneración, de conformidad al Acuerdo General de Ministros de fecha 16 de enero de 1931.

LICENCIAS

Art. 291. — Las licencias al personal serán acordadas de conformidad al Acuerdo General de Ministros de fecha 24 de octubre de 1936, no pudiendo el empleado retirarse de su puesto en uso de ellas, sin previa autorización expresa del jefe inmediato.

Art. 292. — Sin perjuicio de ello, se considerarán justificadas y no se practicarán descuentos en sus haberes al personal cuyas inasistencias fueran motivadas por fallecimiento de miembros de la familia, dentro de la siguiente escala:

a) Hasta 5 días, por padres, esposa e hijos;

b) Hasta 3 días, por abuelos o hermanos;

c) Hasta 2 días, por los demás miembros de familia.

Art. 293 — Los permisos para retirarse de la oficina en horas de la misma, por asuntos particulares, deberán ser solicitados al jefe de la división por intermedio del jefe inmediato.

Art. 294. — Los permisos para faltar a la oficina, deberán solicitarse el día anterior, por escrito, al jefe de la división por intermedio del jefe inmediato.

Cuando circunstancias imprevistas no permitan hacerlo el día anterior, el empleado deberá pedirlo telefónicamente por sí o por persona de su casa, a las 12 horas del día o a las 9 horas del sábado, a su jefe inmediato.

Art. 295. — En los casos establecidos en los artículos anteriores, el jefe inmediato del empleado deberá informar sobre el concepto del mismo y las inasistencias que hubiera tenido en el mes.

Art. 296. — Serán descontadas todas las inasistencias que a juicio del Director, no estén debidamente justificadas, sin perjuicio, de dejarse constancia en su legajo personal, o aplicársele otras penas como la suspensión o exoneración de conformidad al Acuerdo General de Ministros de fecha 16 de enero de 1913.

Cuando mediasen razones de indisposición o enfermedad, el empleado, por sí o por persona de su casa, deberá dar aviso al jefe de la división por intermedio de su jefe inmediato.

Siendo la inasistencia hasta de 3 días, el empleado deberá presentar un certificado médico al reanudar sus tareas, solicitando la justificación de su inasistencia.

Si su enfermedad obligase a su inasistencia por un tiempo mayor de 3 días, deberá solicitar, por sí o por un miembro de su familia, al jefe de la división, por intermedio de su jefe inmediato, el envío de un médico oficial a los efectos de su examen y certificación ante el Ministerio de la imposibilidad de concurrir a sus obligaciones.

Art. 297. — La solicitud deberá formularse por escrito o verbalmente por el miembro más allegado al empleado enfermo, si éste no estuviese en condiciones de firmarla.

Art. 298. — Si por cualquier circunstancia, la solicitud se formulase telefónicamente, el empleado del Ministerio que la atienda será responsable si por olvido o por negligencia omitiese llevarlo a conocimiento del jefe de la división.

Embargos

Art. 299. — Los embargos serán considerados, en general como antecedentes desfavorables para el empleado afectado, con respecto a sus promociones o mejoras.

Art. 300. — El personal que preste servicios en la división Tesorería no podrá tener embargo, salvo los que se le traben por alimentos, siendo los primeros, causa para su traslado de oficina.

Certificado de Servicios

Art. 301. — En caso de solicitarse certificado de servicios deberá hacerse en un papel sellado de dos pesos acompañándose un sello de $ 3 para la extensión de dicho certificado, debiendo reponerse el sellado que corresponda si éste ocupase más de una foja.

TITULO III

3.° Del personal de servicio

Del Mayordomo

Art. 302. — El Mayordomo es el jefe del personal de servicio del Ministerio, teniendo a su cargo:

a) La distribución del mismo de acuerdo a la importancia y movimiento de las diversas dependencias, salvo orden expresa de la superioridad;

b) Asignarles sus tareas y darles instrucciones precisas sobre sus obligaciones;

c) Establecer turnos de guardia y horario de limpieza en horas que no sean de oficina;

d) Informar sobre la procedencia y oportunidad de sus licencias;

e) Llevar la planilla de asistencia diaria;

f) Vigilar su desempeño y proponer las medidas disciplinarias que correspondan, según los casos;

g) Controlar los distintos servicios de suscripciones de diarios, encerado de pisos, limpieza de máquinas, provisiones y otros que periódicamente deban efectuarse, de conformidad a resoluciones del Ministerio;

h) Firmar, de conformidad las cuentas que fuesen presentadas al cobro por esos servicios;

i) Solicitar con la debida anticipación, la provisión de los artículos de uso y consumo para las distintas secciones del Ministerio;

j) Controlar el cierre de las puertas de los despachos y oficinas, después del cese de las actividades de las mismas;

k) Vigilar el traslado y arreglo de muebles de las oficinas, mediante autorización superior;

l) Recibir la correspondencia y distribuirla entre los funcionarios y oficinas a que esté destinada;

ll) Destacar el personal que deba diligenciar fuera del Ministerio expedientes, notas, etc., o en virtud de órdenes superiores.

ORDENANZAS

Art. 303. — Son sus deberes:

a) Cumplir las tareas que les señale el Mayordomo;

b) Atender deferentemente al personal y al público, indicando a este último, cuál es la oficina adonde deba acudir para la atención del asunto que motiva su concurrencia al Ministerio;

c) Permanecer en el lugar en que deba prestar servicios, del que no podrá alejarse sin causa justificada;

d) Ejecutar con diligencia las órdenes que reciba de los funcionarios y jefes de oficinas, secciones y de mesas, únicamente;

e) Vigilar e impedir que el público penetre en las oficinas de acuerdo a las instrucciones recibidas de los jefes;

f) Atender el servicio de café que se sirve al personal en las horas de la tarde;

g) Efectuar el cierre de las puertas de las oficinas, cuidando que igualmente queden cerradas las llaves de luz, calefacción, ventiladores, gas, etc., después de retirarse el personal;

h) Y en general, todo aquello que se relacione con los servicios de las secciones del Ministerio.

Artículos pertinentes de la Ley N.° 11.672 (Edición 1942) Complementaria Permanente de Presupuesto

Disposiciones Generales

Art. 11. — Los sueldos y denominaciones en los empleos se regirán por la siguiente escala:

Clase	Categoría	Remuneración mensual m$n.
1	Oficial Mayor	1.000
2	Oficial Principal	950
3	Oficial 1.°	900
4	Oficial 2.°	850
5	Oficial 3.°	800
6	Oficial 4.°	750
7	Oficial 5.°	700
8	Oficial 6.°	650
9	Oficial 7.°	600
10	Oficial 8.°	550
11	Oficial 9.°	500
12	Auxiliar Mayor	450
13	Auxiliar Principal	400
14	Auxiliar 1.°	375
15	Auxiliar 2.°	350
16	Auxiliar 3.°	325
17	Auxiliar 4.°	300
18	Auxiliar 5.°	275
19	Auxiliar 6.°	250
20	Auxiliar 7.°	225
21	Auxiliar 8.°	200
22	Ayudante Mayor	190
23	Ayudante Principal	180
24	Ayudante 1.°	160
25	Ayudante 2.°	150
26	Ayudante 3.°	130
27	Ayudante 4.°	120
28	Ayudante 5.°	100
29	Ayudante 6.°	90
30	Ayudante 7.°	75
31	Ayudante 8.°	50
32	Ayudante 9.°	45

Quedan excluídos de esta escala los correspondientes al personal militar al personal de tropa de policía y al clero. Para la magistratura y la docencia, sólo regirán las remuneraciones.

.....

Art. 13. — Los peritos y profesionales de cualquier categoría, que desempeñen empleos a sueldo de la Nación, no podrán reclamar honorarios en los asuntos en que intervengan por nombramiento de oficio en los que el fisco sea parte y siempre que las costas no sean a cargo de la parte contraria.

Quedan excluídos de esta prohibición aquellos peritos o profesionales, que desempeñen *cátedras de enseñanza universitaria o secundaria,* siempre que no tengan otro empleo o sueldo de la Nación.

.....

Instrucción Pública

Art. 94. — Las partidas globales para sueldos y gastos del anexo E, destinadas a servicios escolares dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, no autorizan la creación de nuevos establecimientos educacionales.

Art. 95. — Quedan facultados los rectores y directores de establecimientos de enseñanza secundaria, normal y especial, para abonar sus haberes a los profesores suplentes con los importes que se hubieran liquidado a los titulares a quienes reemplazan, en los casos en que éstos no tengan derecho a percibirlos por disposición reglamentaria.

El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, previo dictamen de la Contaduría General de la Nación, reglamentará este artículo.

Art. 96. — Los gastos que demande el cumplimiento de la ley N.° 419 (compras de libros, fundación de nuevas bibliotecas, canje internacional, provisión de libros a los colegios nacionales y difusión de publicaciones argentinas en el exterior), serán atendidos con los recursos propios que la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares tenga en su poder o que se les asigne para tal destino, con el 1 % de

los subsidios que se hicieren efectivos en el año, como asimismo con los subsidios a las biliotecas que han sido o sean declarados caducos por no funcionar las mismas de conformidad con las disposiciones legales, no pudiendo invertirse dichos recursos en sueldos y otros gastos administrativos.

Art. 97. — (Art. 75 de la Ley N.° 12.778 (1). — Declárase comprendidas a las escuelas de Artes y oficios y Normales de Adaptación Regional, dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, dentro de los beneficios acordados por la Ley N.° 12.558 (2).

Art. 98. — (Art. 24, Ley N.° 12.778). — El Poder Ejecutivo invertirá anualmente y durante diez años la suma de dos millones de pesos moneda nacional ($ 2.000.000 m|n.), en la construcción de edificios para colegios, escuelas, juzgados y demás locales destinados a dependencias del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, a cuyo efecto queda autorizado a emitir títulos de la deuda pública en la cantidad necesaria. Todas estas obras serán llevadas a cabo de acuerdo con lo dispuesto por las Leyes Nros. 428, 775 y complementarias. En el plan anual de trabajos públicos, el Poder Ejecutivo incluirá, por lo menos, la cuota anual que dispone el presente artículo. Este importe deberá discriminarse estableciendo la suma a invertir en la Capital Federal y cada una de las provincias y territorios.

Consejo Nacional de Educación

Art. 99. — En el proyecto de presupuesto para 1938 el personal del Consejo Nacional de Educación deberá figurar de acuerdo con sus verdaderas funciones, quedando suprimidas desde la sanción de esta ley, las adscripciones de personal con título docente que en la actualidad desempeñan cargos en las dependencias de dicha repartición, a excepción de aquellas que, a juicio del Poder Ejecutivo, sean absolutamente indispensables para no perturbar la buena marcha de la administración escolar.

---

(1) De Presupuesto para el año 1942, promulgada por el Poder Ejecutivo el 8 de octubre.

(2) De Ayuda Escolar.

Art. 100. — (Art. 71, ley número 12.778). — La construcción de edificios autorizada por las leyes números 11.619 y 12.360 (artículo 25), se sujetará a un plan previo en el que se contemplará proporcionalmente las necesidades regionales.

El Consejo Nacional de Educación someterá anualmente al Poder Ejecutivo el correspondiente plan de financiación de la ley número 11.619, el que se aprobará con intervención del Ministerio de Hacienda.

Art. 101. — (Art. 72, ley número 12.778). — A los efectos de la construcción de edificios para colegios, escuelas, juzgados y demás locales destinados a sus dependencias, el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, queda comprendido dentro de las atribuciones previstas por la ley número 11.619.

Estas obras, como en el caso de las construcciones o adquisiciones autorizadas por aquella ley, se harán por licitación pública, en terrenos cuya adquisición fuera hecha de la misma manera o cuya donación sea aceptada por el Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, previo informe de las reparticiones técnicas.

En todos los casos, los planes anuales de financiación serán previamente aprobados por el Poder Ejecutivo, con intervención del Ministerio de Hacienda.

Art. 102. — Los cargos de médicos que figuran en el ítem 1 del anexo E (Consejo Nacional de Educación), serán llenados con los actuales adscriptos al Cuerpo Médico Escolar y teniendo en cuenta sus actuales sueldos.

Art. 103. — El Poder Ejecutivo, en acuerdo de ministros, podrá autorizar al Consejo Nacional de Educación a invertir en las necesidades más urgentes de la enseñanza y en el restablecimiento y creación de escuelas y grados en la Capital Federal, provincias y territorios (leyes números 1.420 y 4.874), como así para el mantenimiento de los cursos especiales y secciones primarias de las escuelas para adultos, los sobrantes que resulten y las economías que realicen dentro de la suma total asignada para gastos de instrucción primaria, anexo E, efectuando, a tal fin, una compensación de los saldos deudores y acreedores de las diversas partidas y sin que en ningún caso puedan aumentarse los sueldos fijados en el presupues-

to ni efectuar inversiones en otros conceptos que no sean los expresamente previstos en el anexo respectivo.

Art. 104. — Derógase el inciso 7 del artículo 44 del capítulo V de la ley número 1.420.

Art. 105. — (Art. 76, ley número 12.778). — Las vacantes que se produzcan en el Consejo Nacional de Educación, deberán ser provistas con personal que desempeñará sus funciones en la misma provincia o territorio en que aquélla se haya producido.

Asistencia Social

Art. 124. — Los establecimientos educacionales que gocen de subsidios acordados por el presupuesto, instituirán becas de primera clase y a la orden del Poder Ejecutivo, en número de una por cada cincuenta pesos moneda legal o fracción siendo internado y de una por cada veinte pesos moneda legal o fracción, si es externado, con el subsidio mensual concedido. Estas becas se destinarán con preferencia a los hijos de personas pobres y de empleados nacionales, civiles y militares fallecidos o de aquellos que hayan sido inutilizados en el servicio público y que carezcan de medios de subsistencia.

Instrucción Pública y Agricultura

Art. 127. — (Art. 74, Ley N.° 12.778). — El producido de los talleres de las escuelas de Artes y Oficios, de las escuelas profesionales y de las escuelas agrícolas dependientes del Ministerio de Agricultura, se invertirá en la adquisición de materiales y maquinarias para las mismas.

Universidades Nacionales

Art. 195. — Derógase el inciso *f*, artículo 2.° de la ley número 10.861.

Art. 196. — El Gobierno Nacional tomará a su cargo el aporte patronal a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, correspondiente a las universidades.

Art. 197. — (Art. 60, Ley N.° 12.778). — Los consejos superiores de las universidades nacionales podrán ajustar sus presupuestos a fin de atender las necesidades más urgentes de sus dependencias, dando cuenta al Poder Ejecutivo.

Las modificaciones podrán realizarse siempre que se adapten a las siguientes normas:

a) Que no originen un aumento de rentas generales dentro del ejercicio en que se aplicarán las modificaciones;

b) Que no se aumenten las remuneraciones del personal; y

c) Que no se traduzcan en un aumento automático a atenderse con rentas generales en ejercicios futuros.

Artículos pertinentes de la Ley N.° 12.816, de Presupuesto General de la Nación para el año 1943, promulgada por el Poder Ejecutivo el 15 de octubre de 1942.

Art. 2.° — Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar al presupuesto que regirá durante el año 1943, los créditos necesarios para atender el aumento vegetativo de la deuda pública y las promociones de la enseñanza secundaria, especial y superior, hasta la suma de $ 33.400.000 y $ 3.000.000 m/n., respectivamente. De esta última suma corresponderá a la Universidad de Buenos Aires, pesos 250.000; a la Universidad de Córdoba $ 250.000; a la Universidad de La Plata, $ 200.000; a la Universidad del Litoral, pesos 180.000; a la Universidad de Tucumán, $ 200.000; y a la Universidad de Cuyo, $ 320.000 moneda nacional.

. . . . . .

Art. 9.° — Sustitúyese el inciso 3.° del artículo 21 de la Ley N.° 12.778, por el siguiente: la suma de cuatro millones de pesos moneda nacional ($ 4.000.000 m/n.) para el cumplimiento del artículo 25 de la Ley N.° 12.360, texto definitivo (Edificación Escolar), dos millones de pesos moneda nacional ($ 2.000.000 m/n), para las construcciones autorizadas por el artículo 24 de la presente ley (Colegios, Juzgados y dependencias del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública) y cuatro millones de pesos moneda nacional ($ 4.000.000 m/n.) para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 de la presente ley (Contribución para obras a cargo de la Dirección de Parques Nacionales).

. . . . . .

Art. 11. — Autorízase al Consejo Nacional de Educación, para que, dentro de los recursos que asigna el presupuesto y con los sobrantes de las partidas de haberes, regularice los sueldos de los maestros, comenzando por los de primera categoría y por riguroso orden de antigüedad, conforme a la siguiente escala:

4.000	Maestros	de	primera	categoría	a	$	325.—
6.000	»	»	segunda	»	»	»	300.—
8.000	»	»	tercera	»	»	»	275.—
4.000	»	»	cuarta	»	»	»	250.—
4.000	»	»	quinta	»	»	»	225.—
1.114	»	»	sexta	»	»	»	200.—

La aplicación de este régimen en ningún caso podrá importar rebaja a las asignaciones de los maestros en ejercicio a la fecha de sanción de esta ley.

El Consejo Nacional de Educación proyectará las modificaciones que origine en su presupuesto la aplicación del presente artículo, las que deberá someter a la aprobación del Poder Ejecutivo, con intervención del Ministerio de Hacienda.

Art. 13. — Sustitúyase el artículo 71 de la Ley N.° 12.778, por el siguiente: la construcción de edificios autorizada por la Ley N.° 12.360 (artículo 25), se sujetará a un plan previo en el que se contemplará proporcionalmente las necesidades regionales.

.....

JUBILACIONES Y PENSIONES

JUBILACIONES Y PENSIONES

Ley N.° 4.349, de 20 de setiembre de 1904, creando la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, con las modificaciones introducidas por leyes posteriores.

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1904

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de

LEY:

Artículo 1.° — Créase una Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para los funcionarios, empleados y agentes civiles de que habla el artículo 2.°.

Declárase que los fondos y rentas de esa Caja, son de propiedad de las personas comprendidas en las disposiciones de la presente ley, y que con ellos se atenderá al pago de las jubilaciones concedidas en virtud de las Leyes Nros. 1.909, 2.219 y 3.744, y al de las jubilaciones y pensiones que en lo sucesivo se acuerden en conformidad a la presente.

Art. 2.° — Quedan comprendidos en las disposiciones de la presente ley:

1.° Los funcionarios, empleados y agentes civiles que desempeñen cargos en la Administración. *(Artículo 1.° — Ley N.° 4.870)*;

2.° Los directores, empleados y demás personal del Consejo Nacional de Educación, a que se refiere la presente Ley N.° 1.909;

3.° Los empleados del Banco de la Nación, del Banco Hipotecario Nacional y *Banco Nacional en Liquidación* (Art. 2.°, Ley 4.870);

4.° Los jubilados existentes, a los efectos del Capítulo IV;

5.° Los magistrados judiciales, ministros de Estado y los que desempeñen cargos electivos, que a ella se acojan, siempre que los que pertenezcan a las dos últimas categorías, hayan prestado 20 años de los servicios a que se refiere el inciso 1.° de este artículo;

6.° El personal de los Ferrocarriles de la Nación;

7.° El personal de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones; (Art. 3.° de la Ley N.° 4.870);

8.° *Los empleados del Registro de la Propiedad de la Capital, podrán acogerse a los beneficios de la Ley N. 4.349 siempre que integren a la Caja Nacional de Pensiones, una suma equivalente al descuento del cinco por ciento de los sueldos que han gozado, desde la fecha de su nombramiento, con el interés correspondiente (Artículo 2.° de la Ley 6.007);*

9.° *Los miembros del cuerpo Consular que fueren convertidos en empleados nacionales, en virtud de una ley del Congreso y por decreto del Poder Ejecutivo, podrán acogerse a los beneficios que la ley cuatro mil trescientos cuarenta y nueve acuerda a los empleados nacionales, computándose los servicios prestados con anterioridad a esa fecha, siempre que, además de los descuentos establecidos en aquélla, abonen el descuento suplementario a que se refiere el artículo sesenta y dos de la misma, que se calculará sobre el sueldo que entren a gozar y por un tiempo igual al que medie entre el primero de enero de mil novecientos uno y la fecha de su ingreso en la Administración. (Artículo 15, Ley 4.870);*

La jubilación en estos casos se liquidará computándose cada peso oro del sueldo, por un peso moneda nacional.

Art. 3.° — Esta ley no regirá respecto a las remuneraciones siguientes:

1.° Las de las personas expresadas en el inciso 5.° del artículo 2.° cuando no se acojan a la presente;

2.° Las de los servicios que sean contratados en virtud de autorizaciones especiales y teniendo en vista la competencia excepcional de las personas, salvo que hubieran contribuído desde su incorporación al servicio, a la formación del fondo de la Caja, con el descuento de que habla el inciso primero del artículo 4.°;

3.° Las de los obreros que trabajan a jornal en las obras públicas o en los talleres industriales del Estado, salvo aquéllos que presten servicio permanente y contribuyan con el referido descuento;

4.° Derogado por el Art. 4.° de la Ley N.° 4.870;

5.° Las de aquéllos que desempeñan comisiones accidentalmente o por tiempo fijo.

CAPITULO I

De la Caja Nacional

Art. 4.° — El fondo de la Caja Nacional se formará con las siguientes asignaciones:

Modificado por Art. 1.° Ley núm. 11.923. Ver pág. 251.

1.° Con el descuento forzoso del 5 % sobre los sueldos de las personas comprendidas en el artículo 2.°;

2.° *Con el importe de la mitad del primer mes de sueldo de la persona que entra en la Administración o que se incorpore a ella, siempre que no haya sufrido antes este descuento;*

3.° *Con la diferencia del primer mes completo de sueldo, en los siguientes casos:*

a) Cuando algunas de las personas comprendidas en la ley reciba un aumento de sueldo;

b) Cuando pase a ocupar un empleo mejor retribuído;

c) Cuando acumule empleos;

d) Cuando entre de nuevo en la Administración en un empleo mejor rentado que el último que desempeñó, siempre que anteriormente haya contribuído con el descuento de la mitad de sueldo (Art. 5.°, Ley 4.870).

4.° Con el importe de las multas que en dinero efectivo la Administración imponga a su personal o a los extraños;

5.° Con los intereses de los fondos públicos y rentas de otros bienes que la Caja adquiera;

6.° Con el importe de los sueldos de los empleos vacantes, salvo que el Poder Ejecutivo declare por decreto especial que la no provisión obedece a razones de economía;

7.° Con las donaciones o legados que se hagan;

8.° Con la renta de diez millones de pesos en fondos públicos de 6 % de interés, con que contribuye el Estado;

9.° Con el importe del fondo acumulado por el Consejo Nacional de Educación, en virtud de las leyes Nos. 1.420 y 1.909, que pasa a formar parte del tesoro.

Art. 5.° — La Caja Nacional será administrada por una Junta compuesta de un Presidente-Administrador, designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, que durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones, y podrá ser reelegido; y de dos Vocales, que lo serán el Presidente de la Contaduría Nacional y el Presidente del Crédito Público.

Modificado por Art. 1.° Ley núm. 11.923. Ver pág. 251.

Art. 6.° — El Presidente-Administrador de la Caja Nacional podrá ser removido antes del término fijado a solicitud de la Junta de Administración, por mala conducta en el ejercicio de sus funciones, por el Poder Ejecutivo, en Acuerdo de Ministros.

Art. 7.° — Faltando el Presidente de la Junta, sus funciones serán desempeñadas por el Presidente de la Contaduría Nacional.

Modificado por Art. 1.° Ley núm. 11.923. Ver pág. 251.

Art. 8.° — La Junta de que habla el artículo 5.° estará especialmente obligada:

1.° A velar por la fiel observancia de las prescripciones que la presente ley establece para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones;

2.° A cuidar que no continúe en el goce de ella ninguna persona que haya perdido el derecho de percibirla;

3.° A rendir cuenta trimestral de sus operaciones a la Contaduría General de la Nación y a publicar cada tres meses el estado correspondiente;

4.° A elevar al Ministerio de Hacienda, al fin de cada ejercicio económico, una memoria completa sobre la situación de la Caja, señalando los inconvenientes con que hubiere tropezado, y proponiendo las modificaciones de la ley que la práctica demostrara necesarias, especialmente las que se refieren a la proporcionalidad de los recursos que se acumulen con relación a las erogaciones que hubiesen sobrevenido o se presuma que deben ocurrir, siempre bajo la base de los recursos que la presente crea deben por sí sólo bastar para llenar sus fines;

5.° A darse un Reglamento Interno, sometiéndolo a la aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 9.° — La Junta de la Caja Nacional percibirá los fondos expresados en el artículo 4.°, pagará las jubilaciones y pensiones a que se refiere esta ley, formulará su presupuesto de gastos, que deberá ser aprobado por el Poder Ejecutivo y atendido con los fondos de la Caja; nombrará y removerá el personal a sus órdenes.

Art. 10. — En ningún caso podrá disponerse de parte alguna de los fondos de la Caja para otros fines que los mencionados en esta ley, bajo la responsabilidad personal de los Directores, que se hará efectiva en sus bienes por disposición del Poder Ejecutivo o a solicitud de cualquiera de las personas de que trata el artículo 2.°.

Art. 11. — La Caja no podrá atesorar suma en dinero efectivo que no requiera para los pagos corrientes y una reserva prudencial con tal objeto. Todos sus depósitos en dinero serán colocados en el Banco de la Nación.

Art. 12. — *Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, los fondos de la Caja serán invertidos por ésta en títulos de la deuda Nacional u otros que tengan la garantía subsidiaria de la Nación, de manera que le produzcan el mayor interés y la más frecuente capitalización posible (Art. 1.°, Ley 6.007).*

Art. 13. — La adquisición o enajenación de títulos nacionales se hará por llamado a licitación, salvo que la Junta por unanimidad, resuelva en casos especiales proceder en forma distinta.

Art. 14. — Las cantidades que, según el Art. 4.°, forman el fondo de la Caja Nacional, serán retiradas mensualmente por las Cajas Nacionales que paguen o liquiden sueldos y entregadas sin demora a la primera.

Art. 15. — Decláranse inembargables los bienes de la Caja Nacional, establecidos por la presente ley.

CAPITULO II

De las jubilaciones

Art. 16. — Los funcionarios, empleados o agentes civiles de la Nación expresados en el artículo 2.° tendrán derecho a la jubilación con arreglo a las disposiciones de la presente ley.

Art. 17. — *La jubilación es ordinaria o extraordinaria. La ordinaria equivale al (3.1/6 %) tres por un sexto por ciento del último sueldo multiplicado por los años de servicios del que obtenga su jubilación. La extraordinaria equivale al (2.40 %) dos con cuarenta centésimos por ciento del último sueldo, multiplicado también por los años de servicios del jubilado, (Art. 1.°, Ley 6007).*

Modificado por Art. 1.° Ley núm. 11.923. Ver pág. 252.

Art. 18. — *La jubilación ordinaria se acordará al empleado que haya prestado treinta años de servicios (Art. 1.°, Ley 6.007).*

Modificado por Art. 1.° Ley núm. 11.923. Ver pág. 252.

Art. 19. — La jubilación extraordinaria se acordará al empleado que, después de cumplir veinte años de servicios, fuese declarado física o intelectualmente imposibilitado para continuar en el ejercicio de su empleo, y al que, cualquiera que fuese el tiempo de servicios prestados, se inutilizase física o intelectualmente en un acto del servicio y por causa evidente y exclusivamente imputable al mismo (Art. 7.°, Ley 4.870).

Art. 20. — *A los efectos de la jubilación sólo se computarán los servicios efectivos durante el número de años requerido por la ley, aun cuando ellos no fuesen continuos, no debiendo computarse en ningún caso las interrupciones como tiempo de servicio (Art. 1., Ley 6.007).*

Art. 21. — A los empleados del Banco de la Nación o del Hipotecario Nacional, se les computarán los servicios que hayan prestado en el Banco Nacional, actualmente en liquidación.

Art. 22 (1). — Unicamente podrán volver al servicio los que hayan obtenido jubilación ordinaria. En este caso, el jubilado cesará en el goce de la jubilación y percibirá solamente el sueldo asignado

(1) Sustituído por el artículo 191 de la Ley 11.672 (edición 1942) complementaria permanente de presupuesto Ver pág. 257.

al nuevo empleo. Cuando abandone éste, volverá al goce de la jubilación, sin que pueda tener derecho a que le sea aumentada. Si es llamado a desempeñar funciones públicas accidentales, no podrá cobrar retribución alguna al Estado.

Sustituído por Art. 191 de la ley número 11.672 (edición 1942). complementaria permanente de presupuesto. Ver pág. 257.

No están comprendidos en estas prohibiciones los puestos provinciales ni municipales, ni los electivos nacionales, los cuales pueden ser ejercidos por los jubilados sin perder el goce de la jubilación. (Art. 2.°, Ley 5.143).

La jubilación obtenida por servicios en la Magistratura o en la Administración, no inhabilita para desempeñar puestos en el profesorado que quedarán sujetos al descuento del cinco por ciento sin dar derecho a ningún aumento de jubilación. (Art. 3, Ley 6007).

Art. 23. — No podrán computarse a las personas de que habla la última parte del artículo 19, para determinar el monto de su jubilación extraordinaria, un tiempo menor de quince años de servicios.

Art. 24. — *Derogado por el Art. 1.° de la Ley 6.007.*

Modificado por Art. 1.° Ley núm. 11.923. Ver pág. 252.

Art. 25. — A los efectos establecidos en los artículos 17 y 28, declárase último sueldo el promedio del sueldo mensual que el interesado hubiera percibido durante los últimos *doce meses de servicios (Art. 1.° de la Ley 7.497).*

Art. 26. — No se computarán los servicios prestados antes de la edad de 18 años, salvo para los que desde su incorporación al servicio con esa edad, hayan sufrido el descuento del 5 % sobre sus sueldos.

Art. 27. — *Los empleados despedidos por razones de economía, o por no requerirse sus servicios y los que cesen por cambio de designación en el orden administrativo, o por las supresiones que se hicieren en los presupuestos anuales o en leyes especiales, que quisieran retirarse de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, tendrán derecho después de diez años de servicios, a reclamar la devolución del cinco por ciento descontado de sus sueldos con el interés del cinco por ciento, capitalizado cada año.*

Todos los empleados que presten servicios en la Administración, cualquiera que sea su carácter, sufrirán los descuentos que sobre sus sueldos establecen las leyes de Pensiones y Jubilaciones. (Art. 1.°, Ley N.° 6.007).

Art. 28. — *Ninguna jubilación podrá exceder del 95 por ciento del último sueldo percibido.*

Art. 29. — La jubilación deberá solicitarse, so pena de nulidad, ante la Junta de Administración, quien después de llenados todos los trámites, la acordará o no, elevándola por intermedio del Ministerio que corresponda, a la aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 30. — Si se solicitase jubilación extraordinaria, la Junta de Administración, sin perjuicio de las averiguaciones que estime procedentes, se dirigirá al Departamento Nacional de Higiene, para que informe sobre las causales alegadas de imposibilidad física o intelectual.

Art. 31. — *El derecho acordado por el artículo 18 de la Ley 4.349, podrá ser ejercido por los miembros de la Administración Judicial, después de veinticinco años de servicios en ella y cincuenta y cinco años de edad; por los maestros de Instrucción Primaria, con veinticinco años de servicios en ella y cuarenta y cinco años de edad; por los empleados de Correos y Telégrafos, en las mismas condiciones; por los empleados, clases y agentes de Policía de seguridad; por los empleados de Penitenciaría, Cárceles y Alcaidías de Policía; por los Jefes, oficiales y tropa del Cuerpo de Bomberos, con veinticinco años de servicios y cuarenta y cinco de edad.* (Art. 1.°, Ley 5.143, modificando el Art. 9.° de la Ley 4.870).

Modificado por Art. 1.° Ley núm. 11.923. Ver pág. 252.

En estos casos, la jubilación será del noventa y cinco por ciento del sueldo mensual que resulte del promedio de sueldos tomados de los *últimos doce meses* de servicios (Art. 1.°, Ley 7.497).

Los mismos empleados enumerados en el artículo anterior, podrán ejercitar el derecho acordado en la primera parte del artículo diez y nueve de la ley cuatro mil trescientos cuarenta y nueve, después de diez y siete años de servicios. En este caso, la jubilación será equivalente al tres por ciento del último sueldo, multiplicado por el número de años de servicios.

Exceptúase del beneficio acordado en este artículo y en el anterior, a los empleados de oficinas administrativas de la policía. (Artículo 10, Ley 4.870).

Los empleados enumerados en las categorías enunciadas en el artículo noveno de esta ley, que hayan sido jubilados de acuerdo con la ley número cuatro mil trescientos cuarenta y nueve, gozarán de las ventajas que se establecen en dicho artículo. (Art. 16, Ley 4.870).

Si los servicios prestados por los funcionarios y empleados citados, no llegaran al número de años fijados por este artículo, y el que pretendiese la jubilación tuviere otros anteriores en las condiciones generales, ambos servicios serán computados en la proporción que corresponda, aunque el tiempo de cada uno de ellos por separado no llegue al mínimum que da derecho a la jubilación. (1). (Párrafo 4.º del artículo 3.º de la Ley 6.007).

Art. 32. — No tratándose de funcionarios inamovibles, podrá el Poder Ejecutivo jubilar de oficio a los que se hallen en las condiciones de los artículos anteriores, cuando así lo exija el buen servicio público. En este caso la resolución será tomada con intervención de la Junta de Administración, audiencia del interesado y en Acuerdo de Ministros.

Art. 33. (2). — Las fracciones de años, para el cómputo de servicios, se apreciarán por años enteros si alcanzaran a seis meses. Si fuesen menores, no serán computados.

Art. 34. — Las jubilaciones concedidas hasta la promulgación de la presente, en virtud de lo dispuesto por las leyes Nos. 1.909, 2.219 y 3.744, serán en lo sucesivo pagadas por la Caja Nacional, con una reducción del 10 % sobre su valor actual.

Art. 35. — Cuando un empleado hubiese desempeñado dos o más empleos en propiedad al mismo tiempo, la jubilación se acordará sobre el sueldo mayor sin acumularse al tiempo de los otros ni al sueldo. Exceptúase el caso de los empleos del profesorado, en el cual se acumularán los sueldos a condición de que, por lo menos, se haya sufrido durante cinco años, el descuento del 5 % en los sueldos de todas las cátedras desempeñadas.

Art. 36. — Las jubilaciones serán pagadas desde el día en que el interesado deje el servicio.

---

(1) La supresión de este párrafo en la publicación oficial de la Ley, dió lugar a una aclaración de la Presidencia de la Caja.

(2) Derogado por Art. 192 de la Ley N.º 11.672, edición 1942, complementaria permanente de presupuesto. Ver Pág. 257.

CAPITULO III

De la pérdida de la jubilación

Art. 37. — No tendrán derecho a ser jubilados:

1.° El que hubiese sido separado del servicio por mal desempeño de los deberes de su cargo;

2.° El que hubiese sido condenado por sentencia judicial por alguno de los delitos clasificados en el Código Penal, como «peculiares a los empleados públicos», y, en general, por delitos contra la propiedad, o por cualquier otro que merezca pena de penitenciaría o presidio;

3.° El que no solicitase su jubilación dentro de los cinco años siguientes al día en que dejó el servicio.

Art. 38. — La jubilación es vitalicia y el derecho a percibirla sólo se pierde por las causas expresadas en el inciso 2.° del artículo anterior.

Art. 39. — La conmutación o el indulto, no harán recobrar los derechos perdidos, según los artículos 37 y 38, si la pena ha sido impuesta por delitos contra la propiedad o peculiares a empleados públicos.

Art. 40. — No podrá reclamar su jubilación el que tenga causa criminal pendiente contra su persona, siempre que se proceda por alguno de los delitos expresados en el inciso 2.° del artículo 37. El interesado deberá promover previamente la terminación definitiva del proceso.

CAPITULO IV

De las pensiones

Art. 41. — En los mismos casos en que, con arreglo a las disposiciones de la presente ley, haya derecho a gozar jubilación y ocurra el fallecimiento del empleado o jubilado, tendrán derecho a pedir pensión, en la proporción y condiciones establecidas en el presente capítulo, la viuda, los hijos y, en su defecto, los padres del causante.

Cuando ocurra el fallecimiento de un jubilado, las personas enumeradas en el párrafo anterior tendrán derecho a pensión, en las condiciones establecidas en los artículos siguientes, sin otro trámite que el de acreditar la existencia de la jubilación y que ésta haya sido acordada con sujeción a las leyes respectivas. (Art. 13 de la ley N.° 4.870).

Art. 42. — El derecho a gozar de la pensión entre las personas mencionadas, corresponderá en el orden siguiente:

1.° A la viuda en concurrencia con los hijos;
2.° A los hijos solamente;
3.° A la viuda en concurrencia con los padres ;
4.° A la viuda;
5.° A los padres.

Los hijos naturales disfrutarán la parte de la pensión a que tengan derecho, según las leyes comunes.

Art. 43. — El importe de la pensión será de la mitad del valor de la jubilación que se gozaba o a que se tenía derecho por el causante.

Art. 44. — Si la esposa del empleado quedase viuda, hallándose divorciada por su culpa, o viviendo de hecho separada sin voluntad de unirse, o provisoriamente separada por su culpa, a pedido del marido, no tendrá derecho a pensión; pero las demás personas llamadas a obtenerla por esta ley, gozarán de ella como si la viuda no existiera.

Art. 45. — Siempre que sean varias las personas llamadas a disfrutar de la pensión, si alguna de ellas pierde su derecho a percibirla, la parte que le corresponde acrece a las demás.

Art. 46. — Si a la muerte del causante de una pensión quedan hijos huérfanos de distintos matrimonios, la pensión se dividirá por iguales partes entre todos ellos, entregándose a sus respectivos representantes legales.

Art. 47. — Para gozar de la pensión, la viuda que no hubiese tenido hijos durante el matrimonio con el causante, deberá justificar que ha estado casada con el empleado jubilado cinco años antes del fallecimiento de éste, salvo el caso que existan hijos legitimados o de que se trate de lo previsto en la última parte del artículo 19. En este caso bastará que el matrimonio se haya celebrado antes del accidente allí expresado.

Art. 48. — El término máximo de duración de las pensiones será de 15 años, a contar desde el día del fallecimiento del causante, desde cuya época deberán abonarse.

Modificado por Art. 1.º Ley núm. 11.923. Ver pág. 275.

Art. 49. — No se acumularán dos o más pensiones en la misma persona. Al interesado le corresponde optar por la que convenga, y hecha la opción quedará extinguido el derecho de las otras.

Art. 50. — Toda solicitud de pensión se presentará so pena de nulidad, a la Junta de Administración acompañada de los recaudos necesarios para justificar que el postulante se halla en las condiciones de la ley. Estando la solicitud suficientemente instruída, la Junta la acordará o no y la elevará con informe al Poder Ejecutivo para su resolución definitiva.

Art. 51. — Las personas designadas en el artículo 42, tendrán derecho a que se les liquide el importe de un mes del último sueldo del empleado fallecido sin dejar derecho a pensión, por cada cuatro años que éste hubiera contribuído a la formación del fondo de la Caja Nacional.

Extinción de la pensión

Art. 52 (1). — El derecho a pensión se extingue:

1.º Para la viuda, desde que contrajere nuevas nupcias;

(1) Modificado por Art. 1.º Ley 11.923. Ver pág. 277.

Modificado por Art. 1.º Ley núm. 11.923. Ver pág. 277.

2.º Para los hijos varones, desde que llegasen a la edad de 20 años;

3.º Para las hijas solteras, desde que contrajesen matrimonio;

4.º En general: por vida deshonesta, vagancia, por domiciliarse en país extranjero, o por haber sido condenado por delito contra la propiedad o a las penas de presidio o penitenciaría.

Disposiciones generales

Art. 53. — Las pensiones concedidas hasta la fecha de la presente ley, seguirán abonándose por la ley de Presupuesto General, reducidas en un 10 % de su valor.

Art. 54. — *Derogado por el artículo 18 de la Ley N.º 4.870.*

Art. 55. — Las jubilaciones y pensiones son inalienables. Será nula toda venta o cesión que se hiciere de ellas por cualquier causa.

Los jueces sólo podrán decretar el embargo de la cuarta parte de ellas; pero si la pensión correspondiese a varias personas, se embargará sólo la cuarta parte de lo que deba percibir el deudor embargado.

Art. 56. — Los comprobantes con que se debe justificar el derecho para optar a jubilación o pensión, serán los mismos que se requieren por las leyes comunes para la adquisición de derechos.

Art. 57. — En el caso de que la Junta de la Caja Nacional no haya acordado una jubilación o pensión, el Poder Ejecutivo, oído el Procurador de la Nación, resolverá el caso en Acuerdo de Ministros.

Art. 58. — No se computarán a los efectos de esta ley, los servicios prestados a las municipalidades o en las administraciones de Provincia, ni tampoco los desempeñados en el ejército, cuando éstos sean retribuídos con retiro militar.

Art. 59. — El Poder Ejecutivo podrá suspender por el tiempo que juzgue necesario la concesión de nuevas jubilaciones y pensiones, en el caso de que los recursos de la Caja Nacional no fuesen suficientes para atenderlas, dando inmediatamente cuenta al Congreso, y promoviendo la revisión de la presente ley.

Art. 60. — Esta ley regirá desde su promulgación y al reglamentarla el Poder Ejecutivo, dispondrá lo conveniente para que, inmediatamente, funcione la Caja Nacional, creada por la presente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 61. — El Consejo Nacional de Educación transferirá a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones el fondo que haya acumulado para los efectos de la Ley N.° 1.909.

Art. 62. — Las personas indicadas en el artículo 2.° que se acojan a la presente, deberán ingresar a la Caja el importe del descuento del 5 % de que habla el artículo 4.° que les hubiera correspondido efectuar desde el 1.° de enero de 1901.

El Poder Ejecutivo entregará mensualmente a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones la suma de cincuenta mil pesos hasta reintegrar la cantidad de novecientos cincuenta y dos mil pesos que dejó de percibir en virtud de decretos dictados por el mismo, suspendiendo el pago de los descuentos establecidos en la ley cuatro mil trescientos cuarenta y nueve.

Dichos descuentos se aplicarán en lo sucesivo a todos los empleados de la Administración.

Art. 63. — El Poder Ejecutivo ordenará que durante el año 1905 se levante un Censo de los empleados comprendidos o que puedan acogerse a los beneficios de la presente ley.

Art. 64. — La Junta de Administración hará la revisión de las pensiones y jubilaciones existentes, y dará cuenta al Poder Ejecutivo de las que encuentre fuera de las prescripciones de las leyes vigentes, cuando se concedieron.

Art. 65. — Deróganse todas las leyes y disposiciones que se opongan a la presente.

Art. 66. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires, a diez de septiembre de mil novecientos cuatro.

FRANCISCO URIBURU.
Adolfo J. Labougle.
Secretario del Senado.

JULIÁN BARRAQUERO.
A. M. Tallaferro.
Prosecretario de la C. de D.

Por tanto:

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, publíquese, comuníquese, insértese en el Registro Nacional y archívese.

ROCA.
J. A. TERRY.

Ley N.° 11.923, de 18 de octubre de 1934, modificando la Ley N.° 4.349

Buenos Aires, 18 de octubre de 1934.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de

LEY:

Artículo 1.° — Modifícase la ley N.° 4.349, en los siguientes artículos, que quedarán como sigue:

Artículo 4.°:

1.° Con el descuento forzoso del 8 % sobre todos los sueldos, jornales o cualquiera otra remuneración que perciban las personas comprendidas en el artículo 2.° de esta ley; y con el descuento forzoso del 10 % sobre todos los sueldos, jornales o cualquiera otra remuneración que perciban las personas comprendidas en el artículo 31 de la presente ley.

Artículo 5.° — La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles será administrada por una junta compuesta por cinco miembros: un presidente administrador y dos vocales designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y dos representantes elegidos por los afiliados de la Caja. Durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Los afiliados elegirán dos vocales suplentes que reemplazarán a los titulares respectivos en caso de fallecimiento, renuncia, ausencia o imposibilidad. El Poder Ejecutivo reglamentará la forma en que deberán ser elegidos estos representantes.

Los impresos y formularios para el trámite de las elecciones de directores y otros de propaganda e información de cualquiera de las secciones de la Caja gozarán de las franquicias de porte pago a tarifa de impresos de interés general, aun cuando se enviaran en sobres cerrados.

Artículo 7.° — Faltando el presidente, sus funciones serán desempeñadas por un vice, elegido por la junta de entre los vocales nombrados por el Poder Ejecutivo.

Artículo 17. — El monto de las jubilaciones ordinarias en vigor y las a acordarse en adelante, se sujetará a la siguiente escala:

Sueldo promedio	hasta	.....	$	200	el	90	%
Excedente de $	200	hasta	.....	»	500	»	80	»
»	» »	500	»	.....	»	1.000	»	70	»
»	» »	1.000	»	.....	»	1.500	»	60	»
»	» »	1.500	»	.....	»	2.000	»	50	»
»	» »	2.000	»	.....	»		»	40	»

La jubilación extraordinaria común equivale al 3 % del sueldo promedio sometido a la escala precedente multiplicado por los años de servicios del que obtenga su jubilación, sin que su importe, en ningún caso pueda exceder del monto que corresponda al mismo promedio de sueldo para la jubilación ordinaria.

Artículo 18. — La jubilación ordinaria común, se acordará al empleado que haya prestado, cuando menos, 30 años de servicios y tenga cumplida la edad de 55 años.

Los empleados que hayan cumplido 30 años de servicios y no alcancen la edad prescripta de 55 años, podrán obtener su jubilación ordinaria sufriendo un descuento del 4 % de su haber jubilatorio por cada año que le falte para los 55.

Por cada dos años de servicios que excedan de 30, podrá obtenerse la jubilación ordinaria con un año menos de la edad límite, sin requerirse por los años compensados en esa forma el descuento indicado en el párrafo anterior.

La jubilación ordinaria también podrá obtenerse con menos de 30 años de servicios efectivos, compensando cada dos años de edad que excedan de 55 años por un año menos de servicios.

Artículo 25. — A los efectos de los artículos 17 y 28, se considerará último sueldo el promedio de sueldo mensual que el interesado hubiera percibido durante los últimos 10 años, si a la fecha de esta ley tuviese más de 20 años de servicios prestados; si el interesado tuviese más de 10 años de servicios y menos de 20, se tomará el promedio correspondiente a los 20 últimos años; y si tuviera menos de 10 años de antigüedad, el promedio se hará sobre los sueldos mensuales de los 30 años de servicio.

Artículo 31. — El derecho acordado por el artículo 18 de esta ley, podrá ser ejercitado con 25 años de servicios y 50 años de edad, por los empleados, clases, agentes de seguridad e investigaciones, chóferes de policía, jefes, oficiales, clases y tropa del cuerpo de bomberos y maestros de instrucción primaria al frente de grado.

Los empleados que hayan cumplido 25 años de servicios y no alcancen la edad prescripta de 50 años, podrán obtener su jubilación ordinaria privilegiada sufriendo un descuento del 5 % de su haber jubilatorio por cada año que le falte para los 50.

Por cada dos años de servicios que excedan de 25 podrá obtenerse la jubilación ordinaria privilegiada con un año menos de la edad límite, sin requerirse por los años compensados en esa forma el descuento indicado en el párrafo anterior.

Estos empleados podrán ejercitar el derecho acordado en la primera parte del artículo 19, después de 17 años de servicio. En este caso, la jubilación será equivalente al 3,60 % del sueldo promedio sometido a la escala del artículo 17, multiplicado por los años de servicios, hasta el máximo permitido para la jubilación ordinaria. Si estos empleados hubiesen prestado otra clase de servicios, no podrán acumularlos a los efectos de este artículo sino en la proporción correspondiente de acuerdo a lo que prescribe el artículo 18.

Artículo 48. — La pensión se dividirá entre viudo incapacitado o viuda, descendientes o ascendientes, conforme a las reglas establecidas por el Código Civil para la división de la herencia y como si se tratara de un bien ganancial. Los descendientes y los ascendientes entre sí tendrán recíprocamente el derecho de acrecer.

Serán vitalicias las pensiones vigentes y a acordarse a las viudas de los jubilados, en la mitad que les corresponde, sin perjuicio de las causales de extinción del derecho a ellas establecidas en el artículo 52.

Para los demás derechohabientes, el término máximo de duración de las pensiones será de 15 años, a contar desde el día del fallecimiento del causante, desde cuya época deberán abonarse.

Las viudas que en virtud de la Ley 4.349 hayan gozado de pensión y cuyos derechos hubieran caducado a la promulgación de la presente ley, gozarán de una pensión vitalicia, cuyo importe no será superior en ningún caso a la suma de $ 100 m/n. mensuales.

Artículo 52:

2.° Para los hijos varones, desde que llegaren a la edad de 18 años;

Art. 2.° — Las rebajas o descuentos ordenados por la presente ley, excepto los que resulten de la aplicación de los descuentos del 4 % y del 5 % establecidos en los artículos 18, párrafo 2.°, y 31, párrafo 2.°, no podrán reducir las jubilaciones a menos de $ 100. Las jubilaciones y pensiones menores de $ 100 no sufrirán descuento alguno.

Una vez efectuados los descuentos dispuestos por esta ley, los haberes de los jubilados y pensionistas dejarán de sufrir los que establece el acuerdo de gobierno del 30 de julio de 1931 (artículo 9.°, Ley 11.821).

Ninguna jubilación ordinaria, por la aplicación de todos los descuentos que establece esta ley, podrá ser menor del 60 % del promedio de sueldo base para la jubilación.

Art. 3.° — El Estado, los bancos oficiales y las reparticiones autónomas nacionales ingresarán mensualmente al fondo de la Caja, como aporte patronal, el 6 % del monto total de los sueldos, jornales o remuneraciones de cualquier clase en concepto de retribución de servicios de los funcionarios, empleados y obreros comprendidos en el régimen de la Ley 4.349. El aporte patronal a cargo del Estado, correspondiente a los sueldos de los empleados que se acojan al beneficio establecido en el artículo 31, será del 8 % sobre el monto total de los mismos.

El Estado deberá entregar en efectivo solamente la parte de su aporte que sea necesaria para hacer frente a los pagos mensuales de la Caja y el resto en títulos de la Deuda Pública, al tipo de cotización en plaza.

La diferencia entre el 4 % a cargo del Estado, como aporte patronal, y el 6 % y 8 % que establece la presente ley, a partir del 1.° de enero de 1935, será entregada a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, mientras dure la aplicación de las rebajas dispuestas por esta ley.

Art. 4.° — Redúcese en un 3 % del sueldo mensual el descuento establecido por el artículo 9.°, de la Ley N.° 11.821, sobre los haberes y jornales del personal comprendido en los beneficios de la Ley N.° 4.349 ó facultado a acogerse a ella, que se efectuaba con destino a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles.

Art. 5.° — Las condiciones exigidas en la presente ley para el otorgamiento de jubilaciones y pensiones, entrarán en vigencia desde su promulgación.

El aumento del aporte a cargo del Estado y de las reparticiones autónomas entrará en vigencia a partir del 1.° de enero de 1935. Los descuentos a los beneficiarios se aplicarán en la siguiente forma: un tercio a los 90 días de la promulgación de esta ley; un tercio a los 120 días y un tercio a los 150 días.

Art. 6.° — Mientras no se incluya en la ley de presupuesto el gasto que demande la elevación del aporte a cargo del Estado, será pagado de rentas generales con imputación a la presente ley.

Art. 7.° — Dentro de los dos años de la sanción de esta ley, la Caja elevará al Poder Ejecutivo para su remisión al Congreso, un plan de su reorganización financiera.

Art. 8.° — Los derechos acordados por el artículo 31, pueden renunciarse temporariamente o definitivamente, optándose por la jubilación ordinaria común, en cuyo caso no se aplicará el descuento que fija la segunda parte del artículo 4.°, inciso 1.°, sino el que fija la primera parte del mismo inciso. Los derechos acordados por el artículo 31 sólo se adquieren cuando se ha efectuado en oportunidad el aporte del 10 %.

La Caja formulará el cargo correspondiente por diferencia de aportes para las personas que se acojan al artículo 31 de esta ley.

Dicho cargo será amortizado en veinticuatro meses.

Art. 9.° — En ningún caso se computarán servicios posteriores a la promulgación de la presente ley, por los que no se hubiere efectuado los aportes correspondientes en la oportunidad del cobro de los haberes.

Fíjase un plazo de un año desde la promulgación de la presente ley, para que los funcionarios, empleados y obreros comprendidos en ella que no hubiesen sufrido descuento sobre el total o parte de sus servicios, soliciten de la Caja la formulación del cargo correspondiente.

La Caja fijará un plazo no menor de 6 meses ni mayor de tres años, dentro del cual deberá abonarse el importe de los aportes no efectuados.

El personal accidental o transitorio sólo podrá hacer computar los servicios por los cuales efectúe los aportes, a cuyo efecto cuando ingrese a la administración deberá hacer declaración expresa para que se le practiquen los descuentos.

Art. 10. — Los actuales jubilados o pensionistas que manifiesten expresamente su disconformidad con los descuentos dispuestos por la presente ley, podrán solicitar de la Caja la devolución de sus aportes capitalizados al 5 % anual, previa deducción del monto de las sumas percibidas por ellos en concepto de jubilación y pensión.

Igualmente, los magistrados judiciales que hallándose acogidos voluntariamente a los beneficios de la Ley 4.349, no desearan continuar en tal situación por no conformarse con las modificaciones

que se introducen en su régimen por la presente ley, podrán renunciar a su carácter de afiliados de la Caja, con derecho a la devolución de sus aportes capitalizados al 5 % anual.

Art. 11. — La Caja contabilizará por separado, el régimen financiero referente a la jubilación ordinaria del de las privilegiadas.

Art. 12. — Deróganse todas las disposiciones de otras leyes que se opongan a las de la presente.

Art. 13. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino a veintinueve días del mes de septiembre de mil novecientos treinta y cuatro.

JULIO A. ROCA. — MANUEL A. FRESCO.
Gustavo Figueroa. — *Carlos G. Bonorino.*
Secretario del Senado. — Secretario de la C. de D. D.

Por tanto:

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, publíquese, comuníquese, insértese en el Registro Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.

JUSTO.
FEDERICO PINEDO.

Artículos pertinentes de la Ley N.° 11.672, (Edición 1942)

Complementaria Permante de Presupuesto

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Art. 188. — A los efectos del cumplimiento del artículo 4.° de la ley número 4.349, todas las instituciones oficiales y reparticiones autónomas comprendidas en los beneficios acordados por la misma, deberán en fecha oportuna comunicar sus presupuestos al Mi-

nisterio de Hacienda e integrar mensualmente a la Caja de Jubilaciones el importe de los sueldos vacantes.

Art. 189. — La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles continuará aplicando a las jubilaciones y pensiones extraordinarias en vigor, no sujetas al reajuste de la ley número 11.923, los descuentos establecidos en el artículo 3.°, del acuerdo de julio 30 de 1931.

Art. 190. — A los jubilados y pensionistas a quienes no se haya hecho el descuento establecido en el artículo 3.°, del acuerdo de julio 30 de 1931, se les formulará cargo por el importe no ingresado.

Art. 191. — Substitúyese el artículo 22 de la ley número 4.349, por el siguiente:

«Artículo 22. — Unicamente podrán volver al servicio los que hayan obtenido jubilación ordinaria. En este caso el jubilado deberá optar entre el haber jubilatorio y el sueldo asignado al nuevo empleo. Si optara por el sueldo, sufrirá en éste, como todos los demás afiliados a la caja, el descuento por aportes establecido en el inciso 1.° del artículo 4.°. Cuando abandone el nuevo empleo, volverá al goce de la jubilación, sin derecho al aumento de este beneficio ni a la devolución de aportes del nuevo cargo.

«El jubilado ordinario que es llamado a desempeñar funciones públicas accidentales, no podrá cobrar retribución alguna al Estado.

«No están comprendidas en estas disposiciones los puestos provinciales, ni municipales, ni los nacionales electivos, ni los miembros del Poder Ejecutivo de la Nación, los cuales pueden ser ejercidos por el jubilado, sin perder el goce de la jubilación.

«La jubilación obtenida por servicios en la magistratura o en la administración no inhabilita para desempeñar puestos en el profesorado, que quedan sujetos al descuento establecido en el inciso 1.° del artículo 4.°, sin dar derecho al aumento de la jubilación ni a la devolución de aportes».

Art. 192. — Derógase el artículo 33 de la ley número 4.349 y el último párrafo del inciso 2.° del artículo 5.° de la ley número 11.242.

Decreto reglamentario de la Ley N.° 11.923, con notas sobre las modificaciones introducidas al mismo por el Poder Ejecutivo, inclusive los Decretos dictados en el transcurso del año 1942.

Buenos Aires, 23 de enero de 1935.

Visto la Ley 11.923 que modifica las leyes anteriores sobre jubilaciones y pensiones civiles, siendo necesario reglamentar la aplicación de sus disposiciones, y

CONSIDERANDO:

Que actualmente existen sobre la materia numerosas disposiciones establecidas por distintas leyes, acuerdos de Gobierno y decretos del Poder Ejecutivo;

Que es conveniente unificar todas esas disposiciones coordinándolas en forma que facilite su conocimiento y aplicación dándoles carácter orgánico;

Por lo tanto:

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

CAPITULO I

De los afiliados y de sus aportes

TITULO I

De los afiliados

Afiliados forzosos

Artículo 1.° — *(Ley 4.349, art. 2.° reformado por las leyes 4.870 y 6.007).* — Son afiliados forzosos de la Caja, salvo disposición expresa en contrario, todos los funcionarios o empleados cuyo

cargo o empleo tenga carácter permanente y no esté regido por otras leyes nacionales de retiros.

Son también afiliados forzosos de la Caja, los jubilados.

Afiliados en virtud de opción

Art. 2.° *(Ley 4.349, art. 2., inc. 3.°; art. 3.°; incs. 2.° y 3.° y Ley 11.923, art. 9.°, apartado 4.°).* — Son afiliados de la Caja en virtud de su opción hecha de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.° y siempre que su cargo o empleo no esté regido por otras leyes nacionales de retiros:

a) Todos los funcionarios o empleados cuyo cargo o empleo tenga carácter accidental o transitorio;

b) Las personas cuyos servicios hayan sido contratados por el Gobierno Nacional, Bancos oficiales y Reparticiones autónomas en virtud de autorizaciones especiales y teniendo en vista su competencia excepcional (técnicos contratados);

c) Los obreros que trabajan a jornal en las obras públicas que se ejecutan por administración o en los talleres industriales dependientes del Gobierno Nacional, Bancos oficiales y Reparticiones autónomas; (1)

d) Los magistrados judiciales;

e) Los ministros de Estado y las personas que ocupan cargos electivos rentados.

Exclusión

Art. 3.° — *(Ley 4.349, art. 3.°, inc. 3.°).* — No son afiliados de la Caja los obreros remunerados por pieza o unidad que trabajan fuera de los talleres del Estado.

Funcionarios. Empleados. Definición

Art. 4.° — A los fines del presente decreto los términos «funcionarios o empleados» usados en el mismo, comprenden a todos los agentes, sean funcionarios, empleados u obreros, de la administración civil del Gobierno Nacional, de los Bancos oficiales y Re-

(1) Por decreto de 26 de octubre de 1940 se agrega al final de este inciso c) lo siguiente: «No se considerarán obreros a jornal a aquéllos que gozan de una remuneración fija por mes, aun cuando su sueldo esté jornalizado».

particiones autónomas, así como a los que prestan servicios en los Departamentos de Guerra y Marina, mientras no sean asimilados a los militares, a los efectos del retiro.

Cargos permanentes. Definición

Art. 5.° — *(Acuerdo de Ministros del 21 de diciembre de 1933, arts. 1.°, 2.° y 3.°).* — Considérase permanente el cargo o empleo de las personas que no sean designadas expresamente con carácter accidental o transitorio.

También se considera permanente el cargo o empleo de las personas designadas para desempeñarlo durante períodos predeterminados mayores de un año, cualquiera sea la forma de su remuneración.

El empleo de las personas designadas con carácter accidental o transitorio sin fijación de término se considerará permanente a partir de la fecha en que cumplan un año consecutivo en el servicio, cualquiera sea la forma de su remuneración.

No se considera permanente a los efectos del presente decreto el empleo de las personas indicadas en su art. 2.°, inciso *c)*, cualquiera sea el tiempo de los servicios prestados, mientras no se hayan afiliado a la Caja.

En las designaciones que se hagan en adelante por el Gobierno Nacional, Bancos oficiales y Reparticiones autónomas, se determinará con precisión el carácter de las mismas.

Afiliación en virtud de opción. Forma y oportunidad

Art. 6.° — La declaración de la voluntad de afiliarse a la Caja se prestará en la ficha personal prevista en el artículo 172.

Las personas indicadas en el artículo 2.°, inciso *a)*, prestarán la declaración al asumir el cargo. Las dependencias del Gobierno Nacional, Bancos oficiales y Reparticiones autónomas, encargadas de dar cumplimiento a esta disposición, no pondrán en posesión del cargo a quienes no opten en esa oportunidad.

Las personas indicadas en el artículo 2.°, inciso *b)*, optarán también al asumir el cargo. Su silencio se interpretará como manifestación de la voluntad de no afiliarse a la Caja.

Las personas comprendidas en los incisos *c), d) y e)* del artículo 2.°, podrán hacer la declaración en cualquier tiempo mientras se hallen en actividad.

La declaración sólo surte efectos respecto de los servicios futuros del afiliado.

Carácter definitivo de la afiliación

Art. 7.° — La afiliación es definitiva y no se pierde por el hecho de que el funcionario o empleado deje el servicio o pase a ocupar un cargo o empleo de los comprendidos en el artículo 2.°.

Sin embargo, si se tratara de los cargos previstos en los incisos *b), d)* y *e),* del artículo 2.°, los efectos de la afiliación no se harán extensivos a tales servicios sino en virtud de opción.

Pérdida de la afiliación

Art. 8.° — Pierden la afiliación:

a) Los que hayan retirado sus aportes en ejercicio del derecho previsto en el artículo 41;

b) Los que hayan perdido el derecho a la jubilación o a percibir los haberes de la misma.

Ficha personal

Art. 9.° — Al tomar posesión del cargo o empleo o en el acto de efectuar la opción a que se refiere el artículo 6.°, todo afiliado llenará la ficha personal prevista en el artículo 172.

Esta ficha debe actualizarse por el afiliado a medida que se operen cambios en las circunstancias contempladas en la misma.

Los funcionarios encargados de remitir las fichas a la Caja, verificarán la exactitud de los datos declarados en ellas. Deberán exigir la exhibición de los documentos probatorios del lugar y fecha de nacimiento del afiliado y de la libreta de enrolamiento si se trata de ciudadano argentino mayor de 18 años o de la cédula de identidad policial en los demás casos y lo consignarán así bajo su firma en la misma ficha.

Afiliados privilegiados

Art. 10. — *(Ley 4.349, reformada, art. 31).* — Son afiliados privilegiados de la Caja, siempre que no opten por su inclusión en la categoría de afiliados comunes:

a) Los empleados, clases y agentes de seguridad e investigaciones y chóferes de la policía. No quedan comprendidos en este artículo los empleados de policía que no presten efectivamente servicios de seguridad e investigaciones;

b) Los jefes, oficiales y personal de tropa del cuerpo de bomberos de la Capital Federal;

c) Los maestros de instrucción primaria al frente de grado.

Opción por la situación de afiliados comunes

Art. 11. — *(Ley 11.923, artículo 8.°).* — *Los afilados* a que se refiere el artículo 10, podrán optar en cualquier época por su inclusión en la categoría de afiliados comunes. Se considerará que optan por tal inclusión, por el solo hecho de no solicitar que se les apliquen las disposiciones de los artículos 15 (inciso 1.°, párrafo *b),* 64 y concordantes. Desde que hubiesen figurado en la categoría de afiliados privilegiados, la opción para volver a la de comunes deberá ser expresa.

La opción sólo produce efectos para el futuro y podrá revocarse también para el futuro.

La opción expresa y la revocación se manifestarán mediante declaración escrita y firmada en triplicado; un ejemplar se enviará a la Caja y uno a la Contaduría General de la Nación; el tercer ejemplar se archivará en la repartición en que preste servicios el afiliado.

Denegación del privilegio

Art. 12. — Si en opinión de la Caja la naturaleza de los servicios prestados por un afiliado que manifieste su voluntad de ser incluído en la categoría de privilegiados, no permitiese tal inclusión, la Caja se lo notificará por intermedio de la repartición en que aquél presta servicios y se lo hará saber a la Contaduría General de la Nación a los efectos pertinentes.

El hecho de que la Caja no haya formulado la observación al recibir la declaración mencionada en el primer apartado, no la inhibe para denegar más tarde el privilegio, si resultara que los servicios prestados por el afiliado no fueron de los que permiten acogerse al mismo.

Disposiciones transitorias

Afiliación de personal en servicio a la fecha del decreto

Art. 13. — Las personas indicadas en el artículo 2.°, inciso *a)* que se hallaran en servicio a la fecha del presente decreto, efectuarán la opción prevista en el artículo 6.° dentro de un plazo de 60 días a contar desde dicha fecha.

Dentro de igual plazo, efectuarán la opción las personas indicadas en el artículo 2.°, inciso *b)*, que se hallaran en el mismo caso. Su silencio se interpretará como manifestación de su voluntad de no afiliarse a la Caja.

Ficha personal. Primera adopción y ficha provisional

Art. 14. — La ficha personal se llenará por primera vez en oportunidad del censo general de afiliados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171.

Los afiliados que ingresen al servicio antes de la fecha del censo, llenarán entretanto la ficha prescripta por el acuerdo del 18 de diciembre de 1923.

TITULO II

De los aportes de los afiliados

Aportes. Enumeración

Art. 15. — *(Ley 4.349, reformada, art. 4.°, incs. 1.°, 2.° y 3.°).* — Los aportes de los afiliados son:

1.° Una parte proporcional de todos los sueldos que perciban y que será:

a) Del 8 por ciento si el afiliado está comprendido en la categoría de comunes;

b) Del 10 por ciento si está comprendido en la de privilegiados.

2.° La mitad del primer mes de sueldo que perciban cuando entren al servicio o se reincorporen a él, si no hubiesen efectuado antes este aporte;

3.° La diferencia completa que importe el primer mes del o de los nuevos sueldos;

a) Si el afiliado recibe un aumento de sueldo;

b) Si pasa a ocupar un empleo mejor retribuído;

c) Si acumula un nuevo empleo a los que antes desempeñaba;

d) Si entra de nuevo al servicio en un empleo mejor rentado.

Sueldos. Definición

Art. 16. — *(Ley 12.150 T. D., art. 57).* — El término «sueldo» empleado en este decreto, comprende a todo sueldo, salario, jornal, comisión, honorario o cualquier otra remuneración pagada por el Gobierno Nacional, Bancos oficiales y Reparticiones autónomas por servicios prestados a los mismos.

Quedan comprendidos en el sueldo las sumas que se deduzcan del mismo en concepto de prestación de casa o alimentos.

No quedan comprendidos en el sueldo:

a) Las asignaciones pagadas por trabajos extraordinarios o por trabajos efectuados accidentalmente por un afiliado fuera de su cargo o empleo;

b) Las gratificaciones y otras asignaciones semejantes que aumenten la retribución fija establecida en el presupuesto respectivo o al distribuirse con carácter definitivo una partida global;

c) Las asignaciones que tengan carácter de indemnización de gastos incurridos por causa del servicio.

No se comprende bajo el término sueldo, las asignaciones pagadas en concepto de becas, cualesquiera sean las obligaciones que la beca imponga al becado.

Aportes de los afiliados en actividad

Art. 17. — *(Ley N.° 4.349 reformada, art. 27, apartado 2.°; Ley 11.575, art. 15, apartado 1.°; Ley 11.923, art. 9.°, apartado 4.°; Aclaración del Acuerdo del 21 de diciembre de 1933, art. 4.°).* — Los afiliados en actividad contribuirán al fondo de la Caja con todos los aportes, los cuales les serán descontados de sus sueldos aun cuando los perciban por servicios que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 72 y 82 no podrán computarse para determinar el período de servicios o el monto de los beneficios.

Los funcionarios o empleados cuyos cargos o empleos tengan carácter accidental o transitorio, efectuarán los mismos aportes desde que se hallen afiliados a la Caja en virtud de su opción o por aplicación de lo dispuesto en los artículos 5.° (apartado 3.°) y 7.°.

Los afiliados que interinamente o en calidad de suplentes pasen a percibir un sueldo mayor del asignado al cargo o empleo que ocupan en propiedad, no efectuarán el aporte del artículo 15, inciso 3.°, sino cuando así lo solicitaran a los efectos del segundo apartado del artículo 79.

Diferencia del primer mes de mayor sueldo

Art. 18. — *(Acuerdo del 21 de diciembre de 1933, arts. 5.° y 6.°).* — El monto del aporte previsto en el artículo 15, inciso 3.°, se establecerá en todos los casos enumerados en dicho inciso, con relación al mayor sueldo que el afiliado haya percibido en cualquier oportunidad y respecto del cual lo haya efectuado.

Pago simultáneo del aporte ordinario

Art. 19. — Simultáneamente con el aporte del artículo 15, inciso 3.°, el afiliado efectuará el aporte previsto en el inciso 1.° de dicho artículo, calculado este último sobre el sueldo o sueldos que percibía antes del aumento, ascenso o acumulación.

Aportes de los afiliados sin retribución mensual fija

Art. 20. — El pago de los aportes de los afiliados que no tuviesen una retribución fija mensual se ajustará a las siguientes normas:

a) En el caso de afiliados remunerados a jornal o por hora, el aporte del artículo 15, inciso 1.°, se efectuará sobre todos los jornales percibidos, cualquiera sea el número de días u horas de trabajo;

Los aportes de los incisos 2.° y 3.° del mismo artículo, se calcularán sobre la base de 25 jornadas ó 200 horas por mes y se cobrarán en la proporción correspondiente sobre los jornales del primer mes. Si durante este mes el afiliado hubiese trabajado menor número de días u horas, el pago del aporte será continuado en el mes o meses siguientes, hasta completarlo. No se cobrará simultáneamente los aportes del artículo 15, incisos 1.° y 2.°, sobre los mismos jornales;

b) En el caso de afiliados retribuídos a comisión, honorarios, por ciento, o por pieza o unidad, el aporte del inciso 1.° del artículo 15 se efectuará sobre el total de las sumas que se les liquide mensualmente;

El aporte del inciso 2.° del mismo artículo se hará en diez cuotas del 5 por ciento cada una sobre las remuneraciones percibidas durante los diez primeros meses, debiendo además efectuarse sobre dichos haberes el aporte del inciso 1.° a partir del segundo mes;

El aporte del inciso 3.° del mismo artículo, se determinará sobre la base del promedio mensual de las retribuciones liquidadas dentro de un año, comparado con el mayor promedio resultante de años anteriores. El aporte se cobrará sobre los haberes que se les liquide en el primer mes siguiente al del ajuste anual del promedio.

Aportes de Magistrados Judiciales, Ministros, Legisladores, etc.

Art. 21. — Las personas indicadas en los incisos *c), d)* y *e)*, del artículo 2.° efectuarán los aportes a partir del mes siguiente al de la fecha en que la Caja haya recibido su manifestación de la

voluntad de afiliarse a la misma. Este mes siguiente se considerará primero a los efectos de los incisos 2.° y 3.° del artículo 15.

Aportes de afiliados privilegiados

Art. 22. — *(Ley 11.923, art. 8.°).* — Los afiliados privilegiados que opten por su inclusión en la categoría de afiliados comunes, aportarán el 8 por ciento de sus sueldos.

Si revocan esta opción efectuarán el aporte del 10 por ciento en los haberes que perciban en adelante. No se admitirá el ingreso posterior de la diferencia de aportes por el período en que hayan figurado en la categoría de afiliados comunes.

Aportes en caso de denegación del privilegio

Art. 23. — Tan pronto como la Contaduría General de la Nación reciba de la Caja la comunicación prevista en el artículo 12, dispondrá sin más trámite que al afiliado se le practique en adelante el descuento del 8 por ciento y se le devuelva sin interés la diferencia de aportes indebidamente ingresada.

Si las opiniones de la Caja y de la Contaduría General de la Nación, acerca de la naturaleza de los servicios no coincidieran, resolverá el Poder Ejecutivo por decreto expedido por el Ministerio de Hacienda.

Queda a salvo, en todos los casos, el derecho del afiliado para hacer valer por las vías pertinentes, los derechos que crea tener.

Aportes en caso de licencia

Art. 24. — Mientras el afiliado disfrute de licencia con el sueldo íntegro, seguirá efectuando los aportes como si estuviera en servicio.

Si el afiliado gozase sólo de parte del sueldo durante la licencia, efectuará el aporte proporcional a la parte del haber que percibe efectivamente.

Aportes de los jubilados

Art. 25 — *(Ley 4.349 reformada, arts. 22 y 27).* — Los afiliados jubilados no contribuirán al fondo de la Caja.

Sin embargo si hubiesen continuado en el servicio o hubiesen vuelto al mismo, efectuarán el aporte previsto en el art. 15, inc. 1.°, el que les será descontado de los sueldos que perciban por tales servicios.

Oportunidad de pago de los aportes

Art. 26. — *(Ley 11.923, art. 9.°, apartado 1.°).* — Los aportes se efectuarán al cobrarse los haberes. No habrá lugar al ingreso posterior de los aportes que no se hubiesen efectuado en esa oportunidad, salvo error u omisión no imputable al afiliado.

Aportes indebidamente ingresados

Art. 27 — Las sumas que por cualquier causa hayan sido pagadas indebidamente a la Caja en concepto de aportes, serán devueltas sin interés.

No se considera pagados indebidamente los aportes efectuados por afiliados que posteriormente hayan quedado sujetos a otros regímenes jubilatorios, o hayan sido asimilados a los militares a los efectos del retiro.

En los casos en que haya lugar a devolución se procederá de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 157 y 158.

Disposiciones transitorias

Ingreso de aportes no efectuados en su oportunidad

Art. 28. — *(Ley 11.923, art. 9.°, apartados 2.° y 3.°).* — Todos los afiliados que se encontraran en actividad a la fecha de promulgación de la Ley 11.923 y deseen hacer valer servicios anteriores por los que no se efectuaron oportunamente los aportes, podrán solicitar la formulación del cargo correspondiente, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones de los artículos 32 a 34.

Magistrados judiciales, Ministros, Legisladores.
Cargo

Art. 29. — *(Decreto del 7 de septiembre de 1912: Ley 11.027, art. 21 y Ley 11.923, art. 9.°).* — Los magistrados judiciales que no

hubiesen admitido los descuentos antes de la promulgación de la Ley 11.923 y deseen acogerse a los beneficios de la jubilación respecto de los servicios anteriores prestados en la magistratura, podrán solicitar la formulación del cargo correspondiente.

Esta disposición se aplicará igualmente a las personas comprendidas en el inciso *e)* del artículo 2.°.

En ambos casos se procederá de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 32 a 34.

Afiliados privilegiados. Cargo por diferencia de aportes

Art. 30. — *(Ley 11.923, art. 8.°, (apartados 2.° y 3.°) y 9.° (apartado 2.°).* — Los afiliados de las categorías enumeradas en el art. 10 que se encontraran en actividad a la fecha de promulgación de la Ley 11.923 y deseen acogerse, respecto del todo o parte de los servicios prestados, al privilegio indicado en los arts. 64 y concordantes, podrán solicitar la formulación del cargo por diferencia de aportes. *Considérase renunciante del privilegio respecto de los servicios pasados, al que no solicita el cargo dentro del plazo de un año a partir de la fecha de promulgación de la Ley 11.923* (1).

La Caja formulará el cargo computando como diferencia de aportes, el 2 % del sueldo que el afiliado hubiese percibido durante el tiempo de los servicios a que se refiere su solictud.

El cargo deberá amortizarse dentro de un plazo que no podrá ser mayor de 24 meses a contar desde la fecha de notificación de la resolución por la que se admitió su solicitud.

Por lo demás se aplicarán las disposiciones de los arts. 32 a 34.

Aportes retirados. Cargo

Art. 31 — Las personas que hubiesen retirado sus aportes antes de la promulgación de la Ley 11.923 y deseen reingresar a la Caja, podrán solicitar la formulación del cargo correspondiente.

---

(1) Por decreto del 17 de mayo de 1939 se concedió a las maestras al frente de grado un nuevo plazo de seis meses, a partir de dicha fecha, para solicitar el cargo correspondiente a los servicios anteriores al 17 de octubre de 1934.

La Caja computará el interés del 5 % anual capitalizado trimestralmente por el tiempo transcurrido desde el retiro de los aportes hasta su reintegro.

Por lo demás regirán, en cuanto sean aplicables, las disposiciones de los arts. 32 a 34.

Plazo para solicitar el cargo

Art. 32 — El cargo debe solicitarse en todos los casos dentro de un año desde la promulgación de la Ley 11.923.

Determinación y pago del cargo

Art. 33 — La Caja formulará el cargo sobre la base del aporte en vigor en la época en que se prestaron los servicios, sin computar interés.

Al formular el cargo, la Caja fijará el plazo de su amortización y se establecerá la forma del pago.

El plazo de amortización no podrá ser menor de 6 meses ni mayor de 3 años a contar desde la fecha de notificación de la resolución por la que se admitió la solicitud. Mientras corra el plazo, el interesado podrá solicitar su ampliación, pero siempre dentro del máximo legal.

Oportunidad de pago

Art. 34. — El cargo debe amortizarse estando el afiliado en actividad

La Junta no otorgará la jubilación ordinaria a los afiliados con cargos pendientes de pago, si el saldo no puede ser amortizado dentro del plazo legal mediante deducciones efectuadas en los haberes que se devenguen hasta su vencimiento.

En caso de muerte un afiliado con cargo pendiente de pago, la amortización será continuada por los pensionistas si los hubiera.

En ningún caso se otorgará la jubilación ordinaria a afiliados que tengan pendientes cargos por reintegro de aportes que habían retirado de la Caja.

Cargo bajo el régimen anterior a la Ley 11.923

Art. 35. — Las disposiciones de los artículos 32 a 34, no se aplicarán a los actuales beneficiarios que tengan cargos pendientes de amortización ni a los que obtengan su jubilación o pensión de acuerdo con las disposiciones vigentes antes de la promulgación de la Ley 11.923, conforme a lo previsto en los artículos 60 y 61.

En estos casos, la amortización se hará como hasta el presente en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 11.027.

Desafiliación de magistrados judiciales. Devolución de aportes

Art. 36. — *(Ley 11.923, art. 10, apartado 2.°).* — A los magistrados judiciales que hubiesen admitido los descuentos en sus sueldos antes de la promulgación de la Ley 11.923, se les seguirá descontando los nuevos aportes, mientras no manifiesten su voluntad de renunciar a su carácter de afiliados por no conformarse con las modificaciones introducidas en el régimen jubilatorio por dicha Ley, en cuyo caso tendrán derecho a la devolución de sus aportes.

La voluntad de separarse de la Caja y de retirar sus aportes deberá comunicarse a ésta dentro de los 90 días de la fecha del presente decreto (1). La conformidad con los nuevos descuentos se interpretará como manifestación definitiva de la voluntad de permanecer afiliados a la Caja.

En los casos en que haya lugar a devolución, la Caja liquidará todos los aportes efectuados, con el interés del 5 por ciento, capitalizado cada año.

Devolución del saldo de aportes a jubilados y pensionistas

Art. 37. — *(Ley 11.923, art. 10, apartado 1.°).* — También podrán solicitar la devolución del saldo de sus aportes los actuales jubilados o pensionistas en su caso, a cuyo efecto deberán manifestar su disconformidad con los descuentos previstos en los artículos 87 y 111, dentro de los 90 días de la fecha del presente decreto.

En estos casos, la Caja liquidará todos los aportes efectuados previa deducción de las sumas percibidas en concepto de jubilación o pensión, computando sobre los aportes y los beneficios percibidos el interés del 5 por ciento anual, capitalizado cada año.

---

(1) Por decreto del Poder Ejecutivo del 11 de junio de 1937 se deroga el plazo establecido, por entenderse que la ley no fija plazo alguno al efecto indicado.

CAPITULO II

De los beneficios

TITULO I

Disposiciones varias

Beneficios. Enumeración

Art. 38. — Los beneficios que acuerda la Caja son:

1.° La jubilación ordinaria íntegra que se concederá al afiliado si se hallan reunidos en su persona los requisitos mencionados en los artículos 63 a 65 del presente decreto;

2.° La jubilación ordinaria anticipada que se acordará al afiliado que lo solicite en las condiciones de los artículos 66 y 67;

3.° La jubilación extraordinaria que se otorgará al afiliado en los casos de los artículos 68 y 69;

4.° La indemnización en favor del afiliado en las condiciones de los artículos 41 a 44;

5.° La pensión, que corresponderá a las personas indicadas en el artículo 90;

6.° La indemnización en favor de las personas indicadas en el inciso anterior en las condiciones del artículo 45;

Prescripción

Art. 39. — El derecho de percibir los haberes devengados de la jubilación o pensión se prescribe de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.027 del Código Civil.

En cuanto a la interrupción y suspensión de la prescripción se aplicarán las normas del derecho común.

Inalienabilidad e inembargabilidad de jubilación y pensión

Art. 40. — *(Ley 4.349, art. 55; Ley 9.511; 8.172, art. 2.° reformado por la Ley 10.676, art. 1.°).* — El derecho a la jubilación y pensión así como el derecho a los haberes aún no percibidos es inalienable.

Dichos haberes sólo podrán ser embargados en la medida autorizada por la Ley 9.511.

Podrán deducirse, sin embargo, de los mismos las sumas debidas en concepto de cargos por aportes omitidos o por otras obligaciones contraídas por el beneficiario con la Caja para adquirir el derecho al beneficio.

Podrán deducirse igualmente las cuotas debidas por préstamos concedidos por el Banco Hipotecario Nacional y las sumas debidas por otros conceptos, en el caso en que las leyes lo autorizan expresamente.

Para determinar la cantidad embargable, se tendrá en cuenta la suma a que asciende el haber, aunque el beneficiario no lo perciba íntegramente en virtud de lo previsto en los dos apartados anteriores.

Las disposiciones del presente artículo no impide que la Caja compense con los haberes devengados las sumas que el beneficiario le adeude en concepto de haberes indebidamente percibidos.

Beneficio de «devolución de aportes»

Art. 41. — *(Ley 4.349 reformada, art. 27).* — El afiliado que después de 10 años de servicios hubiese sido despedido o hubiese cesado por razones de economía, por no requerirse sus servicios o por supresión o cambio en la designación del cargo o empleo que desempeñaba y desee retirarse de la Caja, tendrá derecho a la liquidación de una suma igual al monto de los aportes que haya efectuado de acuerdo con lo previsto en el artículo 15, inciso 1.°, con el interés del 5 por ciento, capitalizado cada año desde la fecha de su pago.

Cesantías que no dan lugar a la devolución

Art. 42. — La cesantía no dará derecho al beneficio previsto en el artículo 41:

a) Si ella importa o implica una medida disciplinaria. Considérase de carácter disciplinario la cesantía dispuesta por

razones de mejor servicio, si las causas que la determinaron son imputables al empleado. En estos casos el afiliado no adquiere un derecho al beneficio por el hecho de haber quedado vacante el cargo o empleo que ocupaba por razones de economía declaradas con posterioridad o independencia de la cesantía;

b) Si ella se ha producido por renuncia.

En todos los casos en que el carácter de la cesantía no surgiera con claridad de las circunstancias o de los términos del decreto o resolución que la dispuso, la Caja recabará de la autoridad competente un pronunciamiento expreso al respecto.

Casos en que el afiliado no tiene derecho a la devolución

Art. 43. — No tendrá derecho al beneficio del artículo 41 el afiliado que:

a) Continuase desempeñando otro cargo o empleo sujeto al aporte;

b) Haya quedado sujeto a otro régimen jubilatorio o haya sido asimilado a los militares, a los efectos del retiro;

c) Haya obtenido su jubilación aunque hubiese continuado en el servicio o hubiese vuelto al mismo.

Efectos de la devolución

Art. 44. — Los afiliados que en lo sucesivo se acojan al beneficio del artículo 41, pierden definitivamente el derecho al reconocimiento de los servicios respectivos, a los efectos de una jubilación posterior y no podrán reingresar los aportes retirados aun cuando fuesen reincorporados al servicio.

Beneficio en caso de muerte del afiliado sin dejar derecho de pensión

Art. 45. — *(Ley 4.349, art. 51).* — Si el afiliado hubiese fallecido hallándose en actividad y sin dejar derecho de pensión, las personas indicadas en el artículo 90, tendrán derecho al pago de una suma igual a un mes del último sueldo del afiliado por cada cuatro años que éste hubiese contribuído al fondo de la Caja.

El beneficio se liquidará en proporción al tiempo durante el cual se hayan efectuado los aportes, aun cuando éste no alcanzara a cuatro años.

La cantidad que resulte se dividirá entre los derechohabientes conforme a las disposiciones sobre la división de la pensión.

TITULO II

Disposiciones generales relativas a las jubilaciones

Efectos de la jubilación

Art. 46. — *(Ley 4.349, reformada, art. 22).* — El otorgamiento de la jubilación importa pasar al afiliado a la situación de retirado.

Los jubilados ordinarios podrán sin embargo continuar en el servicio o volver al mismo.

Los jubilados extraordinarios no podrán volver al servicio.

Principio, interrupción y fin del goce de la jubilación

Art. 47. — *(Ley 4.349, reformada, arts. 18, 22, 31, 36 y 38).* — La jubilación corre desde la fecha en que el afiliado haya dejado total y definitivamente el servicio *o desde la fecha que haya servido para determinar su edad a los efectos de la jubilación, si fuese posterior* (1).

La jubilación es vitalicia.

Sin embargo, si el jubilado hubiese vuelto al servicio en un puesto rentado y no renunciara al sueldo asignado a su cargo o empleo, cesará en el goce de la jubilación y percibirá solamente dicho sueldo. Volverá al goce de la jubilación cuando deje de percibirlo (2).

Servicios y sueldos compatibles con el goce de la jubilación

Art. 48. — *(Ley 4.349, reformada, art. 22).* — El goce de la jubilación no inhabilita para el desempeño de un puesto provincial o municipal o un cargo electivo nacional.

---

(1) Véase el Art. 76.

(2) Ver Art. 191, Ley N.º 11.672 (edición 1942) complementaria permanente de presupuesto, pág. 257.

Tampoco inhabilita para desempeñar empleos en el profesorado, salvo el cargo de maestro de instrucción primaria, y percibir los sueldos asignados a los mismos, si la jubilación ha sido obtenida por servicios en la magistratura o en la administración (1).

El goce de la jubilación obtenida por servicios en el profesorado, inhabilita para seguir desempeñando o asumir el desempeño de tales empleos aún en el caso de que el sueldo de estos últimos no se hubiese tenido en cuenta para establecer el monto del haber jubilatorio. Si el jubilado deseara continuar o asumir algún empleo en el profesorado se aplicará lo dispuesto en el tercer apartado del artículo 47.

La jubilación se considera obtenida por servicios en el profesorado si en tal concepto fueron computados, a los efectos de la jubilación, los últimos diez años de servicios.

Empleo en el profesorado. Definición

Art. 49. — *Los términos «empleo o servicios en el profesorado» usados en este decreto, comprenden las cátedras u horas de enseñanza universitaria, secundaria, normal y especial, así como los cargos de maestro de instrucción primaria.*

No se consideran empleos en el profesorado los cargos administrativos, aunque fuesen desempeñados en establecimientos de enseñanza o con relación a la enseñanza y aunque las tareas realizadas tuviesen carácter docente (2).

Declaración del jubilado en la ficha personal

Art. 50. — A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 25, 47 y 48, los jubilados que hubiesen vuelto al servicio deberán comunicarlo a la Caja, declarando su situación de jubilados al tomar posesión del nuevo cargo o empleo en la ficha personal prevista en el artículo 9.

---

(1) y (2) Modificado y sustituído, respectivamente, por el decreto del 9 de diciembre de 1935, en la siguiente forma:

Art. 48. — Tampoco inhabilita para desempeñar empleos en el profesorado retribuído por horas de enseñanza y cátedras universitarias y percibir los sueldos correspondientes si la jubilación ha sido obtenida por servicios en la magistratura o en la administración.

Art. 49. — Los términos empleos o servicios en el profesorado usados en este decreto comprenden las cátedras y horas de enseñanza universitaria, secundaria, normal y especial, los cargos de maestros de instrucción primaria y los demás de carácter docente cuya función consista exclusivamente en impartir o vigilar directamente la enseñanza en los establecimientos de instrucción universitaria, secundaria, normal, especial y primaria, tales como los cargos de: rector, vicerrector, director, vicedirector, regente, subregente e inspector técnico de enseñanza.

No se consideran empleos en el profesorado los cargos administrativos, aunque fuesen desempeñados en establecimientos de enseñanza o con relación a la enseñanza y aunque alguna de las tareas encomendadas tenga carácter docente.

Jubilado que percibe sueldo y jubilación. Sanción

Art. 51. — *Si se comprobara que el jubilado ha percibido indebidamente su jubilación simultáneamente con el sueldo asignado a su cargo o empleo, quedará separado del mismo, sin perjuicio de las acciones penales que corresponda iniciar.*

Deberá reintegrar de inmediato los haberes jubilatorios indebidamente percibidos con el interés capitalizado trimestralmente calculado teniendo en cuenta las fechas de pago respectivas (1).

Si el jubilado no procede al reintegro del cargo correspondiente dentro de los 30 días de su notificación, la Caja compensará la cantidad debida con los intereses hasta la fecha de su pago completo, con los haberes que el jubilado devengue en adelante.

Jubilado extraordinario que vuelve al servicio. Sanción

Art. 52. — *Si se comprobara la violación de lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 46, el jubilado quedará separado del cargo o empleo asumido.*

Simultáneamente, la Caja suspenderá el pago del haber jubilatorio y el Poder Ejecutivo dispondrá la revisión del expediente, a fin de verificar la exactitud de las causales de inutilización o imposibilidad alegadas, en virtud de las cuales se acordó la jubilación.

Si se comprobara que la jubilación fué obtenida indebidamente, ella será declarada nula y la Caja entablará las acciones del caso para obtener la devolución de las sumas indebidamente percibidas sin perjuicio de las acciones penales que corresponda iniciar.

Si resultara que la jubilación fué bien acordada, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en los apartados segundo y tercero del artículo 51 (2).

---

(1) y (2) Modificados por el decreto del 30 de diciembre de 1936, en la forma siguiente:

Art. 51. — Si se comprobara que el jubilado ha percibido indebidamente su jubilación simultáneamente con el sueldo asignado a su cargo o empleo, quedará separado del mismo, con la obligación de reintegrar los haberes jubilatorios indebidamente percibidos, con el interés capitalizado trimestralmente, calculado teniendo en cuenta las fechas de pagos respectivas.

Si el jubilado no procede al reintegro del cargo correspondiente dentro de los 30 días de su notificación la Caja iniciará las acciones legales que correspondan para obtener el pago de su crédito.

Art. 52. — Si se comprobara la violación de lo dispuesto en el apartado 3 del Art. 46, el jubilado quedará separado del cargo o empleo asumido y se observará con él, el procedimiento establecido en el artículo anterior para obtener la devolución de las jubilaciones percibidas indebidamente.

Plazo para solicitar la jubilación

Art. 53. — *(Ley 4.349, art. 37, inc. 3.°).* — La jubilación debe solicitarse por el afiliado que reúna los requisitos legales, dentro de los 5 años siguientes al día en que dejó totalmente el servicio.

Pérdida del derecho de ser jubilado por exoneración y condena

Art. 54. — *(Ley 4.349, art. 37, incs. 1.° y 2.°; Código Penal, art. 19 y concordantes).* — No tendrá derecho a ser jubilado:

a) El que hubiese sido separado definitivamente del servicio por violación de los deberes de su cargo, mediante exoneración pronunciada previo sumario en forma;

b) El que hubiese sido condenado por sentencia definitiva a inhabilitación absoluta como pena principal o accesoria.

Extinción de la jubilación por condena

Art. 55. — *(Ley 4.349, art. 38: Código Penal, art. 19 y concordantes).* — El derecho de percibir la jubilación acordada se extingue por condena a inhabilitación absoluta, mientras subsista la pena y sus efectos.

Conmutación de la pena

Art. 56. — *(Ley 4.349, art. 40; Código Penal, arts. 19, 68 y concordantes).* — Los derechos perdidos en los casos previstos en los artículos 54 (inciso *b)* y 55, no se recobrarán por la conmutación de la pena en otra que no implique la pérdida del derecho.

Empleados encausados

Art. 57. — *(Ley 4.349, art. 40; Código Penal, art. 19 y concordantes).* — El afiliado no podrá reclamar su jubilación o el pago de los haberes de la misma, mientras tenga causa criminal pendiente contra su persona por delitos reprimidos con inhabilitación absoluta como pena principal o accesoria.

Si el interesado no promoviera la terminación definitiva del proceso dentro del plazo establecido para la prescripción de la acción penal, caducará el derecho respecto de su persona.

Incompatibilidad entre varias jubilaciones

Art. 58. — *(Ley 11.110, art. 38; Ley 11.575, art. 71).* — No podrá acumularse una jubilación acordada por la Caja con otra otorgada por instituciones de retiros regidas por leyes de la Nación.

Las personas que tuviesen simultáneamente derecho a dos o más jubilaciones de las indicadas en el primer apartado, deberán optar por una de ellas.

Si el optante desechara la jubilación a cargo de la Caja, quedará extinguido el derecho a la misma.

Disposiciones transitorias

Ley aplicable. Afiliados en actividad

Art. 59. — *(Ley 11.923, art. 5.°, apartado 1.°).* — A todos los afiliados en actividad a la fecha de promulgación de la Ley N.° 11.923, les serán aplicables las disposiciones del artículo 1.° de la misma y concordantes, salvo los casos previstos en el artículo 61 del presente decreto.

Ley aplicable. Afiliados que dejaron el servicio

Art. 60. — Los afiliados que sin haber obtenido aún su jubilación, hubiesen dejado el servicio antes de la promulgación de la Ley 11.923 por haber quedado cesantes o por renuncia, obtendrán su jubilación ordinaria si tenían derecho a ella en la fecha de la cesantía en las condiciones vigentes en dicha fecha.

Ley aplicable. Afiliados inutilizados

Art. 61. — Los afiliados que sin haber obtenido aún su jubilación hubiesen quedado inutilizados o imposibilitados para continuar en el ejercicio de su empleo antes de la promulgación de la Ley 11.923, obtendrán su jubilación extraordinaria, hayan o no seguido en el servicio, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la fecha de la inutilización.

La misma disposición se aplicará si el afiliado antes de la promulgación de la Ley 11.923 hubiese sufrido un accidente que

fuese causa directa de la inutilización o imposibilidad, aunque ésta se hubiese manifestado con posterioridad, pero dentro de los 6 meses a contar desde la fecha del presente decreto.

Los afiliados comprendidos en los casos previstos en los dos apartados anteriores, podrán solicitar, sin embargo, que se aplique a su respecto las disposiciones vigentes para los afiliados en actividad a la fecha de promulgación de la Ley 11.923.

Reajuste

Art. 62. — *(Ley 4.349, reformada, arts. 17 y 25; Ley 11.923, art. 2.°).* — En todos los casos de jubilaciones ordinarias acordadas de acuerdo con las disposiciones vigentes antes de la promulgación de la Ley 11.923, se hará el ajuste de su monto de acuerdo con lo previsto en el artículo 87.

TITULO III

De la edad y del cómputo de servicios a los efectos de la jubilación

Jubilación ordinaria íntegra

Afiliados comunes. Requisitos de edad y servicio

Art. 63. — *(Ley 4.349, reformada, art. 18, apartados 1.°, 3.° y 4.°).* — Podrá obtener la jubilación ordinaria íntegra el afiliado común que haya prestado 30 años de servicios computables y tenga cumplida la edad de 55 años.

Si el afiliado hubiese prestado servicios durante un período mayor, podrá compensar con el exceso de servicios el tiempo que le faltase para cumplir la edad indicada en el primer apartado, en proporción de 2 años en más de servicios por uno menos de edad.

Si el afiliado tuviese cumplida una edad mayor podrá compensar con el exceso de edad el tiempo que le faltase para completar el período de servicios indicado en el primer apartado, en proporción de 2 años en más de edad por 1 menos de servicios.

Jubilación ordinaria íntegra. Afiliados privilegiados. Requisitos de edad y servicios

Art. 64. — *(Ley 4.349, reformada, art. 31, apartados 1.° y 3.°).* — Podrá obtener la jubilación ordinaria íntegra el afiliado

privilegiado que haya prestado 25 años de servicios que le sean computables en ese carácter y tenga cumplida la edad de 50 años.

Si el afiliado hubiese prestado servicios durante un período mayor podrá compensar con el exceso de servicios el tiempo que le faltase para cumplir la edad indicada en el primer apartado, en proporción de 2 años en más de servicios por uno menos de edad.

Si el afiliado tuviera más de 65 años, no se hará diferencia, a los efectos del tercer apartado del artículo 63, entre afiliados comunes y privilegiados.

Jubilación ordinaria íntegra. Servicios privilegiados y comunes sucesivos

Art. 65. — Para establecer si el tiempo de los servicios prestados por un afiliado que ha figurado sucesivamente en la categoría de comunes y de privilegiados, es suficiente para obtener la jubilación ordinaria íntegra, se establecerá por separado el tiempo total de los servicios que hubiese debido prestar en uno y otro carácter atento a su edad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 63 y 64. Se calculará luego el porciento que en relación a cada total importe el tiempo de los servicios efectivamente prestados en la categoría correspondiente. La jubilación ordinaria íntegra se concederá si dichos porcientos suman cien o más.

Jubilación anticipada

Art. 66. — *(Ley 4.349, reformada, art. 18, apartados 2.° y 31, apartado 2.°).* — Podrá obtener la jubilación ordinaria anticipada el afiliado que haya prestado servicios por lo menos durante el período indicado en el primer apartado de los artículos 63 ó 64, pero no tenga cumplida la edad legal que, de acuerdo con lo dispuesto en el primero y segundo apartado de dichos artículos, le hubiera permitido obtener su jubilación ordinaria íntegra.

Si el afiliado solicita la jubilación en estas condiciones, el haber a que habría ascendido aquélla quedará reducido en razón de un descuento, cuya tasa se establecerá en proporción a un 4 por ciento en el caso de afiliados comunes y a un 5 por ciento en el de privilegiados, por cada año de edad que le falte cumplir.

Jubilación anticipada. Servicios privilegiados y comunes sucesivos

Art. 67. — *(Ley 4.349, reformada, art. 31, último párrafo).* — Si el afiliado que solicita la jubilación ordinaria anticipada ha figurado sucesivamente en la categoría de comunes y privilegiados, se procederá de acuerdo con las siguientes disposiciones.

Para establecer si el tiempo de los servicios prestados es suficiente, se calculará el porciento que, en relación a 30 y 25 años, importe el tiempo de los servicios prestados en calidad de afiliado común y de privilegiado, respectivamente. La jubilación ordinaria anticipada se acordará si dichos porcientos suman cien o más.

Las tasas de descuento se aplicarán de acuerdo con el procedimiento desarrollado en el Anexo, calculando los años de edad, correspondientes a cada categoría de servicios, que le falten cumplir al afiliado para obtener la jubilación ordinaria íntegra, cálculo que se hará teniendo en cuenta el total de los servicios exigidos para obtener aquel beneficio atento a la edad del afiliado y la relación que guardan entre sí los servicios efectivamente prestados en cada categoría.

Si el afiliado tuviese 50 años de edad o más, el cálculo se limitará a la determinación del descuento correspondiente a los servicios comunes.

Jubilación extraordinaria. Casos

Art. 68. — *(Ley 4.349, art. 19).* — La jubilación extraordinaria se acordará sin consideración de la edad del afiliado.

Podrán solicitar su jubilación extraordinaria:

a) Los afiliados que se hubiesen inutilizado física o intelectualmente en un acto de servicio y por causa evidente y exclusivamente imputable al mismo, cualquiera fuese el tiempo de servicios prestados;

b) Los afiliados que fuesen declarados física o intelectualmente imposibilitados para continuar en el ejercicio de su empleo, por otras causas que las previstas en el inciso *a)* después de 20 años de servicios computables en calidad de afiliados comunes ó 17 años en calidad de privilegiados.

Jubilación extraordinaria, servicios privilegiados y comunes sucesivos

Art. 69. — *(Ley 4.349, reformada, art. 31, último párrafo).* — Si el afiliado imposibilitado hubiese prestado sucesivamente servicios en calidad de afiliado común y de privilegiado, se calculará el porciento que en relación a 20 y 17 años, importe el tiempo de los servicios prestados en uno y otro carácter, respectivamente. La jubilación extraordinaria se concederá si dichos porcientos suman cien o más.

Servicios computables

Art. 70. — *(Ley 4.349, reformada, art. 2.° (Inc. 5.°), 20 y 58; Ley 11.923, art. 9.°).* — Para que los servicios del afiliado sean computables a los efectos de la jubilación es necesario:

1.° Que se trate de servicios efectivos retribuídos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16;

2.° Que por tales servicios el afiliado haya efectuado los aportes en su debida oportunidad. La Caja no computará servicios posteriores a la fecha del presente decreto, por los que no se hubiesen efectuado los aportes en la oportunidad del cobro de los haberes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26;

3.° Que tales servicios y el pago de los aportes correspondientes se hallen debidamente comprobados de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y concordantes.

Los servicios prestados como Ministro de Estado o en el desempeño de un cargo electivo, sólo podrán computarse a los efectos de la jubilación si además el interesado ha estado afiliado a la Caja prestando servicios de otra clase durante 20 años por lo menos.

Los servicios desempeñados en el ejército no serán computados cuando sean retribuídos con retiro militar.

Cómputo de servicios no retribuídos con sueldo fijo mensual

Art. 71. — El tiempo de los servicios durante el cual el afiliado no hubiese gozado de una retribución mensual fija, se computará de acuerdo con las siguientes normas:

a) Tratándose de afiliados retribuídos con sueldo jornalizado, a jornal o por hora de trabajo, se computará 250 jornadas ó 2.000 horas de trabajo como un año de servicios [1];

b) Tratándose de afiliados retribuídos a comisión, honorarios, porciento o por pieza o unidad, se computará como tiempo de servicio el tiempo transcurrido entre la fecha de comienzo y la de cesación menos el tiempo correspondiente a las interrupciones del servicio que se establecerán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 131.

Empleos simultáneos

Art. 72. — *(Ley 4.349, art. 35).* — Si el afiliado hubiese desempeñado simultáneamente dos o más empleos, esos empleos se considerarán como uno solo a los efectos del cómputo del tiempo de los servicios.

Interrupciones del servicio

Art. 73. — *(Ley 4.349, reformada, art. 20).* — El tiempo de los servicios será computado aun cuando éstos hubiesen sido discontinuos. En ningún caso se computará las interrupciones como tiempo de servicio.

Si un funcionario o empleado hubiese dejado el servicio estando en condiciones de pedir su jubilación y hubiese dejado transcurrir el término previsto en el artículo 53, se computará sin embargo, el tiempo de los servicios anteriores si el afiliado lo solicitara después de haber sido reincorporado al servicio.

El tiempo correspondiente a las licencias extraordinarias no mayores de un año acordadas con goce de sueldo será computado como tiempo de servicios siempre que el afiliado haya efectuado oportunamente los aportes correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24. El tiempo de las licencias sin goce de sueldo no será computado.

El tiempo de las licencias acordadas al afiliado para prestar el servicio militar será computado, aunque fuese mayor del plazo indicado en el tercer apartado.

---

(1) Por decreto de 26 de octubre de 1940 se suprimen, de este inciso a), las palabras «con sueldo jornalizado».

Empleados exonerados. Cómputo de servicios

Art. 74. — El tiempo de los servicios que un funcionario o empleado exonerado de su empleo en las condiciones previstas en el artículo 54, inciso *a)* haya prestado antes de la exoneración, será computado si fuese reincorporado al servicio en la misma repartición que lo exoneró.

Si la reincorporación se hubiese producido en una repartición distinta, la Caja consultará al Poder Ejecutivo si ella debe considerarse hecha con el beneficio del reconocimiento de los servicios anteriores, atento a la causa de la exoneración y la conducta posterior del funcionario o empleado.

El tiempo de los servicios posteriores a la reincorporación será computado.

Empleados condenados o encausados. Cómputo de servicios. Servicios del imputado. Servicios posteriores

Art. 75. — El tiempo de los servicios que un funcionario o empleado condenado por sentencia definitiva a la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta, haya prestado antes de la condena, no será computado mientras no se haya extinguido la pena y sus efectos.

Si el funcionario o empleado hubiese tenido causa criminal pendiente contra su persona por delitos reprimidos con inhabilitación absoluta, caducará el derecho al reconocimiento de los servicios anteriores a la iniciación del juicio, si el interesado no hubiese promovido la terminación definitiva del proceso dentro del plazo establecido para la prescripción de la acción penal.

El tiempo de los servicios posteriores a la extinción de la pena o de la acción penal, será computado.

Edad a los efectos de la jubilación. Fecha

Art. 76. — Para establecer la edad a los efectos de la jubilación, se tendrá en cuenta la fecha del decreto que la acuerde, si el afiliado se halla aún en servicio en dicha fecha.

Si el afiliado hubiese obtenido la jubilación después de haber dejado el servicio, la Caja tendrá en cuenta la edad del afiliado en la

fecha en que dejó el servicio, salvo que el afiliado pidiera que se le compute la edad que haya cumplido en una fecha posterior, pero que no podrá ser posterior a la del decreto que le acuerde la jubilación, en cuyo caso percibirá la jubilación sólo desde tal fecha (1).

El hecho de haber seguido en el servicio o de haber vuelto al mismo después de acordada la jubilación no podrá variar el derecho del afiliado.

En todos los casos se tendrá en cuenta la edad que el afiliado tenga efectivamente cumplida en la fecha respectiva. No podrá considerarse fracciones de años como años enteros.

Cómputo de servicios. Fecha

Art. 77. — *(Ley 4.349, art. 22, reformada).* — Para establecer el período de los servicios prestados por el afiliado a los efectos de la jubilación, se tendrá en cuenta la fecha del decreto que la acuerda. El hecho de haber seguido en el servicio o de haber vuelto al mismo después de acordada la jubilación no podrá variar el derecho del afiliado.

En el cómputo del tiempo de los servicios no podrá considerarse fracciones de años como años enteros. (Ver artículo 191 de la Ley N.° 11.672. Edición 1942, pág. 257).

Disposición transitoria

Reconocimiento de servicios sin aportes

Art. 78. — Los servicios anteriores a la promulgación de la Ley 11.923 por los que no se hubiese efectuado los aportes en su oportunidad, pero cuyo reconocimiento y el cargo correspondiente se hubiese solicitado dentro del plazo legal, serán computados desde que el afiliado haya prestado su conformidad al cargo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34.

En ningún caso serán computados tales servicios si el cargo no se hubiese solicitado dentro del plazo legal.

---

(1) Este apartado fué derogado por decreto de 28 de julio de 1937

TITULO IV

Del monto de las jubilaciones

Promedio de sueldos

Art. 79. — *(Ley 4.349, reformada, art. 25; aclaración del Acuerdo del 21 de diciembre de 1933, art. 4.°).* — El monto de la jubilación se establecerá sobre la base del promedio del sueldo mensual que el afiliado haya percibido y por el cual haya efectuado los aportes.

Si el afiliado hubiese gozado interinamente o en calidad de suplente de un sueldo mayor del asignado al cargo o empleo que ocupaba en propiedad, este sueldo mayor no será tenido en cuenta si el afiliado no efectuó el aporte del artículo 15, inciso 3.°.

Si el período total de los servicios prestados no excediese de 30 años en el caso de afiliados comunes o de 25 en el de privilegiados, la Caja tendrá en cuenta los sueldos percibidos durante todo el período. Si el total de los servicios fuese mayor, la Caja tendrá en cuenta los 30 ó 25 años que más beneficien al afiliado.

Servicios privilegiados y comunes sucesivos. Cálculo del promedio de sueldos

Art. 80. — En el caso de afiliados que hubiesen figurado sucesivamente en la categoría de comunes y de privilegiados, el promedio del sueldo se establecerá en relación al tiempo efectivo de servicios.

Si la suma de los porcientos mencionados en el segundo apartado del artículo 67 fuese mayor de cien, la Caja tendrá en cuenta los períodos de servicios prestados en uno y otro carácter que más beneficien al afiliado, cuidando que la suma de los porcientos correspondientes a los períodos elegidos no resulte menor de cien.

Escala de reducción

Art. 81. — *(Ley 4.349, reformada, art. 17).* — Si el promedio del sueldo mensual fuese mayor de m$n. 100 quedará reducido de acuerdo con la siguiente escala:

Sueldo promedio hasta					$	200.—	el 90 %
Excedente de	$	200.—	hasta	.....	»	500.—	» 80 »
»	»	500.—	»	.....	»	1.000.—	» 70 »
»	»	1.000.—	»	.....	»	1.500.—	» 60 »
»	»	1.500.—	»	.....	»	2.000.—	» 50 »
»	»	2.000.—		.....			» 40 »

Empleos simultáneos

Art. 82. — *(Ley 4.349, art. 35).* — Si el afiliado hubiese desempeñado simultáneamente dos o más cargos o empleos durante el todo o parte del período de servicios, se tendrá en cuenta, por cada unidad de tiempo, el sueldo de uno solo de ellos, y si el monto de esos sueldos fuese distinto, se tendrá en cuenta el sueldo mayor.

Si los cargos desempeñados simultáneamente fuesen empleos en el profesorado, podrá sumarse los sueldos de aquéllos por los que el afiliado haya realizado los aportes por lo menos durante 5 años (1).

Si el afiliado hubiese desempeñado simultáneamente empleos en el profesorado y cargos administrativos, electivos o judiciales podrá pedir que el monto de su jubilación se establezca sobre la base de la suma de los sueldos percibidos por los primeros o sobre la del sueldo cobrado por uno de los segundos. No se admitirá la acumulación de unos y otros.

Para la aplicación de la escala prevista en el artículo 81, la suma de los sueldos percibidos por empleos en el profesorado se considerará como un solo sueldo.

Haber mensual de la jubilación ordinaria íntegra y anticipada

Art. 83. — *(Ley 4.349, reformada, arts. 18, 25, 28 y 31. Ley 11.923, art. 2.°).* — El haber mensual de la jubilación ordinaria íntegra equivale a la cantidad que se obtenga por el cálculo previsto en los artículos 79 a 82.

Este haber mensual, sin embargo, no podrá exceder del 95 % del promedio del sueldo. Tampoco podrá quedar reducido a menos

---

(1) Modificado por decreto del 9 de diciembre de 1935 en la forma siguiente: «Si los cargos desempeñados simultáneamente fuesen empleos en el profesorado exclusivamente, podrá sumarse los sueldos de los mismos, siempre que, tratándose de cátedras u horas de enseñanza el afiliado las haya desempeñado o haya efectuado los aportes correspondientes por lo menos durante cinco años».

del 60 % de dicho promedio ni a una cantidad inferior a m$n. 100, por la aplicación de la escala indicada en el artículo 81.

El haber mensual de la jubilación anticipada equivale a la cantidad que se obtenga por el cálculo previsto en los artículos 79 a 82, reducida en razón del descuento de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 66 y 67.

Haber mensual de la jubilación extraordinaria

Art. 84. — El haber mensual de la jubilación extraordinaria equivale, en el caso de los afiliados comunes, al 3 por ciento, en el de los privilegiados, al 3,60 por ciento del promedio del sueldo sometido a la escala del artículo 81, multiplicado por el número de años de servicios computables; o por 15 en el caso previsto en el artículo 68, inciso *a)*, si el afiliado no hubiese alcanzado a prestar servicios durante ese número de años.

El monto de la jubilación extraordinaria no podrá ser superior al que correspondería al mismo promedio de sueldo para la jubilación ordinaria íntegra.

Haber de la jubilación extraordinaria. Servicios privilegiados y comunes sucesivos

Art. 85. — *(Ley 4.349, reformada, art. 31, último párrafo).* — Si el afiliado que solicita la jubilación extraordinaria hubiese figurado sucesivamente en las categorías de comunes y de privilegiados, se multiplicará el promedio del sueldo sometido a la escala del artículo 81 por la suma de los productos de cada una de las tasas señaladas en el artículo 84 con los respectivos años de servicios.

Disposiciones transitorias

Promedio para los afiliados en actividad con más de 10 años de servicios

Art. 86. — *(Ley 4.349, reformada, art. 25).* — El monto de la jubilación correspondiente a los afiliados en actividad que a la fecha de promulgación de la Ley 11.923, tuviesen más de 10 y menos de 20 años de servicios prestados, se establecerá sobre la base del promedio de los sueldos percibidos durante los últimos 20

años de servicios. Si tuviesen más de 20 años de servicios se tomará el promedio de los sueldos correspondientes a los últimos 10 años. Estos promedios se someterán a la escala del artículo 81.

Reajuste de las jubilaciones ordinarias en vigor

Art. 87. — *(Ley 4.349, reformada, art. 17. — Ley 11.923, arts. 5.° (apartado 2.°) y 12. — Ley 12.142, art. 2.°).* — Las jubilaciones ordinarias en vigor a la fecha de promulgación de la Ley N.° 11.923 serán reajustadas de acuerdo con las siguientes disposiciones:

a) El promedio mensual de los sueldos que haya determinado el monto de la jubilación en la fecha en que fué acordada, será sometido a la escala del artículo 81;

b) Ninguna jubilación podrá quedar reducida en virtud del reajuste, a menos de $ 100;

c) Las jubilaciones cuyo monto fuera de $ 100 ó menos, no serán reajustadas.

El reajuste se hará efectivo en la siguiente forma: los haberes correspondientes al mes de febrero de 1935 quedarán reducidos en un tercio y los correspondientes al mes de marzo en dos tercios de la diferencia entre su monto actual, deducidos los descuentos establecidos por el Acuerdo de Ministros del 30 de julio de 1931, y el monto que resulte del cálculo previsto en el primer apartado. Los haberes correspondientes al mes de abril de 1935 y los posteriores se pagarán por su monto reajustado.

Escala de reducción de las jubilaciones extraordinarias en vigor

Art. 88. — *(Ley 12.150 T.D., art. 11).*— Las jubilaciones extraordinarias en vigor a la fecha de la promulgación de la Ley 11.923 no serán reajustadas.

La Caja seguirá aplicando a las jubilaciones extraordinarias mayores de $ 100 hasta $ 500, el descuento del 4 % sobre el excedente de $ 100; mayores de $ 500 hasta $ 1.000, el descuento anterior hasta $ 500, más el 8 % sobre el excedente; mayores de $ 1.000 hasta $ 2.000, los descuentos anteriores hasta $ 1.000 más el 12 % sobre el excedente; mayores de $ 2.000 los descuentos anteriores hasta

$ 2.000 más el 18 % sobre el excedente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 3.° del Acuerdo del 30 de julio de 1931.

Los descuentos se efectuarán sobre el haber total de la jubilación, aun cuando ella se hubiese acordado con la contribución de otras Cajas y aunque se trate de jubilaciones beneficiadas por el aumento concedido por la Ley 11.312.

Cargo por omisión de descuentos

Art. 89. — *(Ley 12.150 T. D., art. 67).* — A los jubilados ordinarios y extraordinarios, a quienes no se les haya efectuado el descuento previsto en el art. 3.° del Acuerdo del 30 de julio de 1931, en el todo o parte de los haberes devengados desde el 1.° de agosto de 1931, se les formulará cargo sin interés por el importe no deducido.

TITULO V

Disposiciones especiales relativas a las pensiones

Derecho de pensión. Derechohabientes. Casos

Art. 90. — *(Ley 4.349, reformada, arts. 41 y 48).* — A la muerte del afiliado que hubiese obtenido su jubilación o adquirido el derecho a la jubilación o hubiese fallecido en las circunstancias del artículo 68, tendrán derecho a percibir la pensión el viudo incapacitado, la viuda, los hijos y los padres del causante.

Si el afiliado hubiese dejado el servicio antes de cumplir la edad requerida para obtener la jubilación pero la hubiese cumplido antes de su muerte, las personas indicadas en el primer apartado tendrán derecho de pensión, siempre que el causante hubiese solicitado la jubilación o hubiese fallecido antes de transcurrido el plazo previsto por el art. 53.

El derecho de pensión subsiste aunque el causante hubiese perdido el derecho de ser jubilado o de percibir los haberes de la jubilación en los casos previstos en los arts. 54 y 55 (1).

(1) El decreto del 22 de mayo de 1936 lo sustituyó por el texto siguiente: «El derecho de pensión subsiste aunque el causante hubiese perdido el derecho a percibir los haberes de jubilación en el caso previsto en el artículo 55».

Orden de los pensionistas

Art. 91. — *(Ley 4.349 reformada, arts. 42 y 48).* — Las personas enumeradas en el primer apartado del art. 90 están llamadas a disfrutar de la pensión en el orden siguiente:

1.° El cónyuge sobreviviente en concurrencia con los hijos;

2.° Los hijos no existiendo cónyuge con derecho de pensión;

3.° El cónyuge sobreviviente en concurrencia con los padres, no habiendo hijos con derecho de pensión;

4.° El cónyuge sobreviviente, no habiendo hijos ni padres con derecho de pensión;

5.° Los padres, no habiendo hijos ni cónyuge con derecho de pensión.

Los hijos naturales concurrirán con los demás derechohabientes según las reglas del derecho común.

Personas excluídas

Art. 92. — *(Ley 4.349 reformada, arts. 44, 47 y 48).* — No tendrán derecho de pensión:

a) El cónyuge sobreviviente que a la fecha del fallecimiento del causante se hallara divorciado por su culpa o viviese de hecho separado sin voluntad de unirse;

b) El cónyuge sobreviviente que no hubiese tenido hijos durante el matrimonio si éste se hubiese celebrado con el causante jubilado dentro de los cinco años anteriores al fallecimiento del mismo, salvo que existan hijos legitimados o que el fallecimiento se hubiese producido por un accidente;

c) El viudo que no estuviese incapacitado para el trabajo a la fecha del fallecimiento del causante. Se le considerará incapacitado si su estado de salud física o intelectual presenta los mismos caracteres exigidos para obtener la jubilación extraordinaria.

MINISTERIO DE HACIEN... BIBLIOT...

Principio y duración de la pensión

Art. 93. — *(Ley 4.349, reformada, art. 48).* — La pensión corre desde el día del fallecimiento del causante.

El término máximo de duración de la pensión para el viudo, los hijos y los padres del causante será de 15 años

A partir de la expiración de dicho plazo, la viuda gozará de un derecho vitalicio a la mitad del haber total de la pensión, hayan o no concurrido antes otros derechohabientes con ella.

Haber de la pensión

Art. 94. — *(Ley 4.349, art. 43).* — El haber total de la pensión será igual a la mitad del monto de la jubilación de que gozaba o que hubiera correspondido al causante en la fecha de su fallecimiento.

Si el causante hubiese muerto después de obtenida la jubilación, haya sido ésta la ordinaria íntegra, la ordinaria anticipada, reducida en razón del descuento previsto en el artículo 66 ó la extraordinaria, se tendrá en cuenta el haber acordado al causante.

Si el causante hubiese muerto antes de haber obtenido la jubilación, y siempre que haya lugar a pensión, se considerará que aquélla le fué acordada para la fecha de su fallecimiento y el monto de la pensión se determinará de acuerdo con las siguientes normas:

a) En todos los casos en que el monto de la pensión dependa de la edad del causante, se tendrá en cuenta la edad que éste tenía en la fecha de su fallecimiento;

b) Si el causante hubiese muerto en actividad sin reunir los requisitos de edad y servicios exigidos para obtener la jubilación ordinaria, se estará al haber a que habría ascendido la jubilación extraordinaria;

c) Si el causante hubiese muerto en actividad antes de haber cumplido la edad requerida, pero después de haber prestado servicios durante el tiempo necesario para solicitar la jubilación ordinaria, se calculará el monto a que habría ascendido su jubilación ordinaria anticipada, reducida en razón del descuento previsto en el artículo 66, así como el de la jubilación extraordinaria. La pensión será en este caso igual a la mitad de la cantidad mayor.

División de la pensión

Art. 95. — *(Ley 4.349, reformada, arts. 44 y 48).* — Cuando concurran varios derechohabientes, la pensión se dividirá entre ellos conforme a las reglas establecidas por el Código Civil para la división de la herencia en el caso de sucesión intestada y como si se tratara de un bien ganancial.

Si alguna de las personas enumeradas en el artículo 90 no tuviese derecho de pensión a la fecha del fallecimiento del causante, las demás personas llamadas a disfrutarla gozarán de la pensión como si aquélla no existiera.

Derecho de acrecer

Art. 96. — *(Ley 4.349, reformada, arts. 45 y 48).* — Si dentro de los 15 años a contar desde la muerte del causante alguno de los derechohabientes perdiera el derecho de percibir la pensión por una de las causas enumeradas en el artículo 99 ó falleciese, la parte que le correspondía acrecerá a los demás mientras corra el plazo de 15 años, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

a) La parte del hijo acrece a los otros hijos, si existen, con exclusión del cónyuge;

b) La parte de uno de los padres acrece al otro, si existe, con exclusión del cónyuge;

c) Si no quedan hijos ni padres con derecho de pensión su parte acrece al cónyuge;

d) La parte del cónyuge acrece a los hijos o padres en su caso, por partes iguales.

Aplicación de las disposiciones sobre división y acrecimiento

Art. 97. — Las disposiciones de los artículos 95 y 96 se aplicarán desde que lo solicite cualquiera de los derechohabientes en cuanto a la parte que le corresponda en los haberes futuros.

Pensionistas incapaces

Art. 98. — *(Ley 4.349, art. 46).* — Si entre los pensionistas hubiese incapaces, la Caja entregará las partes que a éstos correspondan a sus respectivos representantes legales.

Extinción de la pensión

Art. 99. — *(Ley 4349, reformada, art. 52: Código Penal, artículo 19 y concordantes).* — El derecho de pensión se extingue:

a) Para el viudo o la viuda, desde que contrajese nuevas nupcias;

b) Para los hijos varones, desde que llegasen a la edad de 18 años;

c) Para las hijas solteras, desde que contrajesen matrimonio;

d) Para cualquiera de los derechohabientes;

1.° Por domiciliarse en el extranjero;

2.° Por vida deshonesta o vagancia acreditada en forma.

Pérdida de la pensión por condena

Art. 100. — *(Ley 4.349, art. 52: Código Penal, art. 19).* — La pensión se pierde también por condena a la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta.

En este caso se procederá de acuerdo con las disposiciones del artículo 19, inciso 4.°, del Código Penal y si fuesen inaplicables, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 del presente decreto.

Domicilio en el extranjero

Art. 101. — Considérase domiciliado en el extranjero, a los efectos del artículo 99, al derechohabiente que permanezca ausente del país durante dos años consecutivos posteriores a la muerte del causante, siempre que de las circunstancias no resulte que el domicilio fué trasladado o fijado definitivamente fuera del país antes del vencimiento de dicho plazo.

Si el derechohabiente solicitara la pensión después de transcurridos más de dos años desde la muerte del causante o dejara de percibir la pensión durante igual plazo, deberá justificar que conservó su domicilio en el país, o comprobar la fecha en que estableció su domicilio en el país, en su caso.

Pensionistas que se ausentan del país

Art. 102. — *(Decreto de 14 de noviembre, 1931, art. 2.°).* — El derechohabiente obligado a ausentarse del país durante un plazo de 6 meses o más, deberá comunicarlo a la Caja, indicando las causas que motivan la ausencia.

Si la Caja, en mérito a las razones aducidas, considera que la ausencia no importa traslado de domicilio fuera del país, acordará el permiso correspondiente para percibir los haberes de la pensión durante un plazo máximo de ausencia de un año.

Si el derechohabiente estuviera obligado a permanecer ausente durante un plazo mayor, deberá presentar solicitud de prórroga, dos meses antes de caducar el permiso anterior. El permiso originario y las prórrogas no podrán autorizar una ausencia por más de dos años.

Si el derechohabiente se ausentara o permaneciera ausente sin solicitar el permiso o la prórroga o a pesar de que éstos le hayan sido denegados, la Caja suspenderá el pago de los haberes. Vencidos dos años de ausencia, la Caja declarará extinguida la pensión desde dicha fecha o desde la de suspensión del pago de los haberes en su caso.

Residencia en el extranjero a la fecha del fallecimiento del causante

Art. 103. — *(Decreto de 14 de noviembre 1931, art. 1.°).* — El derechohabiente residente en el extranjero a la fecha del fallecimiento del causante, podrá obtener la pensión, si manifiesta la voluntad de regresar al país o de establecer en él su domicilio dentro de los dos años desde dicha fecha.

Al otorgar la pensión, la Caja acordará el permiso previsto en el segundo apartado del artículo 102. Por lo demás se aplicarán las disposiciones de los apartados tercero y cuarto del mismo artículo.

Contralor

Art. 104. — Si de las circunstancias del caso y especialmente de las respectivas y prolongadas ausencias del derechohabiente surgieran dudas acerca de la subsistencia de su domicilio real en el país, la Caja lo pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo. Si se comprobara que el domicilio se halla realmente en el extranjero, se declarará extinguida la pensión.

A los efectos de lo dispuesto en el primer apartado, queda facultada la Caja para hacer constar en las cédulas de identidad de los beneficiarios que sus poseedores son pensionistas de la Caja.

Ausencias que no importan domicilio en el extranjero

Art. 105. — *(Decreto de 14 de Noviembre 1931, art. 3.°).* — El derechohabiente no se considerará domiciliado en el extranjero, aunque la ausencia fuese mayor de dos años:

a) Si se tratara de personas que residen fuera del país en el desempeño de funciones que le fueran conferidas por el Gobierno Nacional, Bancos oficiales o Reparticiones autónomas;

b) Si se tratara de parientes de tales funcionarios mientras vivan con ellos y a cargo de los mismos;

c) Si el derechohabiente fuese retenido fuera del país por causas de fuerza mayor acreditadas en forma. En tales casos, la Caja, si considera valederas las razones aducidas, acordará permisos especiales para seguir percibiendo los haberes, por el término de un año de ausencia, renovables por otros de igual duración, siempre que se justifique la subsistencia de razones que impidan al derechohabiente regresar al país.

Incompatibilidad del goce de varias pensiones

Art. 106. — *(Ley 4.349, art. 49; Ley 11.027, art. 23).* — No podrá acumularse una pensión acordada por la Caja con otra otorgada en virtud de leyes nacionales o provinciales u ordenanzas municipales.

Las personas que tuviesen simultáneamente derecho a dos o más pensiones de las indicadas en el apartado primero, deberán optar por una de ellas.

Si el optante desechara la pensión a cargo de la Caja, quedará definitivamente extinguido su derecho a ella. En cuanto a sus copartícipes en la pensión desechada, no les acrecerá la parte que habría correspondido al renunciante, sino desde la fecha en que se produzca alguna de las circunstancias que habrían extinguido el derecho de este último de no mediar su renuncia (1).

---

(1) Por decreto de 18 de julio de 1942 se derogó esta última parte del tercer parágrafo del Art. 106, lo cual significa que los acrecimientos que autoriza el Art. 45 de la Ley 4.349, se efectuarán cuando corresponda, sin limitación de ninguna naturaleza.

Disposiciones transitorias

Ley que determina los requisitos que debe reunir el causante

Art. 107. — *(Ley 11.923, art. 5.°, apartado 1.°).* — Para establecer la ley que regirá las pensiones que se acuerden con posterioridad a la promulgación de la Ley 11.923 en cuanto a los requisitos de edad y servicios que deben hallarse reunidos en el causante y en cuanto al monto del haber jubilatorio dependiente de tales condiciones, se aplicarán las disposiciones de los artículos 59 a 61.

Ley que rige las pensiones en vigor

Art. 108. — Las disposiciones del artículo 1.° de la Ley 11.923, relativas al derecho vitalicio de la viuda y a la extinción de la pensión del hijo varón desde que éste cumpla 18 años, serán aplicables a las pensiones en vigor a la fecha de promulgación de dicha ley.

La disposición relativa al derecho de pensión del viudo se aplicará desde la fecha referida y mientras no haya vencedido el plazo de 15 años previsto en el artículo 93 del presente decreto. El interesado disfrutará de los haberes devengados desde la promulgación de la Ley 11.923 si la Caja comprueba que aquél estuvo incapacitado a la fecha del fallecimiento del causante. Sin embargo, si el interesado entrara a concurrir con otros derechohabientes que ya disfrutaban de la pensión, gozará de la parte que le corresponde en los haberes futuros, desde la fecha en que la solicita.

Las disposiciones del artículo 1.° de la Ley 11.923, relativas a la división de la pensión y al derecho de acrecer, serán aplicadas a las pensiones en vigor a la fecha de promulgación de dicha ley, desde la fecha en que lo solicite cualquiera de los derechohabientes y en cuanto a la parte que le corresponda en los haberes futuros (1).

Viudas cuyas pensiones caducaron. Pequeñas pensiones vitalicias

Art. 109. — *(Ley 4.349, reformada, art. 48, apartado 4.°).* — Las viudas que en virtud de las disposiciones anteriores a la promulgación de la Ley 11.923 hayan gozado de pensión y cuyos derechos

(1) Derogado por decreto de fecha 11 de abril de 1938.

hubieran caducado a la fecha referida, gozarán a partir de ella de una pensión vitalicia, cuyo importe que se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94, no será superior a la suma de m$n. 100 mensuales.

Estas pensiones se regirán por las mismas disposiciones en vigor para las pensiones comunes, en cuanto ellas le sean aplicables.

Opción entre pensiones prorrogadas y vitalicias

Art. 110. — La viuda cuya pensión haya sido prorrogada en virtud de las Leyes 11.704 u 11.710 podrá optar entre ésta y la pensión prevista en el artículo 109. Si optara por la pensión prorrogada entrará en el goce de la vitalicia desde la fecha en que caduque aquélla.

Reajuste de las pensiones en vigor

Art. 111. — *(Ley 11.923, art. 2.°; Ley 12.142, art. 2.°; Ley 12.150 T. D., arts. 11 y 17).* — Las pensiones a cargo de la Caja, en vigor a la fecha de promulgación de la Ley 11.923 derivadas de jubilaciones ordinarias, serán reajustadas conforme a lo dispuesto en el artículo 87. El reajuste no podrá reducirlas a menos de m$n. 100.

A las pensiones derivadas de jubilaciones extraordinarias les será aplicada la escala prevista en el artículo 88.

Será igualmente aplicable a las pensiones, ordinarias o extraordinarias, lo dispuesto en el artículo 89.

CAPITULO III

Procedimiento

TITULO I

Solicitudes

Solicitudes en general

Art. 112. — *(Ley 4.349, arts. 29 y 50).* — La solicitud de cualquiera de los beneficios se presentará ante la Junta de Administración de la Caja.

La solicitud se hará por escrito en los formularios que al efecto facilitará la Caja y contendrá, además de los datos exigidos en cada caso por los artículos siguientes:

1.° El nombre y apellido del solicitante;
2.° El domicilio real o constituído del solicitante;
3.° El beneficio que se solicita, determinado en forma clara y precisa;
4.° La declaración de que el solicitante no goza de otros beneficios incompatibles con el que se solicita.

Al presentar la solicitud el interesado acreditará su identidad exhibiendo los documentos indicados en el tercer apartado del artículo 9.°. La Caja dejará en el expediente constancia de los datos contenidos en los mismos (1).

Jubilación ordinaria íntegra o anticipada

Art. 113. — La solicitud de jubilación ordinaria contendrá, además de los datos exigidos en el artículo 112, las siguientes indicaciones:

1.° La expresión precisa de los servicios prestados por el afiliado;
2.° El número asignado al afiliado en el Registro del Personal Civil de la Administración Nacional;
3.° Su número de afiliación a la Caja;
4.° Su edad;
5.° Su nacionalidad;
6.° Su estado civil;
7.° El detalle de las personas con derecho a pensión en el caso de muerte del afiliado, con especificación del nombre, parentesco con el afiliado y fecha de nacimiento de cada una de ellas.

---

(1) Modificado por decreto del Poder Ejecutivo del 26 de agosto de 1938, así: «Al presentar la solicitud, el interesado acreditará su identidad exhibiendo la libreta de enrolamiento, siendo ciudadano argentino mayor de 18 años y la cédula de identidad en los demás casos, sin perjuicio de que la Caja pueda requerir la presentación de otros documentos si fuese necesario completar los datos consignados en aquéllos, para establecer debidamente su identidad. La Caja dejará en el expediente constancia de los datos contenidos en tales documentos».

Conjuntamente con la solicitud deberá presentarse:

1.° El certificado de los servicios del afiliado;
2.° Los documentos probatorios de la edad del afiliado;
3.° Una fotografía del afiliado de las dimensiones usuales para la Cédula de identidad policial, que deberá ir adherida a la solicitud de jubilación.

Jubilación extraordinaria

Art. 114. — La solicitud de jubilación extraordinaria contendrá, además de los datos exigidos en el artículo 113, la indicación de la causa de la inutilización o imposibilidad física o intelectual.

Conjuntamente con la solicitud deberán presentarse los mismos documentos enumerados en el artículo 113 (1).

Devolución de aportes capitalizados

Art. 115. — La solicitud de devolución de los aportes capitalizados, contendrá, además de los datos exigidos en los artículos 112 y 113 (Puntos 1.°, 2.° y 3.°):

1.° La expresión precisa de la causa de la cesación en el servicio;
2.° La declaración de que el afiliado no ha prestado ni presta actualmente otros servicios computables a los efectos de la jubilación que los denunciados en la solicitud.

Conjuntamente con la solicitud deberá presentarse:

1.° El certificado de servicios del afiliado. El certificado deberá contener, además de los datos enumerados en el artículo 130, la indicación circunstanciada de la causa de la cesantía;
2.° Copia autenticada en su caso del decreto o resolución por la que se dispuso la cesantía.

---

(1) Por decreto del Poder Ejecutivo de fecha 26 de agosto de 1938, se agrega a este párrafo: «con excepción de los probatorios de la edad del afiliado».

Pensión por muerte de jubilado

Art. 116. — La solicitud de pensión por muerte de un jubilado contendrá, además de los datos exigidos en el artículo 112, las siguientes indicaciones:

1.° El nombre y apellido del causante;
2.° Lugar y fecha de su fallecimiento;
3.° El parentesco de los solicitantes con el causante;
4.° El número de su jubilación;
5.° Si el solicitante residiera en el extranjero a la fecha del fallecimiento del causante, la declaración de la voluntad de regresar o domiciliarse en el país dentro de un plazo máximo de 2 años desde dicha fecha.

Conjuntamente con la solicitud deberá presentarse:

1.° La partida de defunción del causante;
2.° Los documentos probatorios del parentesco en que se funda el derecho a la pensión;
3.° *Las partidas de nacimiento de los solicitantes si éstos fuesen el cónyuge o los padres del causante* (1).

Pensión por muerte de afiliado en actividad

Art. 117. — La solicitud de pensión por muerte de un afiliado en actividad contendrá los datos exigidos en los artículos 113 y 116, salvo el número de jubilación.

Conjuntamente con la solicitud deberán presentarse los documentos exigidos en los artículos 113 (salvo la fotografía del afiliado) y 116.

Pensión. Fecha de presentación de la solicitud y prescripción

Art. 118. — La solicitud de pensión por muerte de un jubilado o de un afiliado en actividad, podrá presentarse en cualquier momento a partir de la fecha del fallecimiento del causante.

La Caja se acogerá sin embargo a la prescripción en cuanto al

(1) Por decreto del Poder Ejecutivo del 26 de agosto de 1938, fué suprimido este apartado.

pago de los haberes de pensión devengados, si la pensión hubiese sido solicitada con un intervalo mayor de 5 años a contar desde la fecha del fallecimiento del causante.

Pensión. Copartícipes. Solicitudes

Art. 119. — Los pensionistas que tuviesen concurrentemente derecho a la pensión, podrán solicitar bajo una representación común o cada uno su parte por separado.

Pensión. Edictos

Art. 120. — Cuando se presente solicitud de pensión, la Caja ordenará la publicación de edictos llamando a los que se crean con derecho de pensión. Los edictos se publicarán durante 3 días en el Boletín Oficial.

La Caja no efectuará pago alguno antes de transcurridos 15 días desde la publicación del último edicto.

Del mismo modo se procederá cuando se solicita el beneficio previsto en el artículo 45.

Pensión. Presentación tardía

Art. 121. — En ningún caso la Caja será responsable de las cantidades que hubiese pagado a alguna de las personas indicadas en el artículo 90 por falta de presentación oportuna del verdadero derechohabiente.

Percepción de la pensión en el extranjero

Art. 122. — La solicitud para seguir percibiendo la pensión en el extranjero contendrá las siguientes indicaciones:

1.° El nombre y apellido del solicitante;
2.° Su domicilio real o constituído;
3.° El número de la pensión y la fecha desde la cual ésta corre;
4.° El parentesco del solicitante con el causante;
5.° La fecha en que el solicitante se ausentará del país y el plazo presumible de la ausencia;

6.° Las razones que motivan la ausencia;

7.° Si el solicitante ya ha solicitado y obtenido otros permisos semejantes y en caso afirmativo la fecha y el plazo de los mismos.

La Junta podrá exigir la presentación de los documentos probatorios de la causa de la ausencia.

Las solicitudes de prórroga del permiso consignarán los mismos datos.

Con las solicitudes especiales previstas en el inciso *c)* del artículo 105 se presentarán siempre los documentos probatorios de las causas de fuerza mayor que impidan el regreso al país, debidamente legalizados por las autoridades nacionales.

Beneficio en caso de muerte del afiliado sin dejar derecho de pensión

Art. 123. — La solicitud del beneficio indicada en el artículo 45 contendrá los mismos datos exigidos en el artículo 117.

Conjuntamente con la solicitud deberá presentarse:

1.° La partida de defunción del causante;

2.° El certificado de los servicios prestados por el causante;

3.° Los documentos probatorios del parentesco en que se funda el derecho al beneficio.

Trámite de solicitudes y cobro de haberes por medio de mandatario

Art. 124. — En los casos en que los interesados tramiten la solicitud del beneficio o efectúen el cobro de los haberes correspondientes por intermedio de mandatario, la Caja exigirá la comprobación de la supervivencia del beneficiario y de la ausencia de causas de extinción del beneficio en la forma que determine la Junta de Administración.

Queda además facultada la Caja para tomar todas las medidas compatibles con la libertad de contratar del beneficiario, para prevenir cualesquiera actos del mandatario en el trámite del beneficio o el cobro de los haberes que puedan redundar en perjuicio o fraude del mandante, especialmente por la inobservancia de lo dispuesto en el primer apartado del artículo 40.

Disposiciones transitorias

Pequeñas pensiones vitalicias

Art. 125. — La solicitud de la pensión especial prevista en el artículo 109, contendrá, además de los datos exigidos en el artículo 112, las indicaciones necesarias para individualizar la pensión de que había gozado la solicitante.

Reconocimiento de servicios y cargo

Art. 126. — Las solicitudes de reconocimiento de servicios anteriores a la fecha de promulgación de la Ley 11.923 por los que no se efectuaron aportes y del cargo correspondiente, previstas en los artículos 28 a 31, se presentarán ante la Junta y consignarán los siguientes datos:

1.° El nombre y apellido del afiliado;
2.° El número asignado al afiliado en el Registro del Personal Civil de la Administración Nacional, en su caso;
3.° El número de afiliación a la Caja, en su caso;
4.° La fecha de los servicios a que se refiere la solicitud;
5.° La indicación del cargo o empleo ocupado y de la repartición en que se prestaron servicios;
6.° El monto del sueldo percibido en las distintas épocas comprendidas en el tiempo a que se refiere la solicitud;
7.° La indicación precisa del carácter de los servicios en el caso del artículo 30.

TITULO II

De las pruebas

Estado civil

Art. 127. — En los casos en que el goce o el monto del beneficio sea acordado en consideración de la existencia, el estado o la muerte de alguna persona, los hechos respectivos se probarán por las partidas correspondientes, conforme lo dispuesto en el derecho común.

Las partidas que se presenten para solicitar el beneficio, deberán hallarse debidamente autenticadas o legalizadas en su caso.

Si la persona cuya edad se debe probar, es ciudadano argentino, nativo o naturalizado, y no fuese posible presentar la partida de nacimiento, la Caja admitirá como documento probatorio la libreta de enrolamiento.

Prueba supletoria

Art. 128. — En las situaciones a que se refiere el artículo 127, la prueba supletoria sólo se admitirá en los casos previstos en el derecho común.

En los demás casos en que por este decreto se prescribe la presentación de alguna partida, no se exigirá la prueba supletoria si fuese imposible la presentación de aquélla.

Servicios. Certificados

Art. 129. — Los servicios serán probados mediante certificados expedidos por las dependencias del Gobierno Nacional o por los Bancos oficiales o Reparticiones autónomas en que se hubieren prestado.

Cada vez que un afiliado deje de prestar servicios en una repartición, ésta extenderá el certificado correspondiente que será enviado a la Caja para ser agregado al legajo personal de aquél.

Si el afiliado reingresa al servicio o pasa a desempeñar un cargo o empleo en otra repartición, la Caja confrontará los datos relativos a los servicios anteriores declarados en su ficha personal y los certificados agregados a su legajo. Si comprobara que ambos no coinciden, requerirá de oficio de la repartición correspondiente los certificados que falten o los otros datos que fuesen del caso.

Servicios. Contenido de los certificados

Art. 130. — Los certificados de las reparticiones deberán referirse específicamente a cada uno de los siguientes puntos:

1.° La fecha de la iniciación de los servicios;

2.° El cargo o empleo desempeñado, y si hubiese variado o fuesen varios, las fechas iniciales y finales de cada uno;

3.° El sueldo percibido, y si hubiese variado o fuesen varios, las fechas dentro de las cuales se hubiese gozado de cada uno;

4.° Los descuentos sufridos a título de aporte, precisando cuáles fueron y las épocas de su pago;

5.° Las licencias extraordinarias concedidas, con las fechas iniciales y finales de cada una y si fueron otorgadas con el goce del sueldo íntegro o de parte del mismo o sin goce de sueldo;

6.° Las suspensiones sufridas con las fechas iniciales y finales;

7.° Las fechas en que hubiese cesado el servicio y la causa (renuncia, cesantía, exoneración, etc.).

Servicios. Afiliados sin remuneración mensual fija

Art. 131. — Si se tratara de servicios remunerados a comisión, honorarios, por ciento o por pieza o unidad, los certificados deberán contener, además de los datos enumerados en el artículo 130, la indicación precisa de las fechas de comienzo y cesación de los servicios, así como las del principio y fin de cada interrupción.

En el caso de servicios remunerados por pieza o unidad, deberá indicarse además la base establecida para los pagos.

Si de la confrontación de las constancias del certificado relativas a las remuneraciones y tiempo de los servicios, resultase que este último corresponde o podría corresponder a trabajos discontinuos y no a tareas permanentes, la Caja podrá exigir la ampliación de la prueba de que dichos servicios han sido prestados sin interrupciones capaces de modificar el derecho del interesado.

Servicios privilegiados

Art. 132. — Si los servicios alegados fuesen de los previstos en el artículo 10 y el solicitante manifestara querer acogerse al privilegio indicado en los artículos 64 y concordantes, los certificados deberán especificar, además de los datos enumerados en el artículo 130:

1.° Las fechas iniciales y finales de tales servicios especiales;

2.° La naturaleza de las funciones efectivamente desempeñadas;

3.° Las fechas dentro de las cuales se efectúe el aporte del 10 por ciento.

Servicios. Pruebas supletorias

Art. 133. — Cuando no exista la posibilidad de obtener el certificado de servicios, la deficiencia podrá ser suplida por informe de la Contaduría General de la Nación. El informe deberá contener los mismos datos exigidos en los artículos 130 a 132.

Si también la Contaduría General careciera de los elementos necesarios para atestiguar los servicios, el informe podrá ser suplido con una información sumaria aprobada por juez competente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134.

Del mismo modo se procederá si debiese suplirse deficiencias parciales de los certificados.

Servicios. Prueba supletoria judicial

Art. 134. — La Caja sólo admitirá la prueba supletoria de los servicios alegados si fuese imposible acreditarlos en otra forma por falta, destrucción o deficiencias de los archivos o registros y libros de la repartición respectiva.

La información sumaria no será aceptada por la Caja como prueba suficiente, si de ella no resulta comprobada:

1.° La deficiencia de la documentación que obliga a recurrir a la prueba supletoria;

2.° La prestación de servicios efectivos, con especificación de los empleos desempeñados, períodos de los mismos y sueldos percibidos en cada uno de ellos, y en su caso la causa de su cesación.

En ningún caso podrá invocarse ante la Caja una información sumaria a la que ella no haya sido citada para tomar la intervención que le corresponde.

Inutilización física e intelectual

Art. 135. — En los casos en que el goce del beneficio dependa de la inutilización o imposibilidad física o intelectual del interesado, la Caja requerirá directamente la prueba de la inutilización, de su causa y de la fecha en que se produjo.

Goce simultáneo de dos o más beneficios

Art. 136. — A los efectos de lo dispuesto en los artículos 58 y 106, la Caja requerirá directamente y de quien corresponda los informes necesarios a fin de verificar si el interesado goza de otros derechos de jubilación o de pensión, solo o en concurrencia con otros beneficiarios y si ha percibido en virtud de tales derechos, haberes devengados con posterioridad a la fecha inicial del beneficio a cargo de la Caja.

Disposiciones transitorias

Servicios. Confirmación de la Contaduría General de la Nación

Art. 137. — Mientras no se hallen organizadas totalmente las cuentas personales de los afiliados previstas en el artículo 181, los certificados de servicios deberán confirmarse, en la parte no registrada en aquéllas, por la Contaduría General de la Nación, según las constancias de sus archivos. La confirmación será otorgada cuando lo solicite la Caja o el afiliado para hacer valer los certificados ante la misma.

En el caso de que la Contaduría General de la Nación careciera de los elementos necesarios para confirmar el certificado, la Caja lo aceptará sin la confirmación, siempre que acredite en forma suficiente a juicio de la Junta, los servicios alegados.

TITULO III

Resoluciones y recursos

Jubilaciones y pensiones. Resolución de la Junta y Decretos del Poder Ejecutivo

Art. 138. — *(Ley 4.349, arts. 29, 50 y 57).* — La solicitud de jubilación y pensión será examinada por la Junta, la que verificará los hechos alegados y si hallara ajustado a la ley lo pedido, acordará el beneficio. En caso contrario denegará lo solicitado. La resolución de la Junta será elevada al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Hacienda con todos sus antecedentes y copia de la parte pertinente del acta de la sesión de la Junta.

En los casos en que la Junta haya denegado una jubilación o pensión, el Poder Ejecutivo, oído el Procurador del Tesoro, resolverá en Acuerdo de Ministros. En los demás casos, el beneficio será acordado o denegado por decreto dictado por conducto del Ministerio de Hacienda (1).

La resolución del Poder Ejecutivo será notificada al interesado por intermedio de la Caja.

Jubilaciones de oficio

Art. 139. — *(Ley 4.349, art. 32).* — No tratándose de funcionarios inamovibles, el Poder Ejecutivo podrá jubilar de oficio al afiliado que reúna las condiciones legales, cuando así lo exija el buen servicio público.

En este caso, el Poder Ejecutivo, en Acuerdo de Ministros, declarará las razones de servicio público que hagan procedente la medida, dando audiencia al afiliado para que éste pueda hacer valer los derechos que crea tener; e intervención a la Junta de Administración para que compruebe si el afiliado reúne los requisitos legales y para que acuerde la jubilación en el caso de hallarlos confirmados.

La junta procederá de oficio a la comprobación de la existencia o inexistencia de los requisitos, sin perjuicio de recibir las pruebas que le presente el afiliado y acordará o denegará la jubilación.

La resolución de la Junta será elevada al Poder Ejecutivo el que pronunciará su resolución en la misma forma prevista en el segundo apartado del artículo 138.

Desde la fecha del Acuerdo hasta que el Poder Ejecutivo resuelva en definitiva, no se declarará la cesantía del afiliado que prestara servicios en cualquier repartición dependiente del Poder Ejecutivo, sino por hechos sobrevinientes a la primera de dichas fechas o que sólo se hubiesen conocido con posterioridad o por decreto dictado en Acuerdo de Ministros.

---

(1) Por decreto de fecha 9 de enero de 1942, este parágrafo fué modificado en la siguiente forma:

«En los casos en que la Junta haya denegado una jubilación o pensión, el Poder Ejecutivo, oído el señor Asesor Procurador General de la Nación, resolverá en Acuerdo de Ministros. En los demás casos, el beneficio será acordado o denegado por decreto dictado por conducto del Ministerio de Hacienda *«previo dictamen del señor Procurador del Tesoro, cuando se estime conveniente»*.

Reconsideración de Decretos del Poder Ejecutivo

Art. 140. — En los casos de los artículos 138 y 139 el interesado que considerara afectados sus derechos por la resolución del Poder Ejecutivo, podrá dirigirse al Ministerio de Hacienda solicitando reconsideración dentro de los 10 días de la fecha de la notificación. Pasado dicho término, sin haberse interpuesto el recurso, la resolución quedará firme ([1]).

Beneficios menores. Resolución de la Junta y Reconsideración

Art. 141. — Las solicitudes de los beneficios previstos en los artículos 41 y 45 *y la de formulación del cargo en los casos de los artículos 28 y 31* ([2]) *serán resueltas directamente por la Junta. La resolución será notificada al interesado.*

Si el interesado considerara que la resolución afecta sus derechos podrá solicitar reconsideración ante la Junta, dentro de los 15 días de la fecha de su notificación. Pasado dicho término, sin haberse interpuesto el recurso, la resolución quedará firme.

CAPITULO IV

Del fondo de la caja

Afectación

Art. 142. — *(Ley 4.349, arts. 1.° y 10).* — El fondo de la Caja es de propiedad de las personas comprendidas en su régimen jubilatorio al efecto de atender los beneficios acordados o a acordarse por la misma.

En ningún caso podrá disponerse de parte alguna de los fondos de la Caja para otros fines que los mencionados bajo responsabilidad personal de los miembros de la Junta, que se hará efectiva en sus bienes.

Constitución

Art. 143. — *(Ley 4.394, reformada, art. 4.°; Leyes números 11.672, T. D., arts. 18 y 22 y 12.150 T. D., arts 11 y 12; Ley 11.923, art. 3.°).* — El fondo de la Caja se constituirá:

1.° Con los aportes de los afiliados, previstos en el art. 15;

---

(1) Ver decreto de 7 de agosto de 1942, ampliatorio de este artículo, en página 333.

(2) Esta frase fué suprimida por decreto del P. E. del 30 de marzo de 1938.

2.° Con el aporte patronal del Gobierno Nacional, Bancos oficiales y reparticiones autónomas, compuesto de los siguientes rubros:

a) Del 6 % del monto total de los sueldos pagados a los afiliados comunes y del 8 % de los sueldos de los incluídos en la categoría de privilegiados;

b) Del producido de los sueldos de empleos vacantes;

c) De la renta de diez millones de pesos en fondos públicos del 6 % de interés, inscripta en el Gran Libro de la Deuda, cuyo servicio continuará haciéndose trimestralmente, como hasta el presente.

3.° Con el importe de la multas que en dinero efectivo imponga la Administración, los Bancos oficiales y Reparticiones autónomas a su personal o a extraños y que no tengan otro destino legal;

4.° Con el 50 % de los depósitos existentes en el Banco de la Nación Argentina y sus sucursales a la orden de los jueces de jurisdicción criminal por concepto de fianzas cumplidas o prescriptas, comisos y demás, que no tengan otro destino legal;

5.° Con el 50 % de los fondos depositados en el Banco de la Nación Argentina y sus sucursales, en causas del fuero criminal y correccional que de 5 años no hayan sido extraídos, siempre que no tengan otro destino legal;

6.° Con los intereses de los fondos públicos y las rentas de otros bienes que la Caja adquiera;

7.° Con las donaciones o legados que se le hagan.

Liquidación de aportes. Oportunidad

Art. 144. — *(Ley 11.923, art. 9.° — Acuerdo del 14 de julio de 1931, art. 5.°, inciso 2.°; Acuerdo del 25 de junio de 1932, art. 1.°, inciso g).* — La liquidación de los aportes se efectuará simultáneamente con la de los haberes.

Los aportes del artículo 15, incisos 2.° y 3.°, se liquidarán simultáneamente con el primer mes completo de sueldo. En cualquier época en que la Caja descubra la omisión de tales descuentos, lo

pondrá en conocimiento de la Contaduría General de la Nación o del Banco Oficial o Repartición autónoma en su caso, a los efectos pertinentes.

Sanciones

Art. 145. — *(Acuerdo del 14 de julio de 1931, art. 5.°, inc. 2.°).* — Los funcionarios que intervengan en la liquidación y pago de haberes serán directamente responsables por los descuentos que hayan omitido efectuar en concepto de aportes a la Caja.

La Contaduría General de la Nación podrá disponer que sus delegados no intervendrán en el pago de haberes mientras no se haya efectuado el depósito de los aportes correspondientes al mes anterior.

Contralor del ingreso de aportes

Art. 146. — Para asegurar el contralor del ingreso de los aportes, las planillas mensuales de sueldos que deben enviarse a la Caja por todas las dependencias, Bancos oficiales y Reparticiones autónomas, serán adaptadas al modelo que la Contaduría General de la Nación adopte a propuesta de la Caja. En las planillas se especificarán todos los elementos necesarios para efectuar dicho contralor.

Los sueldos correspondientes al personal que se acoja al privilegio previsto en los artículos 64 y concordantes, serán liquidados por separado en planillas especiales.

Aporte patronal. Base

Art. 147. — El aporte patronal previsto en el inciso 2.°, *a)* del artículo 143, se efectuará sobre todos los sueldos liquidados al personal comprendido en el presente decreto, con inclusión de los jubilados que hubiesen continuado en el servicio o hubiesen vuelto al mismo.

Aporte patronal a cargo del Gobierno Nacional. Liquidación y forma de pago

Art. 148. — *(Acuerdo del 14 de julio de 1931, art. 5.°, inciso 2.°).* — El aporte patronal a cargo del Gobierno Nacional previsto en el inciso 2.°, *a)* del artículo 143, será liquidado oportunamente

por las Direcciones Administrativas, simultáneamente con las planillas de sueldos y aportes del personal y se dejará constancia de su liquidación en las mismas. Igual procedimiento se adoptará cuando se confeccionen planillas suplementarias.

El Ministerio de Hacienda entregará el aporte patronal del Estado a la Caja, de acuerdo con las necesidades de ésta, en efectivo o en títulos de la deuda pública consolidada de mayor rendimiento, avaluados al precio oficial cotizado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el día que se realice el pago.

A cuenta de las sumas devengadas por la Caja en concepto de aporte patronal por los meses de enero a noviembre de cada año y hasta tanto la Contaduría General de la Nación efectúe la liquidación correspondiente, el Ministerio de Hacienda entregará a la Caja mensualmente una suma aproximada a la duodécima parte del monto total a ingresar por el ejercicio. El ajuste se hará al liquidar el aporte correspondiente al mes de diciembre.

Aporte patronal por los privilegios. Ajuste

Art. 149. — Tan pronto como la Contaduría General de la Nación reciba el ejemplar correspondiente de la declaración prevista en el artículo 11, tomará las medidas del caso para el ajuste correspondiente del aporte patronal.

Si el afiliado hubiese solicitado su inclusión en la categoría de privilegiados, la Contaduría recabará de la repartición competente los informes necesarios para establecer si la naturaleza de los servicios justifica la elevación del aporte patronal.

Si a juicio de la Contaduría la naturaleza de los servicios no lo permitiese, se lo comunicará a la Caja y al afiliado, procediéndose por lo demás de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.

Aporte patronal a cargo de las Reparticiones Autónomas

Art. 150. — Los Bancos oficiales y las Reparticiones autónomas, con excepción de las Universidades Nacionales y el Consejo Nacional de Educación, efectuarán en las mismas planillas en que figuren los descuentos de sueldos, la liquidación correspondiente al aporte patronal previsto en el inciso 2.°, *a)* del artículo 143, e ingre-

sarán su importe en efectivo a la Caja, conjuntamente con el de los aportes del personal, multas y vacantes, en el plazo previsto en el artículo 155.

Las universidades Nacionales y el Consejo Nacional de Educación elevarán mensualmente a la Dirección de Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública la liquidación del aporte patronal correspondiente al personal de su dependencia y remitirán a la Caja, conjuntamente con las planillas de sueldos, una copia autenticada de dicha liquidación.

Aporte patronal. Empresas particulares. Personal de cuentas especiales

Art. 151. — *(Ley 11.672 T. D., art. 71: Ley 11.923, artículo 3.°).* — Las empresas particulares que costean sueldos del personal de cuentas especiales incorporadas o no al presupuesto, abonarán simultáneamente con el importe correspondiente a dichos sueldos, la suma necesaria para costear el aporte patronal que corresponda.

Empleo vacante. Definición

Art. 152. — *(Ley 4.349, art. 4.°, inciso 6.°, Acuerdo del 21 de diciembre, arts. 8.° y 10).* — Se considera vacante a los efectos del inciso 2.°, *b)* del artículo 143, todo cargo o empleo determinado en el Presupuesto general, leyes especiales o presupuestos regidos por la Ley 11.672, o creado al practicarse la distribución definitiva de una partida global, a partir del día en que el funcionario o empleado que lo desempeñaba haya cesado en el mismo y hasta tanto no se produzca su reemplazo.

Se considera igualmente vacante el empleo de los funcionarios o empleados suspendidos en el cargo sin fijación de término hasta tanto se declare levantada la suspensión.

No se consideran vacantes los cargos o empleos nuevos desde la fecha en que hayan sido creados hasta la de su provisión.

Sueldos de empleos vacantes que no corresponden a la Caja

Art. 153 — No corresponde a la Caja el producido de los sueldos de empleos vacantes:

a) Tratándose de empleos dependientes directamente del P. E., si éste, por decreto especial declara que la no provisión del cargo obedece a razones de economía;

b) Tratándose de empleos en los Bancos oficiales y Reparticiones autónomas, si la no provisión obedece a razones de economía declaradas por resolución tomada en forma por el directorio y que no podrá dictarse con efectos retroactivos al día en que se produjo la vacante, salvo autorización especial que deberá conferirse en cada caso por el Poder Ejecutivo. La resolución se comunicará al Poder Ejecutivo y a la Caja y se entenderá que, en virtud de ello queda suprimido el empleo en el respectivo presupuesto del año y que no podrá llenarse más tarde, sino mediante autorización de la partida correspondiente por decreto especial del Poder Ejecutivo;

c) Cuando se trate de vacantes transitorias que se produzcan durante la organización o reorganización de servicios, previamente resuelta por la autoridad competente;

d) Si se trata de empleos costeados por empresas privadas.

Multas

Art. 154. — *(Ley 4.349, art. 4.°, inc. 4.°; Acuerdo del 21 de diciembre de 1933, art. 9.°). — Las multas que se apliquen al personal serán ingresadas a la Caja íntegramente e igualmente las deducciones que se efectúen en los haberes por inasistencia y por suspensiones a término fijo con o sin prestación de servicios.*

A los efectos del presente artículo se entiende por multa las sumas que se descuenten al personal por razón de inasistencias y faltas disciplinarias.

Las multas ya ingresadas a la Caja no podrán ser condonadas (1).

---

(1) El Poder Ejecutivo por decreto del 15 de septiembre de 1936, modificó su texto en la forma siguiente:

«Artículo 1.°. — Los descuentos motivados por inasistencias y a los cuales se refiere el artículo 154 del decreto de 25 de enero de 1935, reglamentario de la Ley N.o 11.923, ingresados o no a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, pueden ser condonados cuando se han efectuado por causa de enfermedad debidamente justificadas; o cuando se han producido en razón de suspensiones posteriormente dejadas sin efecto, dentro de lo prescripto por el Acuerdo de Ministros de 16 de enero de 1913.

«Art. 2.° — No podrán condonarse, una vez ingresadas a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, las multas aplicadas por faltas de puntualidad o disciplinarias y por suspensiones a término fijo, con o sin prestación de servicios.

Art. 3.° — Quedan autorizadas las reparticiones encargadas de efectuar ingresos a la Caja citada, a compensar de los importes a entregar a la misma en concepto de inasistencias, las sumas que deban abonar a los interesados por habérseles justificado inasistencias en virtud de las disposiciones del presente decreto o por haberse dejado sin efecto, suspensiones sin término, dicha compensación sólo podrá practicarse previa conformidad de la Contaduría General de la Nación o Delegaciones de la misma, en planillas confeccionadas al efecto, uno de cuyos ejemplares deberá remitirse a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, para su contabilización.

Art. 4.° — Comuníquese, publíquese y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos. — Decreto N.° 89.689».

Depósito de las sumas correspondientes a la Caja. Plazo

Art. 155 — *(Ley 4.349, art. 14; Acuerdo del 14 de julio de 1931, art. 12, inc. d.).* — Las sumas que en concepto de aportes del personal, multas y sueldos que se reconozcan vacantes correspondan a la Caja serán depositadas mensualmente por las Direcciones Administrativas o habilitaciones por los Bancos oficiales y Reparticiones autónomas, dentro de los diez días de efectuados los pagos de sueldos y jornales.

Fondos depositados en el Banco de la Nación Argentina. Fuero criminal

Art. 156. — *(Ley 11.672 T. D. , arts. 18 y 22).* — Los fondos que corresponden a la Caja de acuerdo con lo previsto en el artículo 143, inc. 5.°, serán transferidos por el Banco de la Nación Argentina, sin necesidad de ningún otro trámite, poniendo el hecho en conocimiento del Juez de la causa sin perjuicio de que la Caja devuelva al Banco tales fondos en los casos en que fuesen reclamados por los jueces respectivos, por cualquier circunstancia. Este procedimiento se seguirá observando con los depósitos existentes, a medida que se fuere cumpliendo el plazo de cinco años.

Sumas indebidamente ingresadas al fondo. Reclamaciones

Art. 157. — *(Decreto del 30 de abril de 1906).* — Las reclamaciones de los afiliados o ex afiliados por devolución de sumas que en cualquier concepto hayan ingresado indebidamente al fondo de la Caja, se harán ante la repartición en que fueron prestados los servicios que motivaron el ingreso. La reclamación será elevada al Ministerio de que depende la repartición, pasará a informe y liquidación de la Contaduría General de la Nación y se remitirá, en su caso, a la Junta para su ulterior resolución.

Sumas indebidamente ingresadas al fondo. Devoluciones

Art. 158 — *(Acuerdo del 14 de julio de 1931, art. 28).* — La Caja no realizará pagos directos en concepto de devoluciones a empleados ni a dependencias del Gobierno Nacional sino por interme-

dio de la Tesorería General de la Nación, salvo que se trate de Reparticiones autónomas que mantienen relaciones directas con la Caja.

Contralor de contribuciones en general

Art. 159. — Queda facultada la Caja para recabar directamente de cualquier dependencia del Gobierno Nacional, así como de los Bancos Oficiales y Reparticiones autónomas, todos los datos suplementarios que considere necesarios para efectuar el contralor del ingreso de las sumas que en cualquier concepto deben destinarse a su fondo.

Dinero de caja

Art. 160 — *(Ley 4.349, art. 11).* — La Caja no podrá atesorar suma en dinero efectivo que no requiera para los pagos corrientes y una reserva prudencial con tal objeto. Todos sus depósitos en dinero serán colocados en el Banco de la Nación Argentina.

Inversión del fondo en títulos

Art. 161 — *(Ley 4.349, reformada, arts. 12 y 13).* — Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, los fondos de la Caja serán invertidos por ésta en títulos de la deuda pública u otros que tengan la garantía subsidiaria de la Nación y le produzcan el más alto rendimiento.

La adquisición o enajenación se hará por llamado a licitación, salvo que la Junta, por unanimidad, resuelva en casos especiales proceder en forma distinta.

Los títulos de renta serán depositados en el Banco de la Nación Argentina.

CAPITULO V

De la administración de la caja

Junta de Administración. Composición

Art. 162. — *(Ley 4.349, reformada, art. 5.°).* — La Caja será administrada por una Junta compuesta de 5 miembros: 1 Presidente Administrador y 2 vocales designados por el Poder Ejecutivo con

Acuerdo del Senado, y 2 representantes elegidos por los afiliados de la Caja. Durarán 4 años en sus funciones y podrán ser reelegidos.

Los afiliados elegirán dos vocales suplentes que reemplazarán a los titulares en caso de fallecimiento, renuncia, ausencia o imposibilidad.

Remuneración de los miembros de la Junta

Art. 163 — El Presidente Administrador gozará de un sueldo mensual que será fijado anualmente en el presupuesto de la Caja. Los cuatro vocales en ejercicio percibirán una remuneración en proporción a la asistencia que en conjunto no podrá sumar más de $ 30.000 por año. Al efecto se incluirá en el presupuesto la partida correspondiente.

Vicepresidencia de la Junta

Art. 164 — *(Ley 4.349, reformada, art. 7.°).* — Faltando el Presidente Administrador, sus funciones serán desempeñadas por un Vice, elegido por la Junta entre los vocales nombrados por el Poder Ejecutivo.

Funciones generales de la Junta

Art. 165 — *(Ley 4.349, art. 9.°).* — La Junta percibirá los fondos de la Caja, pagará las jubilaciones y pensiones a que se refiere la ley, formulará su presupuesto de gastos, que deberá ser atendido con los fondos de la Caja y lo elevará a la aprobación del Poder Ejecutivo antes del 1.° de agosto de cada año; nombrará y renovará el personal a sus órdenes.

Obligaciones especiales de la Junta

Art. 166. — *(Ley 4.349, art. 8.°).* — La Junta estará especialmente obligada:

1.° A velar por la fiel observancia de las prescripciones que la ley establece para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones;

2.° A cuidar que no continúe en el goce de ella ninguna persona que haya perdido el derecho de percibirla;

3.° A rendir cuenta trimestral de sus operaciones a la Contaduría General de la Nación y a publicar cada tres meses el estado correspondiente;

4.° A elevar al Ministerio de Hacienda al fin de cada ejercicio económico, una memoria completa sobre la situación de la Caja, señalando los inconvenientes con que hubiere tropezado, y proponiendo las modificaciones de la ley que la práctica demostrara necesarias;

5.° A darse su reglamento interno sometiéndolo a la aprobación del Poder Ejecutivo.

Pago de los beneficios. Formas

Art. 167. — La Junta efectuará los pagos de los beneficios directamente cuando ellos deban realizarse en la Capital Federal, o por intermedio del Banco de la Nación cuando deban hacerse en el interior.

Disposiciones transitorias

Junta Provisional

Art. 168. — *(Ley 12.142, art. 1.°).* — Hasta tanto se constituya la Junta de acuerdo con lo previsto en el artículo 162, la administración de la Caja quedará a cargo de una Junta provisional compuesta por un presidente y dos vocales designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Elección de representantes. — Servicios mixtos
Reorganización financiera. Trabajos preparatorios de la Junta

Art. 169. — Queda especialmente encargada la Junta:

1.° De preparar un proyecto reglamentando el procedimiento para realizar la elección de los representantes de los afiliados. Este proyecto será elevado al Poder Ejecutivo dentro de los 90 días de la fecha en que haya quedado constituída la Junta Provisional;

2.° De acordar con las demás Cajas de Jubilaciones un plan de reglamentación que unifique los criterios para el reconocimiento mutuo de servicios sujetos a los distintos re-

gímenes jubilatorios. Este plan será elevado al Poder Ejecutivo dentro de los 180 días de la fecha en que haya quedado constituída la Junta Provisional;

3.° De preparar un plan de reorganización financiera que será elevado al Poder Ejecutivo antes del 1.° de junio de 1936.

CAPITULO VI

Contralor y reorganización financiera. — Censo de afiliados

Plan de reorganización financiera. Trabajos previos

Art. 170. — *(Ley 11.923, art. 7.°).* — A fin de preparar el plan de reorganización financiera, la Junta levantará un censo general de afiliados, organizará la estadística permanente de todas las personas comprendidas en el régimen jubilatorio y realizará la correspondiente valuación actuarial.

Censo. Fecha

Art. 171. — El censo general se realizará el día 30 de junio de 1935, a cuyo efecto todos los afiliados en actividad en dicha fecha llenarán por primera vez la ficha personal que en tiempo oportuno será provista por la Caja.

Ficha personal

Art. 172. — La ficha personal contendrá los siguientes datos:

1.° Número de afiliación otorgado por la Caja y el asignado en el Registro del Personal Civil de la Administración Nacional;

2.° Nombre y apellido del afiliado;

3.° Nacionalidad;

4.° Lugar y fecha de su nacimiento;

5.° Libreta de enrolamiento, (número, región, distrito, clase);

6.° Cédula de identidad, (número, policía que la expidió);

7.° Estudios cursados o profesión;

8.° Estado civil;

9.° Si es retirado militar o jubilado nacional, provincial o municipal;

10. Nombre y apellido, lugar y fecha de nacimiento de los padres del afiliado y si ellos viven o han fallecido;
11. Nombre y apellido, lugar y fecha de nacimiento del cónyuge del afiliado si lo hubiere y en su caso, si vive o ha fallecido;
12. Nombre, lugar y fecha de nacimiento de los hijos varones menores de 18 años e hijas solteras si los hubiera;
13. Detalle de los servicios nacionales prestados por el afiliado, con determinación de la repartición en que fueron prestados, empleo u ocupación, fecha del comienzo y cesación de los servicios y sueldos percibidos. Si ha prestado o presta servicios de los comprendidos en el artículo 10, se indicará si ha optado por el privilegio;
14. Detalle de los servicios computables prestados bajo otros regímenes jubilatorios, con determinación de la repartición o empresa en que fueron prestados, fecha del comienzo y cesación de los servicios y sueldos percibidos.

La ficha personal se llenará por duplicado.

Censo. Obligaciones de los Jefes de Repartición

Art. 173. — Los jefes de repartición remitirán a la Caja antes del 31 de julio de 1935 las fichas correspondientes al personal de su dependencia, previa la verificación de la exactitud de los datos consignados en ellas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.°. Acompañarán, además, una nómina completa del personal afiliado, a la fecha del censo, con indicación del número asignado a cada afiliado por la Caja en cumplimiento del Acuerdo del 18 de diciembre de 1923, así como la especificación de los nombres de los empleados que no hubieran llenado la ficha y el motivo de la omisión.

Sanciones administrativas

Art. 174. — La Contaduría General de la Nación, las reparticiones autónomas y los Bancos oficiales procederán a indicación de la Caja, y mientras el Poder Ejecutivo no resuelva la aplicación de otras medidas punitivas, a suspender de inmediato la liquidación de los haberes a todo afiliado que, sin causa justificada en forma, hubiera omitido cumplir la disposición del artículo 171, por el tiempo que dure la omisión.

Sanciones disciplinarias

Art. 175. — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 174, se reputará falta grave, susceptible de producir la separación del servicio del empleado culpable: la demora en llenar la ficha personal, la inclusión en ella de datos falsos y la negligencia de los funcionarios encargados del contralor y remisión de las fichas a la Caja, en el cumplimiento de los deberes que les impone el tercer apartado del artículo 9.º.

Número de afiliación

Art. 176. — Los afiliados conservarán el número de afiliación otorgado por la Caja en virtud de las disposiciones del Acuerdo de diciembre 18 de 1923. Los que a la fecha del censo no lo tuvieren asignado, así como los que ingresen en la Administración con posterioridad al 30 de junio de 1935 sin que se les hubiese otorgado antes, recibirán de la Caja, por intermedio de la repartición en que prestan servicios, su correspondiente cédula de afiliación, cuyo número servirá para identificarlos durante toda su carrera administrativa y que deberán poner en conocimiento de quien corresponda, cada vez que cambien de repartición, acumulen puestos o reingresen al servicio.

Primera valuación actuarial

Art. 177. — La Caja practicará dentro de los dos años de la promulgación de la Ley 11.923 una valuación actuarial de sus recursos y compromisos, utilizando para ese fin los elementos estadísticos organizados de confomidad con lo dispuesto en el presente capítulo.

Reorganización financiera

Art. 178. — Sobre la base de los resultados de la valuación actuarial, la Caja formulará el plan de su reorganización financiera, proponiendo las modificaciones definitivas que a su juicio fuese menester introducir en el régimen económico-financiero de la Ley.

Valuaciones actuariales periódicas

Art. 179. — En lo sucesivo la Caja practicará una valuación actuarial cada tres años.

Legajo personal del afiliado

Art. 180. — Con los elementos que la Caja posee en virtud del Acuerdo de Gobierno del 18 de diciembre de 1923 y los que reúna en el futuro, se constituirá el legajo personal correspondiente a cada afiliado.

Cuenta personal del afiliado

Art. 181. — La Caja abrirá a cada afiliado una cuenta personal en la que registrará todas las circunstancias relacionadas con la computabilidad de sus servicios.

Art. 182. — *(Ley 11.923, art. 11).* — La Caja contabilizará por separado el régimen financiero referente a las jubilaciones comunes del de las privilegiadas.

Disposiciones finales

Art. 183. — Los Anexos a los artículos 65, 67, 69 y 85, que acompañan al presente decreto, forman parte integrante del mismo.

Art. 184. — El ajuste de la liquidación de los haberes de los que opten por su inclusión en la categoría de privilegiados, se hará a partir del 1.° de febrero próximo sin perjuicio de los cargos por las diferencias que resultaren desde la sanción de la ley hasta dicha fecha.

La diferencia de aportes correspondiente a dicho período se descontará en los meses subsiguientes, en la siguiente forma: la de octubre en las planillas de marzo, la de noviembre en las de abril y así sucesivamente.

Art. 185. — Deróganse todas las disposiciones de decretos anteriores que se opongan a las del presente.

Art. 186. — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

Decreto N.° 55.211.

JUSTO.

FEDERICO PINEDO.

Anexo al artículo 65

JUBILACIÓN ORDINARIA ÍNTEGRA

Ejemplo 1.º:

Afiliado de 55 años de edad con los siguientes servicios sucesivos:

18 años de servicios comunes.
10 » » » privilegiados.

$$\frac{18}{30} = 60\ \%$$

$$\frac{10}{25} = 40\ \%$$

100 % (tiempo suficiente).

Ejemplo 2.º:

Afiliado de 53 años de edad con los siguientes servicios sucesivos:

17 años de servicios comunes.
12.5 » » » privilegiados.

Tiempo de servicios de cada categoría que se exige a un afiliado de 53 años de edad para la jubilación ordinaria íntegra:

34 años de servicios comunes ó 25 privilegiados.

$$\frac{17}{34} = 50\ \%$$

$$\frac{12.5}{25} = 50\ \%$$

100 % (tiempo suficiente).

Ejemplo 3.º:

Afiliado de 59 años de edad con los siguientes servicios sucesivos:

7 años de servicios comunes.
18.75 » » » privilegiados.

Tiempo de servicios de cada categoría que se exige a un afiliado de 59 años de edad para la jubilación ordinaria íntegra:

28 años de servicios comunes ó 25 de privilegiados:

$$\frac{7}{28} = 25\ \%$$

$$\frac{18.75}{25} = 75\ \%$$

100 % (tiempo suficiente).

Ejemplo 4.º:

Afiliado de 47 años de edad con los siguientes servicios sucesivos:

6,9 años de servicios comunes.
26,35 » » » privilegiados

Tiempo de servicios de cada categoría que se exige a un afiliado de 47 años de edad para la jubilación ordinaria íntegra:
46 años de servicios comunes o 31 de privilegiados.

$$\frac{6.9}{46} = 15\ \%$$

$$\frac{26.35}{31} = 85\ \%$$

100 % (tiempo suficiente).

Anexo al artículo 67

JUBILACIÓN ANTICIPADA

Para acordarla es necesario determinar:

I. Si el afiliado ha prestado servicios durante el tiempo suficiente;

II. En caso afirmativo, a cuanto asciende el porciento de reducción del haber jubilatorio.

El porciento de reducción se calcula del siguiente modo:

a) Afiliados menores de 50 años

1.° Se determinarán los porcientos que representan respectivamente los servicios comunes y privilegiados, efectivamente prestados, en relación a los años de servicios de cada categoría que se exigen de acuerdo con la edad del afiliado, para obtener la jubilación ordinaria íntegra.

2.° Cada uno de los porcientos determinados precedentemente se dividirá por la suma de los mismos.

3.° Los porcientos obtenidos de acuerdo con el punto 1.° para los servicios comunes y privilegiados se restarán respectivamente de los que resulten según el punto 2.°.

4.° Las diferencias determinadas según el punto 3.° para los servicios comunes y privilegiados se multiplicarán respectivamente por los años de servicios que se exigen en la categoría correspondiente de acuerdo con la edad del afiliado para obtener la jubilación ordinaria íntegra.

5.° Cada uno de los productos obtenidos según el punto 4.° para los servicios comunes y privilegiados se dividirá por dos, para obtener los años de edad que faltan para la jubilación ordinaria íntegra.

6.° El cociente correspondiente a los servicios comunes se multiplicará por 4 %; el correspondiente a los servicios privilegiados por 5 %. La suma de los productos obtenidos será la tasa de reducción del haber jubilatorio

b) Afiliados de 50 años de edad o mayores

1.° Se seguirá el procedimiento indicado en el punto 1.°.

2.° El porciento determinado precedentemente para los servicios comunes se dividirá por la suma de ese mismo porciento más el de los privilegiados.

3.° El porciento obtenido de acuerdo con el punto 1.° para los servicios comunes se restará del que resulte para los mismos según el punto 2.°.

4.° La diferencia que resulte del cálculo precedente se multiplicará por los años de servicio que se exigen en la categoría común, atento a la edad del afiliado, para obtener la jubilación ordinaria íntegra.

5.° El producto obtenido de acuerdo con el punto 4.° se dividirá por dos para obtener los años de edad que faltan para la jubilación ordinaria íntegra.

6.° El cociente se multiplicará por 4 %, cuyo producto será la tasa de reducción del haber jubilatorio.

Ejemplo 1.°:

Afiliado de 48 años de edad, con los siguientes servicios sucesivos:

12 años de servicios comunes.
15 años de servicios privilegiados.

I. Tiempo mínimo de servicios de cada categoría que se exige para la jubilación anticipada: 30 años de servicios comunes ó 25 de privilegiados.

$$\frac{12}{30} = 40\ \%$$

$$\frac{15}{25} = 60\ \%$$

100 % (tiempo suficiente).

II *a)* Tiempo de servicios de cada categoría que se exige a un afiliado de 48 años de edad para la jubilación ordinaria íntegra:

44 años de servicios comunes ó 29 de privilegiados.

$$\frac{12}{44} = 27.27\ \%$$

$$\frac{15}{29} = 51.72\ \%$$

78.99 %

$$\frac{27.27}{78.99} = 34.52\ \%$$

$$\frac{51.72}{78.99} = 65.48\ \%$$

34.52 % — 27.27 % = 7.25 %
65.48 % — 51.72 % = 13.76 %
7.25 % × 44 = 3.19
13.76 % × 29 = 3.99
3.19 ÷ 2 = 1.595
3.99 ÷ 2 = 1.995
1.595 × 4 % = 6.38 %
1.995 × 5 % = 9.97 %
6.38 % + 9.97 % = 16.35 % (Tasa de reducción).

Ejemplo 2.º:

Afiliado de 49 años de edad, con los siguientes servicios sucesivos:

17 años de servicios comunes.
15 años de servicios privilegiados.

I. Tiempo mínimo de servicios de cada categoría que se exige para la jubilación anticipada:
30 años de servicios comunes ó 25 de privilegiados.

$$\frac{17}{30} = 56.67\ \%$$

$$\frac{15}{25} = 60.-\ \%$$

116.67 % (tiempo suficiente).

II. *a)* Tiempo de servicios de cada categoría que se exige a un afiliado de 49 años de edad para la jubilación ordinaria íntegra:
42 años de servicios comunes ó 27 de privilegiados.

$$\frac{17}{42} = 40.48\ \%$$

$$\frac{15}{27} = 55.55\ \%$$

96.03 %

$$\frac{40.48}{96.03} = 42.15\ \%$$

$$\frac{55.55}{96.03} = 57.85\ \%$$

42.15 % — 40.48 % = 1.67 %
57.85 % — 55.55 % = 2.30 %
1.67 % × 42 = 0.70
2.30 % × 27 = 0.62
0.70 ÷ 2 = 0.35
0.62 ÷ 2 = 0.31
0.35 × 4 % = 1.40 %
0.31 × 5 % = 1.55 %
1.40 % + 1.55 % = 2.95 % (Tasa de reducción)

Ejemplo 3.º:

Afiliado de 53 años de edad, con los siguientes servicios sucesivos:

25 años de servicios comunes.
5 años de servicios privilegiados.

I. Tiempo mínimo de servicios de cada categoría que se exige para la jubilación anticipada:
30 años de servicios comunes ó 25 de privilegiados.

$$\frac{25}{30} = 83.33\ \%$$

$$\frac{5}{25} = 20.-\ \%$$

103.33 % (tiempo suficiente).

II. *b)* Tiempo de servicios de cada categoría que se exige a un afiliado de 53 años de edad para la jubilación ordinaria íntegra:
34 años de servicios comunes ó 25 de privilegiados.

$$\frac{25}{34} = 73.53\ \%$$

$$\frac{5}{25} = 20.-\ \%$$

93.53 %

$$\frac{73.53}{93.53} = 78.62\ \%$$

78.62 % — 73.53 % = 5.09 %
5.09 % × 34 = 1.73
1.73 ÷ 2 = 0.865
0.865 × 4 % = 3.46 % (Tasa de reducción).

Anexo a los artículos 69 y 85

Jubilación Extraordinaria

Para acordarla se requiere determinar.

I. Si el afiliado tiene tiempo suficiente para poder jubilarse;
II. En caso afirmativo, el porciento de la jubilación que le corresponde.

Ejemplo:

Afiliado con los siguientes servicios sucesivos comunes y privilegiados:

13 años de servicios comunes.
6 años de servicios privilegiados.

I. Tiempo mínimo de servicios de cada categoría que se exige para la jubilación extraordinaria.
20 años de servicios comunes ó 17 privilegiados.

$$\frac{13}{20} = 65.-\ \%$$

$$\frac{6}{17} = 35.29\ \%$$

100.29 % (tiempo suficiente)

II. $13 \times 3.-\ \% = 39\ \%$
$6 \times 3.6\ \% = 21.6\ \%$
$39\ \% + 21.6 = 60.6\ \%$ (Porciento de la jubilación extraordinaria).

Publicación oficial de la Caja Nac. de Jubil. y Pens. Civiles.
Año 1942

Disposiciones del Decreto del Poder Ejecutivo del 7 de Agosto de 1942, ampliatorio del Art. 140 del Decreto Reglamentario de la Ley N.° 11.923.

Artículo 1.° — En los casos en que se hubiesen acordado beneficios sobre la base de cómputos cerrados en fecha anterior a la del decreto aprobatorio del beneficio o la de la cesación de servicios, la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles a petición del interesado, directamente y sin más trámite, ampliará los cómputos hasta la fecha del mencionado decreto o de la cesación en el servicio, si ésta fuera anterior a aquélla. Si de ello resultara que debe modificarse el monto del beneficio teniendo en cuenta las disposiciones en vigor, elevará al P. E. la resolución modificatoria correspondiente.

Los pedidos de actualización de cómputos se presentarán ante la Caja, pero si se presentaran ante el Ministerio de Hacienda, éste se los remitirá a aquélla a sus efectos.

Art. 2.° — La cédula de notificación que envía la Caja a los interesados deberá contener los siguientes datos: fecha del decreto a notificar; monto del haber acordado; monto y plazo de pago de los cargos de los artículos 8.° ó 9.° de la ley 11.923 si los hubiere; tiempo de los servicios computados; carácter (privilegiado o común) de los servicios computados; edad computada; monto de los descuentos por falta de edad en caso de jubilación anticipada.

Art. 3.° — Notificados los interesados en la cédula mencionada, la que se agregará en todos los casos al expediente, la fecha de esta notificación será la única válida a los efectos del artículo 140 del Decreto Reglamentario y disposiciones concordantes.

Art. 4.° — Los pedidos de reconsideración se presentarán ante el Ministerio de Hacienda de la Nación, pero si se hubiesen presentado ante la Caja, ésta los remitirá al Ministerio con el informe pertinente.

Art. 5.° — Comuníquese, etc.

CASTILLO.

CARLOS A. ACEVEDO.

Bandera y Escudo Nacionales

BANDERA Y ESCUDO NACIONALES

Sanción del Congreso Nacional, de 25 de julio de 1816, declarando a la bandera celeste y blanca distintivo de la Nación

Tucumán, 25 de julio de 1816.

Elevadas las Provincias Unidas en Sud América al rango de Nación después de la declaratoria solemne de su independencia, será su peculiar distintivo la bandera celeste y blanca, de que se ha usado hasta el presente y se usará en lo sucesivo exclusivamente en los Ejércitos, Buques y Fortalezas, en clase de bandera menor, ínterin, decretada al término de las presentes discusiones la forma de Gobierno más conveniente al territorio, se fijen conforme a ella los jeroglíficos de la Bandera Nacional Mayor.

Comuníquese a quienes corresponda para su publicación.

JUAN JOSÉ PASSO.
Diputado-Secretario.

FRANCISCO NARCISO DE LAPRIDA.
Diputado-Presidente.

Sanción del Congreso Nacional, de 25 de febrero de 1818, disponiendo que un sol de oro en el centro sea el distintivo de las banderas de guerra y de la banda del Jefe del Estado.

Buenos Aires, 25 de febrero de 1818.

Habiendo pedido el Supremo Director se declarase la divisa que deberían usar los generales en campaña, a consecuencia de lo acordado sobre el uso de las bandas en cuanto a los grandes oficiales de la Legión del Mérito de Chile, y asimismo las banderas que deben usarse, así en las plazas fuertes y buques de guerra de la Nación, como en los mercantes de la misma, por requerir ya las circunstancias que se diferencien, como es práctica en todas las naciones;

El Congreso Nacional—

RESUELVE:

1.° Que sirviendo para toda bandera nacional los dos colores blanco y azul en el modo y forma hasta ahora acostumbrada, sea distintivo peculiar de la bandera de guerra un sol pintado en medio de ella;

2.° Que todos los que por ordenanza, decreto o estatuto deban o puedan traer bandas, incluso los grandes oficiales de la Legión de Mérito de Chile, la usen del modo ordinario y acostumbrado, y porque la banda que sirve de divisa al Supremo Director del Estado debe diferenciarse de las otras, de suerte que jamás se confunda con ellas, y que sea bastante notable la diferencia, serán peculiares y privativos de ella los dos colores blanco y azul que la distinguen en la forma que hasta ahora se han usado, y en ella se pondrá un sol bordado de oro en la parte que cruza desde el hombro hasta el costado, de modo que caiga sobre el pecho y se haga bien visible.

José A. Eugenio de Elías.
Secretario.

Pedro Carrasco.
Presidente.

Ley N.° 8.220, de 22 de septiembre de 1911: Conmemoración del centenario del primer juramento y bendición de la Bandera Nacional.

Artículo 1.° — El Poder Ejecutivo procederá a conmemorar en la ciudad de Jujuy, el 25 de mayo de 1912, el centenario del primer juramento y bendición de la bandera argentina.

Art. 2.° — Al acto de la conmemoración concurrirá el ejército nacional y las escuelas públicas de la Capital y Territorios Federales, en la forma que determinen el Ministerio de Guerra y Consejo Nacional de Educación, respectivamente.

Art. 3.° — Destínase la suma de cuatrocientos mil pesos moneda nacional para el cumplimiento de la presente ley, la que se aplicará a los siguientes objetos:

a) Para la erección de un monumento a la bandera y al General Belgrano, su creador, el que se inaugurará el día del centenario, cien mil pesos;

b) Para la edición de las actas capitulares y demás documentos históricos existentes en el archivo de Jujuy, relativos a la guerra de la Independencia, cincuenta mil pesos;

c) Para la terminación y ampliación de la escuela provincial «Belgrano», cien mil pesos;

d) Para abonar las obras de restauración que se ejecutan en la iglesia matriz en la que se bendijo y juró la bandera y seguirlas hasta su terminación, cien mil pesos;

e) Para la comisión del centenario y pro monumento a Belgrano y la bandera de Jujuy con destino a los gastos que ocasione la conmemoración, cincuenta mil pesos.

Art. 4.° — La suma a que se refiere el artículo anterior se abonará de rentas generales, con imputación a la presente ley, hasta tanto se incluyan en la de presupuesto.

Art. 5.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 22 de septiembre de 1911.

Ley N.° 12.361, de 9 de junio de 1938, declarando «Día de la Bandera» el 20 de junio (1)

Buenos Aires, 9 de junio de 1938.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de

LEY:

Artículo 1.° — Declárase «Día de la Bandera» el 20 de junio, que será feriado en todo el territorio de la República.

Art. 2.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a ocho días del mes de junio del año mil novecientos treinta y ocho.

RAMÓN S. CASTILLO. — JUAN G. KÁYSER.
Gustavo Figueroa. — *Leonidas Zavalla Carbó.*

---

(1) Ver Circular N.° 43, de la Inspección General de Enseñanza, de 10 de junio de 1942, pág. 366.

Ley N.° 12.575, de enero 25 de 1939, sobre monumento a la Bandera Nacional en la ciudad de Rosario (1)

Artículo 1.° — Autorízase al Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de un millón de pesos moneda nacional ($ 1.000.000 moneda nacional), como contribución de la Nación al levantamiento de un monumento a la Bandera Nacional que deberá eregirse en la ciudad de Rosario en rememoración y perpetuación del lugar y sitio en que fué izada por vez primera la enseña patria.

Art. 2.° — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, se atenderán de rentas generales con imputación a la misma.

Art. 3.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 18 de enero de 1939.

---

(1) El 16 de diciembre de 1942 se suscribió en el Ministerio del Interior el contrato defintivo para la realización del Monumento a la Bandera a emplazarse en la ciudad de Rosario. Para su ejecución se fijó el plazo de 24 meses.

Decreto, de 19 de mayo de 1869, sobre uso de banderas argentinas y extranjeras en los días de regocijo nacional

Buenos Aires, 19 de mayo de 1869.

Acercándose un aniversario memorable para los argentinos; y

CONSIDERANDO:

1.° Que ha desaparecido el abuso que se notaba de izar banderas extranjeras en casas particulares en los días de regocijo nacional;

2.° Que no sólo es uso común a todos los pueblos el que sus habitantes, de cualquier nacionalidad que sean, levanten en conmemoraciones cívicas la bandera que las simboliza, como un testimonio de respeto y de la parte que toman en los grandes recuerdos del país que los hospeda; y, por último, que esta práctica es un tributo a la patria y a las tradiciones de su gloria,

El Presidente de la República—

HA ACORDADO Y DECRETA:

Artículo 1.° — La bandera argentina será izada en todos los edificios públicos y podrá serlo en las casas de los particulares en día de conmemoración patriótica, siendo el derecho de esta demostración cívica extensivo a los extranjeros que a ella quieran asociarse.

Art. 2.° — Se prohibe enarbolar en tierra las banderas de otros Estados, excepto en las casas de sus agentes diplomáticos y de sus cónsules.

Art. 3.° — En los ornatos de las fachadas y de los salones preparados para algún festejo público, podrán usarse indistintamente todas las banderas, debiendo la de la República Argentina ocupar el centro o las partes más altas de esos pabellones.

Art. 4.° — En el río y su rada se usarán las banderas según la práctica admitida en todas las naciones.

Art. 5.° — Comuníquese este decreto a los Gobernadores de las Provincias y Ministerio de Guerra y Marina, e insértese en el Registro Nacional.

SARMIENTO.
M. VARELA.

Decreto, de 25 de abril de 1884, reglamentando el uso de banderas

Buenos Aires, 25 de abril de 1884.

Siendo notorio el abuso que se ha introducido en la colocación de banderas por los particulares en los días de festividades públicas; y

CONSIDERANDO:

Que tanto la bandera nacional o de guerra con un sol al centro, decretada por el Congreso de 1818, como los pabellones de las naciones amigas, son de uso exclusivo de los gobiernos;

El Presidente de la República—

DECRETA:

Artículo 1.° — La bandera argentina con el sol, únicamente podrá izarse en los edificios públicos de la Nación, en las fortalezas, en los buques de la armada y en el ejército.

Art. 2.° — En las fiestas públicas y conmemoraciones patrióticas, los ciudadanos podrán hacer uso de la bandera argentina sin el sol, izándola en sus edificios, siendo extensivo este derecho a los extranjeros que quieran asociarse.

Art. 3.° — Queda prohibido enarbolar en tierra los pabellones de otros Estados, con excepción de las casas de los agentes diplomáticos o consulares.

Art. 4.° — En el ornato de fachadas de edificios o de locales preparados para festejos públicos podrán usarse indistintamente los colores de todas las banderas, y en los trofeos que se formen, la argentina ocupará siempre el centro.

Art. 5.° — En los ríos y radas de la República, con excepción de la bandera nacional de guerra, reservada a los buques de la armada, podrán usarse las banderas y señales que son de práctica en la marina.

Art. 6.° — Queda sin efecto toda otra disposición anterior que contradiga este decreto.

Art. 7.° — Comuníquese a los Ministerios del Interior, de Guerra y Marina e insértese en el Registro Nacional.

ROCA.

FRANCISCO J. ORTIZ.

Decreto, de 27 de agosto de 1884, imponiendo multas a contraventores del Decreto de abril 25 de 1884

Buenos Aires, 27 de agosto de 1884.

Visto lo informado por el Procurador General de la Nación,

El Presidente de la República—

DECRETA:

Artículo 1.° — Los infractores del Decreto del 25 de abril último pagarán una multa de ocho pesos por cada contravención, o en su defecto sufrirán cuatro días de arresto.

Art. 2.° — El Jefe de Policía de la Capital, y en las Provincias la autoridad que designen los gobernadores, harán efectivas estas multas.

Art. 3.° — Comuníquese al Ministerio del Interior para su circulación, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.

FRANCISCO J. ORTIZ.

Decreto, de 31 de diciembre de 1890, disponiendo el cese de la práctica oficial de enarbolar el pabellón nacional en los aniversarios cívicos, de regocijo y de duelo de las potencias extranjeras.

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1890.

Siendo la reciprocidad el principio universalmente admitido en las relaciones internacionales, y resultando de lo expuesto por el Ministro de la República, en Wáshington, de la nota que antecede del Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Chile, y demás antecedentes que se han tenido presentes, que no es de práctica en los Estados Unidos de América ni en las naciones de Europa, hacer para con las naciones americanas las demostraciones que entre nosotros se acostumbra en ciertos aniversarios cívicos, de regocijo o de duelo,

El Presidente de la República—

RESUELVE:

1.° Desde el 1.° de enero del año próximo cesará la práctica, hasta ahora seguida, de enarbolar el pabellón nacional en los aniversarios acostumbrados o por motivo de duelo en las naciones extranjeras.

2.° Comuníquese en respuesta la presente resolución al señor Ministro de Chile; diríjase al cuerpo diplomático la circular acordada; publíquese y dése al Registro Nacional.

PELLEGRINI.
EDUARDO COSTA.

Decreto, de 20 de marzo de 1902, prohibiendo a los institutos particulares de enseñanza, el uso del Escudo Nacional, como, asimismo, de la palabra «Nacional» en la denominación propia de cada uno de ellos (1).

Buenos Aires, 20 de marzo de 1902.

Visto el dictamen expedido por el señor Procurador General de la Nación, a propósito de la nota que se le dirigió el 2 de diciembre próximo pasado, consultándole si los institutos particulares acogidos a la Ley sobre Libertad de Enseñanza, tienen derecho para estampar en los diplomas o certificados que otorguen, el Escudo Nacional y otros atributos propios de los documentos oficiales, y sobre la incorporación del calificativo «Nacional» a la denominación propia de esos mismos establecimientos, y en general de todos los particulares de enseñanza, y

CONSIDERANDO:

1.° Que el Escudo Nacional como distintivo esencialmente oficial, sólo debe usarse en los documentos que proceden de los poderes públicos, y de ninguna manera, en aquellos que expiden instituciones particulares, cuya existencia y dirección dependen, inmediata y permanentemente de la acción privada, sin otra intervención, por parte de las autoridades nacionales, que la emanada de las disposiciones de la ley de 30 de setiembre de 1878 y decretos reglamentarios;

2.° Que está consagrado por sanción legislativa del año 1813, que el Escudo Nacional, es el sello que el Poder Ejecutivo debe usar en sus actos oficiales; y que, lejos de existir leyes o decretos que autoricen su empleo por los particulares, o su adaptación en documentos que no dimanen de los poderes públicos de la Nación, hay resoluciones que prohiben usarlo hasta a los agentes consulares, que ejercen cierta representación nacional en el extranjero;

3.° Que por lo que respecta a la incorporación del calificativo «Nacional» a la denominación propia de los establecimientos privados, si bien es cierto que no hay ley que la prohiba, surge el inconve-

---

(1) Ver decretos de 7 de noviembre de 1933 y 23 de mayo de 1934, en páginas 355 y 359, respectivamente.

niente de su interpretación precisa, por el alcance de su doble significado; pues resultaría ineficaz el calificativo por su implicancia, si la denominación de «Nacional», procediera sólo del hecho de hallarse ubicado en territorio de la Nación el establecimiento particular así designado, y perjudicial en cuanto pudiera inducir en error al público, haciéndole creer que institutos así denominados, se encuentran bajo la administración o dependencia oficial.

Por lo expuesto,

El Presidente de la República—

DECRETA:

Artículo 1.° — Prohíbese a los institutos particulares de enseñanza, incorporados o no, el uso del Escudo Nacional en los documentos que expidan o en cualquira otra forma, como, asimismo, el de la palabra «Nacional», en la denominación propia de cada uno de ellos.

Art. 2.° — A los institutos acogidos a la Ley sobre Libertad de Enseñanza y a los subvencionados que infrinjan lo dispuesto en el artículo anterior, les será retirada la incorporación, o suspendido el pago de la subvención, y si se tratara de establecimientos que no mantengan relaciones oficiales con el Gobierno se harán publicaciones en los diarios por el término de quince días para prevenir el error o engaño en que pudiera ser inducido el público.

Si efectuadas las publicaciones, el instituto objeto de ellas, persistiera en la infracción, serán repetidas anualmente mientras la causa subsista.

Art. 3.° — La Inspección General de Enseñanza Secundaria, queda encargada de vigilar el cumplimiento de este decreto, debiendo exigirlo desde luego a los establecimientos actualmente afectados por sus prohibiciones.

Art. 4.° — Comuníquese a quienes corresponda, publíquese, e insértese en el Registro Nacional.

ROCA.
J. V. González.

Acuerdo, de 24 de mayo de 1907, sobre uso del escudo y bandera nacionales

Buenos Aires, 24 de mayo de 1907

En vista de que, a pesar de disposiciones diversas adoptadas por algunas ramas de la administración, el escudo nacional figura en muchos casos con atributos y colores que no le corresponden, y

CONSIDERANDO:

Que el Poder Ejecutivo está en el deber de velar porque las insignias que simbolizan la soberanía de la República se reproduzcan con escrupulosa exactitud y de impedir su adulteración en forma arbitraria que desvirtúa su verdadero significado y sus antecedentes históricos,

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros- -,

DECRETA:

Artículo 1:°. — Todas las reparticiones dependientes del Gobierno Federal dispondrán que en los respectivos edificios públicos el escudo nacional se reproduzca en todos sus detalles, de conformidad estricta a los preceptos vigentes.

Art. 2.° — La bandera nacional será usada con los colores celeste y blanco, ordenados por la ley de 25 de julio de 1816 (1), sancionada por el Congreso de Tucumán, cuyos colores responden a los cuarteles superior e inferior del campo del escudo.

Art. 3.° — Señálase el término de noventa días para el cumplimiento de los artículos anteriores, bajo la responsabilidad directa de los jefes de las reparticiones administrativas.

Art. 4.° — A los fines expresados, la subsecretaría del Ministerio del Interior distribuirá modelos y explicaciones del escudo nacional.

Art. 5.° — Por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se circulará a las legaciones y consulados de la República en el extranjero, los mismos modelos y explicaciones del escudo.

Art. 6.° — Este Acuerdo será comunicado a los gobiernos de provincias a los efectos consiguientes.

FIGUEROA ALCORTA. — M. A. MONTES DE OCA. — E. S. ZEBALLOS. — E. LOBOS. — FEDERICO PINEDO. — R. M. FRAGA. — ONOFRE BETBEDER. — MIGUEL TEDÍN.

(1) Ver pág. 337.

Decreto, de 28 de abril de 1933, prohibiendo el uso, en reuniones, manifestaciones y desfiles, de otras banderas que la nacional y las de las naciones extranjeras amigas.

Buenos Aires, 28 de abril de 1933.

CONSIDERANDO:

Que desde la adopción y consagración de la bandera argentina como símbolo de la soberanía y enseña nacional, los gobiernos patrios han reglamentando en varias fechas su uso, así como el de las banderas extranjeras por los particulares residentes en el territorio de la Nación, dado que la ostentación de estas banderas significa un homenaje tributado por extranjeros a personas o sucesos extraños al país en que habitan y al amparo de cuyas leyes viven;

Que las reglamentaciones dictadas son con frecuencia olvidadas originando incidencias y alteraciones del orden y de la tranquilidad pública, que es deber del Poder Ejecutivo asegurar y garantir para todos los habitantes;

Que ya el gobierno del Estado de Buenos Aires, en decreto de 11 de mayo de 1860, y que lleva las firmas de Mitre y de Sarmiento, señaló que esa costumbre de los particulares residentes de atribuirse como un derecho el de izar banderas extranjeras celebrando acontecimientos políticos o militares de cada nación del mundo, importaba traer al país «sus cuestiones y pasiones hostiles con agravio de aquellos a quienes fueron adversos dichos sucesos, habiendo dado lugar a hechos perturbadores del reposo y de la tranquilidad de los habitantes y dejando presentir mayores en lo sucesivo, desde que es imposible responder de la prudencia y decoro de las masas de individuos exaltados por sentimientos que no todos participan»;

Que los dictados de previsión que inspiraron esa medida de gobierno han seguido determinando normas permanentes en las reglamentaciones subsiguientes, a partir del decreto de Sarmiento de fecha 19 de mayo de 1869 (1) sobre el uso de la bandera nacional, y las de naciones extranjeras con las cuales la República Argentina cultiva relaciones de amistad, exigiendo para los particulares residentes en el territorio autorización previa, y señalando el lugar que le corresponde a la bandera argentina;

(1) Ver pág. 342.

Que ante esas normas no derogadas no se debe permitir que sin esa autorización previa se ostenten en reuniones públicas, asambleas o desfiles, banderas o insignias que no correspondan a nación alguna y que al enarbolarlas como afirmación de propósitos atentatorios contra las instituciones del orden social puedan determinar reacciones combativas en los habitantes que no participan de tales ideologías;

Por lo expuesto,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.° — Queda prohibido en las reuniones públicas, asambleas, manifestaciones o desfiles el uso de otras banderas que la argentina y las de las naciones extranjeras con quienes la República mantiene relaciones de amistad.

Art. 2.° — Ese uso se ajustará a las reglamentaciones vigentes las cuales se mantienen.

Art. 3.° — Los gobiernos de provincias como agentes naturales del gobierno federal en sus respectivos territorios y las autoridades nacionales en todos los lugares sujetos a esta jurisdicción quedan encargados del cumplimiento del presente decreto.

Art. 4.° — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO.
LEOPOLDO MELO.

Acuerdo, de 8 de julio de 1933, prohibiendo izar a media asta la bandera nacional en los días patrios

Buenos Aires, 8 de julio de 1933.

CONSIDERANDO:

Que sobre todo otro honor u homenaje debe primar el que se debe a la patria en los días consagrados para su culto;

Que entre estos días especialmente consagrados se encuentran el 25 de Mayo en que se conmemora la iniciación del movimiento revolucionario generador de nuestra existencia como nación soberana y el 9 de Julio en que se celebra la proclamación por el augusto Congreso de Tucumán de nuestra independencia de toda otra autoridad o poder extraño y de nuestra condición de pueblo libre;

Que es tradición argentina que esos homenajes sean presididos por la bandera celeste y blanca que el mismo Congreso de Tucumán instituyó como símbolo y emblema de la nueva nación, bandera que condujeron victoriosa los ejércitos patrios para afirmar la libertad hasta en países vecinos y destinada, según expresiones que podrían llamarse litúrgicas y que encierran anhelos de todos los argentinos, a flamear por siempre a lo alto de los mástiles de nuestras naves, sobre nuestras murallas y fortalezas y a la cabeza de nuestras legiones;

Que dentro de esa tradición y cumplimiento de esos anhelos corresponde enarbolarla en los referidos aniversarios al tope de los mástiles o astas que le están destinados;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros—

DECRETA:

Artículo 1.° — En los días de las conmemoraciones patrias del 25 de Mayo y 9 de Julio la bandera nacional nunca se izará a

media asta, debiendo suspenderse durante ellos cualquier honor u homenaje que así lo determinara.

Art. 2.° — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO. — Leopoldo Melo. — Carlos Saavedra Lamas. — Alberto Hueyo. — Manuel M. de Iriondo. — Manuel A. Rodríguez. — Pedro S. Casal. — Manuel R. Alvarado.

Acuerdo, de 5 de noviembre de 1933, sobre uniformidad de los colores y distribución de los atributos de la Bandera y del Escudo Nacional.

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1933.

CONSIDERANDO:

Que no obstante los decretos dictados por el Poder Ejecutivo determinando, como especialmente lo hacen el de 9 de agosto de 1895 y el de 24 de mayo de 1907, la forma, colores y distribución de atributos de la bandera y del escudo nacional, no existe todavía uniformidad y perduran alteraciones como las relativas a los colores, campo y rayos del sol en la bandera, y los laureles y su cruzamiento en el escudo;

Que en homenaje a estos símbolos y a su representación y significado, es deber del Poder Ejecutivo hacer cesar toda adulteración restituyéndolos a la original pureza de acuerdo con los mandatos de las asambleas patrias que los crearon y las gloriosas consagraciones que recibieron dentro y fuera de los límites del territorio en heroicas cruzadas de libertad;

Que no ha resultado eficiente dejar librada esa restitución al criterio y autoridad de cada ministro o jefe de repartición, según lo disponía el citado decreto de 24 de mayo de 1907, dado que la discordancia no ha desaparecido, imponiéndose, entonces, como procedimiento más adecuado para llegar a la uniformidad dentro de la verdad, la designación de una comisión de ciudadanos calificados que, con la más escrupulosa exactitud, investigue y aconseje la genuina forma, colores y distribución de atributos de esos símbolos;

Por estos fundamentos,

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros—

DECRETA:

Artículo 1.° — Nómbrase una comisión *ad honorem* constituída por el general de división Francisco Medina y al vicealmirante Ismael Galíndez y el presidente del Museo Histórico Nacional, para

llenar las funciones establecidas en los anteriores considerandos.

Art. 2.° — Desde la aprobación por el Poder Ejecutivo del dictamen indicativo de la legítima y verdadera forma y atributos que corresponden a la bandera y al escudo nacional, se procederá a la adopción uniforme en todas las reparticiones de la Nación, estableciéndose para su cumplimiento el término de treinta días en el territorio de la República, y noventa días en las embajadas, legaciones y consulados.

Art. 3.° — Los respectivos Ministerios ordenarán todo lo conducente a ese cumplimiento, haciendo distribuir modelos de la verdadera bandera y escudo, e impartiendo las instrucciones que sean necesarias a tal fin.

Art. 4.° — Las infracciones serán castigadas con las sanciones establecidas por el artículo 1.° del decreto de fecha 25 de agosto de 1884.

Art. 5.° — Hágase conocer este decreto de los gobiernos de provincia a los efectos consiguientes.

Art. 6.° — Los gastos que origine la ejecución del presente decreto se imputarán al mismo.

Art. 7.° — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO. — Leopoldo Melo. — C. Saavedra Lamas. — Federico Pinedo. — M. M. de Iriondo. — M. A. Rodríguez. — P. S. Casal. — Luis Duhau. — M. R. Alvarado.

Acuerdo, de 7 de noviembre de 1933, reglamentando el uso de la bandera y escudo nacionales

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1933.

Vistas las comunicaciones informativas del indebido uso por particulares de la bandera de la Nación para discernir honores, y los antecedentes contenidos en varias presentaciones denunciando abusos cometidos por personas y asociaciones con relación al escudo nacional, el que aparece empleado en algunos casos hasta con fines de propaganda comercial; y siendo igualmente de conveniencia establecer las honras fúnebres a rendir a los ciudadanos o funcionarios, y

CONSIDERANDO:

Que el uso de los atributos de la soberanía nacional no puede dejarse librado al arbitrio de los habitantes, y que desde su institución por las primeras asambleas patrias se ha practicado como inquebrantable deber, velar por que esos símbolos representativos del pueblo argentino y de su gobierno, sólo puedan ostentarse por decisión de los poderes de la Nación. (Véanse decretos del 19 de mayo de 1869, de 25 de abril y 29 de agosto de 1884, del 9 de agosto de 1895, de 20 de marzo de 1902, de 24 de mayo de 1907, de 6 de agosto de 1915 y 29 de abril de 1933);

Que mientras el Honorable Congreso dicta la ley general reglamentaria de la facultad establecida en el inciso 11 del artículo 67 de la Constitución, corresponde al Poder Ejecutivo cuidar como lo viene haciendo desde hace más de medio siglo, de que se guarde el respeto debido a las insignias nacionales;

Que uno de los más encumbrados honores que pueda tributarse es el homenaje con la bandera y que no existe ley o decreto que faculte a los particulares, corporaciones, sociedades o cualquier otra persona o entidad a realizarlo ya sea inclinando la bandera en señal de saludo, enlutándola, izándola a media asta o extendiéndola para cubrir un féretro;

Que en cuanto a la formación de tropas del Ejército o de la Armada para rendir honores a militares o marinos, debe, asimismo, ajustarse a los servicios prestados dentro de la jerarquía y normas de disciplina;

Que tratándose de civiles, funcionarios o ex funcionarios, la tradición es que los honores con la bandera o con la formación de tropas se decreten en cada caso y siempre para estimular y consagrar la virtud, el patriotismo, la dignidad o el celo puesto en el servicio público;

Que con relación al escudo, tampoco puede permitirse que asociaciones, entidades o particulares, lo adopten como emblema para sus establecimientos o empresas, o lo estampen en los papeles para la correspondencia o cualquier otra clase de documentos y que dada la difusión de esta práctica que acusan las distintas presentaciones que se tienen a la vista, es necesario generalizar la prohibición contenida en el decreto de 20 de marzo de 1902 con relación a establecimientos particulares de enseñanza;

Que el uso de la bandera mayor o de guerra por embarcaciones del «Yacht Club» a que se refiere el artículo 5.° de la Ley 8.221 y decreto de 6 de agosto de 1915, como importa una excepción al voto del Congreso de 25 de febrero de 1818 (1), que creó esa bandera, es conveniente reglamentarlo y fijar restrictivamente el alcance de dicho permiso.

Por estos fundamentos,

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros—

DECRETA:

Artículo 1.° — Queda prohibido a los particulares, asociaciones o cualquier otra entidad, usar de la bandera nacional para rendir honores.

Art. 2.° — Se prohibe igualmente el uso del escudo de la Nación a los particulares, corporaciones o entidades privadas de cualquier naturaleza.

Art. 3.° — Mantiénese en todo su vigor los decretos de 19 de mayo de 1869, 25 de abril y 29 de agosto de 1884, 9 de agosto de 1895, 20 de marzo de 1902, 24 de mayo de 1907, 6 de agosto de 1915 y 29 de abril de 1933 (2), y demás disposiciones vigentes sobre el uso de la bandera y el escudo nacional en cuanto no se modifiquen expresamente por el presente.

---

(1) Ver pág. 338.
(2) Ver en páginas anteriores texto de decretos que aquí se mencionan.

Art. 4.° — La autorización dada al «Yacht Club» por el artículo 5.° de la Ley 8.221, para que las embarcaciones inscriptas puedan enarbolar la bandera de guerra, queda limitada a la navegación de los ríos Paraná y Uruguay y sus afluentes, río de la Plata entre los cabos Santa María y San Antonio y costa atlántica de la República.

Art. 5.° — Los honores con la bandera nacional y formación de tropas mientras que el Congreso de la Nación dicte la ley correspondiente, sólo podrán ser ordenados por el Poder Ejecutivo dentro de las normas que a continuación se establecen.

Art. 6.° — La bandera nacional no se izará a media asta sino por fallecimiento del Presidente o Vicepresidente de la Nación, ministros del Poder Ejecutivo, presidente provisorio del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Corte Suprema, gobernadores o vices de provincias, presidentes de las cámaras legislativas y del tribunal superior de éstas y de aquellos ciudadanos que por sus descollantes méritos y calificados servicios se declaren por decreto acreedores a esa honra. En los buques de guerra se observará lo establecido por el ceremonial internacional y convenciones.

Art. 7.° — Las tropas del Ejército o de la Armada formarán para rendir honores fúnebres en los casos enunciados en el artículo anterior y, además, en los siguientes:

a) Fallecimiento de embajadores, ministros diplomáticos, encargados de negocios y agregados militares o navales de naciones amigas acreditados ante el gobierno argentino;

b) Ministros de Guerra y Marina, y militares en los casos previstos en los respectivos reglamentos del Ejército y Armada.

Art. 8.° — En el acto del sepelio únicamente se harán salvas de artillería en el caso de fallecimiento del Presidente de la Nación, ministros de Guerra y Marina, generales y almirantes cualquiera sea su situación de revista.

Art. 9.° — Podrán incluirse entre los honores, el de que la bandera de la Nación cubra la caja en que se guardan los restos

mortales en los casos enunciados en el artículo 6.° y en los que determinen los reglamentos del Ejército y de la Marina.

Art. 10. — Fuera de los casos contemplados en el presente decreto, el Poder Ejecutivo puede discernir honores fúnebres nombrando comisiones para que lo representen en el acto del sepelio.

Art. 11. — Tratándose de funcionarios provinciales, los honores se rendirán dentro de la respectiva jurisdicción territorial.

Art. 12. — Los Ministerios de Guerra y Marina modificarán los respectivos reglamentos para ajustarlos a las disposiciones del presente decreto.

Art. 13. — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO. — Leopoldo Melo. — Carlos Saavedra Lamas. — Federico Pinedo. — Manuel M. de Iriondo. — Manuel A. Rodríguez. — Pedro S. Casal. — Manuel R. Alvarado. — Luis Duhau.

Decreto, de 23 de mayo de 1934, prohibiendo el uso de la palabra «Nacional» por entidades particulares

Buenos Aires, 23 de mayo de 1934.

Vistas las actuaciones producidas de las que resulta el uso frecuente de la palabra «nacional», por asociaciones privadas de carácter comercial, deportivas, culturales o de beneficencia, en forma que puede determinar el error de considerar como entidades administrativas o centros e institutos oficiales de la nación a sociedades o establecimientos particulares, y

CONSIDERANDO:

1.° Que la palabra «nacional» en la genuina acepción, significa «perteneciente o relativo a una nación», y dentro de ese significado esa expresión debe ser empleada únicamente por el Estado para prevenir que la acción privada con fines comerciales o de cualquier otra naturaleza lo adopte para comprender sus actividades induciendo con ello en error al público y haciéndole creer que se trata de establecimientos que forman parte de la administración pública;

2.° Que el Honorable Congreso como el Poder Ejecutivo en distintos actos han definido y caracterizado un criterio concordante de cuidar e impedir que la palabra «nacional», como expresión de lo que pertenece a la nación, se use indebidamente por particulares lo que se comprueba en normas contenidas en leyes y decretos. Así la Ley N.° 3.975, sobre marcas de fábrica, de comercio y de agricultura en su artículo 3.°, inciso 1.°, no admite como tales «las letras palabras, nombres o distintivos que use o deba usar la nación»; en la N.° 11.275, sobre identificación de mercaderías al ser sancionada se cambió la expresión «industria nacional», con que había sido proyectada por la de «industria argentina»; por el decreto del Poder Ejecutivo de 20 de marzo de 1902, está prohibido el uso del calificativo «nacional», en la documentación de los establecimientos particulares de enseñanza, aunque se encuentren incorporados a los oficiales; por el de junio 2 de 1908, se prohibió a la sociedad anónima «Banco Nacional Popular» el empleo de la palabra «nacional» fijándole treinta días para que la retirara de su denominación; por el de 27 de abril de 1923, en el art. 17, se le señaló como norma permanente a la Inspección General de Justicia la de que cuidara

de no autorizar sociedades con nombre que pudieran confundirse o inducir en error con relación a instituciones o reparticiones del Estado o garantidas por éste, y finalmente por el artículo 2.° del decreto de 7 de noviembre de 1933, se ha prohibido a los particulares, corporaciones o entidades privadas el uso del escudo o emblemas de la nación;

3.° Que no obstante los actos de gobierno recordados, se continúa en esa práctica viciosa y abusiva por entidades particulares de carácter comercial, cultural, económico y deportivo o de beneficencia, pretendiendo vincular su conducta al hecho de que los institutos o establecimientos se encuentran situados dentro del territorio de la nación o reciban subsidios o ayuda del gobierno nacional;

4.° Que «dentro del deber» de velar por el respeto del nombre de la nación y de sus emblemas es conveniente dictar normas generales que eviten consultas y resoluciones en casos determinados;

Por todo ello,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.° — Queda prohibido a toda asociación o entidad particular el uso de la expresión «nacional» en su nombre o denominación y en los documentos que expida o, con cualquier otro motivo.

Art. 2.° — Fíjase el término de treinta días, para que supriman esa expresión las entidades o asociaciones privadas que lo tuvieran o para que inicien los trámites necesarios a ese fin, pasado el cual se procederá al retiro de la autorización a los remisos.

Art. 3.° — Encárgase a la Inspección General de Justicia la fiscalización del cumplimiento de este decreto, el que deberá ser refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior y Justicia e Instrucción Pública.

Art. 4.° — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO. — Leopoldo Melo. — Manuel M. de Iriondo.

Resolución Ministerial, de 22 de junio de 1936, sobre uso de la Bandera Nacional en los establecimientos de enseñanza dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

Buenos Aires, 22 de junio de 1936.

Vista la necesidad y conveniencia de uniformar las insignias con que asisten a los actos públicos los establecimientos de educación dependientes de este Ministerio,

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública—

RESUELVE:

1.° La Bandera Nacional para uso de los establecimientos de educación dependientes de este Ministerio, a emplearse en actos públicos externos y desfiles, tendrá las siguientes características reglamentarias:

COLOR. — Azul celeste y blanco, como lo dispone la ley de creación.

MATERIAL. — De tela, gro de seda en paños dobles, de confección lisa, sin fleco alguno en su contorno, ni emblemas. Llevará como única inscripción el nombre del establecimiento y la localidad en que funciona, todo ello bordado en letras de oro mayúsculas de seis centímetros de altura.

DIMENSIONES. — La Bandera tendrá un metro y cuarenta de largo por noventa centímetros de ancho, correspondiendo a cada paño treinta centímetros. En el lado destinado a la unión con el asta, llevará un refuerzo de tela resistente, a la que estarán cosidas cada treinta centímetros dos cintas de tejido fuerte de 15 centímetros de largo, cada una, color blanco, destinadas a unir la bandera con el asta.

El ASTA. — Será de madera de «guayaiby» u otra similar, lustrada color natural con una altura de dos metros y un diámetro de tres y medio centímetros. Llevará cuatro grampas colocadas a treinta centímetros de distancia entre cada una en las que irán las cintas anteriormente indicadas.

La CORBATA. — Será de iguales colores que la bandera, de cincuenta centímetros de largo por diez de ancho, y llevará como ornato fleco de gusanillo, de siete centímetros de ancho.

El TAHALÍ. — Será de terciopelo de seda con iguales colores que la bandera, de diez centímetros de ancho.

La MOHARRA. — Será de acero de veinte centímetros de largo, llevando como base una media luna, que medirá de vértice a vértice doce centímetros.

El REGATÓN. — Será de acero, de diez centímetros de largo.

2.° La Inspección General de Enseñanza dispondrá que las Direcciones de los establecimientos de educación, con el concurso de las asociaciones cooperadoras, arbitren la confección de la respectiva bandera como acto de solidaridad patriótica y de carácter docente al mismo tiempo, ajustándose al modelo que la Inspección hará conocer con anterioridad.

3.° La Dirección de Administración proveerá a los establecimientos las astas con su moharra y regatón especificados anteriormente.

4.° De acuerdo con esta resolución las nuevas banderas deberán estar confeccionadas antes del día 9 del próximo mes de julio.

5.° A sus efectos comuníquese a la Inspección General de Enseñanza, anótese y archívese.

RAMÓN S. CASTILLO.

Decreto, de 16 de diciembre de 1937, prohibiendo el padrinazgo de la Bandera Nacional

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1937

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a una tradición se realiza en los establecimientos de enseñanza, primaria, media y superior, así como en la de las restantes reparticiones públicas e instituciones privadas, la bendición de las banderas de la Patria, lo que suele dar lugar a brillantes ceremonias tendientes a poner de manifiesto el significado trascendental del acto;

Que entre tales ceremonias ha cundido la de apadrinar la bandera, acto éste que, malgrado la prestigiosa elección que ha sabido hacerse en las personas llamadas a realizarlo, no agrega ningún elemento más a cuantos encierra el hecho singular de que la bandera, símbolo de nuestras glorias pasadas y encarnación de los altos destinos de la Patria, sea bendecida en el nombre de Dios y de nuestros padres,con lo que quedan así perfectamente conjugados los ideales de Dios y de la Patria, sustantivos de nacionalidad;

Que así lo ha expresado en una reciente ceremonia escolar el presidente de la Nación, quien se ha limitado a permanecer al lado de la Bandera en los actos de su bendición sin ánimo de apadrinarla realmente por entender que el hecho de bendecir la bandera imprime al acto, con prescindencia de todo otro género de demostraciones,una significación augusta;

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.° — Prohíbese el padrinazgo de la Bandera Nacional que sea entregada a los establecimientos de enseñanza primaria, media o superior así como a las reparticiones públicas e instituciones privadas.

Art. 2.° — Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO.

JORGE DE LA TORRE.

Decreto N.° 120.439.

Resolución Ministerial, de 27 de diciembre de 1938, autorizando a los Rectores y Directores de los establecimientos de enseñanza del Ministerio para disponer que la Bandera Nacional sea izada todos los días al iniciarse las clases y arriada al término de la labor diaria.

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1938.

Vistas estas actuaciones sometiendo a la consideración del Ministerio se adopte como práctica cotidiana, en los establecimientos de enseñanza, la costumbre de que la enseña Patria permanezca izada mientras dure el desarrollo de las clases, y atento lo informado por la Inspección General de Enseñanza,

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública—

RESUELVE:

Autorizar a los señores Rectores y Directores de los establecimientos de enseñanza dependientes de este Ministerio para disponer que la bandera nacional sea izada todos los días al iniciarse las clases y arriada al término de la labor diaria.

Pase a la Inspección General de Enseñanza para su conocimiento y demás efectos; cumplido, vuelva para su anotación y archivo.

JORGE E. COLL.

Resolución, de 6 de junio de 1939, fijando normas para el mejor cumplimiento de la Resolución anterior

Buenos Aires, 6 de junio de 1939.

CONSIDERANDO:

Que por resolución de fecha 27 de diciembre último se autorizó a los señores Rectores y Directores de los establecimientos de enseñanza dependientes de este Ministerio para disponer que la bandera nacional sea izada todos los días al iniciarse las clases y arriada al término de la labor diaria;

Que conviene fijar normas encaminadas al mejor cumplimiento de dicha disposición, no sólo para darle uniformidad, sino también para imprimirle la significación patriótica y educativa que la inspiró;

Por ello, y de acuerdo con lo dictaminado por la Inspección General de Enseñanza,

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública—

RESUELVE:

1.° Las direcciones de los establecimientos designarán cada mes un grupo de seis alumnos, entre los de concepto sobresaliente por su contracción al estudio y conducta, para que, diariamente, tenga a su cargo la realización de la ceremonia. Uno de los estudiantes se encargará de izar y arriar la bandera, y los restantes constituirán la guardia de honor.

2.° Los señores Directores y Rectores adoptarán las medidas pertinentes para que el cumplimiento de esta disposición no altere en lo más mínimo el desenvolvimiento normal de la labor escolar.

3.° Comuníquese, etc.

JORGE E. COLL.

Circular N.° 43, de la Inspección General de Enseñanza, de 10 de junio de 1942, transcribiendo la Resolución Ministerial de la misma fecha, sobre conmemoración del «Día de la Bandera» y disponiendo la forma en que se realizarán las ceremonias en los establecimientos oficiales de enseñanza secundaria.

Buenos Aires, 10 de junio de 1942.

(Rector
Señor (
(Director

S./D.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle la Resolución Ministerial dictada en la fecha, que se transcribe a continuación. Dice así: «CONSIDERANDO: Que el 20 de junio ha sido de«clarado «Día de la Bandera» por Ley N.° 12.361 de 9 de junio «de 1938 (1); Que, en consecuencia procede disponer su celebración «en todos los colegios y escuelas dependientes de este Departamento; «Que, por otra parte, conviene que esa celebración se realice dentro «de los locales de los referidos establecimientos a fin de evitar los «perjuicios que, para la salud de los educandos, suelen ocasionar en «esta época del año las manifestaciones públicas efectuadas al aire «libre, *El Ministro de Justicia e Instrucción Pública,* RESUELVE: «1.° — El «Día de la Bandera» se conmemorará en todos los insti«tutos de enseñanza dependientes de este Ministerio, con un acto pa«triótico que se realizará dentro del edificio de cada establecimiento. «2.° — La Inspección General de Enseñanza impartirá las instruc«ciones pertinentes. 3.° — Comuníquese, anótese y pase a la Ins«pección General de Enseñanza a sus efectos. — ROTHE».

Los señores rectores y directores, en cumplimiento de la expresada Resolución, adoptarán las medidas que correspondan a fin de que el acto a que se hace referencia se realice en las condiciones indicadas precedentemente. En dicho acto se desarrollará el siguiente programa:

Ejecución y canto del Himno Nacional;

Izamiento de la Bandera;

Breve alocución a cargo de un miembro del personal directivo o docente.

---

(1) Ver pág. 340.

La ceremonia se iniciará a las 9, salvo en los establecimientos que funcionan por la tarde en el local de otro instituto, en cuyo caso empezará a las 10 y 30.

Saludo a Ud. atentamente.

FLORENCIO D. JAIME.
Inspector General de Enseñanza.

Decreto N.° 138.070, de 15 de diciembre de 1942, disponiendo que en los edificios declarados Monumentos Históricos, dependientes del dominio público de la Nación, de las provincias o de las municipalidades, se izará la bandera nacional con sol los días domingos y feriados nacionales.

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1942.

Visto este expediente por el que el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública solicita se dicte la medida reglamentaria propuesta por la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, para que en los edificios públicos declarados monumentos históricos dependientes del dominio público de la Nación, de las provincias y municipalidades, iglesias o capillas declaradas monumentos nacionales, sea izada la bandera nacional los domingos y días festivos; y

CONSIDERANDO:

Que si bien de acuerdo con las prácticas en vigor correspondería izar todos los días la bandera nacional, la circunstancia especial del gran número de edificios declarados monumentos históricos obligaría a la provisión de banderas y su administración y vigilancia permanente en todo el territorio de la República, lo que puede presentar inconvenientes de orden económico y administrativo, determina a limitar los días en que la bandera debe ser izada en dichos lugares;

Que los argumentos de orden patriótico expuestos por dicha Comisión deben ser tenidos en cuenta de manera preferente, dado que la conveniencia de la difusión de las insignias patrias está fuera de dudas, tanto más en países que como el nuestro, cosmopolita por excelencia, es necesario difundir los emblemas y signos exteriores de la nacionalidad;

Por ello y atento las informaciones producidas,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.° — En los edificios declarados Monumentos Históricos, dependientes del dominio público de la Nación, de las

provincias o de las municipalidades, se izará la bandera nacional con sol los días domingos y feriados nacionales.

Art. 2.° — El presente decreto será refrendado por los señores ministros secretarios de Estado en los departamentos de Interior, Relaciones Exteriores y Culto y Justicia e Instrucción Pública.

Art. 3.° — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

CASTILLO. — MIGUEL J. CULACIATI. — GUILLERMO ROTHE. — E. RUIZ GUIÑAZÚ.

Antecedentes ilustrativos contenidos en el Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, de fecha 25 de agosto de 1942, sobre estabilidad de una versión única del Himno Nacional y fijando el carácter inalterable de los Símbolos Patrios.

Con fines ilustrativos, dado que aun no ha obtenido sanción del Honorable Congreso, se transcribe el siguiente Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, de 25 de agosto de 1942:

MENSAJE

Buenos Aires, 25 de agosto de 1942.

Al Honorable Congreso de la Nación:

La Academia Nacional de la Historia ha solicitado del Poder Ejecutivo asuma la iniciativa de propiciar en un proyecto de ley la estabilidad de una versión única del Himno Nacional y la determinación del carácter inalterable de los Símbolos Patrios. Con ese propósito, dicho organismo, tomando como base la sugestión de uno de sus miembros, encomendó a una comisión especial la tarea de examinar los antecedentes relativos a uno y otro asunto, la cual produjo luego un dictamen, el que tratado en el transcurso de dos sesiones de la Academia resultó aprobado por unanimidad de votos.

Las cuestiones fundamentales referentes a la versión auténtica del Himno, a los atributos del escudo y a las características de la bandera, fueron así dilucidadas en sus aspectos generales y debatidas minuciosamente, según lo ha hecho saber la Academia al Poder Ejecutivo, a la luz de numerosos testimonios que remontan la investigación a sus mismos orígenes históricos.

El Poder Ejecutivo viene ahora a patrocinar ante Vuestra Honorabilidad la sanción del proyecto de ley elaborado por el organismo del Estado competente para atender en la materia, en la convicción de que ha llegado el momento de que, por la vía legislativa se ponga término a largos debates planteados con motivo de la verdadera anarquía que existe para la ejecución del Himno Nacional y por la necesidad de que la enseña patria y el escudo, confeccionados a menudo de acuerdo a normas diferentes para el Ejército, la Marina, las escuelas o las reparticiones nacionales, se ajuste definitivamente a un patrón único.

La sola enunciación del propósito que anima al Poder Ejecutivo y que ha sido, por lo demás, constante preocupación del Honorable Congreso, de la prensa del país y de los más diversos sectores de la opinión pública, exime de mayor abundamiento sobre la oportunidad y fundamentos del proyecto de ley adjunto.

Como bien lo ha manifestado la Academia Nacional de la Historia al requerir el patrocinio del Poder Ejecutivo para su iniciativa «la fijación y el carácter inalterable de los símbolos patrios concretados en una ley, es una aspiración nacional».

Conjuntamente con el aludido proyecto se acompañan notas y un apéndice confeccionados por la Academia Nacional de la Historia, que contienen las referencias necesarias ilustrativas de los motivos determinantes que ha tenido en vista esa corporación para aconsejar al Gobierno en la materia.

Por el mismo proyecto se determina además que obtenida la sanción de la ley, el Poder Ejecutivo reglamentará por decreto el uso de los Símbolos Patrios y que los ejemplares tipo —cuyos diseños también se acompañan al presente mensaje— se depositarán en el Cabildo que ha sido recientemente convertido en museo de la Revolución de Mayo.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

CASTILLO.
GUILLERMO ROTHE.

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de—

LEY:

Artículo 1.° — La Bandera Argentina es blanca y azul celeste, formada por tres franjas horizontales, dos de ellas azul-celeste y una blanca en el medio. En la Bandera Mayor o de guerra, se reproducirá en el centro de la faja blanca el sol figurado en la moneda de ocho escudos y de ocho reales de 1813, con los 32 rayos flamígeros y

rectos, colocados alternativamente y en la misma posición que se observa en esas monedas. La Bandera menor no llevará el sol de la Bandera mayor, y la banda del Presidente de la Nación ostentará los colores y el sol de la Bandera mayor.

Art. 2.° — En lo sucesivo se adoptará como representación del Escudo Argentino la reproducción del sello que usó la Asamblea General Constituyente, el mismo que ésta ordenó que el Poder Ejecutivo usase, en sesión del 12 de mayo de 1813, para sus diplomas y contestaciones oficiales.

Art. 3.° — Adóptase como forma auténtica del Himno Argentino la versión editada por Esnaola en 1860, con el título: «Himno Nacional Argentino. Música del maestro Blas Parera», la que en adelante será la única autorizada para ejecutarse en los actos oficiales, ceremonias públicas y privadas, por las bandas militares y en los establecimientos de enseñanza del país. El Poder Ejecutivo mandará imprimir el texto de Esnaola para su difusión gratuita y tomará las medidas necesarias para prohibir la explotación comercial del Himno Nacional Argentino.

Art. 4.° — El Poder Ejecutivo reglamentará por decreto el uso de los símbolos patrios, de acuerdo con esta ley y los antecedentes históricos.

Art. 5.° — El Poder Ejecutivo mandará confeccionar un ejemplar tipo de bandera y escudo y una versión auténtica del himno, documentos que servirán en lo sucesivo de modelo para las reproducciones y que se depositarán en custodia en el Cabildo de Buenos Aires.

Art. 6.° — El Poder Ejecutivo dispondrá la impresión en folleto de las notas y el apéndice preparados por la Academia Nacional de la Historia, así como las reproducciones facsimilares del Escudo y la Bandera.

GUILLERMO ROTHE.

Anteproyecto de ley elevado por la Academia Nacional de la Historia, anexo al Mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso, de 25 de agosto de 1942.

Artículo 1.° — La Bandera Argentina es blanca y azul-celeste, como fué creada por Belgrano (1), formada por tres franjas horizontales, dos de ellas azul-celeste y una blanca en el medio. En la Bandera mayor o de guerra, se reproduce en el centro de la faja blanca, el sol de la moneda de ocho escudos y de ocho reales de 1813,

---

(1) Debe recordarse que la Ley de 1816 fijaba para la bandera nacional los colores celeste y blanco. Por Ley de 1818, se establece para la misma los colores blanco y azul. En la acuarela del Fuerte de Buenos Aires pintada por Vidal en 1816, se ve flamear la bandera argentina con los colores azul-celeste y blanco. La costumbre ha preferido este color azul-celeste, que es el adoptado por Mitre en el veredicto de fecha 25 de abril de 1878 —notable desde el punto de vista general— que se transcribe, fundado en la tradición primitiva, de la Ley, la Historia, y la idea política que simboliza. Dice así el dictamen de Mitre:

«Buenos Aires, abril 25 de 1878. La historia de los colores de la bandera argentina «es cuanto a sus orígenes, antecedentes, disposiciones legales, símbolos y usos y abusos «que algunas veces la han modificado, están comprendidas en los siguientes puntos:

«1.° — *Origen de los colores:* Los colores de la bandera argentina como distintivo «popular, aparecieron por la primera vez en ocasión de las invasiones inglesas al Río «de la Plata en 1806, en que los ciudadanos armados los adoptaron en sus uniformes. «Los Patricios —el primer cuerpo de milicia urbana formada de nativos que se cono- «ció en estos países— usaron pantalones blancos, chaqueta azul, penacho blanco, «con punta *azul-celeste* en sus sombreros, por cuya razón eran conocidos vulgarmente «con el nombre de *Gaviotas*. Estas aves, como se sabe, tienen el cuerpo blanco y las «alas así como la extremidad de la cabeza de un color ceniciento claro que tira al «*celeste*. Créese que fué adoptado este color en señal de fidelidad al Rey de España «Carlos IV que usaba la banda *celeste* de la Orden de Carlos III, como puede verse en «sus retratos al óleo que existen en el Museo. La Cruz de esta Orden, como puede «verse en el Atlas Universal de Bouillet, es esmaltado de blanco y celeste, colores de «la Inmaculada Concepción de la Virgen, según el simbolismo de la Iglesia. Sea cual «fuere el significado primitivo que a estos colores se diese en Buenos Aires, desde «entonces ellos fueron adoptados como colores de partido y empezaron a popularizarse «entre los nativos.

«2.o — *Consagración* de los colores. Los colores *celeste* y *blanco* popularizados por «los «Patricios», fueron los mismos que los patriotas enarbolaron en sus sombreros en la «Revolución del 25 de Mayo de 1810, según puede verse en el Capítulo VIII de la «Historia de Belgrano». Desde entonces el celeste y blanco fué distintivo de los «revolucionarios, que lo adoptaron espontáneamente como escarapela, extendiéndose su «uso hasta en los ejércitos, aunque no uniformemente.

«3.° — *Escarapela nacional.* El 13 de febrero de 1812, cuando aún flameaba la «Bandera Española en la Casa de Gobierno de la Revolución, el Gobierno, a propuesta «del General Belgrano, decretó lo siguiente: «Sea la Escarapela de las Provincias «Unidas del Río de la Plata de color blanco y azul celeste y mandó que las usaran sus «ejércitos según puede verse en las páginas 392 y 395 de la historia citada en su «tomo 1.° y en los documentos justificativos del mismo, página 599.

«4.° — *Primera Bandera.* Por los mismos documentos antes señalados se ve, que la «*primera bandera argentina* que en la misma época enarboló el general Belgrano en «el Rosario, fué *blanca* y *celeste* y conforme a los colores de la escarapela nacional «según lo declara él mismo. Esta fué la misma bandera que en el mismo año de 1812 «juró el Ejército del Alto Perú en Jujuy donde aún se conserva con sus primitivos colores «apagados por el tiempo. Esta fué la misma bandera inventada por Belgrano, que su «ejército juró en el Río Pasaje 1813, por lo cual dicho río lleva hoy por Ley del Congreso, «el nombre de *Río del Juramento*. Esta bandera fué también la que flameó por primera «vez en una batalla el 29 de febrero de 1813 en la memorable victoria de Salta, adop- «tándola desde entonces los ejércitos nacionales como enseña de independencia y de pelea.

«5.° — *Corolario.* La Asamblea Constituyente de 1813, que fué el primer cuerpo «representativo que reasumió la soberanía popular, decretó que los Brigadieres Ge- «nerales usasen una faja *blanca* y *celeste*, tomando estos colores de la bandera en

con los 32 rayos flamígeros y rectos, colocados alternativamente y en la misma posición que se observa en esas monedas. La Bandera menor no lleva el sol de la Bandera mayor (2). La Banda del

---

«uso, como símbolo del más elevado mando en la milicia nacional (Véase el «Redactor «de la Asamblea», N.º 8).

«6.º — *Primeras y únicas leyes.* El Congreso de Tucumán que declaró la Indepen-«dencia argentina el 9 de julio de 1816, decretó dieciséis días después, el 25 de julio «del mismo año, lo siguiente: «Elevadas las Provincias Unidas de Sud América al rango «de una Nación, después de la declaración de su Independencia, será su peculiar dis-«tintivo la Bandera *celeste* y *blanca,* que se ha usado hasta el presente y se usará «exclusivamente en lo sucesivo en los ejércitos, buques y fortalezas. Esta ley es la «primera que se dictó sobre la materia, y puede decirse que la única, pues nunca «ha sido derogada. (Puede verse en el N.º 10 del Redactor del Congreso). Debe ad-«vertirse sin embargo, que por Ley de 25 de febrero de 1818, se dice que los colores «de la *Bandera nacional de guerra,* serán *blanco* y *azul,* pero agrega: «en el modo «y forma hasta ahora acostumbrada», lo que deja en todo su vigor la anterior que «siendo la regla le sirve de comentario. Esta ley fué la que agregó el sol a la bandera «argentina para distinguirla de la bandera mercante. (Puede verse el N.º 62 de la «Gazeta de Buenos Aires» de 18 de mayo de 1818).

«7.º — *Bandera de los Andes.* Con arreglo a las leyes del Congreso, fué de color «*celeste* y *blanco* la bandera con que el ejército de los Andes al mando del general «San Martín atravesó aquellas montañas, triunfando con ella en Chacabuco y Maipú. «Del mismo color fué la que los últimos restos de ese ejército trajeron a la patria: «después de libertar con ella a Chile y el Perú.

«Estas dos banderas se conservan: la una en Buenos Aires, y la otra en Mendoza, «atestiguando con sus tintas pálidas, cuáles fueron sus primitivos colores.

«8.º — *Usos y abusos.* Por ser el *azul-celeste* un color que se disipa fácilmente con «el agua y la luz y se confunde a la distancia con el blanco,, y a efectos de que se «distinguiese mejor en las batallas y en el mar, se ha acostumbrado a veces a hacer «uso del color azul; pero sin que esto alterase el texto de la Ley, ni dejase de usarse «generalmente el celeste en toda su pureza. Rosas obscureció aún más esos colores, «convirtiéndolos en azul obscuro «dark blue» y adulteró la bandera agregándole cuatro «bonetes colorados en los ángulos por haber adoptado sus enemigos los unitarios el «celeste de la bandera patria, como distintivo de partido y de guerra. Es Rosas el «autor de la especie desautorizada de que el celeste no es el legítimo color nacional.

«9.º — *Simbolismo.* Además de la tradición y de la Ley, el simbolismo de la misma «bandera justifica la autenticidad de sus colores. La bandera argentina es el reflejo «del cielo patrio, tal como lo contemplamos en sus serenos días del mes de mayo; «nubes blancas en fondo del color del cielo (celeste) con el sol de la libertad bri-«llando en medio de ellas. Hemos visto ya que en el ritual de la Iglesia y en las «órdenes de caballería, los colores celeste y banco significan pureza, por lo que los «pintores los usan siempre para vestir los ángeles y las vírgenes. En la heráldica, «aun cuando en los cuarteles se use el azul, su color típico es el del zafiro, que es «cerúleo o azul claro (sky blue). Por eso, Milton dice en su «Paraíso»: The blue fir-«mament» en contraposición del *dark blue* o azul obscuro, distintivo del espíritu de «las tinieblas, de donde vienen sin duda las *blues devils* o diablos azules de los in-«gleses, y tal vez algunos de sus *blues books,* que los hay endiablados. Webster, en «su «American Dictionary» que hace autoridad en el mundo, define el azul casi con «las palabras de Milton: «Blue. El color del claro cielo, o un color que se le asemeja». «En el espectro solar de Newton y en las imágenes de fuentes luminosas que repro-«duce el espectroscopio, es el color azul claro como el del cielo el que se distingue «en toda su pureza; de modo que, hasta la ciencia, demostrando cual es el color «típico de la serie, viene también a confirmar el simbolismo. Por eso ha dicho con «mucha propiedad histórica y científica, don Juan María Gutiérrez en sus estrofas a «la bandera de Mayo:

«*Al cielo arrebataron nuestros gigantes padres,*
«*El blanco y el celeste de nuestro pabellón.*

«Conclusión: Por lo tanto el color típico y legítimo de la bandera argentina es «*azul-celeste*» según la tradición primitiva, la Ley, la historia y la idea política y nacio-«nal que simboliza. *Bartolomé Mitre*».

(2) Debe mantenerse los dos tipos de bandera en virtud de la Ley del Congreso Nacional de fecha 25 de febrero de 1818, que dice: «Que sirviendo para toda bandera nacional los colores blanco y azul, en el modo y forma hasta ahora acostumbrados, fuese distintivo peculiar de la bandera de guerra, un sol pintado en medio de ella». — Los rayos no deben alcanzar las fajas azul-celestes, para destacar mejor el sol. La proporción de la medida de la bandera debe ser de dos a uno, es decir, su largo doble a su ancho.

Presidente de la Nación llevará los colores y el sol de la Bandera Mayor (3).

Art. 2.° — El Escudo Argentino es la reproducción del sello que usó la Asamblea General Constituyente, el mismo que ésta ordenó que el Poder Ejecutivo lo use, en sesión del 12 de mayo de 1813, para sus diplomas y contestaciones oficiales (4).

Art. 3.° — La forma auténtica del Himno Nacional es la versión editada por Esnaola en 1860, con el título: «Himno Nacional Argentino. Música del maestro Blas Parera», la que en adelante será la única autorizada para las ceremonias públicas oficiales, las bandas militares y en la enseñanza escolar. El Poder Ejecutivo

---

(3) La Asamblea General Constituyente en la sesión del 26 de enero de 1814, al tratarse la Reforma al Estatuto Provisorio del Supremo Gobierno, dispone que el Primer Magistrado «llevará una banda bicolor, blanca al centro y azul a los costados, terminada en una borla de oro, como distintivo de su elevada representación». («El Redactor de la asamblea» N.° 19, sesión del miércoles 26 de enero de 1814). Prescripción que se complementa con la relacionada con el sol de la Banda presidencial, según la Ley del Congreso de Tucumán de 25 de febrero de 1818, en la que establece que «serán peculiares y privativos de ella los dos colores blanco y azul que la distinguen, en la forma que hasta ahora se ha usado y en ella se pondrá un sol bordado de oro, en la parte que cruza desde el hombro hacia el costado, de modo que caiga sobre el pecho y se haga bien visible» («La Bandera Nacional, su origen, documentos oficiales», edición del Archivo General de la Nación). El P. E. dictará la reglamentación correspondiente, para el uso de las Bandas disponiéndose que al término de las funciones de Presidente, la Banda será enviada a la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos, para su entrega al Museo Histórico Nacional, y el bastón del Presidente Rivadavia, que simboliza la trasmisión del mando, será depositado en la Casa de Gobierno.

(4) El Escudo se configura de la siguiente manera: campo de elipse trazado verticalmente y cortado en dos partes iguales por el diámetro menor de la figura, el campo del Escudo con los colores nacionales de la Bandera, azul ligero en la parte superior y blanco en la inferior. Dos brazos desnudos se mueven de ambos lados del cuartel en blanco, inclinados de abajo hacia arriba, a 45 grados sobre la horizontal y sus manos sostienen la pica, cuya base no llega al pie de la elipse. Las manos deben ser diestras las dos. La pica alza el gorro de la Libertad a una altura que ocupa la parte central del cuartel azul-celeste y remata cerca de la extremidad superior de la elipse. El gorro de la Libertad, doblado abajo, va en rojo, y los brazos, las manos y la pica, en los colores apropiados. Las dos ramas de laurel que lo circundan se presentan en color verde y la cinta que los une tiene la misma forma y colores de la bandera. En la cabecera superior del Escudo y detrás de la corona de laurel, debe esplender el sol naciente, con 21 rayos como en el sello de la Asamblea los rayos son rectos y flamígeros alternadamente dispuestos. Para fijar el tipo de Escudo se han reunido los distintos sellos de la Asamblea General Constituyente de 1813, ajustándose la réplica exactamente a ellos y aplicándole el color azul celeste a la mitad superior del campo. La descripción del Escudo está fundada en los documentos: 1.° El sello de lacre aplicado en la carta de ciudadanía de Francisco de Paula Saubidet, fechada el 22 de febrero de 1813, que dió a conocer el señor César Pillado Ford y que se conserva en poder del señor Juan María Saubidet Gutiérrez. 2.° — Sello grande con que se timbra la carta de ciudadanía otorgada en el mismo año por la Asamblea General Constituyente a Antonio de Olavarría, firmada por Carlos de Alvear y refrendada por Hipólito Vieytes, pieza que se conserva en el Museo Histórico Nacional, en buen estado. 3.° Sello grande de la carta de ciudadanía otorgada al General Juan Antonio Alvarez de Arenales, fechada el 6 de julio de 1813, firmada por Gervasio Antonio de Posadas, refrendada por Valentín Gómez, que se conserva en poder del doctor José Evaristo Uriburu y que dió a conocer el señor Dardo Corvalán Mendilaharsu; y en la autoridad de nuestros historiadores mayores, Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López según cartas dirigidas al doctor Estanislao S. Zeballos, de julio de 1900 y con motivo del estudio realizado por este último sobre el Escudo que él mismo envió y sometió a la apreciación de los publicistas nombrados, con los diseños correspondientes.

mandará imprimir el texto de Esnaola para su difusión gratuita y tomará las medidas necesarias para prohibir la explotación comercial del Himno Nacional Argentino (5).

Art. 4.° — El Poder Ejecutivo reglamentará por decreto el uso de los Símbolos Patrios, de acuerdo con esta ley y los antecedentes históricos.

Art. 5.° — Se hará un ejemplar tipo de bandera y escudo y una versión auténtica del himno que se depositarán en el Cabildo por haber sido el escenario de la Revolución de Mayo, a los fines de su custodia, sirviendo de modelo para su reproducción.

---

(5) Esta conclusión del dictamen aprobado por la Academia Nacional de la Historia, establece como música tradicional del Himno Argentino, la versión de Esnaola, quien la arregló en 1860, utilizando una copia de la música de Blas Parera. Una y otra se reproducen en facsímil en el folleto titulado: «El Himno Argentino». estudio presentado a la Comisión constituída por Decreto del P. E. el 24 de julio de 1927 y publicado, por acuerdo de dicha comisión, como dictamen de los miembros que lo suscriben, según lo resuelto en sesión plenaria el 20 de agosto. Buenos Aires 1927. Ese estudio está firmado por los señores Ricardo Rojas, Manuel Gómez Carrillo, Manuel Carlés, Antonio Dellepiane y Carlos Correa Luna. Terminaron ese documento manifestando: «A falta de texto oficial de 1813, sólo poseemos un Himno tradicional, y la versión de Esnaola es, por fuerza de los hechos, no por nuestra elección, la más completa y autorizada forma del Himno Nacional». Dicha Comisión entregó al Archivo General de la Nación, conjuntamente con el libro de actas y demás documentos de su actuación, una colección de ejemplares del Himno Nacional, arreglado por Esnaola, impresos en distintos años desde 1860 y de la cual debe extraerse el más perfecto para su oficialización por la Ley propuesta.

En cuanto a la letra del Himno Nacional, debe tenerse por auténtica la del original, de fecha 13 de mayo de 1813, refrendado por el doctor Bernardo Vélez, Secretario del Gobierno Intendencia, y que fué impreso en la «Gaceta» de Buenos Aires el 14 de mayo de 1813. Ambas fueron reimpresas en facsímil en la reedición de «El Redactor de la Asamblea», Buenos Aires, 1913, dirigida por la Junta de Historia y Numismática Americana. La letra auténtica del Himno Nacional, de 1813, debe adoptarse con la reforma de una de las estrofas, de acuerdo con el decreto del P. E. dictado en la segunda presidencia del General Julio A. Roca.

HOMENAJE AL LIBERTADOR

Ley N.° 12.387, de 16 de agosto de 1938, declarando Fiesta Nacional el día 17 de agosto, aniversario de la muerte del Capitán General don José de San Martín.

Artículo 1.° — Declárase Fiesta Nacional el día 17 de agosto, aniversario de la muerte del Capitán General don José de San Martín.

Art. 2.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 12 de agosto de 1938.

Circular N.° 69 de la Inspección General de Enseñanza, del 7 de agosto de 1940, comunicando instrucciones para la realización del homenaje de los establecimientos de enseñanza al Libertador.

Buenos Aires, 7 de agosto de 1940.

A la Dirección .....

Me dirijo a usted para hacerle saber que el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública ha dispuesto que los institutos de enseñanza, oficiales e incorporados de su dependencia se asocien al homenaje nacional a tributarse el 17 del corriente a nuestro Libertador, General José de San Martín, con motivo del 90° aniversario de su muerte.

Al efecto, el día viernes 16, en los establecimientos con horario matutino o con turnos que funcionen dentro de ese horario, en el acto de izar la bandera, se reunirán el personal directivo, los respectivos docentes y los alumnos, para escuchar una breve alocución a cargo del señor Director. Se cantará a continuación el Himno Nacional y, después, se guardará un minuto de silencio.

En los institutos o turnos de los mismos, que funcionen por la tarde, la ceremonia se realizará en momentos de arriar la bandera.

Esa dirección dispondrá lo concerniente para que este sencillo homenaje adquiera, en ese establecimiento, una alta significación patriótica, tal como lo desea la Superioridad.

Saludo a Ud. atentamente.

FLORENCIO D. JAIME.
Inspector General de Enseñanza

Circular N.° 64 de la Inspección General de Enseñanza, de 11 de agosto de 1941, comunicando que se ha dispuesto mantener con carácter permanente las instrucciones impartidas por la circular anterior.

Buenos Aires, 11 de agosto de 1941.

Al Señor .....

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que, por resolución ministerial dictada en la fecha, se ha dispuesto mantener con carácter permanente las instrucciones impartidas por circular N.° 69, del 7 de agosto de 1940, acerca de la forma como deberá tributarse el homenaje a nuestro Libertador, el General D. José de San Martín, el día anterior al del aniversario de su muerte.

En consecuencia, en los establecimientos con horario matutino o con un turno que funcione dentro de ese horario, se reunirán el 16 de agosto, en el momento de izar la bandera, el personal directivo, los respectivos profesores y los alumnos, para escuchar una breve alocución a cargo de un miembro del personal directivo o docente designado por la Dirección. Se cantará a continuación el Himno Nacional y, después, se guardará un minuto de silencio. Realizada la ceremonia, se dictarán las clases que correspondan de acuerdo con el horario habitual.

En los institutos o turnos de los mismos que funcionen por la tarde, el homenaje se llevará a cabo en el momento de arriar la bandera.

FLORENCIO D. JAIME.
Inspector General de Enseñanza

Comisiones y Reparticiones Nacionales, creadas por ley, dependientes del Departamento de Instrucción Pública

DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PUBLICA

Comisiones y Reparticiones nacionales creadas por Ley (1)

Comisión Protectora de Bibliotecas Populares

Ley N.° 419, de 23 de septiembre de 1870, sobre Bibliotecas Populares y constituyendo una Comisión Protectora en la ciudad de Buenos Aires.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de—

LEY:

Artículo 1.° — Las bibliotecas populares establecidas o que en adelante se establezcan por asociaciones de particulares, en las ciudades, villas y demás centros de población de la república, serán auxiliadas por el Tesoro nacional en la forma que determina la presente ley.

Art. 2.° — El P. E. constituirá en la ciudad de Buenos Aires una Comisión Protectora de las Bibliotecas Populares, compuesta, por lo menos, de cinco miembros y un Secretario retribuído con mil pesos fuertes anuales.

Art. 3.° — La Comisión de que habla el artículo anterior tendrá a su cargo el fomento e inspección de las bibliotecas populares, así como la inversión de los fondos a que se refieren los artículos siguientes.

---

(1) En este capítulo no figura el Consejo Nacional de Educación, creado por la Ley N.° 1.420 de Educación Común, dado que todo lo que a esta materia se refiere puede leerse en el «Digesto de Instrucción Primaria», publicación oficial del Consejo Nacional de Educación.

Tampoco se incluyen las leyes y decretos sobre Universidades y Academias Nacionales, que se publicarán en la obra, en preparación, «Digesto de Enseñanza Superior».

En el fascículo segundo de este libro, ya en prensa, aparecerán los decretos y reglamentos de las demás Comisiones y Reparticiones nacionales, creadas por decreto del Poder Ejecutivo bajo la dependencia del Departamento de Instrucción Pública de este Ministerio, juntamente con el Reglamento de los Institutos, Colegios y Escuelas, de conformidad con el plan general de este Digesto de Enseñanza Secundaria, transcripto en las páginas iniciales del presente fascículo.

Art. 4.° — Tan luego como se haya planteado una asociación con el objeto de establecer y sostener por medio de suscripciones una biblioteca popular, la Comisión Directiva de la misma podrá ocurrir a la Comisión Protectora remitiéndole un ejemplar o copia de los estatutos y la cantidad de dinero que haya reunido, e indicándole los libros que desea adquirir con ella y con la parte que dará el Tesoro nacional en virtud de esta ley.

Art. 5.° — La subvención que el P. E. asigne a cada biblioteca popular será igual a la suma que ésta remitiese a la Comisión Protectora, empleándose el total en la compra de libros, cuyo envío se hará por cuenta de la Nación.

Art. 6.° — El P. E. pedirá anualmente al Congreso las cantidades necesarias para el cumplimiento de esta ley, quedando como recurso provisorio, en el presente año, la parte del inciso 15 del presupuesto del departamento de Instrucción Pública que no se emplee en su objeto, pudiendo además invertir la cantidad de tres mil pesos fuertes, si fuese necesario.

Art. 7.° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires, a los veinte días del mes de septiembre de mil ochocientos setenta.

ADOLFO ALSINA. — SANTIAGO CÁCERES.
Carlos M. Saravia. — *Bernardo Solveira.*
Sec. del Senado. — Sec. de la C. DD.

Buenos Aires, septiembre 23 de 1870.

Téngase por ley, comuníquese y dése al Registro Nacional.

SARMIENTO.
N. AVELLANEDA.

Decreto de 29 de octubre de 1870, reglamentario de la Ley N.° 419 sobre Bibliotecas Populares

Artículo 1.° Constitúyese en la Ciudad de Buenos Aires una comisión que se denominará «Comisión Protectora de las Bibliotecas

Populares», compuesta de las personas siguientes: don Palemón Huergo, doctor don José F. López, don Angel Estrada, don David Lewis y doctor don Angel J. Carranza, debiendo actuar como secretario don Pedro Quiroga, con el sueldo que la ley le asigna (1).

Art. 2.º — Las atribuciones y deberes de esta comisión serán las siguientes:

1.º Recibir las cuotas de dinero que le fueren remitidas por las asociaciones locales; pedir en cada caso otro tanto al Ministerio de Instrucción Pública, e invertir el total en la adquisición de libros, debiendo hacer su envío por cuenta de la Nación.

2.º Formular e imprimir periódicamente catálogos con los precios de los libros útiles que existan en las librerías del país o del extranjero, acompañando la Ley del Congreso, el presente decreto, buenos modelos de reglamentos que hayan servido para la organización de bibliotecas populares, y todos los datos y escritos conducentes a estimular el espíritu público para la propagación de instrucciones de ese género, debiendo repartirlos profusamente en toda la República por medio de los rectores de colegios nacionales, de las autoridades, y de los maestros de escuelas.

3.º Nombrar inspectores de bibliotecas donde fuere necesario.

4.º Rendir cada seis meses cuenta documentada de los valores que hubiere recibido, y publicar dichas cuentas inmediatamente en el periódico oficial.

5.º Pasar anualmente al Ministerio de Instrucción Pública una memoria detallada de sus trabajos y del movimiento estadístico de las bibliotecas populares existentes.

Art. 3.º — Toda sociedad a cuyo cargo esté una biblioteca subvencionada por el tesoro nacional con arreglo a la ley, estará obligada a remitir cada seis meses a la Comisión Protectora y a la Oficina Nacional de Estadística el movimiento de dicha biblioteca, con sujeción a las planillas impresas de que la Comisión deberá proveerlas.

---

(1) Esta Comisión fué suprimida por Ley N.º 800, de 23 de septiembre de 1876, y restablecida por decreto de 3 de julio de 1908, que se transcribe a continuación de este decreto.

Art. 4.° — Las bibliotecas subvencionadas, podrán ser inspeccionadas por los comisionados nacionales de instrucción pública y por los inspectores que nombra al efecto la Comisión Protectora.

Art. 5.° — En el caso de que se disuelva una asociación después de fundar una biblioteca, siempre que haya recibido auxilios del gobierno nacional, la junta directiva de aquélla deberá hacer entrega de los objetos suministrados por éste, al maestro de la escuela pública más inmediata, bajo inventario, del que se depositará una copia en el juzgado de sección de la provincia en la capital, o en el juzgado de paz respectivo en la campaña, dando aviso a la Comisión Protectora.

Art. 6.° — Todas las publicaciones oficiales y los libros útiles que adquiera el gobierno serán remitidos puntualmente a las bibliotecas populares por la oficina de la Biblioteca Nacional, a cuyo efecto la Comisión Protectora le dará conocimiento de todas las que se hallen comprendidas en la ley.

Art. 7.° — Comuníquese este decreto con la ley de su referencia a los gobiernos de Provincia y a la Comisión nombrada; publíquese y dése al Registro Nacional.

SARMIENTO.

NICOLÁS AVELLANEDA.

Decreto de 3 de julio de 1908, estableciendo las condiciones requeridas para la fundación de una biblioteca popular con el apoyo oficial, y designando una Comisión Protectora.

Artículo 1.° — Toda asociación o corporación, sea o no persona jurídica, cualquiera que sea la nacionalidad de los miembros que la forman, establecida o que se establezca en adelante en las ciudades, villas y demás centros de población de la República, puede solicitar el auxilio del tesoro nacional para construir y organizar una biblioteca popular, en los términos y condiciones siguientes:

a) Que la asociación o corporación solicitante disponga de un local aparente.

b) Que el acceso a la biblioteca sea libre para toda persona que lo solicite, aun cuando no pertenezca a la asociación o corporación en su caso.

c) Que el local permanezca abierto al público, por lo menos tres veces a la semana, durante la noche, y los días feriados a la tarde.

d) Que las obras que el Estado entregue para fundar o ampliar las bibliotecas populares, queden bajo la responsabilidad y custodia de los presidentes o jefes de las mismas, las que deberán ser restituídas al Estado en caso de disolución.

e) Contraer la obligación de someterse a la vigilancia y control del gobierno o de sus agentes, no sólo en lo que se relaciona con la observancia de las condiciones establecidas en el presente decreto o que en lo sucesivo se establezca, sino también en cuanto al carácter y naturaleza de las obras destinadas a formar la biblioteca popular.

Art. 2.° — La subvención con que el tesoro público concurrirá a la formación de las bibliotecas populares será igual a la suma que éstas remitiesen a la Comisión Protectora, empleándose el total en la compra de libros, cuyo envío se hará por cuenta de la Nación.

Art. 3.° — En cumplimiento de la Ley N.° 419, de 23 de septiembre de 1870, créase una Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, nombrándose para constituirla a los señores doctores José Nicolás Matienzo, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, como Presidente, y Juan M. Garro, Fernando Pérez, Vicente Gallo, y señor Tomás E. Estrada, como vocales, debiendo actuar como secretario de la misma el doctor L. M. Acosta.

Art. 4.° Los rectores de colegios nacionales y directores de escuelas normales, quedan designados delegados de la Comisión Protectora a los fines del presente decreto.

Art. 5.° — Sin perjuicio de las bibliotecas populares que se organicen en virtud de las disposiciones anteriores, la Comisión Protectora habilitará bibliotecas de la misma índole en los colegios nacionales, escuelas normales de varones y demás establecimientos nacionales en que considere conveniente, las que estarán abiertas al público todas las noches, y días feriados por la tarde, durante las horas que se determine.

Art. 6.° — La Comisión fijará, cuando lo crea oportuno, carteles en todos los barrios de la capital y en los centros de población del interior de la República invitando a la lectura a las clases obreras e indicando, a la vez, los lugares en que funcionarán las bibliotecas populares.

Art. 7.° — La Contaduría General liquidará mensualmente a favor del presidente de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares el importe total de las subvenciones que el Presupuesto acuerda a las bibliotecas públicas en toda la República, cuya comisión lo depositará en cuenta especial y a su orden en el Banco de la Nación, para abonarlo a éstas siempre que se encuentren en condiciones de disfrutar de la protección del Estado.

Art. 8.° — Solicítese al Congreso los fondos necesarios para cubrir los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto.

Art. 9.° — Comuníquese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
RÓMULO S. NAÓN.

Decreto, de 31 de marzo de 1919, uniformando disposiciones sobre bibliotecas populares, canje internacional y centralización y distribución de publicaciones oficiales.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1919.

Siendo necesario reglamentar el artículo 21 de la Ley de Presupuesto y uniformar las disposiciones sobre bibliotecas populares, canje internacional, y centralización y distribución de publicaciones oficiales.

El Poder Ejecutivo de la Nación—

DECRETA:

Artículo 1.° La Comisión Protectora de Bibliotecas Populares tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

a) El fomento y fundación de bibliotecas, de acuerdo con la letra y espíritu de la Ley de 23 de septiembre de 1870.

b) El fomento de las bibliotecas de los Colegios Nacionales y Escuelas Normales, siempre que se abran al público.

c) El depósito, conservación y distribución de todas las publicaciones oficiales.

d) La distribución de obras y publicaciones en el interior y en el exterior.

e) El Canje Internacional, en conformidad a los decretos de 12 de mayo de 1870 y 25 y 26 de julio de 1885, y Ley 4.070, de 22 de mayo de 1902, por la cual la Nación se adhiere a la Convención de Bruselas, firmada el 15 de marzo de 1886 (1).

f) La administración y pago de los subsidios, para bibliotecas votados por el H. Congreso.

g) Declarar la caducidad de los mismos subsidios cuando las bibliotecas no rindieran cuentas en el término que se señale,

(1) Ver texto de la Ley N.° 4.070 y de la Convención de Bruselas, en el capítulo «Canje internacional de informaciones y publicaciones», de este libro.

no funcionen regularmente, o no cumplieren los fines de su creación, destinando esos fondos al fomento de bibliotecas.

h) Informar, al H. Congreso, cuando se solicite, respecto a las bibliotecas que pidan nuevos subsidios o aumento de los existentes.

i) Recibir y pagar las partidas que el H. Congreso vote para publicaciones.

j) Proteger las bibliotecas de las cárceles, instituciones y oficinas nacionales o provinciales.

k) Hacer imprimir libros o folletos de propaganda útil, sea patriótica o de otra naturaleza.

l) Proteger a los autores nacionales, adquiriendo ejemplares de sus obras para distribuirlos en el país o en el extranjero.

m) Hacer su propio presupuesto, elevándolo al Ministerio de Instrucción Pública, para su incorporación al Presupuesto General, en su oportunidad.

n) Nombrar y remover sus empleados, previa aprobación del Poder Ejecutivo.

Art 2.° La Comisión Protectora fundará a medida que lo permitan sus recursos, bibliotecas populares en todas las poblaciones o barrios que no tengan ninguna, siempre que se constituya una comisión vecinal y se disponga de local aparente que, a falta de uno especial, puede ser el de cualquier escuela u oficina nacional o provincial.

Art. 3.° — Todo núcleo de población o barrio que llene esos requisitos, tiene derecho a solicitar la acción de la Comisión Protectora, en la forma establecida en el artículo anterior.

Art. 4.° Toda asociación o corporación establecida, o que se establezca en adelante, nacional o extranjera, puede solicitar el auxilio del tesoro nacional, en conformidad a la Ley de 23 de septiembre de 1870, siempre que llenen los requisitos siguientes:

a) Que se disponga de local aparente.

b) Que el acceso a la biblioteca sea libre.

c) Que el local permanezca abierto, por lo menos doce horas semanales, diurnas o nocturnas, continuas o discontinuas. Los días feriados deberá abrirse el local, por lo menos tres horas por la tarde.

d) Que las autoridades de la asociación se responsabilicen personalmente por los libros que se les entreguen o por su valor de compra.

e) Que se someta a la inspección y contralor de la Comisión Protectora, acatando sus resoluciones.

Art. 5.° — Los rectores de los Colegios Nacionales y Directores de Escuelas Normales, quedan designados delegados de la Comisión Protectora y tendrán la obligación de inspeccionar las bibliotecas del lugar donde están establecidos, siempre que la Comisión Protectora lo solicite o disponga.

Art. 6.° — Toda oficina pública que no tenga biblioteca propia, debe remitir todas las publicaciones oficiales que reciba y que no le sean necesarias, a una biblioteca de la localidad.

Art. 7.° — La Comisión Protectora podrá nombrar comisiones delegadas, en las Provincias o Territorios, para que contribuyan al desarrollo y vigilancia de las bibliotecas populares.

Art. 8.° — La Comisión Protectora se preocupará de que los libros que se adquieran para las bibliotecas populares, además de responder a la exigencias de la cultura científica, artística y literaria, tiendan a desarrollar el sentimiento nacional y a fortificar la voluntad y el carácter.

Art. 9.° — La Comisión Protectora, además de la cultura general, perseguirá, en su acción, el propósito de contribuir al desarrollo de los conocimientos útiles y de aplicación práctica, consultando las necesidades de las diversas regiones de la república.

Art. 10 — La Contaduría General liquidará trimestralmente los subsidios votados para bibliotecas, y la Tesorería General los depositará en el Banco de la Nación a la orden de la Comisión Protectora.

Art. 11. — Los subsidios indicados se abonarán siempre que la Comisión Protectora constate que la biblioteca subvencionada funciona regularmente, llenando los fines de su constitución. La rendición de cuentas de cada institución se hará ante la Comisión Protectora.

Art. 12. — Los jefes de reparticiones nacionales, están obligados a suministrar, a la Comisión Protectora, cualquier informe que

se les solicite, para el pago de los subsidios, o para cualquier otro fin referente a las funciones de aquélla.

Art. 13. — Con la partida que reciba y los fondos que retenga, la Comisión abonará los sueldos de su personal, el viático de inspectores, a razón de diez pesos diarios por cada ausencia de la Capital, alquileres, gastos de mudanza, transportes de libros, y todos los demás gastos de Oficina. El remanente que resultare, pasará al fondo de fomento de bibliotecas. En los casos en que las inspecciones sean próximas a la Capital, no se dará viático, sino el importe de los gastos.

Art. 14. — En el Canje Internacional y distribución de publicaciones en el exterior, la Comisión Protectora tratará de hacer conocer el desarrollo material e institucional de la república, creando, a la vez, vínculos de solidaridad intelectual con los otros pueblos y, principalmente, con los americanos.

Art. 15. — Todas las oficinas nacionales remitirán, a la Comisión Protectora, las publicaciones que hagan o reciban, debiendo aquélla distribuirlas. Para el reparto, la Comisión Protectora deberá atender, en primer término, las listas que le remita la oficina que haya hecho o adquirido la publicación.

Art. 16. — La Comisión Protectora rendirá cuenta en forma, cada seis meses, a la Contaduría General de la Nación.

Art. 17. — La Comisión Protectora presentará, al Ministerio de Instrucción Pública, una memoria anual respecto al cumplimiento de sus funciones y a la acción desarrollada.

Art. 18. — Las facultades ejecutivas de la Comisión Protectora, serán desempeñadas por su presidente.

Art. 19. — Deróganse las disposiciones anteriores con excepción de las contenidas en el decreto de 20 de octubre de 1870, en lo que no se opongan a la presente.

Art. 20. — Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y y archívese.

IRIGOYEN.

J. S. Salinas.

Resolución Ministerial de 7 de marzo de 1921, aprobando el Reglamento para la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares

Visto el proyecto de reglamento formulado por la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, y de acuerdo con lo informado al respecto por la Inspección General de Enseñanza Secundaria,

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública—

RESUELVE:

Artículo 1.° — Aprobar el reglamento de que se trata, con destino al citado establecimiento, debiendo modificarse el artículo 42 del mismo en la siguiente forma: «Art. 42. — Las obras que se adquieran por intermedio de la Comisión, podrán ser de cualquier materia, a elección de las bibliotecas solicitantes, pero no se adquirirán aquellas que tengan carácter panfletario o que sean manifiestamente obscenas». (1).

Art. 2.° — Comuníquese y archívese.

J. S. Salinas.

(1) El Art. 42 fué proyectado por la Presidencia de la Comisión, en la siguiente forma: «Las obras que se adquieran, por intermedio de la Comisión, podrán ser de cualquier materia, a elección de las bibliotecas solicitantes, pero no se adquirirán aquellas que tiendan a destruir el sentimiento de la nacionalidad y las instituciones de la República, o sean nocivas o manifiestamente inmorales.

Texto del reglamento aprobado

I

Comisión Protectora

Artículo 1.° — La Comisión funcionará en conformidad a la Ley de 23 de Septiembre de 1870, y a los Decretos de 29 de Octubre de 1870 y 31 de Marzo de 1919, con las atribuciones y facultades establecidas en los mismos.

Art. 2.° — La Comisión sesionará en su local, una vez por semana, sin perjuicio de cualquier otra convocatoria que, por motivos de urgencia, haga la Presidencia.

Art. 3.° — Deberá funcionar con el quórum legal de tres miembros, por lo menos, inclusive el Presidente. En los casos en que hubieran vocalías vacantes, funcionará con el número de miembros que existan.

Art. 4.° — Eligirá, de su seno, un vicepresidente anual, para reemplazar al Presidente.

Art. 5.° — La Comisión Protectora, además de las facultades y atribuciones establecidas en las leyes y decretos antes citados, tendrá las siguientes obligaciones y deberes:

a) Vigilar el funcionamiento de las bibliotecas populares acogidas a la ley.

b) Resolver sobre las medidas propuestas por el Presidente o los Vocales, para la mejor organización, desarrollo, y funcionamiento de las bibliotecas.

c) Autorizar todos los pagos que deban hacerse, para la adquisición de libros o cualquier otro gasto, no siendo los sueldos establecidos en la Ley de Presupuesto.

d) Nombrar las Comisiones Populares Delegadas en las provincias y territorios.

e) Resolver la adquisición o rechazo de los libros que se ofrezcan en venta o donen a la Oficina.

f) Resolver, en cada caso, respecto al pago y a la caducidad de los subsidios votados por el H. Congreso.

g) Retirar los libros, en los casos de que las bibliotecas protegidas no funcionen regularmente.

h) Reconocer carácter popular a las bibliotecas que lo soliciten, siempre que funcionen en conformidad a las disposiciones legales, y retirarles su protección, en el caso de que no funcionaran con regularidad.

i) Determinar el porcentaje del subsidio que debe emplearse en la adquisición de libros, en general o en cada caso.

j) Autorizar la inversión, total o parcial, de los subsidios, en construcciones, compra de muebles o útiles, o en otro destino benéfico para las bibliotecas.

k) Aplicar las correcciones disciplinarias a los empleados, previo informe de la Presidencia.

II

Presidencia

Art. 6.° Son deberes y atribuciones del Presidente:

a) Presidir las sesiones de la Comisión Protectora.

b) Concurrir, por lo menos, tres veces por semana a la Oficina, para atender el despacho de los expedientes, destinando los otros días hábiles al estudio de los libros, para informar a la Comisión.

c) Representar, a la Comisión Protectora, en los actos oficiales o externos.

d) Resolver todos los asuntos que, por su menor importancia, no sea necesario someterlos a las deliberaciones de la Comisión.

e) Disponer el pago del personal, en su oportunidad.

f) Elevar, a la Contaduría General, la rendición semestral de cuentas, con sus comprobantes respectivos.

g) Ejercer la dirección superior de la Oficina, conceder licencias a los empleados, y aplicar las resoluciones internas de la Comisión, en cada caso.

h) Proponer, a la Comisión, los nombramientos y ascensos del personal.

III

COMISIONES DELEGADAS:

Art. 7.° — La Comisión Protectora nombrará Comisiones Delegadas anuales, en las capitales de provincias y territorios, las que estarán formadas por un Presidente y cuatro Vocales.

Art. 8.° — Las Comisiones Delegadas funcionarán en los Consejos de Educación, en las provincias, y en las Gobernaciones respectivas en los territorios, para lo cual pedirán, a aquéllos y a éstas, las autorizaciones necesarias.

Art. 9.° — Las Comisiones Delegadas tendrán las siguientes facultades y deberes:

a) Vigilar la marcha y funcionamiento de las bibliotecas en las respectivas provincias o territorios.

b) Promover la fundación de nuevas bibliotecas en los núcleos de población.

c) Solicitar el concurso de las autoridades locales, en beneficio de las bibliotecas.

d) Intervenir en los conflictos que se produzcan en las mismas y resolverlos, dando cuenta, en su caso, a la Comisión Protectora.

e) Elevar el caso, a ésta, cuando no pudieran resolverlos por sí mismas, o cuando las bibliotecas no acataren sus resoluciones, o solicitasen que intervenga la Comisión Protectora.

f) Aconsejar, a la Comisión Protectora, respecto a cualquier medida que convenga tomar en beneficio de las bibliotecas locales.

g) Hacer conocer, a la Comisión Protectora, los casos en que, a su juicio, se inviertan irregular o inconvenientemente los subsidios votados por el H. Congreso.

h) Promover, por intermedio del Consejo de Educación, las medidas que sean necesarias para vincular las escuelas y las bibliotecas, para que ambas desarrollen una acción educativa concordante.

i) Solicitar, a las Legislaturas locales, que voten pequeñas partidas para remunerar a las personas que desempeñen el cargo de bibliotecarios.

j) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Comisión Protectora.

IV

Secretaría

Art. 10. — El Secretario es el jefe inmediato de todos los empleados.

Art. 11. — Son atribuciones y deberes del Secretario:

a) Asistir, diariamente, a la Oficina, en las horas reglamentarias.

b) Concurrir a las sesiones de la Comisión, levantar las actas respectivas, y dar cuenta de los asuntos entrados.

c) Cumplir las resoluciones de la Comisión y disposiciones de la Presidencia, relativas al orden de los trabajos y orgaganización interna.

d) Autorizar, con su firma, todos los actos de la Comisión o de la Presidencia, y dictar, por sí, las resoluciones de mero trámite, hasta poner los asuntos en estado de resolución definitiva.

e) Preparar el despacho diario de los asuntos, para someterlos a la Presidencia o a la Comisión, en su caso.

f) Examinar la tramitación de los asuntos para ver si se ha hecho en la forma ordenada.

g) Citar, a los miembros de la Comisión, para las sesiones señaladas.

h) Expedir los informes y datos que solicite la Comisión o la Presidencia.

i) Cuidar el orden interno de la Oficina, distribuir el trabajo a los empleados, y vigilar que éstos cumplan con sus deberes.

j) Vigilar la asistencia y comportamiento de los empleados.

k) Llevar un libro de correcciones disciplinarias.

V

Contaduría, Tesorería y Habilitación

Art. 12. — El Tenedor de libros es el jefe de esta sección.

Art. 13. —Las funciones indicadas en las letras *c, f, i, j* y *h* corresponden al Habilitado exclusivamente, sin perjuicio del contralor establecido en el inciso *ll.*

Art. 14. —Son atribuciones y deberes de esta sección:

a) Intervenir en todas las operaciones de Contaduría y Teneduría llevando, los libros que sean necesarios para el movimiento de fondos.

b) Estudiar las rendiciones de cuentas de las bibliotecas subvencionadas y producir el informe correspondiente.

c) Estudiar todas las cuentas que se presenten a la Oficina, e informar respecto a la procedencia o improcedencia de su pago.

d) Llevar cuentas corrientes a las bibliotecas e instituciones que tengan relaciones con la Comisión Protectora.

e) Liquidar las planillas de sueldos de los empleados.

f) Proceder a su pago, cuando así lo disponga la Presidencia.

g) Evacuar los informes que le sean pedidos.

h) Hacer un estado mensual del movimiento de los fondos.

i) Recibir los fondos que se entreguen o giren a la Comisión, y depositarlos, en el día, en el Banco de la Nación Argentina.

j) Pagar, a las bibliotecas, los subsidios votados por el H. Congreso.

k) Dar cuenta, a la Presidencia, de cualquier irregularidad que se note en el manejo de los subsidios entregados a las bibliotecas.

l) Elevar, a la Comisión, una nómina de aquellas bibliotecas que no hubieran rendido cuentas de la inversión del subsidio.

ll) Constatar las operaciones de la Habilitación.

m) Preparar los estados para facilitar la acción de los fiscales de la Contaduría General de la Nación.

n) Practicar la rendición de cuentas semestral, que debe elevarse a la Contaduría General de la Nación, con sus comprobantes respectivos.

Art. 15. — Cuando la Comisión hubiera decretado un pago que, a juicio de la Contaduría no correspondiera, ésta debe manifestarlo por escrito, y esperar que aquélla insista en la resolución.

Art. 16. — Siempre que se encuentre agotada una partida, debe comunicarlo a la Presidencia.

Art. 17. — No podrá hacerse pago alguno sin el expediente a la vista, con orden escrita y firmada por el Presidente y autorizada por el Secretario.

Art. 18. — Los pagos se harán por medio de cheques, firmados por el Presidente y Secretario, a excepción de los sueldos y los pagos no superiores a veinte pesos m|n.

VI

Archivo y Estadística

Art. 19. —Son deberes del encargado de esta sección:

a) Custodiar y ordenar metódicamente bajo su responsabilidad, todos los expedientes y documentos que pasen a su sección.

c) Evacuar los informes que se pidan.

d) Formar cuadros estadísticos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, de las entradas y salidas de los libros, con los datos que le remitirá la sección respectiva.

e) Llevar, con proligidad y exactitud, los libros de estadística clasificados así: Bibliotecas, Establecimientos de Enseñanza, Reparticiones públicas, Instituciones diversas, Personales y Exterior.

f) Anotar, en dichos libros, por orden alfabético, los destinos y fechas de los envíos efectuados.

g) Pasar mensualmente a la Oficina de Distribución, un cuadro del aumento de salida de libros con especificación de destinatario, número de años, número de volúmenes y láminas.

h) Llevar dos libros matrices, uno numérico y otro alfabético, por destino, subdivididos en Capital, Interior, Exterior y Personales.

VII

Inspección

Art. 20. — La Inspección tendrá las siguientes obligaciones y deberes:

a) Inspeccionar todas las bibliotecas existentes, según lo disponga la Comisión Protectora.

b) Informar sobre el funcionamiento de las mismas.

c) Estudiar los estatutos o reglamentos de las bibliotecas, y hacer las observaciones pertinentes sobre sus disposiciones.

d) Informar respecto a las nuevas bibliotecas o asociaciones que pidan la protección de esta Oficina.

e) Ejecutar cualquier otra diligencia que le encomiende la Comisión, respecto a las bibliotecas.

f) Ordenar los reglamentos, estatutos y catálogos de las bibliotecas.

Art. 21. — El Inspector que tenga que efectuar cualquier diligencia fuera de la Capital, en cumplimiento de su misión, tendrá un viático de diez pesos diarios, el que será abonado por la Contaduría, cargándose a la partida de gastos.

Art. 22. — Cuando la Inspección se refiera a bibliotecas existentes en la Capital o en localidades a las cuales se puede ir y volver en el día, no se dará el viático indicado, pero se pagarán todos los gastos justificados.

Art. 23. — Los Inspectores, cuando se encuentren en jira, no podrán regresar a la capital sin la autorización de la Presidencia.

Art. 24. — En las jiras que realicen los Inspectores, no sólo deberán visitar las bibliotecas existentes, para informar sobre ellas, sino que deberán propender a la fundación de nuevas bibliotecas, poniéndose en contacto con las autoridades locales, escuelas, y vecinos caracterizados.

Art. 25. — Los informes de los Inspectores deben concretarse a constatar si las bibliotecas funcionan regularmente, sin entrar en apreciaciones sobre sus tendencias, a menos que éstas contraríen los intereses nacionales o propendan a destruir sus instituciones, o a violar sus leyes.

Art. 26. — Es deber de los Inspectores aconsejar, a las direcciones de las bibliotecas, al hacer las inspecciones, que propendan a hacer instituciones neutrales, a las que puedan concurrir todos los que quieran estudiar, sin exclusivismos sociales, políticos o religiosos.

VIII

Oficina de distribución

Art. 27. — El Oficial Principal, encargado de esta sección, tendrá las siguientes obligaciones y deberes:

a) Reemplazar al Secretario, en caso de ausencia.

b) Ocuparse de la distribución de los libros existentes en la Oficina, los que se reciban, y las publicaciones oficiales.

c) Disponer que se remitan los libros adquiridos por las bibliotecas o para éstas, como también los libros para particulares.

d) Disponer la remisión de las publicaciones destinadas al exterior.

e) Llevar una nómina de las bibliotecas populares existentes, como también de los colegios, escuelas, sociedades, oficinas e instituciones que sean protegidas por la Comisión.

f) Intervenir en cualquier diligencia necesaria para el movimiento de libros.

IX

Compra de libros (1)

Art. 28. — Toda compra de libros, ofrecidos en venta, debe hacerse por resolución de la Comisión protectora, previo estudio de las obras.

Art. 29. — Las personas o firmas que ofrezcan libros en venta, presentarán una solicitud con el sellado correspondiente, acompañando un ejemplar del libro e indicando su precio, debiendo ser éste siempre inferior al de las librerías.

(1) La Comisión Protectora ha aprobado una Reglamentación especial de compras.

Art. 30. — Resuelta la adquisición, se comunicará al proponente, debiendo éste, dentro del término de diez días, entregar los libros a la sección de Expedición y Depósito, la que dará un recibo haciendo constar el número de ejemplares, encuadernación y estado.

Art. 31. — Con este recibo, el proponente solicitará el pago, que se efectuará siempre por medio de cheques contra el Banco de la Nación Argentina, a menos que se trate de una suma no superior a veinte pesos.

Art. 32. — Cuando se reciba un pedido de adquisición de libros, para bibliotecas instaladas o a instalarse, o para establecimientos públicos, esta sección formará una lista de las obras pedidas y solicitará presupuestos a cinco casas del ramo, por lo menos.

Art. 33. — Dichos presupuestos deberán entregarse, en sobre cerrado y lacrado, a la Mesa de Entradas, dentro de los diez días, la que los pasará a esta Sección.

Art. 34. — Recibidos por ésta, se procederá a su estudio, adjudicándose la licitación a las librerías que ofrezcan los libros en condiciones más ventajosas. Las librerías deberán presupuestar, por lo menos, el 50 % de las obras y, si no lo hicieren, podrán no tomarse en cuenta sus propuestas.

Art. 35. — Cuando el monto de la adjudicación sea superior a mil pesos oro, según la interpretación corriente de la Ley de Contabilidad, se procederá como ésta lo determina, a menos que se trate de los casos de excepción que prevé la misma ley.

Art. 36. — Hechas las adjudicaciones a las firmas proponentes, éstas deberán entregar los libros, dentro del plazo de quince días, a esta Sección, la cual les otorgará un recibo.

Art. 37. — Al recibirse los libros, serán recontados y examinados, volumen por volumen, para constatar si se encuentran en buenas condiciones.

Art. 38. — Si no hubieran observaciones, se pasarán los libros a la Sección Expedición y Depósito, para que sean remitidos.

Art. 39. — Con la conformidad de esta Sección, el expediente se pasará a la Contaduría, y después a la Presidencia, para que disponga lo referente al pago.

Art. 40. — Cuando las librerías no hubieran provisto todas las obras, se hará una nueva licitación, por las que falten, en la misma forma determinada anteriormente.

Art. 41. — Los libros que se adquieran con dinero de la Oficina, en todo o en parte, siempre serán en idioma nacional, con las excepciones que autorice la Comisión, en cada caso.

Art. 42. — Las obras que se adquieran, por intermedio de la Comisión, podrán ser de cualquier materia, a elección de las bibliotecas solicitantes, pero no se adquirirán aquéllas que tengan carácter panfletario o que sean manifiestamente obscenas.

Art. 43. — Todo autor, editor, o persona que comercie en libros, podrá ofrecer, en venta, a la Comisión Protectora, ejemplares de obras, y si éstas fueran útiles o bellas, o que, por lo menos revelen una intelectualidad que se inicia y que puede ser beneficiosa para la República, se adquirirá el número de ejemplares que permitan los recursos disponibles.

X

Expedición y depósito

Art. 44. — Esta Sección tendrá a su cargo:

a) El trámite de los expedientes que despache la Oficina de Distribución.

b) Recibir los libros o publicaciones que se adquieran o se remitan a la Oficina.

c) Disponer, respecto a su depósito, en los lugares convenientes y en la forma ordenada que facilite la entrada y la salida.

d) Hacer las listas de los libros que deben remitirse, según lo dispuesto por la Sección de Distribución.

e) Solicitar, al Ministerio de Instrucción Pública, las órdenes de transportes necesarias.

f) Correr con todo lo necesario hasta que los libros salgan de la Oficina.

g) Vigilar y dirigir a los ordenanzas que se encarguen de la parte material del envío de libros.

h) Remitir, a la Oficina de Archivo, los datos necesarios para que ésta haga las anotaciones que correspondan.

i) Vigilar que los libros salgan de la Oficina perfectamente embalados.

j) Llevar un libro de entradas, en el cual se expresará el número de orden, fecha de entrada, nombre del autor, título de la obra, encuadernación, número de volúmenes y número de ejemplares de las obras que se reciban. Se indicará con una C, si la obra es comprada, con una D, si es donada y con una O, si es oficial.

k) Hacer, para cada obra, una ficha en donde se registren los datos anteriores, y formar un fichero por orden alfabético de autores.

l) Despachar los expedientes de adquisición o donación de libros, informando sobre su encuadernación, estado de conservación, y número de ejemplares, pasando el expediente, en caso de compras, a la Contaduría, para el trámite del pago.

XI

Mesa de entradas

Art. 45. — Son deberes y obligaciones de la Mesa de Entradas:

a) Recibir y dar trámite y salida a todas las comunicaciones dirigidas a la Oficina, o que salgan de ésta.

b) Llevar un libro de entradas y salidas, con las anotaciones necesarias.

c) Numerar, fechar, foliar y poner en carpetas o expedientes, todos los asuntos que entren, pasándolos, en el día, al despacho.

d) Comunicar, en la Oficina, a los interesados, el estado de los asuntos que gestionen.

e) Extender, en los expedientes respectivos, las resoluciones de la Comisión o de la Presidencia.

f) Poner, al pie de toda comunicación o expediente que entre o salga, la fecha de entrada y salida.

XII

Fundación y funcionamiento de Bibliotecas

Art. 46. — En conformidad a lo dispuesto por el art. 3 y 4 del Decreto de 31 marzo de 1919, cuando se trate de fundar una biblioteca, se llenarán las siguientes formalidades:

1. Se designará una Comisión Directiva, en asamblea de vecinos, y ésta deberá formarse por un presidente, un vicepresidente, secretario, tesorero y tres vocales.
2. Se obtendrá un local aparente, al cual pueda tener acceso el público, y que, a falta de uno especial, puede ser el de cualquier escuela u oficina nacional o provincial.
3. Llenados estos requisitos, la Comisión Directiva, en nota firmada por el Presidente y Secretario, podrá dirigirse a la Comisión Protectora, pidiendo su protección, de acuerdo con las disposiciones vigentes (1).
4. Adquiridos los libros, o recibidos de la Comisión Protectora, y puestos en el local respectivo, se hará saber al público la apertura de la biblioteca, sea por los periódicos locales, cuando existieran, o por cualquier otro medio apropiado.
5. Si la población tiene elementos para ello, conviene inaugurar la biblioteca con cualquier fiesta, como, por ejemplo, una conferencia o una velada.
6. Si hay periódicos locales, puede publicarse la lista de las obras recibidas, para que la conozca la población. Si no hubiere periódicos, debe ponerse la lista a disposición del

(1) Además de los requisitos y disposiciones enumerados en este reglamento, las bibliotecas que deseen acogerse a los beneficios de la protección legal, deberán satisfacer las siguientes condiciones, establecidas por resolución de la Comisión Protectora:

1. Haber funcionado por lo menos durante seis meses antes de solicitar la protección;
2. Poseer un mínimo de 1.500 volúmenes, si la biblioteca está situada en la Capital Federal; de 1.000 volúmenes, en las capitales de provincia o ciudades importantes; de 500 volúmenes en poblaciones menores; de 300 volúmenes, en pueblos pequeños. El mínimo fijado en el último caso debe comprender obras y publicaciones en idioma castellano en su totalidad; en los casos anteriores se admitirá hasta un 10 % de obras en idiomas extranjeros;
3. Llevar registros de lectores, catálogos o ficheros, de acuerdo con la importancia de la biblioteca, inventario, libro de actas de la comisión directiva y demás elementos de organización.

público, en la misma biblioteca, y en lugar visible o accesible.

7. La biblioteca debe adoptar un nombre, que puede ser el de uno de nuestros próceres. Dicho nombre no podrá ser adoptado definitivamente, sin antes comunicarlo a la Comisión Protectora para su aceptación.
8. La Comisión Directiva debe hacer toda la propaganda conveniente, para que el público concurra a la biblioteca, y para que consagre algunas horas a la lectura.
9. Si en las poblaciones existiesen algunos profesionales, o personas que, sin tener profesiones, estén dotadas de conocimientos científicos, industriales, artísticos o literarios, las Comisiones Directivas deben invitarlos a dar conferencias en las bibliotecas, sobre cualquier tema que pueda interesar. Cuando no hubieran personas capacitadas para dar conferencias, se deberán leer, en público, libros o capítulos de éstos.
10. En las poblaciones que son centros de regiones agrícolas o ganaderas, conviene que las conferencias, por lo común, sean sobre temas relacionados con aquellas industrias, vulgarizando conocimientos útiles y prácticos.
11. Las Comisiones Directivas deben solicitar, personalmente, si es posible, que los vecinos poseedores de libros que no los utilicen, los donen a la biblioteca.
12. Deben también solicitar, a las Oficinas públicas locales, que si no tiene bibliotecas propias, donen las publicaciones oficiales que reciban.
13. En la época oportuna, deben las Comisiones Directivas hacer gestiones, ante los gobiernos de las provincias respectivas, para que se incluyan, en los presupuestos provinciales, pequeños sueldos para remuneración de los bibliotecarios.
14. Conviene que, si es posible, se nombre bibliotecario al director o maestro de la Escuela Nacional o Provincial más próxima, por ser éstos los funcionarios que, por su profesión, deben tener más apego a los estudios.
15. Se debe solicitar, a los directores de las escuelas de la localidad, que hagan propaganda, en las aulas, en favor de

la lectura, pidiendo, a los niños, soliciten de sus padres protección para las bibliotecas.

16. Las Comisiones Directivas deben instituir, en cada población, el «Día del Libro», en el cual comisiones de señoritas, jóvenes o niños, soliciten el concurso de los vecinos, en libros o dinero, para el sostenimiento y desarrollo de la institución.

17. Los libros que reciban las bibliotecas deben ser catalogados convenientemente, y cuidados con todo esmero. Deberán llevar el sello de la comisión o sociedad, en diversas páginas (1).

18. Cada nueva adquisición de libros, debe hacerse conocer por la prensa o en otra forma, publicándose la lista de las obras recibidas, si esto es posible.

19. Cada biblioteca puede nombrar «Protectores» de la institución, para que presten su concurso, en la forma que les fuera posible, y, principalmente, en ésta: remitiendo todos los libros que no necesiten, o los periódicos, diarios o revistas que ya no utilizaren. Conviene que los protectores sean personas de cierta espectabilidad, debiendo uno residir en la Capital de la Provincia y otro en la Capital de la República. Los nombramientos de «Protector» deben hacerse por un año, para poder ser reemplazados si no prestaren su concurso a la biblioteca. Si es posible, conviene elegir protectores entre las personas nacidas en la localidad, distrito o departamento, en la suposición de que se interesarán más por los progresos de la localidad. Es conveniente que, si es posible, se busquen personas que no levanten mayores resistencias, por sus ideas políticas o religiosas.

20. En la constitución de las Comisiones Populares, como en todo lo que se refiere a las bibliotecas, es necesario proceder prescindiendo de ideas o intereses políticos o religiosos, para mantener la institución neutral y abierta para todos.

21. Las Comisiones Populares, deben consagrarse, principalmente, a llevar los beneficios de la biblioteca a la niñez y a los obreros, por los medios que les aconseje el buen criterio de sus miembros.

(1) Véase también el inciso 28 de este mismo artículo.

22. Las comisiones locales deben preocuparse de que los libros que se obtengan respondan a las necesidades regionales, consultando sus elementos y sus inclinaciones o necesidades, y la orientación del trabajo o industria que convenga acentuar o desarrollar.

23. Las comisiones locales deben preocuparse, no sólo de la instrucción general, sino, principalmente, de facilitar la lectura de libros que tiendan a desarrollar el carácter y a fortificar la voluntad.

24. Las comisiones de bibliotecas situadas en poblaciones fronterizas, deben preocuparse, principalmente, de facilitar libros que tiendan a robustecer el sentimiento nacional.

25. Las comisiones de bibliotecas ubicadas en centros obreros, deben preocuparse de difundir libros que tiendan a asimilar el elemento extranjero y a robustecer el respeto a las leyes e instituciones de la República.

26. Las bibliotecas deben llevar libros de estadística y contabilidad, según el sistema que adopten.

27. Deberán dar cuenta, trimestralmente, a la Comisión Protectora, respecto a lectores, marcha de la institución, fondos y cualquier otro dato que interese a su desenvolvimiento y progreso, remitiendo las estadísticas correspondientes (1).

28. Las bibliotecas podrán usar cualquier sistema de organización, catálogos, libros, etc., según su importancia y elementos que tengan, pero tratando de adaptarse, en lo posible, al sistema decimal simple o complejo (2).

---

(1) La Comisión Protectora envía periódicamente a las bibliotecas planillas especiales, que deben ser llenadas y devueltas con puntualidad. El incumplimiento de este requisito entorpecerá todo trámite de la biblioteca y podrá determinar la suspensión de la protección.

(2) Los catálogos más prácticos son los que se ordenan en ficheros. En lo posible, debe preferírselos a los catálogos llevados en los libros, pues no permiten el orden alfabético riguroso ni todas las modificaciones que admite el sistema de fichas. Para la preparación de los catálogos conviene consultar un manual de bibliotecomanía o servirse del asesoramiento de algún experto. El catálogo por orden alfabético de autores es, desde luego, indispensable. El catálogo por materias puede ser tan sencillo o tan complejo como lo exijan la importancia y las necesidades de la biblioteca. El sistema de clasificación decimal puede ser adoptado en su forma primaria, sin perjuicio de desarrollarlo indefinidamente por bibliotecarios competentes.

XIII

Bibliotecas protegidas

Art. 47. — Las bibliotecas existentes deberán cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en el capítulo anterior, en lo que sean aplicables.

Art. 48. — Cuando una biblioteca existente considere que está constituída y funciona en conformidad a las disposiciones legales, debe pedir, por nota, a la Comisión Protectora, que la declare popular y la incluya en los beneficios de la ley.

Art. 49. — La Comisión Protectora la hará inspeccionar por un Inspector u otro funcionario nacional, y, si se comprobase que está organizada legalmente, la declarará popular, remitiéndole libros gratuitamente y duplicando toda suma que se gire para la adquisición de otros.

Art. 50. — Las comunicaciones dirigidas a la Comisión Protectora, deberán ser siempre firmadas por el Presidente y refrendadas por el Secretario de la biblioteca.

Art. 51. — La Comisión Protectora podrá retirar su concurso a aquellas bibliotecas que no funcionen regularmente o que, por su propaganda, contraríen los intereses vitales de la República, en cuyo caso podrían retirarse los libros donados.

Art. 52. — Las bibliotecas que no reúnan las condiciones legales, sólo podrán ser protegidas limitadamente, con los libros que existan en exceso, y cuando su funcionamiento se considere útil por la Comisión Protectora.

Art. 53. — Dentro de los medios que posee la Comisión, protegerá también a las bibliotecas de los establecimientos superiores de educación, oficinas públicas, instituciones, cuerpos del Ejército o de la Armada, y, principalmente, las cárceles públicas nacionales o provinciales.

Art. 54. — Cuando algunas bibliotecas de éstas, se constituyan en forma popular, con Comisiones Directivas y abiertas al público, serán reconocidas en tal carácter y protegidas con toda la amplitud de la ley.

XIV

Subsidios

Art. 55. — La Comisión Protectora pagará, con los fondos que le entregue el Superior Gobierno, los subsidios votados por el H. Congreso, para las bibliotecas.

Art. 56. — Toda biblioteca que goce de subsidio, debe rendir cuenta documentada de la inversión de los fondos que reciba, y no se pagarán los subsidios subsiguientes si no han sido aprobadas las rendiciones de cuentas anteriores (1).

Art. 57. — Al rendir cuenta, deben acompañar los comprobantes originales, y no «duplicados».

Art. 58. — Cuando la Comisión Protectora tenga informes o razones que le hagan suponer que la biblioteca no funciona regularmente, podrá suspender el pago del subsidio, hasta obtener los informes necesarios.

Art. 59. — Cuando se compruebe que la biblioteca no funciona regularmente, se podrá suspender el pago del subsidio, y si no se regularizara el funcionamiento dentro del término que la Comisión Protectora le señale, podrá ésta declarar caduco el subsidio, o los subsidios pendientes.

Art. 60. — Cuando la Comisión Protectora considere que el subsidio votado para una biblioteca es insuficiente o demasiado elevado, podrá dirigirse, al H. Congreso, transmitiéndole su opinión fundada.

Art. 61. — Las bibliotecas que reciben subsidios deben emplearlos en beneficio de las mismas, dentro del año, contando desde su percepción.

Art. 62. — No podrán reservarse los fondos para edificio u otro destino, sin autorización de la Comisión Protectora, y esta autorización sólo se dará para invertirse en beneficio de la misma institución subvencionada.

Art. 63. — La Comisión Protectora fijará en general o en cada caso, el porcentaje del subsidio que debe emplearse en la adquisición de libros (2).

---

(1) Las rendiciones de cuentas deben efectuarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones impresas que la Comisión Protectora facilita a las Bibliotecas que las solicitan.

(2) Desde luego, cada biblioteca debe ser la primera interesada en aumentar su caudal bibliográfico, para servir a un mayor número de lectores, cuyas necesidades informativas, intelectuales o espirituales sabrá consultar. (Del folleto de la Comisión Protectora, 1942).

Art. 64. — Cuando la biblioteca no empleare, en libros, el porcentaje señalado, la Comisión Protectora podrá retener, al pagar el trimestre subsiguiente, la suma necesaria para cubrirlo.

Art. 65. — La Comisión Protectora duplicará toda suma que les giren las bibliotecas para la compra de libros; pero, cuando se trate de instituciones subvencionadas, podrá resolver que no se dupliquen sino en las inversiones que excedan del monto del subsidio.

Art. 66. — Los pagos de subsidios se harán por intermedio de las sucursales del Banco de la Nación Argentina, o por otros Bancos, si aquél no tuviere sucursales en la localidad, girándose el importe á la orden conjunta del Presidente y del Tesorero de la institución.

Art. 67. — No se pagará ningún subsidio nuevo, sin antes obtener un informe de un funcionario nacional, sobre la existencia y funcionamiento de la biblioteca.

XV

Publicaciones subvencionadas

Art. 68. — La Comisión Protectora pagará, con los fondos que le entregue el Superior Gobierno, los subsidios votados para publicaciones, previa entrega de éstas.

Art. 69. — Cuando la ley de Presupuesto no fije el número de ejemplares que deben entregarse, la Comisión podrá fijarlo, teniendo en cuenta la importancia de la obra y la suma votada.

XVI

Canje internacional

Art. 70. — En conformidad a lo dispuesto por el art. 1.° letra c) del Decreto de 31 de marzo de 1919, la Comisión Protectora atenderá el Canje Internacional con los países que estén adheridos a las convenciones vigentes y con cualquier otro país que lo solicite.

Art. 71. — El Canje Internacional consistirá, no sólo en el cambio de publicaciones oficiales o particulares, sino también en la difusión espontánea de las obras de autores argentinos, en todos los países, y, principalmente, en las naciones americanas.

Art. 72. — Los libros que se reciban serán distribuídos por separado o en paquetes, cuando vengan en esta última forma y con destino especial.

Art. 73. — Cualquier institución o persona podrá entregar publicaciones a la Comisión, para que ésta las distribuya en el exterior, pudiendo indicar las instituciones o personas a las cuales deben remitirse.

Art. 74. — La Comisión Protectora se reserva el derecho de examinar las obras y negar la distribución, en el caso de que no las considere útiles por su forma o su fondo.

XVII

Protección a los autores nacionales

Art. 75. — En virtud de lo dispuesto por el art. 1.°, letras *k)* e *i)* del Decreto de 31 de marzo de 1919, la Comisión protegerá a los autores nacionales, en una de estas formas, según los casos: adquiriendo un número de ejemplares de obras publicadas, o comprometiéndose a adquirirlos, en caso de publicarse.

Art. 76. — También podrá la Comisión encargar, a personas competentes, la redacción de obras sobre temas útiles, comprometiéndose a adquirir un número determinado de ejemplares.

Art. 77. — Las obras adquiridas serán destinadas a las bibliotecas de la República o para el Canje Internacional.

Art. 78. — La Comisión Protectora tiene facultades plenas para adquirir o negarse a adquirir las obras que se le ofrezcan, sin obligación de explicar las razones en que funde sus decisiones.

Art. 79. — Cuando se trate de obras que se refieran a conocimientos especiales, o en cualquier caso en que la Comisión considere que debe asesorarse, tendrá facultad para solicitar el dictamen de los funcionarios nacionales respectivos.

XVIII

Centralización y distribución de publicaciones oficiales

Art. 80. — En virtud de lo que dispone el art. 1.°, letra c) y art. 15 del Decreto de 31 de marzo de 1919, la Comisión Protectora recibirá y centralizará todas las publicaciones oficiales, para lo cual podrá dirigirse a las Oficinas Públicas, pidiendo se le remitan las que hubieran hecho.

Art. 81. — Hecha la distribución, teniendo presente el art. 15 citado, podrá distribuir los ejemplares sobrantes entre las bibliotecas e instituciones, reteniendo, en depósito, para otros fines, los que considere necesarios.

Art. 82. — La Comisión Protectora podrá encargarse también de la distribución de las publicaciones oficiales de las provincias.

XIX

De los empleados

Art. 83. — Los empleados están obligados a concurrir diariamente a la Oficina, desde las 12 a las 18 y los sábados desde las 9 a las 12.

Art. 84. — El Mayordomo llevará un libro de Entradas, en el cual deben firmar los empleados diariamente, y el que será retirado y entregado al Secretario, a las 12 1/4 y, los días sábados, a las 9 1/4.

Art. 85. — El empleado que concurra después de las 12 1/4 o después de las 9 1/4, los días sábados, tendrá media falta. La concurrencia después de las 14 y después de las 10, los días sábados, importará falta entera.

Art. 86. — La ausencia entera será multada con un día de sueldo, y la ausencia a la hora con medio día.

Art. 87. — El importe de las multas pasará a la cuenta de fomento.

Art. 88. — Los empleados tendrán derecho a quince días de licencia por año, y, en caso de enfermedad, hasta cuarenta y cinco días, con goce de sueldo.

Art. 89. — La ausencia por más de cuarenta y cinco días, por enfermedad, sólo se concederá sin goce de sueldo.

Art. 90. — Las ausencias por causas de enfermedad, deberán justificarse por certificado del D. de Higiene, para los empleados que residan en la Capital, y por certificados médicos oficiales, cuando residan fuera de ella. Cuando no exista, en la localidad, médico oficial, podrá justificarse la enfermedad por certificado de un médico particular.

Art. 91. — Cuando un empleado se encuentre enfermo, debe dar aviso, en el día, a la Oficina, verbalmente, por escrito, o por teléfono, para solicitar la concurrencia del médico del D. de Higiene. Si no se diera aviso en el día, se considerará no justificada la falta,

a menos que se trate de un caso excepcional, en el que no se hubiera podido materialmente dar aviso.

Art. 92. — Cuando un empleado no concurriere a la Oficina, por causa fundada, deberá justificarla ante la Presidencia, la que determinará si debe o no imputarse la falta a los quince días que puede tener de licencia, en el año. El simple aviso no exime de la multa.

Art. 93. — Ningún empleado puede salir de la Oficina, en las horas de su funcionamiento, sin permiso del Secretario, y por causas fundadas.

Art. 94. — Los empleados no podrán salir de sus propias oficinas, para pasar a otras, bajo ningún pretexto, debiendo comunicarse por medio de los ordenanzas o por escrito. Si se tratase de un caso inprescindible, deberán pasar, previamente, por la Secretaría, para dar aviso.

Art. 95. — Los empleados que falten a sus deberes o al respeto que deben a sus superiores, serán corregidos por medio de prevenciones, multas, suspensiones y destituciones. Las últimas sólo se aplicarán previa aprobación del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

Art. 96. — Las correcciones disciplinarias que no sean referentes a la asistencia, serán aplicadas por la Comisión Protectora, oyendo antes, por escrito, a los empleados.

Art. 97. — En el caso de que se hubiere aplicado una multa por irregularidad en la asistencia, o se hubiere aplicado otra corrección disciplinaria, podrán dejarse sin efecto, al fin del año, si la conducta del empleado hubiera sido intachable, desde la fecha de la falta. Será ésta una facultad de la Comisión Protectora.

XX

Personal de servicio

Art. 98. — El Mayordomo es el superior inmediato de los ordenanzas y peones y éstos le deben obediencia.

Art. 99. — Los ordenanzas y peones deben hacer el trabajo material de la Oficina, limpieza y cuidado de la casa.

Art. 100. — El Mayordomo es responsable del cuidado de la casa y existencias, y no debe salir de aquélla sin dejar ordenanzas que lo reemplacen, los que se turnarán en los días feriados.

Art. 101. — El Mayordomo está obligado a vigilar la casa, conservar las existencias, muebles y útiles, y cuidar que sólo se hagan los gastos interiores más indispensables.

Art. 102. — Llevará también una libreta en la que debe anotar los pequeños gastos que se hagan, para que se disponga su pago, en oportunidad, por la Comisión Protectora.

XXI

Disposiciones generales

Art. 103. — Los pagos se harán los días 1 a 5, y 15 a 18 de cada mes, y, en ningún caso, se darán preferencias, a menos que se trate de casos especiales, y por orden de la Presidencia.

Art. 104. — Los informes de los empleados serán breves y claros, concretándose a la cuestión, sin hacer comentarios, ni emitir opiniones, a menos que se pidan éstas.

COMISION DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS Y PALEONTOLOGICOS

Ley N.° 9.080, de 7 de marzo de 1913, declarando de propiedad de la Nación las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico.

Artículo 1.° — Se declara de propiedad de la Nación las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico.

Art. 2.° — Nadie podrá utilizar o explotar ruinas o yacimientos sin permiso del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, asesorado por la Dirección del Museo Nacional de Historia Natural (ahora Museo Argentino de Ciencias Naturales) y del Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras.

Art. 3.° — En caso que la conservación de las ruinas implique una servidumbre perpetua, el Estado indemnizará a los propietarios del terreno en que se encuentren las ruinas.

Art. 4.° — Los permisos para las exploraciones sólo podrán ser concedidos a instituciones científicas del país o del extranjero que comprueben que las llevarán a cabo con propósitos de estudio y sin fines de especulación comercial.

Art. 5.° — Sólo será permitida la exportación de objetos duplicados, según informes de la Dirección del Museo Nacional de Historia Natural y del Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras.

Art. 6.° — Todo objeto único no representado en los museos nacionales quedará a favor del mismo como compensación del permiso concedido, entregándose al explorador un modelo del objeto único.

Art. 7.° — El Estado podrá expropiar los objetos arqueológicos, antropológicos y paleontológicos que se hallen en poder de particulares y que estime necesarios para enriquecimiento de los museos nacionales.

Art. 8.° — La Facultad de Filosofía y Letras podrá continuar las exploraciones arqueológicas que tiene organizadas, sin estar obligada a recabar el permiso prescripto en el artículo 2.°.

Art. 9.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 26 de febrero de 1911.

Decreto, de 29 de diciembre de 1921, reglamentando la Ley N.° 9.080

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1921.

Siendo necesario reglamentar la Ley N.° 9.080 sobre protección de Yacimientos arqueológicos, antropológicos, paleontológicos y paleoantropológicos,

El Poder Ejecutivo de la Nación—

DECRETA:

Artículo 1.° — Considérase en general, como yacimiento, todo lugar donde, debido a circunstancias especiales, se encuentren acumulaciones de restos paleoantropológicos, cuya explotación metódica convenga a los intereses de la ciencia.

Art. 2.° — Se entiende por: *Yacimiento Arqueológico o Prehistórico,* todo lugar donde existen restos o ruinas, muebles o inmuebles de cualquier naturaleza que sean, que documenten la existencia y la civilización de las tribus de indígenas que habitaron este país antes del descubrimiento de América.

Yacimiento Antropológico, todo lugar donde existen restos humanos de indígenas, anteriores o posteriores al descubrimiento de América.

Yacimiento Paleontológico o Paleoantropológico, todo lugar donde existen restos de fauna o flora fósiles y restos humanos o de industria humana, de épocas geológicas anteriores a la presente.

Art. 3.° — Las direcciones del Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires (ahora Museo Argentino de Ciencias Naturales), del Museo de la Universidad de La Plata y del Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras, deberán crear y mantener organizada una oficina única común que se denominará «Sección de Yacimientos», en la cual se conservará toda la documentación referente a los permisos que para explorar y explotar los

mencionados yacimientos otorgue el Ministerio Nacional de Justicia e Instrucción Pública, previo asesoramiento de la mencionada Sección con especificación de la procedencia de la solicitud, de la fecha de concesión del permiso, del lugar o de los lugares que hayan de ser explorados y explotados, de la nómina del personal científico que intervenga en cada caso y del número de piezas recogidas por la misión (1).

Art. 4.° — La Sección de Yacimientos deberá asimismo anotar de un modo prolijo, en un mapa especial, todos los yacimientos arqueológicos, antropológicos, paleoantropológicos y paleontológicos que hayan sido comprobados hasta el día y se prueben en el porvenir, numerándolos ordinalmente.

Art. 5.° — Toda solicitud que se presente al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública pidiendo autorización para explorar o explotar uno cualquiera de aquellos yacimientos, deberá ser acompañada de una carta topográfica del lugar, bien delimitado, y los permisos no podrán comprender más extensión territorial que la que en cada caso determine la «Sección de Yacimientos».

Art. 6.° — Cada permiso que se acuerde no podrá durar más de un año; pero si alguna circunstancia atendible, debidamente fundada a juicio de la «Sección de Yacimientos» lo hiciere necesario, dicho plazo podrá ser prorrogado por un año más, así como también podrá ampliarse la extensión del lugar concedido.

Art. 7.° — Mientras un yacimiento está siendo explotado por una misión científica, no se acordará permiso para que otra misión pueda hacerlo contemporáneamente, si la misión que está en uso del permiso no da su anuencia con propósitos de comprobación de alguna duda de carácter científico.

Art. 8.° — Los Directores o Jefes de misiones científicas autorizados por el Ministerio deben tomar minuciosa nota de todos los trabajos que realicen en el terreno, determinar las formaciones o pisos geológicos y clasificar los materiales hallados, inventariándolos detalladamente, para dejar a su regreso copia de todos en la «Sección de Yacimientos».

---

(1) Por Resolución Ministerial, de 26 de diciembre de 1934, se autorizó a la Comisión de Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos para que la Oficina común a que se refiere este artículo, denominada «Sección Yacimientos», tenga como sede permanente al Museo Argentino de Ciencias Naturales.

Art. 9.° — Toda vez que la «Sección Yacimientos», fundada en causa de utilidad científica, lo juzgue conveniente podrá incorporar a cualquiera de las misiones autorizadas para explorar o para explotar yacimientos a uno de los Encargados de Sección o de los Naturalistas viajeros de los tres museos de referencia.

Art. 10. — Cuando una misión haya dado por terminadas sus tareas en el terreno, a su regreso a Buenos Aires, deberá someter a la revisión de la «Sección Yacimientos» todas las colecciones que hubiere reunido, a los fines del estricto cumplimiento de disposiciones contenidas en la Ley N.° 9.080 y en esta Reglamentación.

Art. 11. — A título de compensación del permiso que se le haya concedido, cada vez que una misión científica hallare objetos duplicados, uno de ellos quedará en propiedad de la «Sección de Yacimientos», la que establecerá el Museo al cual debe destinarse. Cuando los duplicados de igual naturaleza fueran múltiples, la mitad de ellos se entregará a la «Sección de Yacimientos» para su distribución.

Art. 12. — Las publicaciones a que dieren lugar las exploraciones o las explotaciones de yacimientos deberán ser enviadas gratuitamente con destino a las Bibliotecas de los tres Museos referidos

Art. 13. — Si una misión científica incurriese en cualquier infracción maliciosa o fraudulenta de las prescripciones contenidas en la Ley N.° 9.080 o en esta Reglamentación, la Institución a la cual pertenezca no obtendrá en lo sucesivo nuevo permiso para hacer exploraciones de ningún género en el territorio argentino.

Art. 14. — En los casos que un investigador de acreditada competencia en cualesquiera de las ramas de las ciencias a que se refiere la Ley, se dispusiese a practicar por su exclusiva cuenta y sin propósito de especulación comercial la exploración y explotación de algún yacimiento, el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, previo informe de la «Sección Yacimientos», podrá conceder el permiso del caso en las mismas condiciones que a las misiones nacionales y extranjeras.

Art. 15. — Cuando se trata de yacimientos paleoantropológicos que, por su excepcional importancia, sirvan para la dilucidación de problemas que de ellos se derivan o ellos plantean, tal como ocurre

con los de Miramar en la provincia bonaerense, el Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires (ahora Museo Argentino de Ciencias Naturales) podrá reservarse el derecho exclusivo de explotarlos, a fin de que la diseminación de los restos u objetos hallados no aminore el valor de las pruebas acumuladas, y tendrán el derecho de hacer otro tanto el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de La Plata y el Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en los yacimientos similares que hubiesen descubierto o descubrieren los hombres de ciencia dependientes de ellos.

Art. 16. — Nadie, ni el propietario de la tierra donde estuviere ubicado un yacimiento, podrá dañarlo, alterarlo o removerlo, y si le resultare indispensablemente necesario disponer de la fracción de tierra en que el yacimiento estuviere ubicado, no podrá hacerlo antes de que la «Sección de Yacimientos» haya intervenido a fin de hacer en él una exploración definitiva de su contenido, para lo cual deberá dar aviso previo al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

Art. 17. — Cuando en la construcción de obras públicas o en excavaciones de propiedad del Estado o de particulares se encuentren restos fósiles o antropológicos u objetos arqueológicos, se deberá, o bien, procederse a su extracción cuidadosa o bien darse aviso inmediato a la «Sección de Yacimientos», para que ella proceda a la extracción, y en ambos casos los restos fósiles o antropológicos y los objetos arqueológicos son de propiedad de dicha Sección.

Art. 18. — Quien hallare en el seno o en la superficie de la tierra uno cualquiera de dichos restos u objetos, deberá denunciar su hallazgo al jefe de la Oficina o de la estafeta de Correos más próxima, quien deberá a su vez trasmitir inmediatamente la denuncia a la «Sección de Yacimientos», para los fines que la Sección juzgue conveniente.

Art. 19. — Queda absolutamente prohibido sacar fuera del país, sin consentimiento de la «Sección de Yacimientos», restos fósiles o antropológicos u objetos arqueológicos, estándole reservado a dicho Instituto el derecho de incorporarlos a sus colecciones, previo justiprecio hecho de conformidad con el propietario de los restos o los objetos o, en caso de disconformidad, haciéndolo determinar por un tercero, entendido en ciencias naturales, designado por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

Art. 20. — Cualquier tentativa de exportación clandestina de restos u objetos aludidos en el artículo anterior, será penada con el decomiso de ellos.

Art. 21. — Todas las infracciones a la Ley 9.080 y a esta Reglamentación serán denunciadas por el respectivo Fiscal ante la Justicia Federal en la Capital de la Nación y en las provincias, y ante la Justicia Letrada en los Territorios Nacionales; y las que importen delitos, serán castigadas en cada caso, según su gravedad, con multa de cien a mil pesos moneda nacional o arresto de uno a seis meses.

El importe de las multas aplicadas como penalidad de tales infracciones, se entregará al Consejo Nacional de Educación, pero si fuere un denunciante particular el que promoviere la acusación fiscal, la mitad de dicho importe le será entregada al denunciante sin más trámite que el de la comprobación de su identidad.

Art. 22. — La «Sección de Yacimientos» tiene el deber de velar por el estricto cumplimiento de la Ley N.° 9.080 y de esta Reglamentación, con autoridad suficiente, delegada en el Presidente, para perseguir a cuantos individuos o corporaciones exploten los yacimientos arqueológicos, antropológicos, paleoantropológicos y paleontológicos sin la debida autorización.

Art. 23. — La Presidencia de la «Sección de Yacimientos» será ejercida alternativamente por los tres señores directores de los Museos citados. Cada Director ejercerá la Presidencia por un año. La primera Presidencia corresponderá al Director del Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires; la segunda, al Director del Museo de La Plata y la tercera al Director del Museo Etnográfico de la Facultad de Letras.

Art. 24. — Todas las disposiciones de esta reglamentación son aplicables por analogía a las exploraciones y explotaciones de carácter etnográfico.

Art. 25. — Cualquier duda que suscite esta reglamentación, o cualquier omisión que pudiera notarse en ella, será resuelta por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, previa consulta hecha a la «Sección de Yacimientos».

Art. 26. — Comuníquese, publíquese, etc.

IRIGOYEN.
J. S. SALINAS.

PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS

Ley N.° 9.339, sancionada el 30 de septiembre de 1913, creando la Institución Argentina de Ciegos, cuya Comisión Directiva, nombrada por el Poder Ejecutivo, ejerce, además, las funciones correspondientes al Patronato de Ciegos.

Artículo 1.° — Créase la «*Institución Argentina de Ciegos*» que comprenderá los departamentos y accesorios para la enseñanza primaria, profesional y artística de los ciegos de ambos sexos.

Art. 2.° — Anexa a dichos departamentos funcionará una sección especial de Kindergarten para ciegos menores de siete años, con todo lo necesario para el cuidado de los mismos.

Art. 3.° — Los departamentos indicados en los artículos anteriores estarán a cargo de una Comisión Directiva nombrada por el Poder Ejecutivo y cuyas funciones serán fijadas de acuerdo con su reglamentación.

Art. 4.° — La Comisión Directiva ejercerá además las funciones correspondientes al Patronato de Ciegos, debiendo organizar y sostener los siguientes departamentos:

a) Consultorio oftalmológico externo y gratuito;

b) Imprenta, biblioteca de ciegos, gimnasios y demás instituciones necesarias a su mejor funcionamiento y propósitos de creación;

c) Asilos para ciegos incapaces.

d) Casa-taller para ciegos adultos.

Art. 5.° — La Institución se sostendrá:

a) Con los fondos que le asigne el presupuesto;

b) Con las becas o subvenciones que le acuerden los Gobiernos de Provincias.

c) Con las donaciones particulares o legados de particulares o asociaciones;

d) Con las utilidades que produzcan la imprenta, los talleres, subscripciones, fiestas, o actos públicos;

e) Con el impuesto nuevo adicional de otro existente cuando se considere conveniente crear ese recurso.

Art. 6.° — El Poder Ejecutivo establecerá el régimen de enseñanza en las distintas secciones de la Institución.

Art. 7.° — El Poder Ejecutivo destinará un terreno en las proximidades de la Capital Federal, donde se construirán los edificios necesarios para los departamentos de que habla la presente ley, quedando autorizado a invertir hasta un millón de pesos moneda nacional, en cuotas de doscientos mil pesos moneda nacional, cada año.

Art. 8.° — El Poder Ejecutivo llamará por licitación pública, en el país y en el extranjero, a concurso de planos para los edificios en que deberá instalarse la Institución, así como establecerá las bases y premios que juzgue necesarios.

Art. 9.° — Autorízase al Poder Ejecutivo la inversión de cien mil pesos moneda nacional en el perfeccionamiento de las dependencias del actual Instituto Nacional de Ciegos.

Art. 10. — Los gastos que demande la ejecución de esta ley se imputarán a la misma mientras no se incluyan en el Presupuesto General de Gastos.

Art. 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 30 días de setiembre de 1913.

Decreto N.° 31.465, del 16 de mayo de 1939, estableciendo que las funciones correspondientes al Patronato Nacional de Ciegos y la Dirección de la Institución Argentina de Ciegos, las ejercerá una Comisión Directiva Honoraria, integrada por un Presidente y siete Vocales designados por el Poder Ejecutivo, los que durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelectos.

Buenos Aires, mayo 16 de 1939.

CONSIDERANDO:

Que es necesario armonizar las funciones del Patronato de Ciegos, instituído por el artículo 4.° de la Ley 9339, con las que corresponden a la Comisión Directiva de la Institución Argentina de Ciegos, creada por la misma ley.

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.° — Las funciones correspondientes al Patronato de Ciegos y la Dirección de la Institución Argentina de Ciegos las ejercerá una Comisión Directiva honoraria, integrada por un Presidente y siete Vocales designados por el Poder Ejecutivo, los que durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelectos.

Las vacantes originadas por cualquier causa serán llenadas por el Poder Ejecutivo y el reemplazante completará el período del reemplazado.

El organismo unificado funcionará con la denominación de *Patronato Nacional de Ciegos* y tendrá las facultades y obligaciones que a continuación se expresan:

Art. 2.° — *Del Patronato*:

Son funciones inherentes de la Comisión Directiva con respecto al Patronato:

a) Cumplir lo que disponen los artículos 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de la Ley 9339, sometiendo a la aprobación del Ministerio los planes que proyecte a esos fines;

b) Ejercer superintendencia en todos los establecimientos oficiales destinados a la protección o educación del ciego y sobre las instituciones de carácter privado destinadas al mismo fin, cuando reciban subvenciones del Estado y controlar las que no reciban subvenciones;

c) Proponer las medidas administrativas o reformas de legislación para la tutela del ciego y proyectar el plan general para la construcción y organización de los institutos destinados a los mismos, que fueren necesarios en la Capital, Provincias o Territorios Nacionales;

d) Intervenir y resolver en todo lo referente a donaciones e instituciones testamentarias destinadas a combatir la ceguera o la tutela del ciego en cualquiera de sus formas.

Art. 3.° — *De los Institutos, Consultorios, etc.*:

Son funciones de la Comisión Directiva con respecto a los institutos, consultorios, etc., de su dependencia:

a) Disponer la admisión de ciegos de acuerdo con los reglamentos respectivos de cada establecimiento;

b) Dictar los planes de estudio, aprendizaje de artes, oficios, industria y labores agrícolas apropiados a cada establecimiento y fijar los programas y épocas de examen, estableciendo las condiciones de promoción de los alumnos;

c) Autorizar las licitaciones públicas o privadas de conformidad con las leyes y decretos vigentes, distribuir las partidas de gastos que deban invertirse en los servicios extraordinarios conforme lo disponga la ley de Presupuesto; autorizar los gastos extraordinarios; controlar las cuentas para su pago; intervenir en la contabilidad y en todo manejo de fondos; y rendir cuentas en la forma que lo determina la Ley de Contabilidad y los decretos que la reglamentan;

d) Fijar el racionamiento de los empleados y asilados, el horario de trabajo y dictar los reglamentos internos de los institutos, consultorios, asilos, etc.;

e) Autorizar la venta de productos, cuyo importe se depositará en la División Administrativa del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación en cuenta especial para ser aplicada por intermedio de la Comisión a la instalación o ampliación de talleres, premios de estímulo al personal, viáticos, gastos de emergencia y peculio de los ciegos que trabajen en los Institutos dependientes del Patronato;

f) Proyectar el Presupuesto anual de los establecimientos a su cargo, elevándolo al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación.

Art. 4.° — *Del Patrimonio*:

El patrimonio del Patronato Nacional de Ciegos se formará con los fondos que obtenga mediante los recursos especificados en el art. 5.° de la Ley 9.339.

Art. 5.° — *De la Comisión Directiva*:

Son atribuciones de la Comisión Directiva:

a) Distribuir las funciones entre sus Vocales con excepción del cargo de Presidente que será designado por el Poder Ejecutivo, y delegar en uno o más Vocales el ejercicio de las atribuciones que le corresponden;

b) Dictar su reglamento interno y nombrar y remover los empleados de la Comisión y de los establecimientos de su dependencia, hasta la categoría de auxiliar 8.° ($ 200,00) inclusive. Proponer al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, para su designación por el Poder Ejecutivo, los candidatos a ocupar los cargos de categoría superior a la indicada. Aplicar sanciones disciplinarias y conceder licencias conforme a las reglamentaciones vigentes, comunicando tales resoluciones al citado Ministerio;

c) Publicar una Memoria anual sobre el desenvolvimiento de su acción y movimiento administrativo de los establecimientos de su dependencia;

d) Requerir directamente de cualquier autoridad administrativa informes conducentes a sus propios fines;

e) Resolver sobre el otorgamiento de poderes y toda otra clase de actos jurídicos y contratos. Promover todas las ac-

ciones judiciales y cuantos más recursos fueren pertinentes;

f) Designar comisiones asesoras auxiliares de carácter transitorio y nombrar comisiones honorarias en las Provincias o Territorios para los fines filantrópicos que la guíen.

Art. 6.° — Toda iniciativa que deseare presentar un miembro de la Comisión Directiva deberá elevarse a la Presidencia para que ésta lo someta a consideración en la sesión oportuna, será fundada, y cuando implique inversión de fondos, preverá la fuente del recurso. Igualmente todo informe que deseare algún miembro de la Comisión Directiva deberá requerirse por intermedio de la Presidencia, la que dispondrá los medios necesarios para suministrarlo.

Art. 7.° — *Del Presidente*:

Son funciones del Presidente:

a) Representar al Patronato Nacional de Ciegos en todos los actos y relaciones oficiales en que intervenga la Institución;

b) Presidir las sesiones de la Comisión Directiva; decidir con su voto las deliberaciones, prevaleciendo el suyo en caso de empate; ejecutar las resoluciones de la Comisión; y designar al Vocal que temporariamente deba reemplazarlo en caso de ausencia o licencia;

c) Dirigir inmediatamente y por sí solo las oficinas de su dependencia, proveer a sus necesidades y atender en los casos urgentes, no estando reunida la Comisión Directiva, todo lo relativo al buen gobierno y administración general de la Institución con cargo de rendirle cuenta. La Comisión Directiva no podrá desaprobar los actos del Presidente sino con el voto de los dos tercios del total de los Vocales que constituya la Comisión Directiva;

d) Suscribir todas las comunicaciones y resoluciones de cualquier género que sea, conjuntamente con la firma del funcionario administrativo que se designe. En caso de ausencia o licencia suscribirá tales resoluciones el Vocal que designe la Presidencia;

e) Suscribir todos los cheques y valores que se libren y endosar los que se perciban conjuntamente con la firma del Tesorero y funcionario administrativo que se designe. En caso de ausencia o licencia suscribirá tales valores el Vocal que designe la Presidencia;

f) Suscribir todos los documentos e instrumentos públicos y privados en que sea parte o intervenga la Institución.

Art. 8.° — *De la Comisión Consultiva*:

Créase una Comisión Consultiva permanente, compuesta de diez Vocales honorarios, que será convocada en todas las oportunidades que el Presidente lo crea oportuno y tendrá por misión asesorar sobre los asuntos de carácter técnico y administrativo que se le sometan a consideración, siendo necesaria la asistencia de la mitad de los miembros designados, por lo menos, para que se celebre reunión.

Art. 8.° — Déjanse sin efecto los Decretos anteriores referentes a la materia.

Art. 9.° — Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional y archívese.

ORTIZ.
JORGE EDUARDO COLL.

Decreto N.° 31.466, del 16 de mayo de 1939, designando los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Consultiva del Patronato Nacional de Ciegos.

Buenos Aires, 16 de mayo de 1937.

CONSIDERANDO:

Que por decreto de la fecha se ha organizado el Patronato Nacional de Ciegos unificándose con ese nombre a la Comisión Directiva de la Institución Argentina de Ciegos y al Patronato de Ciegos.

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.° — Desígnase Presidenta del Patronato Nacional de Ciegos a la señora María Adela Ayarragaray de Pereda.

Art. 2.° — Desígnanse Vocales de la Comisión Directiva del Patronato Nacional de Ciegos a las señoras: Adelia María Harilaos de Olmos, Josefina Vedoya de Ocampo, Elvira Godoy de Godoy; y a los señores: Alberto Fernández Saralegui, Jorge Malbrán, Agustín Pestalardo y Manuel Gómez.

Art. 3.° — Desígnanse Vocales de la Comisión Consultiva del mismo Patronato a las señoras: María Luisa Iribarne de Ortiz, Ana Bernal de Justo, María Elena Alvear de Santamarina, Dolores Anchorena de Elortondo, a la señorita Clotilde Arrieta y Etchepare, a S. S. I. Monseñor Miguel de Andrea, y a los señores Ernesto Padilla, Alberto Giménez Zapiola, Juan F. Cafferata y Amadeo Natale.

Art. 4.° — Dense las gracias por los importantes servicios prestados, a los ex miembros de la Institución Argentina de Ciegos.

Art. 5.° — Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional y Archívese.

ORTIZ.
JORGE EDUARDO COLL.

Decreto N.° 119.851, del 13 de mayo de 1942 designando Presidente y Vocales, por un nuevo período, del Patronato Nacional de Ciegos.

Buenos Aires, 13 de mayo de 1942.

Atento a la expiración del período para que fueron designados los Miembros de la Comisión Honoraria del Patronato Nacional de Ciegos;

El Vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

DECRETA:

Artículo 1.° — Desígnase por un nuevo período, Presidenta del Patronato Nacional de Ciegos, a la señora María Adela Ayarra-

garay de Pereda; y Vocales de la Comisión Directiva, a las señoras Adelia M. Harilaos de Olmos, Josefina Vedoya de Ocampo y María Teresa Ayerza de Tezanos Pinto y a los señores Agustín Pestalardo, Manuel Gómez, Mariano Castex y Amadeo Natale.

Art. 2.° — Dense las gracias a los Miembros cesantes por los servicios prestados.

Art. 3.° — Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional y archívese.

CASTILLO.
GUILLERMO ROTHE.

COMISION PARA LA MEDICION DE UN ARCO DE MERIDIANO

Ley N.° 12.334, de 31 de diciembre de 1936, sobre Medición de un Arco de Meridiano a lo largo del Territorio Nacional

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de—

LEY:

Artículo 1.° — Procédase a la medición de un arco de meridiano a lo largo de todo el territorio nacional, destinada a satisfacer las necesidades prácticas de las Obras Públicas y de la investigación de la forma y dimensiones de la tierra.

Art. 2.° — La dirección científica y administrativa de los trabajos estará a cargo de una comisión autónoma dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, que será presidida por la persona o funcionario que designe el Poder Ejecutivo e integrada por seis vocales representantes del Instituto Geográfico Militar, del Servicio Hidrográfico de la Marina, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Nacional de Córdoba y del Museo de La Plata. Los miembros de esta Comisión ejercerán cargos *ad honorem.*

Art. 3.° — El Instituto Geográfico Militar, el Servicio Hidrográfico de la Marina y las Universidades Nacionales de Buenos Aires y de La Plata, sin desatender sus tareas ordinarias, colaborarán en esta obra con todo el personal y material disponibles.

Art. 4.° — La comisión nombrada queda autorizada a solicitar directamente de las diversas reparticiones del Estado, el concurso necesario para la mejor realización de la obra que le está encomendada.

Art. 5.° — Antes de comenzar las operaciones en el terreno, la comisión elevará al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, para su aprobación por el Poder Ejecutivo, un reglamento general de la conducción de los trabajos, informará anualmente a dicho

ministerio sobre la marcha de los mismos y le rendirá cuenta documentada de la inversión de los fondos respectivos.

Art. 6.° — Estos trabajos son de utilidad pública y los encargados de realizarlos tendrán acceso a los lugares elegidos para las observaciones, previo aviso a los ocupantes. Las personas que dañen los monumentos y marcas dejadas en el terreno, serán castigadas conforme a las leyes penales.

Art. 7.° — El Poder Ejecutivo dispondrá la entrega anual de doscientos treinta mil pesos moneda nacional de curso legal ($ 230.000 m|n.), durante doce años, a la comisión expresada en el art. 2.° con destino a cubrir los gastos que demande la adquisición de instrumentos y material, la conducción de los trabajos de campo y gabinete y la publicación de los resultados obtenidos por la misma.

Art. 8.° — Los gastos referidos en el art. 7.° serán atendidos, hasta tanto se consideren en la ley de presupuesto, con fondos de rentas generales con imputación a la presente ley.

Art. 9.° — El Ministerio de Hacienda dispondrá que la Contaduría General de la Nación proceda a transferir de un ejercicio a otro dada la naturaleza especial de los trabajos a realizarse, los saldos acreedores que la cuenta respectiva arroja al finalizar un determinado período financiero.

Art. 10. — El Poder Ejecutivo adoptará las medidas del caso para que se incluyan en los próximos proyectos de presupuestos generales los gastos que significa el cumplimiento de esta ley.

Art. 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires a 21 de diciembre de 1936.

Registrada bajo el N.° 12.334.

JULIO A. ROCA — CARLOS M. NOÉL
Gustavo Figueroa — *Carlos G. Bonorino*

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1936.

Téngase por Ley de la Nación, comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO.
JORGE DE LA TORRE.

Decreto, de 8 de mayo de 1937, reglamentario de la Ley N.° 12.334 y designando la Comisión encargada de la medición de un arco de meridiano.

Buenos Aires, 8 de mayo de 1937.

Visto que la Ley N.° 12.334 dispone que se proceda a la medición de un arco de meridiano a lo largo de todo el territorio nacional, destinada a satisfacer las necesidades prácticas de las obras públicas y de las investigaciones de la forma y dimensiones de la Tierra, y teniendo en cuenta las propuestas formuladas por los Ministerios de Guerra y Marina, Universidades Nacionales de Buenos Aires, La Plata y Córdoba y Museo de La Plata, para constituir la Comisión autónoma *ad-honorem* creada por el art. 2.° de la citada ley, y atento que dicho artículo faculta al Poder Ejecutivo para designar la persona que ha de presidirla,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.° — Nómbrase Presidente de la Comisión Autónoma *ad honorem,* encargada de la medición de un arco de meridiano a lo largo del territorio nacional, a que se refiere el art. 2.° de la Ley N.° 12.334, al Ingeniero Félix Aguilar, actual Director del Observatorio de La Plata y vocales a los señores: Coronel Baldomero de Biedma, Director General acc. del Instituto Geográfico Militar; Teniente de Navío (R.) Melchor S. Escola, del Servicio Hidrográfico de la Armada; Ingeniero Eduardo E. Baglietto, profesor titular de Geodesia de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires; Monseñor Fortunato Devoto, en representación de la Universidad Nacional de La Plata; Ingeniero Julio de Tezanos Pinto, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba; y doctor Joaquín Frenguelli, Director del Instituto del Museo de La Plata.

Art. 2.° — De conformidad con lo dispuesto por el art. 3.° de la Ley, el Instituto Geográfico Militar, el Servicio Hidrográfico de la Marina y las Universidades Nacionales de Buenos Aires y La Plata sin desatender sus tareas ordinarias, colaborarán en esta obra con todo el personal y material disponibles.

Art. 3.° — El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Guerra y Marina y de Justicia e Instrucción Pública.

Art. 4.° — Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO. — JORGE DE LA TORRE. — BASILIO B. PERTINÉ. — E. VIDELA.

Decreto, de 23 de diciembre de 1937, aprobando el Reglamento para la Comisión encargada de la medición de un arco de meridiano

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1937.

Visto el precedente proyecto de Reglamento que eleva para su aprobación, el Presidente de la Comisión encargada de la medición de un arco de meridiano a lo largo del territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto por el art. 5.° de la Ley N.° 12.334 y atento las informaciones producidas,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.° — Apruébase el siguiente Reglamento para la Comisión encargada de la medición de un arco de meridiano a lo largo del territorio nacional:

Artículo 1.° — La Dirección científica y administrativa de los trabajos señalados por el Art. 1.° de la Ley 12.334, será ejercida por el organismo a que se refiere su Art. 2.°, conforme a las prescripciones generales fijadas en aquélla y en la presente Reglamentación.

Art. 2.° — Dicho organismo se denominará: «*Comisión para la medición de un arco de meridiano, Ley 12.334*», y actuará con sede ordinaria en la Capital Federal.

Art. 3.° — La Comisión es una repartición del Estado que estará bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, pero conservará su autonomía técnica y administrativa.

Art. 4.° — Ella estará formada como lo dispone el art. 2.° de la Ley N.° 12.334 y sus miembros nombrarán un Vicepresidente para sustituir al Presidente designado por el Poder Ejecutivo en caso de impedimento momentáneo del mismo para el desempeño de su cargo, o hasta que se nombre a quien desempeñará esa función si el impedimento es definitivo.

Art. 5.° — La Comisión formulará anualmente el plan de trabajos para el año venidero y realizará por sí o por subcomisiones de su seno los estudios técnicos relacionados con la conducción de las operaciones.

Art. 6.° — Los miembros de la Comisión podrán presenciar las operaciones de campo así como inspeccionar los trabajos de gabinete, para lo cual el presidente adoptará las medidas necesarias.

Art. 7.° — Los miembros de la Comisión son responsables personales y solidarios de las transgresiones en que incurrieren en la administración de los recursos que la Ley ha fijado, a menos que, en acta, dejen constancia expresa de su oposición a la ejecución de los gastos que no correspondan.

Art. 8.° — La Comisión sesionará ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente cuando sea convocado por su presidente si algún asunto de importancia lo reclama, o a pedido de dos de sus miembros.

Art. 9.° — El *quorum* para sesionar se formará con la presencia de la mitad más uno de los miembros de la Comisión.

Las resoluciones que ésta acuerde se tomarán por simple mayoría de votos. Ninguno de sus miembros podrá abstenerse de votar, salvo que se trate del caso contemplado en el art. 11 de este Reglamento, pero, si lo desean, pueden dejar constancia en actas de su voto y fundamento.

En el caso de la reconsideración de un asunto, será necesario el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la reunión.

Art. 10. — Un asunto resuelto ya en sesión anterior por la Comisión, sólo podrá tratarse en otra reunión posterior si el número de miembros presentes en ésta, es por lo menos igual al que lo resolvió en aquélla.

Art. 11. — En los casos en que la Comisión deba considerar actos relacionados con funciones cumplidas o atribuídas a alguno de sus miembros éste no podrá votar en el momento de resolverse la cuestión.

Art. 12. — Las resoluciones que acuerde la Comisión se asentarán en un libro de actas que será foliado y estará rubricado por el Sr. Subsecretario del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

Las actas levantadas con motivo de cada sesión, una vez leídas y aprobadas por la Comisión, serán firmadas inmediatamente por el presidente y el secretario.

Art. 13. — El presidente es el director inmediato de los trabajos de la medición del arco y el representante oficial de la Comisión, que por su intermedio ejerce las facultades que le son propias.

Los demás miembros carecen de funciones ejecutivas.

Art. 14. — Son atribuciones y deberes del presidente:

a) Convocar las reuniones de la Comisión y presidir, dirigiendo las deliberaciones;

b) Cumplir y hacer cumplir a quienes corresponda, las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y las resoluciones que aquélla adopte, y resolver los casos urgentes o no previstos, dando cuenta en la primera sesión que se realice;

c) Tomar parte en las deliberaciones y votar las cuestiones que deban resolverse, decidiendo con su voto en caso de empate al votarse por segunda vez luego de reabierto el debate, en cuyo caso su pronunciamiento será definitivo;

d) Autorizar con su firma las actas de las sesiones, las resoluciones de la Comisión y los documentos de toda índole que emanen de ésta;

e) Designar los miembros de las Comisiones internas que requiera el estudio de los asuntos;

f) Ejercitar por sí o por apoderado, las cuestiones legales que conciernen a la Comisión;

g) Proponer el nombramiento o remoción del personal y adoptar las medidas disciplinarias que correspondan, dando cuenta a la Comisión en la primer sesión que celebre;

h) Ordenar los pagos conforme a las normas fijadas por los artículos 30 y 31.

Art. 15. — El Vicepresidente será nombrado como lo establece el art. 4.° en la primera sesión que se realice en cada año y puede ser reelecto.

Art. 16. — La Comisión nombrará, a propuesta del presidente, un secretario y un contador rentados. El secretario tendrá las siguientes funciones:

a) Registrar los expedientes y su trámite;

b) Redactar la correspondencia oficial, proyectar el despacho de los asuntos conforme con las instrucciones que reciba al respecto, preparar los trabajos, informes y antecedentes que le sean ordenados y confeccionar las actas de las sesiones que celebre la Comisión;

c) Llevar un registro en el que asentará todas las resoluciones dictadas por la Comisión;

d) Organizar el archivo de las disposiciones legales y reglamentarias y de las resoluciones Ministeriales o decretos del Poder Ejecutivo relacionadas con la Comisión;

e) Conservar ordenadamente la documentación que se vaya originando excepto la relativa a ingresos o pagos;

f) Refrendar en todos los casos la firma del señor presidente;

g) Actuar como secretario de las comisiones internas que se designen.

Art. 17. — El contador de la Comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Llevar la contabilidad general de la institución asentando diariamente sus operaciones;

b) Preparar las liquidaciones y órdenes de pago e intervenir en los que ordene la Superioridad efectuándolos y conservando en forma ordenada la documentación respectiva;

c) Registrar los cargos a que haya lugar, cualquiera sea su concepto o naturaleza, para deducirlos de las cuentas o sueldos que se abonen;

d) Preparar las rendiciones de cuentas que deban presentarse a la Contaduría General de la Nación y los balances mensuales y generales de cada ejercicio;

e) Tener a su cargo la «caja chica», cuyo fondo se establece en la suma de $ 200.00 m/n. para atención de los gastos comunes menores debiendo rendir cuenta mensualmente de los pagos efectuados, al señor Presidente.

Art. 18. — El contador observará todo pago que no se ajuste a las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes, pero si su ejecución se insiste por quien corresponda, dará curso al documento respectivo, quedando en tal caso eximido de toda responsabilidad.

Art. 19. — Observará estrictamente las prescripciones de la Ley de Contabilidad N.° 428 y acuerdos que la reglamentan así como las de toda otra Ley de carácter general que le comprenda (de Jubilaciones, de Impuestos a los Réditos, etc.).

Art. 20. — Toda compra-venta de instrumentos, material, etc., que efectúe la Comisión, se hará observando el procedimiento que señala la Ley N.° 428, debiendo requerirse del Poder Ejecutivo la autorización necesaria cuando concurran las excepciones al remate público establecidas por los incisos 2.° al 6.° del art. 33 de dicha Ley.

Art. 21. — Cuando la compra-venta o convención sobre trabajos o suministros no alcance al límite de $ 5.000 m/n., pero sea superior a $ 300 m/n. se realizará mediante concurso privado de tres precios por lo menos.

Art. 22. — Teniendo presente la modalidad especial de los trabajos que debe efectuar la Comisión, para el pago del personal que se destaque en el interior del país y de los gastos en que incurran las Comisiones para medir el Meridiano en los distintos puntos, dictará disposiciones especiales que contemplen esa modalidad, que podrá aplicar previa conformidad de la Contaduría General de la Nación.

Art. 23. — La Comisión rendirá cuenta trimestral de sus ingresos y egresos, cualquiera sea su índole, a la Contaduría General de la Nación, previa aprobación de las mismas.

Art. 24. — Anualmente, la Comisión someterá a consideración del Poder Ejecutivo, el proyecto de su Presupuesto de Gastos que ha de regir durante el ejercicio siguiente.

Art. 25. — La Comisión elevará anualmente al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, antes del 30 de marzo una memoria detallada en que conste el resultado de su gestión y de los trabajos realizados en el año anterior.

Art. 26. — La Comisión dispondrá se lleve un inventario general de sus existencias que actualizará anualmente.

Art. 27. — Los fondos asignados a la Comisión por la Ley N.° 12.334 o las de Presupuesto que corresponda, estarán depositados en el Banco Central de la República Argentina, en una cuenta de-

nominada «Comisión Ley 12.334» y a la orden conjunta del Presidente y funcionario que desempeña el cargo de Contador.

Art. 28. — La Comisión no podrá recibir los fondos que le asigna el presupuesto de un ejercicio, si no hubiese rendido cuenta de los correspondientes a los tres primeros trimestres del anterior.

Art. 29. — La Contaduría General de la Nación transferirá de un ejercicio a otro los saldos acreedores que en cada año arroje la cuenta de la Comisión.

Art. 30. — Todo gasto por una suma mayor de $ 500 m/n. deberá ser resuelto por la Comisión, salvo que se trate de sueldos u otras erogaciones periódicas o fijas ya establecidas por ésta.

Los gastos inferiores a la cantidad expresada podrán ser ordenados por el Presidente.

Art. 31. — Los pagos que debe efectuar la Comisión que excedan de $ 100 m/n. se harán por medio de cheques a la orden, los cuales serán intervenidos por el contador y firmados conjuntamente por éste y por el presidente.

Art. 32. — Conforme a lo dispuesto por los artículos 3.° y 4.° de la Ley que se reglamenta, la Comisión está autorizada a requerir directamente la cooperación de todas las reparticiones dependientes del Poder Ejecutivo, y éstas quedan obligadas a prestársela sin restricciones, siempre que no resulte afectado el normal desarrollo de sus propios servicios, en cuyo caso deberá poner el hecho en conocimiento de la Superioridad, para las medidas que sea útil adoptar.

La Comisión dará cuenta al Poder Ejecutivo de todo incumplimiento a esta disposición a los fines disciplinarios pertinentes.

Art. 33. — Todos los instrumentos y materiales que para llenar su cometido deba introducir al país la Comisión, y que vengan directamente consignados a ella, quedan exceptuados de llenar las formalidades impuestas por el decreto N.° 112 de 8 de junio de 1933.

Art. 34. — Los empleados que designe la Comisión quedan comprendidos en la Ley Nacional de Jubilaciones y en todas las disposiciones de carácter general que rijan para el personal civil de la administración.

La Comisión preverá en cada presupuesto, la suma que corresponda en concepto de aporte patronal.

Art. 35. — A la terminación de su cometido, las existencias que acuse el inventario de la Comisión pasarán al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y toda su documentación se entregará para su archivo al Instituto Geográfico Militar.

Art. 2.° — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de Justicia e Instrucción Pública, de Hacienda, de Guerra y de Marina.

Art. 3.° — Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO. — JORGE DE LA TORRE. — CARLOS A. ACEVEDO. — BASILIO B. PERTINÉ. — E. VIDELA.

Decreto N.° 122.359.

COMISION NACIONAL DE AYUDA ESCOLAR (1)

Ley N.° 12.558, de 14 de octubre de 1938, sobre protección a los niños en edad escolar

El Senado y Cámara de Diputados, etc.—

Instituciones complementarias de la educación común

TITULO I

Asistencia médica y social del niño

Artículo 1.° — Créase una comisión compuesta por el ministro de Justicia e Instrucción Pública o su representante, el presidente del Consejo Nacional de Educación y el presidente del Departamento Nacional de Higiene, la que tendrá por objeto el cuidado de la salud física y moral de la niñez en edad escolar, especialmente en las provincias del Norte y territorios nacionales.

---

(1) La primera Comisión Nacional de Ayuda Escolar fué creada por decreto del Poder Ejecutivo, de 10 de mayo de 1937, cuyo texto, con fines ilustrativos, se transcribe a continuación:

«Buenos Aires, 10 de mayo de 1937.

Visto la necesidad de resolver el problema de la asistencia infantil entre los niños concurrentes a las escuelas primarias a fin de que puedan asistir a los cursos en condiciones fisiológicas y de higiene adecuada, y

CONSIDERANDO:

Que dicha exigencia se torna imperiosa en algunas regiones del país debido a sus escasos recursos naturales;

Que, como ha podido observar el Excmo. Sr. Presidente de la Nación durante su reciente jira por el Noroeste del país, existen escolares de las humildes escuelas diseminadas en el interior, lejos de centros poblados de alguna importancia, que concurren a clase —después de una larga jornada de camino— sin haberse alimentado de un modo conveniente;

Que es deber de gobierno subsanar con urgencia y en salvaguardia de la salud de la raza tal anomalía, mediante el arbitrio de recursos suficientes que refuerzen la acción que en este sentido realiza ya el Estado y las instituciones privadas,

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros—

DECRETA:

Artículo 1.° — Destínase la suma de un millón de pesos moneda nacional de curso legal (pesos 1.000.000 m|n.) para la asistencia infantil consistente en la pro-

Art. 2.° — Esta comisión se ocupará especialmente de la asistencia médicoescolar, efectuándola en la siguiente forma:

a) Atención gratuita a domicilio y en consultorio;

b) Servicios públicos gratuitos;

c) Examen y asistencia de los niños en los locales de las escuelas;

d) Difusión de instrucciones sobre enfermedades, especialmente regionales y sus profilaxis;

e) Distribución gratuita de medicamentos.

Art. 3.° — Los servicios a que se refieren los apartados *a), b)* y *c)* del artículo anterior, estarán bajo la dirección de médicos y odontólogos que serán designados preferentemente entre los profesionales de la región. Las demás funciones serán desempeñadas por los maestros y las visitadoras de higiene. El personal afectado a estos servicios será permanente o temporario y será designado por el Poder Ejecutivo a propuesta de la comisión y su remuneración se fijará por mes o de acuerdo con los servicios efectivos prestados, o en ambas formas, según lo determine la comisión en cada caso.

Art. 4.° — El Consejo Nacional de Educación arbitrará los medios necesarios para asegurar la preparación de los maestros de su dependencia, a fin de que puedan practicar curaciones a los niños de su grado, si fueran enfermos de tracoma o de otras enfermedades de fácil tratamiento, bajo la vigilancia técnica correspondiente.

---

visión de alimentos y ropa, con destino a los niños concurrentes a la escuela primaria en las provincias de: Córdoba, Tucumán, San Luis, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y Santiago del Estero.

Art. 2.° — Nómbrase, en comisión, a los señores, Subsecretario del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, don Manuel Villada Achával, doctor José Rezzano, Vocal del Consejo Nacional de Educación; doctor Jorge Coll, Presidente del Patronato Nacional de Menores, doctor Juan Esteban Pessano, Médico del Departamento Nacional de Higiene; Inspector General de Enseñanza, Secundaria, Normal y Especial, profesor don Juan Mantovani, e Inspector Técnico General de Enseñanza Incorporada, doctor Aurelio García Elorrio, para que dispongan lo necesario para la más urgente distribución de los recursos arbitrados en el artículo anterior de acuerdo con las necesidades propias de cada región, y pudiendo utilizar al efecto la colaboración del personal de Inspección, Directivo y Docente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y de las Cooperadoras Escolares reconocidas oficialmente allí donde estuvieran establecidas.

Art. 3.° — El gasto que autoriza el presente decreto se tomará de Rentas Generales con imputación al presente Acuerdo de Ministros, con cargo de oportuno reintegro con el crédito a solicitarse oportunamente del Honorable Congreso de la Nación.

Art. 4.° — Comuníquese, publíquese, anótese, y dése al Registro Nacional, y cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda de la Nación.

JUSTO. — *Jorge de la Torre.* — *R. M. Ortiz.* *E. Videla.* — *Ramón S. Castillo y R. M. Alvarado*».

(Memoria del Departamento de Instrucción Pública del año 1937, pág. 127).

El servicio sanitario a cargo de los maestros se cumplirá de acuerdo a las instrucciones que impartirá la comisión.

Art. 5.° — La comisión está facultada para:

a) Convenir con los gobernadores de provincia o reparticiones encargadas de la educación pública, municipios, instituciones nacionales y particulares de asistencia social, la obra sanitaria a realizar de acuerdo a las normas que se establezcan;

b) Acordar todas las medidas tendientes a hacer más eficaz la ayuda a los escolares necesitados y estimular la acción de las sociedades cooperadoras que de ella dependan, tratando de coordinarla y centralizarla a los fines de esta ley en la parte prevista por la misma;

c) Acordar, asimismo, con los consejos de educación de las provincias la misma acción de coordinación en las escuelas que de ellos dependan, debiendo dictarse para cada zona, normas que hagan efectiva la asociación vecinal;

d) Reconocer y subvencionar las asociaciones que tengan por misión centralizar la acción de las cooperadoras escolares, regionales y otras organizaciones constituídas por los padres o vecinos amigos de la educación, que presten auxilio en material, alimentos, vestidos u otra ayuda, a la escuela o escuelas de su jurisdicción. Para ese reconocimiento se deberá acreditar la existencia de fondos sociales propios, la organización de asistencia médica y la ayuda en forma de subsidio, remedios, provisión de víveres, ropas, etcétera, a las cooperadoras escolares;

e) Distribuir por intermedio de los directores de escuela o de las cooperadoras escolares, según lo crea conveniente, los subsidios para la alimentación de los niños;

f) Controlar y fiscalizar, de acuerdo a las reglamentaciones que se dicten, y por intermedio de sus autoridades, la inversión de fondos y el servicio que se preste a la asistencia de los escolares;

g) Procurar la instalación de comedores escolares en los cuarteles de los regimientos en que fuera apropiado prestar dichos servicios o en locales que faciliten los gobiernos de provincia o instituciones particulares;

h) Dotar a las escuelas nacionales y provinciales de botiquines provistos de medicamentos y de los útiles necesarios para curaciones oftálmicas y otras, con las instrucciones pertinentes para su tratamiento;

i) Propender por todos los medios a la fundación de sociedades cooperadoras o de amigos de la educación que hagan suyos los fines de la ley.

Art. 6.° — Donde las necesidades de los escolares lo requieran, la comisión, en representación del Estado, asumirá la responsabilidad de proveer de alimentos a los niños en comedores escolares.

Art. 7.° — La contribución a las sociedades cooperadoras escolares para el sostenimiento de regímenes de alimentación u otra ayuda, deberá ser libre. Cada sociedad cooperadora tendrá que estar vinculada a una asociación central de la provincia o territorio nacional.

Art. 8.° — Toda sociedad cooperadora o confederación de sociedades que desee acogerse a los beneficios de esta ley, deberá dirigirse a la comisión, a los fines de su reconocimiento, acreditando su organización.

TITULO II

Escuelas hogares

Art. 9.° — El Consejo Nacional de Educación procederá a la instalación de escuelas hogares en aquellos sitios en que notoriamente las condiciones de ambiente lo reclamen, previos los estudios técnicos y la aprobación de la comisión creada por esta ley.

Art. 10. — Los hogares escuelas se instalarán en lugares higiénicos apropiados, con superficie de tierra apta para el cultivo y corrientes naturales, u otra agua potable.

Art. 11. — Los hogares escuelas funcionarán en locales económicos y sencillos, que consulten las exigencias médicopedagógicas, debiendo utilizar en su construcción, en cuanto sea posible, materiales de la región. Tendrán las condiciones de comodidad que determine para cada clima, la Dirección de Arquitectura del Consejo Nacional de Educación.

Art. 12. — En los hogares escuelas, regidos por el sistema de internado, habrá en lo posible servicio médico permanente y el régimen de alimentación será científicamente administrado.

Art. 13. — En los hogares escuelas se impartirá la enseñanza primaria exigida por los programas oficiales del Consejo Nacional de Educación, de acuerdo a los principios de las leyes números 1.420 y 4.874.

Además impartirá una enseñanza complementaria que inicie a los niños en la educación para el trabajo.

Art. 14. — La dirección de cada hogar escuela estará a cargo de un docente casado, que deberá vivir en el establecimiento con su familia. El personal técnico docente y administrativo, será determinado por el Consejo Nacional de Educación.

Art. 15. — Los cursos de internado tendrán una duración mínima de ocho meses. Terminado el período escolar, los locales de los hogares escuelas se destinarán a colonias de vacaciones.

TITULO III

Recursos

Art. 16. — A los efectos del cumplimiento de esta ley, créase un fondo especial que se denominará «Fondo de acción educativa y sanitaria escolar», el cual será administrado directamente por la comisión y estará formado por los siguientes recursos:

a) Por las sumas que anualmente se incluyan en el presupuesto general de la Nación;

b) Por donaciones de particulares e instituciones.

Art. 17. — Autorízase al Poder Ejecutivo a invertir de rentas generales y con imputación a la presente ley, la suma de siete millones de pesos moneda nacional ($ 7.000.000 m|n.) por año, con destino al fondo creado por el artículo anterior y hasta tanto se incluya este gasto en la ley general de presupuesto.

TITULO IV

Disposiciones generales

Art. 18. — A los efectos de la aplicación de esta ley, anualmente se celebrará en el sitio que la comisión determine y presidida por ésta, una conferencia de presidentes de consejos de

educación de las provincias y directores sanitarios de la misma, con el objeto de considerar los distintos problemas y conclusiones que tienen atinencia con esta ley.

Art. 19. — Es obligación de los patrones o empresas que empleen padres, tutores o encargados de niños, en edad escolar, costear el local de una escuela, en el establecimiento, taller o fábrica en que trabajen dichos padres, tutores o encargados, cuando los niños no puedan concurrir a una escuela pública, por razones de distancia o por otros impedimentos materiales y cuando su número no sea inferior a diez. Esta obligación se hará efectiva siempre que fuera necesario, a juicio del Consejo Nacional de Educación.

Art. 20. — Dos o más establecimientos o fábricas separados por menos de tres kilómetros de distancia podrán sostener en común un local para escuela, siempre que ésta resulte suficiente, para todos los niños comprendidos en el artículo anterior.

Art. 21. — En las donaciones a favor del Consejo Nacional de Educación, se tendrán por cumplidos, a los efectos de la escrituración, los requisitos exigidos por el Código Civil con la relación sucinta de las actuaciones administrativas, transcripción del escrito de ofrecimiento y acta de aceptación, hecha en un registro de contratos públicos o en el juzgado de paz del lugar.

Art. 22. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

RAMÓN S. CASTILLO. JUAN G. KAISER.
Gustavo Figueroa. *Carlos González Bonorino*

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, a los treinta días del mes de septiembre de mil novecientos treinta y ocho.

Buenos Aires, 14 de octubre de 1938.

Téngase por Ley de la Nación. Comuníquese, publíquese, anótese y dése al Registro Nacional.

ORTIZ.
JORGE EDUARDO COLL.

Decreto, de 4 de abril de 1939, constituyendo la Comisión Nacional de Ayuda Escolar, de la Ley N.° 12.558

Buenos Aires, 4 de abril de 1939.

Atento a lo dispuesto por la ley N.° 12.558, y

CONSIDERANDO:

Que ha sido un firme propósito del Poder Ejecutivo efectuar en todo el país una decidida acción de ayuda social a la niñez, como se expresara en las declaraciones de los mensajes y proyectos de ley, remitidos al Honorable Congreso;

Que esas manifestaciones y promesas fueron inmediatamente puestas en ejecución, al instalarse en el primer año de gobierno 594 comedores escolares en todo el país, y en la distribución de equipos de ropa de abrigo, beneficios ambos que alcanzaron a 74.000 niños;

Que para la atención de estos servicios el Poder Ejecutivo dispuso, con fecha 3 de mayo de 1938, la inversión de la suma de dos millones de pesos y creó una Comisión Nacional de Ayuda Escolar, organismo que, constituído por resolución del Ministerio de Instrucción Pública, bajo la presidencia del Subsecretario de este Departamento, tuvo a su cargo la organización de esos servicios, en la forma más rápida y eficaz posible, lo que ha permitido que los propósitos del Gobierno de la Nación tuvieran un inmediato cumplimiento;

Que la sanción de la Ley 12.558, que el Poder Ejecutivo ha promulgado con fecha 14 de octubre de 1938, permite intensificar la obra comenzada, dándole estabilidad y permitiendo una mayor amplitud en los servicios de asistencia social a los niños en edad escolar;

Que la citada ley dispone la constitución de una comisión para que, en lo sucesivo, tenga a su cargo la administración de los fondos que la misma autoriza y la organización de los servicios de asistencia social que ella determina;

Que la naturaleza e intensidad de las tareas que corresponden a esta comisión y la conveniencia de no recargar excesivamente las de los funcionarios que la integran, determina la necesidad de ampliar el número de vocales con personas cuyas funciones tengan relación con los fines específicos de la ley, con lo cual se facilita su mejor cumplimiento;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.° — Agradézcase a los señores Don Carlos Broudeur, Dr. Sylla Monsegur, Dr. Carlos de Arenaza y Profesores Próspero G. Alemandri y Manuel S. Alier, la patriótica y eficaz colaboración prestada desde el 9 de mayo de 1938 (1), como Presidente y vocales, respectivamente, de la Comisión Nacional de Ayuda Escolar, realizando la importante obra que se ha reseñado en los considerandos de este Decreto.

Art. 2.° — Constitúyase la nueva comisión determinada por la Ley N.° 12.558, la que se denominará «*Comisión Nacional de Ayuda Escolar (Ley 12.558)*», y será presidida por el señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública o por el Subsecretario del Departamento, en su representación, e integrada por el Presidente del Consejo Nacional de Educación y por el Presidente del Departamento Nacional de Higiene, y con el carácter de vocales adjuntos el Vicepresidente del Consejo Nacional de Educación y el Presidente del Patronato Nacional de Menores.

Art. 3.° — Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional y archívese.

ORTIZ.
JORGE EDUARDO COLL.

(1) Fecha en que fué designada la segunda y última Comisión Nacional de Ayuda Escolar, con anterioridad a la Ley N.° 12558.

Decreto N.° 76.601, de 9 de noviembre de 1940, estableciendo las funciones de los Vocales adjuntos que integran la Comisión Nacional de Ayuda Escolar (Ley 12.558).

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1940.

Visto este expediente N.° 67. H. 1940, relacionado con actuaciones promovidas por la Contaduría General de la Nación, con motivo del decreto N.° 28.207, dictado en abril 4 de 1939, en virtud del cual se constituye la Comisión Nacional de Ayuda Escolar, y

CONSIDERANDO:

Que por el Art. 2.° del decreto mencionado, se constituye la nueva comisión determinada por la ley N.° 12.558, la que se denominará «Comisión Nacional de Ayuda Escolar (Ley 12.558) y será presidida por el señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública o por el Subsecretario del Departamento, en su representación, e integrada por el Presidente del Consejo Nacional de Educación y por el Presidente del Departamento Nacional de Higiene, y con el carácter de vocales adjuntos el Vicepresidente del Consejo Nacional de Educación y el Presidente del Patronato Nacional de Menores».

Que la Contaduría General de la Nación, ha puesto de manifiesto, en el informe corriente a fs. 5|6, la circunstancia de que la Ley N.° 12.558, en su Art. 1.°, determina que la Comisión de que se trata, está compuesta por el Ministro de Justicia e Instrucción Pública o su representante, el Presidente del Consejo Nacional de Educación y el Presidente del Departamento Nacional de Higiene, sin mencionar a los vocales adjuntos;

Que en efecto, si bien la ley de creación de la Comisión Nacional de Ayuda Escolar no incluye los cargos de vocales adjuntos, las amplias tareas de la misma y la relación que existe entre sus funciones, y dependencias tales como el Consejo Nacional de Educación y el Patronato Nacional de Menores, justifica lo resuelto por el decreto del 4 de abril de 1939, al incorporar a la Comisión dos

funcionarios de las entidades nombradas, cuya colaboración resultaba necesaria y útil por el carácter técnico y especializado de las funciones por ellos desempeñadas, facilitando así el cumplimiento de los fines perseguidos por el legislador, acerca de cuya mayor efectividad corresponde al Poder Ejecutivo adoptar los recaudos que considere convenientes, dentro del espíritu de la ley;

Que en tal sentido, y de acuerdo con lo solicitado por la Contaduría General de la Nación, deben reglamentarse las funciones de los vocales adjuntos, teniéndose presente, al respecto, la información suministrada por la Comisión Nacional de Ayuda Escolar;

Por ello,

El Vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Ejecutivo—,

DECRETA:

Artículo 1.° — Los vocales adjuntos que en virtud del decreto N.° 28.207, de abril 4 de 1939, integran la «Comisión Nacional de Ayuda Escolar (Ley 12.558)», prestarán la colaboración técnica y especializada propia del cargo que desempeñan en las reparticiones a que pertenecen.

Participarán de las reuniones que aquélla celebre sin ejercer funciones ejecutivas, pero pueden ser nombrados en las subcomisiones permanentes o accidentales que la misma designe para el estudio de las cuestiones que le son atingentes.

Art. 2.° — Las resoluciones de la Comisión se adoptarán por mayoría de votos de los miembros que para su constitución determina la Ley N.° 12.558.

Art. 3.° — Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional y archívese.

CASTILLO.
GUILLERMO ROTHE.

Resolución, de 9 de septiembre de 1940, designando al señor Subsecretario doctor Enrique Gómez Palmés, Presidente de la Comisión Nacional de Ayuda Escolar.

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1940.

Atento a la facultad conferida en el artículo 1.° de la Ley N.° 12.558 y a lo dispuesto en el artículo 2.° del decreto N.° 28.207;

El Ministro de Justicia e I. Pública—

RESUELVE:

1.°) Designar al Subsecretario del Ministerio, doctor don Enrique Gómez Palmés, para que, en representación del Ministro, integre y presida la «Comisión Nacional de Ayuda Escolar (Ley N.° 12.558)», constituída por decreto del 4 de abril de 1939.

2.°) Hágase saber, anótese y archívese.

ROTHE.

COMISION NACIONAL DE MUSEOS Y DE MONUMENTOS Y LUGARES HISTORICOS

Ley N.° 12.665, de 8 de octubre de 1940, creando la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de—

LEY:

Artículo 1.° — Créase la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, integrada por un presidente y diez vocales, que ejercerán sus funciones con carácter honorario y serán designados por períodos de seis años, pudiendo ser reelectos.

La Comisión tendrá la superintendencia inmediata sobre los museos, monumentos y lugares históricos nacionales y en concurrencia con las respectivas autoridades de las instituciones que se acojan a la presente ley, cuando se trate de museos, monumentos y lugares históricos provinciales o municipales.

Art. 2.° — Los bienes históricos y artísticos, lugares, monumentos, inmuebles propiedad de la Nación, de las Provincias, de la Municipalidad o instituciones públicas, quedan sometidos por esta ley a la custodia y conservación del gobierno federal, y en su caso, en concurrencia con las autoridades respectivas.

Art. 3.° — El Poder Ejecutivo a propuesta de la Comisión Nacional, declarará de utilidad pública los lugares, monumentos, inmuebles y documentos de propiedad de particulares que se consideren de interés histórico o histórico-artístico a los efectos de la expropiación; o se acordará con el respectivo propietario el modo de asegurar los fines patrióticos de esta ley. Si la conservación del lugar o monumento implicase una limitación al dominio, el Poder Ejecutivo indemnizará al propietario en su caso.

Art. 4.° — La Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, hará la clasificación y formulará la lista de monumentos históricos del país, ampliándola en las oportunidades convenientes con la aprobación del Poder Ejecutivo. Los inmuebles históricos no podrán ser sometidos a reparaciones o restauraciones, ni destruídos en todo o en parte, transferidos, gravados o enajenados sin aprobación o intervención de la Comisión Nacional. En el caso de que los inmuebles históricos sean propiedad de las provincias, municipalidades o instituciones públicas, la Comisión Nacional cooperará en los gastos que demande la conservación, reparación o restauración de los mismos.

Art. 5.° — Ningún objeto mueble o documento histórico podrá salir del país, ni ser vendido ni gravado sin dar intervención a la Comisión Nacional y ésta hará las gestiones para su adquisición cuando sea de propiedad de particulares y considere convenientes tales gestiones por razones de interés público.

Art. 6.° — Los inmuebles comprendidos en la lista y clasificación oficial de la Comisión Nacional, estarán libres de toda carga impositiva.

Art. 7.° — La Comisión Nacional está facultada para aceptar herencias, legados y donaciones, con las formalidades de la ley.

Art. 8.° — Las personas que infringieran la presente ley mediante ocultamiento, destrucción, transferencias ilegales o exportación de documentos históricos, serán penadas con multas de $ 1.000 a $ 10.000 moneda nacional siempre que el hecho no se hallare previsto por el artículo 184, inciso 5.° del Código Penal.

Art. 9.° — El Poder Ejecutivo dictará el decreto reglamentario, estableciendo las funciones de la Comisión Nacional; la superintendencia de los Museos Históricos, de carácter cultural, docente y administrativo; mención de las publicaciones a su cargo; provisión de ilustraciones a los institutos secundarios para los gabinetes de historia argentina y americana; designación de delegados locales con residencia en los lugares respectivos, pertenecientes a los museos históricos u otras instituciones; formación de sociedades o patronatos para la cultura pública; y respecto de la labor técnica y admi-

nistrativa de conservación y restauración de los lugares y monumentos históricos.

Art. 10. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

R. Patrón Costas. — Carlos M. Noel.
Gustavo Figueroa. — *L. Zavalla Carbó.*

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a treinta de septiembre de mil novecientos cuarenta.

Registrada bajo el número 12.665.

Buenos Aires, 8 de octubre de 1940.

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional.

CASTILLO.
Guillermo Rothe.

Decreto, de 7 de febrero de 1941, reglamentario de la Ley N.° 12.665

Buenos Aires, 7 de febrero de 1941.

Atento a lo dispuesto por el art. 9.° de la Ley N.° 12.665;

El Vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

DECRETA:

Artículo 1.° — La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos —dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública—, ajustará su funcionamiento al siguiente reglamento:

CAPITULO I

De la constitución de la comisión

Artículo 1.° — La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, tiene su sede en la Capital Federal y está constituída por un presidente que representa a la Comisión en todos los actos públicos, y diez vocales designados por el P. Ejecutivo con carácter honorario, por un período de seis años pudiendo ser reelecto. (Art. 1.°, apart. 1.° de la Ley 12.665).

CAPITULO II

De sus atribuciones

Art. 2.° — Tiene las siguientes atribuciones:

1. La superintendencia exclusiva sobre los bienes históricos y artísticos, museos, monumentos y lugares históricos del dominio de la Nación (Art. 1.°, apart. 2.°, Ley 12.665);

2. La superintendencia concurrente con las autoridades respectivas que se acojan a la Ley N.° 12.665, sobre los bienes históricos y artísticos, museos, monumentos y lugares históricos del dominio provincial, municipal, o de la Iglesia Católica (Art. 1.°, apart. 2.°, Ley 12.665);
3. La custodia, conservación, refección y restauración de los muebles históricos e histórico-artísticos, de los lugares, monumentos e inmuebles históricos del dominio de la Nación, y, en su caso, en concurrencia de las autoridades respectivas que se acojan a la Ley N.° 12.665, sobre los del dominio provincial, municipal y de la Iglesia Católica (Art. 2.°, Ley 12.665);
4. Hacer la clasificación y formular la lista de monumentos, lugares, inmuebles o muebles y documentos del dominio privado de particulares, que considere de interés histórico o histórico-artístico y ampliarla en las oportunidades convenientes, todo con aprobación del Poder Ejecutivo;
5. Convenir con los respectivos propietarios el modo de asegurar la custodia, conservación, refección y restauración de esos bienes (Art. 3.°, Ley 12.665);
6. Proponer al Poder Ejecutivo la declaración de utilidad pública de los lugares, monumentos, inmuebles, muebles y documentos del dominio privado de los particulares que se consideren de interés histórico o histórico-artístico, a los efectos de la expropiación;
7. Llevar el Registro y Clasificación de los monumentos, lugares, inmuebles históricos o histórico-artísticos situados en la República;
8. Dictar los Reglamentos internos de los Museos y establecimientos a su cargo y vigilar su funcionamiento y la realización del inventario;
9. Dictar las instrucciones generales y especiales para la custodia, conservación, refección y restauración de los monumentos, lugares, inmuebles y muebles históricos o histórico-artísticos, a que se refiere el inciso 3.° de este artículo;
10. Aplicar correcciones disciplinarias y acordar licencias a los funcionarios y empleados de sus dependencias, de acuerdo

con las disposiciones en vigor, comunicando sus resoluciones al Ministerio y a quienes corresponda;

11. Nombrar y remover al personal de servicio hasta la categoría de auxiliar 8.°;
12. Fijar el horario de trabajo del personal y de apertura y clausura al público, de los Museos y establecimientos de su jurisdicción exclusiva;
13. Proyectar el presupuesto anual de la Comisión Nacional, de los Museos y establecimientos de su jurisdicción exclusiva;
14. Convenir con la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, por intermedio del arquitecto que prestará servicios como adscripto a la Comisión Nacional, las refecciones y restauraciones que se efectúen en los inmuebles y lugares sujetos a la custodia y conservación y revisar los planos de las obras a ejecutarse, para aconsejar las modificaciones que estimare necesarias o convenientes, desde los puntos de vista histórico e histórico-artístico;
15. Acordar con la Dirección Nacional de Vialidad y la Comisión Nacional de Turismo la fijación de letreros instructivos sobre los lugares históricos y todos los medios conducentes a promover el desenvolvimiento cultural e histórico del turismo;
16. Distribuir las funciones en Subcomisiones internas, integradas por tres vocales cada una, presididas por el Presidente de la Comisión Nacional, y delegar en uno o más Vocales determinadas misiones especiales;
17. Formar Subcomisiones o designar delegados locales en cada una de las provincias y territorios nacionales, con las facultades que se le asignen;
18. Publicar una Memoria anual sobre el movimiento cultural y administrativo de los Museos y establecimientos de su jurisdicción exclusiva y, en concurrencia, sobre los monumentos y lugares históricos e histórico-artísticos ;
19. Solicitar directamente de las autoridades nacionales, provinciales, municipales y eclesiásticas, las informaciones que estime necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones;
20. Proveer a los Institutos de enseñanza secundaria, de ilustraciones para los gabinetes de historia argentina y ame-

ricana y proyectar la creación y organización del Museo Pedagógico Nacional en materia histórica e histórico- artística;

21. Constituir Patronatos para acrecentamiento de la cultura histórica y de los bienes histórico-artísticos;
22. Organizar las conferencias de delegados con la Comisión Nacional y Exposiciones en distintas ciudades de la República;
23. Realizar exposiciones y disertaciones históricas en los Museos de su dependencia destinadas a las escuelas y al público;
24. Aceptar herencias, legados y donaciones con las formalidades de la Ley (Art. 7.°, Ley 12.665);
25. Dictar su Reglamento interno;
26. Asesorar a los Poderes Nacionales y Municipales en la nomenclatura de las calles de Buenos Aires y en los nombres históricos de los pueblos;
27. Mantener relaciones de cooperación en la labor con la Academia Nacional de la Historia y Academia Nacional de Bellas Artes, para la realización de los fines de la Ley 12.665 y de este reglamento.

CAPITULO III

Del registro de bienes históricos

Art. 3.° — El Registro de los bienes históricos e histórico- artísticos comprenderá los bienes que se encuentren dentro de la jurisdicción territorial de la República y serán clasificados en la forma siguiente:

1. Monumentos y Lugares Históricos del dominio de la Nación;
2. Monumentos y Lugares Históricos del dominio de las Provincias que no se hayan acogido a la Ley 12.665;
3. Monumentos y Lugares Históricos del dominio de las Provincias que se hayan acogido a la Ley 12.665;
4. Monumentos y Lugares Históricos del dominio de los Municipios situados en las Provincias que se hayan acogido a la Ley 12.665;

5. Monumentos y Lugares Históricos del dominio de los Municipios situados en Provincias, que no se hayan acogido a la Ley 12.665;
6. Monumentos y Lugares Históricos del dominio del Municipio de Buenos Aires;
7. Monumentos y Lugares Históricos del dominio de la Iglesia Católica;
8. Bienes existentes en los museos públicos y privados y en los establecimientos de la Iglesia Católica. Estos bienes serán subclasificados de acuerdo a las instituciones que los posean:
   a) Bienes de museos nacionales;
   b) Bienes de museos provinciales;
   c) Bienes de museos municipales;
   d) Bienes eclesiásticos;
   e) Bienes de museos privados.
9. Bienes muebles de particulares de interés histórico o histórico-artístico.

Art. 4.° — A los efectos de la formación del Registro, facúltase a la Comisión Nacional para solicitar de las autoridades públicas provinciales, municipales y eclesiásticas correspondientes, la nómina de los bienes históricos e histórico-artísticos que poseen en sus museos u otros establecimientos o, en su caso, en las iglesias, capillas, colegios y conventos.

Art. 5.° — La Comisión Nacional, a los efectos de la formación del Registro y en lo relacionado con los monumentos y lugares históricos e histórico-artísticos situados dentro de la juridicción territorial de la República, procederá de oficio a levantar el censo general de los mismos, de acuerdo con la clasificación establecida en el Art. 3.°.

Art. 6.° — Los bienes inscriptos en el Registro no pueden salir de la jurisdicción territorial de la República ni ser enajenados ni gravados, sin intervención y aprobación de la Comisión Nacional, a cuyos efectos se comunicará el Registro a la Dirección General de Aduanas (Art. 5.°, Ley 12.665). Los escribanos públicos no podrán autorizar ninguna transferencia de dominio o constitución de de-

rechos reales sobre bienes inscriptos en el Registro sin la previa comunicación y aprobación de la Comisión Nacional.

Art. 7.° — En la inscripción en el Registro de un monumento, lugar o inmueble, se hará constar circunstanciadamente la situación, superficie, linderos, estado de conservación, titular del dominio, tasación aproximada, en su caso, antecedentes históricos y los motivos que fundamenten la inscripción. La inscripción de muebles y documentos deberá contener los datos de las correspondientes fichas, de acuerdo con los inventarios de los museos o con las constancias de las informaciones respectivas.

CAPITULO IV

De los bienes privados de interés histórico o histórico-artístico

Art. 8.° — Declarado monumento nacional un bien de interés histórico o histórico-artístico, la Comisión Nacional convendrá con el titular del dominio o sus representantes legales, el modo de asegurar su conservación y demás finalidades de la Ley. Todo convenio a este respecto será, previa aprobación por el Poder Ejecutivo, reducido a escritura pública, por ante el Escribano Mayor de Gobierno.

Art. 9.° — En caso de considerarse necesaria la expropiación del bien por causa de utilidad pública, la Comisión Nacional formará expediente con los recaudos que se establecen en el art. 7.° del presente reglamento y lo elevará a resolución del Poder Ejecutivo.

Art. 10. — La obligación que asume el titular del bien histórico o histórico-artístico declarado de utilidad pública, comprende también la de permitir su refección o restauración por cuenta de la Nación y la del acceso general fundado en el interés público desde el punto de vista de la Historia o del arte.

Art. 11. — En el caso de que la conservación del bien histórico o histórico-artístico implicase una desmembración del dominio (servidumbre administrativa), la Comisión estipulará con el titular o su representante legal y *ad referendum* del Poder Ejecutivo, la indemnización correspondiente, a cuyo efecto se abrirá expediente informativo, (Art. 3.° *in fine*, Ley 12..665). El respectivo decreto será reducido a escritura pública por el Escribano Mayor de Gobierno.

CAPITULO V

De la custodia y conservación de los bienes históricos e histórico-artísticos

Art. 12. — La Comisión Nacional tiene a su exclusivo cargo la custodia, conservación, refección y restauración de los bienes del dominio de la Nación inscriptos en el Registro y en concurrencia con las autoridades provinciales, municipales y eclesiásticas, cuyos órganos legales se hayan acogido a la Ley 12.665, sobre los bienes del dominio provincial, municipal y eclesiástico, inscriptos en el mismo.

Art. 13. — Los bienes históricos o histórico-artísticos de la jurisdicción exclusiva o en concurrencia, no pueden ser sometidos a refección ni restauración, ni destruídos en todo o en parte, ni enajenados, ni gravados, sin intervención y aprobación de la Comisión Nacional (Art. 4.°, Ley 12.665). En el caso de que dichos bienes sean del dominio provincial, municipal o eclesiástico. La Comisión Nacional —previa autorización del Poder Ejecutivo— cooperará en los gastos que demande la conservación, refección o restauración de los mismos (Art. 4.° *in fine,* Ley 12.665).

CAPITULO VI

De los documentos históricos

Art. 14. — Los documentos históricos no pueden salir de la República, ni ser enajenados, ni gravados, sin intervención y aprobación de la Comisión Nacional. En el caso de que los documentos históricos sean de propiedad de particulares, facúltase a la Comisión Nacional para realizar las gestiones necesarias para su adquisición, siempre que, a su juicio, los documentos sean de interés público. La resolución de la Comisión Nacional debe ser motivada y tasados los documentos. El contrato de compraventa debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo.

Art. 15. — En caso de negarse el propietario a la enajenación de los documentos, el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Comisión Nacional podrá declarar su utilidad pública a los efectos de la expropiación (Art. 3.°, Ley 12.665).

Art. 16. — Todos los documentos adquiridos por la Comisión Nacional de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo, ingresarán al fondo del Archivo General de la Nación, salvo los documentos personales referentes a los museos especializados. En caso de duda, facúltase a la Comisión Nacional para dar a los documentos el destino que corresponda.

Art. 17. — Entiéndese a los fines de la Ley 12.665 como documentos históricos:

a) Los expedientes, memorias, oficios, comunicaciones, mapas, cartas geográficas relacionadas como asuntos públicos y expedidos o firmados o rubricados por autoridades civiles, militares o eclesiásticas en ejercicio de sus funciones;

b) Las cartas privadas, memorias autobiográficas y comunicaciones entre particulares que, a juicio de la Comisión Nacional, tengan un interés público desde el punto de vista histórico.

Art. 18. — La Comisión Nacional llevará el Registro Público de donantes de los documentos y bienes históricos o históricos artísticos.

CAPITULO VII

De los muebles históricos o histórico-artísticos de propiedad particular

Art. 19. — Los muebles de propiedad particular que, a juicio de la Comisión Nacional, tengan un interés público desde el punto de vista histórico o histórico-artístico no podrán salir de la República. En el caso de transferencia de dominio o de constitución en prenda, el antiguo propietario queda obligado a comunicar a la Comisión Nacional el nombre y domicilio del nuevo propietario, dentro de los diez días de la transferencia o de constitución de prenda. La transgresión a esta disposición implicará ocultamiento. (Art. 5.°, Ley 12.665).

Art. 20. — La Comisión Nacional, en conocimiento de la existencia de estas clases de bienes, procederá —de conformidad a lo establecido en el capítulo III— a inscribirlos en el Registro, comunicando por escrito al propietario dicha inscripción y las disposiciones reglamentarias pertinentes.

Art. 21. — La Comisión Nacional está facultada para gestionar de los propietarios de esos bienes su adquisición, cuando lo considere conveniente por motivos de interés público. La respectiva resolución debe ser fundada y el contrato de compraventa sometido a aprobabación del Poder Ejecutivo.

Art. 22. — Si el propietario se rehusase a la enajenación de esa clase de bienes, la Comisión Nacional propondrá al Poder Ejecutivo la declaración de utilidad pública a los fines de la expropiación.

CAPITULO VIII

De los monumentos históricos conmemorativos

Art. 23. — La Comisión Nacional ejerce la jurisdicción exclusiva en los monumentos históricos nacionales de carácter conmemorativo, y en concurrencia con otras autoridades — cuando se trate de monumentos conmemorativos erigidos por poderes provinciales, comunales o de instituciones que se hubieren acogido a esta ley.

Art. 24. — La Comisión Nacional tiene a su cargo lo concerniente a la conservación y custodia de los monumentos conmemorativos nacionales y los sepulcros históricos y propondrá al Poder Ejecutivo un plan de organización que considere conveniente adoptar a los fines de la cultura histórica.

CAPITULO IX

De los museos históricos

Art. 25. — Los museos históricos son instituciones docentes y técnicas cuyo objeto es reunir, conservar, custodiar y exhibir al público, en forma adecuada, reliquias y objetos del pasado argentino, con el fin de hacer conocer mejor y más fácilmente la Historia Nacional y de acendrar en los ciudadanos el amor a la Patria.

Art. 26. — La Comisión Nacional ejerce la jurisdicción exclusiva en los museos históricos nacionales y en concurrencia con las autoridades respectivas que se acojan a la Ley, en los museos provinciales, municipales y de otras instituciones.

Art. 27. — Los museos históricos dependientes de la Comisión Nacional, levantarán el inventario de todos los objetos, documentos, impresos, monedas y medallas que posean, de acuerdo con las instrucciones de la Comisión Nacional.

Art. 28. — Los museos históricos no podrán aceptar ni rechazar donaciones de objetos sin resolución de la Comisión Nacional.

Art. 29. — Los museos históricos publicarán, previa aprobación de la Comisión Nacional, las guías descriptivas e ilustradas de los objetos que posean, así como también la iconografía de los hombres representativos de la historia argentina y americana, para su difusión en los institutos docentes y en el público.

Art. 30. — Los directores de los museos históricos están obligados a elevar al Presidente de la Comisión Nacional, la memoria sobre la tarea realizada y las reformas convenientes a adoptarse.

Art. 31. — Los directores de museos tienen facultad para suspender a los empleados de su dependencia por el término de diez días, requiriéndose la autorización de la Comisión Nacional cuando se trate de mayor término.

CAPITULO X

Publicaciones

Art. 32. — La Comisión Nacional editará anualmente el «Boletín» con las colaboraciones e informaciones que sean de interés general sobre cultura histórica y las publicaciones de los monumentos y lugares históricos de la República.

CAPITULO XI

De la exención de impuestos

Art. 33. — Los monumentos y lugares históricos del dominio de la Nación y del dominio de la Municipalidad de Buenos Aires quedan exentos del pago de todo impuesto (Art. 6.°, Ley 12.665).

Art. 34. — La Comisión Nacional comunicará al Ministerio de Hacienda de la Nación, a la Municipalidad de Buenos Aires, en su caso, los inmuebles que están exonerados de cargas impositivas.

CAPITULO XII

De la aceptación de herencias, legados y donaciones

Art. 35. — La Comisión Nacional tiene capacidad para aceptar herencias, donaciones y legados (Art. 7.°, Ley 12.665), y para renunciarlo, en nombre y representación del Gobierno Nacional.

Art. 36. — Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, el Presidente representará a la Comisión Nacional en las gestiones administrativas o judiciales, por sí o por medio de mandatario, a cuyo efecto se le faculta para conferir poderes especiales o generales.

Art. 37. — Tratándose de herencias y legados, la Comisión, antes de presentarse en los juicios sucesorios, recabará opinión por escrito del señor Procurador del Tesoro y solicitará del Poder Ejecutivo el correspondiente decreto sobre aceptación o renuncia de la herencia o legado.

Art. 38. — Tratándose de donación de inmuebles, la Comisión resolverá —previa opinión del señor Procurador del Tesoro— su aceptación o renuncia *ad referendum* del Poder Ejecutivo.

Art. 39. — Tratándose de donación de muebles, la Comisión Nacional resolverá directamente sobre su aceptación o renuncia, previo informe documentado sobre el interés público histórico o histórico-artístico de la cosa donada.

CAPITULO XIII

De las sanciones penales

Art. 40. — Conforme a lo que dispone el artículo 184, inc. 5.° del Código Penal, será reprimido con la pena de prisión de tres meses a cuatro años el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado, una cosa mueble o inmueble y lo ejecute en archivos registros, bibliotecas, museos u otros bienes de uso público, históricos o histórico-artísticos; o en signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte, colocados en edificios o lugares públicos de la jurisdicción de la Comisión Nacional.

Art. 41. — Será reprimido con la pena de multa de pesos un mil (1.000) a diez mil (10.000) moneda nacional, siempre que el hecho no estuviera previsto en la disposición legal transcripta en el artículo anterior, el que destruyere, ocultare, vendiere, gravare, o exportare documentos u objetos históricos en violación a lo dispuesto en este capítulo (Art. 8.°, Ley 12.665).

Art. 42. — La Comisión Nacional, en conocimiento de haberse infringido lo prescripto en el artículo anterior, formulará por escrito la pertinente denuncia al Ministerio Público Fiscal que corresponda.

Art. 2.° — Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional.

CASTILLO.
GUILLERMO ROTHE.

Reglamento interno de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos Históricos

Artículo 1.° — La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, tiene su sede en la Capital Federal y está constituída por un presidente que representa a la Comisión en todos los actos públicos y diez vocales designados por el Poder Ejecutivo con carácter honorario por un período de seis años pudiendo ser reelectos. (Art. 1.°, apart. 1.° de la Ley 12.665).

La Comisión Nacional designará un Vicepresidente *ad hoc,* en caso de licencia o enfermedad del Presidente.

Art. 2.° — La Comisión Nacional se reunirá una vez al mes por lo menos en los días y horas que determine y también en forma extraordinaria cuando sea convocada por el Presidente, o lo soliciten por lo menos tres de sus miembros.

Art. 3.° — El *quorum* se formará con la presencia de cuatro de sus miembros, salvo cuando se trate de invertir fondos, en la que el *quorum* se formará con la mitad más uno de los vocales y Presidente.

Art. 4.° — La Comisión Nacional se organizará en subcomisiones compuestas de tres vocales presididos por el Presidente. Los asuntos de orden técnico o que por su naturaleza merezcan un examen detenido, serán pasados a conocimiento de las subcomisiones respectivas, para que éstas produzcan su dictamen antes de ser consideradas por la Comisión. Las subcomisiones se organizarán en la forma siguiente: de Museos; de Monumentos y Lugares Históricos y de Reglamento y Hacienda.

Del Presidente

Art. 5.° — Son atribuciones del Presidente, además de las conferidas por la Ley:

a) Representar a la Comisión Nacional en todos los actos públicos;
b) Convocar la Comisión, citando a sus miembros con 48 horas de anticipación y presidir las reuniones de la misma;
c) Votar en las cuestiones que se susciten y decidir con su voto en caso de empate;
d) Representar a la Comisión en sus gestiones ante los poderes públicos;
e) Ejecutar las disposiciones de la Comisión;
f) Ejercitar de por sí o mediante apoderado las acciones legales concernientes a los intereses de la Comisión y a los bienes cuya administración le corresponde;
g) Resolver todas las cuestiones de trámite urgente con cargo de dar cuenta a la Comisión en la primera sesión que se realice.

De la Secretaría

Art. 6.° — La Secretaría funcionará bajo la dirección del Secretario de la Comisión Nacional, en el local de la misma. Sus oficinas permanecerán abiertas al público, los días hábiles de 12 a 18 y de 9 a 12 los sábados.

Art. 7.° — El Secretario tendrá a su cargo:

a) Labrar el acta de las deliberaciones y resoluciones de la Comisión;

b) Preparar las comunicaciones que le encomiende el Presidente y la Comisión;

c) Refrendar los actos y resoluciones del Presidente;

d) Llevar el archivo de la correspondencia y actuaciones de la Comisión, secundado por el personal administrativo a sus órdenes;

e) Preparar y poner al día los asuntos destinados a la reunión de la Comisión y de las Subcomisiones;

f) Actuar como secretario de las subcomisiones;

g) Dar cumplimiento a las resoluciones y providencias que adopten el Presidente o la Comisión, relacionadas con el orden y la disciplina del personal administrativo;

h) Además del libro de actas se llevará en Secretaría un libro de resoluciones de la Comisión.

DE LOS DELEGADOS EN PROVINCIAS Y TERRITORIOS

Art. 8.° — La Comisión tendrá en cada una de las Provincias y Territorios Nacionales, uno o más delegados que ejercerán su representación y tendrán las siguientes funciones:

a) Representar a la Comisión ante los Poderes públicos, reparticiones nacionales, gobiernos de provincias o municipios y ante los particulares, previa resolución de la Comisión Nacional y de acuerdo a las instrucciones impartidas por la misma o por el Presidente;

b) Evacuar las consultas e informes que les sean solicitados por la Comisión;

c) Llevar un censo de los monumentos históricos y conmemorativos y de los lugares históricos existentes en las provincias y territorios en que ejerce su representación;

d) Llevar un archivo de todas las comunicaciones recibidas de la Comisión Nacional y de un libro copiador de todas las notas e informes dirigidos a la misma;

e) No ejercerán su delegación sobre los Museos y dependencias de la Comisión Nacional, existentes en las respectivas provincias o territorios sin perjuicio de prestar su colaboración espontánea cuando lo crea conveniente o les sea solicitada;

f) Promover la formación de sociedades o patronatos para la cultura histórica, previa aprobación de la Comisión Nacional y dar a la misma, cada vez que un monumento de interés histórico o artístico, corra el riesgo de perderse total o parcialmente e indicar los medios que juzgue más eficaces para asegurar su conservación;

g) En el caso de no responder los señores delegados a las solicitaciones del Presidente, sobre los asuntos que le han sido encomendados por la Comisión Nacional, serán sustituídos en sus funciones.

DEL REGISTRO DE LOS BIENES HISTÓRICOS

Art. 9.° — La lista de monumentos, lugares, inmuebles, muebles y documentos del dominio privado de particulares a que se refiere el inc. 4.°, art. 2.°, del Reglamento de la Comisión, se insertará en libros especiales con intervención del Presidente y Secretario, quienes firmarán toda vez que se efectúen ampliaciones resueltas por la Comisión Nacional. Se hará constar la fecha de la inscripción, el nombre del propietario y la descripción del bien, cuando se trate de inmuebles u objetos muebles, y cuando se trate de documentos una breve reseña del contenido.

(Aprobado en la sesión del 21 de abril de 1941).

Reglamento interno de los museos históricos

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.° — La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos ejerce la jurisdicción exclusiva en los museos históricos nacionales. (Art. 26 del Reglamento de la Comisión Nacional).

Art. 2.° — Los museos históricos son instituciones de carácter docente y técnico, cuyo objeto es reunir, conservar, custodiar y exhibir al público en forma adecuada, reliquias y objetos del pasado argentino.

Art. 3.° — Para la consecución de estos fines los museos son expresión ilustrada de la historia patria. A ese efecto, las piezas que forman sus colecciones se hallarán debidamente clasificadas, y dentro de lo que cada local lo permita, según el orden cronológico, por época y períodos históricos. A cada época o período histórico, y en casos especiales a determinadas personalidades del pasado, se asignará, en cuanto sea posible, una o más secciones en relación a su importancia y al número de los objetos reunidos.

Art. 4.° — En la serie a que pertenezcan los objetos, éstos serán agrupados con sujeción a un juicio de valoración histórica que determine su significación y mérito respectivo y les permita evocar con exactitud el hecho o personaje a que se hallen asociados.

Art. 5.° — Los museos tendrán debidamente organizada una biblioteca de historia argentina como el elemento auxiliar indispensoble para el uso del personal y de los estudiosos.

Art. 6.° — Los objetos, libros o documentos que pertenezcan al Museo no podrán ser sacados del establecimiento sin intervención de la Comisión Nacional.

Art. 7.° — Cuando alguna persona necesite consultar o examinar de cerca o con detención objetos o documentos de determinado Museo con propósitos de estudio, deberá presentar previamente una solicitud al Director. Una vez obtenido el permiso, el solicitante se sujetará a las prescripciones de orden interno que la Dirección determine.

Art. 8.° — La persona que abusando de la confianza en ella depositada perjudicara con la pérdida, deterioro o extracción de los objetos de un Museo, perderá todo derecho a nuevas consultas en ése y en los demás museos sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra.

Art. 9.° — La vigilancia de las salas en los museos estará a cargo del guardián, de los ordenanzas y de agentes de policía, bajo las órdenes del empleado de turno, quien tendrá el deber de atender al público durante las horas de visita para responder a cualquier informe que se solicite o reclamo que se formule.

Admisión de objetos

Art. 10. — Los museos históricos no podrán aceptar ni rechazar en forma definitiva donaciones de objetos históricos sin resolu-

ción de la Comisión Nacional (Art. 28 del Reglamento de la Comisión Nacional). Cualquier duda que resultare con relación a un objeto donado, ya sea respecto de su autenticidad o la oportunidad de exhibirlo el Director consultará la opinión de la Comisión Nacional.

Art. 11. — Ningún objeto podrá ser expuesto al público sin estar previamente anotado en el Registro respectivo y clasificado.

Art. 12. — A este propósito se llevarán libros en que consten inscriptos, los objetos, documentos que ingresen con la fecha de su entrada y el nombre del donante.

Art. 13. — Los documentos y libros ingresados deberán ser sellados en forma que permitan establecer su pertenencia por parte del Estado.

Art. 14. — Los Museos históricos levantarán el inventario de todos los objetos, documentos, impresos, moneda y medallas que posean de acuerdo con las instrucciones de la Comisión Nacional (Art. 27 del Reglamento de la Comisión Nacional).

Art. 15. — Cada Museo llevará un registro en que se anotará sucesivamente y bajo un número de orden los objetos de carácter histórico entrados al establecimiento, consignando la fecha, describiendo el objeto técnicamente y anotando el nombre del donante. Otro Registro igual se llevará de los libros que ingresen a la biblioteca del Museo.

Art. 16. — Se formará un archivo especial con los documentos y cartas que comprueben la autenticidad de los objetos incorporados y a él se agregarán, según el caso, las actas que se firman por idéntico motivo.

Art. 17. — Se organizará un fichero de los objetos de carácter histórico y de los documentos, que estará organizado por orden alfabético de donantes, objetos y nombres de las personas a quienes han pertenecido.

Del Director y demás empleados

Art. 18. — Cada Museo estará a cargo de un Director honorario o rentado, quien organizará con el personal a sus órdenes la atención de los diversos servicios que se establecen en este Reglamento y los que exigen el funcionamiento administrativo del Museo.

Art. 19. — Las horas de oficinas son los días hábiles, de 12 a 18, para todos los empleados. Además los empleados realizarán todas las diligencias fuera del horario que se les encomiende, por el Director.

Art. 20. — Los domingos y días feriados será de rigor la presencia de un empleado de guardia designado por el Director para cumplir la función que establece el Art. 9.°. Los ordenanzas quedarán asimismo de guardia los domingos y días feriados, desempeñando la tarea de veedores.

Art. 21. — A los empleados les será prohibido recibir visitas en las oficinas ni tratar en ellas sus asuntos particulares.

Art. 22. — Se prohibe del mismo modo que hagan publicaciones relativas a los establecimientos, por cuestiones generales del Instituto o en su carácter de empleados, sin la anuencia del Director.

Art. 23. — Cada empleado acatará las órdenes de su superior inmediato, pero dará cuenta al Director de los trabajos llevados a cabo.

Art. 24. — Las investigaciones, copias, apuntes, etc., que se practiquen en el establecimiento tendrán carácter reservado y no podrán los empleados hacer uso de ellos o transmitirlos a personas extrañas.

Art. 25. — Son deberes y atribuciones del Director:

1.° Dirigir, de acuerdo con las leyes vigentes y órdenes superiores, la administración del establecimiento a su cargo;

2.° Ejercer la representación externa en todos los actos oficiales;

3.° Administrar los fondos del establecimiento, disponiendo las compras y pagos y visando al habilitado los recibos correspondientes conforme a las normas del sistema de la Dirección Administrativa del Ministerio de Instrucción Pública;

4.° Publicar, previa aprobación de la Comisión Nacional los trabajos, guías descriptivas o ilustradas de los objetos que posean, así como también la iconografía de los hombres representativos de la Historia Argentina y Americana para su difusión en los Institutos docentes y el público (Art. 29 del Reglamento de la Comisión Nacional) de acuerdo con el plan en vigor;

5.° Mantener relaciones con corporaciones y establecimientos análogos nacionales o extranjeros y particulares, disponiendo el canje de publicaciones y sosteniendo correspondencia en beneficio del Instituto;

6.° Tomar a su cargo las tareas de las visitas explicadas pudiendo delegar esta labor en el Vice-Director o en otros empleados competentes;

7.° Atender los pedidos y solicitudes para el examen de las piezas o cuadros que el Museo guarda o concederlos o rehusarlos según lo juzgue conveniente;

8.° Promover, entre los particulares, la fundación de una sociedad que coopere a los fines del Instituto, denominada «Amigos del Museo», y constituída por aquellas personas que hayan demostrado su especialización y amor a la Institución mediante donaciones y servicios prestados a la misma;

9.° Presentar anualmente a la Comisión Nacional por intermedio del Presidente una memoria sobre el movimiento cultural y administrativo del Museo, las necesidades del mismo y las reformas convenientes a adoptarse, sin perjuicio de informar en cada caso las ocurrencias notables que tengan lugar en el establecimiento;

10. No podrán enajenar libros, objetos o publicaciones del Museo, ni hacer operaciones de canje sin autorización de la Comisión Nacional;

11. Deberá poner en conocimiento de la Comisión Nacional, las faltas o deficiencias que note en el personal, estando facultado para suspender por el término de diez días al empleado que no cumpla con su deber, debiendo requerir autorización de la Comisión Nacional, cuando se trate de mayor término;

12. Deberá certificar las copias de los documentos que expida el Museo, como así también la reproducción de piezas, por procedimientos debidamente autorizados.

Visita a los Museos

Art. 26 — Los museos permanecerán abiertos al público todos los días hábiles, domingos y feriados con excepción del lunes que se dedicarán al descanso del personal y limpieza del establecimiento.

Art. 27. — Habrá dos horarios, aplicados en distintas épocas del año, para verano e invierno los cuales se fijarán por la Comisión Nacional.

Art. 28. — Para las visitas de las escuelas regirá por la tarde el mismo horario que para el público, debiendo habilitarse también los museos por la mañana de 9 a 12.

Art. 29. — Se permitirá el acceso de los alumnos cuando lleguen acompañados por sus profesores o maestros, quienes deberán mantener la formación así como el orden y la disciplina de los alumnos mientras permanezcan en el interior del establecimiento.

Art. 30. —Las sociedades o círculos que con fines culturales deseen visitar el museo en corporación podrán hacerlo los días hábiles, solicitando previamente autorización del mismo.

Art. 31. — Durante los días y horas de acceso al público está prohibido formular exposiciones o conferencias en alta voz; así como también cualquier otro acto que pueda alterar el orden en el interior del museo, o producir una incomodidad al público que lo visita. Quedan exceptuados de esta disposición las exposiciones o explicaciones que los profesores o maestros formulen para sus alumnos.

Art. 32. — Se prohibe tocar los objetos expuestos al público, fumar dentro de la sala, penetrar con bastones, paraguas, valijas, paquetes o aparatos fotográficos, los que serán depositados a la entrada. No se permite el acceso de niños menores de diez años, que no estén acompañados con personas mayores.

Los directores de Museos, adoptarán las medidas que consideren necesarias para el mantenimiento del orden durante las horas de visita, en los casos no previstos por esta reglamentación, dando cuenta de ellos a la Comisión Nacional.

(Aprobado en la sesión del 21 de abril de 1941).

Decreto N.° 74.826, de 19 de octubre de 1940, integrando la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos.

Buenos Aires, 19 de octubre de 1940.

Atento lo dispuesto por la Ley 12.665, por la que se crea la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, cuyo artículo 1.° establece que será integrada por un presidente y diez vocales y al efecto de constituirla de acuerdo con la expresada ley,

El Vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Ejecutivo—,

DECRETA:

Artículo 1.° — Desígnase para integrar la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, por un período de seis años y con carácter honorario, a las siguientes personas: Presidente, doctor Ricardo Levene; Vocales: señor Luis Mitre; doctor Ramón J. Cárcano; doctor Nicolás Avellaneda; doctor Enrique Udaondo; doctor Emilio Ravignani; señor Rómulo Zavala; doctor Benjamín Villegas Basavilbaso; doctor Luis María Campos Urquiza; Coronel Bartolomé Ernesto Gallo y señor Héctor C. Quesada.

Art. 2.° — Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional y archívese.

CASTILLO.
GUILLERMO ROTHE.

Nuevos Establecimientos de Enseñanza dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, creados por Ley Especial o por Ley de Presupuesto en el transcurso de los años 1941 y 1942, que se incorporan a la nómina general publicada en el Libro Primero de esta obra

Nuevos establecimientos de enseñanza dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, creados por Ley Especial o por Ley de Presupuesto en el transcurso de los años 1941 y 1942, que se incorporan a la nómina general publicada en el Libro Primero de esta obra.

Por Ley Especial

Año 1941

ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO MIXTA, DE NUEVE DE JULIO (Buenos Aires)

Ley N.° 12.718, de 9 de octubre de 1941, creando una Escuela Nacional de Comercio Mixta en la ciudad de Nueve de Julio, Provincia de Buenos Aires.

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de—

LEY:

Artículo 1.° — Créase en la ciudad de Nueve de Julio, Provincia de Buenos Aires, una Escuela Nacional de Comercio Mixta, con dos divisiones, de primer año, una nocturna y otra diurna, debiendo anualmente crearse los cursos que demanden su normal funcionamiento, hasta completar el ciclo de estudios comerciales, según el plan de estudios vigente.

Art. 2.° — La Escuela creada por esta ley, será incluída en el presupuesto general de gastos.

Art. 3.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 29 de septiembre de 1941.

R. Patrón Costas. — José Luis Cantilo.
Gustavo Figueroa — *L. Zavalla Carbó.*
Secretario del Senado. — Secretario de la C. de DD.

Registrada bajo el N.° 12.718.

Buenos Aires, 9 de octubre de 1941.

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese, y dése al Registro Nacional.

CASTILLO.
Guillermo Rothe.

ESCUELA TECNICA DE ADAPTACION REGIONAL DE RESISTENCIA (Gobernación del Chaco)

Ley N.° 12.726, de 9 de octubre de 1941, creando una Escuela Técnica de Adaptación Regional, en la ciudad de Resistencia, Gobernación del Chaco (1).

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de—

LEY:

Artículo 1.° — Créase en la ciudad de Resistencia, Gobernación del Chaco, una Escuela Técnica de Adaptación Regional.

Art. 2.° — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley, estableciendo los planes de estudios y dictando las medidas necesarias para la instalación y funcionamiento de la escuela.

Art. 3.° — Hasta tanto se incluya en la Ley General de Presupuesto, los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley, se harán de rentas generales, con imputación a la misma.

Art. 4.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 29 de septiembre de 1941.

R. Patrón Costas. — José Luis Cantilo.
Gustavo Figueroa — *L. Zavalla Carbó.*
Secretario del Senado. — Secretario de la C. de DD.

Registrada bajo el N.° 12.726.

Buenos Aires, 9 de octubre de 1941.

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

CASTILLO.
Guillermo Rothe.

(1) La aplicación de esta Ley está suspendida, por no haberse incluído la partida correspondiente en la Ley de Presupuesto para el año 1942, prorrogada para el año 1943.

Decreto N.° 107.348, de 5 de diciembre de 1941, estableciendo el plan de estudios que regirá en la Escuela Técnica de Adaptación Regional de Resistencia (Chaco), de conformidad con lo dispuesto en la Ley 12.726.

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1941.

Atento que de conformidad con lo dispuesto por el art. 2.° de la Ley N.° 12.726 que crea la Escuela Técnica de Adaptación Regional en Resistencia (Chaco) la Inspección General de Enseñanza eleva el correspondiente proyecto de plan de estudios que regirá en la misma de acuerdo con la orientación que se ha fijado al nuevo establecimiento;

El Vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

DECRETA:

Artículo 1.° — La Escuela Técnica de Adaptación Regional de Resistencia (Chaco), creada por disposición de la Ley N.° 12.726, estará destinada a la formación de Obreros Calificados y Peritos en las industrias regionales, éstos últimos especializados en las ramas que se incluyan en el curso superior del plan de estudios.

Art. 2.° — Regirá para la misma el siguiente Plan de Estudios:

PRIMER AÑO

	Horas semanales
Castellano	3
Historia	2
Geografía	2
Anatomía y Fisiología	2
Aritmética	4
Geometría	2
Dibujo Geométrico	4
Tecnología general (Materiales)	4
Taller (Ajuste y Herrería)	16
Total de horas	39

SEGUNDO AÑO

	Horas semanales
Castellano	2
Aritmética Comercial	2
Geometría	2
Higiene Industrial	2
Dibujo Técnico	4
Tecnología de taller (máquinas y herramientas)	4
Física y Mecánica	4
Electricidad (corriente continua)	2
Instrucción Cívica	1
Taller (máquinas, motores, soldadura)	16
Total de horas	39

TERCER AÑO

	Horas semanales
Contabilidad Industrial	4
Legislación Industrial	1
Dibujo Técnico	4
Tecnología de máquinas especiales	4
Tecnología de fabricación	2
Máquinas a vapor	2
Motores a combustión interna	4
Electricidad (corriente alternada y plantas generadoras)	2
Taller (electricidad, máquinas, fabricación)	16
Total de horas	39

CUARTO AÑO (de Especialización)

	Horas semanales
Tecnología de la industria algodonera	2
Tecnología de la industria azucarera	2
Tecnología de la industria maderera	2
Tecnología de la industria del aceite	2
Nociones de resistencia de materiales	4
Dibujo técnico (por especialidad)	4
Práctica de fabricación (por especialidad)	23
Total de horas	39

Art. 3.° — Para ingresar al primer año se requerirán las siguientes condiciones: Sexto grado primario, haber cumplido doce años de edad, certificado de nacimiento, certificado de vacuna y salud, conformidad del padre o tutor.

Cuando el número de aspirantes sea mayor que el autorizado, las vacantes se adjudicarán mediante examen de selección.

Los egresados de las Escuelas de Artes y Oficios de la Nación podrán ingresar directamente al tercer año, siempre que queden asientos en dicho curso una vez promovidos los alumnos de segundo año del establecimiento.

Art. 4.° — Al finalizar el tercer año se dará un certificado de Obrero Calificado que acredite haber cursado los estudios generales correspondientes a las industrias del algodón, del aceite y forestal.

Al terminar el cuarto año, se otorgará un certificado de Perito en la rama de especialización elegida.

Art. 5.° — Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional y archívese.

CASTILLO.
GUILLERMO ROTHE.

AÑO 1942

INSTITUTO NACIONAL DEL PROFESORADO SECUNDARIO DE CATAMARCA

Ley N.° 12.765, de 9 de septiembre de 1942, creando el Instituto del Profesorado Secundario en la ciudad de Catamarca

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de—

LEY:

Artículo 1.° — Créase el Instituto de Profesorado Secundario en la Capital de la Provincia de Catamarca.

Art. 2.° — El Poder Ejecutivo organizará sus secciones con las siguientes materias: matemáticas, geografía, historia, zoología y botánica, química, física, legislación escolar, historia de la educación, práctica de la enseñanza, literatura, castellano, inglés, francés y filosofía. La Escuela Normal de Maestros servirá de departamento de aplicación anexo.

Art. 3.° — Podrán ingresar los maestros normales, profesores de la Nación y bachilleres.

Art. 4.° — Los profesores serán designados previo concurso de antecedentes y de oposición.

Art. 5.° — El personal docente de este establecimiento será exclusivamente con título de profesor normal o profesor de enseñanza secundaria, expedido por escuelas de profesores o universidades.

Art. 6.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 4 de septiembre de 1942.

R. Patrón Costas.
Gustavo Figueroa
Secretario del Senado.

José Luis Cantilo.
L. Zavalla Carbó.
Secretario de la C. de DD.

Registrada bajo el N.° 12.765.

Buenos Aires, 9 de septiembre de 1942.

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese, y dése al Registro Nacional.

PATRON COSTAS.
Guillermo Rothe.

Decreto N.° 137.843, de 10 de diciembre de 1942, reglamentario de la Ley N.° 12.765, de creación del Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1942.

A fin de hacer efectivas las disposiciones de la Ley N.° 12.765, promulgada el 9 de septiembre último y atento lo aconsejado por la Inspección General de Enseñanza,

El Presidente de la Nación Argentina—,

DECRETA:

Artículo 1.° — Créase el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca, establecimiento que funcionará en la Capital de la Provincia del mismo nombre.

Art. 2.° — Incorpórase al referido Instituto la actual Escuela Normal de Maestros de Catamarca, con el carácter de Departamento de Aplicación, anexo.

Art. 3.° — El Instituto Nacional del Profesorado de Catamarca, se regirá por las disposiciones del Reglamento Orgánico del Instituto similar de la Capital Federal con las salvedades siguientes:

a) El artículo 11 se reemplazará por el siguiente: El Consejo Consultivo designará anualmente el miembro que reemplazará al Rector en caso de ausencia de este último, dando cuenta de esa elección al Ministerio y a la Inspección General por intermedio del Rectorado;

b) En el artículo 24 se incluirá una cláusula estableciendo que el personal docente de este establecimiento deberá poseer diploma de profesor normal o de enseñanza secundaria otorgado por un instituto directamente dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública o de algunas de las Universidades Nacionales;

c) El artículo 62 se reemplazará por el siguiente: Para ingresar como alumno del Instituto se requiere: *a)* Presentar certificado de aprobación de los cursos completos del plan de estudios de los Colegios Nacionales; Escuelas Normales (Profesores o Maestros) de las Escuelas Nacionales de Comercio o de las Escuelas Industriales de la Nación. Los Bachilleres, Profesores Normales y Maestros podrán ingresar a cualquiera de los Profesorados con la salvedad de que, cuando se trate de los Profesorados en Idiomas Extranjeros, si el aspirante no cursó en la enseñanza media los estudios del correspondiente idioma, deberá rendir una prueba de suficiencia en dicha materia, con sujeción a un programa fijado al efecto por el Consejo Consultivo. Los Peritos Mercantiles sólo podrán ingresar a los Profesorados de Matemáticas, en Física y Química o en el del Idioma Extranjero que corresponda al aprobado por el aspirante en los cursos para Peritos Mercantiles. Los Técnicos Industriales sólo podrán ingresar a los Profesorados en Matemáticas o en Física y Química; *b)* Acreditar moralidad y buena conducta, poseer buena salud y no presentar defecto físico incompatible con el ejercicio de la profesión;

d) Las disposiciones concernientes al Colegio Nacional «Bartolomé Mitre» de la Capital que figuran en el referido reglamento se aplicarán a la Escuela Normal de Maestros de Catamarca con excepción de lo que se refiere a la inspección del establecimiento, la que corresponderá a la Inspección General de Enseñanza y se podrá hacer efectiva por intermedio de los Inspectores o del Rector del Instituto.

Art. 4.° — El Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca iniciará su funcionamiento en 1943, con las siguientes Secciones del Profesorado:

I. Sección de Castellano y Literatura.
II. » » Ciencias Naturales.
III. » » Filosofía y Pedagogía.
IV. » » Física y Química.
V. » » Historia y Geografía.

VI. Sección de Francés.
VII. » » Inglés.
VIII. » » Matemáticas.

En estas secciones regirán los planes de estudios vigentes en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital Federal, excepto en la de Filosofía y Pedagogía, en la que se aplicará el que está en vigencia en el Instituto similar de Paraná (Entre Ríos).

Art. 5.° — Mientras no esté constituído el Consejo Consultivo del Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca, la Inspección General de Enseñanza del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública tendrá a su cargo los llamados a concurso para la provisión de cátedras, designación de los respectivos jurados y demás trámites, hasta la elevación de las ternas.

Art. 6.° — Una vez designados por el Poder Ejecutivo los profesores para los cursos de primer año de las diversas secciones, se constituirá un Consejo Consultivo provisional con un representante de cada una de ellas, que será el profesor de la misma con mayor antigüedad en la enseñanza oficial y el Director de la Escuela Normal de Varones. Este Consejo será reemplazado por el que prevé el Reglamento Orgánico una vez que se designen los profesores de Metodología y Práctica de la Enseñanza para los cursos de cuarto año.

Art. 7.° — Para la instalación y funcionamiento del Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca se incorporarán al Inciso que la Ley de Presupuesto para 1943 ha previsto para la Escuela Normal de Maestros de la misma ciudad, las partidas requeridas al efecto, de conformidad con las exigencias de la precedente organización, previa aprobación de las mismas por el Poder Ejecutivo, mediante un decreto especial.

Art. 8.° — Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional y archívese.

CASTILLO.
GUILLERMO ROTHE.

ESCUELA PROFESIONAL DE MUJERES «NICOLASA BERRONDO DE QUIROGA» DE MERCEDES
(San Luis)

Ley N.° 12.775, de 29 de septiembre de 1942, nacionalizando la Escuela Profesional «Nicolasa Berrondo de Quiroga» de Mercedes (San Luis).

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación, reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de—

LEY:

Artículo 1.° — Destínase la suma de ochenta mil pesos moneda nacional, para la nacionalización de la Escuela Profesional Nicolasa Berrondo de Quiroga, de Mercedes, Provincia de San Luis, que se invertirá en materiales, muebles y útiles, incluídos alquileres y sueldos del personal por un año.

Art. 2.° — Hasta tanto este gasto se incorpore al Presupuesto General de la Nación, se hará de Rentas Generales con imputación a la presente.

Art. 3.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año mil novecientos cuarenta y dos.

RICARDO CABALLERO. — JOSÉ LUIS CANTILO.
E. Fernández Guerrico. — *L. Zavalla Carbó.*

Buenos Aires, 29 de septiembre de 1942.

Téngase por Ley de la Nación, comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y cumplido, pase al Ministerio de Hacienda a los fines dispuestos en el artículo 3.° de la Ley N.° 11.672-edición 1941.

CASTILLO.
GUILLERMO ROTHE.

Decreto N.° 140.124, de 31 de diciembre de 1942, reglamentario de la Ley N.° 12.775, sobre nacionalización de la Escuela Profesional de Mujeres «Nicolasa Berrondo de Quiroga», de Mercedes (San Luis).

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1942.

A fin de dar cumplimiento a la Ley 12.775, sobre nacionalización de la Escuela Profesional de Mujeres «Nicolasa Berrondo de Quiroga» de Mercedes (San Luis) y de acuerdo con el decreto de fecha 31 del corriente que determina el presupuesto de sueldos y gastos que debe regir en la citada escuela, y atento lo informado por la Inspección General de Enseñanza,

El Presidente de la Nación Argentina—,

DECRETA:

Artículo 1.° — A partir del 1.° de diciembre del corriente año, la Escuela Profesional de Mujeres «Nicolasa Berrondo de Quiroga» de Mercedes (San Luis), dependerá del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y funcionará con la orientación, planes, reglamentos y programas en vigor y con los siguientes Talleres: Tejidos, Corte y Confección, Bordado, Lencería, Cocina y Economía Doméstica y Repujado.

Art. 2.° — Desígnase desde el 1.° de diciembre del corriente año en los cargos que se expresa a continuación a las siguientes personas: *Directora,* a la señorita Herminia Sánchez Moreno (Céd. de Ident. N.° 8145 Pol. S. Luis); *Regente,* señora María Nydia de la Canal de Lance (Céd. de Ident. N.° 3432. Pol. S. Luis); *Maestras de Corte y Confección,* un cargo cada una, señorita María Luisa Taboada Mora (Céd. de Ident. N.° 14022. Pol. S. Luis) y señora Aurora B. de Arancibia (Céd. de Ident. N.° 9007. Pol. S. Luis); *Maestras de Bordado,* un cargo cada una, a las señoras María Amelia Garro de Guerra (Céd. de Ident. N.° 15053. Pol. S. Luis) y Aurora Taboada de Riquelme (Céd. de Ident. N.° 1141. Pol. S. Luis) y señorita Ma-

ría Casabene (Céd. de Ident. N.° 3599. Pol. S. Luis); *Maestra de Lencería,* señora Aminta Magaldi de Caliandro (Céd. de Ident. N.° 15083. Pol. S. Luis); *Maestra de Cocina,* señorita María Teodora Tavarozzi (Céd. de Ident. N.° 16001. Pol. S. Luis); *Maestra de Repujado,* señorita Adelina Domínguez (Céd. de Ident. N.° 15041. Pol. S. Luis); *Maestra de Música,* señora María Catalina Lartigue de Roca Costa (Céd. de Ident. N.° 21366. Pol. S. Luis); *Maestra del Curso Preparatorio,* señora Teófila Orfelia Farías de Alonso (Céd. de Ident. N.° 3405. Pol. S. Luis); *Ayudantes de Taller*: (de Tejidos), señorita María Catalina Maldonado (Céd. de Iden. N.° 15090. Pol. S. Luis); *(de Corte y Confección),* señora Amalia Gutiérrez de Tavarozzi (Céd. de Ident. N.° 7057. Pol. S. Luis); *(de Cocina),* Estela P. Poblet de Arnulphi (Céd. de Ident. N.° 16039. Pol. S. Luis); *(de Economía Doméstica),* señora María Luna de Garro (Céd. de Ident. N.° 16018. Pol. S. Luis); y *Ayudante 6.° (personal de servicio),* señorita Mercedes Pedernera (Céd. de Ident. N.° 16010. Pol. S. Luis).

Art. 3.° — La Inspección General de Enseñanza designará un Inspector para que dé posesión de sus cargos a las personas nombradas y para que firme el acta de toma de posesión de la escuela, debiendo éste conjuntamente con el empleado que destaque la Dirección General de Administración, proceder a los inventarios de los materiales, útiles y muebles que se reciban, asimismo éste último, iniciará los libros y registros del movimiento administrativo e instruirá al personal sobre la forma de llevarlos.

Art. 4.° — Autorízase a la Inspección General de Enseñanza para adoptar las medidas necesarias a efecto de que se apliquen en la escuela los planes que rigen en los establecimientos similares de su dependencia con las modificaciones que estime pertinentes, así como para conformar las situaciones transitorias de alumnas que se produzcan durante el curso escolar de 1943.

Art. 5.° — Agradézcase al Gobierno de la Provincia de San Luis la donación de útiles y demás elementos de enseñanza de esta escuela que ha puesto a disposición del Ministerio de Instrucción Pública de la Nación.

Art. 6.° — Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional y archívese.

CASTILLO.
GUILLERMO ROTHE.

Otros Establecimientos de Enseñanza creados por la Ley de Presupuesto del año 1942, prorrogada para el año 1943 (1)

Además de los establecimientos de enseñanza creados por ley especial en los años 1941 y 1942, cuyo texto se acaba de transcribir, figuran en la Ley de Presupuesto General de la Nación, vigente para el año 1943, los siguientes nuevos establecimientos, dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública:

Escuelas Normales

Escuela Normal de Maestras N.° 2, de La Plata (Buenos Aires).

Colegios Nacionales

Colegio Nacional de Chacabuco (Buenos Aires).

Colegio Nacional de José F. Uriburu (Buenos Aires).

Colegio Nacional de Villa María (Córdoba).

Colegio Nacional de Reconquista (Santa Fe).

Liceos Nacionales de Señoritas

Liceo de Señoritas N.° 4, de la Capital, anexo a la Escuela Normal de Maestras N.° 7.

Liceo de Señoritas, anexo al Colegio Nacional de la ciudad de San Juan.

Liceo de Señoritas, anexo al Colegio Nacional de la ciudad de Tucumán.

---

(1) En esta Ley de Presupuesto están incorporadas las Secciones creadas por el Poder Ejecutivo en Acuerdo General de Ministros de 7 de abril de 1942. (Ver Boletín del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, N.° 26, página 390).

Escuelas Industriales y de Artes y Oficios

Escuela Industrial N.° 4, de la Capital, anexa a la Escuela Industrial N.° 3.

Escuela Industrial, de Avellaneda (Buenos Aires).

Escuela de Artes y Oficios, de Coronel Suárez (Buenos Aires).

Escuela de Artes y Oficios, de General Sarmiento, San Miguel (Buenos Aires).

Escuela Técnica de Oficios, de Lanús (Buenos Aires).

Escuela Industrial de La Plata (Buenos Aires).

Escuela de Artes y Oficios, de Mar del Plata (Buenos Aires).

Escuela de Oficios Regionales, de Olavarría (Buenos Aires).

Escuela de Artes y Oficios, de Seis de Septiembre (Buenos Aires).

Escuela de Artes y Oficios, de Balnearia (Córdoba).

Escuela de Artes y Oficios, de Leones (Córdoba).

Escuela de Artes y Oficios, de Villaguay (Entre Ríos).

Escuela de Artes y Oficios, de El Carmen (Jujuy).

Escuela de Artes y Oficios, de Metán (Salta).

Escuela Técnica de Oficios N.° 3, de Rosario (Santa Fe).

Escuela Técnica de Oficios, de Vera, Jobson (Santa Fe).

Escuela de Artes y Oficios, de Neuquén.

Escuela Técnica de Oficios, de Neuquén.

Escuelas Profesionales

Escuela Profesional de Mujeres, de Avellaneda (Buenos Aires).

Escuela Profesional de Mujeres, de Gualeguaychú (E. Ríos).

Escuela de Tejidos y Orfebrería, de Chilecito (La Rioja).

Escuela de Tejidos y Telares, de La Paz (Mendoza).

Escuela Profesional de Mujeres, anexa a la Escuela Técnica de Oficios, de Vera, Jobson (Santa Fe).

Sección Profesional de Mujeres, anexa a la Escuela Técnica de Oficios, de Neuquén.

Escuelas de Comercio

Escuela Comercial de Mujeres «Manuel Belgrano» de la Capital.

Sección Comercial anexa al Colegio Nacional «General San Martín», de Corrientes.

Sección Comercial anexa a la Escuela Normal de Maestros «José Manuel Estrada», de Corrientes.

Curso Comercial anexo al Colegio Nacional «Teodoro Sánchez de Bustamante», de Jujuy.

Curso Comercial anexo a la Escuela Normal Mixta «Juan Ignacio Gorriti», de Jujuy.

Sección Comercial anexa a la Escuela de Artes y Oficios, de Gálvez (Santa Fe).

Sección Comercial anexa a la Escuela Técnica de Oficios, de Vera, Jobson (Santa Fe).

Escuela de Comercio, de Concepción (Tucumán).

Escuela de Comercio, de Monteros (Tucumán).

Sección Comercial anexa a la Escuela Técnica de Oficios, de Neuquén.

Registro de Egresados de las Escuelas de Oficios

Registro de Egresados de las
Escuelas de Oficios

REGISTRO DE EGRESADOS DE LAS ESCUELAS DE OFICIOS

Ley N.° 12.234, de 4 de octubre de 1935, creando Escuelas de Oficios en la Capital Federal y estableciendo una Oficina de colocación de sus egresados y bolsa de trabajo para los mismos.

Artículo 1.° — Créanse en la Capital Federal cuatro escuelas de oficios para la formación de obreros destinados a las industrias del hierro, de la madera, de la electricidad y de la edificación, las que estarán ubicadas en la siguiente forma: escuelas de industrias del hierro, en el barrio de Barracas; de industrias de la madera, en San Cristóbal; de industrias edilicias en Flores, y de industrias eléctricas, en Puerto Nuevo.

Art. 2.° — Estas escuelas dependerán del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación y su organización deberá abarcar cada una de las especialidades principales que comprenden los oficios correspondientes a las citadas industrias, debiendo limitarse la inscripción en cada especialidad al número que aconseje la demanda de cada tipo de obrero y que permitan las instalaciones y talleres de cada establecimiento.

Art. 3.° — La enseñanza en estas escuelas deberá comprender, además de la parte práctica y técnica correspondiente al aprendizaje de cada oficio, las siguientes asignaturas de cultura general: castellano, historia y geografía argentinas, instrucción cívica y moral, nociones de contabilidad y de legislación industrial.

Art. 4.° — El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública establecerá, anexa a la sección que atienda la inspección de estas escuelas, una oficina de colocación de los egresados y bolsa de trabajo para los mismos, la que deberá mantenerse en constante comunicación con todas las reparticiones oficiales que necesiten obreros especializados, con las empresas de servicios públicos, y con las industriales y particulares a quienes pueda interesar la utilización de éstos.

Art. 5.° — Las dependencias nacionales y reparticiones autónomas que deban ocupar obreros de las especialidades enseñadas en estas escuelas, deberán dar preferencia a sus egresados, a cuyo efecto la oficina citada en el artículo anterior, pasará bimensualmente, a cada dependencia o repartición, una lista de todos los egresados sin trabajo, aspirantes a esos cargos, con los antecedentes de clasificaciones, méritos y aptitudes especiales y condiciones de conducta de cada uno.

Art. 6.° — El Poder Ejecutivo, al reglamentar esta ley, deberá contemplar todos aquellos aspectos docentes, sociales y técnicos, que el problema de la enseñanza de carácter industrial comprende, como así también la posibilidad de anexar a las establecimientos que se crean cursos de perfeccionamiento para aprendices y obreros ya formados y secciones de readaptación profesional.

Art. 7.° — Destínase la suma de cuatrocientos mil pesos moneda nacional ($ 400.000 m|n.), para atender los gastos de instalación y funcionamiento durante el primer año de los cuatro establecimientos creados por esta ley, debiendo proyectarse, una vez organizados, su presupuesto detallado de gastos y sueldos para su inclusión definitiva en el Presupuesto General de la Nación.

Art. 8.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 27 de septiembre de 1935.

R. Patrón Costas. — Manuel A. Fresco.
Gustavo Figueroa. — *Carlos G. Bonorino.*

Buenos Aires, 4 de octubre de 1935.

Téngase por Ley de la Nación; comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
Manuel de Yriondo.

Circular N.° 102 de la Inspección General de Enseñanza, de 21 de diciembre de 1937, impartiendo instrucciones a fin de organizar el Registro de Egresados de las Escuelas Técnicas y Prácticas del Ministerio.

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1937.

Señor Director .....

A fin de organizar el Registro de Egresados de las Escuelas Técnicas y Prácticas, que funcionará en la Sección de Enseñanza Industrial de esta Inspección General, se remiten a ese establecimiento las fichas que, una vez llenadas, deberán ser devueltas a esta repartición.

Al final de cada curso escolar, y después de los exámenes de marzo, deberán remitirse a la oficina del Registro de Egresados, las nuevas fichas.

Cada escuela técnica o práctica deberá abrir un registro en el que se anotarán todos los datos contenidos en las fichas enviadas.

En dicho registro se anotarán además todos los datos referentes a cambios y novedades en la actuación profesional de los egresados, lo que también deberá comunicarse a la oficina del Registro en esta Inspección General.

Las fichas que se remiten deberán ser devueltas antes del 15 de abril del año 1938.

Saludo al Sr. Director muy atentamente.

JUAN MANTOVANI.
Inspector General de Enseñanza.

Fomento de la Producción Científica Literaria y Artística

Fomento de la Producción Científica
Literaria y Artística

FOMENTO DE LA PRODUCCION CIENTIFICA LITERARIA Y ARTISTICA (1)

ASOCIACIÓN ARGENTINA PARA EL PROGRESO DE LAS CIENCIAS

Mensaje del Poder Ejecutivo al Honorable Congreso, de 29 de septiembre de 1934, solicitando la sanción de un proyecto de ley que permita la realización de los fines de investigación científica perseguidos por la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias.

Buenos Aires, 29 de septiembre de 1934.

Al Honorable Congreso de la Nación:

La investigación científica es condición fundamental del progreso de las naciones civilizadas. La ciencia es la primera fuente de poder y de riqueza, pues a su trabajo incesante se debe el adelanto técnico e industrial de un país, que le permite mantener y mejorar su posición en la competencia mundial, asegurando su libertad económica y aún política. Pero además la ciencia contribuye en forma señalada al bienestar general, a la salud pública y a la solución de los problemas sociales. Las ventajas no son, sin embargo, exclusivamente de orden material, sino también de orden espiritual. La ciencia es base de la cultura, difunde el espíritu del razonamiento objetivo, encamina las discusiones sobre los intereses colectivos hacia vías nacionales y las aparta de la violencia pasional; habitúa a la honestidad intelectual e imparte el amor a la verdad.

(1) Ver en la obra «Digesto de Justicia», de la Dirección de Justicia de este Ministerio, tomo 1.º, páginas 491-543, el texto de la Ley N.º 11.723, de 28 de septiembre de 1933, y sus decretos reglamentarios, sobre régimen legal de la propiedad científica, artística y literaria, fomento de las artes y letras y creación de la Comisión Nacional de Cultura; y el texto de la Ley N.º 12.227, de 3 de octubre de 1935, y decretos reglamentarios, constituyendo el fondo permanente de la Comisión Nacional de Cultura y acordándole una suma anual para premios a la producción nacional o regional en ciencias, bellas artes y letras; creación de becas de perfeccionamiento científico, artístico y literario, y para el funcionamiento del Teatro Oficial de la Comedia Argentina.

Todas las grandes naciones contribuyen al acervo de los conocimientos comunes sosteniendo la investigación científica y en forma tanto mayor cuanto más adelantado esté su desarrollo cultural. No sólo las grandes potencias económicas como Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Alemania sino también países de menor riqueza material como Bélgica, Holanda y Suiza dedican grandes esfuerzos al progreso de las ciencias. El resurgimiento moderno de naciones que se han rejuvenecido como el Japón, Italia y España, se hace sobre la base del adelanto científico. Puede afirmarse que un país que no cultiva la ciencia por cuenta propia va a la rastra del resto del mundo y no ha completado su ciclo de emancipación.

En nuestro país el interés por la ciencia se ha despertado y cada día su necesidad se hace sentir y se comprende mejor. Acaba de constituirse la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias por gran número de personas deseosas de contribuir al progreso común y dirigida por hombres de ciencia destacados, pertenecientes a las academias y universidades nacionales y dedicados en forma exclusiva o intensa al cultivo de las ciencias. Esta asociación tiene por objeto fomentar el adelanto científico en todo el país, llevando su ayuda allí donde haga más falta y sea más provechosa. Los recursos se emplearán en la formación de investigadores por medio de becas a los jóvenes que hayan demostrado su vocación y capacidad para la ciencia; en costear los gastos necesarios para efectuar investigaciones originales; en contribuir al fomento de las actividades científicas en las instituciones que actualmente las practican y en desarrollar las disciplinas que hasta ahora no han sido cultivadas.

El Poder Ejecutivo de la Nación, se reserva asimismo las facultades de gobierno y no sólo interviene para autorizar las subvenciones que se puedan acordar y para aprobar implícitamente los planes de trabajo, sino que además conserva la facultad de elegir a los becados dentro de ternas que formularán las instituciones correspondientes que en esa forma, con su autoridad científica colaborarán eficazmente con la gestión del Poder Ejecutivo.

Es obra de gobierno estimular una empresa tan meritoria y de tan grande interés general, por lo cual el Poder Ejecutivo solicita la sanción del adjunto proyecto de ley, según el cual se entregará a la Asociación Argentina para el Progreso de las

Ciencias, títulos de renta nacional por la suma de 1.000.000 de pesos moneda nacional para constituir un fondo cuyas rentas serán empleadas exclusivamente en la realización de sus fines no pudiendo disponerse del capital. La sociedad deberá enviar al gobierno un informe anual detallando sus actividades y el uso que ha hecho de estas rentas. En caso de disolución de la sociedad este fondo volverá a poder del Estado.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

AGUSTIN P. JUSTO.
MANUEL DE IRIONDO.

Ley N.° 12.338, de 31 de diciembre de 1936, acordando a la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias un fondo de un millón de pesos en títulos, cuya renta se invertirá en becas externas e internas y en subvencionar investigaciones científicas.

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1.° — Acuérdase a la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias la suma de $ 1.000.000 moneda nacional en títulos del tipo de interés y amortización que el Poder Ejecutivo determine.

Art. 2.° — La Asociación sólo podrá disponer, previo cumplimiento de lo que disponen los artículos 3.°, 4.° y 5.°, de la renta de esos títulos para el fomento de la investigación científica, en la siguiente forma:

a) Enviar becados al extranjero;
b) Sostener becas en el país;
c) Subvención a investigaciones científicas cuyo plan haya aprobado.

Art. 3.° — Los becados a que se refiere el inciso *a)*, del artículo 2.°, deberán ser elegidos por el presidente de la Nación dentro de una terna que formulará la Asociación y con el informe del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. El Poder Ejecutivo aprobará o desaprobará asimismo la institución de las becas.

Art. 4.° — Las becas a que se refiere el artículo 2.°, inciso *b)*, deberán ser previamente aprobadas por decreto del Poder Ejecutivo y los candidatos que gocen de las mismas en cualquier caso y cualquiera que fuese la institución que los proponga con informe del Poder Ejecutivo.

Art. 5.° — Las subvenciones a que se refiere el inciso *c)*, del artículo 2.°, no podrán ser acordadas sin previa autorización del Poder Ejecutivo una vez aprobado el plan de investigaciones científicas por la Asociación.

Art. 6.° — La Asociación rendirá cuenta anualmente al Poder Ejecutivo, del manejo de los fondos que se le acuerdan por esta ley.

Art. 7.° — En caso de disolución de la Asociación, todos los títulos y la renta de los mismos de que no se haya dispuesto, serán devueltos al gobierno nacional.

Art. 8.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 21 de diciembre de 1936.

Decreto, de 10 de mayo de 1937, reglamentario de la Ley N. 12.338

Buenos Aires, 10 de mayo de 1937.

Visto la Ley N.° 12.338 que acuerda a la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, la suma de pesos 1.000.000 m|n. curso legal, en títulos del tipo de interés y amortización que el Poder Ejecutivo determine; atento al informe que antecede en el que el Ministerio de Hacienda hace saber que no tiene inconveniente en que se disponga de aquella suma total, valor nominal, en títulos de Crédito Argentino Interno, 4 %, 1936, para atender su cumplimiento una vez que haya sido reglamentada, y

CONSIDERANDO:

Que para lograr el mejor cumplimiento de la ley de referencia es menester su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina—,

DECRETA:

Artículo 1.° — El cumplimiento de la Ley N.° 12.338 se hará efectivo con títulos de Crédito Argentino Interno, 4 %, 1936, conforme lo aconsejado por el Ministerio de Hacienda de la Nación el 23-4-937.

Art. 2.° — A los efectos del cumplimiento del art. 2.°, apartado *a)* de la Ley N.° 12.338, los candidatos deberán ser presentados para las becas externas antes del 31 de julio y para las becas internas (apartado *b)* del mismo artículo), antes del 31 de marzo.

Art. 3.° — Si no hubieran otros candidatos para optar a las becas que se aluden en el artículo que antecede, por no presentarse en número suficiente ya sea en becas sin tema especial o bien para una materia dada, la Asociación podrá presentar dos candidatos o uno solo haciendo constar la imposibilidad de formar terna.

Art. 4.° — Las subvenciones a investigaciones científicas cuyo plan haya aprobado la Asociación (apartado *c*) del artículo 2.° de la Ley N.° 12.338), no podrán ser acordados sin previa autorización del Poder Ejecutivo, pudiendo presentarse las propuestas en cualquier época del año.

Art. 5.° — Déjase establecido que las rendiciones de cuentas las efectuará anualmente la Asociación a la Contaduría General de la Nación.

Art. 6.° — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional, tómese nota y cumplido pase a la Dirección de Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a los efectos de su inclusión en Orden de Pago.

Decreto N.° 105.420.

JUSTO.
JORGE DE LA TORRE.

Estatutos de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, aprobados por decreto N.° 10.285 del Poder Ejecutivo, de 16 de agosto de 1938.

TITULO I

Fines de la entidad

Artículo 1.° — Con el nombre de «*Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias*», se constituye una agrupación, con asiento en la ciudad de Buenos Aires, cuyos fines serán:

a) Propender en toda forma al progreso y expansión de la investigación científica en la República, mediante la consolidación y adelanto de los institutos existentes, creación de los que fueren necesarios, como así de todo organismo que se considerara indispensable a los fines propuestos y fomentar e impulsar el desarrollo de todas las ramas de la ciencia e iniciar las inexistentes;

b) Propender a la creación permanente de becas en el país o en el extranjero, de perfeccionamiento, de investigación y de aprendizaje;

c) Fomentar el intercambio científico con los países latinoamericanos e intensificar las corrientes ya establecidas con los demás centros y entidades científicas del mundo;

d) Estimular la colaboración entre los investigadores dedicados a distintas disciplinas;

e) Estimular la formación de investigadores;

f) Ayudar al sostén de los investigadores destacados que no tengan medios para realizar su labor;

g) Subvencionar estudios especiales;

h) Adquirir aparatos, instrumental y material bibliográfico indispensable para la investigación regular, así como también para los estudios especiales que se estimaren convenientes;

i) Cooperar con la industria y la producción agropecuaria en las investigaciones de carácter científico sobre los problemas que se planteen.

Para el cumplimiento de estos fines, la Asociación podrá requerir de los poderes públicos el concurso necesario, como también para que los institutos existentes o a crearse puedan desarrollar con toda eficiencia los fines que determinaron su fundación; y asimismo podrá requerir el concurso de los particulares mediante la institución de legados, donativos, cuotas permanentes o temporarias o por cualquier medio o forma que los propios adherentes escojan.

La agrupación no se inmiscuirá en la dirección y actividades que desarrollen los institutos oficiales y privados existentes o los que puedan crearse, pero les ofrecerá amplia colaboración dentro de los propósitos que fundamentan su existencia.

TITULO II

Composición

Art. 2.° — La Asociación estará constituída por:

a) Un colegiado formado por socios fundadores y titulares;
b) Socios correspondientes, nacionales y extranjeros;
c) Socios colaboradores;
d) Socios adherentes.

Art. 3.° — Son socios fundadores, y de hecho titulares, los que suscribieron el acta de fundación de la entidad.

Art. 4.° — Son socios titulares los designados por el colegiado para integrarlo, para lo cual se requerirá como condición esencial ser investigador en actividad, entendiéndose por tal lo que literalmente traduce la expresión, y haber demostrado interés por la formación de investigadores.

Las candidaturas serán presentadas por tres o más miembros del colegiado y su elección se hará en una sesión posterior a la de su presentación, debiendo ser consagrado por dos tercios de votos

de los presentes en votación pública y previa discusión de los méritos de los candidatos; sólo se dejará constancia en actas del resultado.

Son derechos y obligaciones de los miembros titulares: participar de todas las deliberaciones y concurir anualmente, por lo menos, a la mitad de las reuniones, salvo justificación o aviso. De lo contrario automáticamente se produce su exclusión voluntaria.

Art. 5.° — Son socios correspondientes, nacionales y extranjeros, los que hayan señalado su acción en favor de los mismos fines que alienta la entidad, y para su designación se aplicarán las mismas normas que establece el artículo anterior para los socios titulares.

Art. 6.° — Son socios colaboradores los investigadores en actividad; serán presentados por tres miembros del colegiado, quienes especificarán su carácter de investigador en actividad, con mención de la disciplina, laboratorio, tema en que trabaja y la labor producida. La admisión se hará por simple mayoría.

Art. 7.° — Los socios adherentes serán personas o entidades, las que podrán solicitarlo directamente o ser presentados por un miembro del colegiado. Su admisión dependerá del Consejo ejecutivo.

Los socios adherentes dejarán de serlo por renuncia escrita o serán declarados cesantes por falta de pago de seis cuotas mensuales consecutivas y un mes después de notificarles su situación por carta certificada.

TITULO III

Dirección

Art. 8.° — La dirección y gobierno de la entidad estará a cargo de un colegiado formado por representantes de cada rama científica y se irán integrando a medida que las condiciones del medio lo requiera, a juicio de sus componentes en las condiciones prefijadas en el artículo 4.°. Su mesa directiva la integrarán un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero.

Se designarán de entre los miembros del colegiado un Prosecretario y un Protesorero que reemplazarán al Secretario y Tesorero durante las licencias o enfermedad o ausencia de los mismos.

Art. 9.° — El colegiado tendrá un Consejo ejecutivo y se dividirá en tres secciones relatoras de estudios, de hacienda y difusión y de becas y material.

El colegiado podrá determinar, cuando lo estime necesario, la creación de nuevas secciones.

Art. 10. — El Consejo ejecutivo lo forman los miembros de la mesa directiva del colegiado y los presidentes de las secciones relatoras.

Sus funciones son:

1.° Las que le asigna el presente Estatuto y todo cuanto se refiere a la representación y administración de la entidad;

2.° Establecer y mantener las vinculaciones necesarias con las autoridades, parlamento, universidades y todo otro organismo, así como también con las sociedades y entidades científicas del país y del extranjero.

Art. 11. — La sección relatora de estudios será la encargada de mantenerse al corriente acerca del estado y desarrollo de cada una de las ramas científicas que se cultivan en la República.

Propiciará en cada caso la mejor forma de coadyuvar al fomento de las ramas o especialidades que lo requieran, como así también de la iniciación en las especulaciones aún no emprendidas. Toda iniciativa a este respecto debe surgir de su seno o cualquier solicitación que se formule en tal sentido deberá ser sometida a su estudio, previamente a su consideración por el colegiado.

Art. 12. — La sección relatora de hacienda y difusión tiene a su cargo la cuestión financiera y la obtención de fondos, para constituir el patrimonio de la Sociedad y su mejor administración, debiendo arbitrar todos los medios que juzgue más convenientes.

El Tesorero es miembro nato de esta sección.

Art. 13. — La sección relatora de becas y material tiene a su cargo todo lo concerniente a dichas actividades. Respecto de las becas, determinará el lugar, tiempo y monto, encuadrando su acción dentro de las prescripciones que establezca el reglamento de becas. En cuanto al material, será la encargada de su adquisición y de su distribución, la que en todos los casos tendrá el carácter de préstamo.

Art. 14. — Las becas y subsidios serán adjudicadas por el colegiado previo informe de la comisión pertinente.

Art. 15. — Los miembros de la mesa directiva y de las secciones relatoras serán designados por el colegiado a simple pluralidad de votos en *quorum* legal, durarán dos años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos.

Art. 16. — La constitución de las secciones relatoras se hará en la primer reunión que celebre y procederán a la designación de presidentes, quienes la representarán en el Consejo ejecutivo, de acuerdo con el artículo 10. Cada sección redactará su propio reglamento.

Art. 17. — La elección de los miembros que forman la mesa directiva del colegiado y las comisiones relatoras, se efectuará en la primera quincena del mes de diciembre de los años impares, y el ejercicio de las funciones comenzará el 1.° de enero de los años pares.

Art. 18. — Son deberes y obligaciones del Presidente y del colegiado:

a) Representar a la Asociación en todos los actos;
b) Presidir las asambleas y sesiones y dirigir la discusión con voz y voto;
c) Resolver con su voto en caso de empate;
d) Convocar a las reuniones del colegiado y del Consejo ejecutivo.

Art. 19. — El Vicepresidente reemplaza al Presidente en caso de ausencia, con todas sus atribuciones.

Art. 20. — El Secretario redactará las actas y dará lectura de las mismas y de los asuntos entrados al comienzo de cada sesión. Refrendará la firma de Presidente y tendrá a su cargo todas las gestiones que se relacionen con la marcha de la Asociación, correspondencia y archivo.

Art. 21. — El Tesorero manejará los fondos de la Asociación, de acuerdo con sus fines, no pudiendo autorizar ninguna inversión sin la firma del Presidente.

Art. 22. — La mesa directiva deberá presentar anualmente memorias detalladas de su labor y el balance con prolija determi-

nación de partidas. Tanto las memorias como el balance se remitirán, en todos los casos, a los socios de las distintas categorías y a toda persona que haya contribuído con su aporte a la Asociación.

TITULO IV

Recursos

Art. 23. — Los recursos de la Asociación estarán constituídos:

a) Por los bienes de toda clase que constituyan su patrimonio o que ingresen en el futuro por compra, legado, donación o subvención;

b) Por las cuotas de los socios, que se cotizarán así:

socios titulares, cinco pesos mensuales;
socios colaboradores, un peso mensual;
socios adherentes, la suma que se determine en cada caso.

TITULO V

Asambleas y sesiones

Art. 24. — Las asambleas ordinarias tendrán efecto anualmente para la aprobación de la memoria y el balance del ejercicio en la primera quincena del mes de diciembre de cada año, debiendo además en los años impares proceder a cumplir lo dispuesto por el artículo 17.

La citación a la asamblea se hará con quince días de anticipación y formarán parte de ella los socios fundadores y los titulares, requiriéndose para la primera citación, un *quorum* de la mitad más uno de los socios mencionados.

En caso de no realizarse la asamblea a la primera citación, se hará una nueva dentro de los quince días subsiguientes y la asamblea podrá realizarse con el número de socios que concurran.

Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos.

El ejercicio financiero de la Sociedad correrá del 1.° de diciembre al 30 de noviembre.

Podrán realizarse asambleas extraordinarias siempre que así lo resuelva el Consejo directivo o lo soliciten cinco miembros titulares, debiendo, en este caso, efectuarse la citación dentro de los treinta días subsiguientes al pedido de convocatoria.

Art. 25. — El colegiado se reunirá por los menos tres veces al año, pudiendo hacerlo todas las veces que así lo resuelva o que sea convocado por el Consejo ejecutivo, o lo soliciten por escrito cinco miembros titulares.

El *quorum* será de la mitad más uno de sus miembros, no computándose para tal fin los que estuviesen en uso de licencia por enfermedad o por no residir en la Capital Federal o por estar temporariamente ausentes de ella. En ningún caso podrá haber sesión con menos de cinco miembros.

Art. 26. — El Consejo ejecutivo se reunirá por lo menos mensualmente, de marzo a diciembre, y todas las veces que su Presidente lo estime necesario. Su *quorum* lo formará la mitad más uno de sus miembros.

TITULO VI

Disposiciones generales

Art. 27. — La Asociación no intervendrá en ninguna actividad extraña a sus fines.

Art. 28. — En caso de ser disuelta la Asociación sus bienes pasarán a la Universidad Nacional de Buenos Aires para ser destinados a los fines que establecen los Estatutos.

MUSEO SOCIAL ARGENTINO

Ley N.° 12.230, de 3 de octubre de 1935, de estímulo a la obra que realiza el Museo Social Argentino

Artículo 1.° — Destínase la suma de doscientos mil pesos moneda nacional para la construcción del edificio del Museo Social Argentino.

Art. 2.° — Acuérdase a esta institución un subsidio anual de cincuenta mil pesos moneda nacional para ayudar al sostenimiento de la escuela de servicio social, de la sección de orientación profesional, de la exposición permanente de economía social, de la Biblioteca Emilio Frers y demás servicios y necesidades de la institución.

Art. 3.° — Tendrán valor oficial los títulos y certificados que otorgaren la sección profesional y la escuela de servicio social. A este efecto el Ministerio de Instrucción Pública intervendrá en la aprobación de los programas y reglamentos y fiscalizará los exámenes, de acuerdo con la reglamentación especial que expedirá.

Art. 4.° — El gasto que demande esta ley se hará de rentas generales con imputación a la misma.

Art. 5.° — Comuníquse al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 26 de septiembre de 1935.

JULIO A. ROCA. — MANUEL A. FRESCO.
Gustavo Figueroa. — *Carlos G. Bonorino.*
Secretario del Senado. — Secretario de la C. de DD.

Buenos Aires, 3 de octubre de 1935.

Téngase por Ley de la Nación; comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO.
MANUEL DE YRIONDO.

Decreto, de 20 de julio de 1937, acordando validez oficial a determinados títulos otorgados por el Museo Social Argentino

Buenos Aires, 20 de julio de 1937.

M. 53. — Visto la precedente nota del señor Presidente del Museo Social Argentino solicitando se conceda validez oficial a los títulos otorgados a los alumnos egresados durante los años 1931 y 1932 de la Escuela de Servicio Social del citado Museo, y

CONSIDERANDO:

Que por Ley N.° 12.230, de 3 de octubre de 1935, se oficializó los cursos del Museo Social Argentino;

Que durante los años 1931 y 1932 el referido Museo formaba parte de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y la Escuela de Servicio Social funcionaba con las garantías de seriedad necesarias para acordar a los títulos de referencia el carácter de oficial;

Por ello, y de conformidad con lo informado por la Inspección General de Enseñanza y la Universidad Nacional de Buenos Aires,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.° — Acuérdase validez oficial a los títulos de los asistentes sociales egresados de la Escuela de Servicios Social durante los años 1931 y 1932, en que dicho Instituto formó parte de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Art. 2.° — Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO.

JORGE DE LA TORRE.

CASA DEL REPOSO PARA ESCRITORES Y ARTISTAS

Ley N.° 12.674, sancionada el 5 de junio de 1941, creando, con carácter permanente, la Casa del Reposo, para escritores y artistas, en la finca de Samay Huasi, que fuera residencia del doctor Joaquín V. González.

Artículo 1.° — Créase con carácter permanente la Casa del Reposo, para escritores y artistas, en la finca de Samay Huasi, de propiedad de la Nación, que fuera residencia del doctor Joaquín V. González.

Art. 2.° — La dirección de administración de este establecimiento estará a cargo de la Universidad Nacional de La Plata, a la que será transferida la propiedad del inmueble.

Art. 3.° — Recibirán alojamiento gratuito y temporario en él, los escritores y artistas argentinos que por el mérito de sus obras merezcan esta distinción, de acuerdo con la reglamentación que dictará la Universidad Nacional de La Plata, a cuyo efecto consultará a la Sociedad de Escritores y a la Comisión Nacional de Bellas Artes.

Art. 4.° — Se organizará en el mismo, un museo de arte, una biblioteca pública y un museo arqueológico regional, sin perjuicio de los institutos que puedan instalarse, a juicio de la Universidad.

Este establecimiento estará a disposición de las comisiones que con fines de investigación científica en la región, envíen las universidades e institutos oficiales similares.

Art. 5.° — Autorízase al Poder Ejecutivo a invertir en la reparación del edificio, construcción de nuevas dependencias e instalaciones necesarias, que no alteren su carácter primitivo hasta $ 80.000 moneda nacional; y el funcionamiento, sin perjuicio de lo que produzcan las plantaciones de la finca, hasta la suma de $ 20.000 moneda nacional, anuales.

Art. 6.° — El Poder Ejecutivo tomará las providencias necesarias para que los restos del doctor Joaquín V. González sean inhumados en Samay Huasi. A tal efecto, encargará a un escultor argentino las obras de arte a realizarse, pudiéndose invertir en ello la suma de $ 30.000 moneda nacional.

Art. 7.° — El gasto que demande la ejecución de la presente ley se hará de rentas generales, con imputación a la misma, hasta tanto sea incluído en el presupuesto.

Art. 8.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 5 de junio de 1941.

R. Patrón Costas.
Gustavo Figueroa
Secretario del Senado.

José Luis Cantilo.
L. Zavalla Carbó.
Secretario de la C. de DD.

Intercambio Cultural con las Repúblicas de Chile y Brasil

CONVENIO DE INTERCAMBIO ARTISTICO CON LA REPUBLICA DE CHILE

Ley N.° 5.950, de octubre 10 de 1908, aprobando un Convenio con la República de Chile sobre fomento de las relaciones artísticas

Artículo 1.° — Apruébase el convenio firmado en la ciudad de Buenos Aires, el 7 de septiembre de 1904 entre los plenipotenciarios de la República Argentina y de Chile, debidamente autorizados al efecto, destinado a fomentar las relaciones artísticas entre ambos países y dando facilidades a los exponentes en los concursos que anualmente celebran los salones de bellas artes de Buenos Aires y Santiago.

Art. 2.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 29 de septiembre de 1908.

CONVENIO

Reunidos en la sala del despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina sus excelencias el doctor José A. Terry, ministro del ramo y el señor José Vergara Donoso, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la República de Chile, animados del deseo de fomentar las relaciones artísticas entre ambos países y de obtener recíprocos estímulos para los exponentes en los concursos que anualmente celebran los salones de bellas artes de Buenos Aires y de Santiago, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han convenido en lo siguiente:

Artículo 1.° — Los artistas argentinos serán admitidos en los concursos anuales del Salón de Bellas Artes de Santiago, en las mismas condiciones que los exponentes chilenos. Y recíprocamente, los artistas chilenos serán admitidos en los concursos del Salón de Bellas Artes de Buenos Aires en las mismas condiciones que los exponentes argentinos.

Art. 2.° — Las obras artísticas destinadas a ser expuestas en dichos salones de bellas artes quedan libres del pago de los derechos de internación en las aduanas de uno y otro país.

El presente convenio será ratificado y las ratificaciones canjeadas en la ciudad de Buenos Aires tan pronto como fuere posible.

En fe de lo cual los infrascriptos firman y sellan en doble ejemplar el presente convenio, en la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de septiembre del año un mil novecientos cuatro.

J. F. Vergara Donoso (L. S.). J. A. Terry (L. S.).

CONVENIO DE INTERCAMBIO ARTISTICO CON LA REPUBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL

Ley N.° 12.273, de octubre 8 de 1935, aprobando un Convenio de intercambio artístico con el Brasil

Artículo 1.° — Apruébase el convenio de intercambio artístico suscripto en la ciudad de Río de Janeiro el día 10 de octubre de 1933 entre la República Argentina y la República de los Estados Unidos del Brasil.

Art. 2.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 30 de septiembre de 1935.

CONVENIO

La República Argentina y la República de los Estados Unidos del Brasil, en el ánimo en que se encuentran de procurar por todos los medios perfeccionar las relaciones de amistad que tan íntimamente las une; convencidas de que por el conocimiento de sus artistas podrán sus pueblos apreciar mejor la fuerza de idealismo que los anima y juzgar el adelanto que ya tuvieron en el campo de las artes, resolvieron aprovechar la feliz oportunidad que les ofrece la presencia en el Brasil del excelentísimo señor general Agustín P. Justo, presidente de la Nación Argentina, para celebrar un convenio de intercambio artístico y, con ese fin, nombraron sus Plenipotenciarios: el Presidente de la Nación Argentina al señor doctor Carlos Saavedra Lamas, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto y el Jefe del Gobierno Provisorio de la República de los Estados Unidos del Brasil, al señor doctor Afranio de Mello Franco, Ministro de Estado de Relaciones Exteriores.

Los cuales, después de comunicarse los respectivos Plenos Poderes, que fueron encontrados en buena y debida forma, convinieron en lo siguiente:

Artículo 1.° — El Gobierno de la República Argentina realizará anualmente, en Río de Janeiro, y el Gobierno de la República

de los Estados Unidos del Brasil, en Buenos Aires, una exposición de bellas artes y artes aplicadas, destinada a hacer conocer las producciones culminantes de sus artistas y de algunos ramos de su industria. La «Exposición argentina» en Río de Janeiro, será organizada a su costa por la Comisión Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, y en la misma forma, la «Exposición brasileña» en Buenos Aires, por la Escuela Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro.

Art. 2.° — Las exposiciones constarán de obras de arte y de artes aplicadas a las industrias, con secciones de libros, muebles, cerámica, así como una especial de proyectos arquitectónicos.

Art. 3.° — Durante el tiempo que dure la Exposición, serán realizados semanalmente conciertos de música nacional, dándose conferencias sobre literatura y arte y haciéndose demostraciones relativas a fiestas y bailes tradicionales.

Art. 4.° — Las gastos de organización y vigilancia de la Exposición serán hechos por el Gobierno del país donde ella se realice, el cual recaudará el importe de los respectivos ingresos, cargando con cualquier déficit eventual.

Art. 5.° — El Gobierno del país que promueva la Exposición costeará el transporte de los volúmenes a ella destinados hasta la capital del otro país e igualmente, los gastos de viaje y permanencia de todo el personal, inclusive artistas y conferencistas, que se juzgare necesario llevar para la otra capital.

Art. 6.° — El Gobierno del país donde se realice la Exposición se compromete a despachar, libre de derechos aduaneros o de cualquier otro gravamen, los volúmenes a ella destinados y, una vez terminada la Exposición, a reembarcarlos en las mismas condiciones.

Art. 7.° — El presente Convenio será ratificado y sus ratificaciones se cambiarán en Buenos Aires, dentro del más breve plazo posible, continuando él en vigor indefinidamente hasta ser denunciado por una de las partes contratantes, con seis meses de anticipación.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios arriba referidos firmaron el presente Convenio, en dos ejemplares, en las lenguas española y portuguesa, y les pusieron los respectivos sellos, en Río de Janeiro, a los diez días del mes de octubre del año mil novecientos treinta y tres.

(L. S.) A. de Mello Franco. (L. S.) Carlos Saavedra Lamas.

Decreto, de 12 de noviembre de 1936, sobre intercambio de profesores y alumnos argentinos y brasileños — Bases generales

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1936.

CONSIDERANDO:

Que las relaciones intelectuales entre las Repúblicas de Brasil y la Argentina, constituyen, como vehículo de cultura y mutua comprensión, una de las altas expresiones conducentes al ideal de solidaridad americana;

Que se debe contemplar, bajo este aspecto la tarea realizada por las Comisiones Revisoras de Textos de Historia y Geografía Americanas, al ordenar la edición de la Biblioteca de Autores Selectos del Brasil traducidos al Castellano y de Autores Selectos Argentinos traducidos al portugués, así como el envío de publicaciones con el fin de crear secciones especiales en las respectivas bibliotecas públicas;

Que el actual intercambio de profesores con el Brasil constituye un medio de probada eficacia para asegurar la máxima cooperación intelectual;

Y siendo conveniente establecer las bases generales de dicho intercambio a fin de que se dirija con especialidad a los conocimientos científicos, históricos, geográficos, jurídicos y literarios, tarea concerniente a tales profesores e investigadores, así como a los alumnos y egresados de establecimientos nacionales que hayan sobresalido por sus antecedentes y dedicación al estudio;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.° — La Comisión Argentina Revisora de Textos de enseñanza de Historia y Geografía, creada por decreto de fecha 13

de julio de 1935, solicitará el concurso de las Universidades, Academias, Junta de Historia y Numismática y del Instituto de Cultura Argentino-Brasileño para organizar anualmente una delegación oficial de profesores e investigadores que impartirá ciclos de clases y conferencias en las Universidades e Institutos Culturales del Brasil. Dentro de lo posible promoverá a que la labor docente y científica se realice en las cátedras e institutos respectivos, así como a la publicación de sus exposiciones y resultados.

Art. 2.° — Juntamente con el núcleo de profesores delegados, podrán designarse alumnos de los últimos cursos que se hayan destacado por sus antecedentes y dedicación al estudio.

Art. 3.° — Por intermedio del Departamento de Relaciones Exteriores y Culto se invitará al Gobierno de los Estados Unidos del Brasil, a colaborar en esta tarea, y de haber conformidad sobre las bases generales se proyectará oportunamente la celebración del convenio para el intercambio cultural de profesores e investigadores.

Art. 4.° — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de Justicia e Instrucción Pública y de Relaciones Exteriores y Culto.

Art. 5.° — Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO. — JORGE DE LA TORRE. — RAMÓN S. CASTILLO.

Ley N.° 12.307, de 29 de septiembre de 1936, creando el premio «Estados Unidos del Brasil»

Artículo 1.° — Créase un premio denominado «Estados Unidos del Brasil», al mejor libro publicado en español y editado en el país, consistente en la suma de diez mil pesos moneda nacional, que se otorgará en las siguientes condiciones:

a) El autor deberá ser ciudadano argentino;

b) El libro consistirá en un estudio original y actual de las actividades económicas, sociales, políticas, artísticas o militares de los Estados Unidos del Brasil;

c) El premio se discernirá cada dos años entre los libros que hayan sido depositados en la Biblioteca Nacional de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N.° 11.723 (1).

Art. 2.° — El Poder Ejecutivo designará al Instituto de Cultura Argentino-brasileño como jurado para discernir el premio a que se refiere el artículo anterior.

Art. 3.° — Créase un primero y segundo premio de pintura y un primero y segundo premio de escultura que importarán en conjunto la cantidad de diez mil pesos moneda nacional, los que serán adjudicados cada dos años en las exposiciones del arte brasileño, que se organizarán en Buenos Aires, de acuerdo con las disposiciones del tratado de intercambio intelectual de mayo de 1935. Estos premios serán adjudicados a las dos mejores obras presentadas por pintores y escultores brasileños.

Art. 4.° — La Dirección Nacional de Bellas Artes designará el jurado encargado de la distribución de los premios que establece el artículo anterior. Las obras premiadas quedarán de propiedad de la Nación.

Art. 5.° — Los gastos que demande la ejecución de esta ley se tomarán de rentas generales con imputación a la presente.

Art. 6.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires a 25 de septiembre de 1936.

JULIO A. ROCA. — CARLOS A. NOEL.
Gustavo Figueroa. — *Carlos G. Bonorino.*

Buenos Aires, 29 de septiembre de 1936.

Exp. P-738/936.

Téngase por Ley de la Nación, comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO.
JORGE DE LA TORRE.

(1) Sobre régimen legal de la propiedad científica, artística y literaria. Ver artículo 57 en «Digesto de Justicia» de este Ministerio, tomo 1.°, páginas 500 y 501.

Decreto, de 22 de diciembre de 1936, reglamentario de la Ley N.° 12.307

Artículo 1.° — Los estudios sobre actividades económicas, sociales, políticas, artísticas o militares de los Estados Unidos del Brasil, cuyos autores aspiren al premio creado por el artículo 1.° de la Ley N.° 12.307, serán presentados, en seis (6) ejemplares al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, con el comprobante de la nacionalidad del autor, el del cumplimiento de la obligación de depósito impuesta por el artículo 57 de la Ley N.° 11.723 y un escrito en que se exprese el objeto de la presentación.

Art. 2.° — Cada dos años el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública remitirá al Instituto Argentino Brasileño de Cultura, designado por decreto de 14 de noviembre último, como jurado para discernir ese premio, las obras presentadas en el respectivo período. La primera remisión será hecha después del 31 de diciembre de 1938.

Art. 3.° — La Junta Ejecutiva del mencionado Instituto nombrará, en cada caso, si lo creyere conveniente, subcomisiones asesoras; se pronunciará sobre cuestiones que se susciten y cuya decisión no contraríe los propósitos de la ley que se reglamenta; adjudicará el premio, siempre que a ello no se oponga algún motivo serio, y comunicará su decisión al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a los fines a que hubiere lugar. Otorgados por dicho Ministerio los medios de ejecución, la entrega del premio se efectuará en acto público.

Art. 4.° — El decreto de 12 de noviembre de 1936 (1), queda incorporado a esta reglamentación.

Art. 5.° — Comuníquese, etc.

JUSTO.

JORGE DE LA TORRE.

(1) Transcripto en la página 529.

ENSEÑANZA DEL IDIOMA PORTUGUES

Ley N.° 12.766, de 17 de septiembre de 1942, incluyendo en los planes de estudios de los establecimientos del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública la enseñanza del idioma portugués (1).

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de—

LEY:

Artículo 1.° — En el año escolar inmediatamente superior a la sanción de la presente ley, se incluirá en los planes de estudios de los establecimientos del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, en que se imparta la enseñanza de idiomas extranjeros, la del idioma portugués con carácter optativo para los alumnos de 5.° año.

Art. 2.° — En los institutos del profesorado se creará la cátedra de idioma portugués, que se agregará como materia de especialización en los planes de estudios vigentes. Los docentes que la dicten percibirán igual remuneración que la asignada por la ley general de presupuesto para las demás cátedras de idiomas.

Art. 3.° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley, mientras no se incluya en el presupuesto general de la Nación, se hará de rentas generales imputándose a la misma.

Art. 4.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 10 de setiembre de 1942.

RICARDO CABALLERO — *A. Fernández Guerrico.*

JOSÉ LUIS CANTILO — *L. Zavalla Carbó.*

Registrada bajo el N.° 12.776.

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1942.

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

PATRON COSTAS
GUILLERMO ROTHE

(1) Todo lo concerniente a esta Ley irá en el fascículo correspondiente al capítulo 5.° del plan general de esta obra, sobre «Planes de estudios vigentes».

Decreto, de 31 de diciembre de 1942, cumplimentando disposiciones de la Ley N.° 12.766, sobre enseñanza del idioma portugués en los establecimientos de enseñanza del Ministerio.

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1942.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N.° 12.776, promulgada el 17 de setiembre próximo pasado.

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.° — Inclúyase en los planes de estudios para los Colegios Nacionales, Liceos de Señoritas, Escuelas Normales de Profesores, Escuelas Nacionales de Comercio e Industriales la asignatura de Idioma Portugués, en el curso de quinto año, con tres horas semanales de clase.

Art. 2.° — La enseñanza del referido idioma se impartirá con carácter optativo y no eximirá, a los alumnos que la reciban, del estudio de otro idioma extranjero establecido por los respectivos planes vigentes.

Art. 3.° — Los alumnos promovidos al quinto año de los establecimientos mencionados en el artículo 1.° que deseen seguir el curso de Idioma Portugués, deberán manifestarlo expresamente al solicitar su inscripción. Formuladas las nóminas de los interesados, las Direcciones las elevarán a la Inspección General de Enseñanza y esta Repartición propondrá al Ministerio la organización de los respectivos cursos de acuerdo con el número de inscriptos.

Art. 4.° — En los certificados de estudios de los alumnos que aprueben el curso de Idioma Portugués se incluirá la correspondiente constancia, indicando que se trata de una materia optativa.

Art. 5.° — Los cursos del Profesorado de Idioma Portugués que funcionan en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital Federal, se dictarán con sujeción al plan de estudios vigente. En los demás establecimientos de la misma categoría, los cursos respectivos se crearán a medida que las necesidades de la enseñanza lo requieran.

Art. 6.° — Las precedentes disposiciones entrarán en vigor a partir del curso escolar de 1943.

Art. 7.° — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional, anótese y archívese.

CASTILLO.

GUILLERMO ROTHE.

Canje Internacional de Informaciones y Publicaciones

CANJE INTERNACIONAL DE INFORMACIONES Y PUBLICACIONES

Convención de Bruselas

Ley N.° 4.070, de 21 de mayo de 1902, aprobando la adhesión de la República a la Convención firmada en Bruselas sobre canje de documentos oficiales y publicaciones científicas.

Artículo 1.° — Apruébase la adhesión de la República a la convención firmada en Bruselas el 15 de marzo de 1886, para el canje de documentos oficiales y publicaciones científicas y literarias.

Art. 2.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 17 de mayo de 1902.

CONVENCION

Su Majestad el rey de los Belgas, Su Majestad el emperador del Brasil, Su Majestad la reina regente de España, el presidente de los Estados Unidos de América, Su Majestad el rey de Italia, Su Majestad el rey de Portugal y de los Algarves, Su Majestad el rey de Servia, el consejo federal de la Confederación Suiza, deseando establecer sobre las bases adoptadas por la conferencia reunida en Bruselas del diez al catorce de abril de 1883, un sistema de canjes internacionales para los documentos oficiales y para las publicaciones científicas y literarias de sus Estados respectivos, han nombrado sus plenipotenciarios a saber:

Su Majestad el rey de los Belgas, al Príncipe de Caraman su ministro de negocios extranjeros y al señor caballero de Monreau, su

ministro de agricultura, de la industria y de los trabajos públicos; Su Majestad el Emperador de Brasil, al conde de Villeneuve, su enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Bélgica; Su Majestad la reina regente de España, al señor de Tavira, encargado de negocios *ad interin* de España y Bélgica; el presidente de los Estados Unidos de América, al señor Lambert Tree, ministro residente de los Estados Unidos de América en Bélgica; Su Majestad el rey de Italia, al señor marqués Maffei, su enviado extraordinario y ministro plenipotenciario cerca de Su Majestad el rey de los belgas; Su Majestad el rey de Portugal y de los Algarves, al barón de Sant' Anna, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de su majestad fidelísima; Su Majestad el rey de Servia, al señor Marinovitch, su enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Bélgica; El consejo federal de la Confederación Suiza, al señor Rivier, su plenipotenciario especial; los cuales, después de haberse comunicado sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido los artículos siguientes:

Artículo 1.° — Se establecerá en cada uno de los Estados contratantes una oficina encargada del servicio de los canjes.

Art. 2.° — Las publicaciones que los Estados contratantes se comprometen a canjear son las siguientes:

1.° Los documentos oficiales, parlamentarios y administrativos que son librados a la publicidad en el lugar de origen;

2.° Las obras ejecutadas por orden y a expensas de los Gobiernos.

Art. 3.° — Cada oficina hará imprimir la lista de las publicaciones que puede poner a la disposición de los Estados contratantes.

Esta lista será corregida y completada cada año y dirigida regularmente a todas las oficinas de canje.

Art. 4.° — Las oficinas de canje se entenderán sobre el número de ejemplares que pueden ser pedidos y proveídos.

Art. 5.° — Los envíos se harán directamente de oficina a oficina. Se adoptarán modelos y formularios uniformes para las facturas del contenido de los cajones, como también para todas las piezas de correspondencia administrativa, pedidos, acuses de recibos, etcétera.

Art. 6.° — Para la expedición al exterior cada Estado se encarga de los gastos de embalaje y de porte hasta su destino.

No obstante cuando la expedición se haga por mar, arreglos particulares regularán la parte de cada Estado en los gastos de transporte.

Art. 7.° — Las oficinas de canje servirán de intermediarios oficiosos entre las sociedades de sabios y las sociedades literarias, científicas, etc., de los Estados contratantes para el recibo y envío de sus publicaciones.

Pero se sobreentiende que queda establecido en este caso, que el rol de las oficinas de canje se limitará a la transmisión en franquicias de las obras canjeadas, y que estas oficinas no tomarán la iniciativa para provocar el establecimiento de estas relaciones.

Art. 8.° — Estas disposiciones no son aplicables sino a los documentos y obras publicadas a partir de la fecha de la presente convención.

Art. 9.° — Los Estados que no han tomado parte en la presente convención son admitidos a adherirse a ella a su pedido.

Esta adhesión será notificada por la vía diplomática al gobierno Belga, y por este gobierno a todos los otros Estados contratantes.

Art. 10. — La presente convención será ratificada y las ratificaciones serán canjeadas en Bruselas tan pronto como se pueda. Está concluída por el término de diez años a partir del día del canje de las ratificaciones, y continuará subsistiendo más allá de este plazo, siempre que uno de los gobiernos no haya declarado con seis meses de anticipación que renuncia a ella.

En fe de lo cual los plenipotenciarios respectivos la han firmado y han fijado sus sellos.

Hecha en Bruselas, en ocho ejemplares, el 15 de marzo de 1886.

PRÍNCIPE DE CARAMAN. — CONDE DE VILLENEUVE. — JOSÉ DE TAVIRA. — LAMBERT TREE. — MAFFEI. — BARÓN DE SANT' ANNA. — J. MARINOVITH. — ALFONSO RIVIER. — CAVALLERO DE MONREAU.

COLABORACION DE LAS OFICINAS NACIONALES EN EL CANJE INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES OFICIALES

Resolución Ministerial, de 5 de septiembre de 1935, referente al cumplimiento del decreto de 31 de marzo de 1919, que establece la obligación de las oficinas nacionales de remitir sus publicaciones a la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, para el canje internacional de publicaciones oficiales.

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1935

Vistas estas actuaciones relacionadas con el canje internacional de publicaciones con los Estados Unidos de Norte América, realizada ante las autoridades de la Nación, por intermedio de la Embajada Argentina en dicho país; atento a lo que el señor Presidente de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares manifiesta que no se ha logrado aportar mayor contribución de nuestro país en el canje de publicaciones oficiales, en virtud de que los diversos Ministerios, no obstante los reiterados pedidos formulados no dan cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 del decreto de 31 de marzo de 1919 (1), que establece: «Todas las oficinas nacionales, remitirán a la Comisión Protectora las publicaciones que se hagan o reciban, debiendo aquélla distribuirlas. Para el reparto de la Comisión Protectora deberá atender en primer término, las listas que le remita la oficina que haya hecho o adquirido la publicación»; y a fin de que en lo sucesivo nuestro país pueda cumplir con mayor eficacia los deberes de reciprocidad, emergentes de los compromisos internacionales,

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública—

RESUELVE:

Solicitar de los Ministerios y Reparticiones Nacionales que por intermedio de las oficinas técnicas o administrativas que corresponda, se remita a la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares las publicaciones oficiales que editen o reciban, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del decreto de 31 de marzo de 1919, a fin de que dicha entidad pueda realizar el canje internacional que por el citado decreto le ha sido encomendado.

Hágase saber, anótese y archívese.

YRIONDO.

---

(1) Ver el texto de este decreto en páginas anteriores, en el capítulo correspondiente a la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares.

INTERCAMBIO DE INFORMACIONES CON LA OFICINA INTERNACIONAL DE EDUCACION, DE GINEBRA

Ley N.° 12.289, de 9 de octubre de 1935, de adhesión a la Oficina Internacional de Educación, de Ginebra, y disponiendo la creación de una Oficina de información, dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, para facilitar el intercambio de informes sobre asuntos educacionales.

Artículo 1.° — Autorízase al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a adherirse a la Oficina Internacional de Educación, con asiento en la ciudad de Ginebra.

Art. 2.° — Inclúyase en el presupuesto de gastos para el año 1936 la suma de $ 10.000 moneda nacional a los fines de cumplir lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 3.° — El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública organizará una oficina de información sobre asuntos educacionales para facilitar el intercambio de informes.

Art. 4.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 30 de septiembre de 1935.

Decreto, de 1.° de enero de 1938, creando la Dirección General de Informaciones y Biblioteca del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

Buenos Aires, 1.° de enero de 1938.

CONSIDERANDO:

La necesidad de una dependencia en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública que centralice cuanta publicación oficial e información de carácter documental docente y técnico administrativo, nacional y extranjera, sea necesaria para cumplir las exigencias de un buen servicio en todos los asuntos del Departamento y, en especial, aquellos que por su carácter requieren estudios de especialización documental y de antecedentes que permitan la facilidad de un rápido asesoramiento;

Que la existencia de una repartición munida de factores tan indispensables para el buen servicio administrativo alcanzaría también a desarrollar una función de interés general en cuanto atenderá a la contestación de los informes y diversidad de consultas que, tanto del país como del extranjero instituciones, hombres de estudio e interesados en nuestra organización docente y en sus diversos actos; consultas e informes que no puede ser a veces debidamente contestados o producidos por carencia de una organización adecuada;

Que la incorporación de este servicio permitirá igualmente organizar conjuntamente con él la Biblioteca de que carece el Ministerio y el archivo técnico anexo a la misma, donde se reúnan y se clasifiquen las diversas publicaciones, planes de estudio, reglamentaciones, exposición de métodos y prácticas de enseñanza aplicadas en el país, tanto en la enseñanza oficial como en los distintos aspectos en que se desenvuelven las obras de la enseñanza nacional;

Que la nueva repartición puede atender también la información referente a los distintos sistemas y métodos de asistencia escolar, función ésta que tiende a absorber un campo cada día más extenso en las prácticas pedagógicas,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.° — Créase la «Dirección General de Informaciones y Biblioteca» del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, que funcionará bajo la dependencia directa e inmediata de la Subsecretaría del Departamento.

Art. 2.° — Encárgase la organización de la misma al Subsecretario de Justicia e Instrucción Pública, señor Manuel Villada Achával.

Art. 3.° — El Director General de Informaciones y Biblioteca del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública será designado en su oportunidad Oficial Mayor con la categoría de Jefe de Repartición del Ministerio.

Art. 4.° — Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO.

JORGE DE LA TORRE.

Resolución Ministerial, de 16 de mayo de 1938, encargando a la Dirección General de Informaciones y Biblioteca la publicación del «Boletín del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública» y disponiendo su canje con publicaciones similares de otros países.

Buenos Aires, 16 de mayo de 1938.

CONSIDERANDO:

Que es necesario centralizar en una publicación las informaciones referentes a la Instrucción Pública y a la Justicia, para facilitar el conocimiento y difusión de planes de estudios, reglamentaciones, programas y decretos sobre enseñanza, proyectos sobre legislación penal y carcelaria, informaciones sobre museos artísticos e históricos y todo punto que se refiera a las actividades del Departamento, como así también el conocimiento de lo que en el mismo orden realizan los organismos similares de los demás países.

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública—

RESUELVE:

1.° Encárgase a la Dirección General de Informaciones y Biblioteca la publicación y distribución del «Boletín del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación» que deberá contener: las leyes, decretos, resoluciones, circulares y demás actos oficiales; las informaciones ministeriales de interés general, y cuanto convenga al intercambio del Boletín con publicaciones similares de otros países.

2.° Los Directores del Ministerio, el Inspector General de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial y los Jefes de las distintas reparticiones remitirán, por triplicado, a la Dirección General de Informaciones y Biblioteca, copia legalizada de los actos e informaciones oficiales a que se refiere el apartado anterior.

3.° Los originales del Boletín serán sometidos a la consideración del Subsecretario de Justicia e Instrucción Pública, quien deberá visarlos antes de autorizar su publicación.

4.° El Boletín se imprimirá en los Talleres Gráficos de la Colonia-Hogar «Ricardo Gutiérrez» dependiente del Patronato de Menores.

5.° Hágase saber, anótese y archívese.

JORGE E. COLL.

Convención de Montevideo sobre Ejercicio de Profesiones Liberales

CONVENCION DE MONTEVIDEO SOBRE EJERCICIO DE PROFESIONES LIBERALES

Ley N.° 3.192, de 28 de agosto de 1894, aprobando, entre otros, el Convenio referente al ejercicio de profesiones liberales, sancionado por la Convención Sudamericana de Montevideo el 4 de febrero de 1889.

Artículo 1.° — Apruébase los tratados de derecho civil, comercial, penal, procesal, propiedad literaria y artística, marcas de fábricas de comercio y patentes de invención, el convenio referente al ejercicio de profesiones liberales y el Protocolo Adicional sancionados por el Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado, que se reunió en Montevideo el 27 de agosto de 1888 y que suscribieron los plenipotenciarios de la República.

Art. 2.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 25 de agosto de 1894.

CONVENIO

S. E. el Presidente de la República del Uruguay, S. E. el Presidente de la República Argentina, S. E. el Presidente de la República de Bolivia, S. E. el Presidente de la República del Paraguay y S. E. el Presidente de la República del Perú, han convenido en celebrar una Convención sobre el ejercicio de profesiones libres, por medio de sus respectivos plenipotenciarios, reunidos en Congreso en la ciudad de Montevideo, por iniciativa de los Gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de la República Argentina, estando representados los abajo citados:

Quienes previa exhibición de sus plenos poderes, que hallaron en debida forma, después de las conferencias y

discusiones del caso, han acordada las estipulaciones siguientes:

Artículo 1.° — Los nacionales o extranjeros que, en cualquiera de los Estados signatarios de esta convención, hubiesen obtenido título o diploma, expedido por la autoridad nacional competente, para ejercer profesiones liberales, se tendrán por habilitados para ejercerlas en los otros Estados.

Art. 2.° — Para que el título o diploma a que se refiere el artículo anterior produzca los efectos expresados, se requiere: 1.° la exhibición del mismo, debidamente legalizado; 2.° que el que lo exhiba acredite ser la persona a cuyo favor ha sido expedido.

Art. 3.° — No es indispensable, para la vigencia de este convenio, su ratificación simultánea por todas las naciones signatarias. La que lo apruebe lo comunicará a los Gobiernos de las Repúblicas Argentina y Oriental del Uruguay, para que lo hagan saber a las demás naciones contratantes. Este procedimiento hará las veces de canje.

Art. 4.° — Hecho el canje en la forma del artículo anterior, esta convención quedará en vigor, desde ese acto, por tiempo indefinido.

Art. 5.° — Si alguna de las naciones signatarias creyese conveniente desligarse de la convención o introducir modificaciones en ella, lo avisará a las demás; pero no quedará desligada sino dos años después de la denuncia, término en que se procurará llegar a un nuevo acuerdo.

Art. 6.° — El art. 3.° es extensivo a las naciones que, no habiendo concurrido a este Congreso, quisieran adherirse a la presente convención.

Decreto, de 30 de septiembre de 1895, reglamentando disposiciones del Convenio de Montevideo

Artículo 1.° — La comprobación de las condiciones requeridas por los artículos 1.° y 2.° del tratado sancionado por el Congreso Sudamericano, reunido en Montevideo, para el ejercicio de profesiones liberales deberá hacerse:

a) Ante el Presidente del Consejo Nacional de Educación, cuando se trate de diplomas de profesores o maestros de instrucción primaria (1);

b) Ante los rectores de las universidades nacionales, cuando se trate de las demás profesiones liberales.

Art. 2.° — En caso de duda sobre si la autoridad nacional que ha expedido el título diploma es la competente, los funcionarios mencionados en el artículo anterior, consultarán por escrito al señor Ministro de Relaciones Exteriores, procediendo de acuerdo con lo que éste resuelva (2).

Art. 3.° — La identidad de la persona que presente el título o diploma se probará por la declaración jurada de dos personas de honorabilidad reconocida, que estén domiciliadas en la República, pudiendo exigirse la ampliación de esta prueba cuando no se considerase satisfactoria.

---

(1) Sobre reválida de títulos el Consejo Nacional de Educación dictó la siguiente resolución:

1. A los efectos de la reválida de los títulos comprendidos en la Convención sobre ejercicio de Profesiones Libres, celebrada en Montevideo el 4 de febrero de 1889, de acuerdo con el decreto del Poder Ejecutivo de fecha 30 de septiembre de 1895, los interesados anotarán sus títulos en la Dirección de Personal y Estadística, haciendo constar esta circunstancia en la solicitud de reválida que presentarán en Mesa de Entradas, a la que en ningún caso deberá adjuntar los títulos;

2. La declaración jurada que establece para determinar la identidad de la persona que solicitara la reválida, el art. 3.° del decreto del Poder Ejecutivo de 30 de septiembre de 1895, será tomada por el Asesor Letrado, quien dará su dictamen sobre la validez de los documentos ante los términos del tratado de 4 de febrero de 1889;

3. Si surgiese alguna duda sobre la competencia de las autoridades que expidieron los títulos, los interesados harán las gestiones necesarias para obtener las aclaraciones a que dieran lugar los documentos presentados, en virtud de las disposiciones del decreto del Poder Ejecutivo del 18 de octubre de 1899, modificando el art. 2.°, del decreto de 30 de septiembre de 1895.

4. Los títulos expedidos por las autoridades de la República Oriental del Uruguay, tendrán la siguiente equivalencia:

   a) El de maestro de 1.° y 2.° grados, corresponde al de Maestro Normal Nacional;
   b) El de maestro de 3er. grado corresponde al de Profesor Normal Nacional;

5. La Presidencia acordará la reválida de títulos, previa reposición del estampillado y el sellado correspondiente, que exigirá la Mesa de Entradas. Una vez llenado este requisito, el título será registrado definitivamente en la Dirección de Personal y Estadística.

(2) Este artículo, por decreto de 18 de octubre de 1899, fué sustituído por el siguiente: «En lo sucesivo serán practidas por los particulares interesados las gestiones requeridas por las aclaraciones a que den lugar los documentos presentados al Consejo Nacional de Educación o a las Universidades Nacionales en virtud del decreto de fecha 30 de septiembre de 1895, quedando derogado el artículo 2 del mismo decreto».

Art. 4.° — Comprobadas las condiciones a que se refiere el artículo precedente y pagados los derechos de habilitación, se declarará habilitada para el ejercicio profesional a la persona que haya solicitado el reconocimiento de su título o diploma, y se comunicará a los tribunales y autoridades que tengan a su cargo la inscripción de las personas autorizadas a ejercer la profesión que exprese el título o diploma.

Art. 5.° — Mientras no se fije entre las naciones signatarias del tratado que lo han aprobado, el derecho que ha de cobrarse por la habilitación, se cobrará:

a) Para los diplomas universitarios, el derecho que fija el arancel respectivo para la revalidación de diplomas;

b) Para los demás, el derecho que fijan las leyes y decretos para la expedición de los diplomas análogos en la República.

Art. 6.° — El certificado de la habilitación será dado en cada caso, por la secretaría general de la universidad o del Consejo Nacional de Educación, con el visto bueno del rector o del presidente, debiendo figurar en él la firma de la persona que lo haya obtenido.

Art. 7.° — Comuníquese, etc.

Fomento de los Deportes y de la Educación Física en todo el País

FOMENTO DE LOS DEPORTES Y DE LA EDUCACION FISICA EN TODO EL PAIS

Disposiciones pertinentes de la Ley N.° 11.672 (Edición 1942) Complementaria Permanente de Presupuesto

Art. 36. — Los locales del Club de Gimnasia y Esgrima ubicados en la Capital Federal, estarán exentos del pago de impuestos nacionales y municipales, así como de los servicios sanitarios y agua corriente.

Art. 69. — Grávase el importe de las entradas de los espectáculos deportivos en que participen profesionales y que se realicen en la Capital Federal y en los territorios nacionales, con un impuesto, de acuerdo con la siguiente escala:

Hasta $ 1,00 m/n.	3 %
De más de $ 1,00 m/n.	5 »

El 40 % del producido de este impuesto se destina a la construcción y mantenimiento de polígonos de tiro y gimnasios anexos en la Capital Federal, provincias y territorios nacionales.

Destínase el resto de lo que se recaude al fomento en toda la República de la práctica de los deportes por aficionados, mediante subsidios para:

1.° Construcción de instalaciones proporcionadas a la capacidad deportiva y económica de las instituciones;
2.° La organización de campeonatos y torneos en que deban intervenir las provincias y territorios nacionales; y
3.° Participación en torneos internacionales.

La administración de este fondo de fomento de los deportes estará a cargo de una comisión honoraria integrada por: un representante del Poder Ejecutivo, que ejercerá la presidencia; un representante del Consejo Nacional de Educación, el director general de Tiro y Gimnasia; el director de Plazas y Ejercicios Físicos de la Municipalidad de la Capital Federal; el director del Instituto Na-

cional de Educación Física de la Capital; un representante de la Confederación Argentina de Deportes, un representante de la Asociación Amateurs de Futbol y un representante de la Asociación de Futbol Argentino (1).

La comisión someterá a aprobación del Poder Ejecutivo su reglamento y el plan de labor a cumplir.

Quedan eximidos del pago de impuestos los espectáculos que se realicen con fines de beneficencia y que sean considerados como tales por la comisión.

Acuerdo, de 4 de junio de 1937, creando el Consejo Nacional de Educación Física bajo la presidencia del Director General de Tiro y Gimnasia.

Buenos Aires, 8 de junio de 1937.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que la educación física constituye un aspecto fundamental de la capacidad del país;

Que su práctica en forma esporádica y fuera del contralor del Poder Ejecutivo desequilibra el concepto orgánico que reclama todo propósito de educación;

Que es necesario reorganizar las actividades gimnásticas y deportivas del Estado, con unidad de criterio y de acción, a fin de que rindan su máxima eficiencia para el bienestar del pueblo y las necesidades de la defensa nacional,

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros—

DECRETA:

Artículo 1.° — Créase el Consejo Nacional de Educación Física bajo la presidencia del Director General de Tiro y Gimnasia, e integrado por cuatro miembros: un delegado del Ministerio del Interior, uno del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública; uno del Ministerio de Marina y uno del Ministerio de Guerra.

---

(1) Por decreto N.° 56.531, de 1.° de marzo de 1940, fué designado miembro de la Comisión Nacional Honoraria del Deporte el Director General de Educación Física del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, en representación de este Ministerio.

Art. 2.° — Sin perjuicio de la acción que de inmediato inicie para dar forma práctica a los propósitos que determinan los considerandos precedentes, el Consejo Nacional de Educación Física elevará al Poder Ejecutivo informes y proyectos sobre: métodos de educación física que convengan adoptar, Ley Nacional de educación física y organización de un Instituto del Profesorado.

Art. 3.° — El Consejo Nacional de Educación Física proyectará igualmente su reglamento orgánico y presupuesto de gastos.

Art. 4.° — Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO. — JORGE DE LA TORRE. — RAMÓN S. CASTILLO. — BASILIO B. PERTINÉ. — CARLOS SAAVEDRA LAMAS. — ROBERTO M. ORTIZ. — E. VIDELA. — M. A. CÁRCANO. — M. R. ALVARADO.

Decreto N.° 6.446, de 17 de junio de 1938, creando la Dirección de Educación Física en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

Buenos Aires, 17 de junio de 1938.

CONSIDERANDO:

Que la educación física constituye un complemento indispensable para la formación de la personalidad moral e intelectual de la infancia y la adolescencia;

Que de acuerdo con ese principio es necesario coordinar el servicio de los institutos especializados en la materia, con la educación y enseñanza que se imparte en los Colegios, para que sus alumnos practiquen la gimnasia metódica, racional y científica que convenga a sus edades, desarrollo y aptitudes físicas, en base a la ficha médica, psicopedagógica y vocacional que debe poseer cada alumno;

Que el Poder Ejecutivo por decreto de fecha 1.° del corriente ha designado una comisión para que redacte un proyecto de Ley de Educación, la que deberá incluir disposiciones especiales sobre

cultura física, considerándola como materia integrante de la enseñanza general, pero entretanto es indispensable subsanar las deficiencias que se notan en escuelas y colegios donde la gimnasia y el atletismo se practican sin unidad de métodos y programas, sin estudiarse la capacidad física de cada alumno y sin una dirección ejecutiva que dirija y controle esa rama de la enseñanza en los establecimientos educativos del Ministerio;

Que para ello es necesario organizar en el Departamento la Dirección de Educación Física, la cual deberá armonizar su acción con el Consejo Nacional de Educación Física creado por decreto del 4 de junio 1937 y con las instituciones públicas o privadas que en distintas formas contribuyen al mejoramiento de la salud física y moral de la raza;

Por tanto:

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.° — Créase la Dirección de Educación Física en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

Art. 2.° (1) — Son funciones de la Dirección:

a) La superintendencia de los establecimientos destinados a la educación física o deportes que por ley de presupuesto dependan del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública;

b) Coordinar su acción con el Patronato Nacional de Menores y la Inspección General de Enseñanza para que los beneficios de la educación física y de los deportes alcance a todos los establecimientos de enseñanza dependientes del Ministerio. Con este fin la Dirección, el Patronato y la Inspección General formularán conjuntamente un proyecto de correlación de servicios en lo que se refiere a la cultura física, debiendo someterlo a la aprobación del Ministerio;

c) Proyectar los programas y métodos oficiales de enseñanza de la educación física, con el asesoramiento del Consejo Nacional de Educación Física;

d) Proyectar la reglamentación de becas para el perfeccionamiento de su personal técnico y proponer su otorgamiento a los que las merezcan;

(1) Modificado por decreto de 25 de abril de 1942, que se transcribe a continuación de la resolución que sigue a este decreto.

e) Organizar exhibiciones y torneos deportivos de carácter escolar;

f) Fomentar la cultura física por todos los medios a su alcance;

g) Coordinar su acción con el Consejo Nacional de Educación Física;

Art. 3.° — Son funciones de la Dirección con respecto a los establecimientos de su dependencia:

a) Disponer la admisión de alumnos de acuerdo con las reglamentaciones vigentes; hacer cumplir los planes de estudios, métodos y programas aprobados para cada establecimiento; fijar el horario de estudio, de ejercicios y de recreación; y controlar los exámenes;

b) Dictar los reglamentos internos de los establecimientos a su cargo;

c) Fijar el racionamiento de los alumnos en sus colonias de vacaciones e internados siguiendo las normas aconsejadas por el Instituto Nacional de la Nutrición;

d) Organizar el fichero del personal de los establecimientos a su cargo, llevando la foja de concepto y aptitudes de cada empleado, sin perjuicio de las comunicaciones que deban hacerse a la Dirección de Estadística y Personal; informar al Ministerio cuando se produzcan vacantes acompañando una nómina de las personas con condiciones para ocupar el cargo; instruir los sumarios administrativos y suspender provisoriamente a los empleados de su dependencia cuando fuere necesario para el buen servicio, debiendo dar cuenta al Ministerio; tramitar los expedientes de licencia, observando las prescripciones vigentes;

e) Intervenir en la distribución de las partidas de gastos que deban invertirse en los servicios ordinarios y extraordinarios, lo mismo que en las licitaciones y manejo de fondos, conforme a las leyes y decretos respectivos;

f) Organizar la inspección permanente de los institutos de su dependencia;

g) Inspeccionar el desarrollo de la cultura física en los establecimientos de enseñanza dependientes del Ministerio conforme a las normas que se establezcan por el reglamento que se ordena proyectar en el punto *b)*, artículo 2.° de este decreto;

h) Proyectar el presupuesto anual de los establecimientos a su cargo;

i) Requerir directamente de las distintas Direcciones del Ministerio informes conducentes a sus propias funciones;

j) Elevar a la Subsecretaría una memoria anual sobre el desenvolvimiento de su acción.

Art. 4.° — Son establecimientos dependientes de la Dirección:

a) El Instituto Nacional de Educación Física;

b) La Colonia de Vacaciones «General San Martín», de Olivos (Quinta Presidencial);

c) El Campo de Deportes ubicado en San Fernando (Provincia de Buenos Aires) de propiedad del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

Art. 5.° — Los establecimientos mencionados en el artículo anterior tendrán las siguientes funciones:

a) El Instituto Nacional de Educación Física proseguirá su misión de preparar profesores de la materia, conforme a los planes, métodos y programas que se le fijen, los cuales deben basarse en un criterio científico, racional y positivo de la cultura física, sin olvidar en ningún instante que la gimnasia debe enseñarse con el ejemplo del propio maestro;

b) La Colonia de Vacaciones «General San Martín», de Olivos (Quinta Presidencial) seguirá funcionando como tal, de conformidad con el fin específico de su creación y con el decreto N.° 125.199 del Poder Ejecutivo fechado el 11 de febrero último y además se utilizarán sus instalaciones, consultorios médicos y departamentos físicos para la revisación médica y fichaje completo de los alumnos de las escuelas primarias y secundarias;

La ficha a que alude el párrafo anterior comprenderá el estudio médico, físico, psicopedagógico y vocacional de cada alumno y para confeccionarla se solicitará, si fuera necesario, la colaboración de los médicos del Consejo Nacional de Educación y la de los Inspectores de Enseñanza y profesores de los institutos dependientes del Departamento o instituciones oficiales o privadas dedicadas a la materia, previa autorización del Ministerio;

De cada ficha se remitirá un duplicado al establecimiento de donde provenga el alumno, para que sirva de base a su futura educación;

También se utilizarán las instalaciones de la Colonia «General San Martín» de Olivos para preparar instructores de educación física, conforme a los planes, métodos, programas de enseñanza y condiciones de inscripción que apruebe el Ministerio, pudiendo inscribirse en los cursos los alumnos de los colegios nacionales, escuelas normales, liceos e institutos especiales que demuestren mayores aptitudes para la enseñanza de la cultura física;

c) El Campo de Deportes de San Fernando tendrá una doble función:

1.° Servirá de alojamiento para alumnos de las escuelas primarias o secundarias, provinciales o nacionales, que se hubieren destacado por su disciplina y aplicación al estudio. Por turno, cada Provincia o Territorio Nacional, enviará treinta alumnos —previo consentimiento de los padres o tutores— para que se alojen durante un mes en las instalaciones del Campo de Deporte donde se les proporcionará casa y alimentación y ropas a los que carezcan de recursos. Se les enseñará gimnasia y se les hará concurrir a teatros y cinematógrafos, y visitar establecimientos industriales, campos de deportes, monumentos, museos y todo lugar de la capital o alrededores que pueda proporcionarles un entretenimiento sano, agradable e instructivo;

2.° Servirá de campo oficial de deportes para los torneos, competiciones y fiestas de educación física que organice la Dirección, con aprobación del Ministerio.

Art. 6.° — La Dirección proyectará el presupuesto para que el Campo de Deportes de San Fernando empiece a funcionar a la brevedad posible, como así también para instalar una casa similar y con la misma función que la especificada en el artículo anterior, pero destinada para niñas.

Art. 7.° — La Dirección de Educación Física dependerá directamente de la Subsecretaría del Ministerio.

Art. 8.° — El Director de Educación Física investirá el cargo de delegado del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública ante el Consejo Nacional de Educación Física.

Art. 9.° — Hasta que se obtengan los fondos necesarios para la instalación y funcionamiento de la Dirección, ésta tendrá su sede en el Instituto Nacional de Educación Física cuyo personal queda obligado a prestar la colaboración que el Director de Educación Física le requiera, lo mismo que el personal permanente de la Colonia de Vacaciones «General San Martín», de Olivos y el del Campo de Deportes de San Fernando.

Art. 10. — El cargo de Director de Educación Física se imputará al inciso 386, partida 10, anexo E, conforme a la autorización legal que contiene esa disposición del Presupuesto vigente, hasta tanto se lo incluya en la ley correspondiente al año próximo.

Art. 11. — Quedan derogadas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Art. 12. — Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional y archívese.

ORTIZ.
JORGE EDUARDO COLL.

Resolución ministerial, de 3 de octubre de 1938, estableciendo que la Dirección General de Educación Física constituye una División del Despacho del Ministerio, y que el Director de la misma tramitará directamente con la Subsecretaría los asuntos de su incumbencia.

Buenos Aires, 3 de octubre de 1938.

Atento a que por decreto N.° 6.446, de 17 de junio próximo pasado se creó en este Ministerio la Dirección General de Educación Física y que es conveniente fijar su posición en la organización administrativa del mismo,

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública—

RESUELVE:

1.° La Dirección General de Educación Física constituye una división del despacho del Ministerio, dedicada especialmente al objeto motivo de su creación, conforme lo establecido por el decreto ya mencionado de 17 de junio último.

2.° El Director de la misma entenderá directamente con el Subsecretario para el trámite de los asuntos de su despacho.

3.° En lo sucesivo, todo lo que se relacione con el nombramiento y remoción de profesores de ejercicios físicos, se tramitará por conducto de la Dirección de la División de Educación Física. A los efectos procedentes, la Dirección de Instrucción Pública, le remitirá los expedientes que se encuentren actualmente en trámite.

4.° Publíquese, comuníquese, anótese y dése al Registro Nacional.

COLL.

Decreto N.° 117.828, de 25 de abril de 1942, estableciendo que la Inspección General de Enseñanza ejercerá las funciones didácticas y disciplinarias en los establecimientos de enseñanza media, normal y especial, en lo concerniente a la enseñanza de la educación física.

Buenos Aires, 25 de abril de 1942.

CONSIDERANDO:

Que el decreto N.° 6.446 del 17 de junio de 1938, por el que se creó la Dirección de Educación Física en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, fijó a dicha Repartición funciones múltiples que comprenden desde la superintendencia técnica en la materia, sobre los establecimientos de enseñanza secundaria, normal y especial, y su personal docente, hasta la organización y fiscalización de los servicios ordinarios y extraordinarios que prestan las Colonias de Vacaciones e internados de los Institutos de Educación Física dependientes del referido Ministerio;

Que la práctica ha refirmado el concepto de que la superintendencia técnica sobre los establecimientos de enseñanza debe ser uniforme, condición que no puede cumplirse si la inspección de los mismos está a cargo de diferentes reparticiones;

Que si esa unidad es necesaria para asegurar el normal funcionamiento general de los colegios y escuelas, no puede escapar a ella una de sus actividades ordinarias, como lo es la educación física,

cuyo desenvolvimiento debe realizarse con un criterio de coordinación con el de las demás disciplinas, si no se quiere que sus alcances excedan la medida de lo conveniente o se malogren sus fines exclusivamente encaminados a constituir un factor concurrente y armónico en la triple y simultánea formación del educando: física, moral e intelectual;

Que, en consecuencia se hace necesario rever, en lo pertinente, el decreto de creación de la Dirección de Educación Física, a fin de que la Inspección General de Enseñanza mantenga la dirección didáctica y disciplinaria de los establecimientos de su dependencia, oficiales e incorporados en todos sus aspectos;

Por tanto:

El Vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

DECRETA:

Artículo 1.° — La Inspección General de Enseñanza, en lo concerniente a la práctica de la educación física en los establecimientos de enseñanza media, normal y especial, con excepción de los Institutos del Profesorado de dicha materia de la Colonia Nacional de Vacaciones «General San Martín» y demás establecimientos que por su carácter técnico dependen directamente de la Dirección General de Educación Física, ejercerá las funciones didácticas y disciplinarias que, con carácter general, le confiere su Reglamento Orgánico.

Art. 2.° — En lo sucesivo corresponderá a la Inspección General de Enseñanza la aprobación de los horarios de educación física en los establecimientos de enseñanza de su dependencia y la autorización de los concursos o manifestaciones de carácter escolar, organizados por establecimientos o entidades deportivas, si los mismos se realizan fuera de la localidad donde están situados aquéllos. Asimismo deberá asesorar al Ministerio en los siguientes asuntos:

a) Sistema de promoción de la materia de educación física;
b) Sobre los programas de educación física;

c) En los casos de aplicación del art. 140 del Reglamento para las Escuelas Normales, cuando su aplicación resulte de la incapacidad para la práctica de la educación física;

d) En los casos de adopción de medidas disciplinarias contra el personal de los establecimientos de enseñanza;

e) Cuando se proyecte impartir la enseñanza a título de ensayo o sin que la materia esté comprendida en el plan de estudios;

f) Organización de campamentos proyectados por los establecimientos de enseñanza;

g) Reglamentaciones de los clubs colegiales;

h) Proyectos de instalación de gimnasios y campos de deportes de los establecimientos de enseñanza;

i) Pedidos de permutas de profesores o de cambios de tareas;

j) Proyectos sobre práctica de la enseñanza de los alumnos del Instituto Nacional de Educación Física en los establecimientos dependientes del Ministerio.

Art. 3.° — A los efectos del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, pasarán seis de los actuales inspectores de la Dirección General de Educación Física, a la Inspección General de Enseñanza, bajo cuya dependencia ejercerán las tareas de inspección en su especialidad. Los tres restantes continuarán prestando servicios en la Dirección General de Educación Física, en las funciones técnicas y de fiscalización de los institutos y colonias de su dependencia.

Art. 4.° — La Dirección General de Educación Física, en su carácter de división del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, entenderá directamente en todo lo relacionado con la acción del Estado en favor de la educación física popular y la práctica de los deportes, fomentando la cultura física en el país por todos los medios a su alcance y fiscalizando la actividad de las instituciones deportivas civiles que reciban subsidio del Estado.

Art. 5.° — Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que se opongan a las establecidas por el presente decreto.

Art. 6.° — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional, anótese y archívese.

CASTILLO.

GUILLERMO ROTHE.

Censo de la Población Infantil de 5 a 14 años de edad y de los Analfabetos de 15 a 22 años

CENSO DE LA POBLACION INFANTIL DE 5 A 14 AÑOS DE EDAD Y DE LOS ANALFABETOS DE 15 A 22 AÑOS, EN TODO EL PAIS

Ley N.° 12.723, de 9 de octubre de 1941, autorizando al Consejo Nacional de Educación a levantar, en todo el territorio de la República, un censo de la población infantil de cinco a catorce años de edad y de los analfabetos de quince a veintidós años.

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de—

LEY:

Artículo 1.° — Autorízase al Consejo Nacional de Educación a levantar, en todo el territorio de la República, un censo de la población infantil de cinco a catorce años de edad y de los analfabetos de quince a veintidós años.

Art. 2.° — La ficha personal que servirá de base a la operación del censo, deberá ajustarse al formulario modelo aprobado por la Primera Conferencia Nacional sobre analfabetismo, sin perjuicio de completarlo con datos estadísticos relativos a la vivienda, asistencia social y todos aquellos que faciliten la determinación del número de analfabetos y las causas que retardan la difusión de la enseñanza primaria.

Art. 3.° — Las reparticiones y oficinas de la Nación, de las provincias y municipalidades, prestarán el concurso que les sea requerido para la obra censal sin que su personal tenga derecho a retribución alguna.

Art. 4.° — El censo deberá levantarse en una fecha comprendida entre el 15 y el 30 de mayo de 1942, con excepción de los Territorios de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Los Andes, en los cuales deberá llevarse a cabo entre el 31 de marzo y 15 de abril del mismo año.

Art. 5.° — El Consejo Nacional de Educación, dispondrá por intermedio de sus oficinas, las medidas necesarias para que las cifras y datos diversos obtenidos en el presente censo, tengan carácter permanente, y ordenará que se practiquen operaciones complementarias cada cinco años, a fin de actualizarlo.

Art. 6.° — Declárase carga pública las funciones de cualquier índole relacionadas con el levantamiento del censo y no podrán renunciarse sino por causa debidamente justificada.

Art. 7.° — Toda persona que se negara a dar datos para las operaciones censales o tergiversara o falseara los hechos, será penada con multa de 100 a 200 pesos o arresto de 30 a 60 días.

Art. 8.° — Los empleados en el censo que incurrieran, intencionalmente, en las faltas a que se refiere la última parte del artículo anterior, sufrirán pena de 500 a 1.000 pesos o arresto de seis meses a un año.

Art. 9.° — Destínase la suma de quinientos mil pesos para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente Ley. El Poder Ejecutivo, por medio de la Tesorería General, dispondrá la entrega de esta suma con cargo de rendir cuenta al Consejo Nacional de Educación, imputando el gasto a esa misma ley.

Art. 10 — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 29 de setiembre de 1941.

R. Patrón Costas. — José Luis Cantilo.
Gustavo Figueroa. — *L. Zavalla Carbó.*
Secretario del Senado — Secretario de la C. de DD.

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese y dése al Registro Nacional.

CASTILLO
Guillermo Rothe.

Registrada bajo el N.° 12.723

Ley N.° 12.770, sancionada el 17 de setiembre de 1942, prorrogando el plazo establecido por la Ley N.° 12.723 para levantamiento del censo y ampliando lo dispuesto en el artículo 3.° de la misma.

Artículo 1.° — Prorrógase hasta el 31 de octubre de 1943 el plazo establecido por la Ley N.° 12.723 para el levantamiento del censo escolar.

Art. 2.° — Agrégase al art. 3.° de la precitada ley la disposición siguiente «El Consejo Nacional de Educación podrá designar, asignándoles una retribución extraordinaria, hasta un número que no sobrepase de diez, a empleados y funcionarios de la Nación, provincias y municipalidades para cooperar regularmente en las tareas técnicas de preparación, tabulación y compilación del censo y análisis de sus resultados, de acuerdo a las directivas de esta ley».

Art. 3.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 17 de setiembre de 1942.

A. Arancibia Rodríguez.
E. Fernández Guerrico.
Secretario del Senado

José Luis Cantilo.
L. Zavalla Carbó.
Secretario de la C. de DD.

Leyes Sanitarias

LEYES SANITARIAS

VACUNACIÓN Y REVACUNACIÓN ANTIVARIÓLICA

Ley N.° 4.202, de 4 de septiembre de 1903, estableciendo la obligatoriedad de la vacunación y revacunación antivariólica

Artículo 1.° — En la Capital de la República y en los Territorios Nacionales, son obligatorias la vacunación y revacunación antivariólicas, durante el transcurso del primero y del décimo año de la existencia, respectivamente.

Art. 2.° — Cuando la vacunación no tuviere éxito, según certificado médico, será ella repetida en el año siguiente; si tampoco tuviese éxito la segunda vacunación, se hará otra en el tercer año.

Art. 3.° — Los padres, los tutores y en general cualquiera persona que tenga niños a su cuidado o servicio, están personalmente obligados al cumplimiento de los arts. 1.° y 2.°.

La primera infracción será penada con multa de 20 pesos $^{m}/_{n}$, y cada una de las siguientes con cincuenta pesos, sin perjuicio de practicarse la vacunación y revacunación.

Art. 4.° — Están obligados a la vacunación y revacunación:

1.° Los jefes, oficiales y soldados de la Armada y del Ejército de la Nación, en servicio activo;

2.° Los particulares contratados que presten servicios en la Armada, en el Ejército y en los establecimientos, talleres y dependencias de los ministerios de Marina y de Guerra;

3.° Los empleados nacionales y los empleados municipales de la Capital de la Nación y de los Territorios Nacionales;

4.° Los inmigrantes costeados por el Gobierno de la Nación y los recibidos y atendidos por él en los establecimientos a ellos destinados;

5.° Los huérfanos, inválidos, mendigos, dementes de los asilos nacionales y municipales, establecidos en la Capital de la Nación y en los Territorios Nacionales;

6.° Los que sufran condenas en las cárceles de la Nación.

Art. 5.° — En las escuelas, colegios y universidades de la Nación, en los establecimientos municipales de enseñanza de la Capital de la Nación y de los Territorios Nacionales; en las escuelas,

colegios o institutos provinciales o particulares, que reciban subvenciones de la Nación o tengan cualquier otro amparo de ella, se exigirá para el ingreso de cada alumno un certificado médico de haber sido vacunado con éxito y revacunado, según la edad, en conformidad a esta ley.

Art. 6.° — En ningún caso será reconocida la validez de los estudios hechos en las escuelas y colegios provinciales o particulares, cuyos estatutos no impongan la vacunación y revacunación, como condición previa para ingreso de los alumnos.

Art. 7.° — Los directores de establecimientos particulares de beneficencia, están personalmente obligados a que sean vacunadas y revacunadas las personas alojadas en ellos.

La falta de cumplimiento de esta disposición, será penada con multa de cincuenta pesos moneda nacional la primera vez y de cien pesos, cada una de las siguientes.

Art. 8.° — Los directores de establecimientos particulares dedicados a aprendices industriales, los de fábricas, talleres y casa de industrias están personalmente obligados a que sean vacunados y revacunados los menores que en dichos establecimientos aprendan o trabajen.

Las faltas serán castigadas de acuerdo con la segunda parte del artículo 7.°.

Art. 9.° — La comprobación por certificado médico de que ha tenido viruela el obligado a la vacunación, le exime de ella.

Art. 10. — Cuando, según certificado médico, no se ha practicado o no es conveniente practicar la vacunación o revacunación obligatoria, porque pondría en peligro la vida o la salud del obligado, será él vacunado o revacunado en el transcurso del año siguiente a la desaparición del impedimento.

Art. 11. — En tiempo de epidemia variolosa, el Departamento Nacional de Higiene, podrá ordenar la vacunación obligatoria de los adultos en la Capital de la Nación y en los Territorios Nacionales, con pena de veinte pesos $^{m}/_{n}$, por cada infracción.

Art. 12. — La vacunación y revacunación obligatorias, serán hechas de marzo a septiembre, con la linfa animal, dentro de los treinta días de extraída del vaccinífero, y se practicará gratuitamente por médicos o personas especialmente autorizadas para ese acto por el Departamento de Higiene.

Art. 13. — Las personas autorizadas que practiquen la vacunación, sin observar los cuidados y el procedimiento prescripto para ella por el Departamento Nacional de Higiene, serán penadas con una multa de cien pesos m|n., sin perjuicio de su responsabilidad personal por los daños que causaren al vacunar.

Art. 14. — La persona no autorizada, que practique una vacunación que comprometa la salud o la vida del vacunado, será penada con multa de quinientos pesos moneda nacional, sin perjuicio de su responsabilidad personal por los daños causados.

Art. 15. — Para el cumplimiento de esta ley, el Departamento Nacional de Higiene proveerá gratuitamente de linfa animal.

Art. 16. — El médico que diere certificados falsos de vacunación, revacunación, de haber tenido una persona viruela, o de que un obligado a vacunarse no está en condiciones favorables a la operación, será penado con multa de quinientos pesos moneda nacional.

Art. 17. — Las multas serán aplicadas directamente por la repartición sanitaria respectiva, con apelación ante el Juez de Paz del Distrito.

El producto de las multas se destinará al fomento del Instituto Nacional de Vacuna.

Art. 18. — El Poder Ejecutivo, al reglamentar esta ley, tomará en cuenta las dificultades que presente la aplicación estricta del art. 5.° en lugares apartados, y determinará la forma y época en que se hará efectivo el art. 4.°.

Art. 19. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Decreto, de 19 de diciembre de 1904, reglamentario de la Ley N.° 4.202 de vacunación y revacunación antivariólica

Artículo 1.° — La Municipalidad de la Capital Federal dará cumplimiento en el municipio de la misma a la Ley N.° 4.202, que declara obligatorias la vacunación y revacunación antivariólicas; y los cuerpos de Sanidad del Ejército y de la Armada harán efectivo lo dispuesto en los incs. 1.° y 2.° del art. 3.° de dicha ley.

Art. 2.° — Sólo podrá emplearse la linfa animal para la vacunación y revacunación antivariólica, que será preparada y en-

tregada gratuitamente por el Departamento Nacional de Higiene y aplicada según las instrucciones que transmitirá directamente.

Art. 3.° — La Municipalidad y la Sanidad del Ejército y de la Armada, llevarán libros de registro de la vacunación y revacunación, de acuerdo también con las indicaciones que trasmitirá directamente el Departamento Nacional de Higiene.

Art. 4.° — Cuando haya epidemia variolosa y el Departamento Nacional de Higiene repute necesario ordenar la vacunación obligatoria de los adultos, propondrá al Ministerio del Interior las medidas necesarias que para el caso deben dictarse.

Art. 5.° — Queda encargado el Departamento Nacional de Higiene del cumplimiento de la ley de vacunación en los Territorios Nacionales, a cuyo fin ordenará expediciones temporarias de médicos y practicantes de su dependencia, con las instrucciones correspondientes y dotación de elementos necesarios.

Los señores Gobernadores de Territorios prestarán toda la cooperación que solicite el Departamento Nacional de Higiene y determinarán que el médico de la Gobernación practique gratuitamente la vacunación y revacunación obligatoria, quedando subordinados al Departamento Nacional de Higiene en todas las cuestiones de sanidad o higiene.

Art. 6.° — Para hacer efectiva la vacunación obligatoria de los empleados nacionales residentes en las provincias, el Departamento Nacional de Higiene comisionará, con las instrucciones del caso, a uno de los médicos que, como profesores de colegios o escuelas nacionales, preste servicios en las capitales de provincias y sus ciudades principales.

Art. 7.° — El Departamento Nacional de Higiene comunicará a la Intendencia Municipal de la Capital y a los Gobernadores de los Territorios Nacionales la nómina de las personas que hubiese autorizado para que practiquen la vacunación, a los fines de lo dispuesto en los arts. 13 y 14 de la ley.

Art. 8.° — El Ministerio de Instrucción Pública adoptará las medidas para que se hagan efectivas las disposiciones contenidas en los artículos de la ley.

Art. 9.° — Las multas y penas establecidas por la ley serán aplicadas, en la Capital Federal, por la Intendencia Municipal, y en los Territorios Nacionales, por orden del Departamento Nacional de Higiene o de su Delegado Sanitario y por intermedio del Jefe

y Comisario de Policía. Hecha la intimación de la multa, los afectados podrán usar del recurso que acuerda el art. 17 de la ley, el que se tramitará según los procedimientos que rigen para la justicia de paz.

Art. 10. — El Departamento Nacional de Higiene vigilará la aplicación de la ley y propondrá al Ministerio del Interior todas las medidas necesarias para el mejor cumplimiento.

Art. 11. — Derógase el decreto reglamentario del 12 de abril del año actual.

Art. 12. — Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

Decreto, de enero 16 de 1913, sobre vacunación obligatoria de los aspirantes a empleos

Buenos Aires, 16 de enero de 1913.

Siendo conveniente, como lo indica la Municipalidad de la Capital en la nota que antecede, dictar medidas tendientes a hacer efectiva la inmunización antivariólica en el personal de empleados de la Administración Nacional con el cumplimiento de la Ley 4.202,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.° — Los candidatos o aspirantes a desempeñar puestos en la Administración Nacional, ya sea por ingreso o promoción, deberán comprobar previamente haber cumplido con la Ley 4.202, de vacunación y revacunación obligatoria, exhibiendo el certificado médico a que se refiere el art. 37 del decreto de 12 de abril de 1904 (1), visado por el Departamento Nacional de Higiene, oficinas sanitarias o personas debidamente autorizadas para ello.

(1) Derogado por el de 19 de diciembre del mismo año, transcripto precedentemente.

Art. 2.° — En toda propuesta de nombramiento o promoción, el funcionario que la suscriba hará constar que se ha dado cumplimiento al presente decreto.

Art. 3.° — Quedan comprendidas en las anteriores disposiciones las reparticiones autorizadas para designar el personal subalterno.

Art. 4.° — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

SAENZ PEÑA.
INDALECIO GÓMEZ.

DECLARACION OBLIGATORIA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS O TRANSMISIBLES

Ley N.° 12.317, de 3 de octubre de 1936, sobre declaración obligatoria de las enfermedades contagiosas o transmisibles

Artículo 1.° — Es obligatoria en todo el territorio de la República, la declaración de los casos comprobados o sospechosos de las enfermedades contagiosas o transmisibles.

Art. 2.° — Los funcionarios que reciban la denuncia quedan obligados al secreto profesional en cuanto éste no afecte los servicios de sanidad pública.

Art. 3.° — Las enfermedades a que se refiere el artículo 1.° son:

GRUPO A

1.° — Cólera.
2.° — Fiebre amarilla.
3.° — Peste (bubónica, neumónica o septicémica).
4.° — Viruela.
5.° — Tifus exantemático.

GRUPO B

6.° — Difteria.
7.° — Escarlatina.
8.° — Sarampión.
9.° — Coqueluche.
10. — Fiebre tifoidea o infecciones paratifoideas.
11. — Fiebre recurrente.
12. — Meningitis cerebroespinal.
13. — Encefalitis letárgica o epidémica.
14. — Poliomelitis, parálisis infantil o enfermedad de Heine Medin.
15. — Disentería (amebiana o bacilar, epidémica).
16. — Gripe epidémica.

17. — Dengue.
18. — Tuberculosis en todas sus localizaciones.
19. — Lepra (de acuerdo con la Ley N.° 11.359).
20. — Carbunclo.
21. — Rabia.
22. — Leismaniosis.
23. — Paludismo o malaria.
24. — Anquilostomiasis (de acuerdo con la Ley N.° 12.107).
25. — Fiebre puerperal en las maternidades u hospitales.
26. — Oftalmías purulentas.
27. — Tracoma.
28. — Paperas o parotiditis epidémicas.

El Ministerio del Interior, previo informe suficientemente fundado del Departamento Nacional de Higiene podrá, por decreto, agregar otras enfermedades a la lista anterior o suprimir algunas de las actuales.

Art. 4.° — La declaración de las cinco primeras enfermedades (Grupo A) deberá hacerse por la vía más rápida, sin perjuicio de hacerla seguir de la comunicación escrita inmediatamente después de sospechado o comprobado el diagnóstico.

Para el grupo B, ella deberá hacerse dentro de las doce horas, por escrito, sin perjuicio de recurrir a la vía más rápida, cuando el médico crea que es urgente tomar medidas de aislamiento, desinfección o vacunación.

La declaración indicará el nombre y domicilio, edad y sexo del enfermo, fecha de iniciación probable y origen supuesto de la enfermedad.

Art. 5.° — La obligación de la declaración corresponde: al médico que vea o asista al enfermo o a la partera, en el caso de las enfermedades especificadas en los números 25 y 26; los *directores, gerentes o encargados de colegios,* asilos, hoteles o instituciones, establecimientos o campamentos, donde se alberguen, trabajen o concurran personas, *deberán denunciar ante la autoridad sanitaria correspondiente la existencia de las enfermedades comprendidas en el artículo 3.°, inmediatamente de ser notificados por el médico.*

Art. 6.° — La declaración será dirigida:

a) En la Capital Federal y las ciudades que tengan un servicio de asistencia pública o administración sanitaria, al jefe de la misma o de la oficina especialmente encargada;

b) En la campaña o pueblos de provincia donde no hubiera intendencia municipal, al Consejo de Higiene o Dirección de Salubridad de la provincia o al médico que desempeñe funciones como dependiente de aquéllos o del Departamento Nacional de Higiene;

c) En los territorios federales, al representante del Departamento Nacional de Higiene, o donde no lo hubiere a la autoridad militar o policial;

La denuncia, por vía más rápida, de las enfermedades del grupo A, además de ser hecha a las autoridades indicadas anteriormente, debe ser comunicada simultáneamente al Departamento Nacional de Higiene;

El Poder Ejecutivo y los gobiernos provinciales reglamentarán estas disposiciones, a fin de asegurar mejor su ejecución y a comunicar las declaraciones inmediatamente en las del grupo A y semanalmente en las del grupo B, al Departamento Nacional de Higiene.

Art. 7.° — La Dirección General de Correos y Telégrafos transmitirá gratuitamente las comunicaciones a que se refiere la presente ley.

Art. 8.° — Los que no hubieran hecho la denuncia en el plazo fijado, estarán sujetos a multas de pesos 20 a 100 moneda nacional, impuesta por la autoridad sanitaria. Estas multas podrán ser dispensadas en la primera infracción; pero, en caso de falta reiterada, serán percibidas con la nueva impuesta.

Art. 9.° — Sin perjuicio de las sanciones punitorias establecidas en el artículo anterior, toda falta que se compruebe a los médicos y parteras importará una amonestación, y en caso de reiteración frecuente podrá importar hasta la suspensión temporaria de uno a tres meses en el ejercicio de la profesión, pronunciada por la autoridad sanitaria.

Art. 10. — Inmediatamente de conocida la denuncia, el funcionario que la reciba, actuará de manera a proveer de inmediato la mejor asistencia del enfermo y de su familia y a las medidas de profilaxis, aislamiento o desinfección sanitaria.

Ofrecerá también al médico denunciante y a la familia, gratuitamente, los medios de diagnóstico de laboratorio u otros que puedan convenir según el caso.

Art. 11. — Las autoridades en sus respectivas jurisdicciones, están obligadas a tomar las medidas para el cumplimiento de esta ley. El Departamento Nacional de Higiene podrá intervenir, de acuerdo con las autoridades provinciales, cada vez que crea comprometida la salud pública por la denuncia de una enfermedad infecto-contagiosa.

Art. 12. — La presente ley entrará en vigencia noventa días después de promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Art. 13. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 30 de septiembre de 1936.

VACUNACION Y REVACUNACION ANTIDIFTERICA

Ley N.° 12.670, de 8 de abril de 1941, de vacunación y revacunación antidiftérica

Artículo 1.° — Declárase obligatoria y gratuita, en todo el territorio de la Nación, la vacunación y revacunación antidiftérica en los niños desde la edad de nueve meses a los doce años.

Art. 2.° — El Poder Ejecutivo de la Nación convendrá con los Gobiernos de las provincias la aplicación de la ley, coordinando la acción para su mejor resultado.

Art. 3.° — En todos los establecimientos de enseñanza primaria y especial se exigirá el certificado de vacunación o revacunación de acuerdo con la reglamentación de la presente ley.

Art. 4.° — Los padres, tutores, así como las personas que tengan menores a su cuidado o servicio, que impidan el cumplimiento de esta ley, serán pasibles de las penas establecidas en la misma.

Art. 5.° — Los que infrinjan las disposiciones establecidas en esta ley serán pasibles de una multa no menor de 20 pesos ni mayor de 100 pesos. El producto de las mismas ingresará en el fondo especial de *Profilaxis específica* con destino exclusivo a propaganda y fomento de la vacunación antidiftérica.

Art. 6.° — El certificado de vacunación o revacunación deberá ser extendido por autoridad competente y quedará en poder del interesado a efecto de exhibirlo cada vez que sea exigido.

Art. 7.° — En caso de epidemia o cuando una endemia adquiera proporciones que importen un peligro general, el Poder Ejecutivo, a requerimiento del organismo técnico respectivo, podrá disponer la aplicación de medidas profilácticas específicas de emergencia en la zona donde exista la enfermedad, como asimismo en las que se considere necesario proteger.

Art. 8.° — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa días a contar de la fecha de su sanción, fijando las épocas de vacunación y revacunación y las excepciones; aprobará la clase de vacuna y los métodos de vacunación que deben

adoptarse y determinará el funcionario local que, previa comprobación, ha de aplicar las sanciones de la ley, con apelación para ante el juez correccional o del crimen, según el caso.

Art. 9.° — Créase bajo la dependencia del Departamento Nacional de Higiene la sección *Profilaxis específica,* dirigida por un médico especializado, que tendrá a su cargo la dirección de la vacunación antidiftérica y los procedimientos de profilaxis específica.

Art. 10. — Destínase la cantidad de $ 200.000 moneda nacional para la fabricación y distribución de vacuna, que estará a cargo del Departamento Nacional de Higiene. Para la creación e instalación de la sección *Profilaxis específica* fíjase hasta la suma de $ 200.000 moneda nacional, comprendidos los sueldos y gastos de movilidad del personal encargado de practicar la vacunación y revacunación.

Art. 11. — Autorízase al Poder Ejecutivo para tomar de rentas generales los fondos necesarios para el cumplimiento de la presente ley, hasta su inclusión en la Ley General de Presupuesto.

Art. 12. — Esta ley entrará en vigor a los noventa días de su promulgación.

Decreto N.° 104.166, de 28 de octubre de 1941, reglamentario de la Ley de vacunación y revacunación antidiftérica

Buenos Aires, 28 de octubre de 1941.

Visto el proyecto de reglamentación de la Ley N.° 12.670, de vacunación y revacunación antidiftérica, elaborado por el Departamento Nacional de Higiene,

El Vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

DECRETA:

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.° — El Departamento Nacional de Higiene organizará la sección Profilaxis Específica creada por Ley N.° 12.670 y dirigirá por su intermedio el régimen nacional de vacunación y revacunación antidiftérica, y los procedimientos de profilaxis específica.

Art. 2.° — Los gobernadores de provincia como agentes naturales del Gobierno Nacional, contribuirán a la realización de los fines de la Ley N.° 12.670, dentro de los límites de su respectivo territorio.

A tal efecto, y sin perjuicio de las normas que puedan acordarse en los conceptos previstos por el art. 2.° de la ley, el Ministerio del Interior les requerirá:

1.° La adopción de disposiciones de aplicación provincial concordantes con las de los artículos 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, y 34 de este reglamento;

2.° La determinación de las autoridades locales que vigilarán directamente el cumplimiento de la ley, otorgarán los certificados de vacunación y revacunación, y aplicarán las sanciones a que se refieren los artículos 6 y 8 de la ley.

No obstante lo dispuesto por este artículo, el Departamento Nacional de Higiene, cuando las circunstancias lo requieran, podrá valerse de personal propio o delegado, para el cumplimiento de la Ley N.° 12.670 en lugares de jurisdicción provincial.

Art. 3.° — El señor Intendente Municipal de Buenos Aires acordará con el Departamento Nacional de Higiene la colaboración que las autoridades sanitarias municipales deban prestar para la ejecución de los fines de la ley.

Art. 4.° — Queda directamente encargado el Departamento Nacional de Higiene del cumplimiento de la ley de Profilaxis de la difteria en los territorios nacionales, a cuyo fin, utilizará los servicios sanitarios ya existentes, completándolos para su mayor eficacia con los servicios, personal y material necesarios.

Art. 5.° — El Consejo Nacional de Educación podrá realizar la vacunación y revacunación antidiftérica en las escuelas de su jurisdicción en todo el territorio de la Nación, conforme a esta reglamentación y las disposiciones que acuerde con el Departamento Nacional de Higiene.

Las instituciones de beneficencia y servicios médicos oficiales podrán también efectuar vacunaciones y revacunaciones, previo acuerdo con la autoridad sanitaria nacional.

Art. 6.° — Los médicos podrán practicar la vacunación y revacunación en el ejercicio profesional privado, de acuerdo con las disposiciones de la ley y las pertinentes de esta reglamentación.

Art. 7.° — La vacunación y revacunación antidiftérica serán efectuadas gratuitamente por las autoridades e instituciones mencionadas en los artículos 2.°, 3.°, 4.° y 5.°; también serán gratuitas las que efectúen los médicos, en el ejercicio de su profesión privada, cuando apliquen la vacuna de uso oficial.

Antígeno y métodos de vacunación

Art. 8.° — La vacunación y revacunación serán efectuadas con la anatoxina (toxoide) diftérica activada preparada actualmente por el Instituto Bacteriológico del Departamento Nacional de Higiene, u otras similares de igual actividad e inocuidad previamente aprobadas por el Departamento Nacional de Higiene.

Art. 9.° — El Instituto Bacteriológico del Departamento Nacional de Higiene proveerá la cantidad de vacuna que sea necesaria para satisfacer las exigencias de la ley de vacunación antidiftérica obligatoria en todo el territorio de la Nación.

Art. 10. — La vacunación se efectuará mediante una inyección única de anatoxina en el tejido celular subcutáneo de preferencia en la región subescapular, cuidando que sea suficientemente profunda para que el antígeno no quede depositado en el dermis. Las revacunaciones serán efectuadas en la misma forma.

En los casos necesarios, podrán efectuarse inyecciones complementarias, instilaciones o pulverizaciones de anatoxina para conferir un mayor grado de inmunidad individual; pero estas inyecciones complementarias no deben ser confundidas con las revacunaciones a que se refiere el artículo número 11 de la presente reglamentación, que serán obligatorias y destinadas a la mantención de la inmunidad.

Epocas de vacunación y revacunación

Art. 11. — La vacunación se efectuará a todos los niños comprendidos entre la edad de nueve meses y la de doce años, quedando obligados los padres, tutores, así como las personas que tengan menores a su cargo, a hacer efectuar la vacunación de los mismos antes de que cumplan los dos años de edad.

La inmunidad será mantenida por revacunaciones que serán aplicadas la primera al año de efectuada la vacunación y las subsiguientes cada tres años.

Para efectuar reacciones ocasionadas por los estados hiperalérgicos, se deberán tomar todas las precauciones del caso, y a tal efecto los médicos que realicen vacunaciones podrán efectuar previamente las reacciones de Schick y de Moloney en los casos que lo consideren conveniente, y fraccionar las dosis cuando lo consideren necesario.

CONTROL

Art. 12. — La Sección Profilaxis Específica del Departamento Nacional de Higiene deberá llevar un «Registro de Vacunados» y disponer asimismo que los servicios de inmunización de su dependencia lleven su Registro correspondiente.

Art. 13. — Las autoridades, servicios sanitarios e instituciones mencionadas en los artículos 2.°, 3.°, 4.° y 5.° de esta reglamentación otorgarán a los niños vacunados o revacunados el certificado oficial correspondiente, que será el único de valor legal.

Los médicos que deseen oficializar las vacunaciones o revacunaciones efectuadas en su clientela privada deberán solicitar en papel simple y por escrito inscripción en la Sección de «Profilaxis Específica del Departamento Nacional de Higiene» que les entregará un número limitado de formularios cuyo talón debidamente llenado y firmado deberá ser remitido a la misma dentro de los siete días de efectuada la vacunación o revacunación. La falta de cumplimiento de este requisito o de las disposiciones complementarias que establezca el Departamento Nacional de Higiene, o el otorgamiento indebido de certificados, determinarán la caducidad de la inscripción del médico, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir.

Art. 14. — En todos los establecimientos de enseñanza primaria, secundaria o especial se exigirá el certificado de vacunación y revacunación como requisito previo para la inscripción. En toda gestión que los padres efectúen en relación con sus hijos, deberán presentar también el certificado de vacunación o revacunación de los mismos.

Suministro de Anatoxina

Art. 15. — La Sección Profilaxis Específica, de acuerdo a las necesidades de la vacunación y revacunación suscribirá las órdenes de distribución y forma de envío de la vacuna antidiftérica, debiendo el Instituto Bacteriológico darle cuenta de su cumplimiento.

Art. 16. — Las autoridades sanitarias, servicios médicos o instituciones mencionadas en los arts. 2.°, 3.°, 4.° y 5.° de esta reglamentación solicitarán de la Sección Profilaxis Específica del Departamento Nacional de Higiene la anatoxina necesaria para dar cumplimiento a la Ley 12.670 y esta reglamentación, en sus respectivas esferas de acción.

Aquellos médicos que deseen aplicar gratuitamente la vacuna antidiftérica en el ejercicio de su profesión privada podrán solicitar de la Sección Profilaxis Específica la anatoxina de «uso oficial», previa inscripción en dicha sección. La falta de cumplimiento de las disposiciones establecidas para la utilización de dichas vacunas o de las complementarias que adopte el Departamento Nacional de Higiene determinará la caducidad de la inscripción del médico.

Excepciones

Art. 17. — A los niños que padezcan una enfermedad que a juicio del médico, haga peligrosa la aplicación de la vacuna, les será otorgado por éste un certificado donde conste la afección, datos personales y domicilio, postergándose la vacunación por el término de tres meses, renovable mientras persista causa suficiente. Un duplicado, debidamente firmado será enviado a la Sección correspondiente del Departamento Nacional de Higiene dentro de los tres días de suscripto el original.

Los padres, tutores o encargados de estos niños, están en todo caso obligados a permitir el examen médico de los mismos por el personal técnico de las dependencias encargadas de efectuar la vacunación.

Art. 18. — Los niños comprendidos en el artículo anterior no serán autorizados a ingresar en las escuelas, colonias de vacaciones ni otras colectividades infantiles donde se agrupen niños sanos, sin la autorización expresa de las autoridades sanitarias encargadas de efectuar la vacunación.

Art. 19. — Podrán eximirse de la revacunación los niños que tengan reacciones de «Schick» reiteradamente negativas con el reactivo oficial, debiendo los médicos que realicen estas pruebas solicitar los formularios correspondientes de las autoridades sanitarias encargadas de efectuar la vacunación los que, deberán devolver llenados y firmados dentro de los siete días de controlado el resultado de la reacción, a los efectos de la entrega del certificado oficial, que será el único que tendrá valor legal. Estos formularios sólo seran entregados a los médicos expresamente autorizados por dichas autoridades sanitarias para efectuar estas reacciones con carácter eximente. A los efectos de la exención, las dependencias encargadas de efectuar la vacunación, podrán reiterar estas reacciones por medio de un personal técnico antes de entregar los certificados oficiales, en todos los casos en que lo consideren conveniente.

DENUNCIAS

Art. 20 — Todo caso sospechoso o confirmado de difteria deberá ser denunciado por escrito al Departamento Nacional de Higiene dentro de los tres días de producido, especificando todos los datos necesarios para la individualización del niño y mencionando el número de certificado de vacunación.

Las denuncias serán efectuadas por:

a) Los padres, tutores o personas que tengan menores a su cuidado o servicio;

b) Los directores de colegios, asilos, colonias infantiles o establecimientos donde se asistan o alberguen niños;

c) Los médicos que reconozcan o traten al enfermo, debiendo en este caso indicar si el diagnóstico fué hecho en base a su aspecto clínico, al examen microscópico de un frotis mediante cultivo del exudado; en este último caso, se indicará también el medio de cultivo empleado y si se efectuaron «tests» de virulencia.

Art. 21. — Todo farmacéutico o autorizado que expenda suero o vacuna antidiftérica está obligado a efectuar la correspondiente denuncia indicando quienes son el médico y el enfermo y sus respectivos domicilios.

Art. 22. — La Dirección General de Correos y Telégrafos transmitirá gratuitamente las comunicaciones por denuncia de difteria, de acuerdo al art. 7.° de la Ley 12.317 (1) de denuncias obligatoria de enfermedades contagiosas o transmisibles.

Medidas de Ejecución

Art. 23. — El Departamento Nacional de Higiene creará servicios fijos, semifijos o ambulantes para el diagnóstico de la difteria y su vacunación en las localidades o zonas que considere conveniente.

Art. 24. — En las localidades o zonas donde la difteria sea maligna o se produzcan focos epidémicos, las autoridades del Departamento Nacional de Higiene adoptarán y aconsejarán las medidas profilácticas de urgencia, procediendo según los casos al aislamiento de los enfermos o a la inyección preventiva de 1.000 unidades de suero antitóxico a los niños sanos.

En estas localidades o zonas, o en otras donde el Departamento Nacional de Higiene lo crea conveniente, podrá disponer la vacunación o revacunación inmediata de todos los niños de uno a doce años, efectuando si fuera necesario reacciones de «Schick» seguidas por las inyecciones complementarias de anatoxina requeridas para obtener un alto grado de inmunidad.

Multas y Penalidades

Art. 25. — Es obligación de los padres y tutores, así como de las personas que tengan de hecho la guarda y cuidado de todo menor que no haya cumplido los doce años de edad hacer vacunar y revacunar al mismo en las épocas y en las condiciones que establece esta reglamentación.

Art. 26. — Los padres, tutores, así como las personas que tengan menores a su cuidado, que no cumplieren la obligación señalada en el artículo anterior, o las disposiciones pertinentes de esta reglamentación, o que no concurrieran sin causa justificada al llamado general o particular que les efectúen las autoridades sanitarias encargadas de la vacunación serán pasibles de las multas previstas en el art. 5.° de la Ley N.° 12.670.

Art. 27. — Toda persona que obstaculice deliberadamente el cumplimiento de la Ley 12.670 y las disposiciones de esta reglamentación serán también pasibles de dichas multas.

---

(1) Ver página 579.

Art. 28. — Si comprobada un infracción a la obligación del artículo 25, la persona responsable se allanara a la presentación del menor para su inmediata vacunación o revacunación, podrá dejarse en suspenso la aplicación de la sanción penal.

Si no se allanara o si después de hacerlo, no cumpliese la promesa, se acumularán al imputado tantas infracciones como veces deba intervenir la autoridad de aplicación en una misma fecha o en fechas separadas, para obtener el cumplimiento de la ley.

Art. 29. — Las multas por infracciones a la Ley N.° 12.670, y esta reglamentación, cometidas en la Capital Federal, serán aplicadas por el Presidente del Departamento Nacional de Higiene y en los territorios nacionales por el funcionario que éste designe o delegue al efecto; de su resolución podrá apelarse dentro de los cinco días de notificado, y previa oblación de la multa, para ante el juez correccional en turno de la Capital Federal, o ante los jueces letrados de los territorios nacionales, según sea el lugar de la infracción.

Si la resolución condenatoria estuviese ejecutoriada sin que el infractor hubiese oblado la multa, las actuaciones se elevarán al juez para la aplicación de la pena corporal que corresponda.

Art. 30. — Las multas se abonarán en la tesorería del Departamento Nacional de Higiene mediante entrega de cheque o giro a la orden de su Presidente o de comprobante de depósito bancario en la cuenta especial que se mantendrá abierta al efecto.

Propaganda

Art. 31. — El Departamento Nacional de Higiene se encargará de realizar campañas de propaganda y educación sanitaria que permitan instruir al público sobre los peligros de la difteria y las ventajas e innocuidad de la vacunación así como de los beneficios conferidos por las inyecciones complementarias de anatoxina efectuadas en forma seriada con intervalos, de pocas semanas, y por las instilaciones nasales de antígeno.

Disposiciones transitorias y complementarias

Art. 32. — Las disposiciones del artículo 11 referentes a la edad en que se aplicará la vacunación entrarán a regir desde el 1.° de julio de 1942. Todos los niños mayores de nueve meses y menores

de doce años que no hayan sido vacunados con anterioridad deben someterse a la vacunación antidiftérica obligatoria antes de dicha fecha.

Art. 33. — Los niños de cuatro años o más que aun no hayan sido vacunados recibirán dos dosis de vacuna separadas por un mes de intervalo.

Art. 34. — Se considerarán válidos los certificados de vacunación expedidos por autoridades sanitarias o médicos particulares con anterioridad a dicha fecha por las dependencias nacionales, municipales o provinciales autorizadas para expedir los certificados oficiales.

Art. 35. — Los Gobernadores de provincia comunicarán al Ministerio del Interior dentro de los treinta días de dictado el presente decreto la organización que la respectiva provincia haya establecido o tenga en formación para dar cumplimiento a la vacunación y revacunación antidiftéricas obligatorias en los términos de la ley.

Art. 36. — Oportunamente el Departamento Nacional de Higiene formulará, el proyecto de presupuesto de sueldos y otros gastos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley N.° 12.670.

Art. 37. — Todos los cargos técnicos para el cumplimiento de la ley serán provistos por concurso de acuerdo a una reglamentación que proyectará el Departamento Nacional de Higiene y someterá a la aprobación del Ministerio del Interior.

Art. 38. — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

CASTILLO.
MIGUEL J. CULACIATI.

Circular N.° 6 de la Inspección General de Enseñanza, de 20 de enero de 1942, comunicando disposiciones de la Ley N.° 12.670 sobre vacunación y revacunación antidiftérica y del decreto reglamentario de la misma.

Buenos Aires, 20 de enero de 1942.

Señor { Director ..... / Rector .....

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle las disposiciones de la Ley N.° 12.670, sobre vacunación y revacunación antidiftérica, y del decreto reglamentario de la misma, que tendrán aplicación en los establecimientos de enseñanza dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Son ellas las siguientes ([1]): (sigue la transcripción de disposiciones pertinentes de la ley y del decreto reglamentario, cuyo texto íntegro precede en este libro al de la presente circular).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del precitado decreto, los estudiantes que cumplan o hayan cumplido los doce años antes del 1.° de julio de 1942 quedarán eximidos de la exigencia establecida por el artículo 14. También quedarán eximidos de dicha exigencia los exceptuados por las autoridades sanitarias encargadas de efectuar la vacunación, en las condiciones previstas en los artículos 18 y 19.

Teniendo en cuenta que el certificado de vacunación, revacunación o excepción deberá quedar en poder del interesado (Art. 6.° de la ley), la comprobación de que los aspirantes han dado cumplimiento a la referida exigencia será efectuada, una vez que entre en vigencia la precedente reglamentación, por la autoridad sanitaria encargada de expedir el certificado de buena salud, en el que esta última dejará la constancia correspondiente.

---

(1) Artículos 1.°, 2.°, 3.° y 6.° de la Ley; y artículos 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 32 y 34 del decreto reglamentario.

En los Departamentos de Aplicación anexos a las Escuelas Normales se exigirá para el ingreso de todo niño menor de doce años a cualquiera de los grados, la presentación del certificado de vacunación o revacunación antidiftérica, o en su defecto el de excepción, certificado que será devuelto una vez efectuada la anotación pertinente en el registro de matrícula.

Saludo a usted atentamente.

FLORENCIO D. JAIME.
Inspector General de Enseñanza.

Leyes Militares y Electorales

LEYES MILITARES Y ELECTORALES (1)

ENROLAMIENTO

Disposiciones pertinentes de la Ley N.° 11.386, de 21 de octubre de 1926, sobre enrolamiento general de los ciudadanos argentinos.

Acto del enrolamiento

Art. 2.° — Todo ciudadano está obligado a enrolarse, en los períodos establecidos en el artículo 16, dentro de los siete meses de cumplidos los 18 años de edad, concurriendo a la oficina enroladora del lugar de su domicilio.

Se entiende por domicilio a los efectos de esta ley, o el lugar donde reside la familia o, donde trabaja habitualmente el ciudadano, o donde está el asiento de sus negocios.

Son oficinas enroladoras y dependerán del Ministerio de Guerra, a los efectos del enrolamiento, las de Registro Civil, aquellas que el Poder Ejecutivo habilite especialmente y los consulados argentinos.

Art. 3.° — Si el ciudadano se hallare físicamente impedido para concurrir en persona debe comunicarlo por sí, por sus representantes o por intermedio de parientes o amigos, dentro del plazo legal, a la oficina enroladora correspondiente, cuyo jefe tomará las medidas necesarias para enrolarlo en su domicilio, siempre que resida en la localidad, asiento de la oficina; en caso contrario, le otorgará una constancia escrita para su descargo, hasta que desaparezca el impedimento.

Art. 6.° — El ciudadano en el acto de enrolarse, presentará a la oficina enroladora:

a) La partida de su nacimiento, la carta de ciudadanía, o en su defecto una información judicial comprobatoria de su nacimiento;

---

(1) En el plan general de esta obra (ver página 4 del Libro I) los decretos reglamentarios y demás actos oficiales derivados de los artículos pertinentes, que aquí se transcriben, de las leyes militares y electorales, corresponden al capítulo 9.° (Estado del Estudiante) del Libro II, Organización docente, y al capítulo 1.° (Personal Civil de la Administración Nacional) del Libro III, Organización Administrativa.

b) Una fotografía del tamaño y forma que establece la reglamentación.

Tanto las partidas de nacimiento como las informaciones que se tramitarán ante los jueces en lo civil del domicilio del interesado, y donde no los hubiere, ante el respectivo Juzgado de Paz, serán expedidas y tramitadas en papel común, libre de costas y de todo derecho, impuesto o gasto.

Cuando el ciudadano no pudiere obtener la fotografía por no existir talleres fotográficos en el lugar donde se enrolare, la oficina enroladora se la proveerá gratuitamente.

Art. 16. — Las oficinas enroladoras permanecerán abiertas durante los meses de enero y febrero y julio y agosto de cada año, para que se enrolen los ciudadanos que hayan cumplido 18 años o los que, por cualquier causa, no lo hubieren hecho a su debido tiempo.

Durante el período de enrolamiento permanecerán abiertas las oficinas enroladoras, además de los días hábiles el primer y tercer domingo de cada mes.

Libreta de Enrolamiento

Art. 8.° — Cada ciudadano recibirá en el acto de enrolarse, una libreta perforada en la tapa y todas sus hojas, con el número de la matrícula individual.

Las hojas serán numeradas sucesivamente y en una sola de ellas, llevará el retrato del enrolado y se consignarán las constancias especificadas en el artículo 7.° para la ficha militar, excepto en lo referente a las impresiones digitales, pues deberá llevar únicamente la del pulgar derecho del enrolado.

La matrícula llevará numeración sucesiva de modo que, en ningún caso, dos ciudadanos puedan tener el mismo número de enrolamiento.

Art. 10. — La libreta de enrolamiento sin enmiendas ni raspaduras con su foliatura completa, la impresión digital, la firma en su caso y la fotografía del enrolado, constituye un documento de identificación personal, y debe ser exigida por las autoridades nacionales, provinciales y municipales en toda gestión ante las mismas. Sin estos requisitos carecerá de todo valor (1).

(1) Ver artículo 96 de la Ley N.° 8.871 de Elecciones Nacionales, que más adelante se transcribe.

Art. 11. — La edad y el último domicilio anotados en la libreta de enrolamiento son los únicos válidos a los efectos militares y electorales que establezcan las leyes respectivas.

Art. 12. — (Parágrafo 1.°). — Los ciudadanos están obligados a conservar en su poder su libreta de enrolamiento.

CAMBIO DE DOMICILIO

Art. 19. — (Parágrafo 1.°). — El enrolado que haya cambiado de domicilio deberá comunicarlo personalmente bajo su firma, dentro de los siete meses de producido en enero, febrero, julio y agosto, a la oficina enroladora y donde no la hubiere, a la oficina de correos que corresponda a su nuevo domicilio. El jefe de dicha oficina anotará en la libreta de enrolamiento el nuevo domicilio denunciado y lo comunicará, dentro del tercer día, en formularios especiales cuya redacción dispondrá el Poder Ejecutivo, a los distritos militares y a los jueces del nuevo y del anterior domicilio del solicitante. Los distritos militares harán saber dentro de los 8 días de recibida la comunicación, esos cambios a los jueces del nuevo y anterior domicilio del solicitante.

PENALIDADES

Art. 21. — Los ciudadanos que no cumplan con las prescripciones del enrolamiento determinadas en esta ley serán considerados infractores e incorporados a prestar servicio en las filas del ejército permanente por un año, además del tiempo de servicio que les corresponda, si por su edad están comprendidos entre los 19 y 45 años cumplidos, siempre que sean aptos para todo servicio o servicio auxiliar.

Los mayores de 45 años y los menores de 19, los inútiles para todo servicio o servicio auxiliar, serán castigados con prisión de uno a seis meses.

Art. 28. — (Primera parte del parágrafo 2.°). — Los empleados o funcionarios públicos que tengan en su poder libretas de enrolamiento de terceros, sufrirán prisión de uno a tres años e inhabilitación de cinco a diez años.

Art. 40. — (Primera parte). — Los empleados o funcionarios públicos que, por cualquier motivo, retengan las actuales libretas de enrolamiento (1), serán castigados con prisión de uno a tres años e inhabilitación de uno a cinco años.

(1) Esta Ley N.° 11.386 dispuso la realización de un nuevo enrolamiento general obligatorio.

SERVICIO MILITAR

Disposiciones pertinentes de la Ley N.° 4.707, de 28 de septiembre de 1905, sobre obligatoriedad del servicio e instrucción militar para todo argentino.

Artículo 1.° — Todo argentino está obligado al servicio e instrucción militar, de acuerdo con las condiciones de esta ley.

Art. 2.° — La obligación del servicio militar es igual para todos y tiene una duración de veinticinco años. La clase más joven será sorteada íntegramente, atribuyendo a cada uno su número correspondiente. Los que tengan los números más altos servirán en la marina, en la forma que dispongan las leyes vigentes. Los que tengan los doce mil números siguientes serán incorporados por un año al ejército permanente. Esta cantidad podrá ser aumentada si la ley de presupuesto así lo dispusiese.

Las nueve clases siguientes y los de la clase más joven que tengan los números siguientes a los de los incorporados al servicio permanente forman la reserva de dicho ejército permanente; las diez clases siguientes forman la guardia nacional y las cinco últimas la guardia territorial.

Art. 15. — El Poder Ejecutivo, cuando alguna necesidad urgente lo requiera, podrá prorrogar hasta por 3 (tres) meses el licenciamiento de los contigentes incorporados al ejército permanente, y esto aun cuando los nuevos contingentes de la clase siguiente hubiesen ya sido incorporados.

EL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY Y LOS EMPLEOS NACIONALES

Art. 5.° — Nadie será admitido en adelante a desempeñar un puesto en las administraciones dependientes de la Nación, si no justifica haber satisfecho las prescripciones del servicio militar, impuestas por la presente ley.

Art. 62. — Las clases que hayan servido por lo menos 12 (doce) años como tales, después de obtener su baja serán preferidos para llenar las vacantes que se produzcan en las distintas dependencias del Ministerio de Guerra y que puedan ser desempeñadas por ellos, así como otros empleos civiles de la administración nacional, que serán determinados por el Poder Ejecutivo en la reglamentación de esta ley, acumulándose los sueldos que devengan con la pensión proporcional a que tengan derecho.

Art. 63. — Exceptúase del servicio militar:

f) Mientras duran sus funciones y empleos, a los miembros de los poderes públicos de la Nación y de las provincias, a los Gobernadores y Secretarios de los territorios federales.

BENEFICIOS PARA LOS ESTUDIANTES

Art. 8.° — Los estudiantes de las facultades nacionales, los alumnos de las escuelas normales, de los institutos nacionales y de enseñanza profesional superior, podrán presentarse al Ministerio de Guerra dentro de los 3 (tres) meses anteriores al día que cumplan 19 (diez y nueve) años, optando al voluntariado de aspirantes a oficial de reserva y manifestando la fecha en que desean ser llamados a un servicio de 3 (tres) meses, dentro del año anterior o de los 2 (dos) posteriores al llamamiento de su clase.

Terminados los 3 (tres) meses de servicio rendirán examen. Los aspirantes aprobados pasan a la reserva, como tenientes o subtenientes, según su clasificación. Los desaprobados harán el servicio que por el sorteo les haya correspondido.

BENEFICIOS PARA LOS QUE SE EJERCITAN EN EL TIRO DE GUERRA

Art. 9.° — Los ciudadanos de la clase de 20 (veinte) años que deban hacer en el ejército el servicio de 1 (un) año y comprueben haber adquirido en los polígonos de tiro la práctica y precisión que el Poder Ejecutivo determine en la reglamentación que formulará, harán solamente la cuarta parte del tiempo que les haya tocado con arreglo a la presente ley; dicha comprobación se hará en el cuerpo después de la incorporación.

ELECCIONES NACIONALES

Disposiciones pertinentes de la Ley N.° 8.871, de 13 de febrero de 1912, sobre Elecciones Nacionales

Art. 6.° — Todo elector tiene el deber de votar en cuantas elecciones nacionales fueran convocadas en su distrito.

Art. 7.° — Quedan exentos de esta obligación:

1.° Los electores mayores de setenta años;

2.° Los jueces y sus auxiliares que por disposición de esta ley deben asistir a sus oficinas y tenerlas abiertas durante las horas de la elección.

Art. 69. — Está prohibido a los funcionarios públicos imponer a sus subalternos que se afilien a un partido o que voten por candidatos determinados.

Art. 83. — El elector que sin causa legítima dejase de emitir su voto en cualquier elección efectuada en su distrito, será penado:

1.° Con la publicación de su nombre por la Junta Escrutadora respectiva como censura, por haber dejado de cumplir su deber electoral;

2.° Con multa de diez pesos moneda nacional y, en caso de reincidencia inmediata, con el doble de la multa que se le haya impuesto por la infracción anterior.

Art. 84. — No incurrirán en dicha pena los electores analfabetos o los que dejaran de votar por residir a más de diez kilómetros de la mesa o haber tomado nuevo domicilio en otro colegio electoral. Tampoco incurrirán en ella los impedidos por enfermedad, por ausencia fuera del país o por causa justificada dentro del país, o por otro impedimento legítimo debidamente comprobado ante el juez competente.

Art. 96. — Para tomar posesión de todo destino público, será requisito indispensable, en los mayores de diez y ocho años, exhibir su libreta de enrolamiento.

REGISTRO ELECTORAL

Ley N.° 11.387, de diciembre 10 de 1926, sobre Registro Electoral

Artículo 1.° — La Capital de la Nación, cada una de las Provincias y cada uno de los Territorios Nacionales constituirán un distrito electoral.

Los distritos se dividirán en tantas secciones electorales como secciones de justicia nacional existan dentro de sus respectivos perímetros.

Cada sección electoral tendrá un Registro de Electores permanente, en el que deberán figurar todos los ciudadanos enrolados con domicilio denunciado dentro de su jurisdicción.

Artículos pertinentes del decreto de 28 de diciembre de 1926, reglamentario de la Ley N.° 11.387 sobre Registro Electoral

Art. 34. — La libreta de enrolamiento, con todas sus foliaturas completas, es el documento público de identificación personal. Sin perjuicio de las penalidades establecidas en las leyes Nos. 8.871 y 11.387, todo ciudadano argentino o naturalizado está obligado a presentar su libreta de enrolamiento en todos los casos en que las autoridades nacionales o provinciales lo exigieren. Si no obstante la intimación de éstas, la presentación no se llevare a cabo, el hecho deberá ser puesto inmediatamente en conocimiento del Ministerio de Guerra. La devolución de la libreta de enrolamiento deberá hacerse inmediatamente, dejándose constancia escrita del nombre, apellido, clase, matrícula y último domicilio que conste en la libreta.

Art. 35. — Todos los empleados nacionales y obreros que trabajen por cuenta de la Nación que sean ciudadanos argentinos o naturalizados, deberán, bajo pena de seis meses de suspensión en sus empleos, presentar a sus superiores inmediatos, en el día siguiente al de una elección nacional, sus respectivas libretas de enrolamiento para justificar que han cumplido con su deber cívico. La reincidencia será causa suficiente para la destitución.

Los jefes de oficina, sección, etc., darán cuenta a sus superiores, por escrito e inmediatamente, de las omisiones que sus subalternos cometieran, incurriendo ellos mismos en la pena de destitución si no lo hicieren o faltaren a la verdad en sus comunicaciones.

Art. 36. — La misma disposición contenida en el artículo anterior regirá para los empleados nacionales, provinciales y municipales que se encuentren inscriptos en el Registro Electoral Municipal de la Capital de la Nación con arreglo a la Ley N.° 10.240.

Art. 37. — Todo empleado nacional, provincial o municipal y los obreros que trabajen por cuenta de la Nación, argentinos o naturalizados, están obligados a presentar sus respectivas libretas de enrolamiento al jefe inmediato, en el mismo momento de hacerse cargo del empleo. Los jefes superiores deberán examinar minuciosamente cada libreta de enrolamiento para constatar si el empleado

ha cumplido anteriormente con su deber cívico y si no ha dejado de cumplir con la obligación que le impone el artículo 19 de la Ley N.° 11.386 sobre cambio de domicilio.

Los jefes de oficina, sección, etc., deberán dejar constancia escrita de haber cumplido en cada caso con esta disposición y anotarán las observaciones pertinentes que elevarán de inmediato a sus superiores. La falta de cumplimiento de esta disposición hará pasible a los jefes de oficina, sección, etc., de la pena de destitución, como igualmente si se comprobara que la constancia ha sido dada en una forma falsa o capciosa.

Art. 43. — Los directores de establecimientos de enseñanza normal y especial y los de las universidades y facultades de la Nación, deberán enviar a los jueces federales cada año, al final de los cursos, una lista con el apellido y nombre, número de matrícula, clase militar y último domicilio de cada ciudadano argentino o naturalizado, que haya sido graduado, con indicación del título que se le ha otorgado.

Otras Leyes de Carácter General, aplicables dentro de la Administración de la Enseñanza Media

OTRAS LEYES (1)

Embargos de sueldos

Ley N.° 9.511, de 29 de septiembre de 1914, sobre embargabilidad de sueldos mayores de cien pesos

Artículo 1.° — No son susceptibles de embargo, ni pueden ser embargados, ni afectados a terceros por derecho alguno, los salarios, sueldos, jubilaciones y pensiones que no excedan de cien pesos mensuales.

Art. 2.° — Los salarios, sueldos, jubilaciones y pensiones que excedan de cien pesos, sólo podrán embargarse en la proporción que establece la siguiente escala, aun en el caso de que se compruebe transferencia o constitución de derechos de su íntegro valor:

a) De ciento uno a ciento cincuenta pesos, hasta el cinco por ciento del importe mensual;

b) De ciento cincuenta y uno a doscientos pesos, hasta el diez por ciento del importe mensual;

c) De doscientos uno a trescientos pesos, hasta el quince por ciento del importe mensual;

d) De trescientos uno a quinientos pesos, hasta el veinte por ciento del importe mensual;

e) De más de quinientos pesos, el veinticinco por ciento del importe mensual.

Art. 3.° — La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles podrá invertir hasta la mitad de su capital en descuentos a los empleados, que serán acordados al ocho por ciento de interés anual y amortización acumulativa de uno, dos y tres por ciento mensual, según que el empleado tenga más de quince, diez o cinco años de servicios, respectivamente, dentro de una suma que no podrá exce-

(1) En el Libro III de esta obra (Organización Administrativa), se transcriben disposiciones legales y reglamentarias sobre impuestos de sellos y a los réditos.

der del importe del cincuenta por ciento del total de los descuentos acumulados por cada uno de los solicitantes, a los efectos de la ley de Jubilaciones y Pensiones y en anticipos de un mes de sueldo, cancelables a la expiración del mismo, con el interés expresado, los que serán acordados a los que tengan más de un año de servicios.

Para las operaciones que autoriza esta ley, la Contaduría de la Caja expedirá los certificados correspondientes sobre los años de servicios y sueldo del empleado solicitante, y la Presidencia de la Caja remitirá a la Contaduría General de la Nación las planillas mensuales de los descuentos a hacerse en los sueldos del personal. Las operaciones de la Caja están exentas del pago de impuesto.

Art. 4.° — No son aplicables los artículos 1.° y 2.° de esta ley, a los casos relativos a créditos por pensiones alimenticias, *litis expensas* y a los que provengan de las operaciones con la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones.

Art. 5.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Resolución Ministerial, de 23 de enero de 1939, estableciendo que corresponde al Subsecretario de Justicia e Instrucción Pública entender en el diligenciamiento de los oficios relacionados con embargos en el sueldo de empleados del Ministerio.

Buenos Aires, 23 de enero de 1939.

Vistos: Atento a que la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Comercial ha resuelto, «conforme a lo dictaminado por el señor Fiscal» que carece de atribuciones para modificar el procedimiento que los señores Jueces siguen para ordenar el cumplimiento de embargos decretados sobre el sueldo de empleados de la Administración Nacional; con el propósito de abreviar el trámite para el cumplimiento de la orden,

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública—

RESUELVE:

Corresponde al señor Subsecretario entender en el diligenciamiento de los oficios relacionados con embargos en el sueldo de los empleados de este Ministerio; con facultad para adoptar las medidas conducentes a su rápido trámite y cumplimiento.

Comuníquese, anótese y archívese.

COLL.

Circular N.° 17 de la Dirección General de Administración, de 8 de octubre de 1941, transcribiendo el Acuerdo de 14 de febrero de 1931, sobre trámite de expedientes relativos a embargos de sueldos del Personal de la Administración Nacional.

Buenos Aires, 8 de octubre de 1941.

A fin de evitar las repetidas consultas en el trámite de expedientes relativos a embargos sobre los sueldos de empleados que forman parte del personal de este Departamento y para que esa dependencia se ajuste estrictamente a sus disposiciones, cúmpleme dirigirme a Ud. recordándole el decreto dado en Acuerdo de Ministros con fecha 14 de febrero de 1931, que transcribo para su mejor ilustración, llamándole especialmente la atención sobre el contenido de su artículo 4.°.

El aludido decreto dice así:

Buenos Aires, 14 de febrero de 1931.

CONSIDERANDO:

Que los procedimientos que se siguen en la Administración Nacional para el trámite y diligenciamiento de las órdenes judiciales de embargos sobre los sueldos del personal de la misma, comportan la realización de trabajos innecesarios, aparte de la demora que significan para el pronto cumplimiento de esos mandatos judiciales; Que conviene modificar y simplificar tales procedimientos, con las ventajas consiguientes en la economía de los servicios administrativos; Que la práctica ha demostrado los inconvenientes de la disposición del Acuerdo de Ministros de 2 de diciembre de 1896, que ordena que los embargos se hagan efectivos por intermedio de la Contaduría General de la Nación; lo que centraliza en dicha repartición un considerable movimiento de expedientes y comunicaciones, informes, etc., sin lograrse por ello el contralor que la misma puede obtener por otros medios más simples y eficaces; Que la responsabilidad y el contralor relativo a la corrección en los pagos de haberes del personal, es una función propia de cada administración o caja pagadora; Que otra práctica que acarrea serios inconvenientes a la regularidad y simplificación de los servicios administrativos y su contralor, es la de entregarse directamente por las reparticiones o habilitados pagadores, las sumas descontadas por embargo, a determinadas personas; Por estas consideraciones,

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros—

DECRETA:

Artículo 1.° — Déjase sin efecto lo dispuesto en el Acuerdo de Ministros de 2 de diciembre de 1896, que dispone que los embargos de sueldos, pensiones, etc., se comuniquen a la Contaduría General de la Nación para que ésta ordene su cumplimiento por los habilitados respectivos.

Art. 2.° — En lo sucesivo, los oficios de embargos de sueldos, etc., serán remitidos al Ministerio de cuyo personal forme parte el embargado; y cada Ministerio lo pasará directamente para su cumplimiento a la repartición, dependencia o habilitado que corresponda.

Art. 3.° — Las reparticiones o habilitados por cuyo intermedio se abonan los haberes del demandado se ajustarán estrictamente al siguiente procedimiento:

a) Conservarán debidamente archivados los oficios que se les remitan;
b) Efectuarán los descuentos correspondientes; y dentro de un plazo máximo de diez días a partir de la terminación de los pagos mensuales, depositarán las sumas descontadas en el Banco de la Nación a la orden del Juez Oficiante y como perteneciente al juicio respectivo. El depósito bancario de los documentos, lo practicarán sin excepción alguna, no obstante cualquier solicitación en contrario que contengan los oficios respectivos;
c) Llevarán en un libro auxiliar la cuenta corriente de cada embargo, consignando los datos referentes a los descuentos depositados;
d) Harán efectivos los embargos siguiendo el orden de recepción cronológica de los oficios que los ordenan;
e) Cuidarán de que los empleados embargados extiendan sus recibos de sueldos por el líquido que realmente perciban; y en sus rendiciones de cuentas completarán los recibos del personal embargado agregando la boleta bancaria del depósito efectuado a la orden del juez respectivo;
f) En los arqueos de caja o intervenciones que se realicen en sus tesorerías o habilitaciones por sus superiores o por los contadores fiscales de la Contaduría General de la Nación, justificarán con los oficios en su poder que los descuentos realizados se han efectuado en virtud de las órdenes judiciales pertinentes.

Art. 4.° — La demora o falta de cumplimiento por parte de los habilitados a cualquiera de las obligaciones determinadas en el artículo anterior, será penada con la destitución del empleado.

Art. 5.° — Tómese nota, publíquese y hágase saber por intermedio de cada Departamento y pase a la Contaduría General de la Nación para su conocimiento.

URIBURU. — ENRIQUE S. PÉREZ. — M. G. SÁNCHEZ SORONDO. — OCTAVIO S. PICO. — FRANCISCO MEDINA. — A. RENARD. — HORACIO BÉCCAR VARELA. — ERNESTO BOSCH.

Saludo a Ud. atentamente.

LUIS RICCI.
Director General de Administración.

FIANZAS

Artículo 92 de la Ley N.° 428, de Contabilidad, sobre fianza de los funcionarios y empleados que, por sus tareas, deban intervenir en el manejo de fondos o especies.

Art. 92. — Los agentes del Tesoro Público, así como los encargados de la guarda, conservación o empleo de los efectos o especies pertenecientes a la Nación, antes de entrar al ejercicio de sus funciones, prestarán juramento ante quien designe el Poder Ejecutivo, de desempeñarlo fiel y lealmente, y darán fianza para responder a los cargos que contra ellos resulte de su administración.

La fianza será a satisfacción del Poder Ejecutivo, quien determinará por una medida general, la que debe prestar cada uno de aquellos empleados, tomando por base las circunstancias de su administración y de que esa obligación sea lo menos gravosa posible al responsable.

Acuerdo, de 30 de enero de 1934, reglamentario del artículo 92 de la Ley de Contabilidad

Buenos Aires, 30 de enero de 1934.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 92 de la Ley N.° 428 dispone que los agentes del Tesoro Público, así como los encargados de la guarda, conservación o empleo de los efectos o especies pertenecientes a la Nación, antes de entrar al ejercicio de sus funciones darán fianza para responder a los cargos que contra ellos resulte de su administración; y

Que si bien la fianza deberá ser a satisfacción del Poder Ejecutivo, éste deberá tomar como base las circunstancias de su administración, tratando de que esa obligación sea lo menos gravosa posible al responsable; y

Siendo conveniente reglamentar esta disposición a efectos de hacer extensiva la exigencia de la fianza en la forma que lo requiere la ley aludida;

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros—

DECRETA:

Artículo 1.° — Todos los Ministerios adoptarán las medidas necesarias para que todos los funcionarios y empleados de cualquier categoría que fueran, que tuvieran a su cargo en forma permanente, accidental, en comisión (artículo 92, Ley N.° 428) o como adscriptos, la recepción, manejo, custodia o traslado de fondos o pertenencia de cualquier especie de la Nación, como «responsables», «habilitados» o «encargados», deberán prestar fianza a satisfacción que garantice la integridad del patrimonio que le hubiere sido confiado. Dicha formalidad deberá quedar cumplimentada dentro de los seis meses, a partir de la fecha, en las condiciones de este acuerdo. En lo sucesivo todo empleado nuevo deberá llenar este requisito; en caso contrario, no podrá ser admitido en su empleo hasta tanto proceda de conformidad.

Art. 2.° — El monto de la fianza, se regulará en la siguiente forma:

a) Para fondos (títulos o efectivo):

1.°	Hasta 5.000 $ m/n., movimiento anual, fianza	500
2.°	Hasta 100.000 $ m/n., movimiento anual, fianza	5.000
3.°	Más de 100.000 $ m/n., movimiento anual, fianza	10.000

b) Para especies:

1.°	Si el valor que puede considerarse máximo en depósito o custodia, en el momento de mayor acumulación, es inferior a 10.000 $ m/n., la fianza será de ..	500
2.°	Id. íd. Inferior a 20.000 $ m/n., la fianza será de ..	2.000
3.°	Id. íd., inferior a 30.000 $ m/n., la fianza será de ..	4.000
4.°	Id. íd., inferior a 40.000 $ m/n., la fianza será de ..	6.000
5.°	Id. íd., inferior a 50.000 $ m/n., la fianza será de ..	8.000
6.°	Id. íd., inferior a 100.000 $ m/n., la fianza será de ..	10.000

c) Para funcionarios en comisión, viáticos, «cajas chicas» o similares:

Se aplicará la escala del punto a) si se trata de importes superiores a 5.000 $ m/n y de no alcanzar a esta cifra el total del importe a administrarse presumiblemente en el año. Nunca la fianza puede ser superior al movimiento anual a garantizarse o al «stock» máximo de especies.

Art. 3.° — (Modificado por Acuerdo de fecha 30 de marzo de 1936) (1).

Art. 4.° — Las garantías deberán ser otorgadas, respondiendo a los bienes que maneje el empleado, aun cuando se cambie la designación del mismo o se le cambie de destino. Así se dejará establecido taxativamente en las fianzas y sin perjuicio de que cada Ministerio pueda avisar al fiador del cambio de destino, denominación o empleo.

Art. 5.° — La garantía de un tercero, podrá ser suplida por un valor equivalente al valor nominal de fondos públicos nacionales o cédulas del Banco Hipotecario Nacional depositadas en el Banco de la Nación Argentina a la orden de los Ministerios, o por la afectación de un bien raíz, sin interés; corriendo en tal caso todos los gastos por cuenta del funcionario o empleado, propietario único del inmueble. Para aceptarse garantía en estas condiciones se requerirá el informe de las direcciones de administración y reparticiones respectivas, y la intervención del Registro de la Propiedad cuando corresponda.

Art. 6.° — Se abrirá un libro de fianzas, que estará a cargo de cada Dirección de Admistración o Repartición pertinente, donde se llevará la cuenta personal de cada empleado o funcionario afectado por este acuerdo. En las subsecretarías de los Ministerios con las seguridades del caso, se conservarán las fichas por duplicado, con las firmas auténticas de los garantes.

Art. 7.° — Los documentos de fianzas personales deberán ser presentados por los interesados a las reparticiones de quien dependan y con intervención de las direcciones de administración y serán aceptados en definitiva por resolución de los respectivos secretarios de Estado. Tales documentos irán acompañados de los elementos que se estimen del caso para certificar la identidad, autenticidad de firma y solvencia del fiador y los jefes informarán concretamente al respecto.

Art. 8.° — Las fianzas personales tendrán una duración máxima de diez (10) años, y serán renovadas al expirar dicho término, debiéndose verificar periódicamente la situación de los garantes. En caso de insolvencia, incapacidad o muerte del fiador, será obligación del afianzado poner en conocimiento de su superior jerár-

(1) Ver página 615.

quico tales circunstancias, el cual deberá dar cuenta a la Dirección de Administración o Subsecretaría en su caso, las que exigirán del empleado la presentación de una nueva garantía dentro del plazo determinado en el artículo 1.º y en las condiciones que se especifican en el presente decreto.

Art. 9.º — De acuerdo a la reglamentación orgánica de la Ley N.º 4.712 (Ley Consular), los funcionarios consulares rentados otorgarán a favor y a satisfacción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y ante el mismo, fianza personal o real por una suma equivalente al importe de un año de sus sueldos respectivos. Los que sean ascendidos, otorgarán la fianza ante la Legación Argentina, acreditada en el país de su residencia o ante la Oficina Consular que el Ministerio designe, por razón de la distancia u otras causas. Este requisito se considera indispensable para poder entrar en el ejercicio de las funciones.

Art. 10. — Estarán comprendidos en estas disposiciones los funcionarios que reglamentariamente perciben emolumentos por anticipado, los que reciban viáticos y los titulares de «cajas chicas».

Art. 11. — Apruébase el adjunto modelo de formulario de acuerdo al cual deberán ser extendidas las fianzas que se otorguen, en virtud de lo ordenado en el presente decreto.

Art. 12. — El funcionario o empleado que no cumpliera con estas disposiciones o no le fuera aceptada la fianza que dentro del término expuesto presentare, será pasible de suspensión y pérdida de empleo sucesivamente.

Art. 13. — La Contaduría General de la Nación, vigilará el debido cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente decreto.

Art. 14. — Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Oficial y dése al Registro Nacional.

JUSTO. — Federico Pinedo. — Leopoldo Melo. — M. R. Alvarado. — M. A. Rodríguez. — M. de Iriondo. — Luis Duhau. — Carlos Saavedra Lamas.

Acuerdo, de 26 de marzo de 1936, disponiendo que los empleados que prestan servicios en una dependencia no podrán otorgar fianzas a favor de otros de la misma.

Buenos Aires, 26 de marzo de 1936.

Vistas estas actuaciones en las cuales se solicita se aclare las disposiciones contenidas en el decreto N.° 35.552 dictado en Acuerdo de Ministros de fecha 30 de enero de 1934 sobre fianzas, estableciéndose que un empleado nacional no puede ser fiador de otro que preste servicios en la misma dependencia de aquél; atento lo actuado, y

CONSIDERANDO:

Que por razones de conveniencia administrativa, es pertinente aceptar el temperamento propuesto.

Por lo expuesto y de conformidad con lo manifestado por la Contaduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros—

DECRETA:

Artículo 1.° — Los empleados que presten servicios en una dependencia no podrán otorgar la fianza que determina el decreto N.° 35.552 dictado en Acuerdo de Ministros con fecha 30 de enero de 1934, a favor de otros de la misma.

Art. 2.° — Tómese nota en la Dirección de Administración del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese, etc.

JUSTO. — R. M. ORTIZ. — E. VIDELA. — M. R. ALVARADO. — M. A. CÁRCANO.

Acuerdo, de 30 de marzo de 1936, estableciendo que los funcionarios responsables del manejo de fondos y especies, prestarán una sola fianza.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1936.

Visto que el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, propicia la sugestión que formula la Dirección de Administración de ese Departamento, tendiente a modificar el artículo 3.° del Acuerdo N.° 35.552 P. 7 M. de H., de fecha 30 de enero de 1934, sobre otorgamiento de fianzas; atento lo actuado, y

CONSIDERANDO:

Que al disponer el mencionado artículo del referido Acuerdo, que los funcionarios que sean responsables de fondos y especies, simultáneamente, sufrirán la acumulación de las garantías que el artículo 2.° del mismo Acuerdo, regula para ambos casos, ha ocasionado, además de resultarles gravoso esta medida, serios inconvenientes y dificultades a la casi totalidad del personal que, por tal circunstancia, hállase afectado;

Que estos inconvenientes pueden ser subsanados teniendo en cuenta los resultados prácticos que se han obtenido por las nuevas normas que en la actualidad rigen por las cuales, los responsables para la percepción y expedición de los caudales públicos, no manejan dinero en efectivo por haberse implantado que toda extracción o pago que menester sea efectuar, se realizará mediante la expedición de cheques y giros a la orden conjunta de dos funcionarios;

Que, no obstante esto por el tenor con que está confeccionado el formulario que fué aprobado por el mismo Acuerdo para el otorgamiento de las fianzas requeridas, éstas por tal circunstancia, responden por igual por cualquier perjuicio que se ocasione al Estado por el mal desempeño de las funciones que ejerza el afianzado en la vigilancia y manejo de los fondos y especies, sometidos a su custodia y por tal motivo y por razón de su concordancia, llénanse con amplitud las exigencias del artículo 92 de la Ley N.° 428 de Contabilidad;

Por lo expuesto y de conformidad con lo manifestado por la Contaduría General de la Nación y lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros—

DECRETA:

Artículo 1.° — Modifícase el artículo 3.° del Acuerdo número 35.552 P. 7 M. de H., de fecha 30 de enero de 1934, en la siguiente forma: «Los funcionarios que sean responsables de fondos y especies en custodia simultáneamente, prestarán una sola fianza para garantizar la integridad de los patrimonios que les son confiados en ambas situaciones, y siempre que la responsabilidad sea conjunta con dos o más funcionarios, que los pagos se efectúen mediante la expedición de cheques a la orden, y el manejo de especies no está confiado reglamentariamente a un funcionario especial».

Art. 2.° — Tómese nota en la Dirección de Administración del Ministerio de Hacienda, comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Oficial y dése al Registro Nacional.

JUSTO. — R. M. ORTIZ. — M. R. ALVARADO.
M. A. CÁRCANO. — E. VIDELA.

Acuerdo, de 15 de diciembre de 1937, estableciendo que la devolución de los documentos de fianza debe hacerse una vez operada la prescripción de los mismos y no antes.

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1937.

Vistas estas actuaciones promovidas con motivo de la devolución de los documentos de fianzas, otorgadas de conformidad con lo dispuesto por decreto N.° 35.552 dictado en Acuerdo de Ministros con fecha 30 de enero de 1934, en los casos de renovación de las mismas o cuando el afianzado cese en sus funciones por cualquier causa; atento lo actuado, y

CONSIDERANDO:

Que subsistiendo la responsabilidad legal del fiador por las obligaciones que ha contraído por su afianzado, es pertinente que el Estado en resguardo de sus intereses, retenga dicho documento hasta tanto se haya prescripto.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro y lo manifestado por la Contaduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros—

DECRETA:

Artículo 1.° — Establécese que los documentos de fianza otorgados de conformidad con lo dispuesto en el decreto N.° 35.552 dictado en Acuerdo de Ministros con fecha 30 de enero de 1934, no

podrán ser devueltos a los interesados hasta que no se haya operado la prescripción legal de los mismos.

Art. 2.° — Tómese nota en la Dirección de Administración del Ministerio de Hacienda, publíquese, comuníquese, etc.

JUSTO. — CARLOS A. ACEVEDO. — BASILIO B. PERTINÉ. — M. A. CÁRCANO. — M. R. ALVARADO.

Acuerdo, de 23 de enero de 1939, admitiendo el otorgamiento de seguros en calidad de fianza

Buenos Aires, 23 de enero de 1939.

Visto este expediente, por el cual la Administración General de los Ferrocarriles del Estado propicia la adopción de los Seguros de Fidelidad, a fin de que los empleados puedan dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el decreto N.° 35.552, de fecha 30 de enero de 1934, sobre fianzas; atento lo actuado, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 5.° del mencionado decreto establece que la garantía de un tercero puede ser suplida por el depósito de un valor equivalente de fondos públicos nacionales o cédulas del Banco Hipotecario Nacional o por la afectación de un bien raíz sin interés;

Que para los casos en que los empleados, por diversas circunstancias, no pueden otorgar la fianza en las condiciones que determina el artículo precedentemente citado, no existe inconveniente en que dicho acto pueda ser cumplido mediante un Seguro de Fidelidad constituído por la contratación de un seguro en una compañía de reconocida responsabilidad que cubra los riesgos a que se refiere el decreto N.° 35.552;

Que la medida que se propicia debe adoptarse con un carácter general, pues los inconvenientes que afectan al personal de los Ferrocarriles del Estado pueden presentarse para los demás,

Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el

señor Procurador del Tesoro y lo manifestado por la Contaduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros—

DECRETA:

Artículo 1.° — Amplíase el artículo 5.° del decreto N.° 35.552, dictado en Acuerdo de Ministros con fecha 30 de enero de 1934, en el sentido de que además de las fianzas que en el mismo se determina, dicho requisito puede ser llenado mediante la contratación de un seguro en una compañía de reconocida responsabilidad que cubra los riesgos a que se refiere el decreto arriba citado, debiendo las primas del seguro ser abonadas por los empleados asegurados.

Art. 2.° — Tómese nota en la Dirección de Administración del Ministerio de Hacienda, comuníquese, etc.

ORTIZ. — P. Groppo. — J. M. Cantilo. — J. E. Coll. — J. Padilla. — M. R. Alvarado.

CIRCULARES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA SOBRE FIANZAS.

Circular N.° 10, de 13 de abril de 1939, comunicando su resolución de esta fecha, relativa a la verificación, por los Jefes de dependencias del Departamento, de la situación de los garantes del personal a sus órdenes, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo de Ministros de fecha 30 de enero de 1934.

Buenos Aires, 13 de abril de 1939.

Señor .....

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiéndole para su conocimiento y demás efectos la siguiente Resolución:

Visto que el Acuerdo de Ministros de fecha 30 de enero de 1934, por el artículo 8.°, establece la obligación de verificar periódicamente la situación de los garantes y por el artículo 7.° dispone que los señores Jefes de Dependencias informarán concretamente sobre la solvencia de los mismos;

El Director General de Administración—

RESUELVE:

1.° — Los señores Jefes de Dependencias del Departamento procederán a verificar la situación de los garantes del personal a sus órdenes que tuviesen presentada su respectiva fianza.

La verificación correspondiente a la fianza del Jefe será certificada por el funcionario que le sigue en orden de categoría. Las verificaciones se efectuarán en la forma siguiente:

a) Para el fiador Profesional, con el título que lo acredita, sin perjuicio de las otras referencias que el mismo fiador considere conveniente proporcionar para mejor información al Ministerio o de las que los señores Jefes juzguen necesarias para su informe a la Dirección de Administración;
b) Para el fiador Propietario, con el título correspodiente a la propiedad por la cual constituyó su garantía, verificando el valor de la misma y los gravámenes que puedan existir;
c) Para el fiador Comerciante o Industrial:

1.º Si es propietario único, se le solicitará indique donde se puede pedir referencias sobre su solvencia (Casas de Comercio, Instituciones Bancarias, etc.);

2.º Si forma parte de sociedad además de lo informado anteriormente el contrato social, verificando en base del mismo, los datos declarados y si no existen cláusulas que se opongan al otorgamiento de fianzas.

Los señores Jefes procederán a verificar los datos proporcionados, salvo que, por tratarse de comerciantes o industriales residentes en la localidad, tengan sus referencias y conceptos que conformen lo manifestado.

2.º — Para las fianzas reales (Hipotecas, Depósitos de Títulos o Efectivo a la orden del Ministerio) solamente se dejará constancia por los interesados que se mantiene esa situación.

3.º — Cuando el fiador no esté domiciliado en esa localidad y por esa causa no fuera posible efectuar la verificación dispuesta, el señor Jefe se servirá indicar el punto de residencia del mismo, a fin de recabar del establecimiento más cercano a esa localidad, el cumplimiento de ese requisito.

En este caso esta Dirección hará a usted saber para que se le comunique al garante por intermedio del afianzado donde debe presentarse a fin de cumplimentar lo establecido.

4.º — Las verificaciones dispuestas se harán en los formularios que se acompañan y se llenarán por duplicado, reservándose éste para el archivo del establecimiento.

5.º — No será necesario verificar las fianzas presentadas durante el año en curso.

6.º — Cumplidas las formalidades de la verificación, serán remitidas las fichas, bajo pieza certificada, a la Dirección de Administración, Sección Fianzas, calle Las Heras 2587, Buenos Aires, estableciéndose como último plazo para ello el día 31 de mayo próximo.

7.º — Por intermedio de la Sección Fianzas, se comunicará a los señores Jefes la nómina respectiva del personal que tenga fianza presentada y se remitirán las fichas, en base a las categorías de los garantes.

8.º — Comuníquese por circular y fecho pase a la Sección Fianzas a sus efectos.

Saludo a usted muy atentamente.

LUIS RICCI.
Director General de Administración.

Circular N.º 12, de 28 de abril de 1939, comunicando nuevas disposiciones de la Dirección General de Administración sobre fianzas del personal del Ministerio.

Señor .....

Ampliando las disposiciones contenidas en la resolución de esta Dirección General de fecha 13 del corriente relativa a fianzas, comunicada a esa dependencia por circular N.º 10 de la misma fecha,

llevo a su conocimiento que la firma de los señores Jefes de Dependencias puesta al pie de las fianzas y de verificación de las mismas, será considerada por este Departamento como su conformidad no sólo a los datos declarados por los garantes en las respectivas fichas, sino también a los antecedentes o informaciones que han realizado para establecer la situación de solvencia o responsabilidad pecuniaria y moral de esos garantes, por todo lo cual aconsejan su aceptación por el Departamento.

A este efecto, los señores Jefes de Dependencias o quienes los sustituyan en el caso previsto en la Circular N.° 10, deberán consignar en las fichas, en forma expresa y manuscrita, la siguiente nota que colocarán precediendo a su firma:

«Certificado de acuerdo a las disposiciones establecidas en circulares Nros. 10 y 12 de fechas 10 y 28 de abril de 1939».

En caso contrario, si tales informaciones o antecedentes no fuesen satisfactorios, a su juicio, deberán los señores Jefes llevarlo de inmediato a conocimiento de esta Dirección por nota confidencial y reservada, expresando al dorso de la ficha que por nota por separado se informa reservadamente sobre el garante.

Saluda a usted con toda consideración.

LUIS RICCI.
Director General de Administración.

Circular N.° 20, de 10 de agosto de 1939, reiterando la comunicación de Resoluciones Ministeriales sobre la fianza, establecida obligatoriamente por el Acuerdo General de Ministros del 30 de enero de 1934, para todo funcionario o empleado que por sus tareas deba intervenir en el manejo de fondos o especies.

Buenos Aires, 10 de agosto de 1939.

Señor .....

Para su conocimiento y demás efectos transcribo a usted la siguiente resolución:

Visto que la Dirección General de Administración da cuenta que en diversas oportunidades no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por Resolución Ministerial de fecha 12 de abril de 1935 por la que se establecía que

todo funcionario o empleado designado para prestar servicios en este Ministerio a partir de esa fecha, y que por sus funciones deba intervenir en el manejo de fondos o especies, no podrá hacerse cargo de su puesto sin antes haber presentado la fianza establecida por el Acuerdo de Ministros del 30 de enero de 1934;

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública—

RESUELVE:

1.° Reitérese el estricto cumplimiento de la Resolución citada, a cuyo fin la Dirección General de Administración hará saber a todos los establecimientos y reparticiones lo precedentemente expuesto.

2.° Pase a la Dirección General de Administración a sus efectos.

COLL.

Buenos Aires, 12 de abril de 1935.

Visto que el Acuerdo General de Ministros del 30 de enero de 1934, reglamentario del artículo 92 de la Ley 428, establece que en lo sucesivo todo empleado que ingrese a la Administración Nacional deberá llenar el requisito de la fianza y en caso contrario no podrá ser admitido en el empleo hasta tanto proceda de conformidad, así como también que es obligación de los actuales afianzados comunicar los casos de insolvencia, incapacidad o muerte de los fiadores; y,

CONSIDERANDO:

Que es conveniente determinar la forma en que se dará cumplimiento y controlará las mencionadas disposiciones, a fin de establecer las responsabilidades que la falta de observancia diere lugar,

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública—

RESUELVE:

1.° Todo funcionario o empleado designado a partir de la fecha, para prestar servicio en este Ministerio, que por sus funciones deba intervenir en el manejo de fondos o especies, no podrá hacerse cargo de su puesto sin antes haber presentado la fianza establecida por el Acuerdo General de Ministros del 30 de enero de 1934.

2.° Los funcionarios o empleados a cargo en ese momento de reparticiones o establecimientos no darán posesión de sus puestos al personal a que se refiere el apartado anterior, si no han llenado el requisito que en el mismo se establece.

3.° Los funcionarios o empleados que den posesión al personal que ingrese a la Administración, deberán comunicarlo telegráficamente a la Dirección de Administración del Ministerio y remitir a la misma, las correspondientes fianzas a los efectos de su consideración, así como también en los casos de no darse posesión, por no haberse llenado los requisitos indicados.

4.° De inmediato que los afianzados tengan conocimiento de insolvencia, incapacidad o muerte del fiador, deberán hacerlo saber a sus superiores jerárquicos, y éstos a la Dirección de Administración, a los fines que correspondan.

5.° Comuníquese, hágase saber por circular a las reparticiones y establecimientos, y hecho, archívese.

IRIONDO.

Saludo a usted muy atentamente.

LUIS RICCI.
Director General de Administración.

PRESTAMOS HIPOTECARIOS A LOS EMPLEADOS NACIONALES PARA LA ADQUISICION DE LA VIVIENDA PROPIA

Artículo 2.°, inciso 2.° apartado h) de la Ley N.° 10.676, de 22 de septiembre de 1919, sobre préstamos hipotecarios a los empleados permanentes de la Administración Nacional, para la edificación de la vivienda propia.

Art. 2.° — Las operaciones del Banco (Hipotecario) serán:

.....

Inciso 2.° — Acordar préstamos hipotecarios en cédulas dentro de las condiciones establecidas para cada caso por la presente ley y de acuerdo con los reglamentos del Banco:

.....

h) A los empleados nacionales permanentes de la Administración, con 10 años de servicios, para la adquisición de casas y terrenos destinados a edificarse de inmediato, pudiendo entregar dichos préstamos por cuotas y reservarse un tanto por ciento que entregará una vez concluída la edificación, con la condición expresa de que sean destinados a viviendas de los mismos y respectivas familias y sin otras garantías.

Estos préstamos se harán hasta el 80 por ciento del valor de tasación y se cancelarán por cuotas que el Poder Ejecutivo descontará de los haberes de los empleados que se acojan a este beneficio y transferirá al Banco Hipotecario Nacional, mientras el empleado perciba sueldo o jubilación del erario, procediéndose en caso de falta de cumplimiento, de acuerdo con las reglas ordinarias que rigen los préstamos del Banco.

JORNADA LEGAL DE TRABAJO

Ley N.° 11.544, de 12 de septiembre de 1929, sobre jornada legal de trabajo

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de—

LEY:

Artículo 1.° — La duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persiga fines de lucro.

No están comprendidos en las disposiciones de esta ley los trabajos agrícolas, ganaderos y los del servicio doméstico, ni los establecimientos en que trabajen solamente miembros de la familia del jefe, dueño, empresario, gerente, director o habilitado principal.

Art. 2.° — La jornada de trabajo nocturno no podrá exceder de siete horas, entendiéndose como tal la comprendida entre las veintiuna y las seis horas. Cuando el trabajo deba realizarse en lugares insalubres en los cuales la viciación del aire o su compresión, emanaciones o polvos tóxicos permanentes, pongan en peligro la salud de los obreros ocupados, la duración del trabajo no excederá de seis horas diarias o treinta y seis semanales. El Poder Ejecutivo determinará, sea directamente o a solicitud de parte interesada y previo informe de las reparticiones técnicas que correspondan, los casos en que regirá la jornada de seis horas.

Art. 3.° — En las explotaciones comprendidas en el art. 1.° se admiten las siguientes excepciones:

a) Cuando se trate de empleos de dirección o vigilancia;

b) Cuando los trabajos se efectúen por equipos, la duración del trabajo podrá ser prolongada más allá de las ocho horas por día y de cuarenta y ocho semanales, a condición de que el término medio de las horas de trabajo sobre un período de tres semanas a lo menos, no exceda de ocho horas por día o de cuarenta y ocho horas semanales;

c) En caso de accidente ocurrido o inminente, o en caso de trabajo de urgencia a efectuarse en las máquinas, herramientas o instalaciones, o en caso de fuerza mayor, pero tan sólo en la medida necesaria para evitar que un inconveniente serio ocurra en la marcha regular del establecimiento y únicamente cuando el trabajo no pueda ser efectuado durante la jornada normal, debiendo comunicarse el hecho de inmediato a las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la presente ley.

Art. 4.° — Los reglamentos del Poder Ejecutivo pueden fijar por industria, comercio y oficio y por región:

a) Las excepciones permanentes admisibles para los trabajos preparatorios o complementarios que deban necesariamente ser ejecutados fuera del límite asignado al trabajo general del establecimiento o para ciertas categorías de personas cuyo trabajo sea especialmente intermitente;

b) Las excepciones temporarias admisibles para permitir a las empresas hacer frente a las demandas extraordinarias de trabajo.

Para acordar estas autorizaciones se tendrá en cuenta el grado de desocupación existente.

Art. 5.° — Todas las reglamentaciones y excepciones deben hacerse previa consulta a las respectivas organizaciones patronales y obreras y en ellas se determinará el número máximo de horas suplementarias que ha de autorizarse en cada caso.

El tipo de salario para esas horas suplementarias será aumentado por lo menos en un 50 % en relación al salario normal y en un 100 % cuando se trate de días feriados.

Art. 6.° — Para facilitar la aplicación de esta ley cada patrón deberá:

a) Hacer conocer por medio de avisos colocados en lugares visibles en su establecimiento o en cualquier otro sitio conveniente, las horas en que comienza y termina el trabajo, o si el trabajo se efectúa por equipos. Las horas en que comienza y termina la tarea de cada equipo, serán fijadas de tal modo que no excedan los límites prescriptos en la presente ley, y una vez modificadas, regirán en esa forma, no pudiendo modificarse sin nueva comunicación hecha con la anticipación que determine el Poder Ejecutivo;

b) Hacer conocer de la misma manera los descansos acordados durante la jornada de trabajo y que no se computan en ella;

c) Inscribir en un registro todas las horas suplementarias de trabajo hechas efectivas a mérito de lo dispuesto por los artículos 3.°, 4.° y 5.° de esta ley.

Art. 7.° — Las prescripciones de esta ley pueden ser suspendidas total o parcialmente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional en caso de guerra o circunstancias que impliquen un peligro inminente para la seguridad pública.

Art. 8.° — Las infracciones a las prescripciones de esta ley serán reprimidas con multas de diez a cincuenta pesos por cada persona objeto de una infracción, cuyo producido se destinará a los fondos de instrucción primaria nacional o provincial según el caso.

Art. 9.° — Son autoridades de aplicación de la presente ley en la Capital Federal y territorios nacionales el Departamento Nacional del Trabajo, y en las provincias las que determinen los respectivos gobiernos.

Art. 10. — Los representantes de la autoridad de aplicación, tienen facultad para penetrar en los establecimientos a que se refiere esta ley para verificar las infracciones y pueden requerir la cooperación de la policía.

Art. 11. — Sin perjuicio de las facultades de la autoridad de aplicación, tienen personería para denunciar y acusar a los infractores, además de las personas damnificadas, las asociaciones obreras y patronales por intermedio de sus comisiones directivas.

Art. 12. — Esta ley se tendrá por incorporada al Código Civil y entrará en vigencia a los seis meses de promulgada.

Art. 13. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PROTECCION A LA MATERNIDAD

Ley N.° 12.111, de octubre 9 de 1934, sobre licencia a empleadas y obreras del Estado

Artículo 1.° — Las empleadas y obreras dependientes del Estado gozarán de una licencia de seis semanas, anteriores y posteriores al alumbramiento, serán mantenidas en su puesto y recibirán el sueldo y salario íntegro durante la licencia.

Art. 2.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 30 de septiembre de 1934.

Ley N.° 12.568, de 7 de octubre de 1938, disponiendo intervalos de descanso para toda madre lactante en la jornada de trabajo

Artículo 1.° — Agréguese a la Ley N.° 12.111 como artículo 2.°, el siguiente: «Toda madre de lactante podrá disponer de dos descansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo, salvo el caso en que un certificado médico establezca un intervalo menor».

Art. 2.° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 30 de septiembre de 1938.

Sección Crédito del Personal del Estado en el Banco de la Nación Argentina

«SECCION CREDITO DEL PERSONAL DEL ESTADO» EN EL BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Ley N.° 12.715 de 13 de octubre de 1941, creando en el Banco de la Nación Argentina, la «Sección Crédito del Personal del Estado».

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de—

LEY:

Artículo 1.° — Créase en el Banco de la Nación Argentina la «Sección Crédito del Personal del Estado», con el objeto de facilitar la organización y distribución del crédito personal, para los empleados y obreros al servicio de la administración nacional, provinciales y municipales y de reparticiones autárquicas, y para los beneficiarios de leyes jubilatorias.

Art. 2.° — El Banco de la Nación Argentina podrá tomar de sus recursos y tener invertidos en los préstamos a que se refiere el artículo anterior, hasta la suma de cincuenta millones de pesos moneda nacional ($ 50.000.000 m/n), a base de la cesión de los haberes fijados en los presupuestos nacionales, provinciales y municipales y en las leyes de jubilaciones hasta el monto del servicio y en la forma que establezca el artículo 8.°.

Art. 3.° — Los préstamos serán acordados dentro de la reglamentación que fije el directorio del banco, hasta un máximo de diez (10) meses del sueldo o jubilación nominal y cuatro mil pesos moneda nacional ($ 4.000 m/n), por persona, teniendo en cuenta los antecedentes y situaciones del hogar del solicitante.

No se otorgarán préstamos en virtud de esta ley a empleados que no tengan por lo menos tres años de antigüedad.

Art. 4.° — Sólo podrán hacer uso del máximo de préstamo los empleados y jubilados que no tengan embargos u otra afectación sobre sus haberes, con excepción de aquellos que sufran descuentos

originados en leyes nacionales para amortizar deuda hipotecaria de su casa propia, o cuando los fondos del crédito se destinen a levantar los embargos que traben sus emolumentos.

Art. 5.° — La cancelación del préstamo se hará por amortización mensual que con los intereses del saldo adeudado será como mínimo del diez por ciento (10 %) del sueldo o jubilación mensual nominal. El interés máximo del préstamo será del seis por ciento (6 %) anual. Una porción de ese interés equivalente al uno por ciento (1 %), del capital adeudado se destinará para formar un fondo de previsión, que se llevará en una cuenta especial denominada «Reserva de previsión de préstamos para empleados públicos y jubilados». A esa cuenta se cargará anualmente los quebrantos que originen los préstamos de la sección.

Art. 6.° — En los casos de suspensión o pérdida del empleo o de la jubilación, el banco podrá reclamar en cualquier tiempo el pago del saldo no obstante los plazos concedidos.

Art. 7.° — La «Sección Crédito del Personal del Estado» del Banco de la Nación Argentina no acordará ampliaciones ni renovaciones del crédito, cuando considere que el peticionante dió al préstamo distinto destino al expresado en la solicitud, sin causa justificada o que se dedicó a operaciones de especulación.

El banco queda asimismo facultado para exigir en cualquier momento garantías supletorias o el pago anticipado del crédito acordado, cuando compruebe una disminución de la garantía ofrecida, o que el deudor ha incurrido en los actos previstos en el párrafo anterior.

Art. 8.° — El deudor deberá ceder a favor del Banco de la Nación Argentina, con destino a servicios y amortización de los préstamos que le acuerde ese establecimiento, el diez por ciento (10 %), como mínimo de su sueldo o jubilación mensual nominal. Esta cesión se extenderá a la jubilación que obtengan los cedentes con posterioridad, o la pensión que corresponda a sus causahabientes, aun cuando no medie estipulación expresa, y será imputable a la parte no embargable de sus haberes, sumas que serán retenidas por las oficinas pagadoras y depositadas directamente en la institución acreedora.

Art. 9.° — Acordado el préstamo el banco lo comunicará al empleado y al empleador, o al jubilado o a la caja respectiva, en

su caso, y se hará efectivo una vez que el banco haya obtenido el doble acuse de recibo y el compromiso de las retenciones mensuales correspondientes.

Art. 10. — Queda autorizado el Banco para contratar por cuenta del deudor y con la conformidad de éste, un seguro temporario de vida con prima fija o movible que garantice al acreedor la cancelación del saldo del préstamo para el caso de fallecimiento, por un monto no mayor del préstamo acordado y con endoso de la póliza a favor del Banco.

Si producido el fallecimiento del deudor y cancelado el préstamo, quedara sobrante, el Banco entregará el saldo a los herederos legítimos o beneficiarios.

Art. 11. — El Poder Ejecutivo ordenará dentro de los treinta (30) días de la vigencia de esta ley, la formación de un censo de las deudas de los empleados y obreros de servicio, de la administración nacional, provincial y municipal y reparticiones autárquicas, y de los jubilados que se consideren en el caso de solicitar un préstamo en la «Sección Crédito del Personal del Estado» que se crea por la presente ley.

Art. 12. — Quedan exentos de todo derecho de papel sellado los certificados que se otorguen como así las operaciones y contratos que se lleven a efecto en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3.°, cuando el monto del préstamo no exceda de tres mil pesos moneda nacional (3.000 $^{m}/_{n}$).

Art. 13. — En caso de concurso civil no se modificará el sistema de cobros a que se refiere la presente, quedando las operaciones excluídas del régimen del concurso y de la carta de pago prevista por la Ley N.° 11.077.

Art. 14. — Deróganse todas las disposiciones legales que se opongan a la presente.

Art. 15. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 29 de setiembre de 1941.

R. Patrón Costas. — José Luis Cantilo.
Gustavo Figueroa. — *Zavalla Carbó.*

Registrada bajo el N.° 12.715.

Buenos Aires, 13 de octubre de 1941.

Por tanto:

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

CASTILLO
CARLOS A. ACEVEDO

Resolución de la Dirección General de Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, de 25 de marzo de 1942, referente a la forma en que deberán descontarse en planillas, las cuotas de amortización, correspondientes a los préstamos otorgados por la Sección Crédito del Personal del Estado, Ley N.° 12.715.

Buenos Aires, 25 de marzo de 1942.

«Visto que el Banco de la Nación Argentina, por su «Sección Crédito del Personal del Estado», Ley N.° 12.715, solicita se practique sobre los haberes del personal de este Ministerio que detalla en las planillas que remite, el descuento por cuota de amortización e intereses correspondientes al mes de la fecha, por los préstamos concedidos a dicho personal siendo necesario establecer el procedimiento que deberán seguir las dependencias para el descuento de tales cuotas, el destino que corresponde a los mismos, tanto por el corriente mes, en que se inician dichos descuentos, como por los subsiguientes, hasta la cancelación de aquellos préstamos,

El Director General de Administración—

RESUELVE:

1.° — Recibida por la dependencia la planilla del Banco de la Nación Argentina, que le remitirá esta Dirección General con la nómina de su personal sobre cuyos haberes corresponde, se practi-

que el descuento por el concepto anunciado, procederá a registrar en oportunidad de la liquidación de haberes, en la columna N.° 20 de la planilla Ajuste de Haberes, el importe de la cuota determinada en la planilla primeramente citada.

2.° — Si existiesen otros descuentos en concepto de cuotas a favor de mutualidades, etc., se utilizará el formulario N.° 366, una de cuyas columnas en blanco se habilitará con el título de «Préstamos Ley N.° 12.715», trasladándose el total de los descuentos por empleado a la referida columna N.° 20 de la planilla Ajuste de Haberes, siguiendo las instrucciones del Manual de fecha marzo 15 de 1940, página 23, punto 5.°.

3.° — Dentro de los cinco días de recibidos los fondos de esta Dirección General para el pago de haberes, la dependencia procederá a depositar el total a que ascienden las cuotas descontadas, en la agencia o sucursal del Banco de la Nación Argentina, con la cual operase, en la cuenta «Crédito del Personal del Estado — Ley número 12.715», librando a ese efecto un cheque contra su cuenta corriente oficial, de conformidad a las instrucciones que respecto al depósito de otros descuentos se han establecido en oportunidad y reiteradas por el Manual ya citado, página 23, puntos 8 y 9. En los casos en que las dependencias operasen con el Banco Central, procederán al depósito de las cuotas, en la sucursal del Banco de la Nación Argentina más cercana.

4.° — El descuento de las cuotas se efectuará por el importe determinado en la planilla bancaria (fórmula 3.208) siendo improcedente establecer su proporcionalidad, aun en los casos de que no existiese la total prestación de servicios en el mes por el empleado.

Si la fracción del sueldo liquidado a favor del empleado no cubriese el importe de la cuota, no se efectuará descuento por esa fracción, la que será abonada al empleado.

5.° — Cuando existiesen otros descuentos sobre los haberes del empleado, cuyo cumplimiento debe efectuarse en virtud de tratarse de embargos decretados por los señores jueces o de préstamos del Banco Hipotecario Nacional, se harán en el orden siguiente:

1.° — *Los embargos por alimentos y los embargos comunes*

Concurren ambos en cuanto a la efectividad de sus respectivas cuotas, es decir, que existiendo el descuento por un embargo por alimentos no excluye el descuento de la cuota correspondiente al embargo común si éste existiere.

2.° — *Las cuotas del Banco Hipotecario Nacional*

Existiendo descuentos por embargos, el remanente del sueldo del empleado se aplicará al descuento de la cuota establecida por el Banco Hipotecario Nacional.

3.° — *Las cuotas de préstamos Ley N.° 12.715*

Después de haberse deducido los descuentos por los conceptos enunciados, se le aplicará el remanente del sueldo a la efectividad de estas cuotas que deben serlo por el importe íntegro determinado por el Banco de la Nación por su planilla (fórmula 3.208).

En el caso de que el remanente no fuese igual o superior al de esta cuota, se seguirá el procedimiento establecido en el punto 4.°. Por último, las cuotas a favor de Mutualidades, etc., si hubieren.

6.° — La planilla bancaria citada (fórmula 3.208) deberá ser llenada por la dependencia en la forma indicada al margen de la misma, expresándose las causas por las cuales no se hubiese hecho efectivo el descuento a determinado empleado y se entregará en la sucursal donde se efectúe el depósito juntamente con la boleta respectiva.

7.° — La registración del depósito efectuado en el folio «Caja Sueldo» se hará en la misma forma que en la establecida para los otros descuentos en el citado manual.

8.° — En la rendición de cuenta de la dependencia se incluirá, como comprobante de inversión, un duplicado de la boleta de depósito.

9.° — Por Secretaría comuníquese, por circular, a las dependencias, tome nota Contaduría y cumplido, archívese».

LUIS RICCI.
Director General de Administración.

Circular N.° 12 de la Dirección General de Administración, de 28 de mayo de 1942, impartiendo instrucciones sobre la forma en que deberán proceder los responsables al hacer los depósitos en las agencias y sucursales del Banco de la Nación, por los descuentos practicados en los sueldos del personal beneficiario de los préstamos otorgados por la «Sección Crédito del Personal del Estado».

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. haciéndole saber que, como consecuencia de las dificultades que se le han presentado a numerosos

responsables al hacer los depósitos en las agencias y sucursales del Banco de la Nación Argentina, por los descuentos practicados sobre los sueldos del personal beneficiario de los préstamos de dicha Institución (Sección Crédito del Personal del Estado, Ley N.° 12.715), se ha establecido que en lo sucesivo se proceda en la siguiente forma:

1.° Elevada a este Ministerio por el Banco de la Nación Argentina las nóminas del personal que obtuvo préstamos, la Dirección General de Administración formulará las planillas respectivas para ser remitidas a los señores responsables;

2.° Recibidas las mismas por el responsable, que será en duplicado procederá a los descuentos en la forma expresada en los apartados 1.° y 2.° de la resolución que se transcribió en la Circular N.° 10 de fecha 26 de marzo de 1942;

3.° Con el importe de los descuentos practicados ese establecimiento procederá a *transferir a la orden del Banco de la Nación Argentina* y para depositar a la Cuenta «Crédito del Personal del Estado — Ley N.° 12.715». Sobre este procedimiento, ya ha dado instrucciones la Gerencia del Banco de la Nación a todas las sucursales y agencias;

4.° Al efectuarse la transferencia de fondos en la forma indicada precedentemente, el responsable exigirá de la agencia o sucursal del Banco de la Nación, se le otorgue las boletas de transferencia por *cuadruplicado*, de las cuales, una se agregará a la Rendición de Cuentas; otra quedará en poder del responsable, y una tercera se remitirá a esta Dirección General de Administración, calle Las Heras 2591, Capital Federal, acompañada de una de las nóminas que esta Dirección le remite mensualmente;

5.° El procedimiento que se establece por el apartado anterior, es con el objeto de hacer conocer al Banco de la Nación Argentina (Sección Crédito del Personal del Estado), directamente por intermedio de esta Dirección General, los descuentos que han efectuado las dependencias o establecimientos que dependen de este Ministerio, así como también las observaciones que pudieran formular los mismos con respecto al personal. En esta forma los responsables quedarán eximidos de mantener correspondencia con este fin con dicha Institución;

6.° Las transferencias que se efectúen por el concepto aludido en la presente circular, se harán indefectiblemente entre el 1.° y 5 de cada mes, y las comunicaciones que se solicitan por el apartado 4.°, se harán a esta Dirección General a la mayor brevedad posible;

7.° Con el propósito de regularizar con el Banco de la Nación Argentina (Sección Crédito del Personal del Estado, Ley N.° 12.715), sobre los descuentos que se ordenaron efectuar durante los meses de marzo y abril próximo pasados, esa dependencia dispondrá, si en esos dos meses efectuó descuentos en base a las nóminas enviadas por esta Dirección, informe, por nota separada las fechas en que se hicieron los depósitos o transferencias, como así también acompañar la nómina del personal a quien se les practicó el mismo;

8.° La fórmula N.° 3.281 que se acompaña y que en la cantidad necesaria deberá solicitarse al Banco de la Nación Argentina (Sección Crédito del Personal del Estado) — calle 25 de Mayo N.° 9, Capital Federal—, tiene por finalidad llenar los requisitos de rigor, indispensables para realizar las sumas de los seguros en caso de fallecimientos;

Está integrada por un original y dos copias para confeccionar con carbónicos y debe efectuarse el comunicado tan pronto la Repartición tenga conocimento del fallecimiento del deudor;

El elemento N.° 1 se remitirá a esta Dirección General de Administración, juntamente con el N.° 2, sin desglosar. El elemento N.° 3 quedará en esa Repartición para su archivo;

Si a partir del 1.° de marzo último —fecha desde la que ha comenzado a regir el seguro— esa Repartición hubiera registrado el fallecimiento de algún deudor, tendrá a bien cursar el procedimiento descriptivo, consignando los datos del día en que ocurrió.

9.° Todo movimiento de personal que se produzca en el establecimiento o repartición a su digno cargo (Cesantías, traslados, renuncias, etc.), y que sea beneficiario del Banco de la Nación Argentina (Sección Crédito del Personal del Estado, Ley N.° 12.715), lo hará saber a esta Dirección General a los fines de dar traslado de ello a dicha Institución y determinar su nueva consignación;

10. La presente circular amplía los términos de la resolución consignada por la Circular N.° 10 de fecha 26 de marzo último (1).

Saludo a Ud. con la consideración más distinguida.

LUIS RICCI.
Director General de Administración.

Circular N.° 24 de la Dirección General de Administración, de 22 de septiembre de 1942, referente a la forma de efectuar descuentos en planillas sobre haberes del personal beneficiario de la Ley N.° 12.715.

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1942.

Señor .....

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. remitiéndole adjunto las planillas de descuentos a efectuarse sobre los haberes del mes de la fecha al personal beneficiario del Banco Nación Argentina —Sección «Crédito del Personal del Estado — Ley 12.715».

En esta oportunidad, y para aquellas dependencias que no proceden de acuerdo con las normas impartidas por esta Dirección General en la Circular N.° 12|942, se transcriben nuevamente los apartados 1.°, 3.° y 4.° de la misma, que dicen: (Se transcribe a continuación el texto de estos apartados de la circular anterior).

De acuerdo con las instrucciones dadas por la Gerencia del Banco de la Nación a sus agencias y sucursales por circulares números 3.417 del 27|5|942 y 3.425 del 30|6|942, no deben éstas exigir a n|. responsables el formulario 651 en el que se detalla el personal al cual se hace el descuento, pues, haciéndolo, se ven imposibilitados de ajustarse estrictamente a lo indicado en el apartado 4.° de la circular que nos ocupa y, en este sentido, recaba esta Dirección General el fiel cumplimiento de las disposiciones que contiene dicho apartado.

Saludo a Ud. muy atentamente.

LUIS RICCI.
Director General de Administración.

(1) Ver resolución que precede a la transcripción de la presente circular.

Memoria Ministerial

MEMORIA MINISTERIAL

Artículo 90 de la Constitución Nacional

«Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los Ministerios del despacho presentarle una memoria detallada del estado de la Nación, en lo relativo a los negocios de sus respectivos Departamentos».

Inciso 3.° del artículo 2.° de la Ley N.° 3.727 de organización de los Ministerios Nacionales, referente a la tarea que corresponde a cada Ministro del Poder Ejecutivo.

«Proyectar, suscribir y sostener ante el Congreso los proyectos de ley que inicie el Poder Ejecutivo y todo acto de la exclusiva jurisdicción de éste, *redactar la memoria anual que debe presentar al Congreso dentro del primer mes de sus sesiones,* y los mensajes y proyectos de presupuesto parcial de su departamento, y presentar la cuenta de inversión con arreglo a la Ley de Contabilidad».

Artículo 6.° de la Ley N.° 428, de Contabilidad

«Cada Ministro acompañará a la Memoria que debe presentar al Congreso en el mes de mayo, los documentos siguientes:

1.° Cuenta de inversión del presupuesto de su ramo, correspondiente al ejercicio del año anterior a dicha Memoria;
2.° Estado razonado y comparativo entre el presupuesto de su ramo para el ejercicio del año que corriere y el que propusiese para el siguiente».

Artículo 58 de la Ley N.° 1.420, de Educación Común

«El Consejo Nacional de Educación presentará al principio de cada año un informe de todos sus trabajos al Ministerio respectivo y lo imprimirá en número suficiente de ejemplares con destino a hacerlo circular en el país y en el extranjero. Este informe contendrá una estadística completa de las escuelas».

Resolución Ministerial, de 4 de agosto de 1938, disponiendo que en las memorias, revistas y demás documentos publicados por reparticiones y establecimientos del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública deben excluirse los juicios y comentarios de carácter personal.

Buenos Aires, 4 de agosto de 1938.

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública—

RESUELVE:

Que las memorias, revistas y demás documentos publicados por las oficinas tienen por finalidad llevar al conocimiento del pueblo la conducta y gestión de sus representantes administradores, por lo cual deben limitarse a consignar hechos y datos objetivamente considerados.

Que, por lo tanto, deben excluirse de esos documentos los juicios y comentarios de carácter personal, tanto sobre cuestiones de actualidad como de acontecimientos históricos, o de personalidades representativas de nuestro pasado nacional.

Comuníquese a los Presidentes y Directores de los establecimientos y reparticiones dependientes de este Ministerio, anótese y archívese.

COLL.

Resolución Ministerial de 14 de julio de 1942, disponiendo que el envío de informes de las distintas reparticiones se efectúe antes del 15 de marzo de cada año, a fin de que la Memoria del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública sea remitida al Honorable Congreso en el primer mes de sus sesiones.

Buenos Aires, 14 de julio de 1942.

Atento a que el art. 90 de la Constitución Nacional dispone que cada Ministerio debe presentar, en las primeras sesiones ordinarias del Honorable Congreso la Memoria del estado de los asuntos correspondientes al Departamento; y que para su preparación es

necesario tener, con la debida anticipación, los documentos relacionados con las actividades de cada una de las reparticiones de su dependencia,

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública—

RESUELVE:

1.° — Los jefes de las reparticiones dependientes del Ministerio deberán enviar sus informes anuales y cuadros estadísticos respectivos, antes del 15 de marzo de cada año.

2.° — Publíquese, comuníquese, anótese y archívese.

ROTHE.

INDICE

LIBRO II — ORGANIZACION DOCENTE

FASCICULO 1.º

Pág.

Disposiciones pertinentes de la Constitución Nacional 13

LEYES Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS, QUE ATAÑEN AL DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PUBLICA Y AL REGIMEN Y ADMINISTRACION DE LA ENSEÑANZA MEDIA

MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA

1 — Artículos pertinentes de la Ley N.º 3.727, de 11 de octubre de 1898, de organización de los Ministerios Nacionales 15

2 — Acuerdo, de 31 de octubre de 1898, distribuyendo las materias que corresponden a los Ministerios 19

LIBERTAD DE ENSEÑANZA

Ley N.º 934, de 30 de septiembre de 1878, de Libertad de Enseñanza 21

CONTABILIDAD — DIVISION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E I. PUBLICA — PRESUPUESTO

1 — Ley N.º 428, de 13 de octubre de 1870, de Contabilidad y organización de la Contaduría General de la Nación 25

2 — Acuerdo, de 14 de julio de 1931, creando las Direcciones de Administración 47

3 — Decreto N.º 61.924, de 7 de mayo de 1940, aprobando el Reglamento interno de la Dirección General de Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 63

4 — **TEXTO DEL REGLAMENTO APROBADO:**

CAPITULO I

DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Título I. — Su competencia 65
Título II. — Su organización 67
Título III. — Del Director 68
Título IV. — Del Contador 72
Título V. — Del Secretario 76
Título VI. — Del Tesorero 78
Título VII. — Del Jefe de Suministros 80

Pág.

CAPITULO II

DE LA DIVISION CONTADURIA

Título I. — De la Sección Teneduría de Libros 81

Oficina de Libros 83

1.º Contabilidad de Previsión 83
2.º Contabilidad de Presupuesto, Leyes, Cuentas Especiales y Acuerdos de Ministros 87
3.º Contabilidad de Movimiento de Fondos y de Valores 88
4.º Contabilidad de Cargos 91
5.º Contabilidad Patrimonial 93

Oficina de Presupuesto y Ordenes de Pago 95

Sus tareas 95

Intervención de Tesorería 96

I. — Mesa de Intervención y Libros 97
II. — Mesa de planillas contables 102

Oficina de Despacho 104

Sus tareas 104

Título II. — De la Sección Liquidaciones 105

I. — Mesa General de Entradas y Salidas 106
II. — Oficina de Liquidación de Sueldos 107
III. — Liquidación de Gastos 111
IV. — Oficina de Despacho 114
V. — Ordenes de Pago Internas 114
VI. — Imprenta 117

Título III. — De la Sección Rendiciones de Cuentas 118

I. — Rendiciones de Responsables 118
II. — Rendiciones de Cuentas a Contaduría General de la Nación 125

Título IV. — De la Sección Inspecciones Administrativas 128

Sus funciones 128

I. — Determinación del Cargo y modo de llevar a cabo la intervención 131
II. — Balance del Arqueo 136
III. — Informe 136

Título V. — Oficina de Contralor Contable de Provisiones 137

Sus funciones 137

Pág.

CAPITULO III

DE LA DIVISION SECRETARIA

Título I. — De la Oficina de Mesa General de Entradas y Salidas 139
Título II. — De la Oficina de Despacho 142
Título III. — De la Oficina de Pasajes y Fletes Contralor de locación, Servicios Sanitarios, Personal de Comisión y Diligencias Judiciales 144
Título IV. — De la Oficina de Economato 147
Título V. — De la Oficina de Fianzas 151

CAPITULO IV

DE LA DIVISION TESORERIA

Título I. — De la Oficina de Entradas y Salidas 161
Título II. — De la Oficina de Contralor y Preparación de pagos y devoluciones 162
1.° De la Mesa Contralor de Ingresos 162
2.° De la Mesa Contralor de Egresos 163
3.° De la Mesa Cheques, Transferencias y Depósitos 163
4.° De la Mesa de Contabilización de Operaciones 166
5.° De la Mesa de Despacho 167

Título III. — De la Oficina de Cobros y Pagos 168

1.° De la Mesa de Cobros 168
2.° De la Mesa de Pagos 168

CAPITULO V

DE LA SECCION SUMINISTROS Y REGIMEN DE ADQUISICIONES

Título I. — De sus funciones 170
Título II. — De las Licitaciones Públicas 172
Título III. — De las Licitaciones Privadas 178
Título IV. — De las Compras Directas 181
Título V. — Del Pliego de Bases y Condiciones para Licitaciones Públicas 181
Presentación de las Propuestas 182
Apertura de las Propuestas 184
Estudio de las Propuestas y Adjudicaciones 185
Contratos 187
Garantía 188
Muestras 188
Condiciones de Entrega 190
Pagos 191
Penalidades 192
Disposiciones Especiales 194
Título VI. — Del Pliego de Bases y Condiciones para Licitaciones Privadas 195
Propuestas 195
Apertura de las Propuestas 196
Estudio de las Propuestas y Adjudicaciones 197
Contratos 199
Muestras 199
Condiciones de Entrega 201
Pagos 201
Penalidades 202

Pág.

CAPITULO VI

DE LA REGLAMENTACION PARA EL PAGO DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS, VIATICOS, Y EXTENSION DE ORDENES DE PASAJES Y FLETES

Título I. — De los servicios extraordinarios remunerados 203
Título II. — De los viáticos 205
Título III. — De la movilidad 208
Título IV. — De los pasajes y cargas 209
Ordenes Generales de Pasajes 210
Ordenes de Pasajes en Blanco 212
Ordenes Parciales de Pasajes 212
Ordenes Generales de Carga 213
Ordenes Parciales de Cargas 214

CAPITULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

Título I. — Horario 215
Título II. — Del personal 216
1.º De los Jefes de Oficina o Sección 216
2.º De los empleados 218
Ficha personal 218
Deberes 218
Prohibiciones 219
Licencias 220
Embargos 221
Certificación de servicios 222
Título III. — Del Personal de Servicios 222
Del Mayordomo 222
De los Ordenanzas 223

5 — Artículos pertinentes de la Ley N.º 11.672 (Edición 1942) Complementaria Permanente de Presupuesto

6 — Artículos pertinentes de la Ley N.º 12.816, de Presupuesto General de la Nación para el año 1943, promulgada por el Poder Ejecutivo el 15 de octubre de 1942

JUBILACIONES Y PENSIONES

1 — Ley N.º 4.349, de 20 de septiembre de 1904, creando la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, con las modificaciones introducidas por leyes posteriores 235
2 — Ley N.º 11.923, de 18 de octubre de 1934, modificando la Ley N.º 4.349 251
3 — Artículos pertinentes de la Ley N.º 11.672 (Edición 1942) Complementaria Permanente de Presupuesto 256

Pág.

4 — DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY N.° 11.923. CON NOTAS SOBRE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL MISMO POR EL PODER EJECUTIVO INCLUSIVE LOS DECRETOS DICTADOS EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 1942

CAPITULO I

DE LOS AFILIADOS Y DE SUS APORTES

Título I: De los afiliados 258

1. Afiliados forzosos. — 2. Afiliados en virtud de opción. — 3. Exclusión. — 4. Funcionarios — Empleados — Definición. 5. Cargos permanentes — Definición. — 6. Afiliación en virtud de opción — Forma y oportunidad. — 7. Carácter definitivo de la afiliación. — 8. Pérdida de la afiliación. — 9. Ficha personal. — 10. Afiliados privilegiados.. — 11. Opción por la situación de afiliados comunes. — 12. Denegación del privilegio. — 13. Afiliación de personal en servicio a la fecha del decreto. — 14. Ficha personal — Primera adopción y ficha provisional.

Título II: De los aportes de los afiliados 263

15. Aportes — Enumeración. — 16. Sueldos — Definición. — 17. Aportes de los afiliados en actividad. — 18. Diferencia del primer mes de mayor sueldo. — 19. Pago simultáneo del aporte ordinario. — 20. Aportes de los afiliados sin retribución mensual fija. — 21. Aportes de Magistrados judiciales, Ministros, Legisladores, etc. — 22. Aportes de afiliados privilegiados. — 23. — Aportes en caso de denegación del privilegio. — 24. Aportes en caso de licencia. — 25. Aportes de jubilados. — 26. Oportunidad del pago de los aportes. — 27. Aportes indebidamente ingresados. — 28. Ingreso de aportes no efectuados en su oportunidad. — 29. Magistrados judiciales, Ministros, Legisladores — Cargo. — 30. Afiliados privilegiados — Cargo por diferencia de aportes. — 31. Aportes retirados — Cargo. — 32. Plazo para solicitar el cargo. — 33. Determinación y pago del cargo. — 34. Oportunidad del pago. — 35. Cargo bajo el régimen anterior a la Ley 11.923. — 36. Desafiliación de magistrados judiciales — Devolución de aportes. — 37. Devolución del saldo de aportes a jubilados y pensionistas.

CAPITULO II

DE LOS BENEFICIOS

Título I: Disposiciones varias 272

38. Beneficios: Enumeración. — 39. Prescripción. — 40. Inalienabilidad e inembargabilidad de jubilación y pensión. — 41. Beneficio de «Devolución de aportes». — 42. Cesantías que no dan lugar a la devolución. — 43. Casos en que el afiliado no tiene derecho a la devolución. — 44. Efectos de la devolución. — 45. Beneficio en caso de muerte del afiliado sin dejar derecho de pensión.

Pág.

Título II: Disposiciones generales relativas a las jubilaciones 275

46. Efectos de la jubilación. — 47. Principio, interrupción y fin del goce de la jubilación. — 48. Servicios y sueldos compatibles con el goce de la jubilación. — 49. Empleo en el profesorado — Definición. — 50. Declaración del jubilado en la ficha personal. — 51. Jubilado que percibe sueldo y jubilación. — Sanción. — 52. Jubilado extraordinario que vuelve al servicio — Sanción. — 53. Plazo para solicitar la jubilación. — 54. Pérdida del derecho de ser jubilado por exoneración y condena. — 55. Extinción de la jubilación por condena. — 56. Conmutación de la pena. — 57. Empleados encausados. — 58. Incompatibilidad entre varias jubilaciones. — 59. Ley aplicable — Afiliados en actividad. — 60. Ley aplicable — Afiliados que dejaron el servicio. — 61. Ley aplicable — Afiliados inutilizados. — 62. Reajuste.

Título III: De la edad y del cómputo de servicios a los efectos de la jubilación 280

63. Jubilación ordinaria íntegra — Afiliados comunes — Requisitos de edad y servicios. — 64. Jubilación ordinaria íntegra — Afiliados privilegiados — Requisitos de edad y servicios. — 65. Jubilación ordinaria íntegra — Servicios privilegiados y comunes sucesivos. — 66. Jubilación anticipada. — 67. Jubilación anticipada — Servicios privilegiados y comunes sucesivos. — 68. Jubilación extraordinaria — Casos. — 69. Jubilación extraordinaria — Servicios privilegiados y comunes sucesivos. — 70. Servicios computables. — 71. Cómputo de servicios no retribuídos con sueldo fijo mensual. — 72. Empleos simultáneos. — 73. Interrupciones del servicio. — 74. Empleados exonerados — Cómputo de servicios. — 75. Empleados condenados o encausados — Cómputo de servicios — Servicios del imputado — Servicios posteriores. — 76. Edad a los efectos de la jubilación — Fecha — 77. Cómputo de servicios — Fecha. — 78. Reconocimiento de servicios sin aportes.

Título IV: Del monto de las jubilaciones 287

79. Promedio de sueldos. — 80. Servicios privilegiados y comunes sucesivos — Cálculo del promedio de sueldos. — 81. Escala de reducción. — 82. Empleos simultáneos. — 83. Haber mensual de la jubilación ordinaria íntegra y anticipada. — 84. Haber mensual de la jubilación extraordinaria. — 85. Haber de la jubilación extraordinaria — Servicios privilegiados y comunes sucesivos. — 86. Promedio para los afiliados en actividad con más de 10 años de servicios. — 87. Reajuste de las jubilaciones ordinarias en vigor. — 88. Escala de reducción de las jubilaciones extraordinarias en vigor. — 89. Cargo por omisión de descuentos.

Título V: Disposiciones especiales relativas a las pensiones 291

90. Derecho de pensión — Derechohabientes — Casos. — 91. Orden de los pensionistas. — 92. Personas excluídas. — 93. Principio y duración de la pensión. — 94. Haber de la pensión. — 95. División de la pensión. — 96. Derecho de acrecer. — 97. Aplicación de las disposiciones sobre división y acrecimiento. — 98. Pensionistas incapaces. — 99. Extinción de la pensión. — 100. Pérdida de la pensión por condena. — 101. Domicilio en el extranjero. — 102. Pensionistas que se ausentan del país.

Pág.

— 103. Residencia en el extranjero a la fecha del fallecimiento del causante. — 104. Contralor. — 105. Ausencias que no importan domicilio en el extranjero. — 106. Incompatibilidad del goce de varias pensiones. — 107. Ley que determina los requisitos que debe reunir el causante. — 108. Ley que rige las pensiones en vigor. — 109. Viudas cuyas pensiones caducaron — Pequeñas pensiones vitalicias. — 110. Opción entre pensiones prorrogadas y vitalicias. — 111. Reajuste de las pensiones en vigor.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO

Título I: Solicitudes 299

112. Solicitudes en general. — 113. Jubilación ordinaria íntegra o anticipada. — 114. Jubilación extraordinaria. — 115. Devolución de aportes capitalizados. — 116. Pensión por muerte de jubilado. — 117. Pensión por muerte de afiliado en actividad. — 118. Pensión. — Fecha de presentación de la solicitud y prescripción. — 119. Pensión — Copartícipes — Solicitudes. — 120. Pensión — Edictos. — 121. Pensión — Presentación tardía. — 122. Percepción de la pensión en el extranjero. — 123. Beneficio en caso de muerte del afiliado sin dejar derecho de pensión. — 124. Trámite de solicitudes y cobro de haberes por medio de mandatario. — 125. Pequeñas pensiones vitalicias. — 126. Reconocimiento de servicios y cargo.

Título II: De las pruebas 305

127. Estado Civil. — 128. Prueba supletoria. — 129. Servicios — Certificados. — 130. Servicios — Contenido de los certificados. — 131. Servicios — Afiliados sin remuneración mensual fija. — 132. Servicios privilegiados. — 133. Servicios — Pruebas supletorias. — 134. Servicios — Prueba supletoria judicial. — 135. Inutilización física e intelectual. — 136. Goce simultáneo de dos o más beneficios. — 137. Servicios — Confirmación de la Contaduría General de la Nación.

Título III: Resoluciones y recursos 309

138. Jubilaciones y pensiones — Resolución de la Junta y Decretos del Poder Ejecutivo. — 139. Jubilaciones de oficio. — 140. Reconsideraciones de decretos del Poder Ejecutivo. — 141. Beneficios menores — Resoluciones de la Junta y reconsideración.

CAPITULO IV

DEL FONDO DE LA CAJA 311

142. Afectación. — 143. Constitución. — 144. Liquidación de aportes — Oportunidad. — 145. Sanciones. — 146. Contralor del ingreso de aportes. — 147. Aporte patronal — Base. — 148. Aporte patronal a cargo del Gobierno Nacional — Liquidación y forma de pago. — 149. Aporte patronal por los privilegiados — Ajuste. — 150. Aporte patronal a cargo de las Reparticiones Autónomas. — 151. Aporte patronal — Empresas particulares — Personal de cuentas especiales. — 152. Empleo vacante — Definición. — 153. Sueldos de empleos vacantes que no corresponden a la Caja. — 154. Multas. — 155. Depósito de las sumas co-

Pág.

rrespondientes a la Caja — Plazo. — 156. Fondos depositados en el Banco de la Nación Argentina — Fuero criminal. — 157. Sumas indebidamente ingresadas al fondo — Reclamaciones. — 158. Sumas indebidamente ingresadas al fondo — Devoluciones. — 159. Contralor de contribuciones en general. — 160. Dinero de Caja. 161. Inversión del fondo en títulos.

CAPITULO V

DE LA ADMINISTRACION DE LA CAJA 318

162. Junta de Administración — Composición. — 163. Remuneración de los Miembros de la Junta. — 164. Vicepresidencia de la Junta. — 165. Funciones generales de la Junta. — 166. Obligaciones especiales de la Junta. — 167. Pago de los beneficios — Forma. — 168. Junta Provisional. — 169. Elección de representantes — Servicios mixtos — Reorganización financiera — Trabajos preparatorios de la Junta.

CAPITULO VI

CONTRALOR Y REORGANIZACION FINANCIERA — CENSO DE AFILIADOS 321

170. Plan de reorganización financiera — Trabajos previos. — 171. Censo — Fecha. — 172. Ficha personal. — 173. Censo — Obligaciones de los Jefes de Repartición. — 174. Sanciones administrativas. — 175. Sanciones disciplinarias. — 176. Número de afiliación. — 177. Primera valuación actuarial. — 178. Reorganización financiera. — 179. Valuaciones actuariales periódicas. — 180. Legajo personal del afiliado. — 181. Cuenta personal del afiliado.

Disposiciones finales 324

Anexo al artículo 65 325
Jubilación ordinaria íntegra 325

Anexo al artículo 67 327
Jubilación anticipada 327

Anexo a los artículos 69 y 85 332
Jubilación extraordinaria 332

Decreto, de 7 de agosto de 1942, ampliatorio del art. 140 del D. R. de la Ley N.º 11.923 333

BANDERA Y ESCUDO NACIONALES

1 — Sanción del Congreso Nacional, de 25 de julio de 1816, declarando a la bandera celeste y blanca distintivo de la Nación 337

2 — Sanción del Congreso Nacional, de 25 de febrero de 1818, disponiendo que un sol de oro en el centro sea el distintivo de las banderas de guerra y de la banda del Jefe del Estado 338

3 — Ley N.º 8.220, de 22 de septiembre de 1911: Conmemoración del centenario del primer juramento y bendición de la Bandera Nacional 339

Pág.

4 — Ley N.º 12.361, de 9 de julio de 1938, declarando Día de la Bandera el 20 de junio 340

5 — Ley N.º 12.575, de 25 de enero de 1939, sobre monumento a la bandera nacional en la ciudad de Rosario 341

6 — Decreto, de 19 de mayo de 1869, sobre uso de banderas argentinas y extranjeras en los días de regocijo nacional 342

7 — Decreto, de 25 de abril de 1884, reglamentando el uso de banderas 343

8 — Decreto, de 27 de agosto de 1884, imponiendo multas a contraventores del decreto de abril 25 de 1884 344

9 — Decreto, de 31 de diciembre de 1890, disponiendo el cese de la práctica oficial de enarbolar el pabellón nacional en los aniversarios cívicos, de regocijo y de duelo de las potencias extranjeras 345

10 — Decreto, de 20 de marzo de 1902, prohibiendo a los institutos particulares de enseñanza, el uso del Escudo Nacional, como asimismo, de la palabra «Nacional» en la denominación propia de cada uno de ellos 346

11 — Acuerdo, de 24 de mayo de 1907, sobre el uso del escudo y bandera nacionales 348

12 — Decreto, de 28 de abril de 1933, prohibiendo el uso, en reuniones, manifestaciones y desfiles, de otras banderas que la nacional y las de las naciones extranjeras amigas 349

13 — Acuerdo, de 8 de julio de 1933, prohibiendo izar a media asta la bandera nacional en los días patrios 351

14 — Acuerdo, de 5 de noviembre de 1933, sobre uniformidad de los colores y distribución de los atributos de la bandera y del escudo nacional 353

15 — Acuerdo, de 7 de noviembre de 1933, reglamentando el uso de la bandera y escudo nacionales 355

16 — Decreto, de 23 de mayo de 1934, prohibiendo el uso de la palabra «nacional» por entidades particulares 359

17 — Resolución Ministerial, de 22 de junio de 1936, sobre uso de la bandera nacional en los establecimientos de enseñanza dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 361

18 — Decreto, de 16 de diciembre de 1937, prohibiendo el padrinazgo de la bandera nacional 363

19 — Resolución Ministerial, de 27 de diciembre de 1938, autorizando a los rectores y directores de los establecimientos de enseñanza del Ministerio para disponer que la bandera nacional sea izada todos los días al iniciarse las clases y arriada al término de la labor diaria 364

20 — Resolución, de 6 de junio de 1939, fijando normas para el mejor cumplimiento de la Resolución anterior 365

Pág.

21 — Circular N.º 43, de la Inspección General de Enseñanza, de 10 de junio de 1942, transcribiendo la Resolución Ministerial de la misma fecha, sobre conmemoración del «Día de la Bandera» y disponiendo la forma en que se realizarán las ceremonias en los establecimientos oficiales de enseñanza secundaria 366

22 — Decreto N.º 138.070, de 15 de diciembre de 1942, disponiendo que en los edificios declarados Monumentos Históricos, dependientes del dominio público de la Nación, de las provincias o de las municipalidades, se izará la bandera nacional con sol los días domingos y feriados nacionales 368

23 — Antecedentes ilustrativos contenidos en el Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, de fecha 25 de agosto de 1942, sobre estabilidad de una versión única del Himno Nacional y fijando el carácter inalterable de los Símbolos Patrios 370

HOMENAJE AL LIBERTADOR

1 — Ley N.º 12.387, de 16 de agosto de 1938, declarando Fiesta Nacional el día 17 de agosto, aniversario de la muerte del Capitán General don José de San Martín 377

2 — Circular N.º 69 de la Inspección General de Enseñanza, de 7 de agosto de 1940, comunicando instrucciones para la realización del homenaje de los establecimientos de enseñanza al Libertador 377

3 — Circular N.º 64 de la Inspección General de Enseñanza, de 11 de agosto de 1941, comunicando que se ha dispuesto mantener con carácter permanente las instrucciones impartidas por la circular anterior 378

COMISIONES Y REPARTICIONES NACIONALES, CREADAS POR LEY, DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PUBLICA

1 — Comisión Protectora de Bibliotecas Populares

Ley N.º 419, de 23 de septiembre de 1870, sobre Bibliotecas Populares y constituyendo una Comisión Protectora en la ciudad de Buenos Aires 381

Decreto de 29 de octubre de 1870, reglamentario de la Ley N.º 419 sobre Bibliotecas Populares 382

Decreto, de 3 de julio de 1908, estableciendo las condiciones requeridas para la fundación de una biblioteca popular con el apoyo oficial, y designando una Comisión Protectora 385

Decreto, de 31 de marzo de 1919, uniformando disposiciones sobre bibliotecas populares, canje internacional y centralización y distribución de publicaciones oficiales 387

Pág.

Resolución Ministerial de 7 de marzo de 1921, aprobando el Reglamento para la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares 391
Texto del Reglamento aprobado 392

2 — Comisión de Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos

Ley N.° 9.080, de 7 de marzo de 1913, declarando de propiedad de la Nación las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico 414
Decreto, de 29 de diciembre de 1921, reglamentando la Ley N.° 9.080 416

3 — Patronato Nacional de Ciegos

Ley N.° 9.339, sancionada el 13 de septiembre de 1913, creando la Institución Argentina de Ciegos, cuya Comisión Directiva, nombrada por el Poder Ejecutivo, ejerce, además, las funciones correspondientes al Patronato Nacional de Ciegos 421
Decreto N.° 31.465, de 16 de mayo de 1939, estableciendo que las funciones correspondientes al Patronato Nacional de Ciegos y la Dirección de la Institución Argentina de Ciegos las ejercerá una Comisión Directiva Honoraria, integrada por un Presidente y siete Vocales designados por el Poder Ejecutivo, los que durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelectos 423
Decreto N.° 31.466, de 16 de mayo de 1939, designando los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Consultiva del Patronato Nacional de Ciegos 427
Decreto N.° 119.851, de 13 de marzo de 1942, designando Presidente y Vocales, por un nuevo período, del Patronato Nacional de Ciegos 428

4 — Comisión para la Medición de un Arco de Meridiano

Ley N.° 12.334, de 31 de diciembre de 1936, sobre Medición de un Arco de Meridiano a lo largo del Territorio Nacional 430
Decreto, de 8 de mayo de 1937, reglamentario de la Ley N.° 12.334 y designando la Comisión encargada de la medición de un arco de meridiano 432
Decreto, de 23 de diciembre de 1937, aprobando el Reglamento para la Comisión encargada de la medición de un arco de meridiano .. 434

5 — Comisión Nacional de Ayuda Escolar

Ley N.° 12.558, de 14 de octubre de 1938, sobre protección a los niños en edad escolar 441
Decreto, de 4 de abril de 1939, constituyendo la Comisión Nacional de Ayuda Escolar, de la Ley N.° 12.558 447
Decreto N.° 76.601, de 9 de noviembre de 1940, estableciendo las funciones de los Vocales adjuntos que integran la Comisión Nacional de Ayuda Escolar (Ley 12.558) 449

Pág.

Resolución, de 9 de septiembre de 1940, designando al Subsecretario, doctor Enrique Gómez Palmés, Presidente de la Comisión Nacional de Ayuda Escolar 451

6 — Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos

Ley N.º 12.665, de 8 de octubre de 1940, creando la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos 453
Decreto, de 7 de febrero de 1941, reglamentario de la Ley N.º 12.665 456
Reglamento interno de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos Históricos 467
Reglamento interno de los Museos Históricos 470
Decreto N.º 74.826, de 19 de octubre de 1940, integrando la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos.... 476

NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E I. PUBLICA, CREADOS POR LEY ESPECIAL O POR LEY DE PRESUPUESTO EN EL TRANSCURSO DE LOS AÑOS 1941 Y 1942, PUBLICADA EN EL LIBRO PRIMERO QUE SE INCORPORAN A LA NOMINA GENERAL DE ESTA OBRA

Por Ley Especial — Año 1941

1 — Ley N.º 12.718, de 9 de octubre de 1941, creando una Escuela Nacional de Comercio Mixta en la ciudad de Nueve de Julio (Buenos Aires) 479
2 — Ley N.º 12.726, de 9 de octubre de 1941, creando una Escuela Técnica de Adaptación Regional en la ciudad de Resistencia (Chaco) 481
3 — Decreto N.º 107.348, de 5 de diciembre de 1941, estableciendo el plan de estudios que regirá en la Escuela creada por la Ley N.º 12.726 482

Año 1942

1 — Ley N.º 12.765, de 9 de septiembre de 1942, creando el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca 485
2 — Decreto N.º 137.843, de 10 de diciembre de 1942, reglamentario de la Ley N.º 12.765 que crea el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca 487
3 — Ley N.º 12.775, de 29 de eptiembre de 1942, nacionalizando la Escuela Profesional de Mujeres «Nicolasa Berrondo de Quiroga», de Mercedes (San Luis) 490

Pág.

4 — Decreto N.° 140.124, de 31 de diciembre de 1942, reglamentario de la Ley N.° 12.775 sobre nacionalización de la Escuela «Nicolasa B. de Quiroga», de Mercedes (San Luis) 491

POR LEY DE PRESUPUESTO

Otros Establecimientos de Enseñanza creados por Ley de Presupuesto de 1942, prorrogada para el año 1943 493

REGISTRO DE EGRESADOS DE LAS ESCUELAS DE OFICIOS

1 — Ley N.° 12.234, de 4 de octubre de 1935, creando Escuelas de Oficios en la Capital Federal y estableciendo una oficina de colocación de sus egresados y bolsa de trabajo para los mismos 499

2 — Circular N.° 102 de la Inspección General de Enseñanza, de 21 de diciembre de 1937, impartiendo instrucciones a fin de organizar el Registro de Egresados de las Escuelas Técnicas y Prácticas del Ministerio 501

FOMENTO DE LA PRODUCCION CIENTIFICA, LITERARIA Y ARTISTICA

1 — Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias

Mensaje del Poder Ejecutivo al Honorable Congreso, de 29 de septiembre de 1934, solicitando la sanción de un proyecto de ley que permita la realización de los fines de investigación científica perseguidos por la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias 505

Ley N.° 12.338, de 31 de diciembre de 1936, acordando a la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias un fondo de un millón de pesos en títulos, cuya renta se invertirá en becas internas y externas y en subvencionar investigaciones científicas 508

Decreto, de 10 de mayo de 1937, reglamentario de la Ley N.° 12.338 510

Estatutos de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, aprobados por decreto del Poder Ejecutivo de 16 de agosto de 1938 512

2 — Museo Social Argentino

Ley N.° 12.230, de 3 de octubre de 1935, de estímulo a la obra que realiza el Museo Social Argentino 519

Decreto, de 20 de julio de 1937, acordando validez oficial a determinados títulos otorgados por el Museo Social Argentino 520

3 — Casa del Reposo para escritores y artistas

Ley N.° 12.674, sancionada el 5 de junio de 1941, creando, con carácter permanente, la Casa del Reposo para escritores y artistas, en la finca de Samay Huasi, que fuera residencia del doctor Joaquín V. González 521

Pág.

INTERCAMBIO CULTURAL CON LAS REPUBLICAS DE CHILE Y BRASIL

1 — Convenio de intercambio artístico con Chile

Ley N.º 5.950, de 10 de octubre de 1908, aprobando un Convenio con la República de Chile sobre fomento de las relaciones artísticas 525
Texto del Convenio 525

2 — Convenio de intercambio artístico con la República de los Estados Unidos del Brasil

Ley N.º 12.273, de 8 de octubre de 1935, aprobando un Convenio de intercambio artístico con la República de los Estados Unidos del Brasil 527
Texto del Convenio 527

3 — Intercambio de profesores y alumnos argentinos y brasileños

Decreto, de 12 de noviembre de 1936, sobre intercambio de profesores y alumnos brasileños — Bases generales 529

4 — Premio «Estados Unidos del Brasil»

Ley N.º 12.307, de 29 de septiembre de 1936, creando el premio «Estados Unidos del Brasil» 530
Decreto reglamentario, de 22 de diciembre de 1936 532

5 — Enseñanza del Idioma Portugués

Ley N.º 12.766, de 17 de septiembre de 1942, incluyendo en los planes de estudios de los establecimientos del Ministerio de Justicia e I. Pública, a partir del año 1943, la enseñanza del idioma portugués 533
Decreto, de 31 de diciembre de 1942, cumplimentando disposiciones de la Ley N.º 12.766 534

CANJE INTERNACIONAL DE INFORMACIONES Y PUBLICACIONES

1 — Convención de Bruselas

Ley N.º 4.070, de 21 de mayo de 1902, aprobando la adhesión de la República a la Convención formada en Bruselas sobre canje de documentos oficiales y publicaciones científicas 537
Texto de la Convención 537

Pág.

2 — **Colaboración de las Oficinas nacionales en el canje internacional de publicaciones oficiales**

Resolución Ministerial, de 5 de septiembre de 1935, referente al cumplimiento del decreto de 31 de marzo de 1919, que establece la obligación de las oficinas nacionales de remitir sus publicaciones a la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, para el canje internacional de publicaciones oficiales 540

3 — **Intercambio de Informaciones con la Oficina Internacional de Educación de Ginebra**

Ley N.º 12.289, de 9 de octubre de 1935, de adhesión a la Oficina Internacional de Educación, de Ginebra, y disponiendo la creación de una Oficina de información, dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, para facilitar el intercambio de informes sobre asuntos educacionales 541

4 — **Creación de la Dirección General de Informaciones y Biblioteca del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública**

Decreto, de 1.º de enero de 1938, creando la Dirección General de Informaciones y Biblioteca, del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 541

5 — **Canje del Boletín del Ministerio con publicaciones similares extranjeras**

Resolución Ministerial, de 16 de mayo de 1938, encargando a la Dirección General de Informaciones y Biblioteca la publicación del «Boletín del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública» y disponiendo su canje con publicaciones similares de otros países .. 543

CONVENCION DE MONTEVIDEO SOBRE EJERCICIO DE PROFESIONES LIBERALES

1 — Ley N.º 3.192, de 28 de agosto de 1894, aprobando, entre otros, el Convenio referente al ejercicio de profesiones liberales, sancionado por la Convención Sudamericana de Montevideo el 4 de febrero de 1889 547

2 — Texto del Convenio 547

3 — Decreto, de 30 de septiembre de 1895, reglamentando disposiciones del Convenio de Montevideo 548

Pág.

FOMENTO DE LOS DEPORTES Y DE LA EDUCACION FISICA EN TODO EL PAIS

1 — Disposiciones pertinentes de la Ley N.º 11.672 (Edición 1942) Complementaria Permanente de Presupuesto 553
2 — Acuerdo, de 4 de junio de 1937, creando el Consejo Nacional de Educación Física 554
3 — Decreto N.º 6.446, de 17 de junio de 1938, creando la Dirección de Educación Física en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 555
4 — Resolución Ministerial, de 3 de octubre de 1938, estableciendo que la Dirección General de Educación Física constituye una División del Despacho del Ministerio, y que el Director de la misma tramitará directamente con la Subsecretaría los asuntos de su incumbencia 560
5 — Decreto N.º 117.828, de 25 de abril de 1942, estableciendo que la Inspección General de Enseñanza ejercerá las funciones didácticas y disciplinarias en los establecimientos de enseñanza media, normal y especial, en lo concerniente a la enseñanza de la educación física 561

CENSO DE LA POBLACION INFANTIL DE 5 A 14 AÑOS DE EDAD Y DE LOS ANALFABETOS DE 15 A 22 AÑOS, DE TODO EL PAIS

1 — Ley N.º 12.723, de 9 de octubre de 1941, autorizando al Consejo Nacional de Educación a levantar, en todo el territorio de la República, un censo de la población infantil de cinco a catorce años de edad y de los analfabetos de quince a veintidós años 567
2 — Ley N.º 12.770, sancionada el 17 de septiembre de 1942, prorrogando el plazo establecido por la Ley N.º 12.723 para el levantamiento del censo y ampliando lo dispuesto en el artículo 3.º de la misma 568

LEYES SANITARIAS

1 — Vacunación y revacunación antivariólica

Ley N.º 4.202, de 4 de septiembre de 1903, estableciendo la obligatoriedad de la vacunación y revacunación antivariólica 573
Decreto, de 19 de diciembre de 1904, reglamentario de la Ley número 4.202 de vacunación y revacunación antivariólica 575
Decreto, de enero 16 de 1913, sobre vacunación obligatoria de los aspirantes a empleos 577

Pág.

2 — Declaración obligatoria de las enfermedades contagiosas o transmisibles

Ley N.º 12.317, de 3 de octubre de 1936, sobre declaración obligatoria de las enfermedades contagiosas o transmisibles 579

3 — Vacunación y revacunación antidiftérica

Ley N.º 12.670, de 8 de abril de 1941, de vacunación y revacunación antidiftérica 583

Decreto N.º 104.166, de 28 de octubre de 1941, reglamentario de la Ley de Vacunación y Revacunación Antidiftérica 584

Circular N.º 6 de la Inspección General de Enseñanza, de 20 de enero de 1942, comunicando disposiciones de la Ley N.º 12.670 sobre vacunación y revacunación antidiftérica y del decreto reglamentario de la misma 593

LEYES MILITARES Y ELECTORALES — Artículos pertinentes

1 — Enrolamiento

Ley N.º 11.386, de 21 de octubre de 1926, sobre enrolamiento general de los ciudadanos argentinos 597

2 — Servicio Militar

Ley N.º 4.707, de 28 de septiembre de 1905, sobre obligatoriedad del servicio e instrucción militar para todo argentino 600

3 — Elecciones

Ley N.º 8.871, de 13 de febrero de 1912, sobre Elecciones Nacionales 601

4 — Registro Electoral

Ley N.º 11.387, de 10 de diciembre de 1926, sobre Registro Electoral 602

OTRAS LEYES DE CARACTER GENERAL, APLICABLES DENTRO DE LA ADMINISTRACION DE LA ENSEÑANZA MEDIA

1 — Embargos de sueldos

Ley N.º 9.511, de 29 de septiembre de 1914, sobre embargabilidad de sueldos mayores de cien pesos 607

Resolución Ministerial, de 23 de enero de 1939, estableciendo que corresponde al Subsecretario de Justicia e Instrucción Pública entender en el diligenciamiento de los oficios relacionados con embargos en el sueldo de empleados del Ministerio 608

Circular N.º 17, de la Dirección General de Administración, de 8 de octubre de 1941, transcribiendo el Acuerdo de 14 de febrero de 1931, sobre trámite de expedientes relativos a embargos de sueldos del personal de la Administración Nacional 609

Pág.

2 — Fianzas

Artículo 92 de la Ley N.º 428, de Contabilidad, sobre fianza de los funcionarios y empleados que, por sus tareas deban intervenir en el manejo de fondos o especies 611
Acuerdo, de 30 de enero de 1934, reglamentario del artículo 92 de la Ley de Contabilidad 611
Acuerdo, de 26 de marzo de 1936, disponiendo que los empleados que prestan servicios en una dependencia no podrán otorgar fianzas a favor de otros de la misma 615
Acuerdo, de 30 de marzo de 1936, estableciendo que los funcionarios responsables del manejo de fondos y especies, prestarán una sola fianza 615
Acuerdo, de 15 de diciembre de 1937, estableciendo que la devolución de los documentos de fianza debe hacerse una vez operada la prescripción de los mismos y no antes 617
Acuerdo, de 23 de enero de 1939, admitiendo el otorgamiento de seguros en calidad de fianza 618

Circulares de la Dirección General de Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, sobre fianzas:

Circular N.º 10, de 13 de abril de 1939, comunicando su resolución de esta fecha, relativa a la verificación, por los Jefes de dependencias del Departamento, de la situación de los garantes del personal a sus órdenes de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo de Ministros de fecha 30 de enero de 1934 620
Circular N.º 12, de 28 de abril de 1939, comunicando nuevas disposiciones de la Dirección General de Administración sobre fianzas del personal del Ministerio 621
Circular N.º 20, de 10 de agosto de 1939, reiterando la comunicación de Resoluciones Ministeriales sobre la fianza, establecida obligatoriamente por el Acuerdo General de Ministros de 30 de enero de 1934, para todo funcionario o empleado que por sus tareas deba intervenir en el manejo de fondos o especies 622

3 — Préstamos hipotecarios a los empleados nacionales para la adquisición de la vivienda propia

Disposición pertinente de la Ley N.º 10.676, de 22 de septiembre de 1919, modificando la Ley Orgánica del Banco Hipotecario Nacional 625

4 — Jornada legal de trabajo

Ley N.º 11.544, de 12 de septiembre de 1929, sobre jornada legal de trabajo 626

Pág.

5 — Protección a la maternidad

Ley N.° 12.111, de 9 de octubre de 1934, sobre licencia a empleadas y obreras del Estado 629
Ley 12.568, de 7 de octubre de 1938, disponiendo intervalos de descanso para toda madre lactante en la jornada de trabajo 629

6 — «Sección Crédito del Personal del Estado» en el Banco de la Nación Argentina

Ley N.° 12.715, de 13 de octubre de 1941, creando en el Banco de la Nación Argentina, la «Sección Crédito del Personal del Estado» 633
Resolución de la Dirección General de Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, de 25 de marzo de 1942, referente a la forma en que deberán descontarse en planillas, las cuotas de amortización, correspondientes a los préstamos otorgados por la Sección Crédito del Personal de Estado, Ley 12.715 636
Circular N.° 12 de la Dirección General de Administración, de 28 de mayo de 1942, impartiendo instrucciones sobre la forma en que deberán proceder los responsables al hacer depósitos en las agencias y sucursales del Banco de la Nación, por los descuentos practicados en los sueldos del personal beneficiario de los préstamos otorgados por la «Sección Crédito del Personal del Estado» 638
Circular N.° 24, de la Dirección General de Administración, de 22 de septiembre de 1942, referente a la forma de efectuar descuentos en planillas sobre haberes del personal beneficiario de la Ley N.° 12.715 641

MEMORIA MINISTERIAL

1 — Artículo 90 de la Constitución Nacional 645
2 — Inciso 3.° del artículo 2.° de la Ley N.° 3.727 de organización de los Ministerios Nacionales, referente a la tarea que corresponde a cada Ministro del Poder Ejecutivo 645
3 — Artículo 6.° de la Ley N.° 428, de Contabilidad 645
4 — Artículo 58 de la Ley N.° 1.420, de Educación Común 645
5 — Resolución Ministerial, de 4 de agosto de 1938, disponiendo que en las memorias, revistas y demás documentos publicados por reparticiones y establecimientos del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública deben excluirse los juicios y comentarios de carácter personal 646
6 — Resolución Ministerial de 14 de julio de 1942, disponiendo que el envío de informes de las distintas reparticiones se efectúe antes del 15 de marzo de cada año, a fin de que la Memoria del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública sea remitida al Honorable Congreso en el primer mes de sus sesiones 646

El material informativo de este libro abarca hasta el 31 de diciembre de 1942

EN PRENSA:

Fascículo 2.º del Libro II: Reglamentos de las Reparticiones, Institutos, Colegios y Escuelas

---

Esta
obra terminóse
de imprimir en la segunda
quincena del mes de febrero
del año 1943, en los Talleres Gráficos
de la Penitenciaría Nacional
de Buenos Aires. Edición
de 2.500 ejemplares